

DE LA

JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

EXCMAS. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR

JOSÉ J. HALL

(ABOGADO)



COMPRENDE LOS TOMOS 5º Y 6º, CON LOS QUE TERMINA
LA 1ª SERIE DE LA JURISPRUDENCIA COMERCIAL Y CRIMINAL; 6º, 7º, 8º
Y 9º, CON LOS QUE TERMINA LA 1ª SERIE DE LA JURISPRUDENCIA
CIVIL; Y 1º, 2º Y 3º DE LA 2ª SERIE DE LO CIVIL.

TOMO II

BUENOS AIRES

FÉLIX LAJOUANE, EDITOR

51 — PERÚ — 51

M DCCC LXXXIX

| | |
|-------------------------------|-----|
| BIBLIOTECA DE LA CORTE SUP | |
| Nº DE C | 276 |
| UBICA | |
| FICHA MATERIA | |



INTRODUCCIÓN



Damos hoy á la prensa el segundo tomo de la INSTITUTA DE LA JURISPRUDENCIA, en la esperanza de que el público dispensará á este volumen la misma protección que al anterior.

Nuestra obra se presenta, como siempre, humilde, sin pretensiones: ella no responde á la acogida que se le ha hecho por los hombres entendidos en la materia, abrumándonos con el peso de sus elogios que nuestra modestia acepta tan sólo como una palabra de aliento

Comprende este trabajo los siguientes tomos: 5° y 6°, con los que termina la 1ª Serie de la Jurisprudencia Comercial y Criminal; 6°, 7°, 8° y 9° con los que termina la 1ª Serie de la Jurisprudencia Civil; 1°, 2° y 3° de la 2ª Serie de lo Civil

Como testimonio de sincero agradecimiento, recogemos complacidos los juicios vertidos por los diversos órganos de publicidad y los colocamos al frente de este segundo tomo.



JUICIO DE LA PRENSA

INSTITUTA

DE LA JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR LAS CÁMARAS
DE APELACIONES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA

POR JOSÉ J. HALL

En 8°—396 págs.—Félix Lajouane, editor—1887



La jurisprudencia, entendida en su acepción restringida á la manera de entender la ley y aplicarla á los casos prácticos que se producen ante los jueces, constituye una de las ramas más interesantes del derecho.

Ella nos muestra la ley en actividad, amoldando las transacciones humanas al cuadro trazado por el legislador correctamente deslindado.

La letra y el espíritu que entran como elementos indispensables de la inteligencia del precepto escrito, se asocian y proyectan su claridad sobre la ley, que queda así completa, con contornos fijos y con alcances definidos. Desde ese momento las vaguedades del lenguaje legal, desaparecen. las oscuridades se salvan, suprimense las controversias, disípanse los errores, y la ley así estudiada, puede considerarse perfecta.

Buena ó mala, justa ó no, la interpretación de la ley por los jueces, produce una ventaja definitiva, que basta por sí sola para encarecer la alta misión de los funcionarios judiciales; esa interpretación aclara la ley y la explica.

Y bien; es la claridad la primera condición que debe buscarse, para el precepto del legislador. Sin ella, la confianza en la seguridad de las transacciones se enerva, produciendo uno de esos relajamientos de la buena fe, que tanto favorecen las maniobras del fraude.

Una ley que no sea clara es una amenaza para las gentes honradas y un filón que explotan los audaces en perjuicio de aquellos.

Nada hay de extraño entonces en que la claridad sea la preocupación primordial del legislador, ahora y antes y en todos los pueblos de la tierra.

Pero como las obras humanas nunca son perfectas, como la ley mas cuidadosamente elaborada presenta siempre sus deficiencias, y presta la base á controversias sobre su alcance, es necesario, para evitar estos inconvenientes que los jueces digan en cada caso, qué es lo que el legislador ha querido establecer, y cuáles son las derechos y las obligaciones que derivan para las partes, de cada relación de derecho en que intervienen.

Esta misión es altísima é indispensable. Pudiera decirse también que es benéfica en sumo grado.

Nuestros tribunales, los de la Capital de la República muy señaladamente, la cumplen de una manera honrosísima, y las colecciones de sus fallos constituyen una interesante fuente de doctrina jurídica.

El libro que acaba de dar á luz la casa Lajouane, ha venido en buen momento, á llenar un vacío que sienten todos los que se ocupan de cuestiones legales. Es un interesantísimo repertorio alfabético de la jurisprudencia establecida por las Cámaras de apelaciones en materia civil, mercantil y penal, que permite conocer casi instantáneamente, todo lo que nuestros altos tribunales han establecido en sus fallos.

El solo hecho de evitar el trabajo de compulsa que es necesario hacer para encontrar las doctrinas contenidas en



las colecciones de fallos, es suficiente para recomendar el libro del Dr. Hall.

Sabemos, y podemos decirlo con seguridad, que la mayor parte de nuestros abogados no se preocupan, las mas de las veces, de conocer la manera como ha sido aplicada la ley en casos dados, por no tomarse el trabajo penoso de registrar los largos índices de los tomos que constituyen las colecciones de fallos.

Agréguese á esto, lo costoso de esas publicaciones, lo reducido de las ediciones y otras mil circunstancias de menos bulto, y se convendrá en que un libro que presente en pocas páginas un resumen de cuanto se ha hecho y dicho por nuestros tribunales, es una obra que debe ser aplaudida muy sinceramente.

Tiene otro mérito mas el libro del Dr. Hall, y es la claridad del método seguido, y la virtuosa honradez con que se ha hecho el repertorio, condensando en pocas líneas el resumen de cada fallo, y refiriendo los que tienen relación más ó menos directa con cada cuestión.

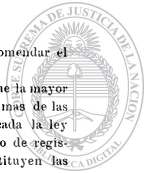
Para trabajos de esta índole, es el método adoptado el mejor, porque no hay mas que abrir el libro para enterarse de todo lo relativo á la inteligencia dada por los jueces á cada precepto legal.

La Instituta trabajada por el Dr. Hall es un libro absolutamente indispensable para los abogados y demás gente del foro. Los jueces mismos, estamos seguros, la consultarán con éxito.

Estas ventajas serán mas apreciables con el tiempo, á medida que aumenten las colecciones de fallos de nuestras Cámaras.

En resumen, el libro que acaba de aparecer, es una de esas obras llamadas á abrirse camino en aras de su indisputable utilidad.

Revista Jurídica.



INSTITUTA DE JURISPRUDENCIA

POR JOSÉ J. HALL



El Dr. José J. Hall, hijo de Corrientes, joven abogado del foro de la Capital de la República, acaba de publicar un libro de labor paciente y de estudio provechoso, que, á la vez de acreditar su competencia jurídica, es un trabajo que honra al país, cuyas producciones científicas son todavía escasas.

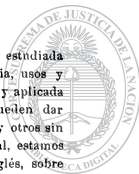
La obra del Dr. Hall, dada á luz sin pretensiones, con un título que no indica suficientemente su mérito, está muy arriba de las compilaciones de sentencias, revistas de fallos, concordancias de las leyes civiles, comerciales y penales argentinas con las extranjeras ó libros de autores extranjeros de donde han sido tomadas; porque es la síntesis metódica de una parte de la jurisprudencia patria, acompañada de la exposición de los principios generales que rigen cada punto y de la crítica científica de la ley aplicada, si es mala, ó de la errónea aplicación de la ley, si la sentencia ha sido injusta, como mas de una vez sucede.

El espíritu de imitación, el plagio y la copia servil son vicios ó cuando menos defectos que dominan en todas las ramas de nuestra legislación; parece que se hubiera tenido siempre en poco y que en nada se continúe reputando la inteligencia y el sentido práctico argentino en la confección de nuestros códigos y de nuestras leyes: y una vez imperantes, es general ver prescindir en nuestros parlamentos, en los foros y en las discusiones mismas de la prensa diaria de lo que el país tiene suyo en abono ó condenación de una ley ó de un procedimiento dado, para buscar en los usos, leyes y escritores extranjeros la razón ó sinrazón que se apunte.

Nuestra Constitución, que puede y debe ser estudiada y aplicada á la luz de hechos, doctrinas, historia, usos y costumbres del pueblo argentino, es más estudiada y aplicada por el *estrangerismo*, y, habiendo muchos que pueden dar á la República libros como los de Story, Curtis y otros sin mas que estudiar nuestra legislación institucional, estamos atendidos á lo que se escribe en francés ó en inglés, sobre materias parecidas ó iguales, como si fuéramos un pueblo sin historia, estéril, que procede con el espíritu de imitación de los monos. El *yankismo* domina nuestro derecho constitucional cuando debiera dominar el *argentinitismo*, que por inferior que sea—y no lo es siempre—tiene que ser superior á todo tratándose de instituciones fundadas en virtud de necesidades de nuestra propia vida y de aspiraciones de nuestro propio pueblo, aleccionado por su propia experiencia.

En legislación civil, comercial y penal somos también satélites que giran en torno de legislaciones y escritores extranjeros, por la falta de sentido práctico en nuestros codificadores, hombres de ciencia mas que de tacto, que produjeron sus obras copiando ó imitando preferentemente las leyes y libros extranjeros cuando debieron ante todo calcar sus trabajos en la especialidad de nuestros usos, costumbres, territorio, familia, historia y necesidades. No ha sido el pueblo argentino el que ha inspirado esas leyes, sino que por medio de esas leyes se ha pretendido inspirar al pueblo argentino. Es así como tenemos leyes civiles, penales y comerciales en completo desacuerdo con el carácter de nuestra sociabilidad, con la naturaleza de nuestras instituciones políticas y con las necesidades de nuestra industria y comercio. Soportamos las consecuencias de la mucha ciencia jurídica extranjera que ha desalojado de su puesto á la ciencia legislativa creada por nuestro pueblo en su desarrollo progresivo, desde sus orígenes.

Los trabajos destinados á conglobar ciencia jurídica ar-



gentina son, por consiguiente, doblemente meritorios, por que allanan andar el camino con luz propia y tienden á la completa emancipación de que necesitamos para normalizar de una vez nuestra vida.

Es de este punto de vista que reputamos uno de los primeros libros en su clase el que ha producido el doctor Hall.

El Dr. Eugenio Perez, que le antecedió con un trabajo análogo, tomando por materia los fallos de la Corte Suprema Nacional, nada propio y nuevo puso en su obra, habiéndose limitado á exponer en orden alfabético los precedentes del alto tribunal nombrado.

El primer producto de la ilustración é inteligencia del Dr. Hall augura en él un escritor jurídico de nota, esperanza que anhelamos ver cuanto antes realizada.

Unimos nuestro aplauso cordial á los elogios que la prensa bonaerense ha consagrado al Dr. Hall.

(De « Las Cadenas »)

BIBLIOGRAFIA

INSTITUTA DE LA JURISPRUDENCIA POR EL DR.
JOSÉ J. HALL

Nos encontramos en una época de ensayo de Códigos dictados bajo la inspiración de las legislaciones europeas, y, sea por el respeto que infunde este antecedente, sea porque no se haya experimentado suficientemente la aplicación de nuestras leyes, todos nuestros trabajos en materia jurídica, tienen por carácter común la ausencia de crítica. Son esplicaciones de las leyes, esposición de fundamento ó recopilaciones de sentencias de jueces ó tribunales superiores. Toda la acción de los estudiosos y trabajadores se desenvuelve dentro de este círculo que nadie se atreve aún á salvar.

Esto parece bien en el orden natural de las cosas. Estamos procediendo por el método experimental, y la crítica se reserva tomar la palabra cuando haya hablado la jurisprudencia, que es la vida práctica de la ley.

La labor del día consiste en recoger la palabra de la jurisprudencia, ordenarla, metodizarla y darla á luz para que vaya á conocimiento de todos.

Un nuevo trabajo de este género es el que tengo á la vista y acabo de revisar. Es la «Instituta de la jurisprudencia establecida por las Cámaras de Apelaciones de la Capital de la República, etc.» por el doctor José J. Hall.— Son IX 395 páginas bien impresas en buen papel. Contiene en un solo tomo la suma y fundamentos de las resoluciones contenidas en los primeros cuatro tomos de las sentencias y autos interlocutorios de la Cámara de lo Civil, y en los cinco de lo Comercial y Criminal.

Las resoluciones están arregladas en orden á la vez numérico y alfabético, correspondiendo el primero con el de las anotaciones en que se hace el resumen de los fundamentos de cada resolución.

Por esta circunstancia la obra aventaja á otros pronuarios de jurisprudencia que se han publicado y que contienen solo la suma de la resolución de cada caso, siendo necesario recurrir al fallo mismo para conocer sus fundamentos, y suple eficazmente las pesadas y costosas colecciones de sentencias de los tribunales superiores de que se hacen ediciones de tanto precio que no todos los que las necesitan se arriesgan á tener.

El libro contiene opiniones y juicios propios del autor, á que lo ha obligado el hecho de encontrar soluciones de un mismo punto dadas contradictoriamente por las dos cámaras de apelaciones.

Un ejemplo dará á la vez idea del método y de la importancia del libro, y de lo que su autor ha puesto en él



fuera de la paciente recopilación y resumen de las sentencias de los Tribunales. Véase el siguiente:

«1958.—*Parentesco*—De un testigo, es causa de impedimento, aún cuando sea presentado por el litigante extraño al vínculo.—Jur. Com., t. 4, p. 533.

«1958—Esta resolución fué dictada por la Cámara constituida en Tribunal de interlocutorias y por mayoría de votos, fundándose en la disposición del art. 186 del Cód. de Proc. Ella es contraria á la dictada por la Cámara de lo Civil, t. 2, p. 596. La resolución de este último tribunal nos parece arreglada á derecho, porque la presentación de testigos consanguíneos, solo es prohibida á la parte vinculada por el parentesco y esto se funda en consideraciones de parcialidad é interés del testigo. Hay por consiguiente completo acuerdo entre las disposiciones del artículo 186, Código de Procedimientos, que así lo determina y al artículo 207 que autoriza las tachas contra tales testigos. Pero cuando no existe aquella razón excluyente de la declaración de esos testigos, no hay porque atender la prohibición de la ley siendo entonces admisible su testimonio.»

Se ve por esto que con algunos trabajos de este género, preparados con minuciosa prolijidad se podría tener en media docena de volúmenes toda la enorme biblioteca que forman hoy los fallos de las cortes supremas de la nación y de la provincia y de las cámaras de apelaciones, facilitando su consulta á todos los que tienen que invocar los precedentes en el manejo de los asuntos judiciales.

«Los que se dedican á la tarea diaria del foro, dice el autor, encontrarán que este pequeño trabajo jurídico les será de gran utilidad por el ahorro de tiempo y por contener la síntesis de los principios de derecho consagrados por nuestros tribunales.»

Esta es la pura verdad, y por eso me empené en hacerla conocer, seguro de que podrá pedirse á la paciente laboriosidad del Dr. Hall, que nos ahorre tiempo, paciencia y dine-



ro, dándonos la recopilación compendiada y completa de toda la jurisprudencia argentina.

R. Rivarola.

(De «El Censor»)



INSTITUTA DE LA JURISPRUDENCIA

Establecida por las Exmas. Cámaras de Apelaciones de la Capital de la República Argentina, en sus sentencias, por orden numérico y alfabético, por el doctor José J. Hall, un volumen de 395 páginas, editado por Félix Lajouane.

Esta obra sumamente útil para los letrados, comprende los cuatro primeros tomos de las sentencias y autos interlocutorios pronunciados por la Cámara de Apelaciones de lo Comercial, Criminal y Correccional, y los cinco primeros de los de la Civil.

Los fallos recopilados empiezan en Febrero de 1882, época en que estos Tribunales entraron á formar parte del poder judicial de la Capital de la Nación.

(De «La Tribuna Nacional»)

JURISPRUDENCIA

En una noticia anterior nos hemos ocupado del nuevo libro que bajo el título: «Instituta de la jurisprudencia establecida por las Exmas. Cámaras de Apelaciones de la capital de la República», ha escrito el doctor don José J. Hall y editado por el señor Félix Lajouane. Es justo que le dediquemos todavía alguna atención, dada su importancia.

La obra encierra un índice por orden numérico y alfabético de los cinco primeros tomos de las sentencias y autos interlocutorios de la Cámara de Apelaciones en lo civil y de los cuatro primeros de la de lo comercial y criminal, con notas originales en que se espone con sobria concisión la disposición legal y la doctrina jurídica en que se funda el principio consagrado por cada fallo. Es, pues, en su fisonomía general mas perceptible una compilación de las sentencias dictadas por los Tribunales superiores de la capital de la República, á la manera de la que ha venido publicando el señor Eugenio Perez acerca de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte Federal, con la diferencia de que la obra de que nos ocupamos, ofrece la nueva ventaja de las notas en que se resumen en forma compendiada los antecedentes legales ó jurídicos que abonan el principio sentado por cada decisión.

Pero las notas que enriquecen el libro del doctor Hall son no solo esplicativas, sino tambien de concordancia y de crítica. Cuando el autor tropieza con una decisión que no reputa arreglada á derecho, espone su opinión, apuntando los fundamentos en que la apoya y recordando el sentido en que hubieran sido resueltas cuestiones análogas, ya por los tribunales federales, ya por los de la capital ó por los de la provincia de Buenos Aires.

La tarea á que ha dado cima el doctor Hall no es, pues, la relativamente sencilla y en cierto modo mecánica de compilar en numeración corrida los sumarios que encabezan los fallos; él ha estudiado fallo por fallo con criterio crítico, lo que le ha dado oportunidad de fijar el verdadero alcance de cada sumario rectificándolo en ocasiones por apartarse de las conclusiones á que hubiera arribado el voto decisivo en la cuestión.

Esta obra, que consta aproximadamente de 400 páginas, es, pues, el resultado de una gran labor, poco perceptible á primera vista. Su utilidad para los que se ocupan en la



carrera forense es incontestable; ella releva de la fatiga de revisar nueve gruesos tomos con gran economía de tiempo, y pecuniaria también, porque no está al alcance de todos los recursos la costosa adquisición de los fallos *inextenso*.

Obras de este género enriquecen la literatura jurídica del país.

(Del mismo diario)

LIBROS DEL DÍA

INSTITUTA DE JURISPRUDENCIA POR EL DR. JOSÉ J. HALL

Otro libro utilísimo, de cuya utilidad sólo pueden darse cuenta los que por su profesión se dedican al estudio de las leyes, es el que acaba de dar á publicidad el Dr. José J. Hall, en edición hecha por Lajouane.

Hasta ahora la jurisprudencia de nuestros tribunales es poco conocida. En primer lugar, porque la colección de los fallos es obra escasa y cara, difícil de conseguir porque ella y su precio viajan por las nubes. Por otra parte, es obra estensísima, en la que mucho sobra porque no tiene valor alguno para el derecho y está casi fuera del objeto de la publicación, como sucede con la relación minuciosa de los acuerdos, etc. Además, no hay plan que guíe con facilidad en el laberinto de las sentencias.

La obra del Dr. Hall compendia y metodiza,—ese es su mérito. Reduce á un volumen lo que está en nueve, colocando las resoluciones por orden alfabético y de fechas. Los fundamentos de cada resolución se hallan, en esencia, en nota puesta al pie de la página.

Con este libro á la mano, todo el mundo tiene inmediatamente la jurisprudencia sentada por las Cámaras de Apela-



ciones sobre cualquier punto de derecho civil ó comercial que se haya ventilado en los tribunales de la capital.

Otra cosa mas: el libro del Dr. Hall pone esa jurisprudencia al alcance de todos: no solo compendia y metodiza sino que abarata el artículo, que debe ser de consumo general.

Los abogados tienen ese servicio que agradecerá su colega el Dr. Hall, y de él puede aprovechar todo hombre que ande en pleitos por sí ó por otros.

Sabemos que la circulación responde al mérito, y la edición quedará pronto agotada, porque es reducida.

(Del « Sud-América »)

BIBLIOGRAFÍA

Con el título de *Instituto de la jurisprudencia establecida por las Cámaras de Apelaciones*, el Dr. José J. Hall acaba de publicar un volúmen llamado á prestar importantes servicios á los jueces y abogados. Esta obra comprende los cuatro tomos de las sentencias y autos interlocutorios pronunciados por la Exma. Cámara de Apelaciones de lo Comercial, Criminal y Correccional y los cinco primeros de los de lo Civil.

Los fallos recopilados arrancan desde el mes de Febrero de 1882, época en que estos tribunales pasaron á formar parte del Poder Judicial de la Capital de la Nación.

Los que se dedican á las tareas del foro encontrarán que este trabajo jurídico les será de gran utilidad por el ahorro de tiempo y por contener la síntesis de los principios de derecho consagrados por nuestras tribunales.

Este libro ha sido editado por la casa Lajouane.

(De « El Diario »)

BIBLIOGRAFÍA

INSTITUTA DE JURISPRUDENCIA POR EL DR. JOSÉ J. HALL

Volumen de 395 páginas.

F. Lajouane, Editor.



Un abogado del Rosario de Santa Fé, el Dr. Eugenio Perez, publicó hace varios años, un Repertorio Jurídico-alfabético, conteniendo el extracto de los Fallos de la Suprema Corte Federal, con designación de la serie, tomo y página de cada caso juzgado.

Aquello era propiamente un Índice General de la jurisprudencia de la Corte Suprema; pero era obra útil y económica, siendo su principal ventaja la de facilitar las citas, en forma tan rápida como segura.

Agotada una primera edición del Índice del Dr. Perez, su editor, que lo fué el señor Lajouane, dió á luz una segunda, considerablemente aumentada, y abrazando la materia de 23 tomos de los Fallos de la Corte Federal.

Era evidente que, si bien la obra del Dr. Perez vino á llenar el vacío producido por la falta de índices aislados de la jurisprudencia federal, el trabajo carecía de todo mérito científico.

No se trataba sino de coleccionar, por orden alfabético, los extractos sumarios que encabezan cada sentencia en las publicaciones de nuestros fallos judiciales.

El autor se había escusado de comentar ó de concordar, tareas que exigen algo más que biblioteca, paciencia, tiempo y editor.

Pero como todo progresa en este mundo, otro abogado se encargó de hacer en mas útil forma, un trabajo análogo al del Dr. Pérez, pero tomando materiales de jurisprudencia sentada por las Cámaras de Apelaciones de esta Capital.

Cada tomo de esos fallos tiene su índice propio. En los de la Cámara Civil, el joven editor Gran se ocupa de labor tan poco científica, pero sumamente útil.

Cuatro tomos de los fallos de la Cámara Civil, y cinco de los autos de la Cámara del Crimen, han suministrado sus índices parciales para constituir el índice general que acaba de publicar el Dr. José J. Hall.

Solo que el tal índice tiene un apéndice, que condensa el principal mérito del libro: es como esas postdatas, respecto á las cuales, la carta no es sino el pretesto.

El libro del Dr. Hall puede ser ubicado entre el *Repertorio* del Dr. Perez y las notables Concordancias y Comentarios de los doctores Alcorta y Aguirre.

Contiene 2721 extractos de sentencias civiles, comerciales y criminales, dispuestos por orden numérico y alfabético; algo como una miscelánea jurídica cómodamente codificada.

Y al pié de cada artículo, «vale decir» de cada extracto, está una nota crítica ó concordante de la sentencia, con relación á las disposiciones legales que la fundan.

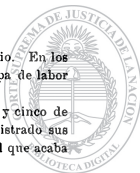
Esto ya no es trabajo mecánico; demuestra que el autor, al transcribir el resumen sumario de una sentencia, la ha leído de punta á cabo, la ha estudiado á la luz de la ciencia jurídica, y hasta ha juzgado de su mérito intrínseco.

Los comentarios y concordancias son como las obras del arte plástico: éstas dependen de la calidad de los materiales del taller, y del mérito personal del artífice; aquéllas, de la bondad de los libros de consulta, y de los quilates intelectuales del jurisconsulto.

Son conocidos los puntos que calza el Dr. Hall, como abogado y como jurista. Es un verdadero «letrado» en toda la extensión de la palabra.

Su libro acaba de revelarme una nueva faz del distinguido colega y amigo. Había pertenecido al grupo de los abogados *trabajadores* y útiles, en la colmena del Foro Porteño.

No sólo estudia con el egoismo del labrador que reforma



su arado para mejorar sus cultivos; hace lo de Franklin, abonando su campo de manera que todos pudiesen ins- truirse en la lectura de estas palabras en verde y natural relieve: *esto fué abonado con yeso.*

(De *El Nacional*.)



INSTITUTA

Bajo el título de *Instituta* de la jurisprudencia establecida por las Cámaras de Apelaciones de la Capital de la República Argentina, el abogado don José J. Hall acaba de publicar un volúmen de 395 páginas.

Ese volúmen abraza el contenido sumario de los cuatro primeros tomos de las sentencias y autos interlocutorios de la Cámara de lo Civil y los cinco de la de lo Comercial y Criminal por orden numérico y alfabético de materias.

El trabajo del Dr. Hall es de indiscutible utilidad para los abogados.

(De « *La Prensa* » del 10)





Ab-intestato—Véase: *Herencia*, núm. 1.

1. Abogado—El hecho de ser heredero no lo inhibe de cobrar sus honorarios profesionales—Jur. Civ., tom. 2, pág. 472, Ser. 2ª.

2. Abogado—Declarando que la presentación de un título

1—Siempre que no intervenga exclusivamente en su carácter de heredero. Si interviene en representación de un coheredero tiene derecho a cobrar sus honorarios, fundado en el art. 1627 del Cód. Civ., pues si bien su participación en el juicio como heredero era imprescindible no le era obligatorio representar á ningún coheredero.

2—Después de la expedición de los Estatutos Universitarios dictados en virtud de la ley de 3 de Julio de 1885, la Cámara acordó, que debía limitar sus funciones á ordenar la inscripción en la matrícula respectiva de los títulos de Abogado de las Universidades de esta capital y de Córdoba, únicas de la Nación, y que la reválida de los expedidos por los Tribunales ú otros institutos sean nacionales ó extranjeros competía á la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En el caso presente se trataba de la inscripción de un título obtenido por favoritismo de la Universidad de Córdoba, con violación flagrante de sus estatutos, á pesar de todo la Cámara ordenó su inscripción, porque los diplomas científicos expedidos por las Universidades de la República son los instrumentos públicos mas solemnes por sus formas, mas auténticos por el número de personas que los suscriben y mas trascendentales por su objeto. El único examen que la Cámara puede hacer de los diplomas se limita á sus formas esternas para verificar su inscripción. Si las formas esternas se han llenado y su autenticidad es indudable la Cámara debe ordenar su inscripción, recayendo sobre el alto cuerpo que concede gracia de tal naturaleza, toda la responsabilidad de la violación de la ley.

ABO

lo espedido por una Universidad Nacional, basta para justificar este carácter, inscribiéndose en la matrícula, sin que la Cámara pueda entrar en averiguaciones si el que lo presenta ha llenado ó no los requisitos esenciales para conseguirlo—Jur. Civ., tom. 3°, pág. 441, Ser. 2ª.

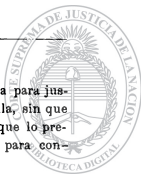
3. Abogado—La Cámara está en la obligación de corregir severamente al que falte al decoro del Tribunal, ya sea contra su dignidad en las diligencias ó alegatos, ya sea contra su autoridad—Jur. Civ., tom. 1, pág. 172, Ser. 2ª.

Abogado—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Término*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 1—*Convenio*, núm. 1—*Revalidación*, núm. 1—*Pacto de quota-litis*, núm. 1—*Matrícula*, núm. 1.

1. Abogados—Con título espedido por las autoridades judiciales de Bolivia, no necesitan revalidarlo ante las Facultades Universitarias para ejercer en la República—Jur. Civ., tom. 2, pág. 594, Ser. 2ª.

3—En este caso se viola el precepto de las leyes 7, tít. 6, Part. 3ª y concordantes, que prohíben bajo sanción correccional, el uso de palabras «sobejanas, malas é villanas», prohibición que se encuentra consagrada en nuestra legislación, como puede verse en el decreto de 1º de Julio de 1822; Ley de Enj. de 1878; Cód. de Proc. vigente, y ley Org. de los Trib. de la Cap. En todos ellas se impone á los Trib. el deber de mantener el decoro en los juicios.

1—De conformidad con lo establecido en el art. 14, inc. 13, de los Estatutos Universitarios, es atribución de las respectivas facultades revalidar los diplomas de profesiones científicas espeditos por Universidades extranjeras, salvo lo que dispongan los tratados. Según lo establecen los tratados vigentes entre nuestro país y Bolivia, los nacionales de un país pueden ejercer su profesión científica en el otro: esta reciprocidad supone implícitamente la admisión, como válidos, en cualquier de ambos países, de los títulos profesionales espeditos por uno de ellos, por consiguiente para ser usados esos títulos no necesitan ser revalidados, sino simplemente el reconocimiento de su forma y de la competencia de la autoridad que los espide. Se trata simplemente del mero reconocimiento de un título, más no de su revalidación. Véase, Inst. tom. 1º, verbo Abogados, núm. 7 y nota.



ABO — ABS



2a. Abogados—Inscritos en la matrícula—Jur. Civ., tom. 2, págs. 178 y 546, Ser. 2ª.

2b. Abogados—Véase: *Inscripciones*, núm. 2—*Honorarios*, núms. 16, 20 y 23—*Fiador*, núm. 2—*Prescripción de honorarios*, núm. 1.

1a. Abogados y Procuradores—Al iniciar la gestión sobre el cobro de honorarios devengados en un espediente, están facultados para recusar al Juez que haya conocido en él—Jur. Com., tom. 5, pág. 154, Ser. 1ª.

1b. Absolución—Del procesado, ante la ley criminal, no basta para libertarlo de la responsabilidad que la ley civil le impone por aquellos actos ilícitos que por su culpa ó negligencia hayan irrogado un perjuicio, sin que puedan calificarse como delitos previstos y penados por el Código Penal.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 99, Ser. 2ª.

Absolución—Véase: *Auto*, núm. 34.

Abuela—Véase: *Tutela*, núm. 2.

Abusivo—Véase: *Agente de Policía*, núm. 1.

1c. Absolución de posiciones—Si bien puede pedirse

1a—Cuando estos cobran honorarios, promueven un juicio propio ó personal que no tiene relación con el fondo del asunto que han patrocinado. Aunque el cobro de honorarios esté sujeto á reglas especiales y sumarias no puede desconocerse el carácter de actor en la persona que lo promueve y que puede, por consiguiente, hacer uso del derecho que le acuerda el art. 366 del Cód. de Proc. Véase. Jur. Com., tom. 2, pág. 569, 1ª serie, verbo *Abogado*, núm. y nota 4, tomo 1º.

1b—La cuestión que ha dado margen á esta resolución es una de las mas difíciles que se pueden presentar en nuestra legislación actual: uno de los casos sobre que hay necesidad de formar jurisprudencia, pues militan razones muy poderosas en apoyo de ambas teorías, habiéndose resuelto contradictoriamente por nuestros Tribunales. El caso es el siguiente: El padre de una niña estropeada por un tramway se presentó al Juzgado de lo Civil demandando á la Empresa por el pago de los daños y perjuicios.

1c—Segun el art. 118 del Cód. de Proc., la prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término fijado para su recepción: las posiciones no pueden tener el efecto de legalizar la producción tardía de

ABU — ACC

hasta la citación para sentencia, los documentos que se presenten en ese acto no pueden ser agregados, si el término de prueba hubiese vencido—Jur. Com., tom. 6, pág. 607, Ser. 1ª.

Abuelos—Véase: *Nietos adulterinos*, núm. 1.

1a. Abuso de confianza—Es una circunstancia agravante del robo y requiere la aplicación del máximo de la pena.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 132, Ser. 1ª.

Accesorios—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1.

1b. Acción—Por tentativa de adulterio es improcedente contra un tercero si conjuntamente no recae contra uno de los esposos—Jur. Crim., tom. 5, pág. 167, Ser. 1ª.

2. Acción—Cuando el demandante no prueba la deducida, corresponde la absolución del demandado—Jur. Com., tom. 6, pág. 559, Ser. 1ª.

3. Acción—El fiador contra quien es dirigida, puede dar á embargo los bienes del deudor, pero no obligar al ejecutante á justificar que éste carece de ellos—Jur. Com., tom. 6, pág. 105, Ser. 1ª.

4. Acción—Explicado por el injuriante el significado de la frase que la motiva y desvirtuado su alcance, debe tomarse

la prueba, porque sería ir contra lo preceptuado en el mencionado artículo y en los arts. 72, 73 y 125 del mismo Cód. Véase: Inst., tom. 1, verbo Documentos, núm. 904 y nota correspondiente.

1a—En el caso ocurrente el robo se perpetró por un dependiente, siéndole aplicable el inc. 4º del art. 319, Cód. Penal.

1b—Siendo el adulterio la violación de la fé conyugal cometida por alguno de los esposos—art. 246 Cód. Pen. ant.—la tentativa no puede referirse sino á alguno de ellos como autor principal. Por consiguiente, cuando se excluye al cónyuge de toda coparticipación en el delito y de toda culpabilidad en su perpetración, el delito no puede existir, porque no ha habido violación de la fé conyugal.

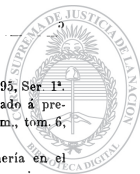
2—Art. 216, Cód. de Proc., Leyes 1, tít. 14, Part. 3ª; y 8, tít. 22 de la misma Partida.

3—Art. 613 del Cód. de Com., tomado del 261 del Cód. Brasileiro.

4—Y queda consiguientemente exento de pena, según el inc. 3º del art. 315 del Cód. Pen.



ACC



como una retractación—Jur. Crim., tom. 6, pág. 195, Ser. 1^a.

5. Acción—El demandante no puede ser obligado a presentar los documentos en que la funda—Jur. Com., tom. 6, pág. 390, Ser. 1^a.

6. Acción—La escepción de falta de personería en el demandante, fundada en la falta de derechos para ejercerla, debe ser rechazada si se interpone como dilatoria—Jur. Com., tom. 6, pág. 408, Ser. 1^a.

7. Acción—Deducida, solo cuando esta exista puede oponerse la escepción de incompetencia de jurisdicción, en la oportunidad que la ley establece—Jur. Com. tom. 6, pág. 500, Ser. 1^a.

Acción—Véase: *Acreeedor*, núm. 1—*Jueces*, núm. 4—*Nulidad*, núm. 19—*Juez*, núm. 2—*Demandante*, núm. 1—*Herir*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 26 y 14—*Mandatario*, núm. 6—*Contrato bilateral*, núm. 2.—*Prescripción*, núm. 12.

1a. Acción civil—No se paraliza por existir una acción criminal—Jur. Civ., tom. 7, pág. 472, Ser. 1^a.

1b. Acción criminal—Se presume legalmente cometida con intención criminal, salvo prueba en contrario que corresponde al reo—Jur. Crim., tom. 5, pág. 275, Ser. 1^a.

5—La falta de presentación de estos documentos tiene su sanción penal en el art. 73 del Cód. de Proc.

6—La escepción de falta de personería admitida por el Cód. de Proc. es para el caso de alegarse incapacidad en el demandante que comparece personalmente, ó insuficiencia del poder del mandatario que deduce la acción en nombre de otro: cuando se deniega al actor el derecho á ejercer una acción, se hace referencia al fondo de ella, la que solo puede ser tomada en consideración en la resolución definitiva que oportunamente se pronuncia.

7—Esta escepción la autoriza el Cód. de Proc. en los juicios ejecutivos al ser citado de remate y en los ordinarios antes ó al tiempo de ser contestados.

1a—Más no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal.—Art. 1101, Cód. Civ.

1b—Los hechos materiales, exteriores, calificados por la ley como culpa-

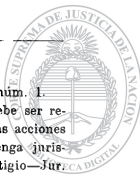
ACC

Acción criminal—Véase *Práctica comercial*, núm. 1.

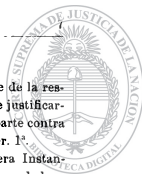
1. Acción de jactancia—Aunque personal, debe ser resuelta por el Juez competente para conocer de las acciones posesorias que sobrevengan, es decir, por el que tenga jurisdicción exclusiva sobre el bien que motiva el litigio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 453, Ser. 2ª.

bles establecen la presunción de criminalidad—arts. 9, 13 y argumento del 159, Cód. Pen. anterior. — La intención es una acción psicológica del espíritu que por ser interna no puede ser apreciada sino por la persona que la concibe y que escapa completamente á la penetración de las demás que juzgan los hechos por los actos esternos. Véase: verbo intención, núm. 1474 y nota del tom. 1 de la Inst.

1—La acción de jactancia tuvo su origen en el derecho Romano—y 5, *Diffamari, C. de ingen et manum*; pasó mas tarde á formar parte de las leyes de Partidas, y de ella se ocupa la ley 46. tít. 2, Part. 3ª: esta ley, sienta, como principio general, que nadie puede ser obligado á demandar contra su voluntad, más luego establece escepciones, enumerándolas. «La una dellas es» dice «quando alguno se va alabando ó diziendo contra otro, que es su siervo; o lo enfamando diziendo del otro mal ante los oyes. Ca en tales cosas como estas, o en otras semejantes dellas, aquel contra quien son dichas, puede yr al Juez del lugar (donde se dijeron) el pedir que constriña á aquel que las dixo que le faga demanda sobre ellas en juyzio». La práctica estendió la acción de jactancia al autor de voces en que propalaba que el patrimonio de una persona era usurpado, adquirido ilegalmente, ó poseído por medios ilícitos, porque son *casos semejantes dellas*, como dice la ley de Partida precitada. Este proceder puede producir por resultado, que nadie quisiese adquirir tal finca, encontrándose el poseedor impedido de disponer libremente de ella, existiendo en consecuencia verdadera turbación en la posesión: esta turbación se defiende por las acciones posesorias, las cuales, aunque se suponen personales, su conocimiento corresponde al Juez del lugar donde la cosa se encuentra situada, y desde que la acción de jactancia se aplica tambien á la turbación moral de la posesión, por identidad de razón hay que atribuir igualmente su conocimiento al mismo Juez que entiende en aquellas. Existe aun otra razón bien poderosa para resolver esta cuestión en el sentido indicado: la demanda de jactancia debe dar por resultado el que se ordene al jactancioso á que deduzca su acción dentro de un término dado, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se declarará que ningún derecho le corresponde, imponiéndosele á la vez perpetuo silencio: este apercibimiento no puede hacerse efectivo por otro juez que el del lugar en que la cosa está situada, por ser tambien el único llamado



ACC



1a. Acción de daños y perjuicios—Procedente de la rescisión de un contrato, para que sea admisible debe justificarse previamente que la rescisión es imputable á la parte contra quien se dirige—Jur. Com., tom. 5, pág. 188, Ser. 1ª.

1b. Acción de nulidad—Los Jueces de Primera Instancia son competentes para conocer de ella, cuando se deduce contra las sentencias de árbitros arbitradores—Jur. Com., tom. 6, pág. 540, Ser. 1ª.

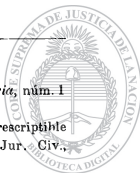
2. Acción de nulidad—De un laudo no suspende su ejecución—Jur. Com., tom. 6, pág. 619, Ser. 1ª.

á resolver sobre el dominio y demás derechos reales. Esta doctrina está de acuerdo con la sustentada por Perez y Lopez, Tratado de la Legislación, tom. 0, pág. 222; Covarruvias, varias, lib. 1, cap. 16; Escriche, Dic. de Leg. y Jur., verb. Jactancia; Gomez, varias, tom. 3, cap. 1, núm. 17. Gregorio Lopez en la glosa 3 á la precitada ley 46, tít. 2, Part 3ª, dice, que no teniendo otro objeto la acción de jactancia que provocar el juicio sobre una cosa poseída por el querellante, éste debe ser considerado como reo y no como actor á los efectos de derecho. Igual doctrina se desprende de lo prescrito en el art. 428 del Cód. de Proc.

1a—Para que la responsabilidad por la ejecución ú omisión de un hecho, que trae perjuicio á otro, sea imputable á la parte que lo causa es necesario que haya culpa ó negligencia de parte de esta—art. 1109, Cód. Civ.—Véase núm. 727 y nota del tom. 1º, Inst.

1b—Así lo establece el art. 808 del Cód. de Proc., cuya disposición es bien clara y esplicita: allí se excluye todo recurso á diferencia de lo establecido respecto á los árbitros—art. 789—y solo acuerda á los compromitentes la vía de acción ó demanda de nulidad. Esta acción ó demanda importa la instauración del juicio ordinario sobre nulidad de la sentencia que debe ser llevado ante el Juez que corresponda. La intención del legislador es bien clara: la ley dice: «Contra la sentencia de amigables compondores no se dará *recurso alguno*, salvo la *acción de nulidad*: niega los recursos ordinarios acordados en otros juicios, dejando á salvo la acción de nulidad, la que deberá entablarse dentro de 30 dias, cuyo término es mayor que el de los *recursos ordinarios*. No puede, pues, sostenerse que el legislador hubiese confundido *acción con recursos*.

2—Si bien un recurso legal contra la sentencia, suspende por regla general su ejecución, la acción de nulidad autorizada por el art. 808 del Cód. de Proc., no se halla en el mismo caso y el laudo debe ejecutarse, no obstante haberse deducido el recurso, como no obsta para la ejecución



ACC

Acción de nulidad—Véase: *Medida preparatoria*, núm. 1.
—*Comprador*, núm. 9.

1a. Acción de partición de herencia—Es imprescriptible mientras que de hecho continúe la indivisión—Jur. Civ., tom. 2, pág. 123, Ser. 2ª.

1b. Acción de petición de herencia—Dirigida contra un tercer poseedor, no es procedente mientras no justifique el demandante, el carácter de heredero—Jur. Com., tom. 5, pág. 105, Ser. 1ª.

Acción ejecutiva—Véase: *Aceptante*, núm. 1.

Acción Pauliana—Véase: *Término*, núm. 9.

Acción personal—Véase: *Acción de Jactancia*, núm. 1.
—*Revocación*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 20.

1c. Acción reivindicatoria—No está obligada la Municipalidad á deducirla al pedir la posesión de un sobrante que, por auto ejecutoriado, ha sido declarado de propiedad pública—Jur. Civ., tom. 2, pág. 446, Ser. 2ª.

2. Acción reivindicatoria—Cualquier de los herederos

de la sentencia en el juicio ejecutivo la acción que las partes pueden intentar en el juicio ordinario.

1a—Art. 4019, inc. 3ª, Cód. Civil.

1b—Esta acción se acuerda por el art. 3423 del Cód. Civ. contra el heredero que está en posesión de la herencia; siendo la razón de ello, que el heredero está obligado á saber si el actor es ó no efectivamente tal heredero, mientras que el poseedor á título particular no tiene tal obligación legal y de consiguiente puede exigir que el que intente la acción acredite previamente este carácter.

1c—La providencia dictada en la sentencia ejecutoriada ha debido necesariamente llegar á noticia de la parte interesada al practicarse la notificación: si las partes no deducen recurso alguno, ó es porque no quieren ó porque se consideran sin derecho, encontrándose en este caso el Juzgado en aptitud de dar cumplimiento á la sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, siendo una consecuencia lógica la posesión que debe darse á aquel á quien la sentencia favorece con la propiedad de la cosa.

2—Art. 3450, Cód. Civil.

ACC

ó sus representantes, tienen derecho á ejercerla contra terceros detentadores de la herencia, sin obligación de justificar que es el único—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

Acción reivindicatoria—Véase: *Denunciante*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núms. 6 y 15—*Auto de quiebra*, núm. 1—*Instrumento público*, núm. 1—*Poseedor*, núm. 3—*Arrendamiento*, núm. 3—*Reclamo de bienes*, núm. 1—*Reivindicación*, núm. 4.

1. Acciones—El Juez debe fallar las deducidas, pero no puede obligar al demandante á deducir las que manifieste reservarse para otro juicio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 423, Ser. 1ª.

2. Acciones—Contra los herederos, despues de terminada la testamentaria, pueden ser iniciadas ante cualquier Juzgado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 282, Ser. 1ª.

3. Acciones—Exigido el cumplimiento de la obligación ante la jurisdicción civil, la que se dirige contra el fiador debe deducirse ante la misma—Jur. Com., tom. 6, pág. 513, Ser. 1ª.

4. Acciones—Sobre mejor derecho, deben deducirse ante el Juez que conoce de la ejecución—Jur. Com., tom. 6, pág. 526, Ser. 1ª.

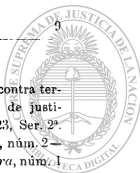
Acciones—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Calificación*, núm. 2—*Sentencia*, núm. 11—*Firma*, núm. 2.

1—Aunque el demandado lo solicite: lo contrario importaría obligar á demandar, lo que es opuesto al principio de que nadie puede ser obligado á demandar á no ser en el caso de jactancia.

2—No se trata de ninguno de los casos del art. 634 del Cód. de Proc.

3—Para que la fianza tenga el carácter de mercantil es necesario que tenga por objeto asegurar una obligación comercial—art. 603, Cód. de Com.—Por otra parte, en materia de garantía el Juez competente es el que puede conocer de la demanda contra el deudor principal—art. 5, Cód. de Proc.

4—Art. 529, Cód. de Proc.



ACC — ACE

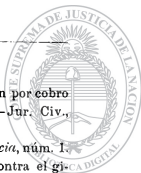
1a. Acciones personales—Cuando se ejercitan por cobro de pesos, el juramento estimatorio no procede—Jur. Civ., tom. 6, pág. 204, Ser. 1ª.

Acciones personales—Véase: *Acción de jactancia*, núm. 1.

1b. Aceptante—Carece de acción ejecutiva contra el gir-

1a—El art. 220 del Cód. de Procedimientos no es aplicable á este caso. Cuando los hechos que sirven de fundamento á la demanda no resultan plenamente probados, la consecuencia jurídica es, en tesis general, la absolución del demandado—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª—Esta es la regla absoluta que solo se modifica en los casos especiales regidos por reglas espécificas. Nuestros precedentes de legislación nos ofrecen estos casos en las leyes 2 y 5, tít. 11, Part. 3ª; la doctrina enseñada por los prácticos consagra lo preceptuado en estas disposiciones. El juramento que instituye el art. 220 del Cód. de Proc. es el estimatorio, como lo dicen sus palabras finales. Este género de juramento no se extendía, fuera de los casos en que sobrevenga contienda entre las partes sobre la valía de la cosa, ó la apreciación del daño que hubiese recibido, en razón de tuerto ó del engaño probado, ley 5, tít. 11, Part. 3ª—se comprende que se recurra al juramento, porque son hechos susceptibles de mayor ó menor estimación, según las circunstancias del caso y conocimientos que la causa misma suministre. El Juez se encuentra entonces habilitado para fijar aproximada y equitativamente el valor de la cosa ó del daño, y establecer así la suma dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio. Cuando se ejercitan acciones personales por cobro de pesos, este juramento no procede. Si el actor no las comprueba, como es su deber, la absolución del demandado debe pronunciarse. En casos semejantes, el Juez carece de términos hábiles para determinar su monto. El juramento que es una prueba de escepción, debe circunscribirse á los casos previstos en las leyes y en que la naturaleza de aquellos, como los antecedentes y circunstancias, lo hacen indispensable y posible. Nunca sería justo fuera de estos casos abandonar la prueba al arbitrio ó conciencia del interesado.

1b—El caso aquí resuelto por la Cámara es el siguiente: habiendo el Banco de la Provincia descontado una letra suscrita por un girante y un aceptante, vencida esta, fué pagada por el aceptante, quien oportunamente dedujo acción ejecutiva contra el girante por la mitad del importe de la letra, pues ambas partes confesaron que la letra había sido descontada á descubierto por el Banco y que se habían repartido la suma por partes iguales. Citado de remate, el ejecutado opuso la escepción de inhabilidad del título. La obligación constituida en esas condiciones no es una verdadera letra de cambio, es decir, un mandato del girante hecho al aceptante para que por él pague su importe; es indudable que el pago efectivo

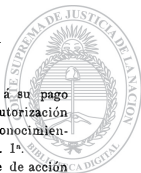


ACE

rante de una letra descontada en descubierto por un tercero—Jur. Com., tom. 5, pág. 55, Ser. 1ª.

de la letra, hecho por el aceptante, demostraría por sí solo el cumplimiento del mandato sin previa provisión de fondos, porque ni la aceptación,—art. 826 del Cód. de Com.—ni el pago mismo, art. 850 *ibid.*—la hacen presumir. El pago efectivo daría acción ejecutiva al aceptante pagador, para demandar ejecutivamente el reembolso de lo por el pagado, según lo autoriza expresamente el art. 850. Pero, como se ha dicho, la letra en el caso especial que nos ocupa, no era una verdadera letra de cambio, una orden, un mandato dado por el girante contra el aceptante, pues ambos reconocieron en sus alegatos que los dos habían solicitado del Banco la suma importe de la letra para dividirla por mitad: esto es, hicieron un giro en descubierto contra el Banco bajo la forma simulada de una letra de cambio, un giro en descubierto pagado por el girado se convierte en un simple pagaré á su orden. Más este pagaré, que suscrito por ambos, los obliga solidariamente respecto al acreedor, no obliga á ambos deudores entre sí sino de una manera divisible. Por haber pagado el Banco el giro en descubierto, tenía acción solidaria contra ambos, pero éstos entre sí no pueden demandarse su reembolso, sino por la cuota que les corresponda—art. 269 Cód. de Com.—Y esta cuota será igual ó desigual, según conste del título de la obligación que los ligue—art. 689 Cód. Civ.—No puede, pues, servir de regla para el ejercicio de la acción que nace de haber pagado una letra á descubierto y en las condiciones espuestas lo que dispone el Cód. de Com. para las letras de cambio. Considerada como un simple pagaré ella debe cobrarse en vía ordinaria, donde el aceptante podrá probar el contrato que le liga con el girante y la cuota igual ó desigual que éste debe pagar á aquél, estableciéndose recién entonces una cantidad líquida en su contra. Por otra parte, aunque la jurisprudencia ha establecido de una manera uniforme que la ejecución de las letras de cambio es regida especialmente por el Cód. de Com., en cuanto á la oposición de excepciones, esto tiene su limitación, cuando se trata de la acción del tenedor de la letra contra los obligados solidariamente á su pago: la razón es evidente, el art. 852 y los que le preceden, se ocupan exclusivamente de los derechos y deberes del tenedor, como que hacen parte del título que lleva tal epígrafe. Pero tales disposiciones no pueden extenderse á casos como el presente, que no entran en sus propios términos y que por lo tanto están colocados al nivel de los casos generales. De aquí resulta que le es aplicable la ley que reglamenta el juicio ejecutivo y, por consiguiente, tiene que admitirse como procedente la excepción de inhabilidad del título, la que se halla justificada por los propios antecedentes del asunto. Se trata de una letra descontada en beneficio del girante y del girado y de la acción deducida por éste contra aquél, que no es ejecutiva, según lo ha resuelto constantemente la Cámara.





ACE

2. Aceptante—De una letra, está obligado á su pago aun cuando el firmante á ruego careciere de autorización para firmarla, siempre que al aceptarla tuviera conocimiento del hecho—Jur. Com., tom. 5, pág. 574, Ser. 1^a.

3. Aceptante—De una letra de cambio, carece de acción para hacer declarar nulo el acto antes del vencimiento y pago—Jur. Com., tom. 6, pág. 571, Ser. 1^a.

4. Aceptante—Las acciones que éste pretenda que le competen por falsedad ó dolo en una letra de cambio, solo pueden ser materia de un juicio ordinario contra el girante después de pagada la letra—Jur. Com., tom. 6, pág. 571, Ser. 1^a.

5. Aceptante—Las relaciones existentes entre éste y el girante de una letra de cambio, no bastan para dictar un embargo preventivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 413, Ser. 1^a.

2—El art. 785 del Cód. de Com., establece que el que pone su firma á nombre de otro en las letras de cambio, debe hallarse autorizado para ello con poder especial y los tenedores y tomadores tienen derecho á exigir la exhibición del poder. Si el aceptante sabe y tiene conocimiento que la letra ha sido girada á ruego, ese conocimiento le impone la obligación de pagarla—art. 824 *ibid.*—Tampoco puede escepcionarse de falsedad puesto que él tenía perfecto conocimiento de las condiciones en que la letra fué girada. Por otra parte, como el art. 785 citado, le autoriza á exigir la exhibición del poder, si el aceptante no hace uso de ese derecho comete una falta solo imputable á él, y solo él es pasible de las consecuencias, sin perjuicio de los derechos que las leyes le acuerdan.

3—A no ser que se comprobara que la letra es falsa, art. 824, Cód. de Com. Véase: arts 462 y 463 Cód. de Com. Español.

4—La falsedad ó el dolo haría inhábil la letra, haciendo procedente la escepción de inhabilidad del título, escepción que no se admite por la ley al tratarse de una letra de cambio—art. 852 Cód. de Com.—Si hay falsedad ó dolo en la causa principal del acto, la manifestación de voluntad sería viciosa y dejaría sin efecto el acto—art. 926, Cód. Civ.—aplicable á los contratos comerciales según el art. 191 del Cód. de Com., cuestiones que solo pueden ser materia de un juicio ordinario.

5—Porque las relaciones de derecho entre ambos no constan del mismo documento: el girante que ha pagado una letra, solo tiene acción contra el

ACL — ACR

1a. Aclaración—El escrito en que se pide solo interrumpe el término para la apelación respecto de aquellos puntos sobre los cuales se pide, los demás se conceptúan consentidos—Jur. Civ., tom 3, pág. 412, Ser. 2º.

Aclaración—Véase: *Costas*, núm. 19.

1. Aclaraciones—Sobre una contestación dada al absolver posiciones, deben ser rechazadas si no han sido hechas en el acto de absolverlas—Jur. Civ., tom. 6, pág. 27, Ser. 1º.

1b. Acreedor—Con privilegio general, que se considere con mejor derecho á una finca hipotecada, le corresponde deducir la acción que crea conveniente contra el acreedor hipotecario á quien se pretende adjudicar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 339, Ser. 1º.

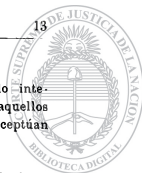
2. Acreedor—Está obligado á justificar el monto de la

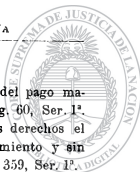
aceptante cuando le hubiese hecho provisión de fondos—art. 846 Cód. de Com.—Por consiguiente no puede considerarse el caso como comprendido en el art. 443 del Cód. de Proc. Sería otro el caso, si el aceptante dirigiera su acción contra el girante, porque es presunción legal en nuestro Cód. de Com. que la provisión de fondos no se presume, precisamente lo opuesto á la legislación francesa en que la provisión de fondos es de presunción legal: en este caso procede el embargo preventivo, pues la ley presume que el girante debe al aceptante, que ha pagado una letra, el importe de ella.

1a—El término para apelar es de cinco días—art. 228, Cód. de Proc.—según el art. 46, inc. 2º es perentorio, y cuando los términos tienen este carácter, se considera decaído el derecho por el mero transcurso del término, como lo determina el art. 45. La aclaración que se solicita es un recurso acordado por la ley, completamente independiente de los demás recursos, cuando este se ejercita deben interponerse los otros dentro de los términos legales, bajo pena de quedar consentida la sentencia en los otros puntos resueltos.

1b—Siempre que el acreedor hipotecario hubiese iniciado el primero su ejecución. En este caso obligar al acreedor hipotecario á iniciar una demanda contra el acreedor con privilegio general, sería obligarlo á entablar una demanda contra éste, y es sabido que solo en caso de jactancia puede el que no quiere, ser obligado á demandar.

2—En el caso ocurrente, la parte se manifestó deudora sin expresar la cantidad, la que corresponde se justifique por el acreedor.





ACR

deuda, no obstante la conformidad respecto del pago manifestada por el deudor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 60, Ser. 1ª.

3. Acreedor—Subroga á éste en todos sus derechos el tercero que ha efectuado el pago con conocimiento y sin oposición del deudor—Jur. Com., tom. 6, pág. 359, Ser. 1ª.

4. Acreedor—Que no se presenta al acto de la verificación, debe pagar las costas que se causen en el juicio que inicie con posterioridad—Jur. Com., tom. 6, pág. 511, Ser. 1ª.

5. Acreedor—Que inducido por las declaraciones de testigos pide indebidamente la quiebra del deudor, no puede considerarse que lo hizo con temeridad, por lo que no es pasible de las costas—Jur. Com., tom. 6, pág. 527, Ser. 1ª.

Acreedor—Véase: *Concordato*, núm. 1—*Fiador*, núm. 2, —*Comprador*, núm. 4—*Fianza*, núm. 3.

1a. Acreedor hipotecario—Debe gestionar su cobro ante el Juez que conozca en el concurso formado al deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 283, Ser. 1ª.

Acreedor hipotecario—Véase: *Transacción*, núm. 1—*Comprador*, núm. 4—*Gastos causídicos*, núm. 1—*Revocación*, núm. 2—*Constructores*, núm. 1.

1b. Acreedor prendario—Está obligado á verificar su crédito, pero puede retener la prenda mientras no se declare nulo

3—Art. 921, Cód. de Com., concordante con el 727 del Cód. Civ. Véase: Jur. Civ., tom. 8, págs. 37 y 114, serie 1ª, y 1 pág. 459, serie 2ª.

4—Art. 1612, Cód. de Com.

5—En este caso hay error.

1a—La declaración de quiebra atrae al Tribunal de Comercio todos los negocios judiciales pendientes, del fallido.—art. 1536, Cód. de Com.—La circunstancia de ser hipotecario un crédito, no lo sustrae de esta jurisdicción, pues si bien goza del beneficio acordado por el art. 1710, debe ser demandado ante el Juez del concurso porque tiene que figurar en la relación y graduación de créditos.—art. 1604.

1b—El acreedor prendario tiene la posesión de los objetos constitutivos de la prenda—art. 754 Cód. de Com.—esta posesión solo puede perderse cuando se declare en el juicio respectivo que la prenda se ha constituido

ACR

el título por el cual se constituyó—Jur. Com., tom. 5, pág. 569, Ser. 1ª.

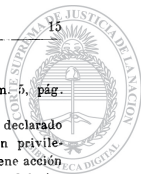
1a. Acreedor privilegiado—Cuyo crédito fuese declarado de preferente abono al de otro acreedor también privilegiado que ha recibido su importe bajo fianza, tiene acción para hacer efectiva la obligación sin intervención del síndico y sin esperar la liquidación definitiva del concurso. Jur. Civ., tom. 1, pág. 620, Ser. 2ª.

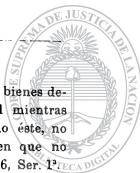
1b. Acreedores—Reconocidos por el fallido, aun cuando no se hayan presentado á verificar sus créditos, deben prestar su conformidad para el levantamiento del auto de quiebra—Jur. Com., tom. 5, pág. 456, Ser. 1ª.

por un título nulo y siempre que á ese respecto se hubiese deducido por el síndico la acción de nulidad. El art. 1704 del Cód. de Com., no desvirtúa este principio desde que este artículo dá derecho á los acreedores de poder vender la prenda con audiencia de los síndicos.

1—Si bien el síndico representa á todos los acreedores, es tan solo cuando todos ellos están interesados: pero el síndico no representa á cada uno de los acreedores en cualquiera cuestión que se suscite entre ellos, porque entonces asumiría en el mismo juicio el rol de demandante y demandado. Aquí se trata de un acreedor que va contra otro acreedor, no de un acreedor que va contra el concurso, ni de éste que va contra un acreedor que ha recibido una suma mayor de la que le correspondía por su crédito: los demás acreedores, como el concursado, nada tienen que ver, ni que esperar, pues para ellos el resultado siempre será igual, sea éste favorable para uno ú otro acreedor privilegiado: el importe del crédito jamás entraría á la masa, pertenecería á uno ú otro acreedor. La obligación que contrae el acreedor privilegiado, de devolver al concurso la cantidad que recibe, en su carácter de tal, para responder á los créditos que se declaren más privilegiados que el suyo, da acción á todos y cada uno de éstos para que se haga efectiva la obligación.

1—Aunque los acreedores no se presenten al acto de la verificación de los créditos, ellos conservan el derecho de presentarse en cualquier tiempo á efecto de que se reconozcan sus respectivos créditos, mucho más cuando han sido admitidos por el fallido mismo como tales acreedores, y el levantamiento de quiebra solo puede verificarse cuando se paga á todos los acreedores.





ACR — ACT

2. Acreedores—Que tienen privilegios sobre bienes determinados, no son parte en el juicio principal mientras no exista concurso, y en consecuencia declarado éste, no pueden solicitar la nulidad de aquellos actos en que no tuvieron intervención—Jur. Civ., tom. 7, pág. 586, Ser. 1^a.

3. Acreedores—Carecen de personería para intervenir en los negocios del deudor fuera de los casos de juicio general—Jur. Civ., tom. 8, pág. 387, Ser. 1^a.

Acreedores—Véase: *Fiador*, núm. 1—*Calificación*, núm. 2.

Acreedores personales—Véase: *Edificio*, núm. 2.

Acreedores quirografarios—Véase: *Dominio*, núm. 2.

Acto anulable—Véase: *Prescripción*, núm. 11.

1a. Acto comercial—Tal se considera el acopio de frutos del país para revenderlos—Jur. Com., tom. 6, pág. 592, Ser. 1^a.

Acto comercial—Véase: *Empresario*, núm. 1.

1b. Acto ilícito—No basta comprobar su existencia, debe comprobarse que causó daños y perjuicios y justificarse su monto—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 2^a.

2b. Acto ilícito—E inmoral, tal es la estipulación por la cual un periodista se compromete á hacer propaganda en favor de una empresa, y los Tribunales no pueden reconocer su validez—Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 2^a.

2—Se trata de un convenio celebrado en un juicio sucesorio entre los herederos y un acreedor, sobre un inmueble sometido á un privilegio especial de otro acreedor: este último no es parte en el juicio, no puede tomar ninguna intervención; más desde el momento que considere sus derechos lesionados, puede deducir las acciones que viere convenirle. Si la testamentaria es concursada por un primer acreedor, como juicio universal que es el concurso, éste atrae á sí á todos los demás.

1—Art. 516, inc 5º, y 7, inc. 1º, Cód. de Com.

1—Arts. 1067, 1068, 1077 y 1078, Cód. Civ. Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 734 y nota.

2—Es inmoral porque el oficio de periodista solo es honorable y digno de respeto ante la opinión pública, cuando el que lo desempeña

ACT

3. Acto ilícito.—La omisión, por parte de una empresa de ferro-carril de medidas tendentes á prevenir el daño á terceros en sus vías, debe calificarse como tal, y por él es responsable civilmente ante los Tribunales—Jur. Civ., tom. 3, pág. 78, Ser. 2ª.

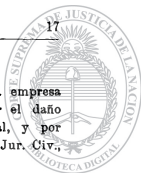
Acto ilícito.—Véase: *Tercero*, núm. 1—*Lanzamiento*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 1, 22 y 15—*Bienes*, núm. 3—*Deterioros*, núm. 1.

1. Acto jurídico.—Al que pretende anularlo corresponde

trata las cuestiones de interés general con independencia, imparcialidad y conciencia; y si hay obligación perfecta de hacerlo así, cuando para ello el escritor recibe de la empresa un sueldo, es claro que no puede considerarse decoroso para él, ni moral de su parte, el estipular un precio con los proponentes de una empresa de utilidad pública, por escribir artículos en apoyo de ella, porque un pacto semejante hace desaparecer la imparcialidad con que aquél está obligado á escribir, compromete su independencia y anula la autoridad de su palabra: no se concibe imparcialidad donde hay un interés pecuniario de por medio. Un acto de esta naturaleza arrebató á la misión del periodista los nobles atributos de la imparcialidad y de la independencia, envilece y degrada la institución, no pudiendo por consiguiente los Tribunales reconocer como lícita tal estipulación, porque ello importaría sancionar la inmoralidad en las costumbres de la prensa violando los arts. 502 y 563 del Cód. Civ.

3—De acuerdo con los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civ. El mismo principio se desprende de varios arts. de nuestro Cód. Civ. y de la común doctrina sostenida por los autores. El delito y el cuasi-delito se distinguen entre sí por la presencia ó la ausencia de la intención de dañar: no pueden existir, ni dar lugar á la reparación del daño causado sino bajo estas dos condiciones: primera: Que el hecho sea ilícito, y segunda: Que sea imputable al agente—arts. 1066, 1067, 1076 y 1109, Cód. Civ.; Marcadé Esp del Cód. Nap., tom. 5, lib. III, tít. IV, cap. II, núm. 2. Según este autor es «ilícito un hecho cuando presenta la violación del derecho de otro, una infracción á un deber y no constituye el ejercicio de un derecho», y «es imputable, cuando es verdaderamente voluntario y proveniente de una libre determinación». Véase: Inst. tom. 1, verb. ferro-carril, núm. 1204 y nota.

1—Se trata de la venta de un inmueble hecha por una menor de 24 años (por las leyes de Partida se llegaba á la mayor edad á los 25 años). Se dice de nulidad de la venta fundándose en la incapacidad de la menor al





ACT

justificar que las partes que intervinieron y que se oponen á la declaratoria, conocían las causales que dan origen á la nulidad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 547, Ser. 1ª.

Acto jurídico—Véase: *Complicidad*, núm. 1—*Parentesco*, núm. 1.

Acto nulo—Véase: *Nulidad*, núm. 25.

Acto simulado—Véase: *Tercero*, núm. 1.

1. Actor—Tiene derecho para modificar su demanda, restringiéndola ó ampliándola, cambiar completamente la acción y aun desistir de ella, mientras no haya sido contestada—Jur. Civ., tom. 6, pág. 412, Ser. 1ª.

2. Actor—Cuando no justifica su demanda debe ser condenado en todas las costas del juicio—Jur. Com., tom. 5, pág. 172.

3. Actor—Cuando no justifica los extremos en que funda su derecho, el demandado debe ser absuelto—Jur. Civ., tom. 1, pág. 289, Ser. 2ª.

Actor—Véase: *Hechos*, núm. 4—*Demandado*, núm. 3.

tiempo de celebrarse el acto jurídico; en este caso no puede declararse la nulidad, porque la misma menor fué la que indujo en error á la otra parte.—Art 1049, Cód. Civ.

1—Antes de la contestación del demandado, con la que se traba recién la contienda judicial, haciéndose dueños de ésta ambos litigantes, no se necesita de la noticia, ni del consentimiento del demandado para que el actor use como más le convenga, de aquel derecho, porque el demandado no puede oponerse á él: lo que no quiere decir que si el traslado de la demanda le ha ocasionado costas indebidas; no tenga derecho á cobrarlas ante el Juez que corresponda, pero este derecho no implica la nulidad del desistimiento de la demanda que hubiese presentado el actor, ni autoriza tampoco para considerar pendiente una acción que realmente ha sido retirada.

2—Ley 8, tít. 22, Part. 3ª.

3—«E por ende dezimos que los que en esta manera fazen demandas», dice la ley 8, tít. 22, Part. 3ª, ó si defienden contra otro, non aviendo

AOT

1. Actos—Si bien los anteriores á la declaración de incapacidad pueden ser anulados, debe justificarse la notoriedad de la incapacidad en la fecha en que tuvo lugar el acto y la mala fe de los demás que en él intervinieron—Jur. Com., tom. 5, pág. 31, Ser. 1ª.

2. Actos—Véase: *Dominio*, núm. 2—*Daños y perjuicios* núm. 20.

Actos bajo forma privada—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 1.

1a. Actos de comercio—Los de una sociedad civil están sujetos á la jurisdicción mercantil—Jur. Com., tom. 5, pág. 312, Ser. 1ª.

derecha razón porque lo deven suzer, que non tan solamente deve el Juzgador dar por vencido en su pleyto en el juycio de la demanda, al que lo fiziere, mas aun lo deve condenar en las costas».

1—El art. 473 del Cód. Civ. dice que los actos anteriores á la declaración de la incapacidad, podrán ser anulados si la causa de la interdicción, declarada por el Juez, existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados. Los actos de que habla este artículo no son nulos de derecho, sino que *podrán ser anulados*, como se confirma por el art. 472, al prescribir la nulidad de derecho para los actos posteriores ejecutados por el demandado de incapaz, si fuese declarado tal. De aquí se sigue, que los actos celebrados, sin previa interdicción, son válidos á menos de probarse que el que los celebró estaba entonces demente. Si la causa de la interdicción existía públicamente, el que contrata con el demente lo hace de mala fe y en este caso la consecuencia inmediata es la nulidad del acto celebrado. Es necesario además tener en cuenta la naturaleza del acto celebrado para deducir si ha obtenido calculadamente un beneficio ilícito con perjuicio seguro para el obligado por ese acto.

1a—La circunstancia de que el carácter de la sociedad sea civil, no desvirtúa la jurisdicción comercial, pues basta para determinarla que el acto de que se trata sea de comercio, aun cuando se haya celebrado incidentalmente, como lo preceptúa el art. 6º Cód. de Com. Según este artículo, la controversia sobre dicho acto queda sujeta á las leyes y jurisdicción del comercio





ACT

2. Actos de comercio—Accidentalmente ejecutados, no bastan para dar por justificada la profesión de comerciante—Jur. Com., tom. 6, pág. 527, Ser. 1^a.

Actos equívocos—Véase: *Creación*, núm. 1.

1. Actos ilícitos—Llevados á cabo en estado de embriaguez voluntaria, no deben considerarse como meramente culpables—Jur. Crim., tom. 5, pág. 546, Ser. 1^a.

2. Actos ilícitos—Véase: *Absolución*, núm. 1.

Actos jurídicos—Véase: *Prescripción*, núm. 11—*Simulación*, núm. 6.

1a. Actos jurisdiccionales—Del Juez en un litigio, no son causal bastante de recusación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 172, Ser. 2^a.

Actos legislativos—Véase: *Prescripción*, núm. 17.

1. Actos voluntarios—Para aquel en cuyo favor se practican, no constituyen derecho alguno á exigir su repetición—Jur. Civ., tom. 6, pág. 212, Ser. 1^a.

2—Art. 6 del Cód. de Com.

1—La doctrina sobre embriaguez seguida por nuestro Código, establece la inculpabilidad del agente en el caso de una embriaguez involuntaria completa porque, como dice un autorizado criminalista, «nada puede imputarse en tal estado al agente, ni la violación de la ley represiva por la evidente perturbación de sus facultades morales, ni el hecho mismo de la embriaguez, porque ese hecho ha sido la consecuencia de otro hecho extraordinario é imprevisto»; pero cuando se trata de una embriaguez voluntaria entonces tiene que decirse con el art. 148, que el agente no ha obrado en estado de irreponsabilidad, porque le es imputable el estado de perturbación mental en que pudo hallarse al producir el hecho criminoso. Nuestro derecho positivo no tiene otra disposición de carácter general aplicable al caso ocurrente, que la del artículo recordado, siendo, según éste, indispensable que el acto haya sido resuelto y consumado en una perturbación cualquiera de los sentidos, ó de la intoligencia, no imputable al agente.

1a—Esta causal no se encuentra comprendida entre ninguno de los casos enumerados en el art. 368 del Cód. de Proc.

1—Este derecho solo puede fundarse en una convención.

ACU

1. **Acuerdo**—Es parte integrante de la sentencia, y al ser ésta ejecutada, debe servir de norma para la interpretación de las dudas que pudieran suscitarse—Jur. Civ., tom. 7, pág. 86, Ser. 1ª.

1a. **Acusables**—Lo son las injurias contenidas en una carta privada, no es necesaria la publicidad—Jur. Crim., tom. 6, pág. 600, Ser. 1ª.

2. **Acusables**—Véase: *Calumnia*, núm. 3.

1b. **Acusación**—Puede ser rechazada por el Juzgado sin sustanciarla y sin dar audiencia á los acusados, si conceptúa que no existe injuria en el hecho ó escrito acusado—Jur. Crim., tom. 6, pág. 599, Ser. 1ª.

2. **Acusación**—Véase: *Acusación Criminal*, núm. 1.

1c. **Acusación criminal**—Para entablarla en representación, se requiere poder especial que individualice al acusado y el fundamento de la acusación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 610, Ser. 1ª.

1—Sirve para explicar y fijar el alcance de la parte resolutive de la misma: así se desprende del contexto de los arts. 258 y 313 del Cód. de Proc.

1a—El art. 307 del Cód. Pen., no exige la publicidad cuando se trata de injurias inferidas por escrito.

1c—La Cámara funda esta resolución en que la representación por procurador en causas criminales, está limitada por la ley 12, tít. 5, Part. 3ª; lo que indica que esta clase de representación debe admitirse con ciertas reservas, como se comprueba también por lo establecido en la Ley 6, tít. 1º, Part. 7. Por otra parte, los acusadores están sujetos á la pena de calumnia, y siendo esencialmente personal la responsabilidad criminal, para que esa pena pudiera aplicarse, sería indispensable que constara de un modo indudable la imputación calumniosa hecha en juicio personalmente por el acusador ó su apoderado al efecto, lo que no podría comprobarse por la representación del apoderado general, aun cuando el poder contuviera la cláusula igualmente general de facultarlo para entender en todos sus asuntos, incluyendo los criminales, pues, que no refiriéndose á un asunto especial, no se podría responsabilizar por calumnia al acusador, en caso de que el apoderado, separándose de las instrucciones reci-



ACU

Acusación calumbiosa— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 7.

1. Acusado—Después de su condenación en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni impugnar la culpa del condenado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 306, Ser. 1^a.

2. Acusado—No puede nombrar apoderado en materia criminal—Jur. Crim., tom. 6, pág. 401, Ser. 1^a.

Acusado—Véase: *Presunciones*, núm. 1—*Acusación criminal*, núm. 1.

bidás, se hubiese estralimitado en su mandato, cuya prueba contraria sería casi siempre imposible. Esta resolución de la Cámara está en abierta oposición con la dictada en la causa CIX, tom. 2, pág. 24, Ser. 1^a donde se establece que en el juicio criminal tanto el acusador como el acusado deben presentarse por sí mismos, sin que pueda aceptárseles representación en ningún caso. La Cámara al fundar su voto en este caso decía: La ley 12, tít. 5, Part. 3^a, como la 31, tít. 2, de la misma, al admitir la representación en juicio criminal lo niega en los casos en que la justicia no se podría hacer directamente en otro si no en aquel que *face el yerro cuando le fuese provado*. En toda acusación en que la pena no sea multa, el acusado debe hallarse presente en el juicio. Tales han sido los fundamentos aducidos por la Cámara para resolver una cuestión tan delicada, en sentido opuesto. No hay, pues, á este respecto una jurisprudencia uniforme. En nuestra opinión la doctrina sentada en el sumario que comentamos no es la correcta; la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha resuelto que en los juicios criminales, no pueden las partes hacerse representar por terceros: tom. 6, pág. 161, Ser. 1^a. La Corte funda su resolución en las Leyes 12, tít. 5, Part. 3^a y 6, tít. 1, Part. 7^a. Posteriormente, la Legislatura de la Provincia, con el objeto de obviar la dificultad práctica que nacía de las leyes de Part., se vió obligada á dictar una ley especial, admitiendo desde la promulgación de esa ley *á los acusadores en causas criminales la representación por medio de apoderados*. Esta ley fué promulgada en 1883. Véase: F. S. C. P., tom. 5, pág. 805, Ser. 2^a. Por consiguiente, no puede invocarse en los Trib. de B. Aires como precedente, porque es posterior á la Federalización del municipio. El Dr. Tejedor, en su curso de Derecho Crim., *Leyes de Forma* dice: *«Según las partidas en fin debía proponerse y dictarse en persona*, núm. 138.

1—Art. 1102, Cód. Civ.

2—Ley 6, tít. 1, Part. 1^a.

ACU—ADM

Acusado—Véase: *Acusación*, núm. 1.

1. Acusador particular—No debe ser condenado en costas aun cuando se absuelva al reo, si fuese pariente de la víctima—Jur. Crim., tom. 5, pág. 319, Ser. 1ª.

2. Acusador—Para asumir este carácter no es bastante el poder general, aun con la cláusula de entender en juicios criminales—Jur. Crim., tom. 6, pág. 610, Ser. 1ª.

Ad-corpus—Véase: *Comprador*, núm. 8.

Adhesión—Véase: *Apelación*, núm. 3.

Administración—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 4—*Madre natural*, núm. 1—*Separación de bienes*, núms. 2 y 4—*Inhibición*, núm. 2—*Marido*, núm. 1—*Separación de bienes*, núms. 6 y 8—*Insania*, núm. 1.

1a. Administrador—Su nombramiento solo puede recaer en un extraño, cuando motivos especiales hagan inconveniente el de un heredero—Jur. Civ., tom. 7, pág. 458, Ser. 1ª.

2a. Administrador—No puede ser responsable por las sumas que retengan en su poder acreedores privilegiados, solo debe imputarlas al rendir cuenta, para que se conozca su existencia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Ser. 2ª.

3. Administrador—No se encuentra obligado á rendir cuenta documentada de la partida destinada á gastos menores—Jur. Civ., tom. 1, pág. 361, Ser. 2ª.

1—La circunstancia de ser pariente el acusador particular excluye la presunción de malicia, según la doctrina de la ley 26, tít. 1, Part. 7ª que dice: «Acusador tal se mueven con derecha razón e con dolor á fazer estas acusaciones, e non maliciosamente».

2—Véase: Verb. *Acusación Criminal*, núm. 1 y su nota.

1a—Última parte del art. 634 del Cód. de Proc.

2a—Toda gestión tendente á obtener el reintegro solo daría por resultado demoras y gastos, pues en resumen habría que pagar á esos acreedores privilegiados.

3—Estos gastos generalmente de imposible ó muy difícil comprobación y casi siempre indispensables; sería, pues, llevar al extremo el rigor de las formas, exigir su comprobación: debe ser admitida defiriendo al juramento del administrador.





ADM-AGE

4. Administrador—Para los bienes de la sociedad conyugal, su nombramiento depende de las circunstancias que concurren a formar el juicio de los magistrados—Jur. Civ., tom. 8, pág. 138, Ser. 1ª.

Administrador—Véase: *Esposa*, núm. 1—*Fundadores y administradores*, núm. 1—*Autorización*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 15—*Condómino Administrador*, núm. 1—*Condóminos*, núm. 4—*Término fatal*, núm. 1.

1. Administradores—En este carácter debe ser entregado a los padres el capital de los menores invertido en títulos que no sean de deuda nacional—Jur. Civ., tom. 3, pág. 601, Ser. 2ª.

Administradores judiciales—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 2.

Administrar—Véase: *Patria potestad*, núm. 1.

Administrativo—Véase: *Cámara*, núm. 7.

Adquirentes—Véase *Billetes*, núm. 1.

1a. Adquirente condicional—De una medianería no puede hacer en la pared divisoria las obras que requiera su propiedad, si ellas no se encuentran comprendidas en el contrato de adquisición—Jur. Civ., tom. 6, pág. 476, Ser. 1ª.

Adulterado—Véase: *Obligación*, núm. 2.

Adulterio—Véase: *Acción*, núm. 1.

Afinidad—Véase: *Herencias transversales*, núm. 2.

1b. Agente ó comisionista—Tiene personería para de-

1—Según el art. 293 del Cód. Civ. los padres son los administradores legales de los bienes de sus hijos que están bajo su patria potestad: por excepción el art. 297 prohíbe la enagenación de los bienes de los hijos que estén constituidos sobre la deuda nacional; de donde resulta que los dineros invertidos en títulos que no sean deuda nacional deben ser entregados a los padres para su administración.

1b—Se trata aquí de corredores de bolsa que no están entre los «Agentes auxiliares del Comercio» de que trata el art. 3 del Cód. de Com. No tienen las condiciones ni están sujetos a las disposiciones del título 1º, que

AGE

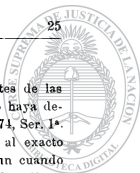
mandar á su comitente por los saldos resultantes de las operaciones encomendadas y que á su vencimiento haya debido abonar á terceros—Jur. Com., tom. 5, pág. 374, Ser. 1^a.

1. Agente de Policía.—Que requerido se limita al exacto cumplimiento del mandato, no es responsable aun cuando este fuese abusivo—Jur. Crim., tom. 5, pág. 522, Ser. 1^a.

Agentes.—Véase: *Declaraciones*, núm. 6.

se ocupa «De los Corredores». Son los Agentes de cambio del viejo mundo han venido con el desarrollo del comercio y sus nuevas necesidades que no tuvo presente el Cód. de Com. Están sujetos especialmente á las prácticas mercantiles, cuya traducción mas fiel se encuentra á este respecto en el Reglamento de la Bolsa que en el art. 32 dice: «y en las operaciones hechas por los corredores de bolsa bajo su propio nombre y responsabilidad consiguiente, deben exigir un boleto de sus respectivos comitentes.» Las prohibiciones que el Cód. de Com. establece respecto á los corredores, de que se ocupa, no le son en general aplicables. Los corredores de Bolsa son los intermediarios á quienes los Reglamentos de ésta y el uso reconocen bajo ese título, confiriéndoles determinadas funciones y por intermedio de los cuales se verifican en aquel establecimiento ciertos negocios. En cualquier carácter que procedan tienen acción para demandar el reembolso de las cantidades empleadas de buena fe, de su comisión, etc. y en una palabra del saldo contra su comitente, como resultado del negocio encomendado, con arreglo á las disposiciones de los arts. 209, 310, 379 y 381 del Cód. de Com. y á las reglas 17 y 29, tít. 34, Part. 7^a, sin que para tal acción fuera obstáculo, ni aún el mismo carácter de los corredores de que tratan los arts. 90 y 91, á quienes se refiere la prohibición del art. 106. Véase F. S. C. P., tom. 7, pág. 89, Serie 1^a y F. S. C. N., tom. 9, pág. 320, Serie 1^a. Los agentes de Cambio, no tienen entre nosotros una legislación propia. Nuestro Cód. de Com. no se ocupa sino de los corredores en general y basta probar que no se tiene las condiciones de tales, según la ley, para que no pudiesen ser considerados en tal carácter. Pero la buena fe y los usos comerciales son principios respetables de la legislación mercantil. En el silencio de ésta, estando admitidos en la práctica esos intermediarios, hay que considerarlos especialmente con arreglo á los actos practicados, porque faltando la determinación legal en el agente, sus hechos se juzgan por un prudente criterio y siguiendo las reglas del derecho común.

1.—El abuso no trae aparejada ninguna responsabilidad en este caso, porque limitándose al exacto cumplimiento del mandato superior, tales agentes no son responsables según el art. 149, Cód. Pen. de 1877.



AGE-ALB

Agentes de Balsa—Véase: *Corredores de Comercio*, N.º 1.

1. Agentes Fiscales—Sus funciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 22, Ser. 1ª.

2. Agentes Fiscales—Tienen personería para acusar ante los Tribunales á los autores de desacato contra la autoridad, cometido por la prensa—Jur. Crim., tom. 6, pág. 602, Ser. 1ª.

Agravio—Véase: *Sentencia*, núms. 8, 11 y 14—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 26.

Agravio moral—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 15.—*Indemnización*, núm. 1.

Agregación—Véase: *Prueba*, núm. 8.

1. Albacea—Los gastos que haga y cuya verdad no desconozcan los herederos, deben ser aprobados y pagados, salvo el derecho de la testamentaria para repetir contra el acreedor—Jur. Civ., tom. 2, pág. 320, Ser. 2ª.

Albacea—Véase: *Comisión*, núm. 1.—*Honorarios*, núm. 17.

Albacea dativo—Véase: *Instrumento público*, núm. 1.

1a. Albaceas—No pueden usar de la facultad de vender bienes de la sucesión sino de acuerdo con los herederos ó autorizados por Juez competente—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 440, Ser. 2ª.

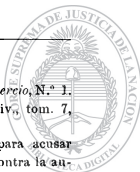
2. Albaceas—Cuando son varios los honorarios del apoderado deben ser á cargo de la sucesión—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 399, Ser. 2ª.

2—El desacato á la autoridad puede ser cometido por medio de la prensa, como se desprende de los arts. 307, 313 y 377 del Cód. Pen. Por los arts. 110, inc. 2º y 111 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. es obligación de estos funcionarios promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales.

1—Arts. 3873 y 3874, Cód. Civ.

1a—Art. 3856 del Cód. Civ.

2—Por varios se entiende mas de dos: en este caso el nombramiento de un solo apoderado no solo es útil, sino necesario, en cuyo caso el gasto ocasionado debe ser pagado por la testamentaria en cuyo beneficio se hizo el nombramiento.



ALB-ALE

Albaceas—Véase: *Gastos de Albacea*, núm. 1.

1. **Albaceas dativos**—Pueden usar papel simple con cargo de reposición—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 273, Ser. 2ª.

2. **Albaceas dativos**—No pueden en ningún caso ejercer acciones reivindicatorias—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 628, Ser. 2ª.

Albaceas dativos—Véase: *Cónsules*, núm. 1.

Albaceazgo—Véase: *Consul de Italia*, núm. 1.

1. **Alcaldes**—Sus funciones y deberes—Jur. Civ., tom. 7, pág. 3, Ser. 2ª.

2a. **Alcaldes**—Se declara que deben continuar funcionando durante la feria—Jur. Civ., tom. 3, pág. 440, Ser. 2ª.

Alcaldías—Véase: *Empleados*, núm. 1.

Aleatorios—Véase: *Corredor de Bolsa*, núm. 1.

1b. **Alegar**—El pedido de que la contraparte absuelva posiciones no suspende el término para alegar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 410, Ser. 1ª.

Alegar—Véase: *Término*, núm. 15.

1c. **Alegato**—Presentado después del vencimiento del término no puede ser agregado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 500, Ser. 2ª.

1—El albacea dativo desempeña en juicio una función pública emanada de la ley, en cuyo caso se halla comprendido en la disposición del art. 39 de la ley de sellos.

2—El art. 3862 del Cód. Civ. limita las atribuciones del albacea testamentario, á las contestaciones relativas á la validez del testamento, ó sobre la ejecución de las obligaciones que contenga, mas no puede intervenir en los pleitos que promuevan los acreedores de la sucesión, ú otros terceros, en los que solo son parte los herederos y legatarios: si el albacea testamentario no puede *intervenir* siquiera en un juicio reivindicatorio promovido por los herederos, es indudable que el albacea dativo, con mayor razón, carece de facultades para promoverla por sí.

2a—La feria no comprende á los Alcaldes.

1b—Así se desprende del contexto de los arts. 43, 125 y 213 del Cód. de Proc.—Véase Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núm. 2581 y nota relativa.

1c—El término para alegar es fatal, según se desprende de lo dispuesto en el art. 218 del Cód. de Proc.—Véase: Inst. tom. 1, verb. Alegato de bien probado, núm. 137.



ALE — ALI

Alegato—Véase: *Prueba*, núm. 13.

1. Alevosía—La existencia de ésta y de la premeditación en las lesiones corporales, no basta para clasificar la infracción como tentativa de asesinato, debe juzgarse y condenarse al reo teniendo en cuenta la mayor ó menor gravedad de las heridas—Jur. Crim., tom. 6º, pág. 217, Ser. 1ª.

Alevosía—Véase: *Declaraciones*, núm. 3.

1a. Alimentario—Justificado su capital, la sentencia que fija el monto de la pensión alimenticia debe ser confirmada, si el apelante no justifica la incertidumbre del capital—Jur. Civ., tom. 6, pág. 182, Ser. 1ª.

2. Alimentario—Justificado el caudal, el Juez es el único que está llamado á señalar la cantidad que crea justa y equitativa para los alimentos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 369, Ser. 2ª.

1b. Alimentos—Justificado el derecho á exigirlos, las posiciones absueltas en rebeldía bastan para justificar el capital, y sobre ellas puede fundar el Juzgado su resolución—Jur. Civ., tom. 2, pág. 375, Ser. 2ª.

2. Alimentos—La iniciación de dos juicios no puede fundar la escepción de litis pendencia—Jur. Civ., tom. 2, pág. 400, Ser. 2ª.

1—Puede haber premeditación y alevosía en el homicidio, como puede haberlo en las lesiones: si la intención de matar no se comprueba, solo debe considerarse que las heridas han sido inferidas con premeditación ó alevosía: la duda es siempre favorable al delincuente.

1b—En este caso se encuentran justificados los extremos exigidos por el art. 602 del Cód. de Proc.—Las posiciones absueltas en rebeldía forman prueba plena, art. 133 *ibid*.

2—En este juicio, lo único que hay que comprobar son los extremos exigidos por el Cód. de Proc. en su art. 602: si llegara á existir litis pendencia no habría lugar á oponer la propia escepción atenta la naturaleza especial de este juicio, arts. 203, Cód. Civ. y 607 Cód. de Proc. Lo procedente sería la acumulación de ambos procesos, pero jamás la privación del derecho de la actora á proseguir su acción.



ALI

3. Alimentos—A la esposa, los debe el esposo, justificados los extremos que la ley exige, con arreglo al caudal de la sociedad, y teniendo presente además lo que puede producirle su trabajo personal—Jur. Civ., tom. 2, pág. 209, Ser. 2ª.

4. Alimentos—El Juez se encuentra habilitado para fijar la pensión con tal que se haya justificado la propiedad de los bienes, aun cuando no lo haya sido su valor—Jur. Civ., tom. 2, pág. 245, Ser. 2ª.

5. Alimentos—Su fijación es ineludible justificados los extremos que prescribe la ley—Jur. Civ., tom. 2, pág. 325, Ser. 2ª.

6. Alimentos—Las cantidades depositadas no pueden ser retenidas á embargo ni aún para responder al pago de costas del mismo juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 303, Ser. 2ª.

7. Alimentos—La sentencia en el juicio sumario no importa un prejuzgamiento para el ordinario—Jur. Civ., tom. 2, pág. 528, Ser. 2ª.

8. Alimentos—Si bien deben ser en proporción del caudal ú oficio del que debe suministrarlos, cuando se trata de un artesano, el Juzgado debe dejarle elementos con qué sostener su industria—Jur. Civ., tom. 1, pág. 161, Ser. 2ª.

9. Alimentos—Toda alteración que se pretenda sobre la suma fijada en el juicio sumario debe sustanciarse por la vía

4—Siempre que por su ubicación ó cualquiera otra circunstancia fuese posible la estimación del inmueble, en cuyo caso el Juez se encuentra habilitado para calcular el monto del caudal.

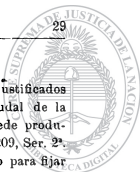
5—Art. 602, Cód. de Proc.

6—Así lo preceptúa el art. 374 del Cód. Civ.

7—Las sentencias dictadas en el juicio sumario no hacen cosa juzgada para el ordinario sobre la misma materia. Véase, por excepción, el caso resuelto en el tom. 8, pág. 226, Jur. Civ., Ser. 1ª.

8—Tanto en beneficio propio como de aquellos á quienes debe alimentar.

9—Así se desprende de los términos del art. 607 del Cód. de Proc., cuando dice: «Cualquiera reclamación sobre el particular deberá ventilarse en juicio ordinario» etc. El juicio sumario de alimentos en los tér-



ALI

ordinaria y con audiencia del interesado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 196, Sec. 1ª.

10. Alimentos—Y litis espensas, admitida la demanda de divorcio, el Juez señalará lo que el marido debe prestar, aun cuando no resulte justificado el caudal—Jur. Civ., tom. 7, pág. 151, Ser. 1ª.

11. Alimentos—El juicio sumario dada su naturaleza y objeto, solo procede cuando no existe de antemano la fijación de éstos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 259, Ser. 1ª.

12. Alimentos—La cantidad estipulada por las partes en instrumento público, equivale á fijación judicial y su alte-

minos en que se halla establecido en el tít. XX del Cód. de Proc., tiene por fundamento y objeto, al privar de toda defensa al que debe prestarlos, el facilitar los medios de obtener alimentos á quien carece de ellos y no hacer depender la vida de las personas de las tramitaciones de un pleito; por esta razón se fijan los alimentos en calidad de provisorios: mas al que tiene los alimentos provisorios necesarios para la vida, fijados por sentencia, no le puede ser permitido pedir aumento de la cuota alimenticia sin audiencia de quien debe prestarlos. Toda cuestión que tenga por objeto aumento de pensión, su disminución ó exoneración, debe ser materia de juicio ordinario.

10—El art. 203 Cód. Civ. no deja lugar á dudas: *señalará*, dice, los alimentos que el marido deba prestar á la mujer, y dispondrá que las espensas del juicio de divorcio sean satisfechas por el marido. El único requisito exigido es que haya sido admitida la demanda de divorcio por el Juez eclesiástico: el inciso 2º del art. 602 del Cód. de Proc. que exige justificación, aproximadamente por lo menos, del caudal del que debe dar los alimentos, no tiene otro objeto en el caso presente, que suministrar datos para el ejercicio del prudente criterio del Juez: los alimentos provisorios se deben por humanidad, sin fianza, compensación, resarcimiento ni desvfo alguno de su objeto: siempre que resulte que el que debe darlos tiene los medios de hacerlo ó no le faltan los recursos para obtenerlos con su trabajo ó de cualquier otro modo, el Juez no puede menos que fijar prudencialmente los alimentos. La equidad no admite, que por el hecho de no justificarse el caudal del que debe prestar los alimentos, aunque en efecto resulte que puede suministrarlos, la ley quede sin efecto, y acusados por el hambre los que tienen derecho á recibirlos.

11—Véase la nota 9.

12—Véase el núm. 9 y su nota respectiva.



ALI

ración solo puede tener lugar en juicio ordinario con audiencia del demandado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 259, Ser. 1ª.

13. Alimentos—A los padres naturales, los bienes de los hijos solo responden cuando la cuota ha sido fijada judicialmente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 493, Ser. 1ª.

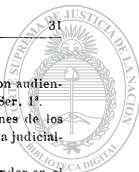
14. Alimentos—Es Juez competente para entender en el juicio, el del domicilio del que los solicita, si en él tuvo origen la acción personal que se deduce, aun cuando el que deba prestarlos esté domiciliado en otra jurisdicción—Jur. Civ., tom. 8, pág. 589, Ser. 1ª.

15. Alimentos—La obligación de pasarlos á un menor cesa por el solo hecho de justificarse en autos que ha llegado á la mayor edad, sin que se requiera la formación de juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 245, Ser. 1ª.

13—Cuando se trata de hijos menores de edad, en cuyo caso es esencial la intervención judicial y la del Ministerio de Menores.

14—El art. 4 del Cód. de Proc. habla en general de las acciones personales y reales para determinar la competencia del Juez: esta circunstancia induce á generalizar la disposición de este artículo. Cuando el artículo citado dice que es Juez competente en caso de ejercitarse acciones personales, *á elección del demandante, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato*, debe entenderse que ha querido significar con estas últimas palabras, aquel lugar donde se contrae la obligación, ya sea, por medio de una convención, ó por un hecho, ó bien por ministerio de la ley, que son fuentes de obligación ó de acciones personales: si este artículo se interpreta literalmente, nos conduciría al extremo de dejar siempre sin efecto algunas las obligaciones que nacen de los contratos. Toda interpretación contraria á la equidad ó por cuyo medio queden ilusorias las prescripciones de la ley debe rechazarse. Aquí se trata del cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley y que ésta impone á los parientes donde quiera que se hallen. Esta opinión tiene en su apoyo la de Carvantes, quien en el tom. 1, pág. 250, dice: «Como las acciones que la ley da á los individuos de una familia que deban prestarse alimentos, para exigirlos».

15—La sentencia ordenando la prestación de alimentos á los menores tiene por único fundamento la menor edad; cesa desde el momento en que llega el alimentario á la mayor edad: llegado este término la sentencia está cumplida, no hay razón alguna para mantener el embargo trabado con el fin de asegurar su cumplimiento.



ALI—ALQ

16. Alimentos—Su fijación es ineludible, justificados los extremos que la ley establece—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 2ª.

17. Alimentos—Deben pasarse al hijo adulterino reconocido voluntariamente aunque lo hubiese sido en forma privada—Jur. Civ., tom. 9, pág. 365, Ser. 1ª.

18. Alimentos—Los jueces no pueden fijar la cuota mientras no se justifique previamente en autos el caudal del alimentario—Jur. Civ., tom. 9, pág. 365, Ser. 1ª.

Alimentos—Véase: *Colocación*, núm. 1. *Caudal*, núm. 1. *Dote*, núm. 1. *Información*, núm. 1.

1. Alimentos provisorios—Justificadas las prescripciones exigidas por la ley, el esposo debe pagar los que el Juez conceptúe equitativos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 224, Ser. 2ª.

Almoneda—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.

Alquiler—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 1. *Arrendatario*, núm. 1. *Mejoras*, núm. 2. *Depósito*, núm. 3. *Notificación*, núm. 1.

1a. Alquileres—El acreedor de los devengados con anterioridad al concurso, aún cuando tenga privilegios sobre las

16. Art. 203, Cód. Civ., y 602, Cód. de Proc. Véase el núm. 10 y su nota correspondiente.

17—Con tal que se encuentre en las condiciones exigidas por el art. 343 del Cód. Civ.

18—Art. 602 del Cód. de Proc.

1—La mujer legítimamente casada tiene derecho, según el art. 185 del Cód. Civ., á pedir judicialmente que su esposo le dé los alimentos necesarios para la vida: debe llenarse los requisitos exigidos por el art. 602 del Cód. de Proc.

1a—Un acreedor en estas condiciones no puede invocar el art. 1703 del Cód. de Com., pues éste se limita únicamente á establecer la preferencia de que goza un crédito de tal naturaleza en mérito del privilegio acordado en el art. 1698 sobre los bienes que existen dentro del fundo arrendado: lo contrario importaría abrir un concurso especial sobre esos bienes, sin que ello pueda apoyarse en el art. 1710, pues éste se limita al acreedor



ALQ—ALT

mercaderías existentes en la casa, debe esperar al estado de graduación, no puede iniciar contra ellas ejecución alguna—Jur. Com., tom. 6, pág. 206, Ser. 1ª.

2. Alquileres—El acreedor durante el concurso no puede iniciar ejecución por ellos, contra la masa—Jur. Com., tom. 6, pág. 208, Ser. 1ª.

3. Alquileres—Devengados durante el concurso deben ser abonados con los primeros fondos que produzca la venta de las mercaderías que los han causado, sin esperar la resolución de las cuestiones que sobre propiedad de las mismas se hayan suscitado—Jur. Com., tom. 6, pág. 281, Ser. 1ª.

4. Alquileres—Los devengados durante el concurso deben ser abonados con los primeros fondos que produzca la venta de las mercaderías que los han causado, sin esperar la resolución de las cuestiones que sobre propiedad de las mismas se hayan suscitado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 283, Ser. 1ª.

Alquileres—Véase: *Jurisdicción*, núm. 1. *Embargo preventivo*, núm. 6. *Mora*, núm. 1. *Embargo de los alquileres*, núm. 1. *Condóminos*, num. 3.

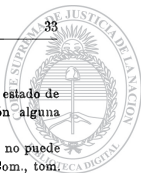
Alteraciones materiales—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 3.

hipotecario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3937 del Cód. Civ. Es al Síndico á quien corresponde solicitar las medidas conducentes para la venta de los bienes afectados al privilegio del locador—art. 1649, Cód. de Com.—y en caso de inacción del Síndico corresponde á los Jueces resolver, á petición de parte, el procedimiento á seguirse.

2—La jurisprudencia ha establecido que el acreedor por arrendamientos devengados durante el concurso, no está obligado á esperar las resultas del juicio de quiebra, carece sin embargo, de derecho para iniciar la acción ejecutiva, ya sea que procedan de antes ó durante el concurso como lo demuestran los argumentos que se aducen en la nota precedente.

3—El locador tiene el derecho de vigilar si el Síndico cumple.

4—Véase notas 1, 2 y 3 precedentes.



AMI — ANT

Amigables componedores—Véase: *Fallo*, núm. 1. *Multa*, núm. 1.

1. Amenazas—Cuando de los antecedentes del hecho resulta la existencia de ellas, la provocación con armas importe un peligro inminente que hace legítima la defensa inmediata, y el homicidio queda justificado—Jur. Crim., tom. 6, pág. 226, Ser. 1ª.

Amistad íntima—Véase: *Simulación*, núm. 5.

1a. Amojonamiento—De predios urbanos es improcedente—Jur. Civ., tom. 9, pág. 222, Ser. 1ª.

1b. Ampliaciones—O modificaciones que sufran los estatutos de sociedades anónimas, importan una novación y en su consecuencia se requiere su inscripción íntegra en el Registro de Comercio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 307, Ser. 1ª.

1. Anotaciones preventivas—Quienes pueden pedir las—Jur. Civ., tom. 7, pág. 45, Ser. 1ª.

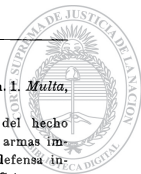
1c. Antecedentes—De una acción que constan en expedientes judiciales, solo deben ser agregados *ad-effectum videnti*, al dictarse sentencia definitiva si lo cree necesario el Juez—Jur. Com., tom. 6, pág. 306, Ser. 1ª.

1—El art. 158 del Cód. Pen. establece que para que la herida y la muerte misma que pueda darse al injusto agresor, sean consideradas como acto ilícito de venganza, es necesario que el ataque haya terminado y alejándose completamente el peligro.

1a—El art. 2748 del Cód. Civ., establece que la acción de deslinde tiene por antecedente indispensable la contigüidad y confusión de los predios rústicos; ella no se da para dividir predios urbanos.

1b—El Cód. de Com. espresamente lo determina, y aún cuando las ampliaciones ó modificaciones tengan relación con estatutos anteriormente anotados en el Reg. de Com., representan sin embargo un acto independiente sujeto en su forma á todos los requisitos legales que le son aplicables.

1c—Con arreglo al art. 57 del Cód. de Proc. durante la secuela del juicio pueden ser consultados por las partes, ya sea en las secretarías de los Juzgados ó en el Archivo, haciendo el uso que crean convenir á sus derechos.



ANT — APE

Antecedentes—Véase: *Escribanos*, núm. 3.

1. Anticipo—Que haga el rematador sobre muebles de uso particular, se rige por las disposiciones de la prenda como contrato civil—Jur. Civ., tom. 8, pág. 448, Ser. 1ª.

Anticipo de precio—Véase: *Simulación*, núm. 5.

Anula—Véase: *Intervención*, núm. 2. *Remate*, núm. 3.

Anulados—Véase: *Actos*, núm. 1.

Anular—Véase: *Error*, núm. 1.

1a. Apelable—Lo es el auto que resuelve sobre la admisión ó rechazo de pruebas—Jur. Civ., tom. 1, pág. 406, Ser. 2ª.

Apelable—Véase: *Auto*, núms. 2, 4, 5 y 11. *Testar palabras*, núm. 1, *Patria potestad*, núm. 5. *Posesión á la esposa*, núm. 1. *Auto*, núm. 13. *Obligación sin plazo*, núm. 1. *Memoria*, núm. 3.

1b. Apelables—Lo son las resoluciones sobre personería—Jur. Civ., tom. 3, pág. 538, Ser. 1ª.

1c. Apelación—Debe concederse aun cuando no se intente producir prueba sobre las escepciones, si entre las opuestas

1—Es civil porque el art. 700 del Cód. de Com. establece que el préstamo está sujeto á las leyes mercantiles, cuando la cosa prestada puede ser considerada género mercantil, ó destinada á uso comercial, y tiene lugar entre personas calificadas de comerciantes, ó de los cuales á lo menos el deudor tenga esa calidad. El art. 741 del mismo Código ratifica esta doctrina. El martillero que recibe mercaderías en estas condiciones debe llenar los requisitos exigidos por los arts. 3217, 3205, 3222 y 3224 del Cód. Civ.

1a—El auto de su referencia no resuelve ningún incidente sobre producción de prueba. Sin embargo el principio es exacto, es apelable porque true gravamen irreparable.

1b. Porque true gravamen irreparable, siendo entonces apelables, art. 226, Cód. de Proc. Según el art. 94, los autos que resuelven los incidentes de que habla el art. 84 son apelables.

1c—El art. 501 del Cód. de Proc. que requiere como condición para que la sentencia de remate sea apelable, que se haya intentado probar las escepciones opuestas, se refiere á las escepciones de hecho ó mistas, pues las de puro derecho no son susceptibles de prueba, ni puede ésta



APE

existe alguna de puro derecho —Jur. Civ., tom. 7, pág. 336, Ser. 1^a.

2. Apelación—De la sentencia, importa que ella se considere injusta, pero no nula, y la Cámara solo puede estudiarla bajo esa fase, aun cuando al espresar agravios se pida la nulidad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 139, Ser. 1^a.

3. Apelación—La adhesión á la apelación, no puede ser tomada en consideración por el superior—Jur. Civ., tom. 8, pág. 9, Ser. 2^a.

intentarse: la ley ha querido tan solo en este caso, que cuando se oponen excepciones en el juicio ejecutivo se prueben los hechos en que ellas se fundan para que sea apelable la sentencia de remate, mas no se puede oxigir la concurrencia de este requisito en las cuestiones de puro derecho en que la prueba no es requerida. Es evidente que al denegar la apelación este artículo en el caso que no se hubiese intentado probar las excepciones opuestas, cuando sean susceptibles de prueba, ha procedido de acuerdo con el objeto del juicio ejecutivo, cual es que el acreedor sea integrado á la brevedad posible de su capital. Si el deudor funda su excepción en hechos y estos no se prueban ó no se intentan probar, es inútil conceder apelación del auto que no hace lugar á las excepciones, pues la apelación sería completamente sin objeto no teniendo el Superior una causal para revocar el auto del inferior por falta de prueba. La ley española de Enj. Civ. admite la apelación en todos los casos, como puede verse en el art. 1441.—Manresa y Reus, Ley de Enj. Civ., tom. 4, pág. 279. E. Reus, Ley de Enj. Civ., tom. 3^o, pág. 391.

2—El art. 239 del Cód. de Proc. prescribe que el recurso de nulidad se interponga conjuntamente con el de apelación: la nulidad deducida en los alegatos están fuera del término acordado, no debe ser tomada en consideración.

3—El art. 227 manda deducir el recurso ante el Juez que hubiese dictado la sentencia: niega implícitamente el derecho de hacerlo en segunda instancia; por consiguiente el hecho de haber apelado la contraparte no mejora el derecho que se dejó de usar en la oportunidad debida, porque el derecho procede del art. 227 citado, más no del hecho de haber apelado la contraparte, siendo además, regla invariable en materia de procedimiento, que lo que no está espresamente permitido, está prohibido. Véase: Inst. tom. 1, verb. Apelación. núm. 181.



APE

4. Apelación—Las providencias dictadas después de concedida ésta, no adolecen de nulidad—Jur. Civ., tom. 6, pág. 351, Ser. 1ª.

5. Apelación—La Cámara no puede conocer de un recurso interpuesto fuera de término, aun cuando el inferior concediéndolo haya elevado los autos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 412, Ser. 2.

Apelación—Véase: *Autos*, núm. 1. *Recurso*, núm. 1. *Decretos*, núm. 1. *Revocación*, núm. 1. *Recurso directo*, núm. 1. *Aclaración*, núm. 1. *Prueba*, núm. 17. *Embargo preventivo*, núm. 28. *Costas*, núm. 12. *Resoluciones municipales*, núm. 1.

Apelación libre—Véase: *Coadyuvante*, núm. 1.

1a. Apelante—Aún cuando asuman ese carácter, sus opiniones no pueden ser tenidas en cuenta por la Cámara si en primera instancia se manifestaron conformes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 274, Ser. 1ª.

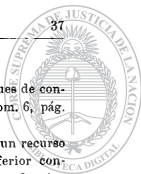
Apellidos—Véase: *Falta de personería*, núm. 3.

1. Apercibimiento—Decretado y notificado por cédula,

4—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 222 del Cód. de Proc. El Juzgado solo cesa en la jurisdicción que ejerce con la remisión de los autos al superior.

5—La jurisdicción del superior no se ejercita cuando el recurso no procede con arreglo á la ley, sea porque la sentencia es inapelable, sea porque el recurso viniera fuera de tiempo. Esta ha sido la práctica constante de nuestros Tribunales, y aun cuando el recurso hubiere sido otorgado sin oposición, se han abstenido de entender en él. La voluntad de las partes no puede atribuir á los Tribunales una jurisdicción que por la ley no les compete, se opone á ello razones de orden público que no puede ser alterado por los Tribunales. Las sentencias consentidas forman cosa juzgada. Las leyes 13 y 19, tít. 22, part. 3ª, y especialmente la ley 31, tít. 1º, lib. 7º, Rec. de Indias, prohíben conocer de las causas sentenciadas, prescribiendo la última de una manera terminante «y si contra lo susodicho conociere, actuare y sentenciar, sea nulo y sin ningún valor ni efectos».

1a—Respecto de ellos la sentencia debe ser considerada como pasada en autoridad de cosa juzgada.



APE—ARB

debe aparecer claramente, no basta transcribir el auto como se pide.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 353, Ser. 1ª.

1. Apercibimiento—Para que surta efectos legales es necesario que en el mismo auto se determine en términos precisos lo que se resolverá por inasistencia del apercibido.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 528, Ser. 2ª.

Apercibimiento—Véase: *Posiciones*, núms. 6, 7 y 10. *Jactancia*, núm. 3.

1a. Apoderado—Deben nombrar uno, todos los que en un juicio sostienen el mismo derecho.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 456, Ser. 1ª.

2. Apoderado—En causas criminales no es aplicable al acusador, la prohibición de admitirlo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 616, Ser. 1ª.

Apoderado—Véase: *Domicilio constituido*, núm. 1. *Albaaceas*, núm. 2.

Apreciación Pecuniaria—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 6.

Arancel—Véase: *Corredores de Bolsa*, núm. 2.

Arbitradores—Véase: *Depósito*, núm. 1.

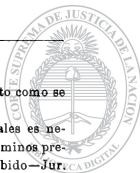
1b. Arbitro arbitrador—La falta de juramento no vicia

1—El apercibimiento debe estar concebido en términos claros y precisos, como para que los interesados queden instruidos de que no obstante su inasistencia se verificará la diligencia ordenada.

1a—Así lo establecen las leyes 3, tít. 2, F. J., 15, tít. 10, lib. 1; 6, tít. 1, lib. 2, F. R. Esta última ley dice: «Si sobre una demanda fueren muchos homes, de la una parte, y pocos ó muchos de la otra, el alcalde mande, que cada una de las partes den quien razone por sí; y no lo deben todos razonar; más aquellos que fueren dados de ambas las partes, razonen: porque el Pleyto no sea destorvado por voces de muchos.» Igual disposición contiene la ley 18, tít. 5, Part. 3ª. Los arts. 633 y 722 del Cód. de Proc. confirman el principio resuelto y sentado por la Cámara. Véase: F. S. C. P. tom. 7, pág. 327, S. 1ª, tom. 6, págs. 258 y 357, Ser. 2ª.

2—Véase: Verb. Juicio criminal y nota relativa.

1b—El art. 808 del Cód. de Proc. dice: «Contra la sentencia de los ami-



ARB

de nulidad el laudo dictado durante la próroga del término concedido de conformidad de partes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 380, Ser. 1ª.

1. **Árbitros**—Imposibilitado uno de ellos para expedir el laudo, los otros pueden pedir y el Juez ordenar la suspensión del término fijado por las partes para laudar—Jur. Civ., tom. 7, pág. 217, Ser. 1ª.

2. **Árbitros**—El haber fallado en una forma distinta de la prescrita por la ley, no causa la nulidad del laudo—Jur. Com., tom. 5, pág. 216, Ser. 1ª.

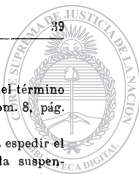
3. **Árbitros**—Deben ser sometidos á éstos, para fijar el monto, en las cuestiones sobre locación de servicios en materia mercantil, justificada que sea su existencia—Jur. Com., tom. 6, pág. 211, Ser. 1ª.

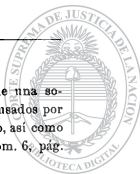
gables componedores no se dará recurso alguno, salvo la acción de nulidad por haber fallado fuera del término ó sobre puntos no comprometidos. Si bien la aceptación del cargo debe hacerse bajo juramento,—art. 799, inc. 3º,—su omisión no invalida el laudo, pues esta causal no figura en el artículo citado. El art. 1042 del Cód. Civ., no tiene aplicación, porque esta disposición establece la nulidad del acto atendiendo á la incapacidad de las personas para celebrar tal ó cual acto jurídico; el art. que puede aplicarse es el 982 del mismo Código que legisla especialmente respecto de la persona del oficial público, la que se pronuncia por la validez del acto.

1—Esta suspensión no importa alterar ni modificar el compromiso de las partes con relación al término señalado para laudar, puesto que este término queda siempre siendo el mismo convenido; el Juzgado al decretar una medida de esta naturaleza no hace otra cosa que evitar se frustre el arbitraje, como está en su deber hacerlo, no siendo justo que estando impedidos de hecho los árbitros para funcionar, hubiera de imputarse en el término para laudar.

2—El art. 808 del Cód. de Proc., no autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia de árbitros arbitradores, sino en dos casos: uno, por haber fallado fuera del término, y otro por haber fallado sobre puntos no comprometidos. Este artículo es restrictivo por su naturaleza.

3—Art. 601 del Cód. de Com.





ARB

4. Arbitros—Nombrados para la liquidación de una sociedad, no pueden fijar los daños y perjuicios causados por su disolución, deben ser fijados en juicio ordinario, así como también los gastos que ésta origine—Jur. Com., tom. 6, pág. 349, Ser. 1ª.

5. Arbitros—Deben resolver todas las cuestiones que resulten de un contrato de arrendamiento mercantil—Jur. Com., tom. 6, pág. 506, Ser. 1ª.

6. Arbitros—Pactado el sometimiento de las cuestiones, éstos deben entender en ellas sin previa declaración de los Tribunales ordinarios sobre la existencia de la cuestión—Jur. Com., tom. 6, pág. 605, Ser. 1ª.

Arbitros—Vease: *Peritos*, núm. 2. *Tribunal arbitral*, núm. 1. *Rendición de cuentas*, núm. 5. *Sociedad*, núm. 3. *Asegurado*, núm. 1.

1. Arbitros arbitradores—No pueden continuar entendiendo en el juicio después del fallecimiento de uno de los interesados—Jur. Civ., tom. 2, pág. 501, Ser. 1ª.

2. Arbitros arbitradores—Que deben intervenir en la liquidación de sociedades mercantiles, son obligatorios después de producidas las diferencias—Jur. Com., tom. 6, pág. 242, Ser. 1ª.

3. Arbitros arbitradores—Reconocida la existencia de

4—Es ageno al juicio arbitral lo referente á indemnización de daños y perjuicios.

5—Art. 601, del Cód. de Com.

6—El contrato social estableció expresamente el sometimiento de las cuestiones á arbitros: en este caso debe cumplirse lo estipulado, pues lo contrario desvirtuaría la voluntad de los socios.

2—El art. 511 del Cód. de Comercio, debe interpretarse en el sentido de que solamente después de hecha alguna reclamación por los socios es llegada la oportunidad de la intervención de los arbitros. Así lo resuelven los comentadores del Cód. de Comercio español cuyo art. 323 es la fuente del nuestro.

3—Art. 511 del Cód. de Com.

ARB—ARR

la sociedad, todas las cuestiones que se susciten deben ser resueltas por aquéllos—Jur. Com., tom. 6, pag. 400, Ser. 1ª.

4. Arbitros arbitradores—Deben resolver las cuestiones sobre diferencias en la calidad de las mercaderías—Jur. Com., tom. 6, pag. 523, Ser. 1ª.

Arbitros arbitradores—Véase: *Sociedad*, núm. 1. *Sentencias*, núm. 2. *Acción de nulidad*, núm. 1.

Archivo—Reglamentando la forma en que debe hacerse la de los expedientes—Jur. Civ., tom. 3, pag. 447, Ser. 2ª.

Archivo—Véase: *Escribanos*, núm. 3.

Archivo general—De los Tribunales, su formación—Jur. Civ., tom. 7, pag. 55, Ser. 1ª.

Area—Véase: *Sucesor*, núm. 1. *Cláusula*, núm. 2.

Arma—Véase: *Tentativa próxima*, núm. 2.

1. Arraigo—Del juicio, la caución juratoria no es bastante, se requiere la fianza—Jur. Civ., tom. 2, pag. 469, Ser. 2ª.

2. Arraigo—Cuando son varios los demandantes, solo puede declararse procedente la escepción, para los ausentes, pero debe llevarse adelante el juicio con aquellos respecto a los cuales ha sido rechazada—Jur. Civ., tom. 2, pag. 465, Ser. 2ª.

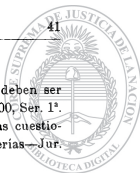
3. Arraigo—La prueba de esta escepción por falta de

4—De acuerdo con el principio general sentado en el art. 208 del Cód. de Comercio.

1—La caución juratoria es solo una promesa que jamás puede ser una garantía segura de resarcimiento de gastos y costas, lo que se exige es una fianza sustancial, real que reúna las condiciones requeridas por el Cód. Civil.

2—No puede aplicarse la disposición del art. 85 del Cód. de Procedimientos, respecto al litigante que tiene su domicilio en la capital.

3—El demandado se convierte en actor al deducir una escepción: *reus in exceptione fit actor*. El que deduce la escepción de arraigo, afirma un hecho nuevo en juicio, correspondiéndole en consecuencia la prueba de ese hecho nuevo.



ARR

domicilio del actor corresponde al escepcionante—Jur. Civ., tom. 2, pág. 444, Ser. 2^a.

4. Arraigo—Debe circunscribirse á la cantidad que baste para el pago de las costas—Jur. Com., tom. 5, pág. 50, Ser. 1^a.

5. Arraigo—Esta escepción no puede ser opuesta á la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, mientras no se inicie el juicio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 343, Ser. 1^a.

6. Arraigo—Es obligatorio si el demandante tiene su domicilio en la Provincia, aun en los partidos limítrofes—Jur. Civ., tom. 3, pág. 517, Ser. 2^a.

Arraigo—Véase: *Juez*, núm. 2 — *Excepción de arraigo*, núm. 1.

1. Arras—O seña, como tal se conceptúa la suma entregada al firmar un boleto de compraventa, y la parte que pretenda, puede rescindirle con arreglo á las penas establecidas en el art. 1202 del Cód. Civil—Jur. Civ., tom. 7, pág. 280, Ser. 1^a.

2. Arras—Tal se conceptúa la suma entregada al firmar un contrato privado de compraventa, y la parte que pre-

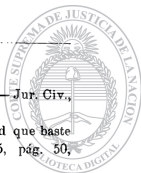
4—Este punto no fué materia de resolución en el caso á que se refiere.

5—En el tít. XVI del Cód. de Proc., no se encuentra disposición alguna que obligue al actor á arraigar la ejecutoria.

6—Art. 85, Cód. de Proc.

1—En el boleto se estableció espresamente que la suma se entregaba en calidad de seña: en este caso es de precepto legal que el vendedor puede rescindir el contrato devolviendo la suma dada en seña con otro tanto, y viceversa el comprador puede hacer la propia cosa perdiendo la suma dada en seña.

2—Aunque en el contrato no se emplee la palabra «señal para asegurar el contrato ó su cumplimiento» como lo dice el art. 1202, citado; porque señal es lo que se da para asegurar el contrato ó su cumplimiento. En el documento que sirvió de base á la cuestión, se espresó claramente que



ARR

tenda puede rescindirlo con arreglo á las penas establecidas en el art. 1202 del Cód. Civ.—Jur. Civ. tom. 1, pág. 187, Ser. 2ª.

1. **Arrendamiento**—Cuando el precio no se haya estipulado espresamente, debe ser fijado por peritos—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

Arrendamiento—Véase: *Contrato privado*, núm. 5—*Contrato*, núm. 13—*Locatario*, núm. 2—*Promesa*, núm. 2—*Condómino*, núm. 4.

1a. **Arrendamientos**—Iniciada la acción para su cobro debe ser rechazada, si no se justifica la existencia del contrato de locación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 551, Ser. 1ª.

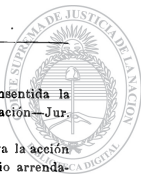
2. **Arrendamientos**—Que produzcan los bienes de la es- en ese acto se entregaba una suma de dinero «como garantía de esa compra», palabras son éstas, que traducen el mismo pensamiento del art. 1202, pues son sinónimas: debe por otra parte tenerse presente, que ni este artículo, ni ningún otro del Cód. Civ., hace depender la validez de la convención sobre arras, de fórmulas sacramentales que al efecto deban observarse. No puede argumentarse en contra con el art. 1373.

1—Art. 1566 del Cód. Civ., que tiene su fundamento en la ley 4, tít. 8, Part. 5ª la que dice: «Pagar deben los arrendadores, é los alogadores, el precio de las cosas que arrendazen, o alogasen, segund la costumbre que fuere usada en cada vn lugar; ó al tiempo en que se avinieren, quando se fiziere el arrendamiento ó el alogamiento. La costumbre entre nosotros es que en este caso el precio de la locación sea determinado por peritos, como sucede en la locación de servicios, art. 1627, última parte, Cód. Civ.

1a—El contrato de locación debe ser estipulado de una manera espresa: que concurra la voluntad de las partes en el sentido de celebrar este contrato, pues es fácil confundirlo con un contrato de otra naturaleza. Por ejemplo, si se entrega una cosa para que otra persona use y goce de ella, sin que se obligue á pagar un precio, ni á entregar cosa alguna, ni á prestar un servicio, el contrato sería un comodato. Para que la locación exista, es necesario que el contrato se celebre, verbalmente ó por escrito, art. 1493, Cód. Civ. y nota.

2—Los arrendamientos son bienes de la sociedad conyugal—art. 1272, Cód. Civ.—El art. 1295 establece que: «instaurada la acción de separación de bienes, la mujer puede pedir embargo de sus bienes muebles,





ARR

posa, su embargo es procedente, decretada y consentida la inhibición, en virtud de la demanda de separación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 591, Ser. 1ª.

3. Arrendamientos—Solo puede ser ejecutiva la acción para cobrarlos cuando el locador ocupa el predio arrendado, y previo reconocimiento por su parte de que inviste ese carácter, exhibiendo el último recibo—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 13, Ser. 2º.

Arrendamientos—Véase: *Contrato*, núms. 1 y 2.

Arrendatario—No puede ser considerado depositario de los alquileres si el predio se encuentra fuera de la jurisdicción del Juez que decretó el embargo: su obligación se circunscribe á depositar los que confiese deber—Jur. Com., tom. 5º, pág. 453, Ser. 1º.

que estén en poder del marido y la no enagenación de los bienes de éste ó de la sociedad». Este artículo tiene por objeto asegurar los bienes de la muger, por consiguiente, hay que mirarlo como establecido con el objeto de restringir las facultades conferidas al marido por el art. 1296. La ley al querer asegurar los bienes de la muger en caso de demanda de separación, no puede haberse referido á los bienes raíces, pues éstos están garantidos por el art. 1253, que exige el consentimiento de la esposa para su enagenación. Por consiguiente, partiendo de estos principios resultaría que el marido á pesar de la inhibición general de enagenar, continuaría con la misma extensión de poderes y facultades: esto no puede ser el propósito de la ley, pues el art. 1295 encierra el pensamiento bien manifiesto de que se aseguren los bienes, en cuya denominación se comprende también los frutos naturales ó civiles: estas medidas no privan, en absoluto, al marido, de la administración, sino que las restringen en beneficio y salvaguardia de los intereses de la esposa.

3—La acción ejecutiva concedida por el Cód. Civ. para el cobro de arrendamientos se limita á los bienes sujetos al privilegio del locador, y en cuanto á la forma del título, debe prepararse exigiendo al demandado que manifieste si es locatario y en caso afirmativo que exhiba el último recibo, como lo dispone el art. 466 del Cód. de Proc., para hacer constar la subsistencia de la locación y su precio.

1—El art. 459 del Cód. de Proc. rige tan solo en la jurisdicción de los Tribunales para los cuales ha sido dictado.

ARR — ASA

1. Arrepentimiento—Ni éste, ni aun la devolución de lo robado, paraliza la acción penal, ni exime de pena, pues puede reconocer causas ajenas á la voluntad del reo—Jur. Crim., tom. 6, pág. 117, Ser. 1^a.

Arresto—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 1.

1. Artesano—No puede conceptuarse comerciante aun cuando provea el todo ó parte de las mercaderías para confeccionar la obra que se le encomienda—Jur. Civ., tom. 8, pág. 217, Ser. 1^a.

Artesano — Véase: *Alimentos*, núm. 8 — *Prescripción*, núm. 15.

1. Asegurador—Y asegurado, las cuestiones sobre fraude que se susciten entre ambos, deben ser resueltas por árbitros, aun cuando por el contrato se hubiese estipulado su sometimiento á los Tribunales ordinarios—Jur. Com., tom. 6, pág. 615, Ser. 1^a.

Asegurador—Véase: *Asegurado*, núm. 1.

Asesinato—Véase: *Muerte*, núm. 1—*Alevosía*, núm. 1.

Asesor de menores—Está obligado á presentar copia de

1—Porque en caso contrario los ladrones se darían siempre por arrepentidos para quedar impunes: también el arrepentimiento sería de difícil prueba en estos casos. La ley 2^a, tít. 6, Part. 7^a dice: «Furto haze todo ome que tome la cosa ajena non lo sabiendo su dueño, ó contra su voluntad». El art. 321 del Cód. Pen. al estudiar la palabra *sustrayendo*, expresa que su carácter esencial es la intencion por parte del agente de hacer suya la cosa. Véase: Inst. tom. 18, verb. Robo, núm. 2412 y nota.

1—Así opina el Dr. Obarrio, Código de Comercio concordado y comentado; Riviere, *Repetitions Ecrites sur le Code de Commerce*, pág. 26, edición de 1868: Gomez de la Serna y Reus y Garcia, Nota 1, pág. 33, edición de 1863.

1—En este caso la cuestion es de arbitraje forzoso segun disposicion del art. 208 del Cód. de Com. La jurisdiccion forzosa no puede renunciarse ni prorogarse.

1—No hay disposicion alguna que exima al Asesor de la obligacion de presentar copia de sus escritos, de que deba darse traslado, la que ha sido establecida por la ley en terminos generales para todos los que sean par-



ASE—ASO

sus escritos de que deba darse traslado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 310, Ser. 1^a.

2. Asesor de menores—No se encuentra comprendido en la disposición de la ley que prohíbe sacar los autos de la oficina—Jur. Civ., tom. 6, pág. 459, Ser. 1^a.

1. Asesores de menores—Deben intervenir ante los Tribunales de Paz en aquellos juicios que la ley ordena bajo pena de nulidad—Jur. Civ., tom. 1, pág. 175, Ser. 2^a.

Asesores de menores é incapaces—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 25, Ser. 1^a.

1a. Asociar—Al hijo al comercio del padre, importa la emancipación—Jur. Com., tom. 5, pág. 101, Ser. 1^a.

tesen el juicio, de conformidad con lo establecido por el art. 21 del Cód. de Proc.

2—A los asesores no alcanza la prohibición del art. 26 del Cód. de Proc. que dice: «los autos originales no se entregarán á los *litigantes*: cuando quieran examinarlos podrán hacerlo en la oficina del actuario». Esta disposición se refiere, como lo expresa, á los litigantes y no á los funcionarios, aunque á veces éstos asuman aquel carácter por ministerio de la ley, lo que se infiere de las excepciones consignadas en el art. 27. Si estas excepciones se autorizan con la responsabilidad de los abogados, con mayor razón debe permitirse que los autos se entreguen originales á los Asesores, pues ni siempre intervienen éstos desde el principio de los asuntos, ni forman, ni pueden formar el expediente por medio de las copias de los autos á que se refieren los arts. 21 y siguientes. No es admisible con respecto al Asesor la prohibición de sacar los autos originales de la oficina, en presencia del modo como se espide y se ha espedido siempre por medio de vistas, así como también lo hace el Fiscal, y ante la confianza pública de que en cierto modo es depositario. Véase arts. 127, 130 y 132 de la Ley Org. de los Trib. de la Capital. Finalmente no hay ningún artículo en el Cód. de Proc., que diga que debe acompañarse copia de las peticiones ó escritos de que haya de conferirse vista, lo que supone la entrega de los autos á los funcionarios á quienes tales vistas se acuerda, como lo está indicando la misma palabra *vista* muy distinta de la de *traslado*, en su significación jurídica.

1—Así se resolvió en el acuerdo de la Cámara en virtud de la Superintendencia que la ley le atribuye sobre todos los Tribunales inferiores, incluidos los de Paz.

1a—Siempre que el hijo tenga 18 años cumplidos.—Art. 11, Cód. de Com.



ACT

Atentado al pudor—Véase: *Violación*, núm. 1.

1. Audiencia—Señalada para dos actos distintos, la suspensión de uno es motivo legal para señalar nuevo día para el otro—Jur. Civ., tom. 8, pág. 134, Ser. 1ª.

Ausencia—Véase *Posiciones*, núm. 3—*Información*, núm.

1. *Prescripción*, núm. 8.

1. Ausente—La ejecución contra éste no se encuentra comprendido en las disposiciones del art. 79 del Cód. de Proc., referentes al juicio ordinario—Jur. Com., tom. 6, pág. 425, Ser. 1ª.

2. Ausente—Las disposiciones para el juicio en rebeldía no le son aplicables—Jur. Com., tom. 6, pág. 503, Ser. 1ª.

1—Las disposiciones de este artículo, como que rigen el juicio ordinario no pueden aplicarse al ejecutivo que tiene su procedimiento especial marcado por la ley en el art. 471.

2—El fundamento de esta resolución es el siguiente: El ausente es declarado incapaz con arreglo al art. 54, inc. 5 del Cód. Civ., en cuyo caso no puede aplicarse el art. 433 del Cód. de Proc. que se refiere al rebelde. Consideramos que hay error evidente en la resolución que nos ocupa. El ausente declarado incapaz por el artículo citado del Cód. Civ., no es el que citado con arreglo á los arts. 77 y siguientes del Cód. de Proc. deja de comparecer desatando el mandato judicial; ese artículo se refiere al ausente con presunción de fallecimiento de que se ocupa el art. 110, que declara terminantemente que el Cód. Civ., al hablar de ausentes solo se refiere á éstos. Nuestro Codificador ha querido espresamente descartar la duda que sujiere la legislación francesa al hablar de los ausentes, pues no se sabe de qué ausencia trata: nuestro Cód. sigue á Freitas el que confirma plenamente en su comentario la tesis que sostenemos, siendo este autor la fuente en que ha bebido nuestro codificador la doctrina sustentada en esta parte de su obra. El Dr. Llerena en sus «Concordias del Cód. Civ.» trata esta cuestión con abundancia de citas y argumentos irrefutables, sosteniendo el principio sentado por nosotros. De aquí se desprende que la doctrina sostenida por la Cámara en el caso presente falla por su fundamento. El inciso se refiere á los ausentes con *presunción de fallecimiento*, y no á los declarados *judicialmente ausentes*, porque tal declaración no existe por nuestra ley civil. Por consiguiente, el ausente de que nos habla el Cód. Civil no es el ausente de que nos habla el Cod. de Procedimientos. La ley de organización de los Tribunales de



AUS

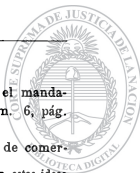
3. Ausente—Cuya residencia dice no conocer el mandatario, debe ser citado por edictos—Jur. Com., tom. 6, pág. 505, Ser. 1º.

4. Ausente—La inscripción en la matrícula de comer-

Justicia de la Cap. de la Nación de 1886, consecuente con estas ideas establece defensores y Asesores de Menores é incapaces y Defensores de Pobres y ausentes: si el ausente fuese incapaz, habría la ley creado dos funcionarios para velar por los intereses de los ausentes, lo que no es propio suponer. Esta ley al designar dos funcionarios ha establecido implícitamente que los ausentes no son incapaces, hablamos de los ausentes considerados tales por no tener domicilio conocido y que no concurren al llamado de la justicia: los ausentes del Cód. de Proc., son amparados por el Defensor de Pobres y ausentes, los ausentes con presunción de fallecimiento de que trata el Cód. Civ., son incapaces y consiguientemente están asistidos por los Asesores de Menores é incapaces. Los prácticos están igualmente en contra del principio sentado en el sumario que comentamos. El demandado que citado en forma legal no comparece á estar á derecho incurre en rebeldía y puede ser declarado rebelde si la parte contraria lo pidiere, en cuyo caso debe aplicársele el procedimiento en rebeldía. Como antiguamente el ausente tenia el recurso de rescisión de la sentencia dictada contra él, y como nuestra legislación moderna suprimió este recurso, se vió la necesidad de que los juicios se siguiesen con un representante del ausente que defendiera los derechos de su representado para que el juicio quedara valedero é inatacable. Puede consultarse con provecho los siguientes autores que están en el mismo orden de ideas manifestadas por nosotros: Caravantes, tom. 2, pág. 70, parágrafo 562; tom. 4, pág. 268, parágrafos 1787 y 1789; Manresa y Reus, comentario á la ley de Enj. Esp. de 1855, tom. 1, pág. 121 y 133; tom. 2, pág. 96, comentario al art. 232; Emilio Reus, Tratado de Proc. Civiles comentario á los arts. 527 y 528 de la ley esp. de 1881, tom. 1, págs. 400 y 401; tom. 2, pág. 233; Malaver Trat. de Proc. Judiciales, tom. 1, pág. 369, parágrafo 588; Escriche, edición de 4 tomos, verb. ausente. Puede asimismo consultarse: la ley 17, tít. 1, Lib. 2º, F. J. Leyes del tít. 4, Lib. 2 F. R: Leyes del tít. 8, Part. 3ª, tít. 5, Lib. 11, Nov. Rec. Ley 1ª, tít. 7, Part. 3ª, y la glosa 46 de Gregorio Lopez. Glosa del mismo á la ley 1, tít. 8, Part. 3ª.

3—El mandatario del actor, se entiende Debe hacerse la citación en la forma establecida en el art. 80 del Cód. de Proc.

4—Hallándose un factor facultado para defender los derechos de su poderdante, no podría ejercer esta facultad en oportunidad sin haberse verificado la inscripción ó registro ordenado por el Cód. de Com. No hay



AUS—AUT

ciantes, puede ser pedida por el representante de un comerciante ausente, siempre que invista el carácter de administrador del negocio—Jur. Com., tom. 6, pág. 593, Ser. 1^a.

Ausente—Véase: *Juicio*, núm. 1—*Curador*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 14.

Ausentes—Véase: *Arraigo*, núm. 2—*Tribunales de Paz* núm. 1—*Defensores de pobres y ausentes*, núm. 2.

1. Autenticidad—Negada la del documento que se presenta como principio de prueba por escrito, la prueba testimonial es improcedente mientras no se justifique su veracidad—Jur. Civ., tom. 2, pág. 587, Ser. 2^a.

Autenticidad—Véase: *Contrato*, núm. 11.

1a. Auto—Que deniega la apelacion de una sentencia definitiva, puede pedirse revocatoria ante el mismo Juez que la dictó interponiendo en subsidio el recurso de apelación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 17, Ser. 1^a.

2. Auto—Que no hace lugar á las escepciones dilatorias, disposicion legal que declare personalísimo el acto de la inscripcion; por el contrario, las reglas del derecho establecen que á cualquiera le es lícito practicar por medio de otro lo que puede hacer por sí mismo.

1—Si por medio de testigos, en la forma ordinaria de la prueba testimonial, pudiera acreditarse la autenticidad de la firma de un documento que se presenta como principio de prueba por escrito cuya existencia es necesaria para que proceda la prueba testimonial, se incurriría en el vicio de dar por probado lo que debe probarse, quedando fácilmente burlada la prevision del legislador, que ha limitado la prueba testimonial á contratos de determinado monto. El Cód. de Proc. determina la forma en que debe probarse la firma de un documento, cuando su legitimidad es controvertida en juicio: entre otras disposiciones está el art. 158 que exige que el examen se haga por peritos que el Juez designa. La ley de Partida exija que el testigo hubiese visto firmar el documento por el mismo que lo suscribe y á quien se atribuye la firma.

1—Caravantes, citando á otros prácticos sostiene esta doctrina fundado en que en el caso presente, la cuestion previa es, si el citado auto es ó no apelable.

2—Esta sentencia fué dictada por la Cámara constituida en Tribunal de interlocutorias y por mayoría de votos fundándose en que: según lo

AUT

no puede pedirse reposición—Jur. Com., tom. 5, pág. 102, Ser. 1ª.

3. Auto—Que manda cumplir una transacción no aprobada es apelable—Jur. Civ., tom. 6, pág. 257, Ser. 1ª.

4. Auto—Recaído, no haciendo lugar á la revocatoria, es apelable en la parte que provea de conformidad á peticiones fundadas al contestar el traslado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 257, Ser. 1ª.

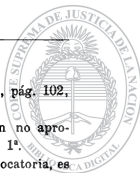
5. Auto—Que deniega la absolución de posiciones es apelable—Jur. Civ., tom. 6, pág. 301, Ser. 1ª.

dispuesto por el art. 94 del Cód. de Proc., no es procedente el recurso de reposición contra los autos que no hacen lugar á estas excepciones, pues de otro modo sería inconducente ó redundante en vista de lo establecido por el art. 226. Esta resolución es contraria á otra dictada anteriormente por esta misma Cámara como puede verse en el tomo I de esta Inst., verbo Interlocutorio, núm. 1488. La Cámara de lo Civil ha resuelto un caso de conformidad con la resolución transcrita, como puede verse en el tomo 1º de la Inst., verbo Reposición, núm. 2380.

3—Porque trae gravamen irreparable, circunstancia que hace procedente la apelación, según lo dispuesto por el art. 226 del Cód. de Proc.

4—Si bien es cierto que la apelación se interpone de un auto denegatorio de una apelación anteriormente deducida y que no procede solicitar apelación de la apelación denegada, también lo es, que cuando el auto no se limita á negar los recursos anteriormente deducidos, sino que se provee de conformidad á lo solicitado en el traslado conferido, en cuyo caso se dicta una nueva resolución, le es aplicable á esta parte del auto los demás recursos establecidos por las leyes.

5—El recurso de apelación procede de las resoluciones interlocutorias que causen gravamen irreparable,—art. 226 Cód. de Proc., y siendo de esta naturaleza el auto que deniega la absolución de las posiciones en razón de que en 1ª Instancia puede ejercitarse este medio probatorio por dos veces y sobre los mismos hechos, art. 137,—según así resulta de la limitación establecida por el art. 246, para el uso de este mismo derecho en 2ª instancia; sería clara por demás la injustificación de un auto denegatorio, como que la confesión ante el Superior solo puede recaer sobre hechos distintos de los articulados en las posiciones abaueltas en 1ª instancia, de donde se sigue que no hay enmienda posible al gravamen inerrido con denegación de las posiciones.



AUT

6. Auto—Que ordena el desalojo declarando rescindido el contrato, es apelable en cuanto á la rescisión—Jur. Civ., tom. 6, pág. 309, Ser. 1ª.

7. Auto—Que haciendo saber la devolución de un expediente, sirve también para la reapertura del término probatorio debe ser notificado personalmente ó por cédula—Jur. Civ., tom. 6, pág. 372, Ser. 1ª.

8. Auto—Que deniega diligencias de prueba en el juicio ejecutivo no es apelable—Jur. Civ., tom. 2, pág. 165, Ser. 2ª.

9. Auto—Judicial dictado aun sin intervención de las partes, interrumpe la prescripción—Jur. Com., tom. 5, pág. 176, Ser. 1ª.

10. Auto—Que deniega la formación de incidente para

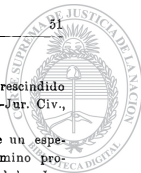
6—Véase núm. y nota 239 del tom. 1º de la Inst.

7—La suspensión del término probatorio solo cesa, cuando volviendo los autos al inferior las partes se hallasen habilitadas para producir la prueba, cuyo estado se ha denotado siempre, según práctica constante, por medio de la providencia, en la cual habiendo por devueltos los autos, se manda cumplir la resolución del Superior y que se haga saber á las partes, en cuyo caso surte esta providencia los mismos efectos que el auto de prueba y no hay razón para que deje de serle aplicable lo dispuesto, relativamente á notificaciones por el art. 33 del Cód. de Proc., desde que ambas providencias se hallan en análogas condiciones.

8—No está comprendido entre los autos declarados apelables por el art. 605 del Cód. de Proc.

9—En este caso el deudor no se encuentra dentro de los términos prescritos por la ley, para ampararse de la prescripción y dejar por ella eliminada su obligación. El sumario que anotamos es exacto, cuando después de instaurada la acción no se ha dejado transcurrir un tiempo sin proseguir el juicio, pues en caso contrario la demanda no notificada á la parte por desidia del actor no interrumpe la prescripción. Véase: arts. 1003 Cód. de Com. y 3980, Cód. Civ.

10—Es apelable porque se trata de un incidente sobre desglose de actuaciones que pueden complicar la marcha de la demanda principal, circunstancia que basta por sí sola para caracterizar el auto de apelable por el agravio de que es susceptible. Debe tenerse presente además que tal incidente debe sustanciarse por cuerda separada sin perjuicio de la prosecución de lo principal, art. 406, Cód. de Proc.



AUT

sustanciar la petición de embargo preventivo, es apelable—Jur. Com., tom. 5, pág. 343, Ser. 1ª.

11. Auto—Que deniega una diligencia de prueba, es apelable—Jur. Civ., tom. 1, pág. 22, Ser. 2ª.

12. Auto—Que resuelve una interlocutoria y no condena en las costas, es inapelable en esta parte—Jur. Civ., tom. 1, pág. 170, Ser. 2ª.

13. Auto—Que deniega una diligencia de prueba es apelable—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 22, Ser. 2ª.

14. Auto—Que resuelve una interlocutoria y no condena en las costas, es inapelable en esta parte—Jur. Civ., tom. 1, pág. 170, Ser. 2ª.

15. Auto—Que deniega el segundo traslado en las cuestiones de derecho, es apelable—Jur. Civ., tom. 8, pág. 145, Ser. 1ª.

Auto—Véase *Síndico*, núm. 1—*Término*, núm. 10—*Testar palabras*, núm. 1—*Prueba*, núms. 15 y 17—*Poseción á la esposa*, núm. 1—*Personería*, núm. 1—*Apercibimiento*, núm. 1—*Mensura*, núm. 3—*Interdicto de retener*, núm. 5—*Jactancia*, núm. 3.

11—Si el auto que la deniega fuese equivocado, este error no podría ser reparado en la sentencia, trae por consiguiente gravamen irreparable.

12—Se da como fundamento de esta resolución, que el auto en este caso no trae gravamen irreparable. Consideramos que esta resolución es solo correcta cuando se trata de una providencia *meramente* interlocutoria, mas no así cuando se dicta un auto interlocutorio con *carácter de definitivo*. En este caso el gravamen puede algunas veces ser irreparable, por ejemplo cuando el demandado opone excepciones dilatorias que son declaradas procedentes, si no se condenase en las costas al actor y este venciese después en lo principal ¿Cómo se repararía el gravamen causado en el incidente?

13—Trae gravamen irreparable pues el error no podría ser subsanado al dictar sentencia definitiva.

14—No trae gravamen irreparable. Véase nota 12.

15—Es un trámite que el art. 103 del Cód. de Proc. prescribe como esencial, en cuyo caso no puede menos que traer gravamen irreparable.



AUT

1. Auto aprobatorio—De una liquidación, en juicio ejecutivo, es inapelable—Jur. Civ., tom. 1, pág. 105, Ser. 2ª.

1a. Auto calificativo—De la quiebra, no es apelable—Jur. Com., tom. 5, pág. 54, Ser. 1ª.

Auto de prueba—Véase: *Incompetente*, núm. 1.

1b. Auto de quiebra—Su levantamiento solo importa devolver al fallido ó sus herederos los bienes que existen en poder del síndico ó depositario judicial, pero no los poseídos por terceros, contra los cuales deben entablar las acciones que la ley permite—Jur. Civ., tom. 2, pág. 149, Ser. 2ª.

2. Auto de quiebra—En su reposición solo son parte los acreedores que la hayan pedido—Jur. Com., tom. 6, pág. 335, Ser. 1ª.

Auto de quiebra—Véase: *Acreedores*, núm. 2.

Auto inapelable—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.

Autos—Véase: *Asesor de menores*, núm. 2—*Recurso de hecho*, núm. 1.

1c. Autor—De una publicación acusada, es el único que puede oponer la escepción de incompetencia del Tribunal, el editor está obligado á declarar en el sumario el nombre, sin entrar al juicio—Jur. Crim., tom. 6, pág. 311, Ser. 1ª.

1—El art. 505 del Cód. de Proc. solo declara apelables fuera de la sentencia de remate, los autos que espresamente se designan como tales, entre los cuales no está comprendido el que aprueba una liquidación. El art. 525 confirma el carácter de inapelabilidad del auto.

1a—El art. 1593 del Cód. de Com., en su párrafo tercero, es terminante y no admite interpretación diversa. Hablando del auto de calificación y de la remisión que debe hacer el Juez en caso de declarar la quiebra culpable ó fraudulenta dice: «Sin que se admita recurso alguno de tal providencia.» Esta resolución está de acuerdo con lo resuelto por esta misma Cámara cuando formaba parte del P. J. de la Provincia como puede verse en los fallos recopilados por el Dr. Ponco, tom. 1º, pág. 337.

1b—Es una consecuencia de lo dispuesto en el art. 725 del Cód. de Proc.

2—Art. 1552, Cód. de Com. análogo á los arts. 1030 y 1031 del Cód. de Com. Español.



AUT-AUX

Autor— Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 12.

Autoridad competente— Véase: *Depósito*, núm. 3.

1. Autorización—Al administrador, para gastar hasta una suma determinada, sin la previa conformidad del síndico, no puede en ningún caso justificar el gasto mensual de la expresada cantidad—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 361, Ser. 2ª.

1a. Auxiliador—Solo puede considerarse tal, el que favorece al autor después de consumada la infracción—Jur. Crim., tom. 5, pág. 103, Ser. 1ª.

2. Auxiliador—En tercer grado, para que pueda ser castigado con pena corporal debe justificarse que tuvo interés en ocultar el hecho—Jur. Crim., tom. 6, pág. 77, Ser. 1ª.

1b. Aval—Solo puede ser justificado por el contenido de la misma letra ó en documento separado—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 416, Ser. 2ª.

Avenimiento—Véase: *Jueces*, núm. 1.

1c. Aviso—En que se haga saber al público que tales documentos que se encuentran en poder de determinada persona, carecen de valor por haber sido robados á su legítimo dueño, no importa una calumnia al poseedor—Jur. Crim., tom. 5º, pág. 322, Ser. 1ª.

1d. Avisos—Los publicados en otros diarios que no sean

1—Estos gastos pueden ó no efectuarse y sería irregular no detallarlos, pues se trata de bienes en que tienen parte menores, respecto de los que la ley exige que las cuentas sean minuciosamente detalladas y hasta comprobadas.

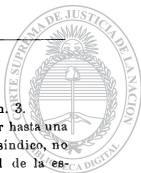
1a—Art. 61, Cód. Pen. de 1877. El Cód. vigente en su art. 41 los denomina encubridores.

2—Art. 54 del Cód. Penal.

1b—Art. 855, Cód. de Com.

1c—En este caso no se afirma que el poseedor actual sea el que cometió el hurto y para que existiese calumnia habría sido necesario una imputación directa del delito.

1d—En el caso que nos ocupa los martilleros se habían obligado á no cobrar sino el uno por ciento de comisión y el remate no se había verificado, en cuyo caso el punto está regido por el art. 1967, inc. 4, Cód. Civil.

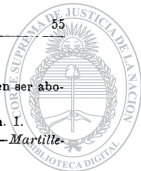


AVI

los designados al efecto por el Juzgado, no deben ser abonados—Jur. Civ., tom. 2, pág. 409, Ser. 2ª.

Avisos—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 1.

Avisos de remate—Véase: *Errores*, núm. 1—*Martillos*, núm. 3.





1a. Banco hipotecario—Si bien puede ejecutar particularmente á sus deudores, no está inhibido de hacerlo judicialmente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 391, Ser. 2ª.

Banco hipotecario—Véase *Errores*, núm. 1.

Banco hipotecario nacional—Véase: *Escribano*, núm. 1.

1b. Banco nacional—Debe usar papel sellado en los

1a—El establecimiento que obtiene un privilegio legal puede renunciarlo, siempre que la renuncia no sea contraria á las leyes de orden público—art. 19, Cód. Civ.,—como no lo es cuando el establecimiento opta por el juicio ejecutivo en vez de la vía estrajudicial que le acuerda su carta orgánica. El art. 28 de ésta dice: la omisión del pago de un trimestre ó semestre da derecho al Banco para exigir el abono de la deuda en su capital actual, con arreglo á la tabla de amortización; el art. 29 prescribe, que si pasados 75 días de vencido el trimestre, ó semestre en que estuviese dividida la anualidad, no se hubiere efectuado el pago, el Banco procederá forzosamente á la venta de los bienes hipotecados y que *éstos podrán ser vendidos extrajudicialmente sin forma de juicio por el Directorio en remate público, al mejor postor. Lo único que tiene carácter imperativo según la ley, es la venta forzosa, no la forma, que puede ser judicial ó estrajudicial. Debe tenerse presente que aquí se trata del Banco Hipotecario de la Provincia.*

1b—La ley de sellos de la Nación es de carácter general, obliga á toda persona que ocurra ante los Tribunales en demanda de sus derechos, salvo las excepciones espresamente contenidas en la misma, entre las que no está comprendido el Banco Nacional. El art. 25 de la ley de Noviembre de 1872 sobre establecimiento de este Banco, dispone, que éste y

BAN—BIE

espedientes que gestiona ante los Tribunales—Jur. Civ., tom. 9, pág. 58, Ser. 1ª.

Banco nacional—Véase: *Tribunales de la Capital*, núm. 1.

Bases—Véase: *Liquidación*, núm. 4.

Beneficiado—Véase: *Servicio*, núm. 1.

Bien hipotecado—Véase: *Comprador*, núm. 4.

1. Bienes—Adquiridos por posesión, en que el adquirente hace valer la que tuvieron sus antecesores á título sucesible y que él continuó, se consideran hereditarios y deben ser repartidos entre los herederos del que empezó á prescribir—Jur. Civ., tom. 2, pág. 123, Ser. 2ª.

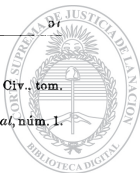
2. Bienes—Que guarnecen la finca arrendada, garanten el pago de los alquileres—Jur. Com., tom. 5, pág. 298, Ser. 1ª.

3. Bienes—Adquiridos por un acto ilícito, no forman parte de los gananciales y en consecuencia ni la esposa ni

sus sucursales están exentos de toda contribución ó impuesto sea Nacional ó Provincial: más esa disposición no es absoluta. La exención recae, sin duda á las adquisiciones especialmente relativos á los Bancos en calidad de tales y para sus operaciones y negocios. El art. 16 de la citada ley, corrobora esta doctrina, pues limita la escepción á los billetes del Banco y á los documentos que otorgue ó emita. En igual sentido ha sido resuelto el caso por la S. C. F.

2—Art. 3883, Cód. Civ.

3—No forman parte de los gananciales, porque cuando la ley dice que los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales, se refiere, sin duda á las adquisiciones legítimas: lo contrario sería inmoral y opuesto á la ley misma. Adquisición en la terminología jurídica, significa lo que logramos por medio de un título que trasfiere el dominio de la cosa adquirida—Véase E-riche, verb. adquisición—Ni la esposa ni los herederos pueden tener intervención en el juicio, porque la acción que la ley acuerda contra el que comete un acto ilícito, es personal como lo establecen el art. 1099 del Cód. Civ. y la ley 2, tít. 13, Part. 7. Si el cónyuge que comete un delito es el único responsable de él, es lógico que ninguna intervención puede tener, ni la esposa ni los herederos de ésta.





BIE

los herederos deben tener intervención en el juicio que sobre restitución de los mismos se siga contra el esposo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 111, Ser. 2ª.

Bienes—Véase: *Tasación*, núm. 1—*Reclamo de bienes*, núm. 1—*Auto de quiebra*, núm. 1—*Curador*, núm. 2—*Administrador*, núm. 4—*Condómino administrador*, núm. 1—*Separación de bienes*, núms. 7 y 9—*Embargo*, núm. 6.

Bienes comunes—Véase: *Separación de bienes*, núm. 1.

1a. Bienes embargados—Mientras no lo hayan el ejecutante no está obligado á continuar la ejecución—Jur. Com., tom. 6, pág. 415, Ser. 1ª.

Bienes especiales—Véase: *Obligación*, núm. 5.

Bienes gananciales—Véase: *Nulidad*, núm. 30. *Insania*, núm. 1.

Bienes inhibidos—Véase: *Inhibición*, núm. 5.

Bienes matrimoniales—Véase: *Embargo preventivo*, número, 4.

1b. Bienes muebles—Si bien en éstos la posesión vale título, esta regla no puede aplicarse á los objetos robados ó perdidos cuya posesión debe justificar el poseedor—Jur. Com., tom. 6, pág. 89, Ser. 1ª.

1c. Bienes raices - De menores; la ley 60, tit. 18, Part. 3ª, que ordenaba que la venta se hiciera en almoneda, no era aplicable cuando el bien vendido pertenecía en condominio á

1a—El juicio ejecutivo tiene por objeto que el acreedor se pague inmediatamente—art. 508, Cód. de Proc.—No habiendo bienes embargados no puede hacerse pago el acreedor, y es por esto que el art. 485 dispone que «hecho el embargo se citará de remate al deudor», circunstancia que comprueba la exactitud del sumario.

1b—Art. 2412, Cód. Civ.

1c—Esta ley al establecer la manera «en que debe ser hecha la carta, cuando el guardador del huérfano vende algunas cosas que sean raiz de las que del tiene en guarda» dice «aun entonces deve ser con otorgamiento del Juez del lugar, andando la cosa públicamente en almoneda

BIE-BIL

menores y mayores de edad—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 141, Ser. 2ª

Bienes raíces—Véase: *Reivindicación*, núms. 1 y 2—*Venta*, núm. 4—*Concurso comercial*, núm. 1—*Jueces de Comercio*, núm. 2.

1a. Bigamia—Para su castigo no puede tenerse en cuenta la buena ó mala conducta de la primera esposa, ni el mutuo consentimiento—Jur. Crim., tom. 5, pág. 348, Ser. 1ª.

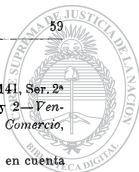
Billete—Véase: *Cláusula*, núm. 1.

1b. Billetes—De una rifa debidamente autorizada, los adquirentes se convierten en contratantes, bajo las reglas y estipulaciones en ellos contenidas—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 31, Ser. 2ª.

treinta días». Mas esta enunciación se circunscribe al caso espresamente regido, *venta de bienes raíces del huérfano, de los que el guardador tiene en guarda*—esto es, de bienes adjudicados á menores, y que en este concepto, como de su propiedad exclusiva estuvieran administradas por sus tutores ó curadores. El contesto todo de la ley está revelando que esta es su inteligencia y así lo declaró la S. C. P. como puede verse en el tom. 4, pág. 111, Ser. 2ª.

1a—Aquí no se trata de castigar un delito privado como es el adulterio: por consiguiente, la buena ó mala conducta de la esposa no puede tenerse en cuenta, se trata de la violación de una ley de orden público, que al organizar la familia de acuerdo con lo que prescribe la razón y con lo que requieren los intereses sociales, prohíbe la bigamia. En nada influye tampoco el mutuo consentimiento, porque el matrimonio no es un contrato civil, cuyas condiciones naturales pueden modificarse por los interesados, ni es una sociedad que se disuelva por mutuo consentimiento.

1b—El juego de rifa es un contrato aleatorio en que son partes contratantes, de un lado el dueño de la cosa que se rifa y que es el que propone las condiciones bajo las cuales consiente en desprenderse de su propiedad por medio del sorteo y del otro lado los que pagan la cuota fijada por aquel como precio de los números entre los cuales ha de hacerse el sorteo para adjudicar el premio ofrecido al número vencedor. Esta clase de contratos, cuando se emiten billetes que en sí llevan la oferta de la rifa y las condiciones bajo las cuales se ha de jugar, queda perfecto por el solo hecho de la adquisición de los billetes, hecho que es la prueba mas acabada de que el adquirente acepta el juego en las condiciones en que se lo propone el dueño del objeto rifado, porque de lo contrario dejaría pasar el billete sin tomarlo.



BIL—BOL

1a. Billetes de Banco—El que los fabrique debe justificar plenamente que el objeto era inocente; la ley supone la intención criminal y como consecuencia debe ser penada su fabricación como falsificación—Jur. Crim., tom. 5, pág. 212, Ser. 1ª.

Billetes de Banco—Véase: *Billetes de curso legal*, núm. 1.

Billetes de curso legal—Véase: *Moneda nacional oro sellado*, núm. 1—*Oro sellado*, núms. 1, 2 y 3.

Billetes falsos—Véase: *Tentativa próxima*, núm. 1.

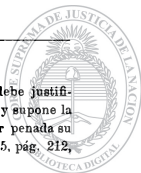
1b. Boleto—De subasta pública, para que adquiriera la fuerza de escritura que le reconoce la ley, es necesario que el rematador proceda por orden de Juez competente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 424, Ser. 2ª.

2. Boleto—Firmado en el acto del remate, no basta para exigir el cobro del precio estipulado, solo da acción para exigir el cumplimiento del contrato de venta, elevándolo á escritura pública—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141.

1a—La criminalidad en este delito, como en todos los demás, se presume, á menos que resulte lo contrario de las circunstancias particulares de la causa,—art. 13 Cód. Pen. de 1877 igual al 6º del Cód. vigente, es por esto que el art. 434, Cód. Pen. de 1877 igual al 285 del vigente—vé el delito de falsificación de billetes de Banco en la simple fabricación. Esta fabricación está prohibida, y además penada; luego el que fabrique billetes está obligado á probar de manera que no deje lugar á la más mínima duda de que su fin era inocente.

1b—La subasta según el diccionario de la lengua—Véase á Salvá—y de Legislación—Véase á Escribano—supone mandato é intervención de justicia. Sin estas condiciones la subasta pública, de que habla el art. 1184 del Cód. Civ. y que hace innecesaria la escritura pública, que de otro modo es requerida bajo pena de nulidad en la trasmisión de bienes inmuebles, no sería tal, ni llenaría los fines de la ley, que son alejar dudas y dar seguridad á la propiedad de los referidos bienes.

2—Siempre que el remate verificado no fuese en pública subasta, porque en este caso la existencia del contrato de compraventa de un inmueble no depende de la elevación del acto á escritura pública—art. 1184, inc. 1º, Cód. Civ.



BOL—BUQ

Boleto—Véase: *Arras*, núm. 1—*Cláusula*, núm. 2—*Compra-venta*, núm. 2—*Depósito*, núm. 4.

1a. Boleto de venta—Solo puede considerarse obligación de hacer—Jur. Civ., tom. 1, pág. 424, Ser. 2ª.

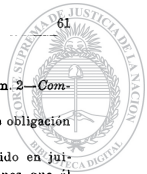
1b. Boleto de remate—Debidamente reconocido en juicio, es un instrumento público y las estipulaciones que él contenga no pueden ser destruidas por medio de prueba testimonial—Jur. Civ., tom. 2, pág. 218, Ser. 2ª.

1c. Buques—Tratándose de éstos, la posesión no hace presumir la propiedad—Jur. Com., tom. 6, pág. 153, Ser. 1ª.

1a—Art. 1185, Cód. Civ.

1b—Son instrumentos públicos porque así los establece el art. 1184 del Cód. Civ. No pueden ser destruidos por prueba testimonial, porque ningún art. del Cód. Civ. autoriza la admisión de esta prueba para oponerse eficazmente al contenido de un instrumento público ó de un documento privado reconocido en juicio: todo lo contrario, existe la prohibición terminante de valerse de esa clase de prueba para el caso, que podría creerse mas favorable á su admisión, que es cuando se ha dado la firma en blanco y el signatario alega que se ha sido llenado con declaraciones ú obligaciones que no ha tenido intención de hacer ó de contraer—art. 1017, Cód. Civ.—Y si en este caso no se admite la prueba de testigos con cuanta mayor razón no debe ella ser rechazada tratándose de un documento que ha salido de manos del signatario con las declaraciones y cláusulas que contiene y sobre el cual no puede alegar que no ha tenido intención de aceptar. La ley ha tenido razones poderosas al proscribir esta clase de prueba para contrarrestar la fuerza de un instrumento, y es que no puede dejarse la fe pública de las obligaciones escritas á merced de contingencias y veleidades de una prueba tan insegura y peligrosa como la de testigos. Por eso es que el Cód. Civ., cuando establece en su art. 996, que «el contenido de un instrumento público puede ser modificado ó quedar sin efecto alguno por un contra-instrumento público ó privado que los interesados otorguen», no menciona para nada la prueba de testigos, como medio para llegar á igual resultado, consecuente en esto con el principio sentado en el art. 1017: lo propio puede decirse de un documento privado reconocido en juicio en cuyo caso queda equiparado al instrumento público. Véase: verb. *Simulación*, núm. 7 y nota. *Prueba escrita*, núm. 1: *Inst. verb. Contrato Escrito*, núm. 572 y nota.

1c—Art. 1019, Cód. de Com.



BUQ

Buena fe—Véase: *Propietario*, núm. 2—*Posesión*, núm. 7—*Prescripción*, núm. 17.

2. Buques—Para justificar su propiedad, aunque su valor esceda de la suma de doscientos pesos, no se requiere principio de prueba por escrito, siempre que se justifiquen las prestaciones hechas para su compra y construcción—Jur. Com., tom. 6, pág. 153, Ser. 1ª.

2—Cuando se trata de hechos jurídicos y de locaciones de servicios para los cuales no es necesario de un principio de prueba escrita, por existir prestaciones de hecho no negados—art. 1191, Cód. Civ.—Véase: Inst., tom. 1, verb. Prueba, núm. 2216 y nota.





1. Calificación—De habilitado, á un dependiente implica reconocerle el carácter de socio—Jur. Com., tom. 5, pág. 302, Ser. 1ª.

2. Calificación—De casual dada á la quiebra, no obsta para que los acreedores que se conceptúen defraudados puedan deducir ante Juez competente sus acciones—Jur. Crim., tom. 5, pág. 440, Ser. 1ª.

3. Calificación—Para la del delito, la prueba de la exis-

2—Cuando se trata de un hecho que constituye delito, la acción criminal puede preceder á la acción civil, y aun intentarse aquella y no ésta—arts. 1101 y 1102 Cód. Civ.—Tal es la regla general que reconoce como escepción el caso en que la acción criminal dependa de cuestiones prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al juicio civil, entre esas cuestiones se cuentan las que versan sobre la calificación de la quiebra, inc. 2º, art. 1104, Cód. Civ., esta disposición se refiere á la calificación de la quiebra que puede ser fraudulenta ó culpable, en cuyo caso constituye un delito calificado por el art. 323 del Cod. Pen. Según este artículo, un fallido no puede ser acusado de quebrado fraudulento criminalmente sin antes preceder la sentencia de juicio civil, única autoridad á quien compete calificar la quiebra como lo enseña el art. 1593, Cód. de Com., siendo á mérito de esa calificación que se pasa testimonio del proceso al Juez del Crimen. Mas, como el Cap. 3º del Cod. Pen.—art. 198 á 201 del Cód. vig.—legisla sobre los quebrados y otros deudores punibles, se deduce, que independientemente del juicio contra quebrados fraudulentos, puede deducirse acción criminal contra deudores de aquellas condiciones.

3—Así por ejemplo, el Cód. Penal exige, en su art. 257, para la existencia del estupro que la víctima sea menor de 20 años. Esta circunstancia es condición constituyente del delito, la ley exige la condición de tener la mujer esa edad, condición que debe comprobar la acusación para dejar constatado el cuerpo del delito. Siendo además condición de este delito el empiezo de la seducción, aeebe esta circunstancia quedar igualmente constatada para que el estupro exista. Seducción es equivalente de engaño, según el art. 36 del Cód. Español. Pacheco comentando esta disposición dice: que no puede constituir la cualquiera promesa «sin dejar abierta una ancha puerta á las malas artes de muchas mujeres sobradamente avisadas». Aun en los casos en que estas condiciones constitutiva

CAL

tencia de las condiciones que el Código exige, corresponde al acusador si la causa no es de oficio.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 155, Ser. 1ª.

4. Calificación—La quiebra solo es punible criminalmente, cuando los antecedentes que hayan determinado su calificación de fraudulenta ó culpable ante los Tribunales de Comercio, se encuentran incluidos entre las acciones que el Cód. Penal califica y castiga como delito.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 492, Ser. 1ª.

Calificación—Véase: *Quiebra*, núm. 1.

1. Calígrafos—Inscripciones en la matrícula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 471, Ser. 2ª.

1. Calumnia—Para que exista ese delito basta que la imputación resulte falsa, la ley supone en el reo la voluntad criminal—Jur. Crim., tom. 5, pág. 159, Ser. 1ª.

2. Calumnia—Deducida esa acción, los tribunales no pueden resolver si existía injuria, aun cuando el actor, con posterioridad á la demanda haya pretendido reunir ambas acciones—Jur. Crim., tom. 5, pág. 331, Ser. 1ª.

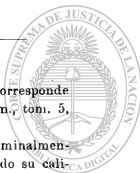
3. Calumnia—Para que exista no basta que el escrito sea de los delitos sean alegadas recién en 2ª Instancia, deben sin embargo ser tomadas en consideración.

4—El caracter de criminalidad que el Cód. de Com. asigna á la quiebra es de reciente creación en la legislación mercantil, que nuestros legisladores lo han tomado del Cód. Español, francés y belga. Como toda ley penal, debe ser interpretada restrictivamente y circunscribirse á los casos espresamente determinados por ella. El Código Penal quizá más completo que se conoce, el italiano, no ha legislado sobre bancarrota como lo dice el Dr. Rivarola en su notable Exposición y Crítica del Cód. Penal Argentino, tomo 2, pág. 320, núm. 796. Para darse una idea correcta y acabada del alcance que el sumario que se comenta tiene puede consultarse el estudio que hace el mencionado autor en la pag. 327 del tomo citado.

1—Art. 13, Cód. Pen. ant. que es el 6 del vig.

2—Instaurada y sustanciada la causa con motivo tan solo de la acción de calumnia á ella solo deben concretarse las resoluciones judiciales.

3—Art. 310, Cód. Pen., ant. igual al 177 del Cód. vigente.



GAL—CAM

injurioso en alto grado, se requiere que los hechos imputados sean acusables de oficio por el Ministerio Fiscal—Jur. Crim., tom. 5, pág. 331, Ser. 1ª.

4. Calumnia.—Cuando el hecho imputado no es acusable por el Ministerio Público, esta acción debe ser desechada—Jur. Crim., tom. 5, pág. 517, Ser. 1ª.

5. Calumnia.—El aviso en que se haga saber al público que tales documentos que se encuentran en poder de determinada persona, carecen de valor por haber sido robados á su legítimo dueño, no importa una calumnia al poseedor.—Jur. Crim. tom. 5, pág. 322, Ser. 1ª.

Calumnia.—Véase: *Intención criminal*, núms. 1 y 2. *Aviso* núm. 1.

1a. Cámara.—No es competente para decidir las contiendas de competencia que se susciten entre jueces de primera instancia de distinta jurisdicción—Jur. Civ., tom. 2, págs. 48 y 257, Ser. 2ª.

2. Cámara.—No pueden resolver cuestiones abstractas que

4—Véase not anaterior.

5.—La ley penal exige para que haya calumnia que se impute un delito directamente, lo que en este caso no existe, pues como lo dice el Dr. Rivarola en su obra de Derecho Criminal, tom. 2, pág. 258, núm. 722, para que haya calumnia es necesario «afirmar de una manera precisa, concreta y determinada, que una persona es autora de un hecho, mientras la frase pueda ser simplemente alusiva ó dubitativa, no habrá imputación. Se tratará de una injuria ó de una calumnia encubierta á la que corresponderá la aplicación del art. 183.»

1a.—Esta cuestión fué resuelta cuando aun no se había dictado la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital de 1886, 12 de Noviembre, pues ésta ha establecido lo contrario en su art. 101 que dice: «Las contiendas de competencia que se susciten entre jueces de diversa jurisdicción de la Capital, serán resueltas en última instancia por la Cámara de Apelaciones de quien dependa el Juez que primero hubiere conocido.»

2.—Este sumario no expresa con exactitud la mente de la resolución. La Cámara se limitó á decir que ella no debe resolver cuestiones en abstracto, ni aquellas que se presentan en una forma general que no responden á un caso práctico. No debe hacer declaraciones generales de



CAM

importarían un prejuzgamiento—Jur. Civ., tom. 2, pág. 596 Ser. 2ª.

3. Cámara—Solo puede conocer y resolver los expedientes venidos ante ella en virtud de los recursos y en los casos que la ley determina—Jur. Civ., tom. 2, págs. 48 y 257, Ser. 2ª.

4. Cámara—Solo puede conocer y resolver en los asuntos contencioso-administrativos, por la vía y forma que la ley establece—Jur. Civ., tom. 2, pág. 94, Ser. 2ª.

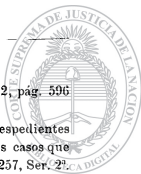
5. Cámara—Carece de jurisdicción para dictar medidas provisionales ó conservatorias en aquellos incidentes suscitados ante ella, mientras no hayan sido resueltos en primera instancia—Jur. Civ., tom., 6, pág. 366, Ser. 1ª.

6. Cámara—Carece de jurisdicción para resolver las competencias oficiales suscitadas entre un Juez de lo Civil y otro de Comercio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 387, Ser. 1ª.

derecho, pues ello importaría desnaturalizar el rol que debe desempeñar el Poder Judicial en la órbita de sus facultades: solo al Poder Legislativo compete la facultad de establecer la ley en su forma abstracta y general, y si el Poder Judicial se abroga esta facultad sale de su esfera de acción. El Poder Legislativo dicta sus leyes generales y en una forma abstracta: presentando un caso práctico el Poder Judicial aplica esa ley dictando una resolución que nace y desaparece con ese caso. De modo que si el Poder Judicial no hace declaraciones generales de derecho, no es porque ello importe un prejuzgamiento, como lo dice equivocadamente el sumario, sino porque no tiene atribuciones para ello. Véase: Inst. tom. 1º, verb. Tribunales, núm. 2656.

5.—La Cámara como Tribunal de Apelación debe concretarse á la sustanciación y resolución de los recursos que se deducen ante ella de las resoluciones de los Jueces de primera instancia—art. 61 de la ley Org.

6.—Para resolver las cuestiones de competencia en estos casos, el procedimiento á seguir era el siguiente: cada parte declina de jurisdicción, ante uno y otro Juez, con apelación á la Cámara respectiva, y si ambas Cámaras se declarasen competentes, sería entonces el caso de ocurrir á la Suprema Corte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley Orgánica, anterior. La Ley Org. de 1896, ha establecido que en estos casos las competencias deben resolverse por ambas Cámaras reunidas formando un solo Tribunal.



CAM

7. Cámara.—Carece de jurisdicción para conocer y resolver los recursos traídos ante ella en virtud de resolución Municipal de carácter meramente administrativo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 482, Ser. 1ª.

8. Cámara.—Solo puede fallar el punto apelado, juzgando los motivos que alegaba la parte opositora, los no alegados no pueden fundar la resolución del Tribunal—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407, Ser. 2ª.

9. Cámara.—No puede tomar en consideración la opinión de herederos que se hubiesen manifestado conformes en primera instancia aún cuando asuman el carácter de apelantes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 1ª.

9. Cámara.—Véase: *Apelación*, núm. 4—*Multas*, núm. 1.

1. Cámara Civil.—No puede resolver los puntos que las partes susciten ante ella y no hayan sido materia de la litis-contestación—Jur. Civ., tom. 8, pág. 199, Ser. 1ª.

2. Cámara Civil.—Es competente para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Municipalidad—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 1ª.

3. Cámara Civil.—Cuando ésta desconoce la competencia

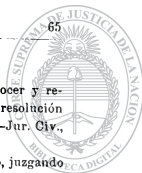
8—Este sumario no tiene por base el acuerdo de la Cámara; está consignado porque así se le habrá ocurrido al compilador de los fallos. Lo que la Cámara ha resuelto en el caso estudiado es: que el Tribunal de apelación no puede fallar más allá del punto discutido y resuelto en primera instancia como lo estatuye el art. 267 del Cód. de Proc.

9—Manifestada la conformidad queda consentida esa parte del litigio y si apelan no puede el recurso tomarse en consideración por la Cámara porque la cuestión ha pasado en autoridad de cosa juzgada sobre la cual no se puede volver. Por otra parte, la Cámara no resuelve sino cuestiones traídas en apelación en el modo y en la forma que las leyes determinan.

1—Art. 267, Cód. de Proc.

2—Art. 80, inc. 3. Ley Org. de los Trib. de la Cap., de 1886. Véase: Verb. Contratos, núm. 1.

3—Este era el procedimiento á seguirse antes de la vigencia de la ley Org. de 1886: según ésta en casos semejantes ambas Cámaras formarán



CAM—CAN

de otra Cámara Civil formada por recusación de los titulares se produce la contienda de competencia prevista por la ley entre dos Cámaras de Apelaciones y los autos deben elevarse á la Suprema Corte Nacional para su resolución—Jur. Com., tom. 6, pág. 548, Ser. 1^a.

Cámara Civil—Véase: *Contencioso-Administrativo*, núm. 1 y 2—*Sentencias*, núm. 2—*Competencia*, núm. 5.

1a. Cámara Comercial—Carece de jurisdicción para derimir las contiendas de competencia que se susciten entre un Juez de Comercio y uno de lo Civil—Jur. Civ., tom. 6, pág. 531, Ser. 1^a.

Cámara de Apelaciones—Su creación, competencia y atribuciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 14, Ser. 1^a.

1. Cámaras de Paz—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 6, Ser. 1^a.

Cantidad—Véase *Daños y perjuicios*, núm. 2.

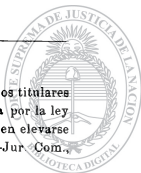
1. Cantidad indeterminada—No puede fundar un embargo—Jur. Com., tom. 6, pág. 399, Ser. 1^a.

Cantidad líquida—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 24 y 25.

Cantidad ó valor del pleito—Véase: *Competencia*, número. 1.

una sola y en caso de empate se nombrará un Juez de primera instancia quien lo decidirá con su voto. Art. 101, ley citada.

1a—Este sumario no es exacto hoy después de dictada en 1886 la Ley Org. de los Trib. de la Cap., pues ésta establece en su art. 101 que en caso de producirse contienda de competencia entre ambas Cámaras, el Presidente de la Sala en lo Civil, las reunirá en Tribunal y la decidirán á mayoría de votos etc. Las que se susciten entre jueces de diversa jurisdicción de la Capital, como en el caso del sumario, serán resueltas en última instancia por la Cámara de Apelaciones de quien dependa el Juez que primero hubiese conocido. De modo que si un Juez de Comercio, conoce primero de un juicio, producida la contienda, es la sala de lo comercial la que debe resolverla porque este es el Tribunal Superior de quien depende aquel.



CAP

1. Capellanía.—Siempre que por la escritura de fundación tenga una carga fija, sin designación de capital, el patrono puede redimir la depositando una cantidad cuyo interés baste para el cumplimiento de la carga impuesta.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 197, Ser. 1ª.

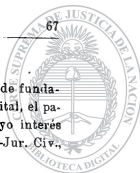
Capellanía.—Véase: *Frutos*, núm. 1.

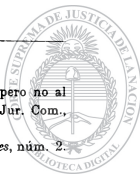
Capellanías.—Véase: *Censos capellánicos*, núm. 1.

1a. Capital.—Cuando este se aumente, solo debe pagarse

1.—La ley de 10 de Junio de 1858 tuvo por objeto movilizar los bienes raíces gravados con censos perpétuos, capellánicos y memorias pías, autorizando á sus propietarios á redimir dichas cargas en la forma establecida en los arts. 1º y 2º. La redención debe hacerse respetándose en lo posible la voluntad del fundador y cumpliéndose las cargas piadosas respectivas.—Esteves Saguf, Proc. Judic., núms. 1121, 1122 y 1123.—Lo esencial es asegurar el cumplimiento de las cargas, según intención del constituyente.—Véase, el Judicial, núm. 29.—No es dudoso que se llena cumplidamente la voluntad del instituyente depositando una cantidad bastante para sufragar con sus réditos las cargas impuestas, se beneficia á la Iglesia constituyendo el depósito en un Banco de Estado que inspira plena seguridad. Este procedimiento viene observándose desde tiempo atrás. En el tomo 2, pág. 35 de la Revista de Leg. y Jur., se registra un caso en que el fundador consignó la cláusula de que «por pretesto ni motivo alguno se ha de poder cambiar, vender, ni de otro modo enagenar, etc.» Sin embargo, el Juez de la causa después de pesar los motivos que impulsaban á la parte á pedir la venta, resolvió hacer lugar á ella mandando *se depositase tan solo la cantidad bastante á sufragar con sus réditos las cargas de la capellanía*. Se citan dos casos mas que fueron resueltos en igual sentido. Si la forma de redención no se opone á los deseos del fundador, siempre que se llenen y aseguren las cargas impuestas por él, ella consulta al mismo tiempo la tendencia bien marcada de desvincular los bienes raíces, lo que viene persiguiéndose por nuestra legislación desde 1813. Esta cuestión fué resuelta por la Cámara por unanimidad de votos revocando una sentencia de primera instancia y en contra de la opinión del Fiscal Eclesiástico y del Fiscal de la Cámara, quienes decían que «la cuestión, si cuestión puede llamarse, no admite discusión. Basta plantearla para que quede resuelta». Sin embargo la Cámara opinó de una manera contraria y resolvió en contra de estas opiniones. Puede verse: Inst. tom. 1, verb. Capellanía, núm. 319.

1a.—Es equitativo que para fijar el importe del impuesto de papel sellado se tome por base tan solo el aumento del capital, desde que el capital pri-





CAP — CAS

el sello con relación á la cantidad aumentada pero no al total que ya pagó en su primera inscripción — Jur. Com., tom. 6, pág. 307, Ser. 1^a.

Capital—Véase: *Alimentario*, núm. 1—*Intereses*, núm. 2.

Capitalización—Véase: *Intereses*, núm. 5.

Cargo—Véase: *Secretarios*, núm. 1.

Carta—Véase: *Declaraciones*, núm. 2—*Declaraciones por cartas*, núms. 1 y 3.

Carta-orden—Véase: *Factor*, núm. 1.

1. Cartas misivas—Dirigidas á terceros especialmente dedicadas á un negocio y reconocidas voluntariamente por el que las suscribe, consintiendo su agregación forman prueba de la obligación que en ellas se confiesa—Jur. Civ., tom. 6, pág. 79, Ser. 1^a.

Cartas misivas—Véase: *Prescripción*, núm. 4.

Casa—Véase: *Clandestinamente*, núm. 1.

Casa de comercio—Véase: *Posesión de una casa de comercio*, núm. 1.

Casa de ejercicios—Véase: *Recurso de fuerza*, núm. 4.

Casamiento—Véase: *Colocación*, núm. 1.

Caso fortuito—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

mitivo pagó oportunamente el impuesto. Sería interpretar la ley de una manera forzada si se pretendiera que todo aumento de capital de una sociedad deba pagar el impuesto por la totalidad. Toda obligación debe interpretarse en caso de duda de la manera mas favorable al deudor; así lo enseña la equidad.

1—Es verdad que según disposición del art. 1036 del Cód. Civil, las cartas misivas dirigidas á un tercero extraño al juicio, no son admitidas para su reconocimiento aunque mencionen alguna obligación: pero también es verdad que solo se trata aquí de apreciar el mérito jurídico del reconocimiento que voluntariamente y sin la menor oposición se ha hecho por una de las partes cuando al efecto se le ha presentado; caso completamente diferente del previsto por el art. recordado y respecto del cual no rige esta disposición, ni hay precepto legal alguno que se oponga, á que una prueba de esta naturaleza y producida en estas condiciones, sea tomada en consideración.

CAU—CEN

Caución juratoria—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 15

—*Arraigo*, núm. 1.

Causa posterior—Véase: *Lesión corporal*, núm. 719.

1. Caudal—Del alimentario, cuando no ha sido justificado, el Juez puede fijar la suma en que él particularmente haya manifestado conformidad—Jur. Civ., tom. 2, pág. 400, Ser. 2ª.

Caudal—Véase: *Alimentos*, núm. 18.

Caudal hereditario—Véase: *Deudas*, núm. 1.

1a. Cedente—Tiene derecho al remanente de los bienes cedidos siempre que los acreedores hayan sido pagados ó que por inacción de ellos lleguen á ser discutibles sus créditos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 536, Ser. 1ª.

Cedente—Véase: *Cesión de Derechos*, núm. 1.

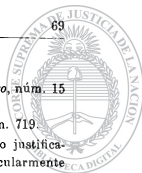
Cédula—Véase *Auto*, núm. 6—*Apercibimiento*, núm. 1.

1b. Censo—Los capitales impuestos á censo, cualquier

1—La comprobación del caudal del alimentario exigida por el art. 602 del Cód. de Proc., tiene por fin habilitar al Juez de la causa para fijar los alimentos que deben prestarse, los que deben establecerse siempre en proporción al patrimonio que posee á fin de no hacer la carga demasiado pesada. Este propósito de la ley queda llenado con la manifestación que haga el obligado estableciendo espontáneamente el *quantum* siempre que el que debe recibirlos no se manifieste disconforme.

1a—La cesión de bienes hecha judicialmente no confiere á los acreedores ni la propiedad ni la posesión de los bienes del deudor, tan solo confiere la facultad de hacerlos vender y percibir sus frutos hasta el día de la venta y hasta la concurrencia de su crédito. El deudor puede reclamar los bienes cedidos siempre que no hubiesen sido vendidos aún, protestando pagar á sus acreedores. Véase: Escribche, verb. *Cesión de bienes*; Carvantes, Proc. Judiciales, tom. 3, pág. 147; Acevedo, proyecto de Cod. Civ., pág. 347; Esteves Saguf, Proc. Judiciales, núm. 1015; Ley 2, tít. 15, Part. 6ª.

1b—Este principio se funda en la ley de 30 de Abril de 1828, la que en su art. 12 dice: «los capitales á censo, los destinados á objeto piadoso ó del servicio público, y los dados á puro mútuo sin interés alguno, se pagan en metálico, ó el equivalente á su valor real, según la especie en que se haya recibido». El censo que motivó esta resolución fué constituido



CEN—CER

que sea su objeto, civil ó religioso, solo pueden redimirse depositando íntegro el capital en la misma especie con que fué instituido, ó su equivalente en moneda de curso legal—Jur. Civ., tom. 9, pág. 344, Ser. 1^a.

1a. Censos capellánicos—Aunque fundaciones piadosas, no se encuentran comprendidos para su redención en la Ley Provincial de 1858—Jur. Civ., tom. 9, pág. 344, Ser. 1^a.

1b. Certificado—De un Escribano espedido sobre actos personales, no forma prueba, ni aun como simple declaración—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 1^a.

2. Certificado—De la oficina de hipotecas sobre libertad

á mediados del siglo pasado, por consiguiente el pago de su capital se halla regido por la resolución traserita. La ley de 9 de Julio de 1858, no puede oponerse al pago del censo en la forma espresada, pues esta ley no ha derogado la ley del año 28, pues ella solo habla del capital metálico impuesto sobre bienes raíces con el carácter de capellanía ó de fundación piadosa, bajo cuya denominación no es posible confundir los censos. Los censos difieren de las capellanías bajo mas de un concepto. En las capellanías hay vinculaciones de bienes, ellas se proponen fines de conciencia ó de bienestar de personas ó familias; deben cumplirse cargas piadosas y en algunos casos los bienes dejados deben servir para el ordenamiento de alguna ó algunas personas: nada de esto tiene lugar en los censos en los cuales se ve un contrato por el cual uno tiene el derecho de percibir y otros obligación de pagar un canon ó pensión anual por la concesión que aquél hace á éste del dominio útil ó útil y directo de uno ó varios predios. No es pues aplicable al caso presente la ley de 1858, porque ella es una escepción establecida á la regla general, debiendo en consecuencia interpretarse restrictivamente. Esta resolución fué dictada en este sentido por mayoría de votos, habiéndose aducido en contra razones bien atendibles y poderosas.

1a.—Véase: Verb. *Censo*, núm. 1.

1b.—Los únicos casos en que un Escribano pueda espedir certificados que hagan fe en juicio, son: cuando los hechos á que se refieren constan en documento en que haya obrado como oficial público, y cuando constan en autos que haya tenido á la vista ó de que se le haya ordenado certificar. Fuera de estos casos los Escribanos solo pueden declarar en la forma que prescribe la ley para la validez de las declaraciones de los testigos.

2.—El embargo de una propiedad traba su enagenación en el sentido de que no puede efectuarse con prescindencia del crédito que lo ocasiona



CER

del inmueble es la única garantía que la ley exige, para la transmisión de inmuebles y esta solo puede ser anulada, si aquel resultase incierto, justificándose la mala fe del comprador—Jur. Civ., tom. 3, pág. 191, Ser. 2^a.

3. Certificado—De corredor, sin la firma de los interesados, no constituye prueba de la existencia de los contratos comerciales—Jur. Com., tom. 6, pág. 248, Ser. 1^a.

1. Certificado médico—Las insinuaciones vagas acerca de

pero solo en tanto que el comprador conozca su existencia y haya hecho por conocerla lo que por derecho se exige, lo que se obtiene recabando un informe de la oficina de embargo hipotecas é inhibiciones: si ese informe es falso, equivocado ó erróneo ninguna culpa puede imputarse al comprador que adquiere la propiedad en virtud de ese certificado, mientras no se le prueba que tenía conocimiento de ese error ó falsedad. No puede dársele al embargo el alcance de un derecho real, pues estos han sido enumerados por el legislador taxativamente, lo que hace que solo puedan existir los enumerados por la ley entre los cuales no se encuentra el embargo. Cuando una persona compra una cosa previo el certificado de libertad del inmueble y sin que se demuestre su mala fe, en este caso el inmueble se adquiere sin el embargo y libre de él. Quedan á salvo á los interesados las acciones que les corresponden contra los culpables.

3—El art. 979 del Cód. Civ., dá á los certificados el carácter de instrumentos públicos en los casos en que así lo determine el Cód. de Com., pero este Código no especifica los casos; y si se tiene presente lo que dispone el art. 1187, tendrá que reconocerse que su disposición se armoniza con estas ideas, pues presume una póliza de fletamento con carácter de instrumento público por la intervención de corredor, presuponiendo al mismo tiempo que esa póliza ha sido firmada por las partes. Debe tenerse presente que la teoría contraria nos llevaría á extremos lamentables, pues colocaría el bienestar del comercio á la simple atestación de un corredor, efecto que no lo produce ni la intervención del Escribano en quien la ley deposita la fe pública, lo que sería al mismo tiempo absurdo. Igual conclusión se deduce de los principios sentados por leyes análogas como lo son los arts. 988 y 1012 del Cód. Civ., que exigen para los instrumentos públicos las firmas de los interesados.

1—Cuando se trata de heridas causadas con una sola clase de armas. En el caso *sub judice* el informe médico suponía que las heridas fuesen causadas con diversos instrumentos, el uno mas delgado y de un solo filo y el otro mas ancho y de dos filos. Si se tratase de heridas completamente diversas de carácter como sucede en las de bala y de puñal, este indicio



CER—CES

que las diversas heridas no fueron causadas por una sola arma, no constituyen presunción de complicidad—Jur. Crim., tom. 5, pág. 578, Ser. 1ª.

1a. **Certificados**—Espedidos por las oficinas públicas, solo son título ejecutivo, cuando su expedición y contenido no contravienen la ley en que se funda—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 1ª.

1b. **Cesión**—De un crédito en pago de deuda no vencida, debe ser declarada nula si hubiese perjudicado á terceros acreedores del cedente—Jur. Com., tom. 5, pág. 222, Ser. 1ª.

2. **Cesión**—De bienes, hecha por la viuda sin iniciar la testamentaria y practicar los inventarios y avalúos es nula y de ningún valor para los herederos menores—Jur. Civ., tom. 7, pág. 536, Ser. 1ª.

sería fuerte, pero no sucede lo propio tratándose de heridas causadas todas con puñal ó cuchillo, pues es muy fácil una confusión al respecto.

1a—El art. 465, inc. 1º del Cód. de Proc., coloca entre los títulos que traen aparejada ejecución «los instrumentos públicos presentados en forma»: el art. 979, inc. 2 del Cód. Civ., dice que son instrumentos públicos respecto á los actos jurídicos «cualquier instrumento que extendieren los funcionarios públicos en la forma que las leyes determinen». Es evidente que si la expedición y contenido de un instrumento público contravienen las leyes en que se funda, no puede esta tener fuerza ejecutiva porque no puede ser presentada *en forma*.

1b—Acreedores del cesionario dice el sumario del testo: lo que es un error evidente, porque jamás la cesión de un crédito puede perjudicar á los acreedores del cesionario, por el contrario tiene necesariamente que beneficiarles.

2—La esposa viuda no puede disponer sino de sus bienes propios y no de los de su esposo, según prescripción terminante de la Ley 14 de Toro. El inventario y avalúo judicial de los bienes de menores están prescritos por las leyes 5ª, 7ª y 10, tít. 6º; 15, tít. 17, part. 6º; 9 y 120, tít. 18, part. 3ª; Cédula de 4 de Noviembre 1791. Los herederos menores de 25 años pueden desamparar los bienes de la herencia á sus acreedores, si no les es provechosa, pidiendo al efecto autorización al Juez, debiendo éste acordarla siempre que efectivamente su aceptación le fuere perjudicial. Gregorio Lopez en la glosa á la ley 1, tít. 15, partida 5ª, dice que el menor necesita para la dación *in solutum* decreto del Juez por ser esta



CES

3. Cesión—De derechos á uno sólo de los socios por disolución de la sociedad existente antes del pleito, no puede ser desconocida por el tercero cuyas responsabilidades no aumentan ni disminuyen—Jur. Civ., tom. 2, pág. 167, Ser. 2ª.

4. Cesión—De bienes, el auto que la acepta puede ser levantado en cualquier época, siempre que los acreedores hayan permanecido inactivos y el deudor ó sus herederos se comprometan á pagar los créditos que se presentan—Jur. Civ., tom. 7, pág. 536, Ser. 1ª.

Cesión—Véase: *Poseedor*, núm. 3.

Cesión de acciones—Véase: *Tercería*, núm. 5.

Cesión de bienes—Véase: *Comerciante*, núm. 1.

1. Cesión de derechos—Aun justificada por escritura pública, no basta para intervenir en el juicio si el cedente se opone—Jur. Civ., tom. 9, pág. 61, Ser. 1ª.

una enagenación universal. La intervención de la viuda en casos semejantes está sujeta á iguales formalidades. En todo caso, la venta debe hacerse por mandato judicial con intervención del Ministerio de Menores y en almoneda pública, anunciándose por treinta días. Leyes 60, tít. 18, Part. 3ª; 4, tít. 5; 8 tít. 13; Part 5ª; 18, tít. 16, part. 6ª. Se trata de un caso regido por la legislación antigua.

3—Art. 1439, Cód. Civ. La cesión puede hacerse aunque el crédito fuese litigioso. Art. 1455 ibíd.

4—Es doctrina corriente que la cesión no confiere la propiedad ni la posesión de los bienes del deudor, y tan solo confiere el derecho de hacerlos vender hasta el completo pago de su crédito: si esto es así, es evidente que cualquiera solución que tenga por objeto el pago de los acreedores debe ser aceptada pues lo único que á éstos interesa es el efectivo cobro de sus créditos.

1—Se trata de la cesión de derechos hereditarios hecha por un heredero que interviene en los autos testamentarios. Se presenta el cesionario pidiendo que la hijuela se entienda á su nombre á lo que se opone el cedente: en este caso no puede el cedente ser privado de sus derechos, de los que está en posesión, sino en virtud de sentencia dictada en juicio contradictorio, sin que pueda argüirse en contrario que la cesión se halla acreditada por escritura pública cuya autenticidad no se impugna, pues la fuerza probatoria de la escritura pública no autoriza para prescindir del juicio en que ella ha de ser apreciada juntamente con las razones que se alegan para



CES—CIR

Cesionario—Véase: *Terceria*, núm. 5.

Cesionarios—Véase: *Concordato*, núm. 1.

Circulación—Véase: *Tentativa próxima*, núm. 1.

Circunstancia agravante—Véase: *Abuso de confianza*, núm. 1.

Circunstancias—Véase: *Defensa*, núm. 1.

1a. Circunstancias atenuantes—El insulto y las vías de hecho, aun cuando no bastan para justificar el homicidio como llevado á cabo en defensa propia, importan injurias ilícitas y graves que deben considerarse como circunstancias atenuantes—Jur. Crim., tom. 6, pág. 77, Ser. 1ª.

2. Circunstancias atenuantes—Su admisión hace imposible la clasificación del homicidio como asesinato—Jur. Crim., tom. 6, pág. 86, Ser. 1ª.

3. Circunstancias atenuantes—No puede considerarse

desvirtuarla. El art. 1457 del Cód. Civ., exige como condición indispensable la entrega del título si existiera, ese título aquí consiste en que el cedente consienta en que la hijuela se otorgue á su favor; si el cedente se opone, debe el cesionario gestionar su entrega, mas no puede exigirla sin más trámite, debe seguirse el juicio correspondiente. Véase: Verb. *Terceria*, núm. 5 y nota relativa.

1a—Art. 197 del Cód. Pen. anterior, igual al 83, inc. 4º del vigente. El insulto y las vías de hecho son circunstancias atenuantes porque ellos jamás dejan impasible al hombre. Sería una cosa bella, un acto heroico, que el injuriado pudiera contenerse como la prudencia aconseja; pero esa tranquilidad deseada, ideal de lo bueno y de lo virtuoso, como dice Pacheco, no siempre la poseemos aun los mismos que proclamamos su excelencia. Bulle la sangre en nuestro corazón, cuando se nos provoca: álzase una fuerza en nuestro espíritu, que tiende á repeler con hechos las amenazas, con males positivos las injurias y los ultrajes. El hombre mas tranquilo, pierde su calma y se convierte en criminal.

2—Art. 191, Cód. Pen. anterior.

3—Art. 148 del Código Penal anterior, igual al 81 del vigente. Aquí se legisla para el caso en que el hecho haya sido ejecutado y resuelto durante la perturbación de los sentidos, pero no cuando el agente ha obrado con sangre fria y tranquilidad de espíritu: el hecho que determina la comisión del crimen debe producir un arrebato súbito de cólera para que exima de pena ó aminore la criminalidad.

CIR—CLA

tal, el hecho que continuado con conocimiento del reo, no produce en él un arrebato que pueda considerarse perturba la razón, sino que por el contrario le permite preparar friamente el crimen—Jur. Crim., tom. 6, pág. 107, Ser. 1^a.

Circunstancias atenuantes—Véase: *Ofensas graves*, número 1.

Citación—Véase: *Posiciones*, núms. 1, 2 y 5—*Sentencia*, núm. 9—*Reconocimiento de firma*, núm. 1—*Evicción*, núm. 1.

Citación personal—Véase: *Domicilio constituido*, núm. 1.

Citaciones—Véase: *Posiciones*, núm. 15.

1—Clandestinamente—El hecho de penetrar en una casa clausurada por la Policía en virtud de orden de autoridad competente, constituye un desacato—Jur. Crim., tom. 5, pág. 51, Ser. 1^a.

Clandestinidad—Véase: *Posesión*, núms. 1 y 2—*Interdicto de despojo*, núms. 1 y 3—*Interdicto de recobrar*, núm. 2.

Clandestino—Véase: *Despojo*, núm. 4.

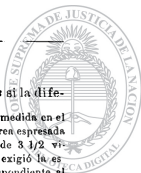
1a. Cláusula—De no entregarse el premio sino al que presente el billete premiado, sin atender reclamo por pérdida ó extravío, no es ilícita—Jur. Civ., tom. 1^a, pág. 31, Ser. 2^a.

2. Cláusula—*O lo que resulte entre muros* después de la

1—Art. 377, inc. 5^o Cód. Pen. ant. ó sea 237 del Cód. vigente.

1a—Se conforma al principio de que la posesión vale por título. Se pretendía que estas condiciones eran contrarias al art. 2765 del Cód. Civ., lo que no es exacto, porque aquí no se trataba de repeler una acción reivindicatoria de un billete, dirigida contra el rifador.

2—Se trata de un contrato de compraventa concebido en estos términos: «He vendido á D. N. N. la casa-quinta de mi propiedad situada en las calles Callao, Juncal y Riobamba, con 83 varas de frente por 120 de fondo (ó lo que resulte de escrituras entre parados) en la cantidad de 160,000 pesos nacionales, dinero de contado, en fe de lo cual firmo en Buenos Aires, á 28 de Setiembre de 1885». Queriendo el comprador verificar el área del terreno, encargó la operación á un perito, de ella resultó que el terreno vendido tenía entre paredes, con arreglo á las escrituras, que recién mas tarde las vió el comprador, menos frente y menos fondo que los espesados en el boleto, y además un martillo en contra,



CLA

fijación del área, no importa una venta *ad corpus* si la dife-

cuya estensión superficial unida á la que procedía de la menor medida en el frente y fondo de la propiedad, arrojaba una diferencia en el área expresada en el boleto y la que realmente tenía el terreno, un déficit de 3 1/2 vigésimos poco mas ó menos. Con este motivo el comprador exigió la escrituración de la venta con disminución del precio correspondiente al déficit del área que había encontrado en la propiedad. El vendedor se negó á ello alegando que había vendido su propiedad *ad-corpus* y sin garantía de medida, ó sea en la estensión que tuviera entre paredes, y que resultando conforme el área que existía entre paredes con la expresada en las escrituras, como lo reconocía el comprador, se hallaba éste obligado á satisfacerle íntegramente el precio, conforme á la ley del contrato. Se resolvió por el Juzgado que el vendedor estaba obligado á reducir á escritura pública el boleto de venta, dentro de diez dias, con rebaja del precio señalando en proporción á la falta de terreno resultante. Esta sentencia fué confirmada por la Cámara teniendo en cuenta que se trata, según lo comprueba el boleto, de la venta de un inmueble por un solo precio, con designación del área, y con la cláusula puesta entre paréntesis, «ó lo que resulte de escrituras entre paredes». Fué reconocido por las partes que la estensión que resultó tener la propiedad entre paredes, según sus escrituras, le faltaba mas de un vigésimo del área expresada en el boleto, toda la cuestión se reduce á saber si este caso se halla ó nó comprendido en la disposición del art. 1346 del Cód. Civ. El vendedor se pronuncia por la negativa alegando que la frase «ó lo que resulte entre paredes» equivale á esta otra «sin garantía de contenidos», y hace de la indicación del área una cosa completamente accesoria y sin importancia alguna, de tal suerte que aun en el caso de que la diferencia en el área pasara del vigésimo no habría lugar á aumento ni á disminución del precio. El comprador resuelve la cuestión afirmativamente diciendo que la cláusula «ó lo que resulte entre paredes» efectivamente significa de que por su medio no se garante contenido, pero limitando su alcance al caso en que la diferencia no llegara al vigésimo. Para buscar la solución de este punto no podemos ir á interpretar nuestra ley con arreglo á lo que dice el Cód. Nap. y sus comentadores, porque la doctrina sustentada por nuestro Cód. sobre la materia es contraria á aquella. Este, en su art. 1344 trata de la venta de un inmueble determinado, estableciendo que puede hacerse de los seis modos que enumera; en su núm. 6 trata del caso presente diciendo: «De muchos inmuebles, con indicación del área, pero bajo la convención de que no se garantiza el contenido, y que la diferencia, sea mas, sea menos, no producirá en el contrato efecto alguno». Estos seis modos de verificarse la venta de inmuebles, están tomados de Marcadé, quien los consigna en su tom. 6, núm. 1, al comentar el art. 1616 del Cód. Napoleón igual al 1344 de nuestro Código,

.OLA

rencia entre el área real y la expresada en el contrato fuese de mas de un vigésimo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 5, Ser. 2ª.

con la sola diferencia de que el nuestro al redactar el núm. 6 omite las palabras «venta de uno» con que comienza la 6ª hipótesis que propone Marcadé, en estos términos: «6º Venta de uno ó muchos inmuebles, con indicación del área, pero bajo la convención de que no se garantiza el contenido, y que la diferencia sea mas, sea menos, no producirá efecto alguno».

El Cód. francés, según lo afirma Marcadé, solo prevé la 4ª y 5ª hipótesis que este autor propone y que corresponden al 4º y 5º de nuestro Cód., como puede comprobarse examinando los arts. 1617 y 1619 del Cód. Francés. Este Cód. después de establecer como regla, que hay lugar á suplemento de precio, ó disminución por diferencia de medida en un vigésimo, agrega las siguientes palabras: «si no hay estipulación en contrario». Nuestra ley no consigna esta salvedad respondiendo lógicamente con su eliminación al principio que consagra, de que en la venta de inmuebles con indicación del área y bajo la convención de que no se garantiza el contenido y que la diferencia sea mas sea menos, no producirá en el contrato efecto alguno, hay lugar, á pesar de esta convención, á aumento ó disminución de precio, siempre que la diferencia de área, en mas ó en menos, sea de un vigésimo con relación al área total de la cosa vendida. Estas son las diferencias fundamentales que existen entre la ley francesa y la argentina. La venta es de un inmueble con indicación del área, y la cláusula agregada equivale á la de no garantizar el contenido expresado; si con esta cláusula no se ha garantizado la medida, es evidente que se ha querido estipular por su medio, que la diferencia de medida que haya de mas ó de menos entre paredes, no producirá efecto alguno en el contrato. Luego el caso presente, que es el de una venta que se encuentra en las condiciones que expresa el inc. 6º del art. 1344 de nuestro Código, se halla regido por el art. 1346, y como resulta ser mayor de un vigésimo la diferencia en el área indicada á la propiedad, resulta claramente que el vendedor se halla obligado á otorgar la disminución del precio que solicita el comprador. La cláusula que determina en el boleto el área de la propiedad vendida y la que le sigue de «ó lo que resulte entre paredes, según escrituras», no son antagónicas y obligan á entregar un solo y único terreno: el vendedor no tiene facultad de separar una cláusula de otra, atribuyendo mas importancia á la primera que á la segunda, porque es regla de sana interpretación que las cláusulas de un contrato, como las de una ley, han de tomarse con algún sentido y no como inútiles, y que se han de explicar las unas por las otras cuando alguna de ellas ofrezca ambigüedad ó tenga diversos sentidos. En este último caso no debe darse á la cláusula del contrato la



C.L.A.—COD

3. Cláusula.—De no regentear durante un término fijo un negocio igual al vendido, es lícita y por lo tanto los Tribunales deben ordenar su cumplimiento—Jur. Com., tom. 6, pág. 364, Ser. 1^a.

Cláusula.—Véase: *Obligación*, núm. 7.

Cláusulas.—Véase: *Obligado solidariamente*, núm. 1.—*Escritura*, núm. 1.

Cliente.—Véase: *Término*, núm. 1.

1. Coadyuvante.—En una apelación libre, en la que se da por desierto el recurso, no puede contestar los agravios que haya expresado el otro apelante—Jur. Civ., tom. 6, pág. 534, Ser. 1^a.

Código Civil.—Véase: *Fecha cierta*, núm. 1.

interpretación que mas favorezca al vendedor. El art. 1346 considera las ventas hechas en las condiciones que espresan los incisos 5 y 6 del art. 1344, como ventas *ad mensuran*, cuando la diferencia de medida en la asignada á los inmuebles llega á un vigésimo.

3—Las obligaciones legalmente contraidas son ley para las partes—art. 1197, Cód. Civ.—La cláusula espresada no es ni contraria á las leyes, ni á las buenas costumbres, ni puede considerarse que perjudique á tercera persona, debiendo en consecuencia considerarse como perfectamente lícita.

1—Se trata de un juicio ejecutivo en el cual se deduce tercera, la sentencia es adversa al ejecutado y tercerista, y apelan ambos; el ejecutado no espresa agravios y se declara desierto el recurso para él en virtud de rebeldía acusada en debida forma; el tercerista espresa agravios y el ejecutado pide se le dé traslado de la espresión de agravios de su coapelante, la Cámara no hace lugar á lo pedido, porque lo contrario importaría dejar ilusoria la deserción del recurso, y atribuirle además el privilegio de mantener en el juicio la doble actitud de actor y de reo á la vez en defensa de la causa que elija, lo que es de todo punto insostenible. La disposición del art. 352 del Cód. de Proc. que prescribe que la tercera se sustancie con el ejecutante y ejecutado, no implica autorizar á éste á que sostenga en el juicio ese doble rol, de modo que si le está prohibido como apelante y actor defender la misma causa del tercerista, le está permitido como apelado, ó reo, hacerlo en virtud de aquella regla de derecho que dice: «Al que se le prohíbe algo por algún camino no se le debe admitir por otro.»



COD—GOM

Código de Comercio—Véase: *Fecha cierta*, núm. 1—*Escepción de novación*, núm. 1.

1. Cohecho—No existe mientras la promesa no es aceptada—Jur. Crim., tom. 5, pág. 103, Ser. 1ª.

Colaterales—Véase: *Herencias trasversales*, núm. 1.

1a. Colocación—De un menor en un empleo que baste á subvenir á sus necesidades, ó su casamiento en caso de ser mujer, hace cesar *ipso facto* los efectos de una sentencia que condenaba al padre á la prestación de alimentos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 451, Ser. 1ª.

Comercial—Véase: *Sociedad*, núm. 2.

1b. Comerciante—No puede hacer cesión de bienes en favor de sus acreedores—Jur. Civ., tom. 1, pág. 386, Ser. 2ª.

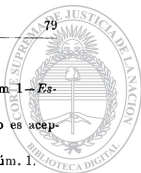
2. Comerciante—Para serlo no es necesario estar inscrito en la matrícula, basta ejercer el comercio—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 386, Ser. 2ª.

1—Art. 390, Cód. Pen. ant. correspondiente al 250 vigente.

1a—Es el marido el obligado en primer término, á alimentar á la esposa—Véase el art. 203 del Cód. Civ.

1b—Al comerciante no puede acordársele el beneficio de la cesión de bienes que tan solo compete al deudor no comerciante, según así espresamente se determina por la ley de Proc. en el art. 718 y por el Cód. de Com. en los arts. 1512 y demás que les son referentes.

2—Esta sentencia fué dictada por mayoría de votos, fundándose ésta en las siguientes razones: 1º Que el comerciante no matriculado tiene todas las cargas del comerciante, aunque carece de sus prerrogativas: la ley comercial ni lo ampara ni lo protege; 2º Que si para ser declarado en quiebra fuese necesario estar inscrito, ello importaría crear un privilegio á la sombra de la falta del cumplimiento de un deber impuesto por la ley, cual es la falta de inscripción estatuida de una manera terminante por el Cód. de Com. Esta opinión tiene en su favor la jurisprudencia constante de los Tribunales de la Capital como puede verse en los siguientes casos—Jur. Com., tom. 3º, pág. 421—Véase verbo Industrial, núm. 1416 del tom. 1º de la Ins. Fallos de la S. C. P. tom. IX, pág. 16, Ser. 1ª. La minoría fundó su voto en: que de la letra y del espíritu de los arts. 1, 5, 32 y 39 del Cód. de Com. que están en armonía y que nunca podrían suponerse en contradicción, se deduce, que la matrícula es esencial á la calidad de comerciante: y se pregunta ¿porqué no había



COM

3. Comerciante—Aun cuando lo sea el actor, no basta para determinar que sus acciones deban seguir el fuero mercantil—Jur. Civ., tom. 2, pág. 514, Ser. 2ª.

4. Comerciante—La cuenta pasada por éste bajo su firma, no puede conceptuarse como cuenta corriente ni conferir derechos por el saldo que arroja en su contra, si no es copia exacta de la existente en sus libros de comercio—Jur. Com., tom. 6, pág. 146, Ser. 1ª.

5. Comerciante—Cuyo principal establecimiento se halle situado en la Provincia, no puede ser declarado en quiebra por los Jueces de la Capital—Jur. Com., tom. 6, pág. 253, Ser. 1ª.

Comerciante—Véase: *Fianza*, núm. 1—*Depósito*, núm. 1—*Libros de Comercio*, núms. 4 y 6—*Prueba*, núm. 9—*Embargo preventivo*, núm. 32.

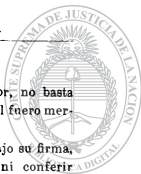
1. Comerciantes—En los litigios entre ellos y tratándose

de serlo cuando se trata del título de una profesión definida por la ley y mediante el cual los que la ejercen quedan sujetos á la legislación, reglamentos y jurisdicción mercantiles? ¿O sería comerciante cualquiera que se titulara ó se dejara llamar como tal? Actos de comercio pueden ejercerse en general por cualquiera persona hábil para contratar, esos actos serían en mayor ó menor número y su ejercicio por mas ó menos tiempo ¿cómo bastarían por sí solos para caracterizar al comerciante? Pero como los actos de la profesión están mezclados con los actos comunes, es preciso dar á la persona que los practica un carácter ostensible que sea como el reflejo de su condición. La C. S. N. ha declarado que no es comerciante el que no está inscrito en la matrícula de comerciantes. S. 1, tom. 7, pág. 397. Consideramos que la primera opinión es la correcta porque la declaración de quiebra es una carga impuesta por la ley al que ejerce el comercio y el comerciante no inscrito tiene todos los cargos de comerciante pero no goza en sus beneficios.

3—El actor debe seguir el fuero del reo. Véase, Inst. tom. 1º, verb. *Competencia*, núm. 419 y nota.

5—La declaración de quiebra debe ser hecha en el lugar en que el comerciante tenga su domicilio ó el asiento principal de sus negocios—Art. 1522, Cód. de Com.

1—Siempre que la suma cuestionada exceda de 200 pesos.



COM

de cantidades, la prueba debe fundarse en sus libros de comercio, la testimonial es improcedente—Jur. Com., tom. 3, pág. 50, Ser. 2ª.

2. Comerciantes—Entre ellos, sus libros debidamente rubricados forma n prueba plena si no se exhiben otros que desvirtúen sus constancias—Jur. Com., tom. 6, pág. 263, Ser. 1ª.

3. Comerciantes—Siempre que se trate de actos celebrados entre ellos, la prueba que resulte de libros llevados con arreglo á las prescripciones legales, es concluyente—Jur. Com., tom. 6, pág. 442, Ser. 1ª.

Comerciantes—Véase: *Artesano*, núm. 1.

Comisario de Policía—Véase: *Declaraciones*, núms. 3 y 4—*Declaración indagatoria*, núm. 1.

1. Comisión—Que por testamento se fija al albacea, no puede considerarse como legado, sino como remuneración de un mandato, y no cumpliéndose éste en su totalidad sin culpa del mandatario, los tribunales deben fijar la parte que corresponda por el servicio prestado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 463, Ser. 1ª.

Comisión—Véase: *Mandato*, núm. 1—*Depósito*, núm. 1—*Corredor de Bolsa*, núm. 2—*Remate*, núm. 2.

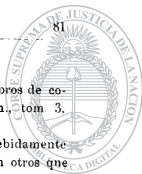
Comisión del albacea—Véase: *Condominio*, núm. 1.

Comisión equitativa—Véase: *Remate*, núm. 1.

2—Art. 76, Cód. de Com.

3—Art. 76, Cód. de Com.

1—En el caso presente el testador fijó en «un 10 0/0 sobre el cúmulo de sus bienes, como *comisión de albaceazgo*, que sería la remuneración de todos sus trabajos practicados y á practicar hasta la total liquidación testamentaria». Se vé aquí que la mente del testador fué remunerar trabajos encomendados y trabajos hechos: la voluntad del testador fué *fijar la comisión del albaceazgo*. La cláusula no significa un legado ni en su forma ni en su fondo. El legado es una liberalidad, se aplica especialmente á los favorecidos por el testador con ciertos y determinados bienes. La Ley 1, tít. 9, Part. 6ª, dice: *Manda es una manera de donación que dexa el*



COM

1a. Comisionista—O simple intermediario sin poder en forma, carece de personería para intervenir en las cuestiones que se susciten entre comprador y vendedor sobre las condiciones de la venta—Jur. Com., tom. 6, pág. 571, Ser. 1ª.

Comisionista—Véase: *Martilleros*, núm. 1—*Mandato*, núm. 1—*Agente ó comisionista*, núm. 1.

Comisionistas—Véase: *Corredores de Bolsa*, núm. 1.

1b. Compensación—Solo es procedente cuando ambas deudas son líquidas, exigibles y de plazo vencido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 164, Ser. 1ª.

Compensación—Véase: *Excepción de compensación*, núm. 2—*Depositario*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 4—*Injuria*, núm. 1.

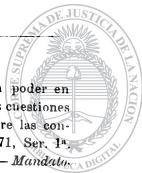
1c. Competencia—De los Jueces letrados, por razón de la cantidad ó valor del pleito, debe atenderse al total de la suma reclamada y no á la que confiese adeudar el demandado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 412, Ser. 1ª.

testador en su testamento á alguno, por amor de Dios ó de su ánima, ó por fazer algo á quien dexa la manda. Ley 1, tít. 9, Part. 6ª. Se ve claramente por la cláusula del testamento que el causante quiso remunerar servicios prestados y á prestarse, circunstancias que eliminan toda idea de manda ó legado. El albaceazgo es un mandato y está regido por las mismas leyes de este contrato—art. 1870, inc. 7º, Cód. Civ.—Si no se ha cumplido el mandato, debe la remuneración fijarse según el trabajo hecho cuando se resuelve sin culpa del mandatario—art. 1598, ibid—y como el art. 3872 establece que la comisión se gradúa según el trabajo hecho y la importancia de los bienes, resulta la exactitud del sumario que precede.

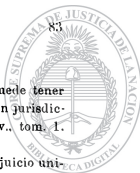
1a—Porque no se trata de derechos que le sean propios. Tiene facultad para intervenir en el negocio en virtud de la comisión ó mandato conferido, terminado el negocio concluye el mandato. Si surgen cuestiones del negocio sería cuestión de un poder para litigar para de ese modo intervenir nuevamente en su nuevo mandato.

1b—Art. 819, Cód. Civ.

1c—El Juez no puede entrar á considerar si realmente es procedente ó nó la demanda por la totalidad de la suma reclamada, ó solo por una parte de ella, pues esto concierne á la cuestión de fondo y corresponde resolverlo en definitiva.



COM



2. Competencia — La discusión oficial solo puede tener lugar entre Jueces en ejercicio de autoridad y con jurisdicción propia pero de distinta naturaleza—Jur. Civ., tom. 1. pág. 87, Ser. 2ª.

3. Competencia — Del Juez que entiende en el juicio universal, la regla que establece que debe entender en los incidentes no es aplicable cuando la del demandado corresponde á otro fuero—Jur. Civ., tom. 2, pág. 506, Ser. 2ª.

4. Competencia — De los Tribunales argentinos para conocer en la testamentaria de un fallecido en país extranjero, para declararla debe previamente justificarse la existencia de bienes en la República — Jur. Civ., tom. 2, pág. 522, Ser. 2ª.

5. Competencia — La Cámara Civil carece de jurisdicción

2—Tal es la inteligencia que se desprende de los arts. 417 y 419 del Cód. de Proc.

3—Aunque el juicio de concurso es un juicio universal, y aunque el art. 1536 del Cód. de Com. ordena se acumulen á este juicio todos los asuntos del fallido, esto no puede entenderse de otra manera sino de que el se refiere únicamente á aquellos juicios en que el concursado sea parte como demandado mas no como actor. Es principio inconcuso de procedimiento que el actor debe seguir el fuero del reo en las acciones personales, y que el demandado no puede ser sacado de sus jueces naturales; sería anómalo que se obligase á aquellos que el concursado hubiese demandado á venir á litigar ante el Juez del concurso. A pesar de la latitud con que se expresa el art. 1536 debe sin embargo interpretarse en el sentido del sumario. Véase: Vistas Fiscales del Dr. Cortés, tom. 2, pág. 399.

4—Los arts. 90 y 3284 del Cód. Civ., y 634 del Cód. de Proc., establecen con precisión y claridad la jurisdicción sobre las sucesiones y los juicios que con ellas se relacionan. Pero el art. 10 del Cód. Civ. establece, que los bienes raíces situados en la República están exclusivamente regidos por sus leyes y que ellos se transmiten tan solo de acuerdo con las leyes del país. Siendo ésta una escepción en el juicio sucesorio es evidente la necesidad de comprobar la existencia de bienes raíces situados en el país para determinar su competencia.

5—Esto sucedía antes de dictada la ley Org. de los Trib. de la Cap. del año 1886, pues según ésta la Cámara que sea la superior gerárquica del Juez que primero hubiese entendido en el litigio, es la competente para

COM

para resolver las contiendas que se susciten entre jueces de distinto fuero—Jur. Civ., tom. 8, pág. 549, Ser. 1^a.

6. Competencia—Esta contienda solo puede formarse en el juicio principal pero no en los incidentes—Jur. Com., tom. 6, pág. 207, Ser. 1^a.

Competencia—Véase: *Incompetencia*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 2—*Cámara*, núm. 3—*Cámara Civil*, núm. 2—*Sumario*, núm. 1.

Competencias oficiales—Vease: *Cámara*, núm. 6.

1. Competente—Consentida por las partes la providencia en que el Juzgado recibe la causa á prueba declarándose competente, es nula toda sentencia que no resuelva los puntos sometidos á la decisión judicial por considerarse incompetente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 2^a.

2. Competente—Consentido el auto en que el Juzgado se declara tal y abre la causa á prueba, toda petición de incompetencia debe ser rechazada—Jur. Civ., tom. 2, pág. 337, Ser. 2^a.

3. Competente—Habiéndose consentido por las partes la resolver la contienda—art. 101 de la ley citada—Véase, verb. *Cámara* núms. 1 y 6.

6—La Cámara no resolvió esta cuestión en el acuerdo que motivó el juicio. Aquí se resolvió tan solo que el tribunal que entiende en un concurso es competente para entender en todos los incidentes de la quiebra, en virtud de lo dispuesto en la ley de Setiembre de 1878, y que la quiebra debe declararse en el lugar en que el comerciante tenga su principal establecimiento ó escritorio.

1—Declarado un juez competente para entender en un juicio no puede esa competencia ser materia de un nuevo pronunciamiento judicial—art. 87, Cod. de Proc.—La sentencia es nula, porque ella debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas en juicio declarando el derecho de los litigantes y condenando ó absolviendo de la demanda en todo ó en parte—art. 296, Cód. de Proc.—Cuando esta forma ó solemnidad prescrita por la ley hubiese sido violada la sentencia será nula—art. 2.7 *ibid*.

2—En virtud de la terminante disposición del art. 87 del Cód. de Proc.

3—Art. 87 del Cód. de Proc.



COM

providencia del Juzgado que recibe la causa á prueba, ni éste de oficio, ni aquéllas pueden reclamar sobre la competencia ni alegar nulidades—Jur. Civ., tom. 6, pág. 536, Ser. 1ª.

Competente—Véase: *Juez*, núms. 2, 3 y 4.

Competentes—Véase: *Testamentaria*, núm. 1—*Acción de nulidad*, núm. 1—*Jueces de Comercio* núm. 2—*Tribunales de la Capital*, núms. 3 y 4—*Contratos*, núm. 21.

1. Cómplice—De un delito no llevado á cabo, no es responsable del cometido por sus cómplices sin su aquiescencia—Jur. Crim., tom. 5, pág. 556, Ser. 1ª.

1a. Complicidad—Del comprador aun á título oneroso, hace procedente la revocación del acto que defrauda á los acreedores—Jur. Civ., tom. 7, pág. 130, Ser. 1ª.

Complicidad—Véase: *Certificado médico*, núm. 1.

1b. Complot—Existe siempre que haya acuerdo de voluntades para cometer el delito y consumarlo, aun cuando la participación del uno no haya sido idéntica ó tan activa como la del otro—Jur. Crim., tom. 6, pág. 132, Ser. 1ª.

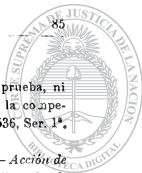
1c. Compra—Personal de uno de los socios á nombre propio, para declarar que correspondía á la sociedad, no basta la confesión de que esta existía, ni la prueba testimonial, se requiere un principio de prueba por escrito—Jur. Civ., tom. 2, pág. 547, Ser. 2ª.

Compra—Véase: *Buque*, núm. 2.

1—Si el delito se lleva á cabo sin su aquiescencia no puede haber complicidad porque falta uno de los elementos esenciales de esa complicidad, que el agente contribuye á sabiendas y voluntariamente á la ejecución—Art. 48, Cód. Pen. anterior.

1a—Si el deudor que celebra un acto de enagenación lo hace en fraude y en perjuicio de los derechos de sus acreedores, tal acto jurídico es anulable—art. 969, Cód. Civ.—Lo propio sucede con el comprador cuando éste celebra un acto con el deudor conociendo su estado de insolvencia.—Art. 968 *ibid.*

1c—Siempre que el monto del contrato esceda de doscientos pesos, pues de lo contrario sería admisible la prueba testimonial de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 138 y 120 del Cód. de Proc.



COM

Compra forzosa—Véase: *Poseción*, núm. 11 — *Peritos*, núm. 5.

1. Comprador—En remate judicial de un bien cuyo dominio es controvertido, tiene derecho á rescindir el contrato sin necesidad de esperar la terminación del litigio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 72, Ser. 1ª.

2. Comprador—Mientras no se le otorgue judicialmente la respectiva escritura del bien vendido, no puede disponerse del precio por él depositado, sin su expresa conformidad—Jur. Civ., tom. 6, pág. 280, Ser. 1ª.

3. Comprador—En remate judicial, puede rehusar el pago del precio, aún despues de aprobado el acto, siempre que el vendedor carezca de título sobre una parte del bien vendido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 294, Ser. 1ª.

4. Comprador—De un bien hipotecado, no tiene persone-

1 El art. 522 del Cód. de Proc. autoriza el desistimiento, cuando los títulos adolecieran de algún vicio que no pueda subsanarse en breve tiempo: lo mismo debe suceder, y con mayor razón, cuando el dominio de la cosa es controvertido y su esclarecimiento está sometido á tantos y tan difíciles trámites. El comprador no puede ser obligado á aceptar una cosa en litigio, no puede quedar sujeto á las eventualidades de un pleito, sean cuales sean las razones que en él asistan al vendedor, y no puede en fin condenársele á una larga y perjudicial expectativa.

3—El comprador tiene derecho á exigir del vendedor un título suficiente que acredite su dominio sobre la totalidad de la cosa vendida, porque es condición esencial para que se opere la trasmisión legal de una propiedad, que sea dueño de ella quien haga dicha trasmisión. Y en caso contrario el comprador puede rehusar el pago del precio con arreglo al art. 1426 del Cód. Civ., porque el vendedor no entregaría exactamente lo que expresa el contrato. Estaría asimismo facultado para pedir su rescisión, por encontrarse el vendedor en la imposibilidad legal de cumplir el contrato. Si al área del terreno vendido no le faltase mas que una vigésima parte del total, el comprador no tendría derecho al desistimiento, siempre que el contrato se hubiese celebrado en las condiciones establecidas en el art. 1345 del Cód. Civ.

4—Reconocida la hipoteca, el acreedor tiene derecho para exigir del tercer poseedor el pago de la deuda ó el abandono del inmueble—art.



COM

ría para resistir la posesión pedida por el acreedor, mientras no verifique el pago de la deuda—Jur. Com., tom. 5, pág. 52, Ser. 1ª.

5. Comprador—Si devuelve la cosa comprada y el vendedor no la hace depositar judicialmente, se presume que ha consentido en la rescisión del contrato—Jur. Com., tom. 5, pág. 139, Ser. 1ª.

6. Comprador—Aun cuando haya pagado el precio de la cosa, no tiene derecho á reivindicarla del concurso formado al vendedor si no se hubiese efectuado la tradición antes de la apertura del juicio—Jur. Civ., tom. 5, pág. 359, Ser. 1ª.

7. Comprador—Que se somete al emplazamiento, no puede dársele por desistido cuando por causas ajenas á su voluntad no puede llevarse adelante la escrituración—Jur. Civ., tom. 1, pág. 297, Ser. 2ª.

8. Comprador—No tiene derecho á suspender el pago 3163, Cód. Civ.—derecho que solo puede resistirse mediante el pago que efectúe el tercer poseedor, como lo determina el inc. 4º del art. 768.

5—Cuando se devuelve una cosa materia de un contrato, esta devolución se hace ó con el consentimiento del vendedor, ó contrariando su voluntad, si en el primer caso la rescisión del contrato se produce voluntariamente, en el segundo sucede lo propio, porque el vendedor no cumple con lo preceptuado en el art. 540 del Cód. de Com.

6—Para que pueda intentarse la reivindicación es necesario que el que la entable tenga un derecho real—*jus in re*—en la cosa reclamada, y para la constitución de un derecho real es elemento esencial el hecho de la tradición. En el derecho civil no ofrece duda alguna en virtud de lo que el Cód. Civ. dispone al tratar de las obligaciones de dar—art. 577—en el que se estatuye que antes de la tradición de la cosa el comprador no adquiere sobre ella ningún derecho real. La ley mercantil no contiene disposición expresa al respecto, pero no se puede dudar que la mente del legislador ha sido la misma en esta materia que en la civil, por dos razones: 1º Porque al tratar de la reivindicación el Cód. de Com. en el tít. 9, lib. 4º, para nada tiene en cuenta al comprador que ha pagado el precio y á quien no se le ha entregado la cosa; 2º Porque al enumerar los acreedores de dominio—art. 1695—tampoco menciona al comprador que se encuentra en estas condiciones.

8—No es el caso previsto por el art. 1425 del Cód. Civ., según el cual



COM

aunque resulte el terreno de mayor dimensión, según la mensura, siempre que en el título exista una cláusula que comprenda el todo y los linderos no deduzcan acción alguna—Jur. Com., tom. 1, pág. 603, Ser. 2ª.

9. Comprador—Que á ciencia cierta sabe que se le ha vendido una cosa agena, no está obligado á gestionar su entrega como cumplimiento del contrato, le basta deducir la acción de nulidad probando el hecho en que se funda—Jur. Civ, tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

el comprador puede suspender el pago del precio si tuviese motivo fundado para temer la reivindicación de la cosa ó por cualquiera acción real, cuya circunstancia ni siquiera fué indicada por el interesado en el caso ocurrente.

9—Es decir, sabe el comprador que la cosa es agena pero después de haber celebrado el contrato, porque si lo sabía al celebrarlo serían otros los efectos jurídicos. Este caso está regido por el art. 1329 que dice: «Las cosas ajenas no pueden venderse. El que hubiese vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas é intereses que le resultasen de la anulación del contrato, si este hubiese ignorado que la cosa era agena, etc.» Resulta de aquí que la ley prohíbe la venta de cosas ajenas, que si tal venta se realiza, aunque se haga de buena fe, ella adolece de nulidad, y que el comprador que ignora que la cosa era agena, tiene, por razón de esa nulidad, derecho á que se le satisfagan las pérdidas é intereses. No se puede pretender que de un contrato celebrado en estas condiciones no nazca para el comprador mas acción que la de pedir el cumplimiento de ese contrato, es decir la entrega de la cosa, cuando el derecho que el art. citado acuerda es el de pedir su nulidad y la indemnización de pérdidas é intereses. No puede argüirse de que solo sea aplicable el art. 1204, Cód. Civ., que establece la subsistencia de los contratos aunque una de las partes no cumpla con él; siempre que no se hubiese estipulado el pacto comisorio, la otra parte solo puede pedir su cumplimiento pero jamás su disolución. Esta disposición de la ley no es aplicable al caso presente, porque el art. 1204 citado, legisla para los contratos lícitos y válidos; mas no tratándose de contratos nulos, como en la venta de cosa agena: pues no es de suponerse que la ley obligue á pedir el cumplimiento de un contrato declarado nulo por ella misma. De modo que siempre que resulte de los términos de la demanda el hecho en que se funda la nulidad del contrato, no hay razón para dejar de declararla una vez constatado ese hecho, pues en las nulidades relativas basta que la parte pida su declaración para que los tribunales



COM

10. Comprador—Al que asevera haber hecho la operación por mayor cantidad de mercaderías de las recibidas, le corresponde la prueba de su aserto: si no lo justifica se concep-

la declaren—arts. 1048 y 1330 del Cód. Civ.—Debe por otra parte tenerse presente que la ley no puede exigir del comprador de cosa ajena que exija del vendedor la entrega de esa cosa, pues ello importaría obligarlo á ser cómplice en el hecho ilícito, lo que sería repugnante á todo principio de justicia y de moral. Hay igualmente en este caso imposibilidad legal de que se haga al comprador la tradición de la cosa, es decir la tradición traslativa de dominio, desde que solo puede hacer esto el que es dueño vendedor, sin que valga decir, que el vendedor de cosa ajena puede disponer de los medios necesarios á la ratificación, ó adquisición por otro título que le ponga en condiciones de verificar la entrega, porque la posibilidad de un acto no equivale ni es la misma cosa que su existencia real y efectiva. *De potentia ad actum non valet consecutio*. Esta imposibilidad legal subsistirá siempre que el vendedor de la cosa ajena no obtenga la ratificación del acto hecha por el dueño de la cosa, ó la adquisición de la misma por cualquier medio que le ponga en condiciones de hacer la tradición traslativa del dominio, lo que puede comprobar durante el curso del juicio por favor especial de la ley antes de dictar el Juez sentencia. Esta comprobación neutralizaría los efectos de la demanda. Y es sin duda, á esta imposibilidad legal de entregar la cosa vendida á la que se refiere el art. 1413 del Código, cuando expresamente dispone que «si el vendedor se hallase imposibilitado de entregar la cosa, el comprador puede exigir que inmediatamente se le devuelva el precio que hubiese dado, sin estar obligado á esperar que cese la imposibilidad del vendedor.» Además, se pretende que el art. 1178, hace presumir como prejudicial la acción sobre la entrega de la cosa, para que si no hace la tradición declararlo incurso en el delito de estelionato. El referido artículo dice: «El que hubiese contratado sobre cosas ajenas como cosas propias, si no hiciere tradición de ellas, incurre en el delito de estelionato y es responsable de todas las pérdidas é intereses»; como se vé, este artículo declara reo de estelionato al que contrata sobre cosas ajenas como propias y es responsable de pérdidas é intereses *si no hiciere tradición de ellas*. El cumplimiento de esta condición debe comprobarse por el vendedor exclusivamente, cuando es acusado de estelionato, para no ser declarado incurso en el delito. La condición se cumple comprobando haber hecho la tradición traslativa de dominio, ó apresurándose á hacerla antes de que el Juzgado fuese en definitiva la acción instaurada. No hay por consiguiente acción alguna prejudicial, pues la ley no la establece.

10—Se conceptúa concluida la operación por la cantidad recibida.

COM

túa concluida la operación—Jur. Com., tom. 6, pág. 130, Ser. 1^a.

11. Comprador—Aun en las ventas judiciales tiene derecho para designar el Escribano que debe otorgar la escritura—Jur. Com., tom. 6, pág. 393, Ser. 1^a.

Comprador—Véase *Vendedor*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 1—*Escrituración*, núm. 1—*Titulos*, núms. 7 y 11—*Certificado*, núm. 1—*Remate Judicial*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 3—*Evicción*, núm. 2—*Mensura*, núm. 4—*Desistimiento*, núm. 4—*Escribano*, núm. 3—*Medianeros*, núm. 1—*Promesa*, núm. 3.

1. Compraventa—La cláusula de presentar el título originario queda cumplida, si careciendo de él el vendedor presenta una información que jurídicamente constituya suficiente título—Jur. Civ., tom. 7, pág. 110, Ser. 1^a.

2. Compraventa—De bienes raíces, el boleto es un contrato privado perfecto en cuanto obliga á las partes á reducir á escritura pública la operación celebrada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 1^a.

3. Compraventa—Para exigirse el cumplimiento de este

11—Si bien la ley no acuerda este derecho al Juzgado ni al comprador de un modo expreso, del art. 1424 se induce que este derecho corresponde al último pues sobre él pesan los gastos de escrituración.

1.—Con este título se llenaría la intención de las partes al consignar esa cláusula, pues ella no puede tener otro objeto sino producir un *título suficiente de propiedad* y que garanta al comprador en el goce tranquilo de la cosa, como decía la ley de 1867. Esta interpretación es correcta si se tiene en cuenta que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—art. 1197, Cód. Civ.,—y que para su cumplimiento debe consultarse antes que su letra, el espíritu é intención de las partes al celebrárlas.

2—Art. 1185, Cód. Civ.

3—La venta se celebró bajo la condición de que los títulos fuesen perfectos, si éstos no se exhiben el comprador no puede manifestar su conformidad ó disconformidad con ellos. No se trata de aquellos docu-



COM—CON

contrato por el vendedor, es indispensable que exhiba el título de propiedad como documento en que funda su demanda—Jur. Civ., tom. 3, pág. 530, Ser. 2ª.

Compraventa—Véase: *Arras*, núms. 1 y 2—*Cosa vendida*, núm. 1—*Contrato*, núm. 10—*Contrato de compraventa*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núm. 11.

1. Compromiso—La formación de Tribunal al solo objeto de dictar el laudo, solo es obligatoria cuando en el compromiso no se estipula una forma determinada—Jur. Com., tom. 6, pág. 619, Ser. 1ª.

Compromiso—Véase: *Multa*, núm. 1.

Compromiso arbitral—Véase: *Pena*, núm. 2.

Concesión—Véase: *Venta*, núm. 2.

Concesión gratis—Véase: *Terrenos fiscales*, núm. 1.

1. Concordato—El acreedor que lo haya aceptado solo puede ejecutar á los cesionarios del deudor por la suma que en él se haya estipulado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 405, Ser. 2ª.

Concubinato—Véase: *Filiación natural*, núm. 3.

Concurso—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 1—*Comprador*, núm. 6—*Honorarios*, núm. 6—*Acreedor privilegiado*, núm. 1—*Sindico*, núm. 1—*Prelación*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 4—*Alquileres*, núms. 1, 2, 3 y 4—*Esposo*, núm. 2—*Locación*, núm. 9.

1a. Concurso comercial—Para ejercer derechos reivindicatorios de bienes raíces debe ocurrir ante la jurisdicción civil—Jur. Civ., tom. 2, pág. 506, Ser. 2ª.

mentos en que el actor funda su derecho, como erróneamente lo dice el sumario, sino de uno que debe llegar á conocimiento del demandado, como cumplimiento de la condición establecida en el convenio, y por consiguiente no se contraría el precepto de que nadie puede ser obligado á producir prueba contra sí mismo.

1—Art. 783 del Cód. de Proc.

1a.—El juicio de concurso es un juicio universal y atrae á sí á todos los demás—art. 1536, Cód. de Com. —Es este un principio general que está limitado á los casos en que el juicio se halle ya iniciado al tiempo



CON

Concurso especial—Véase: *Gastos de ejecución*, núm. 1.

Condenación en costas—Véase: *Honorarios*, núm. 1—*Revocación*, núm. 1.

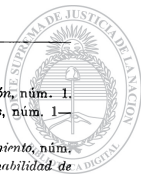
Condición—Véase: *Termino*, núm. 3—*Desistimiento*, núm. 2—*Obligaciones condicionales*, núms. 1 y 2—*Inhabilidad de título*, núm. 1—*Obligación*, núms. 4 y 7—*Espera*, núm. 1.

Condición Penal—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 19.

1. Condominio—No basta para crearlo la adjudicación en la cuenta particionaria de una parte de una finca para el

de declararse el concurso, ó que sea el concurso el demandado, porque si es actor, debe seguir el fuero del reo. Si se trata de bienes raíces el único competente para entender en él, es el del lugar en que la cosa esté situada.—Art. 4 del Cód. de Proc.—Esta regla no sufre escepción pues cualquier juicio seguido ante otro juez que aquel del lugar en que la cosa esté situada, sería inútil, no podría ejecutarse la sentencia siempre que el Juez se opusiera, sería ella ilusoria. Ningún estado tolera el ejercicio de una jurisdicción extraña sobre los bienes situados dentro de su territorio.

1—El albacea es acreedor de la testamentaria en que interviene en ese carácter, por el importe de su comisión y gastos. Es un crédito que no grava directamente los bienes, aunque en concurrencia con otros acreedores tenga el privilegio que la ley acuerda á todos los gastos de justicia. Para que este carácter pudiese desnaturalizarse, sería necesario que de una manera expresa y guardándose las formas legales se adjudicase en pago algún bien ó la parte de algún bien raíz que bastase á cubrir el importe de su crédito. En tal caso podría sostenerse que existiendo la adjudicación en pago, el acreedor adquiere el dominio de la propiedad adjudicada, si la adjudicación abrazaba la totalidad de su valor, ó solo en condominio si ella se hace en concurrencia con algún otro. Pero para que esto pueda existir, es necesario, es indispensable que se haga en legal forma y en condiciones de transmitir el dominio. El mismo auto judicial que aprueba una adjudicación no basta para que el condominio se produzca, así como no basta el acuerdo del comprador y vendedor para que el contrato de compraventa se consuma transfiriendo la propiedad de la cosa que le sirve de objeto. Es necesario la tradición de la cosa, ó en otros términos, es necesario que el adquirente haya entrado en posesión de ella. Los gastos hechos por el albacea y su comisión deben salir de la masa testamentaria, sin que tenga derecho de designar los bienes como condómimo: así se deduce de la ley 46, tít. 32, lib. 2, Rec. de Indias; y así lo establece la doctrina de los autores: Véase: García Goyena, Cód. Civ. Español, tom. 2º, pág. 163. Acevedo, Proyecto de un Cód. Civ., pág. 237.



CON

pago de una hijuela de gastos causídicos y comisión del albacea—Jur. Civ., tom. 1, pág. 569, Ser. 2ª.

2. Condominio—La finca adjudicada á varios herederos no debe ser nuevamente tasada cuando éstos pretendan dividirlo, si no existe conformidad en la forma de la división, debe hacerse enagenando el todo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 394. Ser. 1ª.

3. Condominio—No basta para adquirirlo el hecho de edificar en terreno ageno—Jur. Civ., tom. 8, pág. 334, Ser. 1ª.

4. Condominio—Los gastos sobre su división son comunes entre los copropietarios aun cuando la división se produzca por ejecución contra uno de ellos—Jur. Com., tom. 6, pág. 516, Ser. 1ª.

Condominio—Véase: *Bienes raíces*, núm. 1—*Haber hereditario*, núm. 1—*Despajo*, núm. 3—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5—*Nulidad*, núm. 30—*Reivindicación*, núm. 4—*Poseción*, núm. 10—*Embargo*, núm. 8.

1. Condómino—La venta que haya sin anuencia de los demás es nula, aún respecto de la parte que pudiera corresponderle—Jur. Civ., tom. 8, pág. 149, Ser. 1ª.

1a. Condómino administrador—Que temerariamente se opone al nombramiento de un tercero para la administración

2—Lo contrario importaría recargar á las partes con gastos inútiles.

3—Según lo establece el Cód. Civ., en el tít. de la «Edificación», arts. 2687 y siguientes, el que edifica en terreno ageno de ningún modo adquiere el condominio, sino simplemente una acción personal contra el dueño del suelo para cobrar el valor de lo edificado y plantado, según haya procedido de buena ó de mala fe. El condominio solo se establece por contrato, por disposición de última voluntad ó en los casos que la ley determina—Art. 2675, Cód. Civ.

1—Art. 1331, Cód. Civ.

in—En este caso la negativa tiene por fundamento la pretensión de continuar el condominio, administrando contra la voluntad de otro condómino, la propiedad, lo que es manifestamente contrario á derecho.



CON

de los bienes, debe ser condenado en las costas del juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 242, Ser. 1ª.

1. Condóminos—No pueden oponerse á la ejecución seguida por un acreedor siempre que solo se ejecute la parte indivisa del condómino ejecutado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 412, Ser. 2ª.

2. Condóminos—Como tales se reputan los propietarios de terrenos limítrofes sin separación, y no pueden levantar divisiones sin consentimiento mutuo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 65, Ser. 1ª.

3. Condóminos—Mientras no estén de acuerdo sobre quien debe cobrar los alquileres, procede el depósito judicial para su justo reparto—Jur. Civ., tom. 8, pág. 507, Ser. 1ª.

4. Condóminos—Cualquiera puede tomar en arrendamien-

1—Según lo establece el art. 2677 del Cód. Civ., los acreedores de cada condómino tienen derecho para hacer embargar y vender su parte indivisa en un inmueble común, antes de hacerse la división entre comuneros. Igual doctrina ha sido sentada por la S. U. P. como puede verse en el tom. 8, pág. 416, Ser. 1ª.

2—El art. 2746 del Cód. Civ. dice que, el que poseyere terrenos cuyos límites estuviesen confundidos con los de otro colindante, repútase condómino con él, y tiene derecho para pedir que los límites confusos se investiguen y se demarquén. No es lícito por consiguiente que un colindante haga innovaciones materiales en los terrenos limítrofes sin ó contra el consentimiento del otro, como lo estatuye el art. 2681, ibid.

3—Por disposición del art. 1680 del Cód. Civ., el condómino no puede ejercer sobre la cosa poseída en común ningún acto material ó jurídico que importe el ejercicio inmediato del derecho de propiedad, sin el consentimiento de todos y cada uno de sus condóminos. El alquiler de la casa y el percibo de su renta importan el ejercicio inmediato del derecho de propiedad sin el consentimiento de todos y cada uno de sus condóminos. No estando de acuerdo todos los condóminos procede el depósito, á los fines indicados en el sumario. La distribución se hará por mutuo acuerdo entre las partes ó por resolución del Juzgado en caso de no poder ponerse de acuerdo.

4—El art. 2702 del Cód. Civ. establece que determinándose el arrendamiento de la cosa, debe el condómino ser preferido á persona extraña siempre que ofrezca igual arrendamiento. Y hasta el mismo administrador



CON

to la cosa común, aun cuando exista administrador nombrado judicialmente—Jur. Civ., tom. 9, pág. 184, Ser. 1ª.

Condóminos—Véase: *Transacción*, núm. 2—*Despojo*, número 3.

Confecclones—Véase: *Prescripción*, núm. 15.

1. Confesión—En materia penal, si bien es indivisible en favor del procesado requiere que no existan antecedentes que la desvirtúen—Jur. Crim., tom. 5, pág. 41, Ser. 1ª.

2. Confesión—No resultando de la del reo, ni estando comprobada por otros medios la existencia del delito, debe absolverse al procesado—Jur. Crim., tom. 5, pág. 47, Ser. 1ª.

3. Confesión—Es indivisible cuando de los antecedentes del proceso no resulte presunción de que el reo haya faltado á la verdad—Jur. Crim., tom. 6, pág. 429, Ser. 1ª.

Confesión en juicio—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 3.

1a. Confesión extrajudicial—De una deuda mayor de doscientos pesos nacionales, no puede ser probado por testigos si no existe un principio de prueba por escrito—Jur. Civ., tom. 6, pág. 122, Ser. 1ª.

1. Confesión judicial—De la existencia de una sociedad no es prueba bastante de que todas las operaciones efectuadas por los socios á nombre propio pertenecen a la sociedad—Jur. Civ., tom. 2, pág. 547, Ser. 2ª.

puede tomar la cosa en arrendamiento, pues no hay incompatibilidad en este caso entre el carácter de administrador y el de arrendatario.

1—Leyes 250 del Estilo; 3 y 7, tít. 8, lib. 2, F. R. Véase: Jur. Crim., tom. 3, pág. 476; tom. 4, pág. 326, Ser. 1ª. Verb. *Confesión*, núm. 493 y nota del tomo 1º de la Inst.

2—Ley 15, tít. 13, Part. 2ª. Véase, verb. *absolución*, núms. 10 y 14 y notas del tom. 1º de la Inst.

3—Arts. 13 y 159 del Cód. Pen. anterior.

1a—Arts. 180 del Cód. de Proc., 1190, 1191 y 1193 del Cód. Civ. Puede verse además: ley 7ª, tít. 13, Part. 3ª; Caravantes, Ley de Enjuiciamiento, tom. 2, núm. 856; Escribano, verb. *confesión extrajudicial*. Tomo 1º de esta Instituta núm. 497 y nota.





CON

Confesión personal—Véase: *Filiación natural*, núm. 3.

Confeso—Véase: *Demandado*, núm. 3.

Conformidad—Véase: *Acreeedor*, núm. 2—*Venta*, núm. 5—*Apelantes*, núm. 1.

1. Conjucees—Que accidentalmente forman Tribunal por impedimento de los titulares, concluyen su misión desde el momento que dictan sentencia en el caso especial para que fueron insaculados—Jur. Civ., tom. 8, pág. 454, Ser. 1ª.

2. Conjucees—Que por recusación de los Camaristas titulares entran á formar parte del Tribunal, son los únicos competentes para resolver las cuestiones que se susciten sobre cumplimiento de la sentencia dictada—Jur. Com., tom. 6, pág. 548, Ser. 1ª.

1a. Conocimientos--La trasferencia que de ellos se haga sin espresar que las mercaderías se dan en prenda, no es bastante justificativo del contrato—Jur. Com., tom. 6, pág. 286, Ser. 1ª.

Consanguinidad—Véase: *Herencias trasversales*, núm. 2.

Consejo de Higiene—Véase: *Honorarios médicos*, núm. 2.

1b—Consejo General de Educación—Solo puede inter-

1—Se trata de un impedimento de recusación con causa. Si este causal no es permanente el sumario es exacto, mas no así si es permanente pues entonces los jueces titulares quedan absolutamente inhabilitados para entender en el juicio, debiendo subsistir los titulares hasta la conclusión del juicio y todos sus incidentes.

1a—Según lo determina el art. 758 del Cód. de Com. Al que alegue la existencia de la prenda le corresponde probarla, pues no puede oponerse á los acreedores del deudor la entrega de la cosa sin justificativo escrito —arts. 742 y 744, *ibid*.

1b—Según disposición del art. 694 del Cód. de Proc., el Agente Fiscal es parte en todo juicio *ab-intestato* en representación de los que pueden tener derecho á la herencia. Y debe continuar interviniendo hasta que haya un heredero reconocido y declarado por ejecutoria—art. 697 *ibid*—Por otra parte, el art. 3544 del Cód. Civ., dice que cuando no hay acreedores de la herencia y se hubiesen vendido los bienes hereditarios deberá declararse vacante la herencia, pasando ésta al Gobierno Nacional ó Pro-

CON

venir como parte en los juicios testamentarios después que haya cesado la intervención del Agente Fiscal—Jur. Civ. tom. 2, pág. 525, Ser. 2ª.

Consejo de Educación—Véase: *Posesión*, núm. 8—*Herencias transversales*, núm. 2.

1. Consentimiento tácito—Que se desprende de haber presenciado la construcción de las obras sin protesta, equivale al consentimiento escrito—Jur. Civ., tom. 3, pág. 569, Ser. 2ª.

Consentimiento tácito—Véase: *Despojo*, núm. 3.

Conservatorias—Véase: *Cámara*, núm. 5.

Consignación—Véase: *Contrato de locación*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 13—*Pago*, núms. 2 y 4—*Pago por consignación*, núm. 5.

Construcción—Véase: *Empresario*, núm. 1.

1. Constructor—Para que pueda ser responsabilizado por los materiales empleados, debe justificarse que éste los contrató por cuenta propia y no por la del propietario de la obra—Jur. Com., tom. 6, pág. 437, Ser. 1ª.

1b. Constructores—Si bien tienen privilegios especiales sobre el valor de la obra, no pueden oponerse á los del acree-

vincial, según fueren las leyes que rigen sobre las sucesiones correspondientes al Fisco. De aquí se desprende que tanto el agente Fiscal como el Consejo tienen en estos juicios su intervención propia, pero deslindada cuando éste reclama bienes á título hereditario. El primero interviene hasta tanto exista un heredero declarado, sea este el Fisco ó un particular, el segundo toma intervención desde el momento en que una herencia es declarada vacante. Los arts. 44, inc. 10, y 76 de la ley de Educación como el art. 119 de la ley Orgánica corroboran esta doctrina.

1b—La interpretación de las leyes que rigen los privilegios debe obedecer á dos principios generales: 1º No separarse de las palabras de la ley, en cuanto sea posible: 2º Considerar los privilegios restrictivamente, no extendiéndolos por analogía de un caso á otro. El rango del acreedor



CON

dor hipotecario, cuya anotación en el registro sea anterior á las que ellos hayan obtenido—Jur. Civ., tom. 1, pág. 313, Ser. 2ª.

1. Cónsul de Italia—Debe desempeñar personalmente el albaceazgo y sólo por ausencia puede delegar ese cargo en

hipotecario no está legislado exclusivamente por el art. 3916, Cód. Civ., como parece que lo entienden algunos autores. Los acreedores hipotecarios no están obligados á esperar las resultas del concurso para proceder á ejercer sus acciones contra las respectivas fincas, bastará que consignen ó añazen una cantidad que se juzgue suficiente para el pago de los créditos que se crean privilegiados á los de ellos, y que restituyan á la masa concursada lo que sobra después de cubiertas sus acciones—art. 3938, Cód. Civ., véase también el art. 2479 Cód. de Chile.—De nuestro artículo resulta que hay créditos que son privilegiados á los de los acreedores hipotecarios. Pero estos créditos preferentes no lo serán en general, tratándose de los acreedores de que habla en general en su primera parte el art. 3916, entre los que figuran los obreros que han construido ó reparado una casa ú obra y los individuos que han suministrado los materiales, si estos concurren con acreedores hipotecarios sobre el inmueble, que serán pagados primero, y con los gastos funerarios, y de justicia que han sido necesarios para la venta de ese objeto. De aquí resulta, que si bien los acreedores hipotecarios no tienen prelación sobre cualquier crédito, la tienen en general respecto á los obreros en el caso del art. 3916. Se dice en general en el párrafo anterior, porque el art. 3934 establece que: «los hipotecarios son preferidos sobre los bienes gravados con hipoteca. El privilegio se cuenta desde el día que se tomó razón de la hipoteca. Las inscripciones del mismo día concurren á prorrata.» Nuestro Cód. Civ. ha suprimido la hipoteca tácita que es una traba al desenvolvimiento económico de la propiedad. Han quedado los privilegios; pero éstos deben interpretarse estricta y restrictivamente: las Partidas, el Cód. de Com., Acevedo, Goyena, los Códigos de Francia y de Chile, que son los que tienen mas analogía con nuestra legislación desenvuelven la materia de un modo diferente á aquel con que es tratado en nuestro Cód. Civ. Por eso debe tratarse de evitar toda referencia á sus doctrinas sin embargo de que algunas veces es indispensable hacerlo. Es peligroso hasta pasar de un artículo á otro.

1—Según lo establecido en el art. 10 del tratado celebrado entre la República Argentina y la Italia, en caso de fallecimiento *ab-intestato* de algún ciudadano de las partes contratantes, el *Cónsul general, Cónsul ó Agente Consular de la Nación* á que pertenezca el finado ó sea el representante de dichos funcionarios, en ausencia de éstos, tendrá derecho para intervenir



CON

la persona que lo reemplace en su carácter oficial—Jur. Civ., tom. 1, pág. 628, Ser. 2ª.

1a. Cónsules—De naciones que tienen tratados especiales con la Rep. Argentina, no pueden acogerse á las disposiciones de la ley de 30 de Setiembre de 1865 sobre nombramiento de albaceas dativos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 628, Ser. 2ª.

1b. Cónsules extranjeros—Su intervención en las testamentarias no puede tener lugar si existen herederos en el país, aún cuando sean extranjeros y su domicilio no sea conocido—Jur. Civ., tom. 7, pág. 94, Ser. 1ª.

2. Cónsules extranjeros—Sus afirmaciones sobre hechos que no han presenciado no bastan para desvirtuar las constancias de una partida de defunción expedida en forma—Jur. Civ., tom. 9, pág. 331, Ser. 1ª.

Cónsules extranjeros—Véase: *Instrumento público*, número 1.

en la posesión, administración y liquidación judicial de bienes del finado, conforme á las leyes del país, en beneficio de los acreedores ó herederos legules del causante—Véase: Colección de tratados celebrados por la República Argentina con las Naciones extranjeras, tom. 1º, pág. 430.

1a—El art. 30 de la ley Nacional de 30 de Setiembre de 1865 establece que los cónsules extranjeros están autorizados para nombrar albaceas dativos en los casos que determina el art. 1º de la citada ley: esta autorización es aplicable solo á las naciones que no tengan tratados celebrados con la Rep. Argentina, pues para los que los tengan rigen exclusivamente las estipulaciones del tratado. Así lo determina el art. 14 de la ley citada, según el cual «Las Naciones que reclamasen el cumplimiento de alguna disposición incluida en esta ley y que pudiera estarlo en alguno de los tratados, solo podrán obtener lo exclusivamente pactado en el tratado.»

1b—La intervención de ellos solo tiene lugar cuando el causante hubiese fallecido sin dejar ascendientes ni descendientes ni cónyugo legítimos públicamente reconocidos como tales en el país—art. 1º de la ley de 30 de Setiembre de 1865.

2—El art. 104 del Cód. Civ., dice que el fallecimiento de las personas se prueba del mismo modo que el nacimiento; y el art. 80, enumera entre los medios justificativos, en primer término las constancias de los libros parroquiales: estos asientos tienen la presunción de verdad, salvo el de-



CON

1a. Contador—El Juzgado puede nombrarlo de oficio si los interesados no concurren al juicio decretado bajo apercibimiento—Jur. Civ., tom. 7, pág. 290, Ser. 1ª.

2. Contador—El nombramiento hecho por el Juez, en virtud de la oposición de uno de los interesados y sin el juicio verbal que la ley dispone, es nulo—Jur. Civ., tom. 1, pág. 406, Ser. 2ª.

1. Contadores—Inscripciones en la matrícula—Jur. Civ., tom. 3, pág. 471, Ser. 2ª.

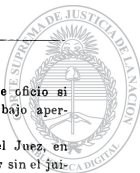
1b. Contencioso-administrativo—La Cámara no puede avocarse el conocimiento de un asunto que revista ese carácter pero en que de conformidad de partes conocen los jueces ordinarios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 521, Ser. 2ª.

recho de los interesados de comprobar su falsedad, art. 80 *ibid.* Las declaraciones de los cónsules no pueden tener influencia alguna sobre la validez ó nulidad de las partidas, pues en estos casos se guían por denuncias privadas que se le hacen, no adquieren certidumbre del hecho por sí mismos.

1a—El art. 668 *in fine* del Cód. de Proc. espresamente lo establece cuando dice que si los interesados no pudiesen ponerse de acuerdo ó *no asistiesen al juicio*, el nombramiento será hecho por el Juez.

2—Según el art. 668 del Cód. de Proc. las partes deben ser convocadas á junta con el objeto de nombrar contador y si los interesados estuviesen conformes pueden hacer el nombramiento en un solo escrito firmado por todos, sin esperar el día de la junta, y si en ésta no pudiesen ponerse de acuerdo, ó no asistieran al juicio, el nombramiento será hecho por el Juez. El objeto de la junta es, como dice Carabantes, «por ser más fácil y espedito ponerse de acuerdo los interesados, oyendo las razones que alegan unos y otros» tom. 3º, núm. 531. Los interesados deben exponer sus razones en la junta y de allí debe resultar el acuerdo ó desacuerdo de las partes y recién entonces queda habilitado el Juez para hacer el nombramiento.

1b—Parece que á esta resolución se opone el art. 1º del Cód. de Proc. que establece la improrrogabilidad de la jurisdicción conferida á los Tribunales, escepción hecha de la territorial. La jurisdicción ejercida por la Cámara en asuntos contencioso-administrativos es privativa y no puede ser prorrogada—art. 80, inc 3º de la Ley Org. de los Trib. de 1886. Sin embargo el art. 87 del Cód. de Proc. establece que consentida la providencia en que el Juez declare la competencia del Juzgado para entender



CON

2. Contencioso-administrativo—La Cámara de lo Civil es el único Tribunal competente para resolver los conflictos á que dé lugar la aplicación de las ordenanzas municipales—Jur. Civ., tom. 8, pág. 599, Ser. 1ª.

Contencioso-administrativo—Véase: *Resolución*, núm. 1—*Cámara*, núm. 4.

1. Contestación—De la demanda en rebeldía, no exonera al actor de la justificación de los hechos alegados—Jur. Civ., tom. 6, pág. 471, Ser. 1ª.

1. Contienda de competencia—Véase: *Cámara Comercial*, núm. 1—*Cámara de lo Civil*, núm. 3.

en una causa, «no podrá en adelante deducirse incompetencia por las partes, ni de oficio por los jueces inferiores ó superiores». De aquí resulta que toda causa es prorrogable y basta para ello que el Juez se haya declarado competente y que las partes hayan consentido ese auto. Véase: Jur. Civ., tom. 6, pág. 164, Ser. 1ª y tom. 1º, pág. 612, Ser. 2ª.

2.—Cuando la Municipalidad celebra un acto ó contrato en el carácter público que inviste y en el ejercicio de las funciones económicas y administrativas que la ley le ha confiado, ese acto ó contrato en su constitución y efectos queda sometido á la jurisdicción administrativa, ó contencioso-administrativa según los casos. El Dr. Moreno proclama esta doctrina en el tom. 1º de sus obras diciendo: «No es entonces la persona jurídica, ejercitando su capacidad y en los límites del derecho privado, sino la autoridad, que cumple con sus deberes en la gestión de los negocios públicos: no es una persona que adquiere, y se obliga en su interés individual, sino el funcionario que administra los intereses generales del municipio». Es necesario determinar en cada caso la naturaleza y caracteres del acto, del contrato, que origina la cuestión, para determinar la jurisdicción á que está sometido. En materia de obras públicas, es doctrina uniforme, que todo contrato celebrado por la administración en general, con los particulares sobre servicios ú obras públicas, es un contrato administrativo, sujeto en su celebración, ejecución y efectos á la jurisdicción contencioso-administrativa—Véase: Cabanous, Derecho Público y administrativo—Colmeiro, Balbil, Viviero y Ducrocq. Véase además verb. Cámara, núms. 1 y 6.

La rebeldía del demandado en el juicio civil, solo importa una confesión ficta que únicamente produce el efecto de dar por contestada la demanda, trabándose así la litiscontestación y dejando la causa conclusa, ó bien para prueba ó bien para sentencia, según fuere su naturaleza, de-





CON

Contra-escritura—Véase: *Nulidad*, núm. 23.

Contrario imperio—Véase: *Desistimiento*, núm. 2—*Recurso de fuerza*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 3.

Contratantes—Véase: *Billetes*, núm. 1.

1. Contrato—Celebrado en la Capital Federal, su cumplimiento debe exigirse en ella aunque el demandado se encuentre ausente—Jur. Com., tom. 6, pág. 596, Ser. 1ª.

2. Contrato—Su prórroga debe ser hecha en escritura pública para que pueda ser inscrito en el Registro Público de Com.—Jur. Com., tom. 6, pág. 350, Ser. 1ª.

3. Contrato—Por instrumento privado, la parte contratante tiene derecho á exigir del mandatario la entrega de la pieza original en donde conste el mandato, ó una cópia de ella en forma auténtica—Jur. Civ., tom. 7, pág. 155, Ser. 1ª.

4. Contrato—Cuya celebración se ha ventilado por medio de cartas, la presentación de éstas forma prueba plena tratándose de su cumplimiento—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201, Ser. 1ª.

biendo dictarse aquella según corresponda—Ley 1ª, tft. 11, lib. 4, R. C.; F. S. C. P., tom. 9, pág. 407, Serie 1ª. El hecho de darse por contestada la demanda en rebeldía del demandado, no atribuye á éste la prueba que corresponde al actor producir—F. S. C. P., tom. 9, pág. 405, Serie 1ª. Febrero reformado por Vicente y Caravantes, tom. 4, núm. 422; Malaver, Curso de Proc. tom. 1º, núms. 717 y 722; Conde de la Cañada, Juicios civiles, Parte 1ª, cap. 4, núm. 22.

1—Siempre que el demandado se encuentre allí aunque sea accidentalmente, como lo decía la Cámara, y lo dispone el art. 4 del Cód. de Proc. De modo que el sumario está errado, pues si está ausente no puede ser demandado sino en su domicilio, excepción hecha del cobro de una letra de cambio—art. 783, Cód. de Com.

2—Se trata de un contrato social, que vencido el término, los socios quisieron renovarlo presentando un escrito al Juez en el que solicitaban se inscribiera en el Reg. de Com. la voluntad de prorrogarlo á lo que no se hizo lugar porque su monto excedía de 1,000 pesos—arts. 47, 393 y 486 del Cód. de Com.

3—Art. 1939, Cód. Civ.

CON

5. Contrato—Sobre compra de cosechas por un precio determinado en dinero y según las que resulten, se conceptúa contrato por valor indeterminado á los efectos del impuesto del papel sellado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 512, Ser. 2ª.

6. Contrato—De sociedad, su rescisión implica necesariamente que cada sócio recupere los bienes ó valores que haya apostado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 423, Ser. 2ª.

7.—Contrato—Su rescisión por mutuo consentimiento, no puede fundar una acción por daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 423, Ser. 2ª.

8. Contrato—Se conceptúa uno para cada comprador cuando son varios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 481, Ser. 2ª.

9. Contrato—De venta, la acción sobre cumplimiento dirigida contra los martilleros es procedente siempre que éstos no hayan fijado en los avisos el nombre del propietario—Jur. Civ., tom. 2, pág. 484, Ser. 2ª.

10. Contrato—De compraventa de mercaderías por mayor valor de 200 pesos, la prueba testimonial es insuficiente para justificar su existencia si no existe un principio de prueba por escrito procedente del demandado; las copias de cartas del demandante no son bastantes para justificar la prueba testimonial—Jur. Civ., tom. 2, pág. 277, Ser. 2ª.

6—En el caso presente la rescisión se operó por mutuo consentimiento y sin que se hubiese llenado el objeto de la sociedad. El sumario tiene su fundamento en los arts. 1200, 1201, 1731 y 1773 del Cód. Civ.

8—Este sumario no fué materia de resolución en el caso anotado; no debe considerarse como jurisprudencia sentada.

9—En este caso el comprador ignora el nombre de la persona en cuyo nombre han procedido los rematadores. Los martilleros en el ejercicio de sus funciones son directamente responsables respecto á las personas con quienes contratan, salvo el caso previsto en la última parte del art. 337 del Cód. de Com., aplicable al caso de acuerdo con el art. 122 del mismo Código.

10—La prueba testimonial es inadmisibie en los contratos que exceden de 200 pesos—Arts. 1193, Cód. Civ., y 180 Cód. de Proc.—La ley sin embargo establece su admisibilidad cuando se produce en juicio un prin-



CON

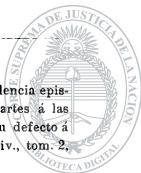
11. Contrato—Que resulte de una correspondencia epistolar debe declararse válido y obligarse á las partes á las prestaciones que resulten de su conjunto ó en su defecto á la indemnización de daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

12. Contrato—Puede pedir su cumplimiento el tercero contratante con un mandatario general, sin que puede ser enervada su acción por el mandante bajo pretexto de haber estralimitado sus facultades el mandatario—Jur. Civ., tom. 2, pág. 337, Ser. 2ª.

cipio de prueba por escrito; mas para que éste sea considerado tal, es necesario que reúna dos condiciones: 1º Que el documento emane *del adversario*, de su causante ó de parte interesada, ó que tendría interés si viviera y que haga verisímil el hecho litigioso—arts. 1191 y 1192, Cód. Civ., —escepción hecha de los libros de comercio: 2º Que el documento que lo constituya sea referente al contrato ó al hecho cuestionado. De donde se sigue que las cartas ó documentos del adversario sin relación alguna con el litigio no pueden servir de principio de prueba escrita. Si se establece el principio contrario casi no habría contrato que no pudiese probarse por testigos, frustrando así la intención del legislador que ha sido restringir en materia de obligaciones la prueba testimonial que ha sido siempre considerada como peligrosa. Es necesario sinembargo no olvidar que hay casos en que la ley no exige ese principio de prueba, como en los casos de error, dolo, fraude, etc.—art. 1191, *ibid.*

11—Debe ser válido porque así lo prescribe el art. 1147 del Cód. Civ., cuando dice: «entre personas ausentes, el consentimiento puede manifestarse por medio de agentes ó *correspondencia epistolar*». Y debe obligar á las partes á las prestaciones estipuladas ó en su defecto indemnizarse los daños y perjuicios, porque así lo prescriben los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ.

12—Este sumario no fué materia de resolución en la Cámara, ha sido intercalado por el compilador de los fallos: tampoco es exacto el principio sentado. Es cierto que el mandante no puede enervar la acción del tercero que ha contratado con el mandatario, como lo prescribe el art. 1946 del Cód. Civ.; mas esto solo sucede cuando no se alega que el mandatario se hubiese estralimitado en su mandato, pues en este caso la acción del tercero puede ser enervada por el mandante como lo establece el art. citado, cuando dice que los actos jurídicos ejecutados por el mandatario y en los límites de sus poderes son considerados como hechos por el mandante personalmente. No porque el mandato sea general el manda-



CON

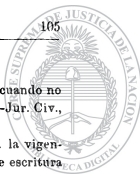
13. Contrato—De arrendamiento, su inscripción cuando no se desconoce su autenticidad es de puro derecho—Jur. Civ., tom., 2, pág. 532, Ser. 2ª.

14. Contrato—De uso y habitación, anterior á la vigencia del Código Civil, no requería la existencia de escritura pública ni privada, la prueba testimonial era suficiente para justificarlo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 573, Ser. 1ª.

tario está facultado para ejecutar cualquier acto jurídico que obligue al mandante, pues como lo dice el art. 1880 del Cód. Civ., el mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración, aunque el mandante declare que no se reserva ningún poder: y el 1881 enumera los casos en que un mandatario general necesita poderes especiales, lo que implica decir que si el mandatario general celebra uno de esos actos que necesitan poder especial, se estralimita en su mandato, y el mandante puede enervar la acción del tercero.

13—También este sumario va más allá de lo que el fallo de la Cámara ha querido espresar. En el caso presente se resolvió que la cuestión era de puro derecho porque además de que su autenticidad no se desconocía, la oposición se fundaba en hechos que constaban de autos en cuyo caso no puede aplicarse el art. 104 del Cód. de Procedimientos. No habría necesidad de producir prueba sobre hechos que ya están comprobados en autos, pero si la razón de la oposición no constara en autos habría necesidad de comprobarla, para lo cual sería necesario la apertura de la causa á prueba.

14—En nuestra antigua legislación el uso y la habitación eran clasificadas de servidumbres personales —Ley 1ª, tít. 31, Part 3ª.—Y entre los modos de constituirse figuraba el contrato ó concesión —Ley 14, ibid.—La Ley 2, tít. 16, Lib. 5, R. C., que dice: «Pareciendo que alguno se quiso obligar á otro por promisión ó por algún contrato ó en otra manera, sea tenido de cumplir aquello á que se obligó y no pudo tener escepción que quiere decir prometimiento con cierta formalidad de derecho. ... ó que no fué hecho ante Escribano público, mandamos que toda- via vala la dicha obligación ó contrato que parezca que uno se quiso obligar á otro.» De aquí se sigue que la prueba testifical era admisible cuando el contrato no se hubiese formalizado ante escribano público. Según disposición terminante de nuestro Cód. Civ., la constitución del derecho de uso y habitación, solo puede tener lugar por medio de escritura pública —arts. 2949 y 1184, inc. 1ª—Aun cuando se haga derivar de una donación el derecho de uso y habitación, el requisito del instrumento público siempre se hace indispensable,—arts. 1810 y 1812,—y si esos mismos derechos se fundan en la existencia de cualquier contrato distinto del de donación, también la escritura pública es de rigor,—Art. 1184, inc. 1ª citado.



CON

15. Contrato—Como tal se reputan las manifestaciones de las partes, hechas en juicio y no pueden eludir su cumplimiento—Jur. Civ., tom. 3, pág. 560, Ser. 2ª.

16. Contrato—Hecho en escritura pública, para probar las modificaciones ó interpretaciones se requiere prueba escrita, la testimonial no es bastante—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

17. Contrato—Las partes no pueden exigirse recíprocamente sino lo que está explícitamente estipulado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 199, Ser. 1ª.

18. Contrato—Entre espropiante y espropiado, no sufre alteración ni se invalida para el espropiante por los litigios

15—Este sumario no fué materia de discusión en el caso á que se refiere, es solo un considerando del Juzgado de primera instancia que no se trató en la Cámara. Sin embargo el principio sentado en el sumario es exacto porque no es posible variar caprichosamente esas manifestaciones, de lo contrario jamás podría un litigante saber á qué atenerse en la escuela de un pleito, si las manifestaciones hechas hoy pudiesen quedar sin efecto en virtud de otras hechas mañana.

16—Es de un error evidente el contenido de este sumario. Para probar las *modificaciones* de un contrato hecho en escritura pública se requiere prueba escrita, mas no para comprobar su *interpretación*. Esto último no lo dijo la Cámara. En cuanto á lo primero la razón es obvia, las modificaciones introducidas en su contrato son un contrato en sí mismas y está sujeto en cuanto á su forma á las solemnidades requeridas para éste por los arts. 193, Cód. de Com. y 1193 Cód. Civ. Es por otra parte un principio de procedimiento que contra el testimonio escrito no se admite el testimonio no escrito. Véase: Inst. tom. 1, verb. Contrato, núm. 535, y Contrato escrito, núm. 572 con sus notas respectivas.

18—No lo invalidan los juicios que se formen si el espropiado estuvo en posesión del inmueble al tiempo de la espropiación, pues en este caso, dada la posesión desaparece el derecho del espropiante para exigir del espropiado la exhibición de su título, siempre que la posesión sea suficiente para conferir al poseedor derechos reales. Dada la posesión desaparece para el poseedor la obligación de probar su dominio, él posee porque posee, y entonces para que el espropiante pueda rechazar una acción por pago del precio de la espropiación, tendría que comprobar que la cosa no pertenece al expropiado. Es decir, tendría que destruir la presunción legal que arroja la posesión á favor del poseedor.



CON

que sobre propiedad del bien se formen con posterioridad á aquel acto—Jur. Civ., tom. 8, pág. 529, Ser. 1^a.

19. Contrato—La novación de una deuda sin espresar la existencia de una prenda hace desaparecer el contrato, en caso de que hubiese existido al contraerla—Jur. Com., tom. 6, pág. 286, Ser. 1^a.

Contrato—Véase: *Auto*, núm. 5 — *Obligación de hacer*, núm. 1—*Obligado solidariamente*, núm. 1—*Comprador*, núm. 5—*Sociedad*, núm. 1—*Acción de daños y perjuicios*, núm. 1—*Dominio*, núm. 2—*Corredor de Bolsa*, núm. 1—*Venta*, núm. 3—*Locatario*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 8—*Prueba*, núm. 16—*Arrendamientos*, núm. 1—*Renta vitalicia*, núm. 1—*Jurisdicción*, núm. 2—*Locatario*, núm. 2—*Conocimientos*, núm. 1—*Cláusula*, núm. 2—*Litis-contrato*, núm. 1—*Locación de servicios*, núm. 3—*Compraventa*, núm. 3—*Boleto*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 7—*Promesa*, núm. 3—*Nulidad de una convención*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 3—*Nulidad por estilionato*, núm. 1—*Mercaderías*, núm. 1—*Principio de prueba*, núm. 1—*Oro sellado*, núm. 1.

Contrato administrativo—Véase: *Orden*, núm. 1.

1. Contrato bilateral—Requiere tantos originales para su validez en juicio, cuantas sean las partes obligadas, aunque

19—Desde que la prenda no se constituya de nuevo, ni se espresen en la nueva obligación que ella subsiste á los efectos del pago. Las obligaciones se extinguen entre otros medios por la novación: la prenda es un accesorio de la obligación principal, estinguida ésta se estingue la prenda como accesorio, en virtud del principio de que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal.

1—Este sumario no es exacto en la parte que establece la necesidad de tantos ejemplares cuantas sean las partes obligados, sino que debiera decir, tantos ejemplares cuantas partes haya con un interés distinto. Es la diversidad de obligaciones no la diversidad de obligados, lo que hace necesario la formación de varios ejemplares. El art. 1021 del Cód. Civ. así lo preceptúa. No puede argumentarse en contra de esta disposición diciendo que este artículo solo se refiere al caso en que el acto quede perfecto con el solo otorgamiento de la escritura privada y que cuando se trata de



CON

los actos bajo firma privada puedan formarse con las solemnidades que las partes juzguen convenientes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 321, Ser. 1ª.

2. Contrato bilateral—Al que se considere damnificado por la mala ejecución corresponde iniciar la acción, si no lo hace se le conceptúa conforme con el cumplimiento dado por la otra parte y obligado en consecuencia á cumplirlo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 491, Ser. 1ª.

Contrato bilateral—Véase: *Mandato*, núms. 3 y 5.

Contrato civil—Véase: *Anticipo*, núm. 1.

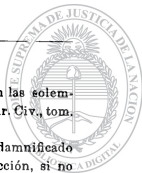
Contrato de adquisición—Véase: *Adquirente condicional*, núm. 1.

Contrato de arrendamiento—Véase: *Embargo de los alquileres*, núm. 1.

Contrato de comercio—Véase: *Fianza*, núm. 1.

1. Contrato de compraventa—Los avisos publicados por

actos que deben constar de escritura pública para que existan de una manera definitiva no sea aplicable el art. 1021: porque, si bien es cierto que este artículo se refiere á los contratos que pueden hacerse en instrumento privado, pues para los que deben hacerse en escritura pública es otra la forma y no hay necesidad de tantos ejemplares cuantas sean las partes, sino de una sola escritura que se extiende en el Registro de Escribano, pero también es cierto que siendo el contrato de los que pueden hacerse bajo forma privada de acuerdo con el art. 1187, es evidente que el art. 1021 le es aplicable. Tampoco puede argumentarse diciendo que cuando se trata de una obligación de hacer en las que por su propia naturaleza se trata de asegurar su cumplimiento por parte del obligado y que basta el documento que establece el compromiso de éste, porque ningún contrato bilateral es una obligación que tenga por objeto un hecho solo del obligado, sino que siempre ambas partes son obligadas y cada una de ellas debe tener un ejemplar para obligar á la otra á cumplir con su obligación pues no habría equidad si solo una parte pudiese obligar á la otra sin que la recíproca fuese posible. Esta es la doctrina sentada por nuestra ley civil fundada en la opinión de los mejores autores como puede verse en Zachariæ, párrafo 591, nota 10; Bonnier, núms. 561 y siguientes; Cód. Francés, art. 1325; Goyena, art. 1207; Aubry y Rau, párrafo 756, nota 13; Merlin, verb. Double Escrit.



CON

los rematadores son las bases del contrato celebrado con los compradores—Jur. Civ., tom. 8, pág. 163, Ser. 1ª.

1. Contrato de locación—No puede ser considerado como vicio de los títulos y en consecuencia no puede declararse desistido de la compra al comprador que se oponga á la oblación del precio por no haber tenido conocimiento del contrato—Jur. Civ., tom. 1, pág. 259, Ser. 2ª.

2. Contrato de locación—La falta de pago de dos mensualidades consecutivas hace procedente la rescisión — Jur. Civ., tom. 1, pág. 429, Ser. 2ª.

3. Contrato de locación—Cuando se ha estipulado la forma y fecha cierta en que debe efectuarse el pago del arrendamiento, el locatario no puede acojerse á la disposición que fija dos mensualidades de mora para la rescisión del contrato, ni aun al pago por consignación, si no lo hubiese hecho en el día fijado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 245, Ser. 1ª.

4. Contrato de locación — Resuelto por culpa del locatario, el locador no está obligado á pagar las mejoras hechas

1—No puede desistir de la compra porque el art. 522 del Cód. de Proc. solo autoriza el desistimiento en caso de adolecer de vicios el título. El comprador en este caso puede hacer valer las acciones que le corresponden por los daños y perjuicios que le ocasiona el contrato cuya existencia ignoraba.

2—Art. 1579, Cód. Civ. Véase verb. *Contrato de locación* núm. y nota 567 del tom. 1º de la Inst. Puede verse también verb. *Alquiler* núm. y nota 158. id. id. F. S. C. N., Ser. 2ª, tom. 12, pág. 241.

3—En el contrato se estipuló que: «la falta de puntualidad en el pago de los alquileres, será tenido como causa suficiente para rescindir el contrato», y que el locatario debía hacer el pago en el domicilio del locador, y en caso de no poder obtener el recibo por cualquiera causa, debía depositar inmediatamente el importe del alquiler mensual. Parece que es proceder con estrechado rigor dar por rescindido un contrato de arrendamiento por el solo retardo de algunos días en el pago del alquiler, pero las partes se habían sometido voluntariamente á ese rigor, estipulándolo así espresamente en el contrato al cual deben someterse como á la ley misma.

4—Arts. 1539 y 1620 Cód. Civ.



CON

en la cosa arrendada, que serán reputadas, cualquiera que sea su valor, como accesorias de la cosa—Jur. Com., tom. 5, pág. 28, Ser. 1^a.

5. Contrato de locación—Privado, solo produce efecto contra tercero desde su presentación en juicio—Jur. Com., tom. 5, pág. 253, Ser. 1^a.

6. Contrato de locación—No puede declararse rescindido en el juicio sumario de desalojo, se requiere juicio ordinario—Jur. Civ., tom. 9, pág. 355, Ser. 1^a.

7. Contrato de locación—Corresponde al locador que pide la rescisión, justificar la mora del locatario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 426, Ser. 2^a.

8. Contrato de locación—Que tenga por base un bien embargado, es nulo para el ejecutante si fuese de fecha posterior al embargo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 353, Ser. 1^a.

9. Contrato de locación—Celebrado por el fallido, la acción á él no puede ser trasferida por el concurso sin el

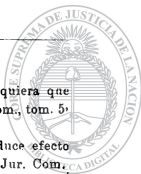
5—Conforme con el art. 1034 del Cód. Civ., los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros la verdad de la fecha espresada en ellos, sino desde su exhibición en juicio—art. 1036 inc. 5º id. id.

6—El juicio á seguirse con motivo de la rescisión de un contrato, no tiene demarcado por la ley un procedimiento especial en cuyo caso no puede procederse sino en la forma ordinaria como lo establece el art. 65 del Cód. de Proc.

7—De acuerdo con la doctrina que resulta de los arts. 509, 1204, 1556 y 1579 del Cód. Civ. que se relacionan en el caso presente con los arts. 618, 747, 756 y 1212. Véase tom. 2, pág. 340, Ser. 1^a de la Jur. Civ.—Tom. 1 de la Inst. verb. Alquiler, núm. 158 y su nota relativa que trata de esta cuestión.

8—De acuerdo con lo que disponen los arts. 1174, Cód. Civ., y 229, Ley Org. de los Trib. de la Cap., igual al 239 de la Ley de 1886. Véase, tom. 6, pág. 238, Ser. 1^a de la Jur. Com.

9—Este sumario no es exacto, ni la Cámara jamás resolvió el caso en el propio sentido, solo dijo que no se podía ordenar su cesión sin la intervención del propietario, aduciéndose en el caso ocurren como razón principal de la resolución, que se gestionaba la rescisión del mismo con-



CON

consentimiento del propietario — Jur. Com., tom. 6, pág. 284, Ser. 1ª.

Contrato de locación—Véase: *Locatario*, núm. 7—*Jurisdicción*, núm. 1—*Mejoras*, núms. 1 y 3—*Arbitros*, núm. 1.

1a. Contrato de mútuo—Aun cuando puede ser verbal requiere un principio de prueba por escrito para su comprobación judicial, siempre que exceda de 200 nacionales—Jur. Civ., tom. 2, pág. 179, Ser. 2ª.

1b. Contrato escrito—Solo en esta forma puede justificarse respecto de terceros el contrato de prenda—Jur. Com., tom. 8, pág. 286, Ser. 1ª.

Contrato privado—Véase: *Arras*, núm. 2.

Contrato público—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 2.

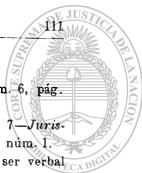
1c. Contratos—Que la Municipalidad celebra como persona jurídica, la decisión de las cuestiones que se susciten corresponde a la jurisdicción común—Jur. Civ., tom. 2, pág. 94, Ser. 2ª.

trato ante la jurisdicción civil. En cuanto al principio sentado en el sumario es evidente su error puesto que el art. 1583 del Cód. Civ. autoriza el subarriendo de la cosa y la cesión del contrato cuando no hubiese pacto en contrario. El ejercicio de este derecho, como que no es inherente a su persona pasa al concurso como lo dispone el art. 1534 Cód. de Com.

1a—Art. 2246, Cód. Civ.

1b—No puede oponerse a los acreedores del deudor la entrega de la cosa sin justificarlo por escrito—arts. 742 y 744 Cód. de Com.

1c—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de un voto. Se trata de una cuestión sobre cumplimiento de un contrato celebrado por la Municipalidad con un particular. La mayoría fundó su voto diciendo que la decisión de las cuestiones que tienen por origen actos de esta naturaleza no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo que la ley ha establecido para aquellos casos en que la Municipalidad, ejerciendo funciones propias de la autoridad que inviste como poder público, vulnera con sus actos intereses particulares. Los contratos no pertenecen a la categoría de los actos que puede ejecutar la Municipalidad haciendo uso de las facultades de imperio ó mando que la ley le ha conferido en el gobierno de los intereses de la comunidad. El rol de la Municipalidad



CON

2. Contratos—Sobre explotación de una línea de tramways corresponde á la jurisdicción civil—Jur. Civ., tom. 7, pág. 100, Ser. 1^a.

celebrando contratos con los particulares, es el de simple persona civil, y en tal caso no puede sustraerse, respecto de las relaciones jurídicas que por su medio se establecen, de la jurisdicción común. La minoría adujo como fundamento de su voto las siguientes consideraciones: que cuando la administración celebra un contrato sobre obras destinadas al servicio público, lo hace con el carácter de autoridad pública y en el ejercicio de funciones económicas y administrativas que la ley le confía, puesto que solo en ese carácter y en virtud de esas funciones podría contratar con particulares. Es principio general sentado que cuando la Municipalidad contrata sobre obras públicas, las cuestiones que se susciten en su cumplimiento son del resorte de lo contencioso-administrativo. Es necesario distinguir los casos en que la Municipalidad procede, como puede hacerlo, como un simple particular de aquellos en que solo lo hace en su carácter público de Poder administrador. La doctrina sentada por la mayoría es la aceptada en nuestra jurisprudencia como puede verse en el tom. 1^o, Inst. verb. *Municipalidad*, núm. 1789: en este tom. véase verb. *Cámara*, núm. 7.

2—La jurisdicción de los jueces civiles y comerciales está demarcada por los arts. 46 y 49 de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., según la ley que rige el acto de que deban conocer. No es á la calidad de comerciante de las partes á que debe atenderse sino á la naturaleza del asunto y á las leyes que lo rigen. Los contratos sobre explotación de una línea de tramways, son contratos de locación y siendo la locación por regla general un contrato civil, regido por leyes civiles y por excepción un contrato comercial cuando es de uso ó goce de una cosa mueble—art. 578 Cód. de Com.—la cuestión se reduce á saber si el Tramway es una cosa mueble ó inmueble. El Tramway se compone de sus rieles adheridos al suelo de una manera permanente, de modo que son inmuebles por accesión, como lo define el art. 2315 del Cód. Civ. Se compone igualmente de sus estaciones que son inmuebles por su naturaleza—art. 2314 *ibid*—Son inmuebles por accesión, los carruajes, caballos y demás elementos, los que á pesar de ser muebles por su naturaleza son considerados como inmuebles porque han sido puestos intencionalmente por el propietario como accesorio del inmueble—art. 2316, *ibid*—No debe confundirse la explotación de un tramway como empresa de trasportes, con el arrendamiento ó la venta: lo primero expresa relaciones de la empresa con terceros ó con el público á quien presta sus servicios y puede ser un acto comercial; lo segundo es un contrato entre el propietario y el arrendatario ó el comprador, constituye un contrato civil regido por leyes civiles.



CON

3. Contratos—No solo obligan á lo que esté formalmente expresado, sino tambien á todas las consecuencias que pueden considerarse como virtualmente comprendidas en ellos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 380, Ser. 1ª.

4. Contratos—En que se estipula una moneda especial para su cumplimiento, no pueden ser cancelados con papel moneda por su valor escrito—Jur. Com., tom 6, pág. 289, Ser. 1ª.

Contratos—Véase: *Convenciones*, núm. 1.—*Prueba testimonial*, núm. 1.

1a. Contratos con terceros Las partes no están obligadas á presentarlos á solicitud de la contraria, aun cuando en ellos puedan haber referencias pertinentes al litigio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 234, Ser. 1ª.

1b. Contribución Directa—Y todos los impuestos cuyo pago debe hacerse en plazos periódicos, la obligación de pagarlos se prescriben por cinco años—Jur. Civ., tom. 7, pág. 336, Ser. 1ª.

2. Contribución Directa—El pago hecho por el que no posee no interrumpe la prescripción—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

Convención—Véase: *Intereses*, núm. 1 — *Intereses compuestos*, núm. 1—*Error*, núm. 2—*Cuentas pendientes*, núm. 1.

1c. Convenciones—Hechas en los contratos, forman para

3—Art. 1198, Cód. Civ.

4—Véase: *Moneda especial*, núm. 1.

1—No se puede obligar á la contraparte á producir la prueba del derecho de la otra parte. Sería obligarla á producir una prueba contra sí misma.

1b—Art. 4027, inc. 3º, Cód. Civ.

2—Porque no es una demanda contra el poseedor, ni la privación, ni la perturbación siquiera de la posesión, ni importa el conocimiento de su parte de la existencia del derecho de otro. Si algo prueban los registros de la Contribución Directa, no es la interrupción de la posesión sino que para los efectos de este impuesto el que paga es reconocido como dueño.

1c—Art. 1197 Cód. Civ.



CON

las partes una regla á la cual deben someterse como á la ley misma—Jur. Civ., tom. 6, pág. 284, Ser. 1ª.

2a. Convenciones—Entre mandante y mandatario, no afectan los derechos del tercero que ha conseguido una condenación en costas por la que puede ejecutar directamente al mandante—Jur. Civ., tom. 9, pág. 374, Ser. 1ª.

1. Convenio—Entre el abogado y su patrocinado, por el cual aquél no puede cobrar por sus honorarios mas de la mitad de lo que resulte á favor del último á la terminación del litigio, no inhibe al primero para ejecutar por su importe antes que el pleito sea fallado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 293, Ser. 2ª.

2b. Convenio—Entre herederos mayores en el cual se adjudique bienes de la herencia, se conceptúa como partición, y presentado ante juez competente puede pedirse su cumplimiento, pero en ningún caso desistir de lo en él estipulado

2a—Esta convención sería *res inter alios acta*, para el tercero, y el mandante no puede en manera alguna evitar su responsabilidad fundado en el convenio celebrado con su mandatario.

1—A esta ejecución se le opuso las escepciones de inhabilidad de título y espera. La primera solo es eficaz cuando se funda en vicios ó defectos del título mismo como lo establece la jurisprudencia uniforme de nuestros Tribunales y lo enseñan los prácticos entre otros Caravantes en su tom. 6º, pág. 332. En cuanto á la segunda escepción tampoco es procedente, porque no existía en el convenio cláusula alguna que estableciera plazo para el pago de los honorarios ni que subordinase á condición alguna el derecho á cobrarlos. Véase: Inhabilidad de título, núm. 6.

2b—El art. 3462 del Cód. Civ. autoriza á los herederos mayores de edad á hacer la división de la herencia en la forma que juzguen mas conveniente, y aunque el convenio no constituya una verdadera división de la herencia en la forma que juzguen más conveniente, y aunque el convenio no constituya una verdadera división de la herencia, sin embargo se trata de adjudicaciones, debiendo quedar el acto comprendido entre las disposiciones del art. citado, bajo este aspecto reúne todos los requisitos de una convención y como tal deben respetarla como á la ley misma—art. 1197, *ibid.*—Desde que el acto no contenga cláusula resolutoria las partes no pueden disolverlo y solo pueden pedirse su cumplimiento—art. 1204 *ibid.*

CON—COR

sin la conformidad de todos los interesados —Jur. Civ., tom.

2, pág. 303, Ser. 2ª.

Convenio—Véase: *Fiador*, núm. 4.

Convenios—Véase: *De oficio*, núm. 2.

Cónyuge inocente—Véase: *Separación de bienes*, núm. 8.

Cónyuge supérstite—Véase: *Derecho hereditario*, número 1.

Coobligados—Véase: *Obligaciones mancomunadas*, número 1.

1. Copia—Cuando el demandado reconviene al contestar la demanda solo debe presentar la de la reconvencción pero no la de la contestación á la demanda—Jur. Civ., tom. 7, pág. 457, Ser. 1ª.

1a. Copias—O testimonios de escrituras pueden presentarse impresas—Jur. Com., tom. 6, pág. 520, Ser. 1ª.

Copias—Véase: *Término*, núm. 12.

Propietario—Véase: *Condominio*, núm. 4.

Corrección disciplinaria—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 6.

Corredor—Véase: *Certificado*, núm. 2.

1b. Corredor de Bolsa—Que en cumplimiento de órdenes

1a—El Cód. Civ., no se opone á que las copias sean impresas. No se puede decir que esta forma esté escluida por la circunstancia de que el art. 979 del Cód. Civ. dice que los documentos públicos deben ser hechos por escribanos públicos. Tampoco puede argumentarse diciendo que la ley de sellos gradúa el impuesto por cada foja manuscrita y que el fisco se perjudicaría si hubiese de aplicarse el mismo impuesto á las fojas impresas que á las manuscritas, pues la ley de sellos guarda silencio sobre el particular.

1b—Corresponde averiguar en este caso, si los arts. 2055 y 2057 del Cód. Civ. son aplicables: si con arreglo al art. 2051 ha habido contrato aleatorio: si ha habido juego como lo determina el art. 2052. Este último art. dice: «El contrato de juego tendrá lugar cuando dos ó más personas entregándose al juego, se obliguen á pagar á la que ganare una suma de dinero ó otro objeto determinado.» Esta definición como se vé, no comprende el caso de que se trata, porque él supone: 1º un contrato, 2º dos



COR

del comitente verifica diferentes operaciones sobre papeles

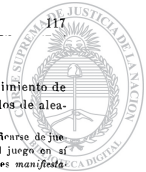
ó más personas, 3º que se entreguen al juego, 4º que se obliguen á pagar á la que ganare una suma de dinero ú otro objeto determinado. Ahora bien, el requisito 1º no existe, porque solo ha habido el contrato entre los corredores y el comitente para la compra y venta de acciones y no el contrato para jugar, que es el que la ley se refiere. El 2º tampoco existe, porque los corredores son simples intermediarios en las operaciones y las personas que compran y venden no aparecen en relación con el comitente sino en el hecho de comprar ó vender acciones. El 3º menos, porque no se indica siquiera qué personas se entregan al juego con el comitente en el supuesto que éste hubiera querido jugar efectivamente. Y menos aún existe el 4º requisito, porque no consta en manera alguna qué suma de dinero ú otro objeto determinado hubiera de pagarse al ganador: y aún suponiendo que esta condición existiera, no por esto habría juego puesto que faltan las otras tres condiciones. No debe olvidarse por otra parte que «no son deudas de juego, sino las que resultan directamente de una convención de juego ó apuesta»—art. 2060—El tercero, que no es de la partida tiene siempre derecho á ser pagado de la anticipación que hubiese hecho á uno de los pagadores. Para que los corredores carecieran de derecho á exigir del comitente el reembolso de lo anticipado por ellos, pagando las sumas que éste dejare en descubierto, sería preciso que *el mandato hubiese sido para jugar por cuenta del mandante ó en sociedad de éste con el corredor*—art. 2061—El juego no está prohibido, de una manera absoluta sino limitada por el Cód. Civ. El Cód. de Com. no tiene más referencia á él que el art. 1515. Por otra parte, el agiotaje está permitido y tiene sus ventajas. El Cód. Civ. no lo prohíbe, ni podía ocuparse de él porque tiene un carácter mercantil. La compra de dinero con papel ó vice-versa, como la de cualquier mercadería ó efecto comercial, es una operación que nada tiene de ilícito en sí misma, ni aun por el hecho de aprovechar ciertas circunstancias para ganar crecido interés, porque es sabido que para ganar hay que aprovechar ciertas circunstancias y que ganar es el fin del comercio—Véase regla 5ª, art. 296 Cód. de Com.—En la ley mercantil solo se reprime indirectamente el «giotaje en caso» de quiebra, declarando culpable á la producida por la pérdida de fuertes sumas de dinero en el juego. Queda la prohibición de contratar sobre cosas ilícitas. El art. 198 del Cód. de Com. dice: «Los contratos ilícitos, aunque recaigan sobre obligaciones de comercio *no producen obligación ni acción entre los que han tenido ciencia del fraude*. Son ilícitos los contratos sobre objetos prohibidos por la ley, ó cuyo fin fuese manifestamente ofensivo de la sana moral ó de las buenas costumbres. En el caso presente, la operación recae sobre objetos de comercio lícito, como son compra y venta de oro, acciones de Bancos, etc., operaciones que determinan los precios corrientes de los papeles de crédito susceptibles de cotización—arts. 207 y



COR

de comercio, puede exigir judicialmente el cumplimiento de los contratos que para él no pueden ser calificados de alea-

515 Cód. de Com.—Aunque las especulaciones pudiesen calificarse de juego, sería preciso que ese juego fuere prohibido por que el juego en sí mismo no es contrario al derecho natural. El juego no es *manifestamente* contrario á la sana moral y á las buenas costumbres, cuando más lo será el vicio, la pasión del juego. El Código de Com. habrá tenido sus razones para no reprimir el juego, sino en el caso y forma en que lo ha hecho. Se juega lo mismo á la lotería que á las barricas de azúcar, como se juega á la suba y baja de los papeles cotizables en la Bolsa. Por qué se juega? ¿Dónde concluye la especulación permitida y empieza el juego prohibido? Son estas cuestiones muy delicadas y oscuras, y en la duda debe estarse por la libertad que es la regla. El que busca mercado á los naipes y especula sobre la suba de esta mercancía, ¿hace un acto más moral que el que lleva títulos á la Bolsa y especula sobre la suba? ¿Las agencias de loterías son más morales que la Bolsa? ¿Qué sanción tiene el Cód. de Com. para el juego? ¿Qué precaución ha tomado el Reglamento de la Bolsa para evitar que sea convertida en un garito? Para lo primero está el art. 1515: para lo segundo, el derecho de reclamar los títulos vendidos, sin poder estipular pactos para resolver las ventas en pago de diferencias, y el deber por parte de los corredores de cumplir pronto y fielmente sus compromisos. No se debe tener la especulación porque ella puede degenerar en juego, como no se debe temer á la Bolsa porque en ella se especule y se juegue. Ni una ni otra puede suprimirse, pues suprimir la primera es matar el comercio, y suprimir la segunda es abrir el garito. Cuando á una acción como la que nos ocupa se le ha opuesto la escepción de juego es necesario comprobarla. Esta comprobación puede efectuarse por medio de presunciones que para que surtan el efecto de la prueba es necesario que ellas sean graves precisas y concordantes. Véase verbo Contrato aleatorio, núm. 8 y notas 540 y 541 tom. 1º Inst. En los Tribunales franceses se suscitó una cuestión semejante á la presente y allí se resolvió que el comisionista que ha pagado por cuenta de su comitente no puede exigir el reembolso ni compensar legalmente las de pérdidas sufridas con los fondos que tenga en su poder pertenecientes á sus comitentes. Bedarride estudia extensamente la materia en sus «Cuestiones de Derecho» donde le dedica un capítulo especial al «Juego de Bolsa» y despues de estudiar los varios fallos de los Tribunales emite su opinión contraria á la resolución dictada por la Cámara. Sin embargo, admite por escepción la exigibilidad de estas obligaciones. El principio general de la validez de estas obligaciones establecida por nuestros tribunales es la escepción de la jurisprudencia francesa. Según la Cámara de lo Civil la seriedad de la obligación es la presunción, el juego la excep-



COR

torios, aun cuando para el mandante tuvieran ese carácter—Jur. Com., tom. 5, pág. 374, Ser. 1ª.

1. Corredores de Bolsa—Solo pueden cobrar la comisión que les fija el arancel por cada una de las operaciones que hayan efectuado, cualesquier que sean los trabajos que hayan debido verificar para su realización—Jur. Com., tom. 5, pág. 225, Ser. 1ª.

2. Corredores de Bolsa—Son verdaderos comisionistas obligados á las resultas del contrato cuando tratan á nombre propio—Jur. Com., tom. 6, pág. 100, Ser. 1ª.

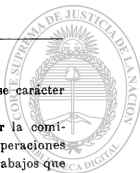
1. Corredores de comercio—Las disposiciones del Cód.

ción: en los Tribunales de Francia sucede lo inverso. En una resolución que estudia Bedarride dictada por un tribunal de este último país dice lo siguiente: «El comisionista que ha jugado por su comitente tendrá acción contra éste para el reembolso de lo que hubiese pagado por su cuenta, si el mandatario, completamente extraño al juego, por un lado, se hubiese limitado á efectuar el pago que le hubiese ordenado su comitente. Si él hubiese conocido y sabido que se trataba de una deuda de juego no tendría derecho al reembolso» y despues de citar á Merlin, Verbo *Marché á terme*. Froplong, núm. 73, comentario al art. 1265, que se pronuncian en este mismo sentido, dice: «El juego de bolsa es una lepra peligrosa que siembra á su paso la ruina y la desesperación, que reduce á la miseria á familias enteras, ocasiona numerosos suicidios, y que por consiguiente se hace necesario cortar y extirpar. El mejor medio de conseguir este fin es imponer á los agentes de cambio la observación de sus deberes.»

1—Art. 112, Cód. de Com.

2—Del examen detenido que se ha hecho del Reglamento de la Bolsa y del Cód. de Com., en la parte relacionada al gremio de corredores y comisionistas, nuestros tribunales han resuelto que los corredores de Bolsa son verdaderos comisionistas que pueden tratar á nombre propio el negocio que se les encomienda quedando así obligados á las resultas del contrato.

1. Los corredores de Bolsa, no están comprendidos entre los «Agentes auxiliares del comercio» de que trata el art. 3 del libro 1º del Cód. de Com. No tienen las condiciones ni están sujetos á las disposiciones del Cap. I del Tít. citado que se ocupa «de los corredores». Son los agentes de cambio del viejo mundo que han venido con el desarrollo del comercio y con sus nuevas necesidades, las que no tuvo presente el Cód. de Com. sancionado en 1859 y que ha regido desde 1860. Introducidos



COR—COS

referentes á ellos, no son aplicables á los a-rentes de Bolsa, aun cuando se titulen corredores—Jur. Com., tom. 5, pág. 374, Ser 1ª.

Correspondencia epistolar—Véase: *Contrato*, núm. 11.

Cosa agena—Véase: *Comprador*, núm. 9.

Cosa comprada—Véase: *Comprador*, núm. 5.

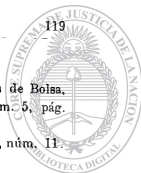
1. Cosa juzgada—Esta escepción es personal del demandado á quien la primera sentencia hace referencia, los responsables subsidiarios no pueden oponerla si no figuran como parte en el juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 99, Ser. 2ª.

2. Cosa juzgada—No la causa para el juicio ordinario la

pues, por las necesidades y usos del comercio están sujetos especialmente á éstos cuya traducción más fiel se encuentra á este respecto en los Reg. de la Bolsa. Los corredores de Bolsa se asemejan mucho á los que Escribe nos hace conocer en el verbo *Agiotista*, á quienes corresponde exclusivamente intervenir en las negociaciones de toda clase de efectos públicos, de letras de cambio etc., y de todo documento de valor, ó de crédito, que se celebran en la Bolsa de Madrid. Por consiguiente, estos agentes de cambio son otra cosa que los corredores de que trata el Cód. de Com. Las prohibiciones que éste establece respecto á los corredores de que se ocupa no le son en general aplicables. Los agentes de cambio no tienen entre nosotros una legislación propia. Nuestro Cód. de Com. no se ocupa sino de los corredores en general y basta que en un juicio no se pruebe que tienen las condiciones de tales según la ley, para que no puedan ser considerados en ese carácter. Pero la buena fe y los usos del comercio, son principios respetables de la legislación mercantil. En el silencio de ésta, estando admitidos en la práctica esos intermediarios, hay que considerarlos especialmente con relación á los actos practicados, por que faltando la determinación legal en el Agente, sus hechos se juzgan por un prudente criterio y siguiendo las reglas del derecho común.

1—En este caso hay identidad de causa é identidad de objeto, mas no hay identidad de personas: tres condiciones que la ley exige para que sea procedente la escepción de cosa juzgada. «Guisada cosa es, e derecha que el juicio que fuere dado contra alguno non empesca á otro» dice la Ley 20, tít. 22, Part. 3ª.

2—No hay disposición del Cód. de Proc. que prohíba la iniciación del juicio ordinario cuando no se han opuesto escepciones: en el juicio ejecutivo ó cuando las opuestas han sido rechazadas. Por el contrario el art. 500 deja á salvo el derecho, tanto al actor como al ejecutado, para pro-



COS

admisión ó rechazo de las escepciones en el juicio ejecutivo cualquiera que sea la sentencia recaída—Jur. Civ., tom. 3, pág. 184, Ser. 1ª.

Cosa juzgada—Véase: *Resolución*, núm. 2—*Liquidación*, núm. 3—*Sentencia*, núm. 10—*Falsedad de la ejecutoria*, num. 1.

Cosechas—Véase: *Contrato*, núm. 4.

1a. Cosa vendida—Siempre que exista la entrega por un precio fijo y determinado hay contrato de compraventa—Jur. Com., tom. 5, pág. 234, Ser. 1ª.

Cosa vendida—Véase: *Vendedor*, núm. 2.

1b. Costas—No están obligados á pagarlas los litigantes por las diligencias practicadas en el expediente, aunque lo sean por otros empleados que los de la oficina actuaria—Jur. Civ., tom. 1, pág. 605, Ser. 2ª.

2. Costas—No pueden cobrarlas los secretarios ó empleados de los Tribunales por diligencias que practiquen aun cuando sea distinta la oficina en que las desempeñan—Jur. Civ., tom. 1, pág. 625, Ser. 2ª.

3. Costas—No puede ser condenado á pagarlas el litigante

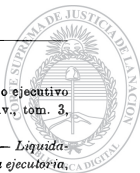
mover el juicio ordinario, cualquiera que sea la sentencia en el ejecutivo. Los términos absolutos de esta frase excluyen toda escepción á la regla que sienta y demuestran que las sentencias en el juicio ejecutivo jamás hacen cosa juzgada—Véase Caravantes, *Proc. Jud.*, tom. 3, pág. 354.

1a.—Art. 513, Cód. de Com.

1b.—Un empleado á sueldo, de la administración de justicia se presentó cobrando honorarios por diligencias practicadas en un expediente seguido en una oficina que no era aquella en que él desempeñaba sus funciones: la Cámara resolvió que no podía cobrarlos porque el art. 164 de la Ley Org. de los Trib. prohíbe á los secretarios cobrar emolumentos en las actuaciones, y el cumplimiento de esta disposición no puede ser dispensado por los Tribunales, lo que sucedería con la violación del espíritu de la ley, si se sustituyeran los empleados llamados á actuar por otros también á sueldo.

2—Véase nota anterior.

3—No puede decirse que haya habido temeridad ni malicia. Esta reso-



OOS

que no ha sido absolutamente vencido—Jur. Civ., tom. 2, pág. 450, Ser. 2ª.

4. Costas—No es procedente la condenación mientras no resulta plenamente demostrada en autos la temeridad del litigante—Jur. Civ., tom. 2, pág. 471, Ser. 2ª.

5. Costas—Si la parte no pide la condenación al entablar la demanda, el Juez no está obligado á pronunciarse sobre ellas—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

6. Costas—Aun cuando el Juez no condene, si la parte vencida se aviene á pagarlas, el auto es inapelable—Jur. Civ., tom. 2, pág. 171, Ser. 2ª.

7. Costas—La condenación en ellas es procedente contra el que ha iniciado una testamentaria conociendo la incompetencia del Juzgado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 290, Ser. 1ª.

8. Costas—La condenación solo es procedente cuando el vencido ha procedido con temeridad—Jur. Civ., tom. 8, pág. 422, Ser. 1ª.

9. Costas—La condenación no procede cuando la sentencia está de acuerdo con lo resuelto en el tom. 1º Inst., verb. Costas, núms. 643 y 658.

4—Cuando el litigante ha tenido justa causa para litigar ó razón probable para ello, no puede ser calificado ni de temerario ni de malicioso. Así lo han resuelto los Trib. en numerosos casos como puede verse en el tom. 1º de la Inst. verb. *Costas*, núms. 632, 634, 652, 653 y 658.

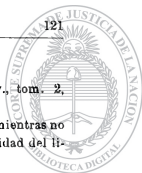
5—El Juez no puede sentenciar sino aquello que ha sido pedido en la demanda, denegando ó acordándolo: resolver sobre puntos no sometidos á su decisión sería ir mas allá y produciría una *ultra petitio*.

6—El auto resolvía un incidente sin imposición de las costas, una de las partes apela por las costas, la otra manifiesta su voluntad de abonarlas: es evidente entonces que el auto no puede elevarse en apelación, pues que la causa del recurso desaparece: el agravio, si es que existió queda cubierto.

7—Es evidente que en este caso hay malicia, debiendo aplicársele el principio general de que el vencido debe pagar las costas de la contraria—art. 221 del Cód. de Proc.

8—O con malicia. Véase: verb. *Costas* núm. 4 y su nota relativa.

9—No hay causa atendible que pueda comprometer la buena fe de la



COS

cia en lo principal resuelve un punto de derecho cuya interpretación ha podido prestarse á dudas—Jur. Civ., tom. 8, pág. 489, Ser. 1ª.

10. Costas—La condenación, en las cuestiones de derecho solo procede cuando una de las partes ha sido evidentemente temeraria—Jur. Civ., tom. 8, pág. 561, Ser. 1ª.

11. Costas—Debe ser condenado en ellas el que desista porque importa reconocer su temeridad—Jur. Civ., tom. 8, pág. 472, Ser. 1ª.

12. Costas—La exoneración causa gravamen irreparable por lo que procede la apelación—Jur. Civ., tom. 8, pág. 506, Ser. 1ª.

13. Costas—La condenación es ineludible cuando la temeridad del demandado resulta plenamente justificada—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 1ª.

14. Costas—La declaración de los Tribunales sobre que deben pagarse en el orden causadas, en el juicio de tercería, no hace cosa juzgada para el juicio sobre daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 9, pág. 32, Ser. 1ª.

15. Costas—El Juzgado puede exonerar al vencido, siempre que encuentre mérito para ello—Jur. Civ., tom. 9, pág. 74, Ser. 1ª.

16. Costas—La transacción por la cual se obliga una parte

parte vencida. Cuando el litigante ha tenido razón probable para litigar no se le puede considerar ni malicioso ni temerario.

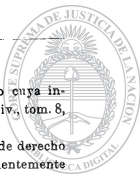
12—La imposición de las costas ó su exoneración forman parte de la sentencia definitiva, en cuyo caso es apelable—art. 226, Cód. de Proc.

13—Leyes 8, tít. 3; 8, tít. 22, Part. 3ª; art. 8 Regl. de Administ. de Just. de 1813, y art. 221, Cód. de Proc.

14—Ninguna de las resoluciones del juicio ejecutivo causan cosa juzgada. Véase verb. Cosa Juzgada, núm. 2.

15—Art. 221, Cód. de Proc.

16—Aquí se refiere á las costas causadas en los incidentes que lleguen á suscitarse con motivo de la transacción y después de celebrada ésta, porque los honorarios devengados en los incidentes que se hallen pendientes



COS

á pagar las de un pleito determinado, no comprende las de los incidentes, que se rigen por las leyes comunes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 309, Ser. 1ª.

17. Costas—Debe ser condenado el litigante que reconoce haber carecido de derecho al iniciar su acción—Jur. Civ., tom. 9, pág. 374, Ser. 1ª.

18. Costas—Causadas para conseguir el derecho á cobrar los daños y perjuicios no forman parte de ellos, si el vencido ha sido exonerado de pagarlas—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 2ª.

19. Costas—No puede ser condenado el litigante que solo pide aclaración de puntos dudosos, protestando su conformidad sobre la resolución que recaiga—Jur. Civ., tom. 3, pág. 73, Ser. 2ª.

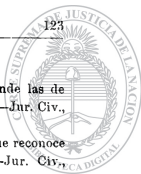
20. Costas—Solo puede ser condenado en ellas el vencido al celebrarse la transacción, ya sean que se hubieran devengado en el expediente principal ó en sus incidentes, deben todos ser pagados por el obligado á pagar los del pleito terminado, pues los incidentes son parte integrante de ese pleito.

17—Porque hay temeridad en iniciar un pleito sin razón derecha para litigar.

18—Se trata de un juicio seguido sobre indemnización de daños y perjuicios. Se siguió un primer juicio en que solo se obtuvo por el actor el reconocimiento de su derecho á cobrar los daños y perjuicios sin especial condenación en costas: más tarde se inició y se siguió un segundo pleito con el fin de fijar el monto de esos perjuicios: el actor quería que se consideraran las costas causadas en el primer juicio como daños y perjuicios, lo que no puede ser porque las costas causadas en el primer juicio que fué el fundamento del segundo no deben ser materia de un nuevo juicio. Las costas son un accesorio de la sentencia dictada y como tal sigue la suerte de lo principal: si sobre esto último no puede un juez pronunciarse por haber pasado en autoridad de cosa juzgada tampoco puede volverse sobre lo accesorio. Si en la sentencia se hubiese guardado silencio acerca de las costas, las partes deben pedir aclaración del punto dentro de 24 horas, bajo pena de perder su derecho—art. 222, Cód. de Proc.

19—No hay ni temeridad ni malicia.

20—El art. 221 del Cód. de Proc. establece que la parte vencida debe



COS



si la parte contraria lo hubiese pedido al trabarse el litigio—Jur. Civ., tom. 5, pág. 167, Ser. 2ª.

21. Costas—No es motivo para exonerar de su pago al demandado, la mayor suma que el damnificado por un agravio moral fije al monto de la indemnización, pues no importa una plus-petitio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 259, Ser. 2ª.

22. Costas—Procede la exoneración del vencido en el juicio de reivindicación, cuando el vencedor siendo lindero se niega á presentar los títulos para efectuar la mensura, pues importa buena fe en el que pretendía reivindicar—Jur. Civ., tom. 3, pág. 290, Ser. 2ª.

23. Costas—Debe ser condenado en todas las del juicio el demandante por daños y perjuicios cuya acción se declara improcedente—Jur. Civ., tom. 3, pág. 498, Ser. 2ª.

pagar las costas de la contraria *si esta lo pidiere*. Si al entablar la acción no se pide la condenación en las costas, deben ser satisfechas en el orden causadas. Es de tenerse presente además que el Juez no puede ir más allá de lo pedido en el cuasi contrato de litiscontestación sin incurrir en *ultra petitio*. Sin embargo, si en el curso del juicio lo solicitare debe pagarse las costas causadas con posterioridad á la petición.

21—No es el caso de la ley 14, tít. 2, Part. 3ª. El actor puede apreciar sin malicia la indemnización en una suma mayor, pues su criterio personal al proceder á la estimación puede ser distinto del criterio del Juez.

22—El art. 221 del Cód. de Proc., sienta como principio que la parte vencida debe pagar las costas de la contraria, si ésta lo pidiere y faculta al mismo tiempo al Juez para eximir de su pago *siempre que encuentre mérito para ello*, lo que importa decir que siempre que el Juez se convenza de que el vencido ha obrado sin malicia y sin mala fe, puede eximirlo de su pago. Esta doctrina se halla espresamente consignada en la Ley 8, tít. 22, part. 3ª. Si la parte no se hubiese negado á exhibir sus títulos probablemente el actor no habría, en el caso *sub-judice* intentado acción alguna.

23—Si el Juez no encuentra mérito para su exoneración; pues la condenación en costas en este caso no lo ordena la ley. Del sumario parece resultar que toda acción por daños y perjuicios que fuese rechazada, debe serlo con costas lo que no es exacto, ni la Cámara lo estableció.

COS—COT

24. Costas—Debe ser condenado en todas las del juicio el litigante temerario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 569, Ser. 2ª.

25. Costas—La facultad del Juez para exonerar de ellas al vencido, no es aplicable tratándose de pleitos entre socios en que por el contrato social el que les dé origen debe pagarlos—Jur. Com., tom. 6, pág. 518, Ser. 1ª.

Costas—Véase: *Demandado*, núms. 2 y 3—*Rebeldía*, núm. 1—*Jurisdicción potestativa*, núm. 1—*Ejecutante*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 19—*Obligado*, núm. 1—*Interdicto*, núm. 681—*Arraigo*, núm. 4—*Actor*, núm. 2—*Pago*, núm. 2—*Auto*, núm. 12—*Vencido*, núm. 1—*Sindico*, núm. 2—*Hipoteca*, núm. 2—*Litigante*, núm. 1—*Excepción*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 9—*Condómino administrador*, núm. 1—*Desistimiento*, núm. 3—*Representantes*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 21—*Convenciones*, núm. 2—*Transacciones*, núm. 5—*Prescripción*, núm. 21—*Acreeedor*, núms. 4 y 5.

1a. Costas del concurso—No se encuentran comprendidos en el privilegio acordado a éstas, los honorarios devengados al presentarse en quiebra el fallido—Jur. Com., tom. 6, pág. 279, Ser. 1ª.

Cortejo—Véase: *Prueba*, núm. 10.

1b. Cotejo de firmas—Cuando con los documentos con los cuales debe hacerse son instrumentos públicos, no es necesaria la previa conformidad de las partes, pues la ley los conceptúa auténticos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 521, Ser. 1ª.

25—Es necesario cumplirse lo estipulado en el contrato que forma ley para las partes. Además se trataba de una sociedad de seguros mutuos en cuyo caso es de tenerse presente el art. 671 del Cód. de Com.

1a—Los privilegios acordados por el art. 1697 del Cód. de Com., solo se refieren á los gastos causados en beneficio de la masa, y como los honorarios devengados al presentarse en quiebra son anteriores al concurso, es evidente que ellos no benefician á la masa.

1b—Son de aquellos instrumentos que la ley considera como indubitados—art. 147, Cód. de Proc.



COT—CRE

2. Cotejo de firma.—Siendo el Juez el que debe practicarle es el único que puede pedir un nuevo dictamen á los peritos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 380, Ser. 2º.

1a. Creación.—La de una persona jurídica no se supone ni se infiere remotamente de actos equívocos, sino que se prueba con la ley ó el decreto que le dá el ser de una manera expresa é inequívoca—Jur. Civ., tom. 6, pág. 216, Ser. 1º.

1b. Crédito.—Siempre que esté revestido de las formalidades que exige la ley, cualquier Juez debe decretar el embargo preventivo, aun cuando fuera incompetente para entender en el juicio—Jur. Com., tom. 6, pág. 104, Ser. 1º.

Crédito.—Véase: *Cesión*, núms. 1 y 4 — *Reconocimiento*, núm. 1—*Ejecutante*, núm. 5.

2—El art. 150 del Cód. de Proc. dispone que el Juez debe hacer por sí mismo el cotejo después de oír las observaciones de las partes y el dictamen de los peritos no siendo estos sino meros auxiliares de aquél, salvo el caso en que sus aseveraciones fuesen terminantemente asertivas y los peritos tuviesen título de tal, en cuyo caso el dictamen tendrá fuerza de prueba legal—art. 178, Cód. de Proc.—Véase: Verbo Peritos, núms. y notas 1994 y 1997, tom. 1º, Inst.: tom. 8, pág. 32; 7, pág. 356, Ser. 2º F. S. C. P.

1a—Según el art. 33, inc. 5º del Cód. Civ., son personas jurídicas, los establecimientos de utilidad pública etc. «con tal que posean patrimonio propio y sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes y contraer obligaciones y no subsistan de asignaciones del Estado; y con arreglo al art. 45 del mismo Cód., comienza su existencia, con el carácter de personas jurídicas desde el día en que esos establecimientos ó corporaciones fuesen autorizados por la ley ó por el Gobierno con aprobación de los Estatutos. Se desprende de los términos de estos artículos, que no hay una fórmula consagrada que sea necesario emplear diciendo que tal establecimiento ó asociación, sea persona jurídica para que se tenga por tal, sino que basta simplemente que su existencia tenga por objeto el bien común, sea autorizado por la ley ó por el Gobierno con aprobación de sus estatutos, posea patrimonio propio y sea capaz por dichos estatutos de adquirir bienes y no subsista de asignación del Estado.

1b—El sumario dice «cualquier Juez debe decretar el embargo etc.» sin embargo la Cámara dice *puede*; es decir que es facultativo del Juez decretarlo ó nó. El art. 463 del Cód. de Proc. dice que los Jueces deben escusarse de decretar embargos en asuntos que no sean de su competencia, pero que si lo dictare será válido y subsistirá.



CRE—CUE



Crédito líquido—Véase: *Excepción de compensación*, núm.

1—*Ejecutante*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 20.

1a. Créditos—Se prescribe á los dos años el derecho de los que no consten de documento escrito del deudor—Jur. Com., tom. 6, pág. 255, Ser. 1^a.

Créditos—Véase: *Graduación de créditos*, núm. 1.

Créditos comerciales—Véase: *Prescripción*, núm. 4.

Crimen—Véase: *Circunstancias atenuantes*, núm. 3—*Tentativa remota*, núm. 1.

Cuadra—Véase: *Manzana*, núm. 1.

1b. Cuenta—Rendida por el mandatario, no puede fundar un embargo preventivo, mientras no sea aprobada ó desaprobada judicialmente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 96, Ser. 1^a.

Cuenta—Véase: *Comerciante*, núm. 4.

1c. Cuenta corriente—Suponiendo la ley que las partidas de ésta corresponden exactamente á los asientos de los libros del que la presenta, no puede admitirse prueba de que ellas son el resultado de un error—Jur. Com., tom. 6, pág. 124, Ser. 1^a.

2. Cuenta corriente—No puede conceptuarse tal la que solo acredita una entrega de mercaderías y una entrega de dinero en pago—Jur. Com., tom. 6, pág. 255, Ser. 1^a.

1a—Art. 1004, Cód. de Com.

1b—De la aprobación ó desaprobación depende que el mandatario sea deudor ó nó. Sin embargo, cuando un mandatario al rendir cuenta se manifiesta deudor de cierta suma resultante de su comisión ó mandato, hay confesión de deuda líquida y exigible que trae aparejada ejecución—art. 465, inc 3^o, Cód. de Proc.

1c—Toda cuenta debe pasarse de conformidad con los asientos de los libros, los que hacen prueba contra el comerciante á quien pertenecen—arts 56 y 81, Cód. de Com.

2—Una cuenta tal solo sería una simple cuenta de venta de mercaderías, no serían operaciones sucesivas y recíprocas entre dos comerciantes que es lo que constituye la cuenta corriente.

CUE

1a. Cuenta particionaria—La mayor ó menor cantidad fijada para gastos causidicos no es fundamento bastante para oponerse á su aprobación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 71, Ser. 2ª.

2. Cuenta particionaria—No aprobada, sus adjudicaciones no conceden á los adjudicatarios derecho para intervenir en los actos que afecten la propiedad de los bienes que se proyectaba abjudicarles—Jur. Civ., tom. 3, pág. 111, Ser. 2ª.

Cuenta particionaria—Véase: *Condominio*, núm. 1—*Tutor especial*, núm. 1—*Recusación*, núm. 11.

1b. Cuentas—La desaprobación y devolución del importe cobrado, cuando existen capaces é incapaces solo debe hacerse en la parte que corresponda á los incapaces pero no á la de los capaces que las hayan aprobado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 2ª.

Cuentas—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 4—*Término total*, núm. 1.

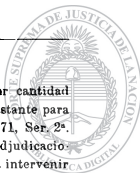
Cuentas corrientes—Véase: *Término*, núm. 8—*Rendición de cuentas*, núms. 1 y 2—*Comerciante*, núm. 4.

1c. Cuentas pendientes—La convención por la cual se chancelan todas éstas, importa también la irresponsabilidad de las partes que como endosantes hubiesen suscrito obli-

1a—La separación que se hace en las cuentas particionarias para atender á los gastos y cargas de la sucesión aunque sea exagerada á nadie perjudica, pues si hay sobrante, éste se reparte entre los herederos en la misma proporción. Es conveniente siempre dejar mayor suma de la exactamente necesaria para evitarse entre los coherederos los reclamos á que daría lugar cuando la suma separada no alcanzase á cubrir los gastos judiciales y demás obligaciones.

1b—Se trata de cuentas presentadas en un juicio testamentario en el que habfan herederos mayores y menores: los mayores manifestaron estar conformes con la cuenta, mas el curador de un incapaz se opuso: la cuenta no fué comprobada legalmente; en este caso el reintegro de la suma desconocida solo debe hacerse de lo que corresponda al menor, los mayores no pueden beneficiar con ella.

1c—El convenio en este caso estingue necesariamente todos los derechos creditarios preexistentes por obligaciones anteriores ó su fecha.



CUE

gaciones no vencidas y que se encontrasen en poder de la otra—Jur. Com., tom. 6, pág. 71, Ser. 1ª.

2. Cuentas rendidas—Por el mandatario, aún cuando el mandante no les opusiera objeciones, debe abrirse la causa á prueba si los comprobantes presentados fuesen de carácter puramente privado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 2ª.

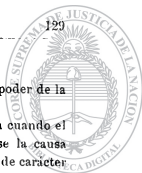
Cuestión—Véase: *Puro derecho*, núm. 1.

1. Cuestiones—Que las partes hayan propuesto y discutido, el Juez al fallar en definitiva no está obligado á resolverlas, sino solo aquellas que conceptúe pertinentes al caso—Jur. Civ., tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

Cuestiones—Véase: *Jueces*, núm. 3—*Juzgado*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 5—*Nulidad*, núm. 19—*Jueces*, núms. 5 y 6—*Sentencia*, núm. 15—*Arbitros arbitradores*, núms. 3 y 4.

2—El mandante no evacuó el traslado que se le confirió de la rendición de cuentas hechas por el mandatario, dándosele por evacuado en rebeldía. Como esta rebeldía no importa por parte del reo una confesión de la exactitud de las cuentas ni de su conformidad, se sigue que es necesario comprobarlas debidamente con sujeción á lo dispuesto en la Sección 7a. del Cód. de Proc.

1—La sentencia no puede anularse siempre que en su pronunciamiento se hubiesen observado las solemnidades á que se refiere el art. 217 del Cód. de Proc. La circunstancia apuntada en el sumario no puede causar la nulidad de la sentencia porque con ello no se viola el precepto legal. No hay disposición del Cód. que establezca la nulidad de la sentencia por no tomarse en consideración puntos discutidos por las partes. Sería cosa imposible someter la redacción de una sentencia á un molde jurídico como dice Pardessus, sería muy estrecho para la libertad del pronunciamiento de un magistrado. Véase, Inst. tom. 1, verb. Nulidad, núms. 1838 y 1842 y sus notas correspondientes. A nada conduciría si un Juez entrara á resolver cuestiones que se han discutido en la secuela del juicio, si en su opinión esas cuestiones á nada conducen ni resuelven el caso discutido. Es evidente que debiendo el Juez resolver según su ciencia y conciencia los pleitos que se le someten, no solo puede sino que debe prescindir de las razones aducidas por las partes para valerse de los que á su juicio responden mejor al cumplimiento de su magisterio: procediendo así podrá el Juez dictar una sentencia atacable como injusta, mas no como nula, pues no habrá alterado los términos de la litiscontestación.



CUE-CUR

Cuestiones de derecho—Véase: *Auto*, núm. 13—*Término*, núm. 16—*Costas*, núms. 9 y 10—*Nulidad*, núm. 22.

Cuestiones abstractas—Véase: *Cámara*, núm. 2.

Culpa—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1, 14 y 16—*Desistimiento*, núm. 3—*Mejoras*, núm. 1.—*Acusado*, núm. 1—*Absolución*, núm. 1.

Culpa grave—Véase: *Homicidio*, núm. 1.

Culpables—Véase: *Actos ilícitos*, núm. 1.

Culpabilidad—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 8.

Cuota—Véase: *Alimentos*, núm. 18.

1. Curador—Especial, nombrado en virtud de existir oposición de intereses entre el incapaz y el curador titular, carece de personería para iniciar otras acciones que aquellas que motivaron su nombramiento — Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 2ª.

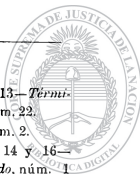
2. Curador—De bienes de un ausente, para pedir la posesión de ellos debe iniciar las mismas acciones que éste personalmente iniciaría, y toda resolución que ordene la desposesión del tercero en cuyo poder se encuentren, sin sustanciación, es nula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 419, Ser. 2ª.

3. Curador—Un hecho aislado no puede fundar la decla-

1—Así se desprende del art. 393, Cód. Civ.

2—El art. 115 del Cód. Civ., faculta al Juez para dar un curador á los bienes de un ausente, mas no ha introducido en favor de éste ningún derecho ni privilegio que le autorice á tomar ni pedir la posesión de esos bienes siempre que estén poseídos por otro, sin llenar previamente los requisitos que las leyes prescriben para recuperar bienes poseídos por otros.

3—El inc. 9 del art. 398 del Cód. Civ., exige como condición para ser privado del derecho á ejercer la tutela, que sea *notoriamente de mala conducta*. En la nota relativa á este artículo se cita la Ley 1ª, tít. 18, Part. 6ª, que habla de *malas costumbres*, y entre las causales que la ley enumera para despojar de la tutela al que la ejerce dice: «O que le ouissee mostrado malas maneras»: un hecho aislado no puede constituir á una persona como *notoriamente de mala conducta*, siempre que este hecho no sea de aquellos que manchan de una manera indeleble al que lo ejecuta



CUR

ración de malas costumbres que la ley exige para privar al hijo de desempeñar este cargo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73 Ser. 1ª.

4. Curador—Los jueces solo pueden hacer uso de la facultad que les confiere la ley para nombrarlo, cuando el pariente llamado carezca de las condiciones que ella exige—Jur. Civ., tom. 3, pág. 339, Ser. 2ª.

5. Curador—De un incapaz, la reposición del auto en que se nombra debe sustanciarse con el nombrado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 520, Ser. 2ª.

Curador legítimo—Véase: *Hijo mayor*, núm. 1—*Incapaz*, núm. 1—*Insania*, núm. 1.

Curatela—Véase: *Tutela*, núm. 1.

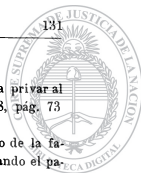
Curia eclesiástica—Véase: *Procedimientos*, núm. 1.

1. Curso forzoso—Los depósitos hechos antes de la fecha

y que lo constituye en un réprobo de la sociedad. El art. 477 del Cód. Civ., establece y consagra el derecho que tiene el hijo de ser curador del padre incapaz, de este derecho no puede ser privado sino por razones graves ó motivos extraordinarios. García Goyena al fundar la disposición del art. 293 igual al 477 de nuestro Código, dice: «Se ha adoptado la disposición Romana por ser mas ajustada á los sentimientos naturales de amor y piedad filial: nun mirando la cuestión bajo el mezquino aspecto del interés ¿quién cuidará de los bienes mejor que el heredero forzoso?

4—La resolución de la cual ha sido tomado este sumario, no se ha ocupado del caso en que el Juez puede hacer uso de la facultad que le confiere la ley para nombrar curador cuando el pariente llamado no sea idóneo. En el caso práctico ocuriente no se trataba de éste, solo se discutía á cuál de dos hermanos mayores de edad é igualmente idóneos le correspondía el derecho de ejercer la curatela, se resolvió que el derecho correspondía al mayor de ellos, de acuerdo con lo que resulta de los arts. 890, inc. 4º; 891 y 477 del Cód. Civ.

1—Se trata de una cuenta corriente, cuyas partidas de debe y haber deben compensarse. Un individuo se ausenta para Europa dejando depósitos en un Banco que le otorgó una carta de crédito: recibe en Europa una suma de oro sellado antes de tirado el decreto de 1885; el Banco recibe aviso después del decreto y pretende cargarlo en oro sellado al debe del cliente, la suma entregada, lo que no es ni justo ni equitativo, porque según lo dispone el art. 959 del Cód. de Com., la compensación se veri-



CUR

de este decreto, se conceptúan á oro y compensean las deudas ó giros á metálico que antes de esa fecha hubiese hecho el depositante—Jur. Com., tom. 6, pág. 369, Ser. 1^a.

Curso forzoso—Véase: *Curso legal*, núm. 1.

1. Curso legal—La ley de Octubre de 1885, si bien autoriza la inconvención del papel y lo declara de curso legal no impone el curso forzoso de los billetes de los Bancos que menciona—Jur. Com., tom. 6, pág. 289, Ser. 1^a.

fica *ipso jure*, por el solo imperio de la ley, y las deudas se extinguen recíprocamente en el acto de su coexistencia hasta la suma concurrente de sus cantidades respectivas. La deuda contraída en Europa nació en el momento en que allí se entregaron los fondos, independientemente de la fecha en que se hubiese recibido el aviso del pago. El sumario está algo confuso y conviene evitar las interpretaciones erróneas á que puede dar lugar.

1.—Se hace una distinción entre el curso legal y el curso forzoso. El curso forzoso es la obligación impuesta por los poderes públicos de recibir los billetes de Banco por su valor nominal, como si efectivamente tuviesen el valor del metálico que dicen representar. El curso legal importa el autorizar la circulación de las notas inconvertibles de los Bancos, por el valor que les atribuye la opinión pública, en razón de las necesidades del mercado y del crédito que goce el establecimiento que los emite y el Gobierno que los garantiza con su sello. Coquelin dice que cuando los billetes de circulación, emitidos sea por un Banco privilegiado ó por el Gobierno no son fácilmente recibidos por el público, ó se teme su presentación en gran número para su reembolso, se suele dictar algunas veces una ley para obligar á los particulares á recibirlos en pago por su valor nominal exonerando al banco ó gobierno que los emite de su reembolso á la presentación y á la vista. Es lo que se llama *curso forzoso*: este implica pues, dos circunstancias esenciales, 1^o: la obligación impuesta á los particulares de recibir los billetes en pago: 2^o La exoneración del reembolso á su presentación para aquellos que los han emitido. Difere del *curso legal*, tal como existe actualmente en Inglaterra y que no implica sino la primera de estas condiciones. Los billetes del Banco de Londres tienen *curso legal*, es decir, todo particular está obligado á recibirlos en pago de lo que se le debe en las mismas condiciones que la moneda efectiva, pero no tiene *curso forzoso* en cuanto el Banco queda obligado á su reembolso á su presentación y á la vista. Véase igualmente Leroy-Beaulieu. Tratado de la ciencia de las Finanzas, tomo 2, pág. 581—Stanley-Jevons. Cap. VII. Thaler en la pág. 135 de su obra hace una distinción clara entre



CUR

Curso legal — Véase: *Moneda nacional oro sellado*,
núm. 3.

ambas locuciones. En el *curso forzoso* el papel se recibe por su valor escrito, aunque sea en realidad inferior, en el *curso legal* el papel se recibe por su valor corriente en plaza. Nuestros billetes son pues de *curso legal* no son de *curso forzoso*.





Chancelación—Véase: *Obligación*, núm. 1.

1a. Chancelación—De una hipoteca es un incidente del juicio testamentario y el deudor debe acudir ante el Juez que conozca en el espresado juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 533, Ser. 1ª.

1b. Chancelación—De los gravámenes que pesan sobre el bien vendido judicialmente, corresponde al Juez que ha ordenado la venta, aun cuando surja cuestión sobre caducidad de la hipoteca—Jur. Com., tom. 5, pág. 260, Ser. 1ª.

1a—En lo que respecta al causante la hipoteca no puede chancelarse sin afectar los derechos de la sucesión.

1b—Es un incidente de la escrituración de la propiedad adjudicada la chancelación del gravámen, lo que basta para determinar la jurisdicción.



Dación en pago—Véase: *Nulidad*, núm. 29.

1. Damificado—Por un hurto, no necesita justificar el valor, procedencia y posesión de los objetos robados, mientras no exista una presunción que haga necesaria esta prueba—Jur. Crim., tom. 5, pág. 89, Ser. 1ª.

Daño—Véase: *Acto ilícito*, num. 3.

1. Daños y perjuicios—Los causados por un hecho ilícito solo son exigibles si se justifica que hubo culpa ó negligencia por parte del que los causó—Jur. Civ., tom. 6, pág. 37, Ser. 1ª.

1—Se trata del hurto de una suma determinada de dinero, y habiéndosele probado al delincuente el delito, se le condena entre otras penas á la devolución de la suma robada. La prueba producida fué de presunciones y ni se intentó probar el monto del hurto. En el caso presente no se consideró necesaria la prueba del monto de lo robado, porque se trataba de una persona que bien podía ser poseedora de la suma que manifestaba haberle sido hurtada.

1—Art. 1109 Cód. Civ. El caso práctico es el siguiente: Un niño cabalgaba por la Avenida de Palermo por su derecha, dos carruages venían en dirección contraria, al llegar á un punto dado se encontraron con un grupo de vigilantes á caballo estacionados en el centro de la Avenida dejando el tránsito libre á ambos costados; uno de los carruages pasó llevando siempre la mano derecha y el otro no pudiendo pasar apareado al primero desvió el coche á la izquierda, en este momento se produjo el choque del carruage con el niño fracturándole una pierna. La Cámara por mayoría de un voto resolvió que no había lugar á la indemnización de daños y perjuicios fundada en las siguientes consideraciones: que no puede sostenerse que el choque que ocasionó la fractura de la pierna del niño, se produjo por culpa ó

DAÑ

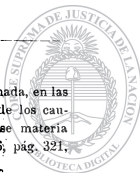
2. Daños y perjuicios—Por cantidad determinada, en las demandas debe justificarse no solo la existencia de los causados, sino también su valor sin que pueda hacerse materia de otro juicio para lo segundo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 321, Ser. 1^a.

3. Daños y perjuicios—La prohibición de alegar en un juicio civil el hecho que fué materia del juicio criminal del cual se absolvió al demandado, no es aplicable si la acción se dirige contra los que fueren subsidiariamente responsables—Jur. Civ., tom. 2, pág. 99, Ser. 2^a.

negligencia del cochero, que únicamente puede discutirse, si el cochero, cuando encontró los vigilantes debió seguir por el mismo lado que llevaba, y por el que continuaron los otros cocheros, ó si pudo desviarse hacia la izquierda sin que esto importe culpa ó negligencia de su parte. Es probable, dada la hora en que el hecho se produjo, que cuando el cochero vió los vigilantes, estuviese muy cerca de ellos y que para evitar atropellarlos desviara el carruaje por no poder contener los caballos ó seguir simultáneamente con los otros dos al costado, pues no podían marchar los tres por no haber espacio para todos. El hecho de desviar momentáneamente un vehículo de la mano que debe llevar, cuando encuentra un obstáculo, no puede constituir culpa ni negligencia en el conductor. Se probó que el cochero hizo los esfuerzos posibles para contener el carruaje, cuando vió á los ginetes que venían en dirección opuesta, mientras que no se dijo que el niño hiciera esfuerzo alguno para evitar el choque. Es más fácil contener un caballo montado que los que arrastran un carruaje y mucho más fácil es hacer cambiar de dirección al primero que á los segundos. La verdadera imprudencia está de parte de los padres en permitir montar á un niño incapaz de gobernar su caballo. Véase Jur. Civ., tom. 3, pág. 568.

2—Este valor puede fijarse aproximativamente de modo á poderse determinar por el juramento estimatorio á que se refiere el art. 220 del Cód. de Proc. Véase Jur. Civ., tom. 3, pág. 415.

3—No concurren los tres requisitos exigidos por la ley para que haya cosa juzgada, pues no hay identidad de personas. El art. 1103 del Cód. Civ. establece lo siguiente: Después de la absolución del acusado, no podrá tampoco alegarse en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución. El art. dice que no se podrá alegar, ¿contra quién? se pregunta. Contra el mismo acusado. No lo dice la ley de una manera expresa pero lo dice de una manera implícita é inequívoca, pues supone el juicio iniciado contra el mismo que fué el



DAÑ

4. Daños y perjuicios—No puede fundarlos el ejercicio de un derecho—Jur. Civ., tom. 2, pág. 292, Ser. 2ª.

5. Daños y perjuicios—Para que la acción sea procedente, no basta justificar que existió la causa en que se funda, debe probarse que efectivamente existieron, que son susceptibles de apreciación pecuniaria y consecuencia inmediata del hecho en que se funda la acción—Jur. Civ., tom. 1, pág. 469, Ser. 2ª.

6. Daños y perjuicios—El juramento solo es admisible cuando legalmente probada su existencia y origen su apreciación pecuniaria es imposible—Jur. Civ., tom. 1, pág. 505, Ser. 2ª.

7. Daños y perjuicios—No basta que la ley fije la obligación de indemnizar los causados por una acusación calumniosa, es necesario justificar el monto con escepción de los producidos en la defensa que no necesitan justificación por resultar del expediente en que consta haberse cometido el delito—Jur. Civ., tom. 7, pág. 179, Ser. 1ª.

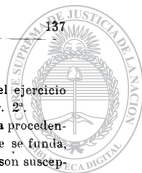
acusado en el juicio criminal. Uno de los ejemplos citados en la nota del artículo mencionado dice: «Lo mismo si el Trib. Crim. reconociendo que el hecho existe y que Pedro es el autor, ha declarado que no le es imputable y que no hay culpabilidad en él, no se podrá establecer contra él esta misma culpabilidad ante la jurisdicción civil.»

4—Art. 1109, Cód. Civ.

5—Solo cuando se han probado estos estreños es aplicable el art. 220 del Cód. de Proc. Si la prueba no suministra una base para la apreciación de los daños y perjuicios, ¿cuál sería el punto de partida del Juez para determinar la cantidad dentro de la cual debe prestarse el juramento estimatorio? Véase Inst. tom. 1º, Verbo *Daños y perjuicios*, núms. 719, 725, 731 y 736.

6—Véase nota anterior

7—Los arts. 1059 y 1090 del Cód. Civ., dan derecho al acusado para pedir indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiesen causado por una acusación no comprobada; pero ambos artículos requieren la justificación del daño efectivo, de la cesación de ganancias, —*damnum emergens, lucrum cesans*—No hay necesidad de justificar los gastos de defensa, porque ellos constan del proceso seguido. La disposición de ambos



DAÑ

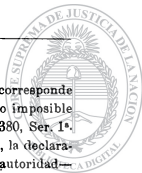
8. Daños y perjuicios—Al que los reclame corresponde probar que por culpa de la otra parte se ha hecho imposible la ejecución del contrato—Jur. Civ., tom. 7, pág. 380, Ser. 1ª.

9. Daños y perjuicios—No puede fundarlos, la declaración que el damnificado por un robo presta á la autoridad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 443, Ser. 1ª.

artículos es armónica y correlativa. La cláusula del 1089 que dice «*si pro base que por la calumnia ó injuria le resultó etc*» se extiende igualmente á la parte del art. 1090 que establece que si el delito fuese de acusación calumniosa, además de la indemnización del primer artículo se aumentan las responsabilidades para su autor. La ley presume que el acusado ha sufrido perjuicios, pero esto no basta, debe además probarse que ellos han sido efectivos, pues de otro modo no podría saberse si el actor pide lo que se le debe y si el demandado debe la que se le pide: este antecedente debe indispensablemente comprobarse para justipreciar el *quantum* de los daños. Si no han sido efectivamente causados, si no se demuestra en qué han consistido, ¿cómo podría determinarse su monto? En una acción por daños y perjuicios se requiere para que ella prospere la reunión de las siguientes circunstancias: 1º Que haya daño efectivo causado, 2º que haya derecho á reclamar su indemnización, 3º que el daño sea una consecuencia inmediata y directa de la acción. Véase, Inst. tom. 1, verb. *Daños y perjuicios*, núms. 719, 725, 731 y 736. No es necesario comprobar el monto de los daños y perjuicios, comprobando que ellos han sido causados, el Juez fijará los límites dentro de los cuales debe la parte estimarlos. Art. 220 Cód. de Proc.

8—Los contratos deben cumplirse con arreglo á lo estipulado: cuando en un juicio se dice que el contrato no pudo cumplirse por culpa de una de las partes, el que tal hecho afirma debe comprobarlo en juicio, pues la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio.

9—En este caso el damnificado no hace sino usar de su derecho y hasta cumple con un deber suministrando los datos necesarios y conducentes para la averiguación del delito. Entonces es aplicable el art 1067 del Cód. Civ. que dice: «No habrá acto ilícito punible para los efectos de este Cód. si no hubiere daño causado, ú otro acto exterior que lo pueda causar y sin que á sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa ó negligencia. La ley 6, tít. 15, part. 7ª, á que la nota del artículo citado se refiere dice «De como aquel que fiziere daño á otro por su culpa, es tenuto de fazer enmienda del». En la declaración que un damnificado presta no puede haber dolo ni culpa, mas si lo hubiere, debe hacersele responsable por los daños y perjuicios. Desde que el denunciante se limita á la simple declaración sin seguir adelante el juicio como parte



DAÑ

10. Daños y perjuicios—Ocasionados por la suspensión de una obra, para que sea procedente la acción debe justificarse el derecho á la construcción—Jur. Civ., tom. 7, pág. 482, Ser. 1ª.

11. Daños y perjuicios—Causados por un embargo indebido es una consecuencia lógica y necesaria de la declaración de procedencia de la tercería—Jur. Civ., tom. 7, pág. 557, Ser. 1ª.

12. Daños y perjuicios—Causados por una publicación anónima, para entablar la demanda, el actor puede, sin deducir acción en forma, solicitar las diligencias necesarias para la averiguación del autor—Jur. Crim., tom. 5, pág. 151, Ser. 1ª.

13. Daños y perjuicios—Es improcedente la acción fundada en la no entrega de la cosa objeto del contrato, si el actor no justifica por consignación en forma que se encontraba en situación de cumplir por su parte la obligación—Jur. Com., tom. 5, pág. 267, Ser. 1ª.

14. Daños y perjuicios—Para que esta acción sea procesada, no puede imputársele dolo ni culpa pues la autoridad, si la denuncia resultase infundada, debe proceder inmediatamente á su libertad, pero si lo detiene algún tiempo no será por culpa del denunciante sino porque motivos habrá tenido para proceder así. La víctima de un robo que se limita á denunciar al presunte reo sin pedir ninguna pena contra él y sin tomar parte en el juicio usa de un derecho y hasta cumple con un deber y por consiguiente á nadie daña.

10—Art. 1109, Cód. Civ.

11—En este caso se trata de la declaración de un daño causado contra derecho, siendo aplicable el art. 1109 del Cód. Civ.

12—Estas diligencias tienen por objeto conocer el autor de la publicación, sin cuyo requisito el actor no podría después ir adelante por el pleito ciertamente» Ley 1ª, tít. 10, part. 3ª.

13—Art. 1201, Cód. Civ. aplicable en materia comercial con arreglo al art. 191 del Cód. de Com.—Véase tom. 1º, Inst. Verb. Contrato bilateral, núms. 547 y 549.

14—El art. 1109 del Cód. Civ. exige como condición para que los daños



DAÑ

dente debe justificarse que el hecho en que se funda tuvo lugar por culpa del demandado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 307, Ser. 1^a.

15. Daños y perjuicios—Producidos por un acto ilícito que no puede ser calificado como delito, deben ser justificados plenamente sin que pueda apreciarse como tal el agravio moral que el acto haya inferido—Jur. Civ., tom. 8, pág. 365, Ser. 1^a.

16. Daños y perjuicios—Está obligado á su indemnización todo aquel que por su culpa ó negligencia cause un daño á otro—Jur. Civ., tom. 8, pág. 502, Ser. 1^a.

17. Daños y perjuicios—No basta para condenar al demandado que el actor sea por derecho acreedor á ellos, si pidiendo una cantidad determinada, no la justifica por lo menos en parte—Jur. Civ., tom. 7, pág. 571, Ser. 1^a.

y perjuicios causados sean exigibles, que el hecho sea ocasionado con dolo, culpa ó negligencia; no pudiéndose constatar ninguno de estos tres extremos la acción es improcedente. Véase, nota 9.

15—A este respecto han habido siempre dos opiniones en la Cámara: una de ellas que forma la mayoría, sostiene la necesidad absoluta de la prueba del daño apreciable en dinero, aunque se trate de delitos; la otra que es la minoría sostiene que todo delito envuelve un agravio moral y que su indemnización debe fijarse por el arbitrio prudente del Juez á falta de prueba ó cuando esta es deficiente. Pero para que haya delito es necesario que el acto ilícito haya sido ejecutado á sabiendas y con intención de dañar la persona ó los derechos de otro—art. 1072, Cód. Civ.—Cuando estos elementos no concurren queda el hecho reducido á un simple acto ilícito siendo entonces indispensable establecer por medio de la prueba el daño causado, susceptible de apreciación pecuniaria, las pérdidas sufridas y las ganancias de que fué privado el damnificado. De aquí resulta que el sumario está mal hecho, la Cámara no ha resuelto lo que el sumario dice y debe tenerse presente que la mayoría de los camaristas siempre han pensado que, aunque el acto ilícito pueda ser calificado de delito, la prueba de los daños y perjuicios es siempre necesaria para que el causante de ellos esté obligado á repararlos.

Art. 1109, Cód. Civ.

17—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 7 y nota.



DAÑ

18. Daños y perjuicios—Deben incluirse en ellos las costas causadas en el juicio de tercería—Jur. Civ., tom. 9, pág. 32, Ser. 1ª.

19. Daños y perjuicios—Causados á un tercero por un embargo indebido son á cargo del ejecutante que lo solicitó—Jur. Civ., tom. 9, pág. 32, Ser. 1ª.

20. Daños y perjuicios—No pueden fundarse en actos de los jueces, contra los cuales existen recursos previstos por la ley, mientras la parte que se considere damnificada no haga uso de dichos recursos en el modo y forma que la misma haya fijado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 137, Ser. 1ª.

21. Daños y perjuicios—Que puede ocasionar la inejecución de un contrato, es responsable el mandatario que no presenta al tercero la pieza original en que consta el mandato—Jur. Civ., tom. 7, pág. 151, Ser. 1ª.

22. Daños y perjuicios—Causados por un acto ilícito, reconocida su existencia, al actor corresponde la justificación plena de que los causados son consecuencia inmediata de aquel acto—Jur. Civ., tom. 3, pág. 50, Ser. 2ª.

18—Aunque en ese juicio se hubiese declarado por el Juez de la ejecución que las costas se paguen en el orden en que fueron causadas, pues esta resolución no hace cosa juzgada para el juicio ordinario.

19—Hay culpa de parte del que solicita el embargo de la cosa agena, en cuyo caso le es aplicable el art. 1109 del Cód. Civ.

20—Los daños y perjuicios en este caso pueden remediarse por medio de la interposición de los recursos que las leyes acuerdan. El sumario transcrito no responde al caso resuelto por la Cámara. Se trata aquí de una acción por daños y perjuicios causados por una orden de desalojo: el auto no fué apelado, dejando de usar de los derechos que las leyes le acuerdan. Es evidente que esta omisión produciendo el efecto de quedar ejecutoriada la resolución que ordenó el desalojo, cierra toda puerta á reclamo alguno para obtener indemnizaciones por perjuicios que puedan resultar, pues no hay ley que acuerde recurso por el cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas.

22—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1068 del Cód. Civ. Véase Verb. Daños y perjuicios, núm. 16 y nota.





DAÑO

23. Daños y perjuicios—Declarado por el superior el derecho á la indemnización, debe ésta ser fijada por el inferior á fin de que las partes puedan hacer uso del recurso de apelación—Jur. Civ., tom. 3, pág. 78, Ser. 2ª.

24. Daños y perjuicios—Sufridos por los pasajeros en virtud de hechos casuales que pudieron ser evitados por medidas administrativas de las empresas, no pueden calificarse de caso fortuito—Jur. Civ., tom. 3, pág. 259, Ser. 2ª.

23—Cuando el inferior hubiese denegado en su sentencia el derecho. La garantía del derecho y el acierto de la justicia exigen que todo asunto se resuelva en dos instancias. El mero nombre de Cámara de apelaciones, está demostrando que solo puede pronunciarse sobre puntos resueltos por el inferior, cuando se hubiese interpuesto apelación de ellos—art. 267 de la ley Org. de los Trib. de la Cap. de 1880.—Los arts. 46 y 48 de esta ley dicen que los Jueces de lo Civil conocerán en *primera instancia* de todos los asuntos regidos por las leyes civiles, y que sus *sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia* para ante la respectiva Cámara de Apelaciones. El art. 71, inc. 1º, agrega: «La Cámara conocerá en última instancia de los *recursos* contra las resoluciones de los Jueces de lo Civil». La apreciación encomendada por la ley á la prudencia del Juez, lo está á la prudencia judicial que comprende las dos instancias. Pueden citarse en apoyo de este principio los arts. 219 y 240 del Cód. de Proc. El primero llega hasta dejar la resolución sobre la importancia de los daños y perjuicios para otro juicio, y el segundo prohíbe á la Cámara fallar sobre el fondo del litigio cuando declara la nulidad de una sentencia y ordena que los autos se pasen á otro Juez para que lo sentencie y resuelva. Debe igualmente tenerse presente la jurisprudencia establecida por la Cámara que no se pronuncia ni sobre embargos preventivos ni sobre transacciones, si no que ordena pasen á primera instancia formándose incidente por separado para no privar á las partes de los recursos que las leyes acuerdan contra las providencias recaídas en estas peticiones.

24—La jurisprudencia y la doctrina han establecido, que las empresas de transporte deben guardar un cuidado sumo de vigilancia y seguridad porque está de por medio la vida humana, esta obligación es mayor aún respecto de las vías férreas porque encierran los mayores peligros. El conductor de un convoy debe tener la previsión de un buen padre de familia, y así observando las medidas de un hombre prudente está obligado á tomar todas las providencias para la seguridad de la vida de los pasajeros sin que pueda servirle de excusa el no estar escrito material

DAÑ

25. Daños y perjuicios—Las Empresas de Ferrocarriles son responsables civilmente de los que sobrevengan á los

mente en la ley ni en las ordenanzas reglamentarias. Las empresas están obligadas del mismo modo que los conductores y su culpa se deriva de la omisión de los deberes que les incumbe llenar, de la negligencia en adoptar las precauciones que reclaman una conducta prudente y la que guardaría una conducta razonable. El art. 94 de la Ley de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires establece que: «Las empresas de Ferrocarriles son responsables de las faltas cometidas en perjuicio de los pasajeros por sus agentes y empleados en el desempeño de su cargo, sean aquellas faltas producidas por negligencia, ó lo sean voluntariamente». El art. 53 de la ley Nacional, consigna igual prescripción. Estos artículos no hacen otra cosa que reproducir el principio de la ley común. Con efecto el art. 1109 del Cód. Civ. dice: «Todo el que ejecutare un hecho que por su culpa ó negligencia ocasione un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio. Este artículo está colocado en el tít. IX «De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos». De modo que no solo los daños causados con intención dolosa, sino que igualmente los que provienen de la imprudencia ó negligencia, engendran la obligación de indemnizar los daños causados: esta última circunstancia es la que constituye el cuasi-delito, que es un hecho positivo ó una omisión por el cual se hace daño á otro pero sin la intención de perjudicar—art. 1108 Cód. Civ.—Esta doctrina se corrobora por la nota puesta al pié del art. 1121 del Cód. Civ, cuando dice: «Pero en el cuasi-delito no hay intención punible; los autores de un hecho que daña á otro, no están obligados sino á reparar el perjuicio que han causado, no á título de pena, sino de mera indemnización. Por consiguiente siempre que se compruebe que los accidentes de esta naturaleza se producen por culpa de una empresa ó de sus agentes ó proceden de negligencia ó imprudencia de éstos, la obligación de indemnizar el daño causado es ineludible. No puede decirse que en estos casos haya caso fortuito, porque tal se conceptúa el que no ha podido preverse, ó que previsto no ha podido evitarse—art. 514—La Ley 11, tít. 33, Part. 3ª dice, que «Casos fortuitos tanto quiere decir en romance como ocasion que acontece por aventura de que non se puede ante ver» Los hechos de que uno puede precaverse con la diligencia de un padre de familia no deben ser colocados en la clase de casos fortuitos, como lo dice Troplong, núm. 204—Du l'ouage des choses. Droit Civil explique.

25—El art. 1113 del Cód. Civ. dice: la obligación del que ha causado un daño se estiende á los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Véase la nota prececente.

DAÑ—DEC

pasajeros por culpa ó negligencia de sus empleados—Jur. Civ., tom. 3, pág. 259, Ser. 2ª.

26. Daños y perjuicios—Esta acción fundada en que por una inhibición indebida no pudieron ser vendidos ciertos bienes debe ser rechazada—Jur. Civ., tom. 3, pág. 498, Ser. 1ª.

Daños y perjuicios—Véase: *Reivindicados*, núm. 1—*Acción de daños y perjuicios*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 13—*Sentencia de remate*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núms. 2 y 3—*Escribano*, núm. 2—*Deterioros*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 21—*Costas*, núms. 18 y 23—*Obligación extinguida*, núm. 1—*Socio* núm. 20—*Sentencia ejecutoriada*, núm. 2—*Revocación*, núm. 20—*Arbitros*, núm. 4—*Contrato*, núms. 7 y 11—*Acto ilícito*, núm. 1—*Tercero*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 5.

Decisión judicial—Véase: *Jueces*, núm. 2.

1. Declaración—De dos testigos, que no han presenciado simultáneamente el hecho sobre que declaran, no basta para darlo por probado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 436, Ser. 1ª.

2. Declaración—La de un testigo convicto de perjurio no forma prueba—Jur. Crim., tom. 5, pág. 449, Ser. 1ª.

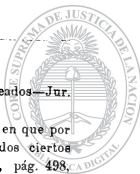
Declaración—Véase: *Testigo*, núm. 20—*Tachas*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 2.

Declaración de quiebra—Véase: *Quiebra*.

26.—1º Porque el inhibido puede con arreglo á la ley dar bienes á embargo para hacer cesar la inhibición. 2º—Porque aún existiendo la inhibición pueden venderse los bienes inhibidos depositando el importe del crédito ejecutado á las resultas del juicio.

1—Según las reglas de la sana crítica que deben aplicarse al examen de la prueba testifical, no bastan dos testigos para dar por probado un hecho cuando no haya perfecta conformidad en sus dichos y el hecho no les conste por haberlo visto ú oído en un mismo acto.

2—Ley 8, tít. 16, Part. 3ª.



DEC

1a. Declaración indagatoria—Prestada ante un Comisario de Policía y que el presunto reo no ratifica, debe estarse á lo declarado ante el Juez de la causa—Jur. Crim., tom. 5, pág. 327, Ser. 1ª.

Declaración judicial—Véase: *Transacción*, núm. 4.

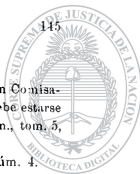
1b. Declaraciones—Por cartas, no forman prueba ni tienen valor en juicio—Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 2ª.

2. Declaraciones—Las de las prostitutas no tienen fuerza cuando se juzgan por pruebas legales, pero deben tenerse en cuenta cuando son concordantes con otro género de pruebas que no las contradice—Jur. Crim., tom. 5, pág. 136, Ser. 1ª.

1a—Esta resolución es contraria á otra dictada por esta misma Cámara—Véase Jur. Crim., tom. 1, pág. 272, Ser. 1ª, Verb. Declaraciones, núms. 751 y 752 y sus notas respectivas citadas en el tom. 1º de la Inst.

1b—Porque no reúnen las formalidades que exige la ley para su validez en el Cap. IV, tít. 2º del Cód. de Proc. Véase Inst., tom. 1º, Verbo Declaraciones, núm. 756 y nota.

2—Esto decía el camarista Dr. Benítez al fundar su voto al que se adhirió la Cámara. Este principio es exacto en tesis general, mas hay casos especiales en que las declaraciones de las prostitutas como las de los penados tienen fuerza de prueba legal. Es decir, que el testimonio dado por personas que tengan tacha aunque sea absoluta tienen valor en juicio. La ley 8, tít. 16, Part 3ª, igual al art. 206 de nuestro Cód. de Procedimientos como las leyes 8, y 17, del mismo tít. y Part. que les son complementarias, prohíben á los penados y á las mujeres de mala fama declarar como testigos y sus declaraciones no producen prueba legal en juicio: este es el principio general. Pero como puede suceder que un acto ó un delito no pudiese probarse sino por medio de testimonios tachados por la ley, resultaría que muchos delitos quedarían impunes por falta de prueba, como sucedería con los cometidos en las casas de tolerancia y en las prisiones en que el hecho no lo hubiesen presenciado sino prostitutas y penados. Pero es el caso que las leyes citadas no pueden interpretarse de una manera absoluta que dé por resultado la imposibilidad de la averiguación de los delitos en casos especialmente determinados, en que la absoluta negativa del delincuente daría siempre por resultado la impunidad del delito. No, la ley no ha podido dejar semejante vacío: así lo da á comprender cuando trata de la prueba privilegiada establecida para el esclarecimiento de los hechos de difícil compro-



DEC

3. Declaraciones—Las prestadas ante el Comisario de Policía sin previo juramento y no ratificadas en el plenario, no forman prueba bastante para declarar que existió alevosía—Jur. Crim., tom. 5, pág. 228, Ser. 1ª.

4. Declaraciones—Prestadas por extranjeros que no conocen el idioma patrio, ante un Comisario de Policía, sin asistencia de un intérprete y con las formalidades de ley, son nulas—Jur. Crim., tom. 5, pág. 275, Ser. 1ª.

5. Declaraciones—Prestadas en el sumario formado ante

bación según las reglas ordinarias. La ley de Part. establece las tachas legales para los casos comunes, pero las hace desaparecer cuando se trata de casos muy especiales como los dos que hemos puesto como ejemplos. La regla 36, tít. 34, Part. 7ª dice: «Aun dixeron, que non se deuen fazer las leyes si non sobre las cosas que suelen acaescer á menudo. E por ende non ouieron los antiguos cuydado de las fazer sobre las cosas que vinieron pocas vezes; porque huvieron, que se podria judgar por otro caso de ley semeiante, que se fallase escrito.» De modo que las tachas consignadas en las leyes se refieren «a las cosas que suelen acaescer a menudo», no es de tomarse como regla para los casos especiales ó de escepción que son «las cosas que vinieron pocas veces» si estas últimas no tienen una regla que pueda aplicárseles especialmente debe buscarse otra que sea semejante al caso particular. La ley aplicable en este caso es la que rige la prueba privilegiada. El precepto legal no puede nunca estar en pugna con los principios de justicia que son su base. Repugna á la conciencia que por la circunstancia de cometerse una acción en presencia de personas tachables debe el delito quedar impune. De aquí resulta que el principio sentado en el fallo de la Cámara no es siempre exacto y que falla en los casos de escepción. Hay casos que conviene no olvidar, en que las declaraciones de testigos con tachas hacen prueba plena.

3—La ley exige que las declaraciones se presten ante Juez competente para que constituyan prueba plena y con las formalidades de ley, entre las cuales se encuentra el juramento, y atenta una terminante ley de Partida la declaración prestada sin este requisito carece de ningún valor, sin embargo de que pueden servir como presunción para robustecer otras pruebas—Véase: Verb. *Declaraciones*, núms. y notas 744, 745, 751 y 752 del tom. 1º de la Inst.

4—Esta cuestión no fué materia de resolución en la Cámara, fué tratada tan solo por el Juez de 1ª Instancia en uno de sus considerandos



DEC

un Juez de 1ª Instancia, forman prueba en el plenario sin una nueva ratificación—Jur. Crim., tom. 5, pág. 294, Ser. 1ª.

6. Declaraciones—De los agentes de autoridad, forman prueba si no son contradictorias con las de otros testigos del hecho—Jur. Crim., tom. 5, pág. 437, Ser. 1ª.

7. Declaraciones—De testigos, los jueces no pueden ordenarlas para mejor proveer—Jur. Civ., tom. 7, pág. 532, Ser. 1ª.

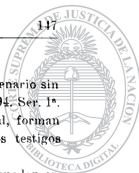
Declaraciones—Véase: *Documentos*, núms. 1 y 2—*Testamento privado*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 1—*Acreedor*, núm. 5—*Testigos*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 1—*In-sano*, núm. 2.

1. Declaraciones del fallido—Tendientes á disminuir la masa no forman prueba—Jur. Com., tom. 5, pág. 359, Ser. 1ª.

6 No puede racionalmente negársele crédito á la exposición de tales agentes, sin establecer un malísimo precedente que acarrearía la impunidad de muchos delitos: son testigos caracterizados por el mismo rol que desempeñan, y cuya circunstancia, sin prueba en contrario, establece en su favor la presunción de sus buenos procederes.

7—Son diligencias que las partes deben pedir dentro del término de prueba en cuyo caso no puede ni debe ser suplida por el Juzgado, como lo ha resuelto ya la Cámara en el caso que se registra en el tom. 1, pág. 372, Ser. 1ª. Es necesario además tenerse presente que los Jueces no pueden ordenar otras diligencias para mejor proveer que las enumeradas en el art. 57 del Cód. de Proc., como lo ha establecido la Cámara Civil en el tom. 1, pág. 242, Ser. 1ª. La enumeración hecha por el art. citado es limitativa.

1—Este principio lo ha consagrado la jurisprudencia de los Tribunales fundada en la común doctrina. La sola aseveración del fallido no tiene la fuerza de una prueba acabada contra su concurso, principio inconcuso que se desprende de las disposiciones del Cód. de Com., en sus referencias á los efectos de la quiebra con relación al fallido y á sus actos, y que es necesario admitir sin mayor esfuerzo, pues de lo contrario se le acordaría al fallido la facultad de disminuir á su arbitrio la masa de bienes, con perjuicio de sus verdaderos acreedores á quienes se despojaría de los medios de evitar los fraudes: esta sería, sin duda alguna la consecuencia forzada, si se erigiese en principio que las declaraciones de deudas y los documentos que no tienen mas comprobante que la firma de un fallido sean obligatorios para el concurso.



DEC

1. Declaraciones incidentales — Del acreedor, en sus asuntos con terceros y que no hagan referencia directa a deudor, no forman el principio de prueba por escrito que la ley requiere para la justificación de un pago en asuntos de mayor cuantía—Jur. Com., tom. 5, pág. 185, Ser. 1ª.

1a. Declaraciones por carta—No forman prueba aun cuando se ratifiquen los firmantes en el término probatorio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 331, Ser. 1ª.

2. Declaraciones por carta—No forman prueba—Jur. Civ., tom. 2, pág. 423, Ser. 2ª.

1b. Declaratoria—De pobreza á favor de la esposa, para seguir el juicio de divorcio, no debe acordarse si no se justifica previamente que el marido tampoco tiene bienes—Jur. Civ., tom. 6, pág. 235, Ser. 1ª.

1—Se trata de un concursado que al presentar su estado no incluyó entre sus deudores á uno de ellos; arreglado el fallido con sus acreedores, se presenta demandando á un deudor, éste opone la escepción de pago, la que pretende probar por medio de prueba testifical tomando como principio de prueba por escrito la confesión hecha por el fallido al presentar su estado. La Cámara, por mayoría de un voto declaró que tal documento no constituía un principio de prueba por escrito y que por consiguiente la prueba testifical era inadmisibile.

1a—Véase la nota 3ª verb. *Declaración por carta*.

2—Leyes 5, tít. 4, lib. 2º, F. J.; 12 tít. 8, lib. 2º, F. R., y 31, tít. 16, Part. 3ª. No admiten como prueba legal las declaraciones hechas por cartas. Nuestro Cód. de Proc. ha consagrado esta doctrina en sus disposiciones: con efecto, el art. 18, exige ciertos requisitos para que las partes puedan hacer uso de la prueba testimonial y en su examen debe intervenir el Juez de la causa, observándose en su diligenciamiento lo prescrito en los arts. 131, 132 y 133. El art. 203 dice que las declaraciones en que no se observen estas prescripciones no tendrán valor alguno; de aquí se sigue la exactitud del sumario. Véase Inst. tom. 1, verb. *Declaraciones*, núm. 756 v nota

1b—Según disposición del art. 203 del Cód. Civ., la esposa debe pedir al Juez Civil que señale la cantidad que para litisexpensas del juicio de divorcio está en la obligación de suministrarle el marido. Ya en otro caso esta misma Cámara, ha resuelto por unanimidad de votos que las deudas por honorarios en ese juicio son deudas del marido—arts. 203 y 205 Cód.



DEC

2. Declaratoria—Judicial de quiebra, la petición hecha por uno de los socios, no requiere el asentimiento de los demás—Jur. Com., tom. 5, pág. 262, Ser. 1ª.

Declaratoria—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2.

Declaratoria de demencia—Véase: *Esposo*, núm. 1.

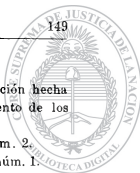
1a. Declaratoria de herederos—Consentida y ejecutoriada, no puede ser invalidada á petición fiscal por no haber intervenido con anterioridad á la declaratoria—Jur. Civ., tom. 8, pág. 418, Ser. 1ª.

1. Decretos—Los dictados por un Juez Comisario, no causan instancia á los efectos de la apelación—Jur. Com., tom. 5, pág. 314, Ser. 1ª.

Civ.—y que los acreedores por ese título tienen acción directa, para cobrar los que se les debe, del marido. Siendo esto así, no se concibe que haya de declararse procedente una declaratoria de pobreza en favor de la mujer, para que litigue con su marido en el juicio de divorcio, aun cuando acreditase realmente que no tiene medios propios para seguir ese juicio, si se hace caso omiso y no se justifica que el marido tampoco tiene esos medios.

2—El espíritu de la ley comercial al imponer al comerciante la obligación de declarar y demostrar su estado de falencia, es procurarle no solo un medio de arreglarse con todos sus acreedores, sino también eximirle, si la manifestación de su estado es sincera, de las responsabilidades penales que trae consigo una quiebra fraudulenta ó culpable: y siendo igual el interés y la responsabilidad de todos los socios colectivos en caso de falencia, las defensas acordadas por la ley deben ser idénticas, opinión comúnmente seguida por los autores, como se puede ver en Huebra, Tratado de las Pruebas, núm. 7; Alauzet, Tratado de las Quiebras, 2442; Humblet, Tratado de las Quiebras, núm. 36; Rousseau y Defert sobre quiebras, pág. 43, núm. 20.

1a—El auto declarativo en el juicio sucesorio tiene carácter de definitivo y confiere á aquellos en cuyo favor se ha dictado, el derecho á ser tenidos como tales, mientras su carácter no sea contestado por parte legítima y sean oídos y vencidos en juicio. Si el fiscal consiente el auto, pierde su derecho á reclamar porque las deficiencias del procedimiento se cubren por la notificación posterior si la parte no reclama dentro del término legal, y porque el recurso de nulidad es improcedente cuando las providencias están consentidas, como lo ha resuelto la Cámara Comercial, tom. 4, pág. 14, Ser. 1ª—art. 240, Cód. de Proc.





DEF

Defecto de forma—Véase: *Litigio*, núm. 2.

Defectos—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 3.

1a. Defensa propia—Justificada la intención de evitar la riña, el homicidio cometido debe declararse que lo ha sido en ese carácter—Jur. Crim., tom. 5, pág. 543, Ser. 1ª.

2a. Defensa propia—Cuando el medio empleado por ella no es proporcionado á la agresión, no deben tomarse en consideración las circunstancias invocadas por el reo para legitimar el hecho—Jur. Crim., tom. 5, pág. 41, Ser. 1ª.

Defensa propia—Véase: *Circunstancia atenuante*, número J.

Defensor—Véase: *Embargo*, núm. 1.

1b. Defensores de menores—Sus resoluciones no causan instancia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 445, Ser. 2ª.

2. Defensores de menores é incapaces—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 25, Ser. 1ª.

1. Defensores de pobres y ausentes—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 27, Ser. 1ª.

2. Defensores de pobres y ausentes—Se fija ante qué Tribunales deben ejercer sus funciones—Jur. Civ., tom. 1, pág. 28, Ser. 2ª.

3. Defensores de pobres y ausentes—Deben intervenir

1a—Art. 152 Cód. Pen. ant., igual al vigente.

2a—Art. 154, Cód. Pen. anterior.

1b—Cuando el Ministerio Público es desempeñado solamente por la repartición de la Defensoría de Menores en su oficina para procurar arreglos extrajudiciales, es puramente conciliatorio y administrativo, sin causar instancia, pues él no es Juez de derecho para resolver en definitiva sobre el estado de los incapaces.

3—Aunque la Ley Org. de los Trib. de la Cap. no menciona expresamente las Alcaldías entre los Trib. ante quienes deben ejercer sus funciones los Defensores de pobres y ausentes, pueden sin impropiedad considerárselas comprendidas entre los Juzgados de Paz; y aun es indispensable que así sea, porque el poco monto de los asuntos que allí se ventilan hace imposible el nombramiento de un defensor especial, pues sus honorarios no serían remunerados convenientemente.

DEF—DEM

en los litigios seguidos ante los alcaldes—Jur. Civ., tom. 1, pág. 454, Ser. 2ª.

Defensores de pobres y ausentes—Véase: *Tribunales de Paz*, núm. 1.

Deficiencias—Véase: *Títulos*, núm. 7.

Definitiva—Véase: *Desistimiento*, núm. 2.

Defraudados—Véase: *Calificación*, núm. 2.

1. Delito—Toda vez que de los autos resulte que no existen medios para su averiguación, ó que con el tiempo transcurrido esté compurgada la pena, procede el sobreseimiento—Jur. Crim., tom. 6, pág. 556, Ser. 1ª.

Delito—Véase: *Confesión*, núm. 2—*Cómplice*, núm. 1—*Complot*, núm. 1—*Acusado*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 15.

Delitos—Véase: *Absolución*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 20.

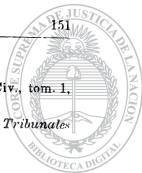
1. Demanda—No está obligado á contestarla el demandado ante un Juez que no es el de turno—Jur. Civ., tom. 2, pág. 482, Ser. 2ª.

2. Demanda—Su iniciación para la entrega de mercaderías no justifica por sí sola la mora, ésta existe solamente por la negativa después de esa fecha—Jur. Com., tom. 6, pág. 146, Ser. 1ª.

3. Demanda—No puede condenársele al demandado aun cuando se justifique la existencia de su obligación por otro

2—El sumario no es exacto. El fallo dice que el hecho de haber el actor demandado judicialmente la entrega, no prueba la mora, desde que no se prueba que se negaron á verificarla. Esta negativa puede ser antes de la demanda ó al contestarla; de manera que no hay mora *solamente* por la negativa *después de la demanda*, puede haberla antes de su iniciación.

3—El art. 216 del Cód. de Proc., establece que la sentencia debe pronunciarse con arreglo á las acciones deducidas en juicio. Sin embargo puede dar lugar á una nueva acción que podrá entablarse. Véase: Jur. Civ., tom. 9, pág. 356; y 7, pág. 164, Ser. 1ª.





DEM

título si no se justifica por el título invocado—Jur. Com., tom. 6, pág. 330, Ser. 1ª.

4. Demanda—El tercerista de dominio debe circunscribirse á probar el fundamento de ésta, y carece de acción para tachar de simulada la ejecución — Jur. Com., tom. 6, pág. 439, Ser. 1ª.

5. Demanda—La responsabilidad del poseedor de buena fe por los frutos percibidos empieza desde la fecha de ésta ó desde aquella en que llegó á su conocimiento el vicio de su posesión—Jur. Com., tom. 6, pág. 450, Ser. 1ª.

6. Demanda—La pena impuesta sobre no admisión de documentos que no se acompañen al entablar ésta, solo es aplicable á aquellos en que se funda algún derecho, pero no á los en que se funde un pedido de prueba—Jur. Com., tom. 6, pág. 418, Ser. 1ª.

Demanda—Véase: *Reconocimiento condicional*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 29—*Compraventa*, núm. 3—*Litigio*, núm. 2—*Hechos*, núms. 1 y 2—*Actor*, núms. 1 y 2—*Costas*, núm. 5—*Prescripción*, núms. 19 y 20—*Puntos litigiosos*, núm. 1—*Intereses*, núm. 4—*Hipoteca*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 13—*Recusación*, núm. 9—*Resoluciones Municipales*, núm. 4—*Demandado*, núm. 5.

1. Demanda ordinaria--Después de entablada y antes de ser contestada, pueden pedirse medidas preparatorias para fundar el embargo preventivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 422, Ser. 1ª.

Demanda ordinaria—Véase: *Prescripción*, núm. 6—*Término*, núm. 12—*Intereses compuestos*, núm. 1.

4—Es cosa bien distinta, la propiedad que es lo que pretende el tercerista de dominio y el carácter verdadero ó falso de acreedor y deudor de ejecutante y ejecutado.

5—Arts. 2423 y 2434, Cód. Civ.

6—Véase: verb. Documentos, núms. 1, 2, 3, 4 y 5 y sus notas.

DEM

Demanda reivindicatoria—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 15.

1a. Demandas—Que no se acomoden á las reglas establecidas, los jueces podrán repelerlas de oficio espresando el defecto que contengan—Jur. Civ., tom. 1, pág. 25, Ser. 2^a.

1b. Demandado—Cuando no justifica las escepciones opuestas, debe ser condenado en todas las costas del juicio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 58, Ser. 1^a.

2. Demandado—No está obligado á presentar, contestando la demanda el documento en que apoye su liberación—Jur. Com., tom. 5, pág. 562, Ser. 1^a.

3. Demandado—Que no niega categóricamente los hechos aseverados por el actor debe tenerse por confeso—Jur. Civ., tom. 8, pág. 477, Ser. 1^a.

4. Demandado—Su rebeldía exonera al demandante de las costas aun cuando éste no justifique su acción—Jur. Com., tom. 6, pág. 484, Ser. 1^a.

5. Demandado—El que sin serlo contesta la demanda

1a—Art. 75, Cód. de Proc.

1b—Cuando el demandado se escepciona debe comprobar la escepción porque el demandado es considerado como actor en este caso. Y cuando éste no comprueba su demanda debe ser condenado en las costas.

2—El caso es el siguiente: Entablada una demanda se exigió por el actor la exhibición de su título de liberación: el demandado se opuso, y la Cámara resolvió que no puede obligársele á ello por que el caso no está comprendido entre los enumerados en el art. 67 del Cód. de Proc.

3—Art. 100, inc. 1^o, Cód. de Proc.

4—Parece que la conducta del rebelde autoriza esta resolución; sin embargo no debe establecerse este principio sino con reservas, pues puede resultar que la demanda seguida en rebeldía no se compruebe en manera alguna, ni se haga verosímil el hecho litigioso.

6—El que contesta una demanda sin ser demandado procede incorrectamente porque debe limitarse á hacer presente al Juzgado que no es tal demandado cuando la notificación se le hace por error. En este caso las costas son causadas por el mismo que contesta indebidamente una demanda que no se dirige contra él.



DEM

no puede exigir el pago de las costas al ser rechazada—Jur. Com., tom. 6, pág. 420, Ser. 1ª.

Demandado—Véase: *Contrato*, núm. 21—*Edictos*, núm. 1.
—*Excepción de arraigo*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 20.

1a. Demandante—Cuando justifica su acción, la condena-
ción del demandado es ineludible Jur. Com., tom. 5, págs.
59 y 247, Ser. 1ª.

2. Demandante—Cuando no prueba el hecho en que
funda su acción, el demandado debe ser absuelto—Jur. Civ.,
tom. 6, pág. 347, Ser. 1ª.

Demandante—Véase: *Acción*, núms. 2, 5 y 6—*Plus petitio*,
núm. 1—*Demandado*, núm. 4—*Quiebra*, núm. 20.

Demandar—Véase: *Jactancia*, núm. 1—*Poder especial*,
núm. 1.

1b. Demencia—La declaración debe ser ventilada en juicio
ordinario, siempre que exista oposición por parte legítima—
Jur. Civ., tom. 1, pág. 59, Ser. 2ª.

1a—Véase nota siguiente.

2—Ley 1, tít. 14, Part. 3ª.

1b—En el Cód. de Proc. que nos rige, no existe reglamentación alguna para el juicio de declaratoria de demencia á la cual tengan que subordinarse los jueces cuando proceda hacerla para los efectos que se determinan en el Cód. Civ. En este último Código se registran algunas disposiciones que sirven de norma á los jueces para proceder á dicha declaratoria; las que pueden citarse como pertinentes son los arts. 142, 144 y 147. Teniendo en cuenta las disposiciones de estos arts., la práctica constante de los Tribunales ha sido que presentada por parte legítima la solicitud de demencia, el Juez, de conformidad con lo dispuesto en el art. 147, nombra para el presunto demente un curador provisorio á quien, previo juramento se le da vista de dicha solicitud, lo mismo que al Ministerio de Menores que es parte esencial en el juicio. Estos manifiestan ó no su conformidad con la petición ó denuncia de demencia. En el primer caso se procede al nombramiento de los facultativos que se proponen para el examen pericial del presunto demente. Los facultativos después de aceptar el cargo en forma, proceden al examen, y producen sus respectivos informes, de los cuales se dá vista al curador provisorio y al Ministerio de Menores, quienes si encuentran mérito para pedir la



DEM—DEN

2a. Demencia.—Su declaración no anula los actos que hayan tenido lugar antes de su fecha siempre que la interdicción no existiera públicamente—Jur. Civ., tom. 2, pag. 518. Ser. 2ª.

Demora.—Véase: *Prueba*, núm. 11.

1. Denunciantes.—De propiedades municipales, carecen de personería mientras la municipalidad, previa aceptación de la denuncia, no les confiera poder en forma—Jur. Civ., tom. 2, págs. 356, 349 y 372.

2b. Denunciantes.—De propiedades municipales, carecen de personería para iniciar el juicio, mientras la Municipalidad no acepte la acción y les confiera poder bastante para la reivindicación—Jur. Civ., tom. 6, págs. 377, 380, 384 y 455.

1a. Denuncias.—De propiedades fiscales, deben ser sustanciadas, en juicio ordinario, como demandas de reivindicación,

declaratoria de demencia y están conformes en que el Juez la haga, así se espiden y éste procede á hacerla, nombrando para el incapaz curador definitivo si entiende que así corresponde en derecho. Pero si antes de la declaratoria que pone término al juicio se suscita oposición de parte legítima, á que ella se haga, porque se pretende que no hay razón bastante para ello, entonces es evidente que llega el caso de una contienda entre la parte opositora y aquella ó aquellas que sostienen la procedencia de la declaratoria: caso es este que no puede sugerir duda, pues está regido por la terminante disposición del art. 66 del Cód. de Proc. que dice: «Todas las contiendas judiciales entre partes, que no tengan señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario.»

2a—Art. 473, Cód. Civ. Es principio aceptado que para que una persona sea habida por demente á los efectos legales, que esa declaratoria sea hecha por Juez competente previa verificación pericial—art. 140, *ibid.*—Véase la nota del número precedente.

2b—Porque el derecho de representar á la Municipalidad en las gestiones judiciales corresponde al Intendente municipal—art. 59 inc. 1º de la ley Org.—Como el denunciante no tiene ningún derecho propio en este juicio, no puede estar en él, sino autorizado por el representante de la Municipalidad.

1a—En el Cód. de Proc. no hay una tramitación especial establecida para la denuncia de estas propiedades, y habiendo legislado minuciosamente sobre el juicio ordinario, sobre el juicio ejecutivo, interdictos, desalojo



DEO

no por simple información — Jur. Civ., tom. 6, pág. 377, Ser. 1ª.

1. De oficio—Debe aplicarse la disposición que declara improcedente la prueba testimonial en contratos por mas de 200 pesos si no existe un principio de prueba por escrito.

2. De oficio—Los Jueces tienen facultad para desaprobar los convenios ó transacciones que en asuntos litigiosos presenten las partes para su aprobación, siempre que los representantes carezcan de la facultad necesaria para llevarlos

y otros juicios especiales, ha establecido como un complemento para no dejar nada al arbitrario, que todas las contiendas entre partes, que no tengan señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario—art. 66.

1—La Cámara no resolvió esta cuestión. Solo dijo que á pesar de que al contestar la demanda no se hubiese argüido, que no existía un principio de prueba por escrito para hacer admisible la prueba testimonial, sin embargo al alegar de bien probado puede pedirse el rechazo de la rendida por ser improcedente. Es practica constante dejar á las partes la más amplia libertad en la producción de la prueba, y ni la parte contraria ni el Juzgado puede oponerse á su recepción en la estación de prueba. El mérito de la prueba como su pertinencia y procedencia ó improcedencia solo puede ser considerada por el Juez al dictar sentencia y por las partes al alegar de bien probado. No se puede decir que por no haberse presentado, al iniciar un juicio, ningún principio de prueba ó por no haberlo mencionado, deba rechazarse la prueba testimonial ofrecida, pues él puede resultar ó producirse en el curso del juicio, como ser la confesión aunque fuese vaga al absolver posiciones. El Juez como lo hemos dicho, no puede pronunciarse sobre la prueba ofrecida sino al pronunciar sentencia. Así se desprende del contexto de los arts. 108, 213, 214 y 215 del Cód. de Proc. El hecho de pronunciarse un Juez sobre el mérito de la prueba ofrecida importaría un prejuzgamiento.

2—Es deber del Juez antes de aprobar una transacción, observar cuidadosamente si quien lo presenta es el dueño del pleito ó si tiene poder suficiente de éste para pedirla porque de otro modo se perjudicaría el derecho de su verdadero dueño y comprometería seriamente sus responsabilidades. Si bien es cierto que una transacción celebrada por un apoderado que no tuviese facultad para llevarla á cumplido efecto, sería sin ningún valor legal para el representado, también lo es que los jueces deben evitar la celebración de actos que llevan en sí cualquier vicio de nulidad.



DEO—DEP

á cabo, aun cuando por el instrumento habilitante se les haya facultado para hacer transacciones—Jur. Civ., tom. 6, pág. 540, Ser. 1ª.

3. De oficio—La reposición de providencias dictadas sin pedido de parte debe ser resuelta sin sustanciación—Jur. Civ., tom. 3, pág. 535, Ser. 2ª.

De oficio—Véase: *Persona jurídica*, núm. 1—*Contador*, núm. 1—*Demandas*, núm. 1—*Nulidades*, núm. 3—*Nulidad*, núms. 5, 6, 8, 9, 10, 13, 20, 24 y 25—*Prueba*, núm. 7—*Jueces*, núm. 1—*Gastos causídicos*, núm. 1—*Incompetencia*, núm. 8.

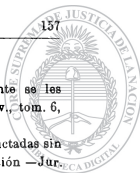
1. Dependiente—Que personalmente comete un hurto, no se encuentra comprendido en la disposición del art. 319, inc. 4º del Cód. Penal—Jur. Crim., tom. 5, pág. 463, Ser. 1ª.

Dependiente—Véase: *Calificación*, núm. 1.

Depositante—Véase: *Curso forzoso*, núm. 1.

3—Este sumario está mal redactado y no expresa lo que la Cámara resolvió. El caso es el siguiente: Una de las partes provocó una resolución, la misma parte solicitó su reposición por contrario imperio, el Juez sin conferir traslado del escrito de reposición, resolvió el punto, la parte á quien debió conferirse el traslado dijo de nulidad y apelación y la Cámara resolvió que: *cuando se pide reposición de las providencias recaídas en los escritos presentados por la misma parte que reclama no corresponde darse traslado de la reposición á la otra parte*. Como se ve es completamente distinto lo que dice el sumario de lo que la Cámara ha resuelto. La resolución tiene su fundamento en que si bien es cierto que el art. 224 del Cód. de Proc. preceptúa que cuando se pide revocatoria debe el recurso sustanciarse previa audiencia de la otra parte, esto debe entenderse de las providencias dictadas á solicitud de la parte á quien se manda dar audiencia, pero no á aquellas recaídas en los escritos de la misma parte que reclama. Conferir en este último caso traslado, sería constituir al contrario en defensor obligado de las resoluciones dictadas por los jueces ya sea á solicitud de una de las partes ó de oficio. El propio criterio del Juez es suficiente para reverter sus resoluciones y revocarlas cuando se le demuestra el error en que pudo incurrir.

1—No concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el inc del art. citado. Este inc. requiere que el dependiente ó doméstico sea sobornado por un tercero ó que lo auxilie á éste.



DEP

1a. Depositario—No puede aducir contra el depositante la excepción de compensación sin que previamente se liquide el depósito—Jur. Com., tom. 5, pág. 124, Ser. 1ª.

2. Depositario—De un menor carece de personería para oponerse á su entrega—Jur. Civ., tom. 3, pág. 334, Ser. 2ª.

Depositario—Véase: *Arrendatario*, núm. 1—*Martilleros*, núm. 2—*Mandato apócrifo*, núm. 1.

1b. Depositario judicial—No es responsable de las entregas indebidas que haya hecho, siempre que hubiesen sido verificadas por orden del Juez que ordenó el depósito—Jur. Civ., tom. 6, pág. 354, Ser. 1ª.

Depositario judicial—Véase: *Auto de quiebra*, núm. 1—*Condóminos*, núm. 3.

1c. Depósito—Entre comerciantes, no puede considerarse gratuito y la comisión debe ser determinada por arbitradores—Jur. Com., tom. 5, pág. 122, Ser. 1ª.

2. Depósito—Reconocido, corresponde al depositario probar las entregas que haya hecho al depositante—Jur. Com., tom. 5, pág. 182, Ser. 1ª.

3. Depósito—De las llaves ante la autoridad no basta para exonerar del pago del precio de los alquileres, se re-

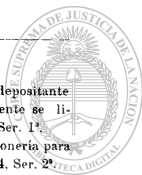
1a—El art. 967, inc. 2º del Cód. de Com. espresamente declara que la compensación no es admisible y que el depositario se halla obligado á restituir la cosa depositada.

1b—Y siempre que esa suma no hubiese sido embargada por un tercero, ó en caso de haberlo sido, no se hubiese comunicado el embargo al depositario; porque de lo contrario su responsabilidad sería manifiesta.

1c—Art. 722 Cód. de Com.

2—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª. El reconocimiento del depósito importa una confesión: la afirmación de haber hecho entregas al depositante es una calificación de la confesión cuya prueba le incumbe.

3—El art. 1611 del Cód. Civ., al declarar que cesa la obligación del inquilino desde el día en que ponga la cosa en depósito judicial, presuponé la negativa de recibirla de parte del dueño. De manera que si el depósito se hace sin preceder esa negativa, no cesa la obligación de



DEP—DER

quiere que ella sea competente y que el hecho se haga llegar al conocimiento del locador—Jur. Civ., tom. 8, pág. 317, Ser. 1ª.

4. Depósito—Entregado en el acto de firmar un boleto en remate judicial, no puede decretarse la pérdida y solo procede su retención para responder á los gastos de la nueva venta—Jur. Civ., tom. 8, pág. 397, Ser. 1ª.

Depósito—Véase: *Pago*, núm. 2—*Inhibición*, núm. 2—*Recurso de fuerza*, núm. 4.

Depósito judicial—Véase: *Comprador*, núm. 5.

Depósitos—Véase: *Curso forzoso*, núm. 1.

1a. Derecho hereditario—Para privarlo de él al cónyuge supérstite, no es necesario una desheredación formal, basta solo justificar el hecho de la separación sin voluntad de unirse, prescindiendo de las causas que la motivaron—Jur. Civ., tom. 6, pág. 125, Ser. 1ª.

Derechos hereditarios—Véase: *Transacción*, núm. 1.

1b. Derecho para heredar—La disposición que limita por representación al tercer grado en la línea colateral, no es

pagar los alquileres hasta que el depósito sea conocido del propietario. Debe tenerse presente además, que la obligación de pagar los alquileres no cesa mientras la cosa no sea puesta á disposición de su dueño.

4—El art. 519ª del Cód. de Proc. prevee el caso en que la venta judicial dejase de tener efecto por culpa del postor, y manda proceder á un nuevo remate bajo su responsabilidad por la disminución del precio, intereses y costas.

1a—En toda clase de sucesiones, ya sean testadas ó intestadas, el derecho de los cónyuges para heredarse recíprocamente, está sometido á la condición de no hallarse, al tiempo de su muerte, separados de hecho sin voluntad de unirse, solo entonces son herederos forzosos el uno del otro con arreglo al art. 3575 del Cód. Civ. Para privar de este derecho al cónyuge supérstite, no es necesaria una desheredación formal, pues cesa *ipso jure* por el solo hecho de la separación sin voluntad de unirse.

1b El Juez de 1ª Instancia había resuelto lo contrario, fundado en que el derecho de representación en las sucesiones colaterales, solo tiene lugar á favor de los hijos y descendientes de hermanos, para dividir la herencia con los parientes de grado mas próximo. En el caso *sub-judice*



DER—DES

aplicable cuando los herederos colaterales, aunque de grado mas lejano son los únicos sucesores del causante—Jur. Civ., tom. 6, pág. 54, Ser. 1ª.

Derecho personal—Véase: *Posiciones*, núm. 11.

Derechos reales—Véase: *Dominio*, núm. 2.

Desacato—Véase: *Clandestinamente*, núm. 1—*Agentes fiscales*, núm. 2.

1a. Desalojo—Deducido en juicio sumario, el Juzgado aún cuando resuelva de conformidad, no puede declarar rescindido el contrato, declaración que solo puede hacerse en juicio ordinario—Jur. Civ., tom. 9, pág. 355, Ser. 1ª.

Desalojo—Véase: *Auto*, núm. 4—*Poseción*, núm. 1—*Interdicto de despojo*, núm. 1—*Promesa*, núm. 2—*Interdicto de retener*, núm. 3.

Desconocimiento—Véase: *Hijo*, núm. 1.

Desgloce—Véase: *Archivo*, núm. 4.

Desheredación formal—Véase: *Derecho hereditario*, número 1.

Desierto—Véase: *Coadyuante*, núm. 1.

Desistido—Véase: *Comprador*, núm. 7.

1b. Desistimiento—Condicional, no surte efecto mientras

no era aplicable la disposición del art. 3560 del Cód. Civ., porque se trataba de la sucesión única de estos parientes colaterales sin concurrencia de otros de un grado más próximo, condición *sine qua non* para que el derecho de representación se ejerza. Habiéndose presentado solo estos parientes y encontrándose dentro del grado sucesible fijado por el art. 3586 Cód. Civ., su derecho á heredar es incontestable.—Art. 3545 *ibid.* Véase: Inst. tom. 1, verb. Línea colateral, núm. 1664.

1a—El juicio iniciado sobre rescisión de un contrato no tiene en el Cód. de Proc. una tramitación especial y por consiguiente debe sustanciarse en juicio ordinario, art. 6º, Cód. de Proc. Sustanciándose un juicio contra esta disposición se viola la ley de forma y es nulo el juicio, art. 237, *ibid.*

1b—Es una obligación condicional en cuyo caso no puede el desistimiento operarse mientras no se cumpla la condición impuesta. Si el desis-

DES

la condición no haya sido llenada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 104, Ser. 1ª.

2. Desistimiento—El auto que no hace lugar al del comprador de un bien en remate judicial, es definitivo y como tal no puede ser revocado por contrario imperio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 171, Ser. 2ª.

3. Desistimiento—Importa un reconocimiento de culpa y hace procedente la condenación en costas—Jur. Civ., tom. 8, pág. 315, Ser. 1ª.

4. Desistimiento—Si se funda en defectos del título de difícil subsanación, el comprador no puede ser responsabilizado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 397, Ser. 1ª.

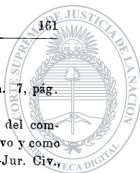
Desistimiento—Véase: *Contrato de locación*, núm. 1—*Costas*, núm. 11—*Títulos*, núm. 11.

timiento se hace bajo ciertas condiciones y esas condiciones no son aceptadas, la parte que la hace puede arrepentirse y aun desistir antes de estar presentada—art. 838, Cód. Civ.

2—El auto es de carácter definitivo y bajo ningún concepto puede ser considerado como un auto interlocutorio. El recurso de reposición es improcedente, y si el Juez, una vez sustanciada la reposición, lo revocara por contrario imperio, esta revocación sería nula y sin ningún efecto, porque su jurisdicción concluye respecto del pleito, una vez pronunciada y notificada la sentencia y como lo dice espresamente el art. 223 del Cód. de Proc., no puede hacer en ella variación ni alteración alguna. ¿Las sentencias definitivas con carácter de interlocutorias pueden ser materia del recurso de reposición? La jurisprudencia no se ha establecido aún en esta materia, pues las Cámaras lo han resuelto afirmativa y negativamente como puede verse en el tom. 1º de la Inst.—Verb. Interlocutorias, núm. 1488, Reposición núm. 2380, Véase asimismo verb. Auto, núm. 31 de este tomo.

3—Se trata de lo siguiente: un litigante presentó unas copias ininteligibles, la parte contraria pidió se le dieran otras, petición que fué impugnada; pero como estas actuaciones importaran un incidente que acarrearía pérdida de tiempo, consintió en dar nuevas copias y como este hecho importaba un *desistimiento*, ó sea un *reconocimiento* del derecho con que era impugnada su aceptación, se le condenó en las costas causadas en el incidente.

4—Art. 522, Cód. de Proc.



DES—DET

1a. Deslinde—De predios urbanos, es improcedente — Jur. Civ., tom. 9, pág. 222, Ser. 1ª.

Deslinde—Véase: *Mensura*, núm. 4.

1b. Despojo—Esta acción es procedente, justificada la posesión en que se encontraba el demandante —Jur. Civ., tom. 7, pág. 173, Ser. 1ª.

2. Despojo — Clandestino y violento, si está justificado, el interdicto es procedente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 283, Ser. 12.

3. Despojo—No basta para justificarlo, la presencia ni aun el consentimiento tácito de un condómino—Jur. Civ., tom. 1, pág. 283, Ser. 2ª.

4. Despojo—En virtud de un auto judicial dictado por informaciones falsas, se supone clandestino—Jur. Civ., tom. 2, pág. 212, Ser. 2ª.

Despojo—Véase: *Interdicto de despojo*, núms. 1 y 2—*Posección*, núm. 3—*Interdicto de recobrar*, núm. 2.

1c. Deterioros—Que el locatario cause intencionalmente

1a—El art. 2748 del Cód. Civ. dice que esta acción tiene por base indispensable los predios rústicos y que no se dá para dividir predios urbanos.

1b—Así lo establece el art. 581 del Cód. de Proc.

2—Concurren los extremos exigidos por el art. 581 Cód. de Proc.

4—La posesión conferida por el auto en este caso sería el resultado de manejos reprobados, de precauciones y aseveraciones inciertas para ocultar al Juzgado el verdadero estado de la posesión, ó al poseedor el conocimiento de pretensiones á que tendría derecho á oponerse. Tal posesión sería siempre viciosa considerándose en consecuencia como un despojo operado clandestinamente—art. 2369, Cód. Civ.

1c—Según disposición de los arts. 1514 y 1516 del Cód. Civ., es obligación del locador entregar la cosa al locatario en buen estado, de manera á hacerla propia al uso para el cual ha sido contratada, y conservarla en buen estado haciendo las reparaciones que exigiere el deterioro: el último artículo establece la presunción de que cuando el locatario recibe la cosa sin la descripción de su estado, la recibe en buen estado. Por otra parte el art. 1561 dice, que el locatario debe conservar la cosa en buen estado y responder de todo daño ó deterioro que se causare por su culpa; y el



DEU—DIA

en la cosa arrendada, importan un acto ilícito que obliga á la indemnización de los daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 8, pág. 428, Ser. 1^a.

Deuda—Véase: *Prescripción*, núm. 20.

1a. Deudas—De la testamentaria, no obstan á que el causal se divida previa deducción de su monto—Jur. Civ., tom. 8, pág. 568, Ser. 1^a.

1b. Deudor—La inhibición es procedente siempre que el embargo preventivo no pueda tener efecto por no conocerse los bienes—Jur. Com., tom. 6, pág. 515, Ser. 1^a.

Deudor—Véase *Fiador*, núm. 1—*Acreeedor*, núm. 5.

Deudor solidario—Véase: *Fiador*, núm. 3.

Diarios—Véase: *Avisos*, núm. 1—*Martilleros*, núm. 3.

1c. Días feriados—Tampoco deben incluirse en el térmi-

art. 1562 dice, que el locatario no conservará la cosa en buen estado *si se deteriora por su culpa*. El dolo como la culpa no son de presunción legal, pero su existencia se comprueba cuando libremente y con intención se ejecutan hechos que perjudican á otro. Es de tenerse presente en este caso que el art. 1067 establece que hay acto ilícito punible cuando hay daño causado á otro acto exterior que lo pueda causar, siempre que á sus agentes se les pueda imputar *dolo, culpa ó negligencia*. El acto ilícito ejecutado á sabiendas y que deliberado por parte del autor, con intención de dañar la persona de otro ó sus derechos, constituye el delito del derecho civil, como dicen los arts. 1072 y 1076. Todo delito hace nacer la obligación de reparar los perjuicios que por él resultase á otra persona—art. 1077.—Y como el art. 1094 dice, que si el delito fuere de daño por destrucción de la cosa ajena, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida. Si la destrucción de la cosa fuese parcial, como sucedió en el caso ocurrente, la indemnización consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo, de aquí resulta la exactitud de la resolución.

1a—Art. 3453 del Cód. Civ.

1b—Véase: nota al verb. Embargo preventivo.

1c—La prueba no puede producirse en dichos días porque en ellos no funcionan los Trib. del Crimen. Si se estableciera que en el término de prueba se incluyen los días feriados, sería obligar á las partes á producirlos en dichos días, lo que sería imposible.



DIC—DIL

no de prueba en materia criminal—Jur. Crim., tom. 5, pág. 566, Ser. 1^a.

Dictamen—Véase: *Peritos*, núm. 1 y 3—*Juramento*, número 2.

Dilatoria—Véase: *Acción*, núm. 6.

1a. Diligencia—Pedida dentro del término probatorio, el Juez no puede denegarla fundado en la falta de tiempo para que ella tenga lugar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 260, Ser. 1^a.

Diligencia de prueba—Véase: *Reconocimiento de firma*, núm. 2—*Firma*, núm. 2—*Prueba*, núm. 19.

1b. Diligencias—Las únicas que como preparatorias pueden autorizar los Jueces, son las especialmente permitidas por la ley—Jur. Civ., tom. 9, pág. 191, Ser. 1^a.

Diligencias—Véase: *Juez*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 12—*Honorarios*, núm. 5.

1c. Diligencias de prueba—Pedidas cuando es manifiestamente imposible cumplirlas dentro del término, deben ser rechazadas—Jur. Civ., tom. 1, pág. 444, Ser. 2^a.

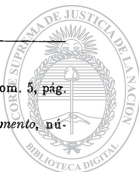
2. Diligencias de prueba—No practicadas dentro del

1a—En el caso que motivó esta resolución no era posible afirmar, en el estado de los autos, que la prueba ofrecida fuese absolutamente inadmisibile, siendo su recepción la regla general y no pudiendo compararse el perjuicio de la pérdida de tiempo con el fracaso de la acción. El cálculo en estos casos, sobre lo que pudiera ó no hacerse dentro del término, no es oportuno considerar. Si la prueba se produce fuera del término por causas ajenas al litigante, ella debe admitirse, mas no así en el caso contrario.

1b—La enumeración hecha por el art. 67 del Cód. de Proc. es taxativa.

1c—El escrito ofreciendo la prueba fué presentado el día en que se vencía el término de prueba, circunstancia que inhabilita de una manera evidente el cumplimiento de lo prescrito en el art. 118 del Cód. de Procedimientos.

2—Con el objeto de practicar algunas diligencias, se pidió la reiteración de un oficio, el que no fué librado, considerándose esta omisión imputable al Juzgado, circunstancia que coloca al litigante bajo el amparo del art. 118 del Cód. de Proc. y haciendo procedente el libramiento del nuevo oficio.



DIL-DIV

término por omisión no imputable á la parte, deben serlo aun despues de vencido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 467, Ser. 1ª.

3. Diligencias de prueba—Al ordenarlas el Juzgado no prejuzga sobre su pertinencia y valor probatorio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 303, Ser. 1.

1a. Diligencias testimoniales—Deben pedirse con la anticipación necesaria para que la nómina se encuentre de manifiesto en la Oficina desde tres dias antes de las declaraciones—Jur. Civ., tom. 1, pág. 607, Ser. 2ª.

Dimensión—Véase: *Comprador*, núm. 8.

Dinero de la esposa—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 4.

Dirección general de rentas—Véase: *Sello*, núm. 3.

Disolución de sociedad—Véase: *Arbitros*, núm. 4—*Sociedad*, núm. 3—*Sócio*, núm. 20.

División—Véase: *Condominio*, núm. 2.

1b. Divorcio—No siendo definitiva la providencia que admite la demanda, no puede fundar un recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder—Jur. Civ., tom. 6, pág. 350, Ser. 1ª.

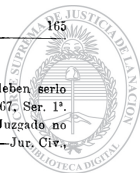
2. Divorcio—Admitida la demanda por el Eclesiástico, la esposa debe pedir al Juez civil señale la cantidad que para litisexpensas está en la obligación de suministrarle el marido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 235, Ser. 1ª.

3—Al admitir una prueba el Juez se reserva la facultad de apreciar, al dictar sentencia, su valor probatorio y su pertinencia

1a—El escrito ofreciendo la prueba testifical fué presentado tres dias antes de vencerse el término de prueba; según esto no podía darse cumplimiento á la prescripción del art. 184 del Cód. de Proc., el que ordena que la lista de testigos permanezca de manifiesto por tres días en la oficina. Siendo además obligación de los litigantes pedir las diligencias dentro del término de prueba y urgir su despacho dentro del mismo—art 118 Cód. de Proc. Véase: *Inst. tom. 1º, Verb. Prueba*, núm. 2213 y *Prueba testimonial*, núm. 2256.

1b—Ley 37, tít. 6, Lib. 2, R. C.

2—Art. 208, Cód. Civ.



DIV-DOC

Divorcio—Véase: *Honorarios*, núm. 3—*Sentencia*, núm. 3—*Sentencia de divorcio*, núm. 1—*Separación de bienes*, núms. 3, 11 y 8.

1a. Documento—Agregado despues de vencido el término de prueba, puede ser tomado en consideración siempre que fuese de los que puede pedir el Tribunal para mejor proveer—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 1ª.

2. Documento—Liberatorio de una obligación, no está sujeto al impuesto de papel sellado—Jur. Com., tom. 6, pág. 380, Ser. 1ª.

3. Documento—El Escribano que al protestar uno estendido con infracción de la ley de sellos, omite poner la nota de «no corresponde», se encuentra comprendido en la disposición de la ley sobre pena á todos los que intervienen en él—Jur. Com., tom. 6, pág. 523, Ser. 1ª.

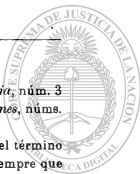
Documento—Véase: *Excepción de compensación*, núm. 1—*Aviso*, núm. 1—*Demandado*, núm. 1.

1b. Documento á la orden—La propiedad se trasmite por el endoso y su legítimo tenedor tiene derecho á recibir el

1a—Se trata de un documento público cuya agregación á los autos fué hecha sin contradicción de la otra parte. Además debe tenerse presente que tratándose de esta clase de documentos, su presentación es admisible en segunda como en primera instancia con arreglo al art. 506 del Cód. de Proc. Debe tenerse además presente que en el caso ocurrente su presentación fué trabada á causa de la traslación de los poderes públicos á La Plata. Y por último no debe olvidarse que puede el Juzgado, para mejor proveer, ordenar se traigan *ad effectum videndi*, los documentos que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, art. 57, inc. 1º, Cód. de Proc. La misión primordial del Juez es llegar al esclarecimiento de la verdad y si para ello fuere necesario tomar en consideración la prueba producida en los términos que expresa el sumario, debe hacerlo en cumplimiento de su deber.

3—El art. 37 de la ley de Sellos prescribe esta obligación á los Escribanos, quienes deben en seguida presentar los documentos al Juez que corresponda para que haga efectiva la multa.

1b—Arts. 801 y 804, Cód. de Com.



DOC

importe aun cuando el endosante se encuentre concursado—
Jur. Com., tom. 5, pág. 100, Ser. 1ª.

Documento escrito—Véase: *Créditos*, núm. 1.

Documento nulo—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 8.

1. Documento privado—El reconocimiento de la firma importa el de su contenido, y en consecuencia el documento adquiere fuerza ejecutiva — Jur. Civ., tom. 7, pág. 460, Ser. 1ª.

2. Documento privado—En que se reconozca la obligación sin espresar su monto, basta como principio de prueba por escrito para hacer admisible la prueba testimonial al solo objeto de fijar la cantidad adeudada—Jur. Civ., tom. 1, pág. 81, Ser. 2ª.

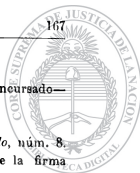
Documento privado—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 1 —*Embargo preventivo*, núm. 12—*Falsedad*, núm. 3.

1b. Documentos—Pertinentes al acto pero no al litigio, pueden presentarse al prestar declaración un testigo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 278, Ser. 1ª.

1a—El art. 467 del Cód. de Proc. establece, que reconocida la firma queda preparada la vía ejecutiva, aunque se niegue su contenido. El reconocimiento de la firma importa el de su contenido siempre que este contenido no hubiese sido negado por el signatario—arts. 1016 y 1017 Cód. Civil.

2—Con arreglo á los arts. 1192 del Cód. Civ. y 180 del Cód. de Proc., cualquier documento, todo documento ó manifestación constatada en juicio, que emane de aquellos á quienes la ley se refiere y que haga verosímil el hecho litigioso, se considerará principio de prueba por escrito. *Cualquier documento, todo documento ó manifestación*, son términos muy generales, de manera que para no caer en la vaguedad se ha agregado «y que haga verosímil el hecho litigioso». Es la prudencia de los Tribunales la que ha de decidir en cada caso si el documento ó manifestación hace verosímil el hecho litigioso. Véase: Goyena—Concordancias y Nota al art. 1223; Ley 10, tít. 16, Part. 3ª.

1b—El documento tenía relación directa con los hechos que se testimoniaban, sin que se pretendiera hacer mérito de su contenido, en cuyo caso no es aplicable lo dispuesto en el art. 72 del Cód. de Proc.



DOC

2. Documentos—En que los testigos fundan sus declaraciones, no pueden ser agregados—Jur. Civ., tom. 8, pág. 474, Ser. 1ª.

3. Documentos—Que no pudieron presentarse al con-

2—Esta resolución está en abierta oposición con la anterior en la que se resolvió lo contrario. Allí fué resuelto el punto por unanimidad de la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias, votando los señores Camaristas, Bazán, Damianoviche y Gonzalez. En el último caso solo fué resuelto por mayoría, votando por esta resolución los Dres. Zavalla y Pardo, y el Dr. Damianoviche en disidencia opinando del mismo modo que en el caso anterior. Es de notarse la justicia en que se fundó la primera resolución, pues no se trata de documentos en que se funda la demanda, sino de simples comprobantes con que el testigo abona su declaración, como que no está prohibido: que por el contrario la ley exige que el testigo dé razón de su dicho, lo que puede ser útil para la averiguación de la verdad, como la referencia á cualquiera circunstancia que influya en el valor de la declaración. Es de observarse por otra parte que el Juez solo puede tomar en consideración el valor de la prueba producida, al dictar sentencia definitiva, dejando de tomar en consideración la que considere impertinente ó estemporánea, pues una conducta contraria haría fácil un prejuzgamiento que inhabilitaría al Juez para continuar conociendo en el juicio. Esta opinión tiene además en su apoyo la autoridad de los prácticos. El art. 72, solo exige que el actor acompañe á su demanda, aquellos documentos en que funde su derecho. Este artículo tiene su origen en un principio establecido por la ley 1ª, tít. 3, Lib. 11 de la Nov. Rec., principio que paso á formar parte del Reglamento Provisional de España en su art. 48, fué mas tarde sancionado por la antigua ley de Enj. Esp. y reproducido por la nueva en su art. 504. Los conceptos y el espíritu de estos dos arts.—el de la Ley Esp. art. 504 y el 72 de nuestro Cód.—se armonizan en un todo, de donde resulta que la interpretación dada á la ley española debe ser aplicable á la nuestra. Reus al comentar el art. citado de la Ley Esp. en la pág. 370, tom. 1º, hace las siguientes preguntas: ¿Deberán presentarse todos los documentos que justifiquen el derecho de la parte que los acompaña? ¿Podrá prescindirse de alguno? Este autor resuelve las preguntas en el sentido de que hay obligación de acompañar tan solo aquellos documentos en que las partes funden sus derechos, mas no los que puedan tener más ó menos relación con el pleito: al comentar el art. 506, ratifica esta doctrina, véase pág. 374 del tomo citado.

3—La prescripción del art. 72 del Cód. de Proc. es aplicable á la contestación á la demanda, según el art. 100, inc. 4º del mismo. El art. 73, por escepción admite la presentación de documentos en la estación de



DOC

tar la demanda, deben serlo en el término de prueba—Jur. Civ., tom. 8, pág. 144, Ser. 1ª.

4. Documentos—Que existen en el expediente, agregados sin orden del Juzgado y fuera de la estación que la ley señala, no deben ser tomados en consideración al fallar—Jur. Civ., tom. 8, pág. 86, Ser. 1ª.

5. Documentos—Anteriores á la demanda y de los cuales se tenía conocimiento, no pueden ser presentados durante el término de prueba, si de ellos no se hizo mención al iniciar el juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 280, Ser. 1ª.

6. Documentos—La disposición de la ley sobre la época en que deben presentarse los en que se funda la demanda, es renunciable por el litigante en cuyo favor debe aplicarse—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2ª.

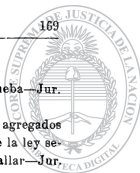
Documentos—Véase: *Padres*, núm. 1—*Acción*, núm. 5—

prueba cuando en la demanda han sido mencionados con individualidad, ó cuando se trate de documentos de fecha posterior, ó cuando siendo de fecha anterior se haga bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. Puede verse además lo establecido en el art. 245 *ibid*

4—En el caso presente, se presentaron documentos al absolver posiciones después de los alegatos y al llamar autos: los documentos se contrataron agregados á petición de parte pero sin resolución alguna que ordenara su agregación, no habiendo podido ser por consiguiente consentida esa agregación, en cuyo caso no deben ser tomadas en consideración—arts. 10), inc. 4ª; y 118 del Cód. de Proc.

5—Véase notas 1, 2, 3 y 4, precedentes.

6—El caso es el siguiente: Entablada una demanda, el demandado dijo que no tenía inconveniente en que el actor acompañara los comprobantes en la estación oportuna del juicio: vino la estación de prueba, los documentos fueron presentados; al alegar de bien probado se opuso el demandado á que se tomaran en consideración, diciendo que la renuncia del derecho á exigir su rechazo no podía impedirle usar de su derecho porque su renuncia no tenía ningún valor y era completamente inútil. El art. 19 del Cód. Civ. establece, que la renuncia de las leyes no produce efecto alguno, pero que pueden renunciarse los derechos conferidos con tal que solo afecte al interés individual y que no estuviese prohibida su renuncia. El art. 73 del Cód. de Proc. solo favorece á la parte contraria, la que puede renunciar el derecho acordado.



DOC-DOM

Absolución de posiciones, núm. 1 — *Términos*, núm. 12 — *Compraventa*, núm. 3 — *Prueba*, núm. 19 — *Demanda*, núm. 6.

Documentos argüidos de falsos—Véase: *Juez del Crimen*, núm. 1.

Documentos habilitantes—Véase: *Cámara*, núm. 2.

Dolo—Véase: *Práctica comercial*, núm. 1 — *Aceptante*, núm. 4 — *Escritura pública*, núm. 1 — *Prescripción*, núm. 11 — *Póliza*, núm. 1.

1a. Domicilio—No solo lo viola aquel que lo hace violentamente, sino también el que se introduce clandestinamente y á deshora—Jur. Crim., tom. 5, pág. 308, Ser. 1ª.

Domicilio—Véase: *Edictos*, núm. 1 — *Escepción de arraigo*, núm. 1 — *Reconocimiento de firma*, núm. 1 — *Rebeldía*, núm. 1 — *Juicio sucesorio*, núm. 1 — *Alimentos*, núm. 14 — *Arraigo*, núms. 3 y 6 — *Jurisdicción testamentaria*, núm. 1.

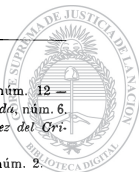
1b. Domicilio constituido—Subsiste aun cuando se nombre apoderado y son válidas las notificaciones que en él se practiquen para la citación personal—Jur. Com., tom. 1, pág. 555, Ser. 2ª.

2. Domicilio constituido—Se reputa subsistente á los

1a—No es necesario que la voluntad del dueño de casa se manifieste de un modo expreso en contrario, sino que debe juzgarse al respecto según las circunstancias: así como es fundado creer que todos consienten en lo que le trae utilidad, no es menos razonable suponer que cualquiera se opondría á aquello que puede traerle perjuicio. No puede en trarse licitamente, en una casa particular, sin consentimiento del dueño. Respecto á los hoteles, cafés, fondas y demás establecimientos públicos, no puede penetrarse allí una vez que las puertas se hayan cerrado, pues lo contrario le sería perjudicial por los desórdenes y abusos á que daría lugar.

1b—Esto sucedería en el caso en que el apoderado no hubiese constituido un nuevo domicilio, pues en este caso quedaría subsistente solo el último, porque la ley solo reconoce como subsistente á los efectos legales un solo domicilio.

2—Art. 12 del Cód. de Proc.



DOM

efectos legales, mientras los interesados no designen otro—Jur. Civ., tom. 3, pág. 367, Ser. 2ª.

3. Domicilio.—Constituido en un expediente, se reputa que subsiste mientras no se constituya otro. La paralización del expediente por un tiempo más ó menos largo no modifica la regla—Jur. Civ., tom. 3, pág. 525, Ser. 2ª.

Domicilio conyugal.—Véase: *Poseción absoluta*, núm. 1.

Domicilio particular.—Véase: *Secretarios*, núm. 1.

1. Dominio.—Justificado por un título de propiedad y no negada la posesión del tercerista, su acción es procedente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 557, Ser. 1ª.

2. Dominio.—La disposición del art. 229, que dispone que los actos y contratos traslativos de inmuebles solo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el Reg. de Propiedad, solo es aplicable á aquellos que tengan derechos reales sobre el inmueble y no á los acreedores quirografarios del vendedor—Jur. Com., tom. 5, pág. 238, Ser. 1ª.

3—Véase nota precedente.

1—El derecho del ejecutante para pedir el embargo de bienes determinados, está limitado á los que el deudor posee. El art. 478, dice que el embargo se trabará en los bienes que ofrezca el deudor estando conforme el ejecutante; y si no, los que éste señale *si estuviese en posesión de ellos el deudor*. Si el deudor quiere pagar con bienes cuya propiedad le pertenece pero cuya posesión no tiene, debe reivindicarlos para pagar con ellos al acreedor.

2—Para que el art. 229 de la Ley Org. de los Trib. de 1881—igual al 239 de la vig.—pueda comprender también á los acreedores comunes, habría sido indispensable que hubiese legislado sobre la subsistencia ó insubsistencia del acto sujeto á la inscripción, por cuanto el art. 2609 del Cód. Civ., prescribe que en los inmuebles se pierde el dominio después de firmado el instrumento público de enagenación seguido de la tradición; de donde se sigue que el dominio se adquiere sin otros requisitos que los enumerados. Luego, es preciso convenir en que la reglamentación relativa á la inscripción, hecha por el art. 229, solo puede referirse á los terceros que tengan los mismos derechos sobre el inmueble, en cuyo caso no se halla el acreedor quirografario. Esta consideración se robustece con lo que establece el art. 3135 del Cód. Civ., respecto á la



DOM

3. Dominio—No basta para hacer procedente el interdicto de recobrar—Jur. Civ., tom. 3, pág. 387, Ser. 2ª.

4. Dominio—Las disposiciones de la ley de Partida que lo reconocían en los herederos forzosos desde el momento del fallecimiento del causante sin previa declaración judicial, no son aplicables á la esposa, que según esas leyes, no investía aquel carácter—Jur. Civ., tom. 8, pág. 249, Ser. 1ª.

hipoteca. Por esta disposición, la necesidad de la inscripción está establecida en favor únicamente de los terceros que adquiriesen derechos reales sobre un inmueble. Del propio modo, la inscripción ordenada por el art. 229 no ha podido tener en cuenta otros derechos respecto de terceros que aquellos que afectan directamente al inmueble. En Francia y Bélgica la cuestión de «si los acreedores quirografarios son terceros para los efectos del art. 229» ha sido muy controvertida y resuelta de un modo contrario en ambos países. En Francia lo ha sido legislativamente por habérsele agregado al primitivo artículo de su ley sobre inscripción, las palabras, *qui ont des droit sur l'immeuble*, por cuya razón los autores que han escrito después de su sanción, solucionan la cuestión en el sentido del sumario, pues como dice Bellayme, citado por Aubry et Rau.—tom 2, pag 319 nota—aquellas palabras fueron agregadas para eliminar las pretensiones de los acreedores quirografarios. En Bélgica la cuestión ha sido resuelta en un sentido contrario en un caso citado por Laurent—tom 22. núm. 173—y su decisión ha hecho jurisprudencia. Los fundamentos aducidos en ese fallo son bien poderosos y pueden consultarse con provecho. La doctrina sustentada por la Cámara es contraria á esta como se ha visto mas arriba. Compárense los arts. 245, 277, 278 y 279 de la Ley Org.

3—Los arts 581, Cód. de Proc. y 2491, 2498, Cód. Civ., exigen que el que intente esta acción, ó su causante haya estado en posesión de la cosa y que haya sido despojado con violencia ó clandestinamente de la cosa. Si solo se comprueba el dominio, no se llenan las condiciones requeridas por la ley.

4—En las sucesiones intestadas, la posesión de la herencia corresponde *ipso jure* á los herederos legítimos sin necesidad de mandato judicial. Este derecho no corresponde á los parientes colaterales ni al esposo superviviente, aunque sean instituidos herederos por testamento según las Leyes 2, tít. 14, Part. 6ª; tít. 22, lib. 10, Nov. Rec.; y 44, tít. 32, lib. 2, Rec. de Indias. Los herederos forzosos entran en la posesión de la herencia por ministerio de la ley sin pedirla, el cónyuge vivo y los herederos colaterales deben impetrarla del Juez.



DOM—DÚP

5. Dominio—Mientras éste no haya sido trasferido por escritura pública, el vendedor, aun cuando haya hecho tradición de la cosa vendida, puede reivindicarla—Jur. Com., tom. 6, pág. 450, Ser. 1ª.

Dominio—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 2—*Escritura judicial*, núm. 1—*Títulos de propiedad*, núm. 3—*Medida*, núm. 2—*Prescripción*, núms. 16 y 20—*Terrenos fiscales*, núm. 1—*Posesión reconocida*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 3—*Demanda*, núm. 4.

Donación—Véase: *Revocación*, núm. 2.

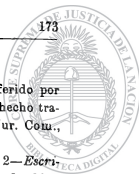
Donatario—Véase: *Nulidad*, núm. 2.

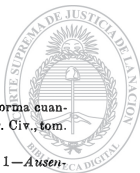
1. Dote—La esposa no declarada culpable puede exigir su entrega parcial, y el esposo no puede negarse aun cuando haya cumplido religiosamente el pago de la pensión acordada para alimentos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 122, Ser. 1ª.

Dúplica—Véase: *Auto*, núm. 13—*Término*, núm. 16.

5—Aquel á quien se le ha puesto en posesión de la cosa no adquiere el dominio de ella, porque para adquirirlo la ley, exige el instrumento público de enagenar seguido de la tradición: si cualquier de estos dos elementos falta el dominio no se trasmite. En el caso del sumario la tradición no pudo considerarse como traslativa de dominio.

1—Es una consecuencia de la facultad que le acuerda la ley para pedir la separación judicial de bienes en caso divorcio—art. 1306 del Cód. Civ.





Edad—Véase: *Pena*, núm. 3.

1. Edictos—Solo procede la citación en esta forma cuando no se conoce el domicilio del demandado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 234, Ser. 1^a.

Edictos—Véase: *Reconocimiento de firma*, núm. 1—*Ausente*, núm. 3—*Martilleros*, núm. 3.

1. Edificio—Se supone del propietario del terreno, y los acreedores personales del dueño del primero solo pueden ejecutar los derechos que la ley reconoce á éste—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 1^a.

Edificio—Véase: *Condominio*, núm. 3.

Editor—Véase: *Autor*, núm. 1.

Educación—Véase: *Hijo natural*, núm. 1.

Ejecución—Véase: *Excepción de compensación*, núm. 1—*Sentencia de remate*, núm. 1—*Acción de nulidad*, núm. 2—*Compromiso*, núm. 1—*Alquileres*, núm. 1—*Bienes embargados*, núm. 1—*Ausente*, núm. 1—*Condómino*, núm. 4—*Acciones*, núm. 4—*Actos de comercio*, núm. 2—*Demanda*, núm. 4—*Liquidación*, núm. 2—*Banco Hipotecario*, núm. 1—*Condóminos*, núm. 1.—*Sello*, núm. 2—*Gastos de ejecución*, núm.

1—Art. 80 del Cód. de Proc.

1—La ley 49, tít. 5, Part. 5^a, establece la misma regla que el artículo 1246 del Cód. Civ., con la sola diferencia que este exige que en la escritura de compra se haga constar que el dinero pertenece á la mujer y cómo le pertenece.

EJE

1—*Excepción de simulación*, núm. 1—*Excepción de inhabilidad de título*, núms. 6 y 7—*Esposo*, núm. 3.

1. Ejecutado—No puede dársele vista de la ejecución, mientras no se encuentre en autos constancia de haberse trabado el embargo preventivo—Jur. Civ., tom. 2, pág. 435, Ser. 2ª.

Ejecutado—Véase: *Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núm. 5—*Embargo preventivo*, núm. 35.

1. Ejecutante—El que pide el embargo de muebles que se encuentran en poder del ejecutado, no debe ser condenado en las costas de la tercería, aun cuando el embargo se declare improcedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 106, Ser. 1ª.

2. Ejecutante—El que en la estación oportuna consigue el embargo de un crédito, no ejecutado contra un tercero, carece de personería para ejecutar á este—Jur. Civ., tom. 6, pág. 508, Ser. 1ª.

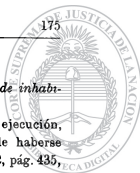
3. Ejecutante—Puede dirigir su acción contra los fiado-

1—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 452 del Cód. de Proc.

1—La ley del juicio ejecutivo autoriza al ejecutante á pedir el embargo de los bienes en cuya posesión esté el deudor—art. 478, Cód. de Proc. Si el litigante pide una medida autorizada por la ley, su buena fe le pone á cubierto de toda condenación en costas; teniendo por otra parte en cuenta que la posesión, en las cosas muebles, equivale al título.

2—El objeto principal del juicio ejecutivo es obtener que el deudor cumpla la obligación que ha contraído á favor de su acreedor, mediante algunos de los títulos que traen aparejada ejecución—art. 465, Cód. de Proc.—El crédito del ejecutante no puede hacerse efectivo en el que tiene un tercero á favor del ejecutado. El tít. 14 del Cód. de Proc. siempre se refiere al deudor directo, no al deudor del deudor. El art. 1196 del Cód. Civ., no es de aplicación porque los contratos no pueden perjudicar ni oponerse á terceros, ni invocarse por éstos—1195 y 1199—sino en los casos de los arts. 1161 y 1162, que prescriben que el contrato celebrado á nombre de otro, de quien no se tenga autorización ó representación legal, es de ningún valor, salvo la ratificación del tercero, á cuyo nombre ó en cuyo interés se hubiese contratado; y de aquí proviene que las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor y sus sucesores—art. 503 Cód. Civ.

3—El art. 846 del Cód. de Com., exige como base para el cambio de la acción contra los demás obligados, la insolvencia del deudor del ejecu-



EJE—EMB

res con el solo resultado negativo del mandamiento—Jur. Com., tom. 6, pág. 105, Ser. 1ª.

Ejecutante—Véase: *Firma por poder*, núm. 1—*Excepción de incompetencia*, núm. 1.

Ejecutiva—Véase: *Aceptante*, núm. 1—*Arrendamientos*, núm. 3—*Bienes embargados*, núm. 1.

Ejecutivas—Véase: *Sintencias*, núm. 1.

Ejecutivo—Véase: *Documento privado*, núm. 1.

Ejecutoria—Véase: *Falsedad de la ejecutoria*, núm. 1.

Emancipación—Véase: *Asociar*, núm. 1.

Embargables—Véase: *Frutos*, núm. 1.

1. **Embargo**—Y tasación, solo pueden recaer sobre la parte indivisa del ejecutado, la tasación del todo es nula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 412, Ser. 2ª.

2. **Embargo**—Cuando no se conoce el nombre de la persona á quien se hace, debe tomarse razón por la ubicación del bien embargado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 95, Ser. 1ª.

3. **Embargo**—El acreedor solo puede hacer embargar aquellos bienes que están en posesión del deudor—Jur. Civ., tom. 7, págs. 106, y 453, Ser. 1ª.

tante. Si el acreedor manifiesta no conocerle bienes al deudor, esa ignorancia solo puede desaparecer por la afirmación de los otros obligados, lo que solo es posible trayéndolos al juicio para que hagan uso del derecho que les acuerda el art. 613. Este procedimiento acarrea molestias es cierto, pero ellas son una consecuencia de la obligación que asumen como coobligados.

1—El art. 2677 del Cód. Civ. autoriza á los acreedores de cada condómino para hacer embargar y vender su parte indivisa en el inmueble común antes de hacerse la división entre los comuneros.

2—El derecho de embargar no puede quedar frustrado por una dificultad de forma, cual es la del índice que prescribe el art. 262 de la ley Org. de los Trib., que tiene por objeto facilitar la busca de las inscripciones en el Registro.

3—Así lo depone el art. 478 del Cód. de Proc. El art. 473 confirma esta doctrina, pues se refiere á bienes del deudor que estén en poder de terceros, y no debe confundirse la posesión con la mera tenencia de las cosas.



EMB

4. Embargo—De los bienes de la sociedad conyugal, la esposa tiene derecho á pedirlo siempre que hubiese entablado acción de separación de bienes—Jur. Civ., tom. 7, pag. 212, Ser. 1ª.

5. Embargo—De los bienes de la sociedad conyugal, para pedirlo no es necesario justificar previamente la mala administración del marido ni el peligro de la demora—Jur. Civ., tom. 7, pag. 212, Ser. 1ª.

6. Embargo—Para que sea procedente es indispensable que los bienes que se pretenda embargar, se encuentren en posesión del dendor—Jur. Civ., tom. 8, pag. 510, Ser. 1ª.

7. Embargo—Librado mandamiento y no verificado el pago en el acto, el oficial debe proceder á trabarlo, aún cuando el deudor no se encuentre presente, sin necesidad de nuevas requisiciones—Jur. Civ., tom. 3, pag. 367, Ser. 2ª.

8. Embargo—La resolución que ordena se levante el que pesaba en un bien en condominio, dejándolo subsistente sobre la parte de uno de los condóminos, importa que la parte de precio que le corresponda queda embargada—Jur. Civ., tom. 9, pag. 189, Ser. 1ª.

9. Embargo—Al diligenciarse el mandamiento, el Defensor debe intervenir en él—Jur. Com., tom. 6, pag. 425, Ser. 1ª.

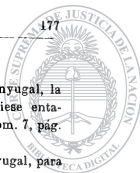
4—Art. 1295, Cód. Civ.

5—Comprobar el peligro sería comprobar el fundamento de la acción de separación, lo que sería estemporáneo. Para solicitar el embargo basta que la acción de separación haya sido entablada como se desprende de los mismos términos del art. 1295, Cód. Civ. La comprobación de la mala administración ó del peligro solo exige este artículo cuando se pide el embargo antes de entablada la acción. «Y aún antes de ella si hubiese peligro en la demora» como testualmente consigna el art. citado.

6—Así lo ha establecido esta Cámara interpretando el art. 478 del Cód. de Proc.

7—Art. 471 del Cód. de Proc.

9—Así lo establece la última parte del art. 471 del Cód. de Proc., el art. 79 no puede oponerse á esto, pues se refiere al juicio ordinario.



EMB

Embargo--Véase: *Ejecutante*, núms. 1 y 2—*Depositario judicial*, núm. 1—*Arrendatario*, núm. 1—*Tercería*, núm. 3 y 4—*Oposición*, núm. 1—*Acción*, núm. 3—*Contrato de locación*, núm. 8—*Registros*, núm. 1—*Cantidad indeterminada*, núm. 1—*Inhibición general*, núm. 1—*Inhibición*, núms. 1, 4 y 5—*Alimentos*, núm. 6—*Nulidad*, núm. 7.

1a. Embargo de los alquileres—Hace intransferible el contrato de arrendamiento, pues el acreedor ejecutante conserva sus derechos contra el nuevo arrendatario — Jur. Civ., tom. 8, pág. 55, Ser. 1ª.

Embargo indebido—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 11, 18 y 19—*Sentencia de remate*, núm. 1.

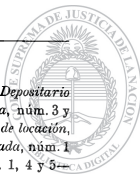
1b. Embargo preventivo—No trasfiere la propiedad de la cosa embargada a quien lo ha obtenido, ni le concede derecho para exigir del tercero rendición de cuentas, sin previa subrogación judicial para ejercitar los derechos del deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 304, Ser. 1ª.

2. Embargo preventivo — No es procedente cuando se funda en una sentencia que se limita a declarar la nulidad de una declaratoria de heredero, ni aun en la condenación

1a—En virtud de la doctrina que se desprende de los arts. 953 y 1195 del Cód. Civ.

1b—El único efecto que produce el embargo es asegurar al acreedor el pago de su crédito imposibilitando al deudor su enagenación.

2—El embargo preventivo está autorizado por la ley en favor del acreedor que se halla en las condiciones establecidas en el art. 443 del Cód. de Proc., y en favor del litigante que durante un juicio ordinario ha probado por confesión expresa ó ficta de su contrario, hechos que hagan presumir verosímilmente el derecho alegado, ú obtenido una sentencia favorable, como lo establece el art. 488. Respecto al importe de las costas no se puede pedir embargo porque no existe crédito siempre que la sentencia hubiese sido apelada. La sentencia que declara la nulidad de una declaratoria de herederos, tampoco puede fundar el embargo preventivo, porque ella no declara derecho alguno á favor de la parte triunfadora, y el embargo á que se refiere este art.—448—tiene por objeto asegurar el derecho litigado durante la secuela del juicio ordinario.



EMB

en costas si la sentencia hubiese sido apelada—Jur. Civ., tom. 6, pág. 313, Ser. 1ª.

3. Embargo preventivo—Decretado en virtud de petición de herencia, debe limitarse á lo necesario para garantizar la parte alicuota del demandante después de hecha la manifestación de bienes.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 373, Ser. 1ª.

4. Embargo preventivo—O la inhibición de enagenar los bienes matrimoniales, es improcedente mientras no se justifique la mala administración del marido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 470, Ser. 1ª.

5. Embargo preventivo—Declarado ilegal, si bien puede fundar una acción por daños y perjuicios, no es sentencia bastante para fundar á su vez un embargo preventivo—Jur. Civ., tom. 2, pág. 434, Ser. 2ª.

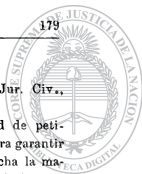
6. Embargo preventivo—Decretado en virtud de una

3—El embargo preventivo sobre las cosas muebles ó inmuebles que hayan de ser demandadas por acción reivindicatoria es procedente, según lo prescribe en el art. 447 el Cód. de Proc. Y como la Cámara ha declarado por repetidas veces que la acción de petición de herencia equivale á la reivindicatoria, es evidente que el embargo preventivo procede en este caso. Pero como esta medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la sentencia que se dicte, debe limitarse á lo necesario para no causar perjuicios inútiles. El actor quedaría garantido embargando la parte de bienes que puede tener en la herencia, porque esta medida debe limitarse á los bienes necesarios para cubrir el crédito que se demanda y las costas del juicio. Véase Inst., tom. 1, Verb. *Embargo preventivo*, núms. y notas 976 y 993.

4—El embargo preventivo no se hallaría justificado por los arts. 1295 y 1306 del Cód. Civ.: porque el primero se refiere al caso de separación de bienes por mala administración del marido, y el segundo se refiere al caso de divorcio. En el primero es necesario justificar el peligro en la demora; en el segundo las medidas de seguridad que deben tomarse se hallan regidos por las disposiciones del art. 211, y en uno y otro caso no basta alegar.

5—No está el caso comprendido entre los enumerados en el art. 13 del Cód. de Proc.

6—Es jurisprudencia establecida por la Cámara Civ., como puede verse en los toms. 3, pág. 581; v 6, pág. 315, Ser. 1ª.



EMB

acción reivindicatoria, no comprende los frutos ó alquileres del bien embargado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 438, Ser. 2ª.

7. Embargo preventivo—Declarado improcedente, deben distribuirse los fondos sin esperar las nuevas acciones que pudieran entablarse—Jur. Civ., tom. 2, pág. 483, Ser. 2ª.

8. Embargo preventivo—El auto que lo concede ó deniega es susceptible del recurso de reposición—Jur. Civ., tom. 2, págs. 493 y 499, Ser. 2ª.

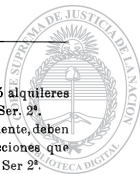
9. Embargo preventivo—No puede fundarse en una sentencia que condena al cumplimiento de una obligación de hacer—Jur. Civ., tom. 2, pág. 480, Ser. 2ª.

10. Embargo preventivo—No puede levantarse mientras no se declare procedente la escepción de prescripción—Jur. Civ., tom. 2, pág. 508, Ser. 2ª.

8—Si bien el art. 452 del Cód. de Proc. concede el recurso de apelación contra las resoluciones que ordenan un embargo preventivo, sin que nada autorice á suponer que por el mismo se haya entendido escluir el de revocatoria, en cuyo caso debe estarse á lo que facilita la defensa.

9—Esta resolución se funda en que: de la letra y del espíritu de las disposiciones contenidas en el tít. 13 del Cód. de Proc., el embargo preventivo solo procede cuando existe obligación de dar: cuando la sentencia favorable que se ha obtenido solo condena á una obligación de hacer el art. 448 del Cód. de Proc. no es aplicable, porque el derecho acordado por este artículo está limitado al caso en que la sentencia contenga condena de entregar ó de pagar: que esta interpretación se ajusta á la índole del embargo preventivo que tiene por objeto garantizar al acreedor la efectividad de sus derechos, y en el caso del sumario no hay propiamente derechos que garantizar, pues estos serán discutidos recién después de comprobada la inexecución de la obligación y en un juicio especial sobre indemnización. Esta doctrina que ha pasado á formar parte de la jurisprudencia de nuestros Tribunales civiles no puede ser mas errónea ni mas contraria á los intereses debatidos en los juicios, como puede verse en el estudio que se hace en la nota del verb. *Obligación de hacer*, núm. 1. La Cámara debe volver sobre esta jurisprudencia que beneficia al litigante de mala fe y hace los juicios estériles y sin resultado práctico. La Cámara de lo comercial, ha resuelto lo contrario. Véase: Inst. tom. 1, verb. Embargo Preventivo, núm. 986 y nota.

10. Declaración que solo puede hacerse al dictar sentencia definitiva pues si antes se hiciese se prejuzgaría.



EMB

11. Embargo preventivo—No puede ser pedido ante dos jueces, la resolución del primero prevenida por el Superior inhibe á los demás—Jur. Civ., tom. 2, pág. 528, Ser. 2ª.

12. Embargo preventivo—Fundado en un documento privado cuya firma se justifica sumariamente por testigos, es procedente—Jur. Com., tom. 5, pág. 258, Ser. 1ª.

13. Embargo preventivo—Declarado nulo por vicios del procedimiento, pero no improcedente, no puede fundar una acción por daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 1, pág. 91, Ser. 2ª.

14. Embargo preventivo—Decretado y notificado al deudor, si éste no obliga al acreedor á deducir sus acciones dentro del término de la ley, se presume procedente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 91, Ser. 2ª.

15. Embargo preventivo—Por demanda reivindicatoria, es bastante para decretarlo bajo la responsabilidad y caución juratoria del demandante—Jur. Civ., tom. 1, pág. 608, Ser. 2ª.

16. Embargo preventivo—Debe limitarse á cubrir la

11—El caso es el siguiente: un litigante se presenta ante un Juez solicitando embargo preventivo, no se lo hace lugar y apela, pendiente la apelación, se presenta ante otro Juez, el que provee de acuerdo ordenando el embargo: el embargado apela y la Cámara resuelve dejar sin efecto el embargo hasta tanto no se resuelva en la primera petición de embargo, porque considera que no puede pronunciarse sobre el embargo pedido ante el segundo Juez, reservándose el pronunciamiento para el juicio primeramente instaurado, sobre el que ha prevenido.

12—Art. 443, inc. 2º, Cód. de Proc.

13—La procedencia del embargo implica el ejercicio de un derecho legítimo, y si bien es cierto que el que ejecuta un acto que ocasiona daños y perjuicios á otro, está obligado á la reparación del perjuicio, también lo es que el ejercicio de un derecho propio, no puede constituir, en ningún caso, un acto ilícito—arts. 1272, 1109 y 1110 Cód. Civ.

14—Este sumario no ha sido materia de resolución ni en 1ª ni en 2ª Instancia. No debe formar parte de la jurisprudencia.

15—Art. 447 y 449, Cód. de Proc.

16—Véase: Embargo preventivo, núm 3 y nota.

EMB

parte alicuota que puede corresponder al que pide la herencia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 2ª.

17. Embargo preventivo—El hecho de darse por contestado un traslado en rebeldía, no lo autoriza —Jur. Civ., tom. 1, pág. 396, Ser. 2ª.

18. Embargo preventivo -- No puede fundarse en la existencia de una sociedad no justificada—Jur. Civ., tom. 1, pág. 402, Ser. 2ª.

19. Embargo preventivo—Pedido en virtud de una obligación de hacer con condición penal, solo puede decretarse por el importe de la pena y las costas, pero no sobre lo principal—Jur. Civ., tom. 1, pág. 442, Ser. 2ª.

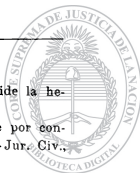
20. Embargo preventivo — Tratándose de una acción personal, solo es procedente por un crédito líquido justificado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 108, Ser. 1ª.

17—El art. 437 del Cód. de Proc. solo autoriza el embargo preventivo en el procedimiento del juicio ordinario en rebeldía, cuando el demandado ha sido declarado rebelde por no haber comparecido á juicio después de haber sido citado en la forma prescrita en los arts. 77 y siguientes del Cód. de Proc., como lo demuestra la colocación de dichos arts. en el tít. 12 y su concordancia con el art. 443 y siguientes de dicho título.

18—No está comprendido en ninguno de los casos previstos por los arts. 443 y 448, Cód. de Proc. En el caso *sub-judice*, el embargo fué solicitado por uno de los socios, fundado en la existencia de la sociedad; si esta existencia no se comprueba la medida solicitada fundándose en esa existencia, no puede cumplirse.

19—Cuando el juicio versa sobre el cumplimiento de una obligación de hacer, cuya inexecución tiene su sanción establecida en el art. 1187 del Cód. Civ., el embargo preventivo no procede. Pero cuando hay una pena establecida en la obligación, la medida preventiva debe decretarse al solo efecto de garantizar la efectividad de ésta, el que debe limitarse en la forma prescrita por el art. 455 del Cód. de Proc.

20—Se funda esta resolución en el art. 443 del Cód. de Proc. Y esta es la práctica que se ha hecho jurisprudencia inconcusa en los Tribs. de la Cap., jurisprudencia que debe modificarse porque ella es contraria á los principios de justicia y equidad en que descansa la legislación sobre el embargo preventivo: medida que ha sido creada desde los mas remotos tiempos para salvaguardar los intereses de los litigantes de buena fe



EMB

21. Embargo preventivo—No puede fundarse en el hecho de darse por evacuado en rebeldía el traslado de la demanda.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 218, Ser. 1ª.

22. Embargo preventivo—No puede fundarse en una obligación de hacer, aunque esté justificada por instrumento público.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 218, Ser. 1ª.

23. Embargo preventivo—Fundado en una acción personal contradicha y sujeta á controversia, es improcedente.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 239, Ser. 1ª.

24. Embargo preventivo—Solo es procedente por cantidad líquida y crédito ejecutivo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 48, Ser. 1ª.

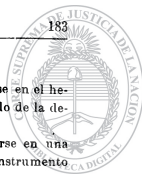
contra el que litiga fundado en la impunidad de su temeridad y malicia, y en la inocuidad de la sentencia que llega á los años de iniciados los pleitos y después que la ley le ha dejado ancha y segura vía para hacer desaparecer sus bienes todos, dejando al contrario con una sentencia que le favorece pero que no puede hacerse efectiva. Véase argumentos aducidos en la nota al Verb. *Obligacion de hacer*, núm. 2; Inst., tom. 1º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 986 y nota.

21—El art. 437 del Cód. de Proc. dice, que puede decretarse el embargo preventivo desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía. Este artículo se refiere á una rebeldía total no á la parcial que se opera cuando se dá por evacuado cualquier traslado al litigante. La rebeldía á que se refiere este artículo es la establecida después de llenados los requisitos fijados en el art. 433.

22—Verb. *Obligación de hacer*, núm. 2 y nota.

23—Un crédito en estas condiciones no reúne las condiciones exigidas por los arts. 443 y 448 del Cód. de Proc.

24—El embargo preventivo se halla sujeto en cuanto á la forma de decretarlo y á la manera de llevarlo á efecto á las mismas reglas establecidas para el embargo en el juicio ejecutivo—arts. 451 y 455 del Cód. de Proc. Para que el embargo proceda es necesario que el crédito esté justificado en alguna de las formas previstas por la ley y que ese crédito sea líquido, pues de otra manera no puede cumplirse lo dispuesto en los arts. 456 y 471. En el caso ocurrente se trataba de una demanda de daños y perjuicios por inexecución de un contrato y aunque ella se fundaba en un instrumento público, el crédito del actor lo constituía el derecho que invocaba para cobrar daños y perjuicios, derecho contestado por el demandado y que era materia del pleito debiendo constar de la sentencia si ese crédito existe ó no y á cuánto asciende.



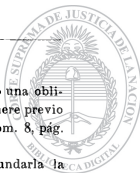
EMB

25. Embargo preventivo—No puede fundarlo una obligación de hacer, pues para llevarse á efecto requiere previo mandamiento por cantidad líquida—Jur. Civ., tom. 8, pág. 357, Ser. 1ª.

26. Embargo preventivo — No basta para fundarla la

26—Esta es la jurisprudencia consagrada en nuestros Tribunales. Véase nota precedente: jurisprudencia que debe necesariamente desaparecer porque no obedece á los sanos principios que ha querido establecer el legislador. Si la demanda no es por cantidad líquida, pueden los jueces antes de decretar el embargo preventivo estudiar los antecedentes de la acción y fijar un límite dentro del cual debe el acreedor determinar el monto bajo el juramento estimatorio. Debe tenerse presente que la ley dice, que debe librarse mandamiento por el capital, intereses y costas—art. 471 del Cód. de Proc.—Si la ley ordena que el embargo comprenda las costas y si estas costas tienen necesariamente que constituir una cantidad líquida en el momento de diligenciarse el mandamiento no puede menos que concluirse que ella debe tener establecido medios legales para llevar á cabo sus preceptos. No puede decirse que haya contradicción entre dos disposiciones del Cód., lo que sucedería si se admitiese la jurisprudencia establecida por la Cámara, pues el art. 471, citado, ordena que «se procederá á embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad demandada y las costas» y el art. 475 requiere para que se despache mandamiento que la cantidad sea líquida y si resultase parte líquida y parte ilíquida, se despachará ejecución por la líquida reservando la repetición de lo demás para otro juicio. ¿Como hará el Juez para despachar mandamiento por las costas? estas tienen necesariamente que ser líquidas pues se requiere que sean reguladas y consentidas y no puede creerse que la ley haya exigido que se cumplan estos trámites previamente pues la parte preferiría perder las costas antes que sufrir las demoras consiguientes á esta tramitación. Por otra parte las disposiciones del embargo preventivo son especialmente establecidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en las condiciones allí determinadas. Y si bien es cierto que al mismo tiempo establece que en cuanto á la forma de practicarse el embargo se observará lo dispuesto en el art. 471 del juicio ejecutivo, como lo dispone el art. 452, esto debe entenderse que ese artículo es aplicable en cuanto no se oponga á las disposiciones especiales del embargo preventivo—Véase: Verb. Obligación de hacer, núm. 2 y nota: Inst. tom. 1, Verb. Embargo preventivo, número 986.

26—Esta es una consecuencia lógica de la jurisprudencia establecida por la Cámara como en el caso precedente: pero se ha dicho ya que esa jurisprudencia debe reformarse porque no se funda en la correcta inter-



EMB

sentencia que impone obligaciones mútuas—Jur. Civ., tom. 2, pág. 357, Ser. 2ª.

27. Embargo preventivo—No se anula por el hecho de no notificar al deudor dentro de tercero día — Jur. Civ., tom. 8, pág. 357, Ser. 1ª.

28. Embargo preventivo—Puede ser decretado aun después de concedida la apelación—Jur. Civ., tom. 8, pág. 357, Ser. 1ª.

29. Embargo preventivo—Su levantamiento por no haberse deducido demanda, solo puede hacerse después de vencido el término fijado por auto judicial—Jur. Civ., tom. 9, pág. 185, Ser. 1ª.

30. Embargo preventivo—Mientras subsista, existe el

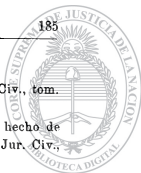
pretación de la ley y al mismo tiempo contraría sus propósitos. La Cámara dice que no procede el embargo preventivo en el caso del sumario porque no puede decirse que se haya obtenido una sentencia favorable, conforme lo establece el art. 448 del Cód. de Proc.

27—La circunstancia de no haberse hecho saber el embargo dentro de tercero día como lo prescribe el art. 452 del Cód. de Proc., no lo invalida, pues este artículo no contiene semejante sanción y tiene tan solo por objeto que el demandado se defienda, la demora en ello no puede tener tal consecuencia.

28—El art. 222 del Cód. de Proc. autoriza al Juez para resolver sobre las peticiones de embargo preventivo, aun después de pronunciada y notificada la sentencia. El incidente se sigue por cuerda separada pues no afecta á la sentencia ni obsta á la prosecución de lo principal. Si el expediente hubiese sido elevado, basta consultar el libro de sentencias definitivas que llevan todas las secretarías para comprobar la procedencia ó improcedencia del embargo solicitado. Puede igualmente solicitarse ante la Cámara cuando haya sido elevado el expediente, pero en este caso ella ordena que baje al inferior á fin de que se pronuncie sobre la petición, formándose incidente como se ha dicho. Véase: Inst., tom. 1, núm. 989, Verb. *Embargo preventivo* y nota.

29—Después de vencido el término acordado por el art. 460 del Cód. de Proc., el que debe contarse desde el día en que el Juez lo ordene á petición de parte.

30—El art. 453 del Cód. de Proc. no fija término para el ejercicio de este derecho



EMB

derecho de sustituir el bien embargado por la fianza—Jur. Civ., tom. 9, pág. 60, Ser. 1ª.

31. Embargo preventivo—En caso de reivindicación solo es procedente contra bienes determinados, pero no contra la universalidad de los bienes que constituyan la herencia sin determinación precisa—Jur. Civ., tom. 9, pág. 56, Ser. 1ª.

32. Embargo preventivo—Son recaudos suficientes para fundarlo las constancias de los libros de comercio, debidamente rubricados, aún cuando el deudor no sea comerciante—Jur. Civ., tom. 3, pág. 536, Ser. 2ª.

33. Embargo preventivo—Declarado ilegítimo, de una cantidad en efectivo, solo puede dar derecho al cobro de los intereses durante el tiempo que aquel subsista—Jur. Com., tom. 6, pág. 170, Ser. 1ª.

34. Embargo preventivo—Basta para fundarlo, la compulsa de los libros de comercio debidamente rubricados—Jur. Com., tom. 6, pág. 598, Ser. 1ª.

35. Embargo preventivo—El pago del capital antes del requerimiento, exonera de las costas al ejecutado, pero

31—El art. 447 del Cód. de Proc., solo autoriza el embargo preventivo para el caso de acción reivindicatoria de una cosa determinada sea mueble ó inmueble y no á la universalidad de bienes, derechos y acciones que constituyen la herencia.

32—Al tratarse de un embargo preventivo autorizado por el art. 443, inc. 4º del Cód. de Proc., no se trata de la prueba de la veracidad del crédito; y si se tratara como tal, los libros serían suficientes pues el art. 77 del Cód. de Com. establece que los libros en este caso sirven como principio de prueba, lo que es bastante para decretar un embargo preventivo.

33—Si no se prueba que á causa del embargo se ha sufrido otros perjuicios además de los ordinarios de intereses.

34—Art. 433, Cód. de Proc.

35—Si la ejecución se inicia en virtud de otro documento que no sea una letra, porque si se trata de ésta las costas son á cargo del ejecutado aunque pague la deuda en el acto de diligenciarse el mandamiento. Véase verb. *Costas*, núm. 648 y nota.



EMB—EMP

no de las ocasionadas por el embargo preventivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 609, Ser. 1ª.

Embargo preventivo—Véase: *Separación de bienes*, número 1—*Reivindicación*, núms. 1 y 3—*Auto*, núm. 10—*Crédito*, núm. 1—*Aceptante*, núm. 5—*Cuenta*, núm. 1—*Ejecutado*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 3—*Demanda ordinaria*, núm. 1—*Fiador*, núm. 2—*Inhibición general*, núms. 1 y 2.

Embriaguez voluntaria—Véase: *Actos ilícitos*, núm. 1.

Empedrado—Véase: *Municipalidad*, núm. 1.

Empedrados—Véase: *Propietarios*, núm. 1—*Municipalidad*, núm. 4.

1a. **Emplazamiento**—Los días concedidos no se cuentan como término á los efectos del Cód. de Proc.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 141, Ser. 2ª.

Empleado—Véase: *Injurias*, núm. 20.

1. **Empleados**—Se dispone que los de las alcaldías sean nombrados por la Cámara á propuesta de los alcaldes—Jur. Civ., tom. 1, pág. 27, Ser. 2ª.

Empleados—Véase: *Costas*, núms. 1 y 2.

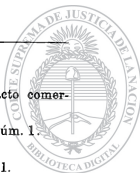
Empleo—Véase: *Colocación*, núm. 7.

Empresa particular—Véase: *Terrenos fiscales*, núm. 1.

1b. **Empresario**—La compra de materiales hecha por él.

1a.—De modo que el término acordado para comparecer á estar á derecho es simplemente con el objeto de que se prepare á entrar á juicio y recién desde el vencimiento de este término empieza á correr el legal acordado por el Cód. de Proc. Así, por ejemplo, cuando se emplaza á una persona para que comparezca á estar á derecho, en una demanda que se le promueve, dentro de diez días, quiere esto decir que después de vencidos esos diez días empieza á correr el término de nueve días que tiene el demandado para contestar la demanda.

1b.—Al comprar los materiales para destinarlos en su carácter de empresario á la construcción de obras se presume que verifica esa compra con el ánimo de vender esos artículos, en cuyo caso el acto es una reventa; por consiguiente, la compra y la venta se reputan mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7, inc. 1 y 5, y art. 516, Cód. de Comercio.



EMP—ERR

con destino á la construcción de obras, es un acto comercial—Jur. Com., tom. 5, pág. 452, Ser. 1ª.

Empresario—Véase: *Trabajo ó materiales*, núm. 1.

Enagenación—Véase: *Tradición*, núm. 1.

Endoso—Véase: *Documento á la orden*, núm. 1.

Enemistad capital—Véase: *Tacha de testigos*, núm. 1.

Engaño—Véase: *Hurto*, núm. 2.

Entierro—Véase: *Gastos de entierro*, núm. 1.

1a. **Equidad**—No puede servir de base para dar por justificados hechos sobre los cuales el demandante no ha producido prueba suficiente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 116, Ser. 2ª.

1b. **Error**—En la designación del número que corresponde á una finca vendida en remate sin intervención del deudor, anula la venta—Jur. Civ., tom. 6, pág. 140, Ser. 1ª.

2. **Error**—Anula la convención cuando recae sobre la calidad de la cosa que los contratistas han tenido principalmente en vista y que hace á la sustancia misma de la cosa—Jur. Civ., tom. 9, pág. 282, Ser. 1ª.

Error—Véase: *Presunciones*, núm. 1—*Cuenta corriente*,

1a.—El Codificador en su nota á los arts. 2567 y 2568 del Cód. Civ., enseña que la equidad es la que debe dirigir las resoluciones de los Jueces, señalando así á éstos el camino á seguir siempre que les sea posible inspirarse en ella.

1b.—Las ventas en remate público difieren de las ventas particulares, en que para la realización válida de aquéllas es esencial llenar formalidades previas que no se requieren en las últimas. Una de esas formalidades es el anuncio público de las especies que han de rematarse, á fin de que tomando todos el debido conocimiento de ellas haya el mayor número de licitadores en el remate y pueda obtenerse el mayor precio en su venta. Publicar los avisos equivocados equivale tanto como á omitir el anuncio de su venta, omisión que importando la de una formalidad esencial para la validez del remate tiene necesariamente que causar su nulidad, como sucede en todo acto jurídico, cuando falta alguna de las formalidades requeridas para su perfección—art. 1044 Cód. Civ.—Por otra parte el error sobre la designación de la cosa vendida anula el acto jurídico de la venta, según los términos de los arts. 926 y 927 Cód. Civ.

2—Arts. 954 y 1044, Cód. Civ.

ERR—ESC

núm. 1—*Prescripción*, núm. 11 — *Falta de personería*, número 3.

1a. **Error de derecho**—A los efectos de la irresponsabilidad del reo, no consiste en la ignorancia de la ley penal, salvo los casos de imbecilidad—Jur. Crim., tom. 5, pág. 348, Ser. 1ª.

1b. **Errores**—En los avisos de remates, ordenados por el Banco Hipotecario, no son imputables al deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 140, Ser. 1ª.

1c. **Escarcelación bajo fianza**—No es aplicable al arresto ordenado por la Cámara como corrección disciplinaria—Jur. Civ., tom. 1, pág. 261, Ser. 2ª.

1d. **Esepección**—No justificada trae consigo la condenación

1a—Art. 5 Cód. Pen. Pacheco. El Cód. Pen., tom. 1º, pág. 73. Véase Inst. tom. 1, verb. Voluntad Criminal, núms. y notas 2718 y 2719.

1b—Los errores son cometidos en estos casos por el que redacta los avisos de remate. Debe además tenerse presente que en las ventas de los bienes hipotecados por el Banco éste procede sin forma de juicio sin intervención del deudor hipotecario, pues éste renuncia á todos los trámites del juicio, al constituir la hipoteca.

1c—El art. 11 de la ley de Julio de 1878 no es aplicable al caso, por cuanto dicho artículo se refiere á condenas corporales, cuya duración no exceda de dos años, el arresto en este caso no es una condena corporal dictada con arreglo al Cód. Penal que es la clase de condenas á que se refiere el art. citado. Aunque la ley hiciera referencia á toda clase de condenas, ella no sería aplicable al caso presente porque es una ley de la Legislatura de Buenos Aires que no puede sobreponerse á las disposiciones de la Ley Org. de los Trib. de la Cap., que en su art. 107 atribuye á la Cámara la facultad de reprimir con apercibimiento y pena de multa que no exceda de 80 pesos ó arresto de 20 días, la falta contra su autoridad y decoro, ya sea en las audiencias ó escritos; y es evidente que quedaría ilusoria esta última facultad si al penado con arresto le fuese permitido sustituir á su arbitrio el arresto con el pago de una suma de dinero, en los casos en que el Tribunal no creyere conveniente imponerle.

1d—La Cámara no resolvió este punto sino que dijo que al vencido en juicio le corresponde pagar las costas de la contraria en virtud del principio sentado en el art. 221 del Cód. de Proc., cuando ha habido de su parte temeridad ó malicia.



ESC

en costas del escepcionante—Jur. Civ., tom. 2, pág. 232, Ser. 2ª.

2. Escepción—Que importa una oposición general al fondo de la demanda, debe ser rechazada si se interpusiera como dilatoria—Jur. Civ., tom. 1, pág. 610, Ser. 2ª.

3. Escepción—Cuando no se justifica debe llevarse adelante el juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 425, Ser. 1ª.

Escepción—Véase: *Prueba*, núm. 6—*Prescripción*, núm. 6—*Falsedad*, núm. 5—*Jurisdicción potestativa*, núm. 1—*Demandado*, núm. 3—*Litispendencia*, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Arraigo*, núms. 2, 3 y 5—*Incompetencia*, núms. 2, 3, 4, 6 y 10—*Inhabilidad*, núm. 1—*Prescripción*, núm. 1—*Falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 32 y 34—*Inhabilidad de título*, núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8—*Subasta pública*, núm. 1—*Espera*, núm. 1—*Obligación solidaria*, núm. 1—*Falsedad de ejecutoria*, núm. 1.

1a. Escepción de arraigo—Al demandado que la opone corresponde probar que el demandante no tiene domicilio en el lugar del juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 471, Ser. 1ª

1b. Escepción de compensación—Es improcedente cuan-

2—Esta escepción sería en este caso lo que la ley 10, tít. 3, Part. 3, llamaba *sine actione agis*, y que hoy no puede oponerse como escepción sino como defensa de fondo al contestar la demanda—Véase Inst., tom. 1, Ver.b. *Escepción de falta de personería*, núm. 1045 y nota.

1a—Para oponer la escepción de arraigo y fundarla, no basta decir que el actor no tiene domicilio conocido en el lugar del juicio, es necesario que se afirme que no lo tiene y que esta afirmación, como que es nueva en juicio, se compruebe en forma. La prueba incumbe al que afirma.

1b—El art. 819 del Cód. Civ., requiere para que la compensación se verifique, que la cosa debida por una de las partes, pueda ser dada en pago de lo que es debido por la otra, que ambas deudas sean subsistentes civilmente; que sean líquidas, ambas exigibles y de plazo vencido, etc. El art. 488, inc. 8º del Cód. de Proc., solo admite la escepción de compensación «cuando es de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución».



ESC

do no resulta de crédito líquido ó documento que traiga aparejada ejecución—Jur. Civ., tom. 6, pág. 69, Ser. 1ª.

2a. Excepción de compensación—Fundada en un crédito que no aparezca justificado por documento que traiga aparejada ejecución, es improcedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 410, Ser. 1ª.

3. Excepción de compensación—Solo procede cuando ambas deudas reúnen caracteres absolutamente idénticos—Jur. Com., tom. 6, pág. 579, Ser. 1ª.

Excepción de compensación — Véase: *Depositario*, número 1.

1. Excepción de falsedad—Opuesta á la ejecución de un pagaré á la orden, solo es procedente cuando ataca lo principal del título—Jur. Com., tom. 5, pág. 496, Ser. 1ª.

2b. Excepción de falsedad—Opuesta á la ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal de amigables componedores, es improcedente aun cuando no se encuentre consentida—Jur. Civ., tom. 6, pág. 238, Ser. 1ª.

2a—Véase: Nota anterior; Inst. tom. 1, Verb. *Excepción de compensación*, núm. 1027, 1028, 1029, 1030 y 1031.

1—La falsedad á que se refiere el Cód. de Proc., no es otra que aquella cuyo fundamento de hecho deba recaer sobre lo sustancial del título, como lo dice Caravantes en el tom. 3, pág. 332 de su obra. Esta inteligencia está de acuerdo con la prescripción del art. 851 del Cód. de Com. que claramente ha significado que la falsedad para que pueda oponerse como excepción, ha de recaer sobre lo principal del título. Véase: Inst., tom. 1, Verb. *Falsedad*, núm. 1191 y nota.

2b—Con arreglo al art. 808 del Cód. de Proc., contra las sentencias dictadas por un Tribunal de amigables componedores, no se dá recurso alguno, salvo la acción de nulidad por haber fallado fuera del término ó sobre puntos no comprendidos. La resolución de este Tribunal, pues, causa ejecutoria aunque haya recursos pendientes contra ella. Véase Inst., tom. 1, Verb. *Excepción de falsedad*, núm. 1039 y nota; *Laudo arbitral*, núm. 1606 y nota. Este recurso no produce el efecto de suspender el cumplimiento de la sentencia, es una demanda que debe tramitarse en juicio ordinario.



ESC

3. Excepción de falsedad—En materia civil, no está circunscrita á las alteraciones materiales ó falsificaciones de la sentencia, sino que comprende también los defectos ú omisiones que la anulan y por las que aunque sea válida carece de fuerza ejecutiva por no haberse llenado las solemnidades que la ley requiere para revestirla de aquella fuerza—Jur. Civ., tom. 6, pág. 491, Ser. 1ª.

4. Excepción de falsedad—O inhabilidad de título, opuesto á una ejecución por cobro de honorarios devengados por el abogado de la esposa en el juicio de divorcio, es improcedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 178, Ser. 1ª.

5. Excepción de falsedad—Por agregaciones indebidas en el documento, su prueba corresponde al ejecutado si ellas no resultan á la simple vista—Jur. Com., tom. 6, pág. 487, Ser. 1ª.

6. Excepción de falsedad — Opuesta la de la firma de un documento, al ejecutante corresponde la prueba de su veracidad—Jur. Com., tom. 6, pág. 553, Ser. 1ª.

3—Caravantes después de explicar la ley 111, tít. 18, Part. 3ª, agrega: «En esta excepción de falsedad, deben comprenderse tanto los defectos ú omisiones *porque se anula ó no merece crédito* el título que se presenta, ó por las que, aunque sea válido, carece de fuerza ejecutiva. Bastará para que se considere falso, el carecer del carácter ejecutivo por no contenerse en él las solemnidades que la ley requiere para que se halle revestido de fuerza»—tom. 3, núm. 1200—Manresa y Reus dicen: La falsedad de un documento puede ser civil ó criminal. Lo es civilmente cuando *le falta algunas de las solemnidades ó circunstancias que la ley exige para que haga fe en juicio*—tom. 2, pág. 308—Estos autores exponen, que no solo en los casos de las leyes de Part. puede ser redargüido de criminalmente falso un documento público, sino también en cualquier otro en que se haya cometido falsedad en un documento público ó privado, y que con más razón y lógica cualquier documento puede ser redargüido de civilmente falso, enunciando entre los causales la de no haberse observado todas las solemnidades y circunstancias exigidas por las leyes en su formación.

6—Negada la firma de un documento, al ejecutante incumbe comprobar su autenticidad; porque es él quien afirma y es á éste á quien incumbe la prueba de toda afirmación nueva hecha en juicio.



ESC

7. Excepción de falsedad—Opuesta á la ejecución de una sentencia, para que sea admisible, debe recaer sobre el fondo, no basta que se refiera á circunstancias accesorias que deben ser materia de un juicio ordinario—Jur. Com., tom. 6, pág. 619, Ser. 1ª.

Excepción de falsedad—Véase: *Prueba*, núm. 8.

1. Excepción de falta de personería—Rechazada por haber sido opuesta fuera del término, el Juzgado debe tomarla en consideración al fallar en definitiva, siempre que ella resulte justificada en autos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 546, Ser. 1ª.

2. Excepción de falta de personería—Reconocida la falta de capacidad del mandante, la opuesta contra el mandatario debe ser rechazada—Jur. Com., tom. 5, pág. 179, Ser. 1ª.

3. Excepción de falta de personería—Es improcedente cuando se ha reconocido la veracidad de los documentos en que el actor funda su derecho—Jur. Civ., tom. 1, pág. 605, Ser. 2ª.

Excepción de falta de personería—Véase: *Acción*, número 6.

1. Excepción de incompetencia—Por ser el ejecutante extranjero, no puede ser opuesta por el ejecutado—Jur. Com., tom. 6, pág. 333, Ser. 1ª.

Excepción de incompetencia—Véase: *Autor*, núm. 1—*Acción*, núm. 7—*Juicios sumarios*, núm. 1.

7—Esta excepción debe interpretarse en sentido restrictivo. Caravantes en el tom. 3, párrafo 1200, consagra exactamente el mismo principio sentado en el fallo.

2—Si el mandante no tiene la personería que invoca al conferir el mandato, la excepción procede por que ella se refiere á la falta de capacidad ó de mandato ó poder bastante en el mandante para deferirlo al mandatario.

1—El fuero federal establecido en favor del extranjero, es un privilegio que la ley le acuerda, y como todo privilegio puede renunciarse, el ejecutado no puede obligarle á ampararse de él.



ESC

1. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución de una sentencia, contra la cual no se ha opuesto recurso de nulidad en la estación oportuna, es improcedente.

—Jur. Civ., tom. 6, pág. 109, Ser. 1ª.

2. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución de un vale comercial, es improcedente—Jur. Com. tom. 5, pág. 22, Ser. 1ª.

3. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución de un pagaré á la orden es improcedente—Jur. Com., tom. 5, pág. 496, Ser. 1ª.

4. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á una regulación ejecutoriada de honorarios, es improcedente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 293, Ser. 2ª.

5. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta contra una sentencia, es improcedente si se funda en un condominio entre deudor y acreedor sobre los fondos que se ejecutan—Jur. Civ., tom. 8, pág. 211, Ser. 1ª.

6. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución fundada en un pagaré á la orden, debe ser rechazada como improcedente—Jur. Com., tom. 6, pág. 447, Ser. 1ª.

1—Consentida y ejecutoriada una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, y reviste por consiguiente toda fuerza ejecutiva tratándose de su ejecución sólo se consideran legítimas las excepciones enumeradas en el art. 539 del Cód. de Proc., entre las que no figura de la inhabilidad.

2—Entre las excepciones enumeradas en el art. 852 del Cód. de Com. no está comprendida la de inhabilidad: y como esta disposición rige para los vales, conforme á lo dispuesto en el art. 917, se sigue el principio consagrado en el sumario.

3—Véase nota anterior.

4—Esta excepción solo es eficaz cuando se funda en vicios ó defectos del título mismo, como lo establece la jurisprudencia uniforme de nuestros Tribunales y lo enseñan los prácticos—Caravantes, tom. 3, pág. 332; La Run, tom. 4º pág. 177—Cuando la regulación de honorarios ha sido hecha con todas las formalidades prescritas por la ley, no puede haber ni vicios ni defectos.

6—Véase nota núm. 2.



ESC

7. Excepción de inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución de un vale á la orden es improcedente—Jur. Com., tom. 6, pág. 487, Ser. 1ª.

1a. Excepción de legítima defensa—No es procedente mientras la vida no fuese puesta en peligro por vías de hecho que hagan inevitable el homicidio—Jur. Crim., tom. 5, pág. 93, Ser. 1ª.

1b. Excepción de litispendencia—Para que sea procedente, es necesario que sean las mismas partes las que intervengan en ambos juicios — Jur. Civ., tom. 1, pág. 613, Ser. 2ª.

1c. Excepción de novación—Es improcedente si se opone á la ejecución de un pagaré, equiparado á una letra de cambio por el Cód. de Comercio—Jur. Com., tom. 6, pág. 584, Ser. 1ª.

1. Excepción de pago—Probada, la absolución del demandado es ineludible—Jur. Civ., tom. 6, pág. 79, Ser. 1ª.

2. Excepción de pago—Debe justificarla el que la invoca—Jur. Com., tom. 5, pág. 250, Ser. 1ª.

3. Excepción de pago—Al escepcionante corresponde su prueba—Jur. Com., tom. 6, pág. 260, Ser. 1ª.

4. Excepción de pago—Fundada en un asiento de los

7—Véase nota anterior.

1a—Art. 197 Cód. Pen. ant. igual al 97 del vigente.

1b—Véase Inst. tom. 1º, Verb. *Excepción de litispendencia*, núm. 1064 y nota.

1c—No está comprendida entre las enumeradas en el art. 852 del Cód. de Com.

2—Es una confesión calificada, debiendo el escepcionante probar la calificación. Véase Inst. tom. 1, Verb. *Excepción de pago*, núm. 1069 y nota.

3—Véase nota precedente.

4—Los asientos de los libros deben coincidir con los documentos cuyo pago se quiere comprobar; de lo contrario estos asientos constituirían meras inducciones ó presunciones, las que no son suficientes para comprobar la cancelación de documentos.



ESC

libros de fecha anterior á la obligación, aunque sea por cantidades iguales debe ser desechada—Jur. Com., tom. 6, pág. 579, Ser. 1ª.

1a. Escepción de simulación—No siendo admisible aún cuando se justifique que hay simulación en el título, no basta para declararlo falso y la ejecución debe llevarse adelante—Jur. Com., tom. 6, pág. 298, Ser. 1ª.

1b. Escepción dilatoria—No puede ser admitida como tal, la que hace al fondo de la demanda—Jur. Civ., tom. 2, pág. 520, Ser. 2ª.

Escepción dilatoria—Véase: *Acción*, núm. 6.

1c. Escepciones dilatorias—Deben oponerse todas conjuntamente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 619, Ser. 2ª.

Escepciones dilatorias—Véase: *Auto*, núm. 9—*Prueba*, núm. 6.

1d. Escepción legítima—No habiéndose opuesto ninguna, la sentencia que manda llevar adelante la ejecución debe ser confirmada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 423, Ser. 1ª.

1e. Escepciones—Si no se justifican, debe llevarse adelante la ejecución—Jur. Civ., tom. 7, pág. 282, Ser. 1ª.

2. Escepciones—Que sobre falta de personería oponga

1a—No está comprendida entre las escepciones admitidas como legítimas por el art. 488 del Cód. de Proc.

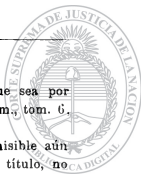
1b—Siempre que la defensa se haga en virtud de razones generales de oposición al derecho en que se funda la demanda, un artículo de incontestación es improcedente.

1c—Art. 86, Cód. de Proc.

1d—No causa agravios la sentencia que consagra el derecho de las partes litigantes, fundada en la correcta interpretación de la ley.

1e—El Juez debe ordenar se lleve adelante la ejecución cuando la escepción opuesta no es legítima—Art. 498, inc. 1º, Cód. de Proc.

2—El caso es el siguiente: un acreedor demanda á una sociedad, en cuyo seno se ha producido una escisión, resultando de ésta que se constituyeron dos sociedades con el mismo nombre y cada una con su presidente respectivo: el actor demanda á ambos presidentes, porque las nuevas sociedades son parte integrante de la antigua de la que era acreedor. Uno de



ESC

uno de los demandados contra otro que revista ese mismo carácter, no deben ser resueltas por el Juzgado siempre que el actor desista de su acción.

3. Escepciones—Cuando el ejecutado no justifica las opuestas debe llevarse adelante la ejecución—Jur. Civ., tom. 3, pág. 375, Ser. 2ª.

Escepciones—Véase: *Recurso*, núms. 2 y 3—*Apelación*, núm. 1—*Prejuzgamiento*, núm. 4—*Cosa juzgada*, núm. 2.

Escepcionante—Véase: *Título ejecutivo*, núm. 20.

1. Escribano—Que otorga la trasferencia de una propiedad gravada á favor el Banco Hipotecario Nacional, no está

los presidentes paga la deuda y el otro opone la escepción de falta de personería del otro presidente demandado que más tarde paga la deuda. Satisfecho de su crédito el actor pide que se dé por terminado el juicio y se archive el expediente: el escepcionante se opone diciendo que las escepciones por él opuestas no habían sido sustanciadas en forma, y en que no obstante su oposición se admite y reconoce al otro presidente con personería bastante. Una vez pagado el acreedor, ya el juicio no podía llevarse adelante, pues su objeto estaba cumplido y había desaparecido su causa. Al aceptar el Juzgado la extinción del juicio por el pago verificado no reconocía que ninguno de los dos presidentes fuese el legítimo, únicamente tuvo en cuenta que el actor había anunciado que uno de sus deudores le había pagado su cuenta.

3—Ley 8, tít. 3, Part. 3ª; y art. 498 del Cód. de Proc.

1—El art. 30 del Reg. del Banco establece, que para que el deudor hipotecario pueda libertarse de toda responsabilidad para con el Banco, al transferir la deuda hipotecaria á un tercero, es necesario recabar la autorización previa del Establecimiento. El Cód. Civ. en sus diversas disposiciones, entre otras el art. 1174, establece que quien concede hipoteca sobre una finca que le pertenece, conserva sin embargo su propiedad y su libre disposición, pudiendo en consecuencia enagenarla en favor de quien quiera, desde que salve los derechos del acreedor, declarando y reconociendo el gravamen que pesa sobre ella. El art. 30 citado, está establecido en favor del deudor para que éste pueda libertarse personalmente respecto del Banco, solicitando autorización para transferir la hipoteca: desde que no lo solicita es porque no quiere ampararse de ese derecho y lo renuncia, puesto que cualquiera puede renunciar lícitamente al derecho establecido en su favor, desde que la renuncia no comprometa el orden público. El deudor queda siempre personal y subsidiariamente obligado para con el Banco.

ESC

obligado á esperar el previo consentimiento de éste—Jur. Civ., tom. 1, pág. 451, Ser. 2ª.

2. Escribano—Otorgante de una escritura, es responsable, al comprador, de los daños y perjuicios que pueda ocasionarle su falsa afirmación de que el bien no tiene gravamen no obstante la existencia de una hipoteca—Jur. Civ., tom. 8, pág. 9, Ser. 1ª.

3. Escribano—Que deba otorgar la escritura, el comprador tiene derecho á designarlo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 475, Ser. 1ª.

4. Escribano—Debe proceder al pretesto aun cuando se hubiese infringido la ley de sellos, devolviendo la letra con la nota de «no corresponde»—Jur. Com., tom. 6, pág. 504, Ser. 1ª.

Escribano—Véase: *Certificado*, núm. 1 — *Rivalidación*, núm. 1—*Sello*, núm. 1—*Documento*, núm. 3—*Mandato*, núm. 2—*Estado civil*, núm. 1.

1. Escribanos—Con títulos de las Provincias, se permite su inscripción en la matrícula de la capital sin llenar los

2—Escribano *otorgante* dice el sumario equivocadamente, debiendo decir *autorizante*. El sumario tiene su fundamento en los arts. 902, 904, 993, 1068, 1109 y 1112 del Cód. Civ.

3—Aquí se incurre en el mismo error del sumario anterior, debe decir Escribano que debe *autorizar* la escritura. Es un derecho reconocido al comprador la facultad de designar el escribano, pues es él quien debe pagar á éste.

4—El art. 37 de la ley de sellos ordena que el escribano ponga á los documentos que no vengan en el sello que marca la ley, la nota de «no corresponde». La sanción del art. 33 no puede referirse á los protestos que deben hacerse dentro de los términos establecidos en el Cód. de Com. Y como el art. 894 de este Código ordena que el escribano *devuelva* á los interesados *el original* de la letra protestada, sería necesario una prescripción especial de la ley para que esta disposición fuera derogada.

1—Esta resolución fué dictada por mayoría de un voto, lo mismo que en el caso resuelto en el tom. 6, pág. 262, Ser. 1ª, de la Jur. Civ. Los



ESC

requisitos exigidos por la ley Org. de los Tribunales—Jur. Civ., tom. 6, pág. 536, Ser. 2ª.

2. Escribanos—Que acompañando título expedido por las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires, pidan la rivalidación previo examen, no necesitan justificar su práctica, buena conducta, edad ni ciudadanía — Jur. Civ., tom. 1, pág. 280, Ser. 2ª.

Escribanos—Véase: *Inscripciones*, núm. 2.

3. Escribanos—De registro en actual ejercicio de su cargo, pueden examinar los protocolos de sus Registros existentes en el archivo, sin presentar antecedentes, los que solo deben serles exigidos para la revisión de los protocolos de distinta oficina—Jur. Civ., tom. 1, pág. 275, Ser. 2ª.

4. Escribanos—Públicos, reconociendo como bastantes para ejercer en la capital los títulos expedidos por las autoridades judiciales de las Provincias—Jur. Civ., tom. 3, pág. 451, Ser. 2ª.

1. Escribanos de registro—Sus funciones y atribuciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 32, Ser. 1ª.

sostenedores de la idea contraria al sumario parece que están en la doctrina correcta, de manera que no sería de extrañarse que en cuanto la composición de la Cámara cambie, también se altere la doctrina sentada. Véase verb. *Rivalidación*, núm. 1 y nota.

2—Solicitándose en este caso la rivalidación previo examen, se llenan sustancialmente los propósitos de la Ley Org., haciendo depender del examen la rivalidación del título.

3—El registro de los expedientes archivados les es completamente libre para el de los protocolos no, porque los arts. 192 y 193 de la Ley Org. de los Trib. prescriben su reserva con exclusión de los interesados quienes deben acreditar la necesidad que tengan de verificar algunas referencias. Si la necesidad de la reserva es la razón de los arts. citados, ella no debe rezar con el mismo Escribano autorizante. Debe tenerse presente además lo prescrito en el art. 1003 del Cód. Civ. que faculta al Escribano autorizante, en los casos que el Cód. exige la transcripción de los documentos habilitantes y que estos existan en sus protocolos, á referirse simplemente á lo que de ellos conste, indicando la foja en que deben encontrarse.

4—Véase el núm. 1, y verb. *Rivalidación*, núm. 1.



ESC

1. Escribanos públicos—Sus funciones y deberes—Jur. Civ., tom. 7, pág. 29, Ser. 1ª.

1a. Escrito—Recusando á un Juez con causa, aun cuando presentado ante el mismo al solo efecto de que lo conteste, se considera presentado ante el Superior que debe resolver la recusación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 172, Ser. 2ª.

2. Escrito—Pidiendo la recepción de la causa á prueba, suspende el término para espresar agravios—Jur. Com., tom. 6, pág. 510, Ser. 1ª.

Escrito—Véase: *Injuria*, núm. 1—*Secretario*, núm. 1—*Acusación*, núm. 1—*Aclaración*, núm. 1.

1b. Escritura—Cuando entre las diversas cláusulas existen dudas por la ambigüedad de sus términos, debe interpretarse y resolverse por las palabras del promisor de la obligación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 283, Ser. 1ª.

Escritura—Véase: *Comprador*, núm. 2—*Terceros*, núm. 1—*Boleto*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 1—*Escribano*, núm. 1—*Término*, núm. 17—*Hermano legítimo*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 23.

1c. Escritura judicial—Constituye un título indisputa-

1a—La única autoridad competente para conocer en las recusaciones con causa es la Cámara—art. 371 Cód. de Proc.—Si la recusación se deduce ante el Juez recusado,—art. 372—es al solo objeto que éste eleve los autos al Tribunal, con un informe detallado y categórico respecto á las causas que se alegan. Estas prescripciones responden al principio del antiguo y del nuevo procedimiento, de que el Juez recusado con causa queda absolutamente inhibido para proveer en el caso, que pasa incontinenti á la jurisdicción del Tribunal competente.

2—El art. 242 del Cód. de Proc. que declara desierto el recurso cuando no se espresa agravios dentro del término legal se funda en el abandono de la instancia, lo que no se presume cuando se pide la recepción de la causa á prueba. Esta doctrina está de acuerdo con la de la Cámara de lo Civil.

1b—Es regla de sana interpretación en la ejecución de las convenciones.

1c—Son actos completamente amparados de las formas legales, públicos y notorios

ESC

ble para justificar el dominio y la buena fe—Jur. Civ., tom. 7, pág. 557, Ser. 1ª.

1a. Escritura pública—La declaración de los testigos de no haberse encontrado presentes á su otorgamiento, no basta para probar su falsedad mientras no se justifique la existencia de dolo ó fraude—Jur Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

2. Escritura pública—Para que pueda ser inscrita en el Registro público de Comercio, la prórroga de un contrato social debe ser hecha en esta forma—Jur. Com., tom. 6, pág. 350, Ser. 1ª.

Escritura pública—Véase: *Contrato*, núm. 14—*Venta*, núm. 4—*Dominio*, núm. 5—*Compraventa*, núm. 2—*Inhabilitad de título*, núm. 2—*Propiedad pública*, núm. 2—*Cesión de derechos*, núm. 1—*Tribunal arbitral*, núm. 1—*Boleto*, núm. 2—*Información*, núm. 5—*Tercería*, núm. 5.

Escritura simulada—Véase: *Propietario*, núm. 2.

1b. Escrituras—Otorgadas en el extranjero, que no vengán debidamente legalizadas por los funcionarios argentinos acreditados en el país de su otorgamiento, no hacen fé en juicio aunque hayan sido autenticadas por el Cónsul respectivo residente en la República—Jur. Civ., tom. 1, pág. 270, Ser. 2ª.

Escrituras—Véase: *Inscripción*, núm. 1—*Comprador*, núm. 11—*Copias*, núm. 1.

1. Escrituras y registro—Formalidades que deben observarse en su autorización y formación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 1ª.

1a—El dicho de los testigos no haría fe para contradecir la validez de la escritura que han firmado, desde que no se compruebe que lo han hecho por dolo, ó violencia que se les hiciera, según disposición terminante del art. 992 del Cód. Civ.

2—De acuerdo con lo prescrito en los arts. 393 y 486 del Cód. de Comercio.

1b—Art. 82, Cód. Civ.



ESC—ESP

1. Escrituración—Aprobado el remate, no puede suspenderse sin audiencia del comprador y en virtud de acción deducida en forma por parte legítima —Jur. Civ., tom. 1, pág. 383, Ser. 2ª.

Escrituración—Véase: *Comprador*, núm. 7.

1a. Escusación—Las opiniones jurídicas vertidas por un Juez y especialmente las que han sido en un juicio ejecutivo, no lo inhabilitan para entender en una causa idéntica —Jur. Civ., tom. 9, pág. 235, Ser. 1ª.

Escusión—Véase: *Obligación*, núm. 5.

Espediente—Véase: *Auto*, núm. 6—*Antecedentes*, núm. 1—*Incompetencia*, núm. 10—*Archivo*, núm. 1—*Domicilio*, número 3.

Espediente arbitral—Véase: *Prueba*, núm. 20.

Espedientes archivados—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 2.

1b. Espera—Por ser condicional la obligación, al ejecutado que opone la escepción, corresponde probar que ha llegado el caso de aplicar la condición—Jur. Civ., tom. 9, pág. 159, Ser. 1ª.

1a—Siempre que en el juicio ordinario no tenga que resolverse las mismas cuestiones resueltas en el sumario, pues en este caso habría inhabilidad del Juez á causa de haber emitido opinión acerca del pleito. Véase verb. Prejuzgamiento, núm. 4.

1b—El caso es el siguiente: Un abogado se comprometió á rebajar sus honorarios hasta el valor de la mitad de los bienes, en el caso en que la suma en que hubiesen sido regulados fuese mayor. El derecho del abogado, según este convenio queda espedito para cobrar sus honorarios pidiendo su regulación al Juez y solo se obliga á hacer una rebaja en la suma en que fuesen regulados, en un caso determinado. Si el deudor quiere hacer valer en su favor esa obligación de hacer una rebaja, debe comprobar que ha llegado el caso previsto en el convenio, esto es que la suma regulada excede de la mitad. La obligación de probar este hecho corresponde al ejecutado, á doble título: 1º Porque invoca un derecho condicional y 2º Porque es el ejecutado el que debe probar sus escepciones. La escepción fundada en estos hechos ó condiciones es improcedente.



ESP

1a. Esposa.—Deducida una acción á nombre propio, debe rechazarse la contra demanda si se dirige contra el esposo, aun cuando sea por hechos llevados á efecto como administrador de la sociedad conyugal—Jur. Civ., tom. 6, pág. 229, Ser. 1ª.

Esposa.—Véase: *Declaratoria*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 3—*Esposo*, núm. 3—*Dote*, núm. 1—*Gananciales*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 2—*Poseción á la esposa*, núm. 1—*Poseción absoluta*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 15—*Dominio*, núm. 4—*Separación de bienes*, núm. 9—*Simulación*, núm. 10.

1b. Esposo.—No divorciado, es parte legítima en el juicio declaratorio de demencia de la esposa, y toda sentencia dictada sin su intervención es nula — Jur. Civ., tom. 1, pág. 59, Ser. 2ª.

2. Esposo.—Mientras no exista separación de bienes está obligado judicialmente á proveer á la esposa de fondos para litisespensas—Jur. Civ., tom. 8, pág. 499, Ser. 1ª.

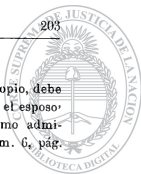
3. Esposo.—Los derechos que el concurso de éste pretenda sobre bienes de la esposa debe hacerlos valer ante el Juez que tenga jurisdicción sobre ellos, aún cuando sea

1a—La acumulación de pleitos solo es permitida por la ley cuando el actor en la demanda es el mismo demandado en la reconvencción, lo que no sucede en el caso presente.

1b—Este principio tiene su fundamento en los derechos y facultades que la ley confiere al marido sobre la persona de la esposa y la administración de la sociedad conyugal.

2—En varias disposiciones del Cód. Civ. se sienta esta doctrina, entre otros el art. 185 así lo determina. De acuerdo con este Cód. el de Proc. en su art. 608 dice: «la reclamación sobre litisespensas en los casos en que haya derecho á exigirlos, se sustanciará por los mismos trámites. El fundamento principal de esta obligación es que el marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal y de los de la esposa.

3—Art. 529 del Cód. de Proc. Véase Verb. Concurso comercial y su nota.



ESP

accidental, por ejecución que contra ellos se siga—Jur. Com., tom. 6, pág. 493, Ser. 1ª.

Esposo—Véase: *Honorarios*, núm. 3—*Alimentos provisionarios*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 4—*Inhibición*, núm. 2—*Tribunales de comercio*, núm. 1—*Insania*, núms. 1 y 2.

1. **Esposos**—Las dificultades que se susciten entre ellos y que se relacionen con sus hijos deben ser resueltas por los jueces breve y sumariamente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 259, Ser. 2ª.

2. **Esposos**—Las dificultades que entre ellos se susciten

1—Estos juicios no deben asumir las proporciones de un proceso. Por su naturaleza, por la urgencia con que corresponde solucionarse, debe el Juez proceder breve y sumariamente ejerciendo con prudencia los deberes de un *pater familias*. Un proceso solo serviría para mantener vivo el resentimiento de los esposos, ahondándose los odios en daño de ellos mismos y del interés bien entendido de los hijos. Estos fueron los fundamentos aducidos por la Cámara para resolver el punto espuesto en el sumario. Pero por poderosos que ellos fueren y efectivamente son, no las consideramos bastantes para que los magistrados queden facultados á observar un procedimiento que es á todas luces contrario y atentatorio de la ley. Con efecto el Cód. de Proc. establece que todo juicio que no tenga una tramitación especial debe regirse por las reglas establecidas para el juicio ordinario; cuando por razones poderosas cree que debe señalarse un procedimiento especial para determinada clase de juicios así lo establece de una manera expresa. El juicio á seguirse en el caso del sumario no tiene en el Cód. de Proc. una tramitación especial, debiendo en consecuencia caer bajo la regla general. Y no se diga que por tal ó cual razón poderosa y atendible deban los jueces aplicar un procedimiento especial, pues se incurriría en grave error. El Juez debe aplicar la ley, dictada según su ciencia y conciencia, mas no puede derogar, restringir ni modificar la ley. Si hay inconveniente que las cuestiones de esta naturaleza se transmiten por la vía ordinaria por las razones apuntadas, ella es culpa de la ley que es impropia, y el rol del Juez solo se limita á apuntar el defecto para que el legislador la corrija. No puede admitirse que cuando en la práctica se tropiece con los inconvenientes de una ley, esa ley se derogue, ni se modifique por los jueces, pues no tienen facultad para ello: la ley no puede ni modificarse ni derogarse sino por otra ley: los jueces no pueden *dictar* leyes sino *aplicarlas*.

2—Véase nota anterior.



ESP—EST

con respecto á los hijos deben ser resueltas en juicio sumario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 510, Ser. 2ª.

Esposos—Véase: *Terceros*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 7—*Hijos*, núm. 3.

Espressar agravios—Véase: *Término*, núm. 11—*Escrito*, núm. 2.

1a. **Espressión de agravios**—La adhesión a los de otra parte también apelante no es válida á los efectos de la ley—Jur. Civ., tom. 8, pág. 9, Ser. 1ª.

1. **Espropiación**—El favorecido solo puede ampararse en la ley que lo favoreció en el tiempo y forma que ella prescriba—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2ª.

Espropiación—Véase: *Poseedores*, núm. 1—*Terrenos fiscales*, núm. 1—*Peritos*, núm. 5.

Establecimiento rural—Véase: *Medianeros*, núm. 1.

1b. **Estado civil**—Las aserciones de las partes en un instrumento público no forman prueba si el escribano autorizante no da fe de que le consta la verdad de dicha aserción—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 1ª.

Estado civil—Véase: *Mandato*, núm. 2.

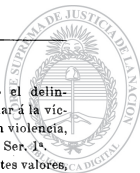
1c. **Estado de viuda**—La afirmación no negada, basta para justificar la personería, al escepcionante corresponde la prueba de la falsedad—Jur. Civ., tom. 3, pág. 344, Ser. 2ª.

1a—El art. 227 del Cód. de Proc. prescribe que el recurso se deduzca ante el Juez que hubiese dictado la sentencia. Véase: *Apelación*, núm. 3: Inst. tom. 1, verb. *Apelación*, núm. 181 y sus notas respectivas.

1b—Tal aserción no puede constituir prueba jurídica del hecho.

1c—Tal no fué la resolución de la Cámara. En el caso presente la parte constituyó apoderado diciendo que era de estado viuda: el demandado dijo que esto no constaba y que debía comprobar su estado de viudez, pero sin negar la afirmación hecha. Es evidente que una afirmación no negada quoda en pié y el que la formula no puede ser obligado á comprobar un hecho que no ha sido negado. El sumario está mal hecho y es erróneo.





EST—EVI

1a. Estafa—No puede calificarse así, cuando el delincuente a pesar de sus manejos, no consigue engañar a la víctima, viéndose en el caso de apoderarse, aunque sin violencia, del objeto robado—Jur. Crim., tom. 5, pág. 208, Ser. 1ª.

2. Estafa—Cometida contra varios por diferentes valores, debe ser penada con el máximun que fija la ley, aun cuando alguno de los damnificados lo sean por menor valor del que esta fija para su aplicación—Jur. Crim., tom. 5, pág. 505, Ser. 1ª.

Estafa—Véase: *Hurto*, núm. 1—*Mandato apócrifo*, número 1.

1b. Estampilla—El hecho de no haberla inutilizado con la fecha del recibo no importa una infracción a la ley de 1878—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 2ª.

Estancia—Véase: *Promesa*, núm. 1.

Estatutos—Véase. *Ampliaciones*, núm. 1—*Sociedad anónima*, núm. 20.

Estelionato—Véase: *Vendedor de cosas ajenas*, núms. 1 y 2—*Nulidad por estelionato*, núm. 1.

Extinción—Véase: *Obligación*, núm. 1.

Estrados del Juzgado—Véase: *Providencias*, núm. 1.

Estrangero—Véase: *Excepción de incompetencia*, núm. 1—*Sociedades*, núm. 1.

1c. Evicción—La citación a una testamentaria no basta

1a—No hay estafa porque falta uno de los elementos de este delito, cual es el engaño. En este caso es aplicable el art. 325 del Cód. Penal anterior.

2—Art. 177 del Cód. Pen.

1b—El inc. 2 del art. 32 de esta ley dice: «El que otorgue recibo ó pague cheque, y el que acepte uno ú otro sin estampilla ó sello correspondiente, pagará una multa de \$ 1,000 m.c.» Esta ley no ordena la inutilización de la estampilla. Debe tenerse presente además que las leyes de impuesto no son susceptibles de una interpretación extensiva.

1c—No es aplicable el art. 634, incs. 2 y 4 del Cód. de Proc. cuyos casos no concurren en manera alguna en el presente: Mas cuando se

EVI-EXO

para hacer pasar al Juez que en ella entienda, el conocimiento del litigio en el cual se ha ordenado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 112, Ser. 2ª.

2. Evicción—Citado el vendedor, no puede obligársele a entrar al juicio promovido por el tercero, el comprador, puede en oportunidad hacer uso de su derecho—Jur. Civ., tom. 8, pág. 230, Ser. 1ª.

Evicción—Véase: *Tercero*, núm. 2.

1. Examen de testigos—Las partes tienen amplio derecho para hacer las preguntas y pedir las explicaciones que juzguen convenientes—Jur. Civ., tom. 1, pág. 22, Ser. 2ª.

Exhorto—Véase: *Juez*, núm. 1—*Jurisdicción del Juez exhortante*, núm. 1.

Exoneración—Véase: *Fiador*, núm. 1.

trata de alguno de éstos, el conocimiento del litigio pasa al Juez de la sucesión.

2—La citación de evicción hecha por el comprador de una cosa, cuando es de demandado tiene por objeto poner al vendedor en aptitud de defender por sí mismo el pleito promovido al comprador. La resolución judicial que en estos casos debe recaer de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2108 del Cód. Civ., no debe tener más alcance que ordenar la citación sin resolver cosa alguna sobre la negativa del citado á asumir la defensa del demandado, la que debe ser motivo de otro juicio.

1—En el examen de testigos debe observarse lo prescrito en los arts. 131, 132 y 133 del Cód. de Proc. que confieren este derecho á la parte para averiguar la verdad; y solo reconoce la limitación del art. 108, cuando versa la prueba sobre hechos no articulados en la demanda.





Factor — Véase: *Posesión de una casa de comercio*, número 1.

1a. Factor — La autorización por simple carta-orden, es prueba bastante del mandato, aún cuando no se encuentre escrita en el Registro Público de Comercio—Jur. Com., tom. 5, pág. 513, Ser. 1ª.

2. Factor—Su reconocimiento de las deudas contraídas, obliga al principal á su pago—Jur. Com., tom. 5, pág. 513, Ser. 1ª.

Facultad—Véase: *De oficio*, núm. 2.

Facultad de derecho—Véase: *Rivalidación*, núm. 1.

Falencia—Véase: *Privilegios generales*, núm. 1—*Sociedad*, núm. 4.

Falsa causa—Véase: *Prescripción*, núm. 11.

1b. Falsedad—De un instrumento público, si bien para declararla se requiere prueba plena, la de presunciones es bastante cuando un tercero trata de probar la simulación del acto que él contiene—Jur. Civ., tom. 1, pág. 484, Ser. 2ª.

1a—Porque conforme con el art. 135 del Cód. de Com., esa falta no produce efectos respecto de terceros.

2—Art. 138 del Cód. de Com.

1b—La prueba de la simulación está regida por la Ley 13, tít. 16, lib. 5, R. C. *in fine*. «Para dar por comprobada la simulación» ha dicho el doctor Escalada; véase causa CVIII, tom. 3, pág. 337, S. 1.º F. S. C. P., «bastan vehementes indicios ó presunciones, siendo precisos y concordantes, por lo que puede llamarse prueba privilegiada. Es el juicio del hombre, el juicio individual más que otra cosa quien debe decidir. La

FAL

2. Falsedad—Demostrada la de la escepción opuesta, su rechazo es procedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 197, Ser. 1ª.

3. Falsedad—Reconocida la firma de un documento privado, corresponde al firmante probar la de su contenido—Jur. Civ., tom. 7, pág. 126, Ser. 1ª.

4. Falsedad—De una escritura pública no basta para declararla, el hecho de no haberse encontrado presentes al otorgarse, los testigos que la firman—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

5. Falsedad—Su prueba corresponde al escepcionante, una vez admitido un título como ejecutivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 298, Ser. 1ª.

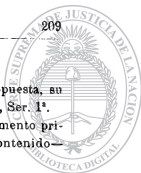
Falsedad—Véase: *Tachas*, núm. 1—*Escepción de falsedad*, núm. 1—*Peritos*, núm. 1—*Aceptante*, núm. 4—*Partidas parroquiales*, núm. 1—*Estado de viuda*, núm. 1.

1. Falsedad de la ejecutoria—Esta escepción opuesta á la ejecución de una sentencia y fundada en que la dictada

razón es clara. Cuando se trata de simular un acto, en perjuicio de tercero, se toman tranquilamente las medidas, se adoptan con tiempo las precauciones necesarias para ocultar el acto, se borran los rastros que él pudiera dejar para desvanecer todo elemento probatorio. Si se exigiera, pues, una prueba directa, como en el caso de la falsedad, ¿qué esperanza podría quedar de descubrir jamás una simulación? ¿quién llamaría testigos para orientarlos en el secreto, cuando todo ha de obrarse en el misterio? El mismo Escribano que autoriza un documento simulado y los testigos instrumentales ignoran casi siempre lo que se pasa. Ellos creen de buena fe que se ha celebrado una venta, una donación por ejemplo, ó otro acto, pero en realidad no hay tal venta, ni tal donación. Era necesario entonces, que la conciencia del Juez no fuese aprisionada por la ley, so pena de renunciar á descubrir jamás un acto simulado. Era necesario dejar libre el juicio del hombre para que apreciase, según las reglas del sano criterio, la infinidad de datos, antecedentes y presunciones peculiares á cada caso, y sobre los que no podría trazarse una regla general.»

3—Arts. 1016, 1017 y 1028 del Cód. Civ.

4—Se requiere que hayan procedido con dolo, ó con violencia que se les ha hecho—art. 992. Cód. Civ.



FAL

en juicio ejecutivo hace cosa juzgada, es improcedente—Jur. Civ., tom. 3, pág. 575, Ser. 2ª.

Falsificación—Véase: *Hurto*, núm. 1—*Tentativa próxima*, núm. 1—*Billetes de Banco*, núm. 1.

Falsificaciones de la sentencia—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 3.

Falso—Véase: *Excepción de simulación*, núm. 1.

1. Falta de personería—Por carecer del derecho que se gestiona, solo puede ser admitida como excepción perentoria—Jur. Civ., tom. 2, pág. 520, Ser. 2ª.

2. Falta de personería—Esta excepción es improcedente contra el ejecutante, si el instrumento con que se inicia el juicio está á nombre del actor—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Ser. 1ª.

3. Falta de personería—Esta excepción no puede fundarse en el error de alguno de los nombres ó apellidos del ejecutado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Ser. 1ª.

4. Falta de personería—Del mandante, por carecer de acción no puede ser opuesta como excepción dilatoria—Jur. Civ., tom. 3, pág. 314, Ser. 2ª.

5. Falta de personería—Esta excepción fundada en la falta de derecho del demandante debe ser rechazada si se opone como dilatoria—Jur. Civ., tom. 3, pág. 531, Ser. 2ª.

Falta de personería—Véase: *Excepción de falta de per-*

1—Véase: Inst. tom. 1, Verb. *Falta de personería*, núm. 1198 y nota.

2—Su personería no deja lugar á dudas desde que la obligación del ejecutado es de pagar la cantidad que se cobra y está constituida á favor de la persona á cuyo nombre fué otorgado el documento.

3—Siempre que del contesto de la ejecución resulte claramente conocida la persona del deudor.

4—Véase: Inst. tom. 1º, verb. *Excepción mista*, núm. 1078: y *Excepción de falta de personería*, núm. 1045 y nota.

5—Véase nota anterior.



FAL

sonería, núm. 1—*Excepción rechazada*, núm. 1—*Excepciones*, núm. 2—*Mandato apócrifo*, núm. 1.

1. **Fallecimiento**—Si bien á falta de partida, puede justificarse por información, la prueba testimonial debe revestir un carácter asertivo que produzca plena convicción legal—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 1ª.

Fallecimiento—Véase: *Testamentaria*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 1—*Herencia*, núm. 1.

1a. **Fallido**—Carece de personería para iniciar otras acciones que las inherentes á su persona ó las meramente conservatorias—Jur. Civ., tom. 2, pág. 451, Ser. 2ª.

2. **Fallido**—Tiene personería para ejecutar sus créditos, aun cuando no haya pedido rehabilitación, siempre que por no haberse presentado acreedores, se manden archivar los autos declarándose casual la quiebra—Jur. Com., tom. 6, pág. 562, Ser. 1ª.

3. **Fallido**—Puede ampararse de la ley sobre fianza y los jueces deben fijar el minimum que la misma ley autoriza—Jur. Com., tom. 6, pág. 417, Ser. 1ª.

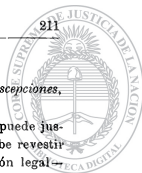
4. **Fallido**—La declaración de quiebra de éste, atrae al Juez del concurso todos los expedientes en que él sea parte

1a—Art. 1533, Cód. de Com.: igual, al Español art. 878; Portugal 1132; Holandés 770; Italiano 699; Chileno 1362 y 1363; Francés 443; Véase Massé, núm. 1182.

2—La disposición del art. 1567 del Cód. de Com., tiene por objeto no irrogar perjuicios á los acreedores, y desde que no exista ninguno que haya acreditado su carácter en el concurso, no puede haber inconveniente en que se entregue al fallido, que se encuentra en estas condiciones especiales, una suma sobre la cual ningún otro derecho se haya deducido.

3—No es exacto que los jueces deban fijar el minimum: solo deben hacerlo cuando las condiciones que rodean al solicitante de falencia pueda considerarse que no debe fijarse otra suma que el minimum. Cuando la ley establece para la fianza un maximum y un minimum queda al arbitrio judicial establecer su monto dentro de esos límites marcados.

4—Esta regla sufre excepciones: Véase Verb. *Concurso comercial*.



FAL

ya sea como demandante á demandado—Jur. Com., tom. 6, pág. 492, Ser. 1ª.

5. Fallido—No puede ser oído por sí ni por apoderado, mientras no haya sido constituido en prisión, ó se haya aceptado su fianza—Jur. Com., tom. 6, pág. 502, Ser. 1ª.

Fallido—Véase: *Auto de quiebra*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 9—*Costas del concurso*, núm. 1—*Jueces de comercio*, núm. 2.

1a. Fallidos—En los juicios contra ellos, el expediente seguido ante los Tribunales de Comercio, no basta para fundar la sentencia de lo criminal, solo se puede considerar como un sumario—Jur. Crim., tom. 6, pág. 156, Ser. 1ª.

1b. Fallo—Contra el de amigables componedores, no pro-

5—No cumpliendo con estos requisitos que deben siempre exigirse en el auto de quiebra, debe ser considerado prófugo y negársele audiencia mientras no cumpla y se someta al procedimiento establecido en el Cód. de Comercio.

1a—El hecho de la calificación de quiebra fraudulenta hecha por el Juez de Comercio no determina por sí solo la aplicación de la pena establecida por el Cód. Pen. El art. 1593 del Cód. de Com. establece, que hecha la calificación, se remitan al Juez del Crimen los antecedentes juntamente con la persona del fallido, declarándose en el art. 1595 que los efectos civiles de la calificación son inflexibles sea cual fuere el resultado del juicio criminal. Es igualmente principio sentado por la jurisprudencia de los Tribunales que el auto calificativo de la quiebra es inapelable, lo que sería atentatorio si se declarara que la calificación de fraudulenta de una quiebra trajera aparejada la pena fijada por el Cód. Pen. Concorre en el sentido del sumario lo establecido en el Cód. Civ., según el cual la sentencia civil no pasa en autoridad de cosa juzgada en lo criminal, pues son distintos los objetos que se prosiguen en una y otra jurisdicción. Por último el Cód. Pen. en su art. 332 dice, que el expediente de calificación sirve de bastante sumario en las causas contra quebrados.

1b—La ley no concede recurso alguno contra el fallo de los amigables componedores, salvo la acción de nulidad por las causas expresadas en el art. 808 del Cód. de Proc.; por consiguiente, todo lo que se alegue sobre nulidades del compromiso es ineficaz, tanto más si se tiene en cuenta la última parte del art. 801, en virtud de la cual quedan aquellas subsanadas siempre que se hubiere guardado silencio hasta dictarse el fallo.



FAM—FIA

cede la nulidad de compromiso deducida como recurso—
Jur. Com., tom. 5, pág. 62, Ser. 1ª.

Fama—Véase: *Paternidad*, núm. 1.

Fecha—Véase: *Moneda*, núm. 1 — *Renovaciones*, núm. 1
— *Instrumentos privados*, núm. 1.

1a. Fecha cierta—La de una letra de cambio, debe fijarse con arreglo á las disposiciones del Cód. de Comercio; las del Cód. Civil no le son aplicables—Jur. Com., tom. 6, pág. 533, Ser. 1ª.

1. Feria—Acuerdo designando los funcionarios judiciales que deben atender el despacho urgente durante la de 1887—Jur. Civ., tom. 3, pág. 440, Ser. 2ª.

Feria—Véase: *Jueces de Paz*, núm. 1.

Ferriados—Véase: *Días feriados*, núm. 1.

Ferrocarril—Véase: *Acto ilícito*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 23.

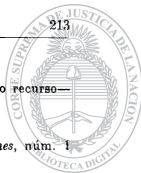
1b. Flador—No puede pedir la exoneración de la fianza directamente á los acreedores, su acción debe dirigirse contra el deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 167, Ser. 1ª.

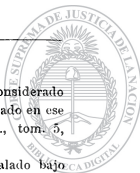
2. Flador—Presentado para el levantamiento de un embargo preventivo, solo queda obligado con los acreedores que lo pidieron, pero no con los abogados defensores del deudor—Jur. Civ., tom. 2, pág. 441, Ser. 2ª.

1a—La letra de cambio es un crédito de naturaleza esencialmente mercantil, cuyas formas están únicamente regidas por el Cód. especial de la materia que lo ha creado para facilitar las operaciones mercantiles. El Cód. Civ., no legisla sobre ella. El art. 1035 del Cód. Civ., se opone al principio sentado en el art. 801 del Cód. de Com.

1b—Art. 2025 Cód. Civ.

2—La obligación del flador solo se refiere á los acreedores ante quienes se obliga por dicho acto, pero nunca ante los abogados, cuyas relaciones jurídicas solo afectan á sus clientes. Esta es la doctrina constantemente establecida por la Cámara.





FIA

3. Fiador—De una obligación, no puede ser considerado como deudor solidario, mientras no se haya obligado en ese carácter espreso y categóricamente — Jur. Com., tom. 5, pág. 5, Ser. 1ª.

4. Fiador—No presentado en el término señalado bajo apercibimiento, el Juzgado puede dar por rescindido el convenio en el cual se estatuyó esa obligación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 438, Ser. 2ª.

5. Fiador—Pendiente el juicio sobre rendición de cuentas, toda acción contra el fiador de éste es estemporánea y debe ser rechazada—Jur. Com., tom. 6, pág. 359, Ser. 1ª.

6. Fiador—La prórroga del plazo sin consentimiento de éste lo libera de la obligación—Art. 619, Cód. de Com.

7. Fiador—En causas criminales, solo puede tener intervención y ser oído al hacerse efectiva la fianza—Jur. Crim., tom. 6, pág. 612, Ser. 1ª.

Fiador—Véase: *Obligado solidariamente*, núm. 1—*Acción*, núm. 3—*Acciones*, núm. 3.

Fiadores—Véase: *Ejecutante*, núm. 3.

1. Fianza—Para que se considere mercantil, basta que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto ó contrato de comercio, aunque el fiador no sea comerciante —Jur. Civ., tom. 6, pág. 308, Ser. 1ª.

2. Fianza—Resuelta su procedencia, el Juez es el único

3—El art. 701 del Cód. Civ. requiere para que la obligación sea solidaria, que en ella esté espresa la solidaridad en términos inequívocos.

4—Aún cuando no se hubiese establecido una sanción para el caso de no ser presentado el fiador convenido, no puede el convenio quedar subordinado a la voluntad de una de las partes, en cuyo caso el efecto del apercibimiento judicial no puede ser otro que dejar sin efecto el convenio.

1—Art. 603, Cód. de Com.

2—El fiador había exhibido algunos títulos de propiedad y mencionado otros existentes en oficinas públicas. Se trataba de garantizar solo una pequeña suma. Esta resolución se dictó por mayoría, habiendo la minoría de la Cámara opinado, que el único caso en que la suficiencia de la

FIA—FIL

que puede apreciar el abono del fiador propuesto—Jur. Civ., tom. 1, pág. 166, Ser. 2ª.

3. Fianza.—Que proponga el acreedor para percibir el crédito, el Juez es el único que tiene jurisdicción para aceptarla ó rechazarla—Jur. Civ., tom. 8, pág. 360, Ser. 1ª.

4. Fianza.—El auto que acepta la presentada por el ejecutante para percibir el capital en el juicio ejecutivo es inapelable—Jur. Civ., tom. 3, pág. 526, Ser. 2ª.

5. Fianza.—Prescrita la obligación principal, no subsiste la que sobre ella se hubiese dado—Jur. Com., tom. 6, pág. 328, Ser. 1ª.

6. Fianza.—Sobre un valor determinado y *algo más* no puede racionalmente estenderse á más del duplo de lo determinado—Jur. Com., tom. 6, pág. 564, Ser. 1ª.

Fianza.—Véase: *Arraigo*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 30—*Fallido*, núms. 3 y 5—*Fiador*, núm. 7.

Filiación adulterina.—Véase: *Hijo adulterino*, núm. 1.

1. Filiación legítima.—Solo puede justificarse por el ma-

fianza está librada al criterio del Juez, es cuando ha habido sentencia en juicio contradictorio.

3—El art. 501 del Cód. de Proc. establece que la fianza á que se refiere, podrá ser de cualquiera de las clases que reconoce el derecho con tal que baste á su objeto, y que las clasificará el Juez exclusivamente. Y sea cual fuere la responsabilidad que el inferior considere bastante á este efecto y la clasificación que de ella se haga, la Cámara no tiene jurisdicción para conocer de aquello que la ley atribuye exclusivamente al Juez de 1ª Instancia.

4—No es apelable según disposición del art. 505 del Cód. de Proc. Véase además la nota precedente.

5—Art. 621, Cód. de Com.

6 *Algo más*, no puede ser tanto como el todo definido en la obligación.

1—La filiación legítima la produce originariamente el matrimonio. No existiendo matrimonio, ninguna importancia tiene la afirmación de los padres que atribuyen legitimidad á sus hijos, porque la ley no dice que sean legítimos, los que aquellos nombren como tales, sino los que nacen de padre y madre casados. Este es el espíritu de las leyes 7ª, tít. 2º;

FIL

trrimonio de los padres, las afirmaciones de éstos que atribuyan legitimidad á sus hijos no forman prueba—Jur. Civ., tom. 6, pág. 486, Ser. 1^a.

2a. Filiación legítima—Puede probarse, á falta de partidas en los Registros parroquiales, por la posesión de estado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 1^a.

1. Filiación natural—Durante la vida del padre puede ser demostrada por todos los medios de prueba que se admiten para probar los hechos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 331, Ser. 1^a.

2b. Filiación natural—Después de la muerte del padre,

1^a, tít. 13, Part. 4^a; argumento de las 11 y 12 de Toro, y arts. 240 y siguientes del Cód. Civ. Tanto la antigua como la nueva legislación, y las leyes canónicas, prescriben que el matrimonio y la legitimidad de la prole que de él procede, se prueben con los asientos parroquiales ó con los asientos creados al efecto—Ley 25, tít. 13, lib. 1^o, R. de Indias; Real orden de 21 de Marzo de 1749 que es la nota á la ley 10, tít. 22, lib. 7, Nov. Rec. y arts. 79, 80, 86, 179, 263 Cód. Civ.—La partida de bautismo hace plena fe en cuanto al sacramento y al nacimiento y puede hacerlo igualmente respecto de la filiación legítima, si la confiesan los padres en aquella y no es contradicha. El matrimonio, y los bautismos de los hijos legítimos que nacen de él, son hechos que deben probarse con los asientos respectivos, con fechas fehacientes, con atestaciones irrecusables, cuando por ellos se va á fijar para siempre el estado civil. En la ausencia completa de tales comprobantes debe recurrirse á los medios supletorios establecidos por la ley.

2a—El art. 263 del Cód. Civ. supone el caso de los hijos legítimos que deben comprobar su filiación legítima, y adopta dos sistemas: el de los registros parroquiales, ó el de la posesión de estado, disyuntivamente, equiparando el uno al otro: pero la nota del art. 325 da más importancia á la posesión de estado que á los asientos parroquiales. Por lo demás el nacimiento de las personas con las circunstancias de nombre, apellido, maternidad y paternidad, debe probarse en la forma proscrita por los arts. 80 á 86 del Cód. Civ., menos en los casos que no haya Registro público, ó que á pesar de haberlo, no haya asientos en él, ó que los asientos no se hallen en debida forma.

1—Art. 325 del Cód. Civ. Véase Inst., tom. 1^o, Verb. Filiación natural, núm. 1218 y nota.

2b—Nada hay mas incierto en la jurisprudencia argentina que las cues-



FIL

solo puede fundarse en el reconocimiento expreso hecho en vida—Jur. Civ., tom. 1, pág. 227, Ser. 2ª.

3. Filiación natural—Para probarla después de la muer-

tes relativas á la filiación natural. La prueba de la posesión de estado, exigida por la ley, para comprobar la filiación natural después de muerto el padre, se halla tan limitada y restringida en la práctica, al extremo que hace ilusorios los principios sentados por el legislador al tratar esta cuestión que de tan vital interés es para la sociedad. En el caso ocuriente se rechazó la acción de filiación, porque el actor no había comprobado los tres elementos que deben existir como garantía social y de satisfacción para la filiación en favor de la paternidad: Que la jurisprudencia, apoyada en la doctrina, ha establecido que los hechos constitutivos de la posesión de estado se determinan por estos tres caracteres: *Nomen—Tractatus—Fama*. *Nomen*: es necesario que el hijo haya llevado siempre el apellido de aquellos á quienes pretende pertenecer, pues es por la transmisión del nombre que se perpetúa la familia y se revelan sobre todo las cuestiones de paternidad y de filiación. *Tractatus*: es necesario que aquellos de quien el hijo se pretende nacido, lo hayan tratado efectivamente como su hijo, que lo hayan criado, educado ó establecido como tal: si la edad del hijo lo ha permitido, que ellos hayan llenado, en una palabra, pública y constantemente con aquél, los deberes de tal: *Fama*: Es necesario que lo haya presentado siempre como su hijo, á su familia, á sus amigos, á sus relaciones, y que la sociedad entera lo haya siempre reconocido y considerado como tal.» Esto es pretender llevar la teoría contraria al espíritu de nuestro Código á un extremo que el Codificador ha estado lejos de exigir. La doctrina francesa que es mucho más exigente que la nuestra en materia de filiación natural, no establece la necesidad de la concurrencia de estos tres elementos para comprobar la posesión de estado. El art. 231 del Cód. Napoleón, dice que la posesión de estado se establece por una reunión suficiente de hechos y circunstancias que indiquen con claridad la relación de parentesco entre una persona y la familia á la cual pretende pertenecer, y mas adelante agrega: «los principales de esos hechos son *nomen, fama y tractatus*. Marcadé y Pont, aplicando este artículo en el tom. 2, dicen: «La ley como ella misma lo establece, no señala en este artículo sino los hechos principales de la posesión de estado: el hijo puede ofrecer otros á más de los indicados en el art. 231». Se ve, por lo espuesto, que el fallo que anotamos, ha ido más allá de la ley francesa, restringiendo de una manera arbitraria la prescripción legal, pues exige la concurrencia de hechos que la misma ley francesa no exige. Véase: Inst., tom. 1º, Verb. *Poseción de estado* núm. 2066 y nota: *Filiación natural*, núm. 1221 y nota.

3—Comprobar estos extremos, importa completar la posesión de estado,

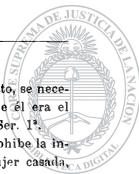
FIL

te del causante, no basta justificar el concubinato, se necesita también probar la confesión personal de que él era el autor del embarazo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 1^a.

4. Filiación natural—La disposición que prohíbe la indagación cuando el hijo se atribuye á una mujer casada, no tiene aplicación, cuando ésta reconociéndose madre gestiona los derechos del menor—Jur. Civ., tom. 9, pág. 144, Ser. 1^a.

único medio de prueba de la filiación que la ley admite después de la muerte del padre. Véase el tom. 1^o de la Inst. Verb. Filiación natural, núm. 1224 y nota.

4—Con el consentimiento del esposo, porque la prohibición establecida por la ley es en beneficio tanto del esposo como de la esposa. Es regla general que los hijos tienen derecho á pedir su reconocimiento—art. 325, Cód. Civ.—Sin embargo, el art. 326 prohíbe la indagación cuando ella tiene por objeto atribuir el hijo á una mujer casada. La indagación en este caso, constituye la investigación que se hace sobre hechos ocultos referentes á otra persona que puede ser perjudicada por ella. La prohibición de la indagación ha sido establecida y prevista por la ley en favor de la mujer casada y de su esposo: es un privilegio acordado á ambos con el fin de evitar la perturbación de la paz del matrimonio, del hogar doméstico y el desorden en la familia. Si ambos renuncian á este privilegio que les es personal, nadie puede ejercer su personería oponiendo excepciones que solo ellos pueden alegar—arts. 192 y 196 del Cód. Civ. El art. 326 prohíbe á terceros, incluyendo al hijo natural, la indagación de la maternidad, pero no excluye la confesión y el reconocimiento que la madre haga de él, ni menos prohíbe al esposo autorizarla para ejercer esta facultad.—Arts. 325 y 326.—Si no hay escándalo cuando el art. 325 autoriza al hijo á pedir su reconocimiento, menos lo hay cuando la misma madre, renunciando al derecho que le acuerda el art. 326, promueve el juicio para que el padre reconozca al hijo natural. En este caso es de estricta aplicación el art. 21. El orden público y las buenas costumbres no se comprometen porque una madre reconozca á un hijo con la venia de su esposo, pues en esto no existe otra cosa sino el cumplimiento de un deber. La regla establecida por el art. 53, de que «lo que no está expresamente prohibido está permitido» concuerda con el precepto constitucional, de que nadie debe ser privado de hacer lo que la ley no prohíbe—art. 19.—No hay ley que prohíba á la mujer casada el reconocimiento espontáneo de un hijo natural, ni ley que prohíba al esposo acordarle su venia con este objeto. Los arts. 342, 343 y 344 corroboran esta doctrina.



FIL—FIR

5. Filiación natural—La negación de toda paternidad por medio de testamento público, solo puede ser destruida por la prueba plena y concluyente de la posesión de estado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 131, Ser. 2ª.

6. Filiación natural—Durante la vida del padre á quien se imputa la paternidad puede justificarse por todos los medios de prueba que se admiten para probar los hechos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 153, Ser. 2ª.

Filiación natural—Véase: *Prueba*, núm. 1.

Finca—Véase: *Bienes*, núm. 2—*Error*, núm. 1.

Finca capellanía—Véase: *Capellanía*, núm. 1.

Finca hipotecada—Véase: *Acreedor*, núm. 1.

1. Firma—Su reconocimiento por testigos legos que no han presenciado el acto, no es prueba bastante de su autenticidad—Jur. Civ., tom. 2, pág. 587, Ser. 2ª.

2. Firma—No procede su reconocimiento, reservándose

5—Véase nota número 2. Si después de muerto el padre la ley exige la prueba de la posesión de estado que importa el reconocimiento notorio de la filiación hecha en vida y deducido de un conjunto, de una reunión de actos bastantes numerosos y graves que revelan las relaciones de filiación y de parentesco, con cuanta más razón no se ha de exigir la misma prueba cuando el presunto padre declara formalmente en su testamento que no deja sucesión natural.

6—Art. 325 Cód. Civil.

1—Si por medio de testigos, en la forma ordinaria de la prueba testimonial, pudiera constatarse la autenticidad de la firma de un documento que debe servir de principio de prueba escrita y cuya existencia es necesaria para la prueba testimonial, se incurriría en el vicio de dar por probado lo que debe probarse y quedaría fácilmente burlada la previsión del legislador que ha encerrado la prueba testimonial dentro de justos y estrechos límites. El Cód. de Proc. en su capítulo «De la prueba instrumental», determina con precisión los requisitos indispensables para que haya de tenerse como auténtico en juicio el documento atribuido á una persona que es negado ó que no siendo propio se declara no conocer la firma atribuida á otra persona. No llenándose en la prueba estos requisitos, se tendrá por no comprobada la autenticidad de la firma.

2—No se encuentra esta diligencia entre los comprendidos en el art. 67 del Cód. de Proc.



FIR—FIS

la deducción de acciones, según fuese el resultado de dicha diligencia—Jur. Civ., tom. 9, pág. 191, Ser. 1ª.

3. Firma—Negada la de un pagaré, no es necesaria la prueba de su veracidad siempre que por otros medios resulte justificada la obligación—Jur. Com., tom. 6, pág. 260, Ser. 1ª.

4. Firma—Por poder, si no resultase claramente á nombre de quien se firmó la obligación, el ejecutante debe justificar que el firmante era apoderado únicamente de la persona contra quien dirige su acción—Jur. Com., tom. 6, pág. 273, Ser. 1ª.

Firma—Véase: *Reconocimiento de firma*, núm. 2—*False-dad*, núm. 3—*Matrimonios*, núm. 2—*Documento privado*, núm. 1.

Firmas—Véase: *Cotejo de firmas*, núm. 1.

Firmante—Véase: *Firma*, núm. 4.

Firmante á ruego—Véase: *Aceptante*, núm. 2.

Fiscal—Véase: *Sellos*, núm. 1—*Declaratoria de herederos*, núm. 1.

1. Fiscal de las Cámaras—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 23, Ser. 1ª.

1. Fiscal eclesiástico—No se encuentra comprendido en

3—En el caso presente se negó la firma del documento y al absolver posiciones se confesó la deuda pero alegando su pago. Este debe comprobarlo el que lo alega, pues de lo contrario la obligación subsiste. Es evidente que confesada la deuda y no comprobado el pago, no hay necesidad de comprobar la autenticidad de la firma, de donde que esta diligencia daría por último resultado la comprobación del crédito, prueba que sería redundante por estar ya comprobada por la confesión.

4—En el caso ocurreniente el documento se firmó por poder, pero sin decir por poder de quién, en cuyo caso es aplicable el art. 1929 del Cód. Civ., de acuerdo con el art. 191 del Cód. de Com.

1—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos, fundándose en que el Fiscal Eclesiástico es un funcionario que cuando interviene en un juicio, no es como parte directa, sino más bien como consejero para la más corriente aplicación del derecho, no siéndole por consiguiente



FON—FRU

las disposiciones del Código de Procedimientos sobre términos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 171, Ser. 2ª.

Fondos—Véase: *Herederos*, núm. 3.

Formalidades canónicas—Véase: *Nulidad*, núm. 6.

Formas sustanciales—Véase: *Nulidad*, núm. 20.

Fraude—Véase: *Práctica comercial*, núm. 1—*Asegurador*, núm. 1—*Póliza*, núm. 1—*Plus petitio*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 29.

1. Frutos—De una finca capellánica, no son embargables, sino á los fines de su institución—Jur. Civ., tom. 1, pág. 169, Ser. 2ª.

2. Frutos—No puede ser condenado á su devolución, el poseedor que tenía derecho á una parte de lo poseído, mientras no se justifique que la porción reivindicada podía pro-

aplicable los principios generales sentados por la ley de Enjuiciamiento. La minoría sostuvo lo contrario diciendo, que siendo parte en el juicio el Fiscal Eclesiástico y no haciendo distinción alguna la ley entre los litigantes privilegiados y los comunes, deben ser considerados ambos comprendidos bajo el imperio del mismo precepto legal. Por lo demás, el fallo que nos ocupa, está de acuerdo con otro análogo resuelto también por mayoría de votos. Véase: *Asesores de menores*, núm. 2.

1—Se imposibilitaría el cumplimiento de los fines de su institución, mientras durase el juicio que motivó el embargo, privando al patrono que se halla en posesión, del ejercicio de su derecho como si la sentencia estuviese ejecutoriada.

2—Se trata de una acción reivindicatoria de una extensión de terreno en el que había una casa edificada. Se declara improcedente la acción en la parte ocupada por el edificio y accesorios y procedente en lo demás: se le exime al poseedor de la obligación de pagar los frutos de la parte reivindicada, 1º: porque los antecedentes de autos, lejos de demostrar mala fe de parte del poseedor, demuestra, por el contrario, buena fe, y 2º: porque no constató que todo el terreno lo ocupase el reivindicando, ni qué parte, siendo la posesión á diverso título, ni que en la época de la sentencia tuviese la antigua extensión, ni que hubiese sido ocupado en la nueva en su totalidad, ni que estuviera alguna vez arrendado, ni que finalmente hubiese producido beneficio independientemente de la casa edificada por el ocupante.



**FRU—FUN**

ducirlos, aún separada de la parte que reconoció el derecho del poseedor—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

Frutos—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 6—*Reivindicación*, núm. 1—*Reivindicante*, núm. 1.

Frutos del país—Véase: *Acto comercial*, núm. 1.

Frutos percibidos—Véase: *Demanda*, núm. 5.

Fuero mercantil—Véase: *Comerciante*, núm. 3.

Fuerza ejecutiva—Véase: *Escepción de falsedad*, núm. 3.

Fuerza personal—Véase: *Legítima defensa*, núm. 1.

Fundaciones piadosas—Véase: *Censos capellánicos*, número 1.

1. Fundadores y administradores—De sociedades anónimas no autorizadas, la disposición del Cód. de Comercio que les obliga al pago de las deudas sociales, no puede ser invocada por los mismos socios y solo es aplicable á los terceros que con ellas hubiesen contratado—Jur. Com., tom. 5, pág. 460, Ser. 1ª.

Funeral—Véase: *Gastos de entierro*, núm. 1.

1—No puede responsabilizarse á unos socios y á otros no: todos los que componen una sociedad anónima no autorizada incurren en responsabilidad por el hecho de fundar una sociedad sin los requisitos legales. La disposición del art. 424 es en favor de los terceros: la responsabilidad que se establece se funda en la violación de la ley, de la que todos los socios son culpables.



1. Gananciales—Cuando lo son todos los bienes de la sucesión, la esposa del segundo matrimonio, heredera en concurrencia con los hijos del primero y segundo, solo tiene derecho á la mitad de los bienes, sin que pueda pretender mayor cantidad, aun cuando el causante la haya designado como heredera—Jur. Civ., tom. 7, pág. 562, Ser. 1ª.

Gananciales—Véase: *Bienes*, núm. 3.

1—El caso práctico es el siguiente: El causante dejó un hijo del primer matrimonio, una viuda y dos hijos del segundo y únicamente bienes gananciales de éste, habiendo nombrado por sus únicos y universales herederos á la viuda é hijos referidos. ¿Puede en tales condiciones, pretender la viuda alguna ventaja que no tuviera por la ley? De la institución en los términos generales en que fué hecha nada se infiere ni podría inferirse en ningún caso contra la legítima. ¿Qué significa, pues, esa institución? Remitirse á lo dispuesto por la ley. ¿Los gananciales se dividirían como bienes sociales ó como herencia; se darán gananciales por vía de herencia ó al contrario? Todo esto no es de resolución necesaria en el presente caso, pues, ni la equidad ni el derecho han sido alterados por el testamento. Disuelta la sociedad conyugal por muerte de uno de los cónyuges, se procederá al inventario y *división* de bienes como se dispone en el libro 4º de este Código, para la división de las herencias dice el art. 1313. La redacción del art. 3576 es hoy la siguiente: «En todos los casos en que el viudo ó la viuda es llamado á la sucesión en concurrencia con ascendientes ó descendientes, *no tendrá parte alguna* en la división de los bienes que correspondiesen al cónyuge premuerto, á título de gananciales del matrimonio con el referido viudo ó viuda. Debe observarse que en este artículo resultan suprimidas las palabras «que se hubiesen dividido con el cónyuge sobreviviente», que en el art primitivo ocasionaban dudas.

GAN—GAS

1a. Ganzúa.—El hecho de abrir un mueble con llave igual habida ocasionalmente, no se encuentra comprendido en lo dispuesto sobre uso de ganzúa ó llave falsa —Jur. Crim., tom. 6, pág. 266, Ser. 1ª.

1b. Garantía hipotecaria.—Prestada á un pagaré no puede ser ejecutada como hipoteca directa, debe ejecutarse el pagaré como obligación principal—Jur. Civ., tom. 8, pág. 69, Ser. 1ª.

1c. Gastos.—Hechos por los herederos en interés común

1a.—Esta infracción debe calificarse de hurto simple, con arreglo al art. 321 del Cód. Penal.

1b.—El primer punto del sumario está de acuerdo con lo resuelto por la Cámara, no así el segundo. Con el desenvolvimiento asombroso del valor de la tierra, se han verificado ventas á plazos, hipotecando la misma propiedad vendida como garantía del pago del precio no abonado. Con el fin de que el vendedor pueda crearse de fondos en seguida sin desembolso de dinero efectivo, se ha dado en otorgar pagarés hipotecarios por el importe del gravamen, de manera á poderlos descontar en plaza. Un acreedor hipotecario en estas condiciones se presentó ejecutando una hipoteca á cuyo efecto presentó el título del gravamen, mas no el pagaré, alegando que éste se le había estraviado. Se resolvió que el documento por sí solo no traía aparejada ejecución: porque si por la forma la escritura pública y la hipoteca son títulos que traen aparejada ejecución, no la tienen cuando la obligación se halla sometida á determinadas condiciones cuyo cumplimiento no aparece constatado en la escritura misma. Cuando en una obligación hipotecaria se dá un pagaré por el importe de esa misma obligación, importa establecer una forma especial para su pago, que no es la ejecución con la sola escritura. Si se alega pérdida ó extravío del pagaré, es este un hecho extraño á la escritura que necesita comprobación y en cuyo caso el procedimiento á observarse es el establecido para las letras estraviadas. Si se autorizara la ejecución podría suceder que el deudor hipotecario pagara dos veces: una al pagar la hipoteca y otra al presentársele el pagaré por un tercero que lo hubiere descontado. Tendría el deudor que pagar igualmente este último sin perjuicio de repetir su reembolso, es cierto, pero ¿qué interés hay en colocar á un deudor en condiciones tan onerosas? De aquí se deduce la inexactitud del sumario en su segunda parte.

1c.—En el convenio se había consignado la cláusula «salvo las costas que por la ley sean comunes», aunque no se hubiese consignado esta disposición, siempre sería justa la resolución, porque los procedimientos pueden



GAS

de la testamentaria deben ser pagados de la masa, aun cuando se convenga en que cada heredero debe pagar los que haya producido—Jur. Civ., tom. 1, pág. 10, Ser. 2ª.

2. Gastos—Aún cuando los herederos, al practicar la liquidación, se los hayan repartido proporcionalmente, los acreedores no están obligados á dividir la ejecución—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Ser. 1ª.

3. Gastos—Hechos sosteniendo la validez de un acto simulado, deben ser pagados por aquel en cuyo favor se había llevado á efecto ó sus herederos — Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 1ª.

4. Gastos—Necesarios, que el mandatario haga para el cumplimiento del mandato, aunque reconocidos en general, deben ser justificados en detalle, y si no lo fueran el Juzgado debe fijar equitativamente una suma dentro la cual preste juramente estimatorio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2ª.

Gastos—Véase: *Obligado*, núm. 1—*Herederos*, núm. 1—*Albacea*, núm. 1—*Pago*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 8—*Honorarios*, núms. 21 y 22.

1. Gastos causídicos—En defensa del deudor, solo tienen privilegio preferente al acreedor hipotecario, cuando la defensa ha sido de oficio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 162, Ser. 2ª.

Gastos causídicos—Véase: *Cuenta particionaria*, núm. 1—*Condominio*, núm. 1.

considerarse, en este caso, como una gestión de negocios que ha beneficiado á su dueño, el que puede ser obligado á su abono de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 2298 y 2302 del Cód. Civ. Véase Inst., tom. 1º, Verb. *Honorarios*, núm. 1354 y nota.

2—La regulación de los honorarios se hizo en una sola suma, es deuda de la sucesión no de cada uno de los herederos en particular. Si los herederos dividen esta deuda común, esto en nada afecta los derechos del acreedor ni la eficacia de su título.

1—Art. 528, Cód. de Proc.



GAS

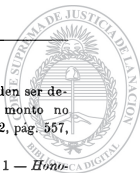
1a. Gastos de entierro—Y funerales, solo pueden ser desaprobados justificando que no se hicieron; su monto no puede ser materia de cuestión—Jur. Civ., tom. 2, pág. 557, Ser. 2ª.

Gastos de justicia—Véase: *Prelación*, núm. 1 — *Honorarios*, núm. 2.

1b. Gastos del albacea—Reconocidos en la cuenta particionaria, se prescriben como crédito personal, aun cuando se haya adjudicado su importe en una finca—Jur. Civ., tom. 1, pág. 569, Ser. 2ª.

1a—Este sumario no está de acuerdo con el fallo á que corresponde; por el contrario, sus fundamentos dan lugar á sentar un principio opuesto á él. Los considerandos del acuerdo están concebidos en los siguientes términos: «Se objetan otras partidas por ser exageradas, como ser la señalada bajo el núm. 16, en la que se cobra 30 pesos por soldar el cajón. Es de advertir que dicha operación ha sido efectuada en el campo á donde probablemente ha habido que llevar al obrero, ó que si él vivía en Moreno, casi seguramente sería el único que tuviera tal industria lo que impedía el recurrir á otro. Pero sobre todo hay que tener en consideración que en esos angustiosos momentos, nadie tiene el espíritu sereno para discutir el precio de servicios absolutamente necesarios, soportando como en este caso cuentas exageradas, pero cuyo abono hay necesidad de cumplir». Mas adelante al tratar de la cuenta del funeral dice: «En absoluto, podría ser atendible esta oposición pero en el caso *sub-judice* no lo es». Es evidente el error que contiene el sumario que se anota.

1b—Este caso está regido por la legislación antigua, bajo cuyo imperio se han producido los hechos que lo motivan. El albacea es acreedor de la testamentaria en que interviene en ese carácter por el importe de su comisión y gastos. Es un crédito que no grava directamente los bienes, aunque en concurrencia con otros acreedores tenga el privilegio que la ley acuerda á todos los gastos de justicia. Para que este carácter pudiera desnaturalizarse, habría sido necesario que de una manera expresa y guardándose las formas legales se le hubiera adjudicado en pago algún bien ó la parte de algún bien raíz que bastase á cubrir el importe de su crédito. En tal caso podría sostenerse, que existiendo la adjudicación en pago, el acreedor había adquirido el dominio de la propiedad adjudicada, si la adjudicación abrazaba la totalidad de su valor, ó sólo el condominio, si ella se hubiese hecho en concurrencia con algún



GAS

1a. Gastos de la ejecución—En caso de concurso especial tiene privilegio sobre el primer acreedor hipotecario aun cuando hayan sido causados por el segundo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 516, Ser. 1ª.

1b. Gastos extraordinarios—Hechos por los martilleros

otro. Pero para que esto pudiera existir, era indispensable que la adjudicación se hubiese hecho en legal forma y en condiciones de transmitir el dominio. La forma de adjudicación en el antiguo como en el moderno derecho, tratándose de hijuelas, en el juicio testamentario, es el auto judicial que la aprueba. No es posible admitir, legalmente hablando, que haya adjudicación en pago, sin el auto que así lo declare. Podrá existir un proyecto de adjudicación, pero el acto que lo habría perfeccionado es la aprobación judicial. Pero esto mismo no bastaría para que el con. dominio se produjera, así como no basta el acuerdo del comprador y vendedor para que el contrato de compraventa se perfeccione, transfiriendo la propiedad de la cosa que le sirve de objeto: es necesario la tradición de la cosa, que el adquirente haya entrado en posesión de ella. La cuenta particionaria, en el caso *sub-judice*, había sido hecha por el mismo albacea sin intervención de los herederos. «Sería cosa sin razón, é contra derecho, de auer ome poderio de fazer á otros sus deudores por sus escrituras quando el se quissiese» dice la ley 121, tít. 18, Part. 3ª. El condominio se constituye por contrato, por actos de última voluntad, ó en los casos que la ley determina: Leyes 27, tít. 2; 1, tít. 28, Part. 3ª; y 10, tít. 33, Part. 6ª. El albacea es un simple acreedor con privilegio: para demostrarlo basta tener presente que si la finca en que se le adjudica sus honorarios, no alcanzara á cubrirlos, siempre le quedaría el derecho á cobrarlos íntegros de la masa testamentaria. El mayor ó menor valor afecta á los herederos, no á los acreedores que pueden ejercer derechos conservatorios ó de vigilancia, pero no los de dominio que corresponden á aquéllos. Los gastos hechos por el albacea y su comisión deben salir de la masa testamentaria, sin que tenga derecho de designar los bienes como condómino. Así se deduce de la ley 46, tít. 32, Lib. 2º, R. de Indias. Así también lo establece la doctrina de los autores: García Goyena, Cód. Civ. Esp., tom. 2, pág. 163; Acevedo, Proyecto de un Cód. Civ., pág. 287. De aquí se desprende que el crédito es personal y como tal prescriptible á los 20 años, como lo establece la ley 63 de Toro.

1a—Art. 3937 del Cód. Civ.

1b—En el caso ocurrente el tutor de los menores prestó igualmente su consentimiento, solo se opuso el Ministerio de Menores. Si los gastos hechos redundan en beneficio de los menores, no sería justo que éstos se aprovechen con perjuicio de tercero, como sucedería si se declarase solo á cargo de unos los gastos originados.



GAS—GRA

con la conformidad de los interesados mayores, deben ser abonados por la masa por cuanto se supone que han beneficiado también á los menores—Jur. Civ., tom. 3, pág. 406, Ser. 2ª.

Gastos menores—Véase: *Administrador*, núm. 3.

1a. Gastos de negocios—Solo tiénese derecho para cobrar los gastos que debidamente justificados hayan favorecido al deudor ó sus herederos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 459, Ser. 2ª.

Girante—Véase: *Aceptante*, núms. 1, 4 y 5.

Grado—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1.

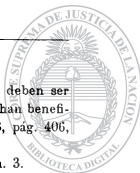
1b. Graduación de créditos—Debe rechazarse todo reclamo presentado después de vencido el término que la ley fija para objetarla—Jur. Civ., tom. 3, pág. 560, Ser. 2ª.

Gravamen irreparable—Véase: *Costas*, núm. 12.

Gravámenes—Véase: *Chancelación*, núm. 1.

1a—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2306 del Cód. Civ. En este caso el gestor queda subrogado en los derechos del acreedor con arreglo á los arts. 727, 728 y nota, y 768.

1b—El art. 758 del Cód. de Com. señala el término dentro del cual puede objetarse la graduación de créditos, y el art. 759 dispone terminantemente que «no mediando oposición en el término señalado, el estado de graduación será definitivamente cerrado por el Juez, y no podrá ser objeto de oposición alguna ulterior».





1a. **Haber hereditario**—Adjudicado en una finca en condominio, puede aumentar ó disminuir según el precio que se obtenga por el inmueble al realizar su venta para hacer cesar el condominio—Jur. Civ., tom. 1, pág. 372, Ser. 2ª

Haber paterno—Véase: *Pagos*, núm. 1.

Habitación—Véase: *Contrato*, núm. 14.

Habilitado—Véase: *Calificación*, núm. 1.

1. **Hecho**—En que se funda la demanda, su confesión hace procedente la condenación del demandado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 472, Ser. 1ª.

Hecho determinado — Véase: *Obligación de hacer*, número 1.

Hecho futuro—Véase: *Obligación*, núm. 7.

Hecho ilícito—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 1.

Hecho incierto—Véase: *Obligación*, núm. 6.

Hecho principal—Véase: *Acusado*, núm. 1--*Obligación*, núm. 7.

1b. **Hechos**—Cuando los de la demanda, no resultan plenamente probados, debe absolverse al demandado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 204, Ser. 2ª.

1a—La suma en que adjudica la parte del inmueble desaparece para dar lugar á la constitución de un derecho de propiedad sobre la cosa adjudicada: como propietario, aumenta ó disminuye su monto en la proporción de su parte. Los aumentos ó disminuciones que llegan á sufrir son siempre por cuenta de sus dueños.

1b—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª.

HEC—HER

2. Hechos—No negados en la contestación á la demanda deben tenerse por confesados—Jur. Com., tom. 5, pág. 77, Ser. 1ª.

3. Hechos—Siempre que existan algunos sobre los cuales las partes no estén conformes, el Juzgado debe recibir la causa á prueba—Jur. Civ., tom. 1, pág. 306, Ser. 2ª.

4. Hechos—Nuevos, alegados por el actor al evacuar el traslado de la reconvencción, no pueden ser materia de sustanciación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 222, Ser. 1ª.

Hechos—Véase: *Reconocimiento condicional*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 2—*Demandado*, núm. 3.

Hechos alegados—Véase: *Puro derecho*, núm. 1.

Hechos casuales—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

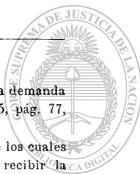
Heredero—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 2—*Acción de petición de herencia*, núm. 1—*Abogado*, núm. 1.

Heredero ab-intestato—Véase: *Posesión*, núm. 4.

2—Art. 100, inc. 1º, Cód. de Proc.

3—Arts. 103 y 104 Cód. Civ. Véase: *Inst.*, tom. 1, Verb. *Prueba*, núm. 2236.

4—Al decir que no pueden ser materia de sustanciación, ha querido expresar que no pueden ser materia de un nuevo traslado al contrademandado. El art. 103 del Cód. de Proc. establece que el pleito queda concluso para prueba con el escrito de contestación á la demanda ó á la reconvencción en su caso, si la cuestión fuere de hecho ó mista. El Cód. de Proc. ha previsto el caso en que se aleguen hechos nuevos en el pleito trabado por demanda y contestación, estableciendo el trámite á seguirse en tales casos, pero se refiere á hechos que ocurriesen ó llegasen al conocimiento de las partes después de la contestación,—art. 109—cuando ya el actor en su escrito de demanda y el demandado en su escrito de contestación han espuesto los hechos que han creído conducentes á fundar sus derechos. En el presente caso se trató de hechos alegados al contestar la contra-demanda, que no pueden ser considerados sino como contestación á la reconvencción, de la que no debe darse traslado aunque se aleguen otros hechos, pues no hay disposición alguna de la ley que lo prescriba.



HER

1. Herederos—Cuando varios de ellos concurren á un juicio testamentario gestionando un interés propio, los gastos de representación y defensa no deben gravar á la masa, cada heredero debe abonar los que haya causado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 524, Ser. 1ª.

2. Herederos—Que pretendan invalidar actos del causante deben justificar previamente el carácter que invocan—Jur. Civ., tom. 2, pág. 359, Ser. 2ª.

1—En esta materia no pueden establecerse reglas absolutas. Cuando varios herederos concurren á un juicio testamentario, no sería justo que la masa fuese gravada con los gastos de representación y del abogado de cada uno de ellos. Cada heredero gestiona un interés propio, y si al hacerlo consulta también el interés de los demás, por el hecho de solicitar diligencias pertinentes, recibe á su vez igual beneficio de los otros herederos que intervienen del mismo modo en el juicio, estableciéndose así una compensación de servicios de que no hay razón para que se lleven cuenta corriente los unos á los otros. Distinto sería el caso en que uno solo de los herederos interviniese por todos en el juicio, aunque no tuviese poderes en forma de ellos, pues entonces se trataría de procedimientos que pueden considerarse como una gestión de negocios conducida útilmente, en que el dueño ha sido obligado por los gastos hechos en ella, conforme á lo dispuesto en los arts. 2298 y 2302 del Cód. Civ. Cuando los gastos hechos por un heredero, han aumentado la masa de bienes á dividir ó han procurado una ventaja general: cuando debido á esfuerzos exclusivos de ese heredero, los demás que permanecieron inactivos, van á participar de los aumentos y ventajas obtenidas, dichos gastos deben ser cubiertos proporcionalmente por todos. Pero cuando ellos han sido causados en beneficio individual del heredero, en virtud del interés que representaba en el juicio, entonces deben cargarse á su sola cuenta. El Juez ó Tribunal, en los casos ocurrentes han de determinar en justicia y equidad la naturaleza del gasto.

2—El art. 3411 del Cód. Civ. en su última parte, requiere que se acredite la muerte del autor de la sucesión y el derecho á la herencia, cuando los herederos legítimos ascendientes ó descendientes estuviesen fuera de la República ó de la Provincia donde se hallen los bienes y deben pedirle al Juez del territorio. De modo que para ejercer cualquier acto que importe atribuirse derechos á la herencia deben comprobar su carácter hereditario, mucho mas cuando se pretende tener derecho á suceder en los bienes de un pariente colateral, como se trataba en el caso *sub-judice*—art. 3412, *ibid*.

HER

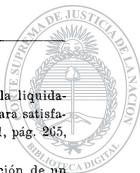
3. Herederos—No pueden disponer, antes de la liquidación, de los fondos pertenecientes á la sucesión, para satisfacer sus obligaciones particulares—Jur. Civ., tom. 1, pág. 265, Ser. 2ª.

4. Herederos—Solo pueden probar la simulación de un instrumento público por los mismos medios y en las mismas condiciones que debería usar el tercero—Jur. Civ., tom. 3, pág. 585, Ser. 2ª.

Herederos—Véase: *Gastos*, núm. 1—*Posesión*, núm. 5—*Honorarios*, núms. 10 y 20—*Acción reivindicatoria*, núm. 2—*Poseedor*, núm. 3—*Bienes*, núms. 1 y 3—*Auto de quiebra*, núm. 1—*Cónsules extranjeros*, núm. 1—*Partición*, núm. 2—*Parientes colaterales*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 29 y 30—*Reivindicación*, núm. 4—*Petición de herencia*, núm. 2—*Venta privada*, núm. 3—*Administración*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 4—*Prueba testimonial*, núm. 3—*Declaratoria de*

3—Mientras no se haga la partición, el haber hereditario corresponde á la masa sin que ninguno de los herederos pueda decir ni establecer la parte que le corresponde, la que se establece recién cuando se le adjudica su parte por la hijuela: hasta este momento el haber hereditario es de la masa no es del heredero. Véase: Inst., tom. 1, Verb. Heredero, número 1300.

4—La prueba privilegiada ha sido incorporada á nuestra legislación: Leyes 8, tít. 14; 41, tít. 16, Part. 3ª; 40, tít. 11, Part. 5ª; glosa 6, tít. 9; 3 y 4, tít. 7, Lib. 10; 3, tít. 8, Lib. 10, Nov. Rec., y arts. 1190 y 1191, Cód. Civ. Sin embargo debe no olvidarse que el dicho de los testigos no puede referirse á lo manifestado por la misma parte que alega la simulación, pues estas declaraciones no reúnen los requisitos exigidos por las leyes. Ley 18, tít. 18, Part. 3ª. Si esto no fuese así no habría derecho que no pudiese anularse ó invalidarse. La enagenación de una propiedad quedaría siempre sujeta á la voluntad del enagenante. Al actor incumbe la prueba de los hechos afirmados en la demanda, con arreglo á las leyes 39, tít. 2; 2, tít. 14, Part. 3ª; y 14, tít. 18, lib. 2, Rec. Cast., las que en ningún caso admiten como medio probatorio las aseveraciones que emanan del mismo interesado, sino que ellas deben proceder de personas estrañas y mayores de toda escepción. Los arts. 955 y siguientes son los que rigen el caso.



HER

herederos, núm. 1—*Acciones*, núm. 2—*Mandatario*, núm. 6—*Partición*, núm. 3—*Nietos adúlterinos*, núm. 1—*Gastos*, núms. 2 y 3—*Apelantes*, núm. 1.

Herederos colaterales—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1.

Herederos forzosos—Véase: *Dominio*, núm. 4.

Herederos instituidos—Véase: *Nulidad*, núm. 5.

Herederos mayores—Véase: *Convenio*, núm. 2.

1a. **Herencia**—El remanente que resulte por el trascurso del tiempo entre la fecha del testamento y la del fallecimiento del causante, se rige por las disposiciones del *abintestato*, sin que los legatarios por cantidades determinadas, aunque formen el conjunto de la herencia, puedan exigir el acrecimiento de los legados—Jur. Civ., tom. 9, pág. 301, Ser. 1ª.

Herencia—Véase: *Transacción*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 1—*Acción de partición*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 3.

Herencia paterna—Véase: *Nulidad*, núms. 29 y 30.

1b. **Herencias trasversales**—La Ley Provincial de 1875 que fija un impuesto sobre ellas, repugna á la Constitución

1a—El derecho de acrecer solo corresponde á los herederos ó legatarios que son llamados conjuntamente á una misma cosa en el todo de ella—art. 3812, Cód. Civ.—los legatarios de cantidades separadas y distintas no son conjuntos, ni pueden alegar conjunción de aquella parte de bienes de que dispone el testador. Los legados se juzgan según el haber que constituye toda la fortuna del testador en la época en que se otorga el testamento.

1b—En una causa idéntica á ésta, la S. C. N. ha declarado que la ley de 26 de Setiembre de 1875 es repugnante á la Constitución Nacional, en cuanto altera y modifica lo dispuesto en el Cód. Civ. sobre sucesiones testamentarias creando bajo pretexto de una contribución ó impuesto en favor del Fisco Provincial, un verdadero derecho sucesorio, una legítima forzosa que el Cód. Civ. no ha autorizado. Véase F. S. C. N., tom. 14, pág. 647, Ser. 2ª. Esta grave y difícil cuestión fué resuelta por mayoría de votos en la S. C. N., como puede verse en el tomo citado: en su dis-



HER

Nacional y es por consiguiente inaplicable después de tal declaración hecha por la Corte Suprema de Justicia Nacional—Jur. Civ., tom. 9, pág. 76, Ser. 1^o.

2. Herencias transversales—A los efectos del impuesto de la ley de educación, los parientes colaterales por afinidad se encuentran en la misma categoría que los colaterales por consanguinidad—Jur. Civ., tom. 9, pág. 301, Ser. 1^o.

Herencias vacantes—Véase: *Posesión*, núm. 8.

1. Hermano legítimo — Este carácter resultante de la discusión han intervenido los magistrados mas notables de nuestros Tribunales. Tres de los vocales declararon la inconstitucionalidad de la ley, los otros dos y el Procurador General sostuvieron su constitucionalidad. La S. C. P. declaró que la ley era inconstitucional, llevándose entonces el asunto ante la S. C. N., circunstancias que demuestran que por lo menos era dudoso que las Provincias tengan la facultad de gravar con impuestos las herencias transversales. En el caso que nos ocupa resuelto por la Cámara votaron cuatro de sus miembros. El Dr. Pardo sostuvo que la ley es perfectamente constitucional, los Dres. Zavallía, Gonzalez y Bazán fueron de opinión contraria, quedando así consagrada la inconstitucionalidad de la ley. La discusión de esta cuestión ha sido luminosa y de ella ha resultado que la sana doctrina ha quedado consagrada formando jurisprudencia.

2—El art. 44 de la ley de educación común, dice: constituirán el tesoro común de las escuelas el 5 por ciento de toda sucesión entre colaterales, con escepción de hermanos. Aquí se habla en general de *toda sucesión* entre colaterales sin espresar que estos sean consanguíneos, en cuyo caso no hay razón para limitar á esta clase de parientes la disposición de la ley. No hay razón, 1^o: Porque la palabra colaterales, según se desprende del art. 263 del Cód. Civ., se aplica y sirve para designar tanto á los parientes por consanguinidad como por afinidad, desde que la ley no distingue, nada más correcto que tampoco distinga el Juez: *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. 2^o: Que si hubiese necesidad de fijar por medio de la interpretación el alcance que la ley ha querido dar á la palabra *colaterales*, sería más correcto ampliar la significación de ella, de modo que comprenda tanto á los parientes consanguíneos como á los afines, porque en caso de duda, tratándose de cosas favorables, es mas seguro ampliar su significación.

1—El parentesco está comprobado en una forma auténtica, forma á la que da entero crédito el art. 263 del Cód. Civ., y que constituye, un instrumento público. Si éste es argüido de falso, debe la comprobación hacerse con pruebas acabadas y concluyentes. La falsedad en este caso



HER—HIJ

respectiva partida de bautismo y reconocida además en escritura pública, no puede ser declarado falso por meras presunciones—Jur. Civ., tom. 8, pág. 410, Ser. 1ª.

1. Heridas—Cuando ellas son consecuencia del robo ya llevado á cabo, no puede calificarse el acto de robo con violencia, el reo debe ser castigado por el robo y separadamente por las heridas según su gravedad—Jur. Crim., tom. 6, pág. 276, Ser. 1ª.

Heridas—Véase: *Certificado médico*, núm. 1 — *Alevosía*, núm. 1.

1a. Herir—A dos personas distintas en una sola riña, se conceptúa como una sola acción—Jur. Crim., tom. 5, pág. 371, Ser. 1ª.

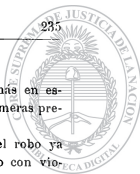
1. Hijo—De legítimo matrimonio, el término de dos meses que la ley fija al padre para el desconocimiento, es aplicable también á los terceros que se conceptúen con derecho á pedir judicialmente tal declaración—Jur. Civ., tom. 7, pág. 366, Ser. 1ª.

1b. Hijo adulterino—Su reconocimiento voluntario obliga a proporcionarle alimentos hasta la edad que el Código señala—Jur. Civ., tom. 9, pág. 365, Ser. 1ª.

no puede comprobarse por presunciones aunque ellas sean graves, precisas y concordantes. La ley interpretando la mente de la sociedad, ha establecido que sus miembros no sean perturbados antojadizamente en la posesión que tienen de su estado civil reconocido de una manera pública

la—Esta resolución fué dictada por mayoría de un voto: ella se funda en la última parte del art. 178 del Cód. Pen.—de 1877.—La minoría sostenía que no se trataba de delitos cometidos por una sola acción, sino por acciones distintas dirigidas contra dos personas: que esto está claramente explicado en las notas del proyecto de Cód. á los arts. 177 y 178 especialmente en la del último, cuando analiza el concurso real de varios delitos en la segunda y tercera hipótesis que formula. Es evidente que la opinión de la mayoría es la que consagra la buena doctrina y que la resolución de la mayoría está en abierta oposición con el sistema penal de nuestro Código.

1b — Art. 343, Cód. Civ.





HJ—HIP

1a. Hijo mayor—Es el curador legítimo de su hermano incapaz—Jur. Civ., tom. 8, pág. 73, Ser. 1ª.

1b. Hijo natural—La sentencia que dispone sea educado por un tercero con prescindencia de sus padres implica necesariamente que debe salir del poder de éstos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 312, Ser. 1ª.

Hijo natural—Véase: *Tutor especial*, núm. 4.

1c. Hijos—El padre en ejercicio de la patria potestad es el único que tiene derecho á tenerlo consigo con preferencia á la esposa, el Juez solo puede elegir en caso de divorcio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 370, Ser. 1ª.

2. Hijos—Si durante la separación de hecho los Tribunales han designado al padre para tenerlos en su poder, la esposa que después de la demanda de divorcio pretenda modificar esa sentencia, debe justificar que ella reúne condiciones más apropiadas y que la tenencia en poder del padre se ha convertido en perjudicial—Jur. Civ., tom. 7, pág. 406, Ser. 1ª.

3. Hijos—Los Jueces pueden confiar su educación al cuidado de un tercero siempre que existan cuestiones entre los esposos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 496, Ser. 1ª.

Hijos—Véase: *Esposos*, núm. 2.

1d. Hipoteca—Garantiza además del principal, los intere-

1a—Art. 477, Cód. Civ.

1b—El Juez usando de la facultad que le acuerda el art. 330 del Cód. Civ., ordenó que la educación del hijo quedara á cargo de un tercero, lo que implica ordenar que ella no sea confiada ni al padre ni á la madre, los que no pueden ser considerados como terceros, y para ello es indispensable que el niño sea entregado á ese tercero que ha de educarlo.

1c—Pueden alegarse asimismo razones de conveniencia para que los hijos sean confiados á la madre con preferencia al padre. En cuanto al fundamento del fallo, véase: los arts. 213 y 265 del Cód. Civ.; Inst. tom. 1º, verb. Hijo, núm. 1327 y nota.

3—Art. 330, Cód. Civ.

1d—El art. 3986 del Cód. Civ. colocado entre las disposiciones del título «De la preferencia de los créditos» dice espresamente: que la hipo-

HIP

ses de dos años y los que corran durante el juicio de ejecución—Jur. Civ., tom. 7, pág. 231. Ser. 1ª.

2. Hipoteca—El dendor solo está obligado á pagar las costas del juicio de ejecución de la hipoteca, los incidentes no se encuentran comprendidos en la disposición del Cód. Civ.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 596, Ser. 1ª. '

3. Hipoteca—Sobre los bienes propios de la esposa, el juez no puede conferir autorización á ésta para constituir la, aun cuando haya sido admitida la demanda de separación y privado el marido de administrarlos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 138, Ser. 1ª.

Hipoteca—Véase: *Chancelación*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 4—*Chancelación*, núm. 2—*Prelación*, núm. 1—*Intereses*, núm. 3—*Certificado*, núm. 1—*Escribano*, núm. 2—*Garantía hipotecaria*, núm. 1.

Hipoteca convencional—Véase: *Hipoteca tácita*, núm. 1.

Hipoteca especial—Véase: *Hipoteca tácita*, núms. 1 y 2.

teca garantiza á más del principal los intereses ó rentas debidos de dos años y los que corran durante el juicio de ejecución hasta el efectivo pago. Este artículo concuerda con el 3152. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Acreedor hipotecario*, núm. 75 y nota.

2—Siempre que los incidentes no sean originados por la ejecución y no sean una consecuencia inmediata de ella, pues no sería equitativo que soportara costas originadas con motivo de procedimientos que no tienen atinencia con la ejecución de la hipoteca. Los privilegios acordados por la ley al acreedor hipotecario, son de amplia interpretación. Véase nota anterior.

3—El art. 191 del Cód. Civ., no es aplicable al caso, éste se limita solo al hecho de promover y seguir el pleito, el que no puede depender de la voluntad del marido. Goyena en su art. 65 dice: «La mujer no necesita licencia para defenderse en juicio criminal, ni para demandar, ni para defenderse en los pleitos con su marido. Los arts. aplicables son los 189 y 194. Según el primero, la mujer no puede obligar sus bienes sin licencia ó poder del marido; y con arreglo al segundo, la autorización del Juez es solo supletoria de la del marido cuando concurren las circunstancias que allí se enumeran, las que deben comprobarse.



HIP—HON



1a. Hipoteca tácita—Que sobre los bienes del deudor conserva el Banco de la Provincia, tiene prelación sobre la convencional de fecha posterior al préstamo del Banco—Jur. Civ., tom. 3, pág. 98, Ser. 2ª.

2. Hipoteca tácita—El Banco de la Provincia la tiene sobre los bienes de sus deudores y la prioridad en la fecha de su crédito le concede privilegio sobre todo otro acreedor aunque tenga hipoteca especial—Jur. Com., tom. 6, pág. 533, Ser. 1ª.

Hipoteca tácita—Véase: *Privilegios generales*, núm. 1.

Hipotecas—Véase: *Registro*, núm. 1.

1b. Homicidio—Producido por golpes dados voluntariamente, debe ser penado como homicidio por culpa grave—Jur. Crim., tom. 5, pág. 525, Ser. 1ª.

Homicidio—Véase: *Defensa propia*, núm. 1—*Amenazas*, núm. 1—*Circunstancias atenuantes*, núms. 1 y 2.

1c. Honorarios—Que la parte está obligada a pagar en

1a—El caso presente fué resuelto en esta forma tomando por base la litiscontestación, en cuyos límites debe encuadrarse la discusión y la sentencia, sin que sea permitido sacar la causa del cuasi-contrato. No se discutió pues aquí, si el Banco de la Provincia conserva ó no sus privilegios y ellos pudieron ó no hacerse valer en este caso. La cuestión quedó reducida á resolver la antigüedad de las fechas de los créditos para deducir la prioridad de derechos.

2—Véase: Verb. *Banco de la Provincia* núm. 260 del tom. 1º de la Inst.

1b—Se trata de la muerte dada á una menor por su tía: muerte ocasionada por tratamientos torpes y brutales por parte de la procesada, que indistintamente la pegaba en cualquiera parte del cuerpo y á veces en la cabeza, no solo con la mano, sino también con palo. De aquí se desprende que no se trata de un homicidio cometido por culpa ó imprudencia, sino de un homicidio producido por golpes dados voluntariamente; pero como este caso no está previsto en el Cód. debe regirse por las disposiciones sobre la culpa, admitiendo la interpretación más favorable á la procesada: la naturaleza de la culpa no puede ser otra sino grave en cuyo caso debe aplicarse la pena de seis años de prisión—art. 27 inc 1º del Cód. Penal anterior.

1c—La disposición del art. 4032, Cód. Civ., solo rige para las relaciones

HON

virtud de una condenación en costas solo se prescriben á los diez años—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Ser. 1ª.

2. Honorarios—Devengados por el abogado y procurador del ejecutado, no se encuentran comprendidos entre los gastos de justicia á que la ley reconoce privilegio sobre la generalidad de los bienes del deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 51, Ser. 1ª.

3. Honorarios—Devengados, patrocinando á la esposa en el juicio de divorcio deben ser abonados por el esposo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 178, Ser. 1ª.

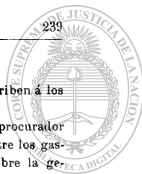
4. Honorarios—Devengados por el Defensor de Ausentes, se encuentran comprendidos entre los gastos de justicia á que la ley reconoce prelación —Jur. Civ., tom. 6, pág. 443, Ser. 1ª.

de derecho entre el abogado y su cliente y no puede aplicarse á la obligación impuesta á un tercero por sentencia, de pagar las costas de un juicio, que no procede como aquélla de una locación de servicios, sino de perjuicios causados sin derecho, en el pleito. La causa jurídica de la obligación, es distinta en ambos casos: en una es la remuneración de servicios prestados, en otra una condenación en costas impuesta en una sentencia. Por consiguiente en este último caso, se trata de una deuda ordinaria, prescriptible á los diez años, mientras que en aquel se trata de una deuda especial por honorarios que se prescribe por 2 ó 5 años—art. 4032 Cód. Civ.

2—En este caso los servicios profesionales no están comprendidos en el inc. 1º del art. 3879, Cód. Civ., porque no se prestan en interés común de los acreedores ó en interés del ejecutante.

3—Los arts. 203 y 205 del Cód. Civ. disponen espresamente que « las expensas del juicio de divorcio deben ser satisfechas por el marido ».

4—Esta cuestión tuvo su origen antes de la vigencia del actual Cód. de Proc. cuyo art. 523 consagra de una manera terminante el principio sentado en la resolución espuesta. La ley de Enjuiciamiento de 1878, bajo cuyo imperio cae el caso presente, establecía en su art. 548, que los gastos devengados por el deudor en su defensa no tendrían prelación; pero debe observarse que este artículo solo trata de los gastos originados por el procurador y abogado que el deudor ocupa en su defensa. Mas el caso difiere cuando el Defensor nombrado de oficio interviene en el juicio, porque esta intervención es ineludible para la marcha del juicio,



HON

5. Honorarios—Devengados en una testamentaria que ella ha aprovechado, deben ser pagados por la masa aún cuando el poder en virtud del cual se gestionaba, hubiese sido declarado insuficiente para intervenir—Jur. Civ., tom. 2, pág. 352, Ser. 2ª.

6. Honorarios—Devengados defendiendo un acreedor del concurso, la conformidad solo puede ser prestada por el acreedor ó su representante legal, sin que esto importe declaración sobre quien debe pagarlos en último término—Jur. Civ., tom. 2, pág. 439, Ser. 2ª.

7. Honorarios—El silencio no puede considerarse como manifestación de conformidad y el Juez debe proceder á la regulación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 477, Ser. 2ª.

8. Honorarios—Devengados en representación de varios herederos deben ser regulados en conjunto y dividirse equitativamente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 260, Ser. 2ª.

9. Honorarios—Decretada la manifestación de confor-

y no puede sostenerse que queden comprendidos en la disposición de este artículo en cuanto al pago de sus honorarios. El caso no estaba previsto en la ley anterior y en ausencia de una disposición especial deben regir los principios generales, respecto á la preferencia en el pago de los gastos de justicia: el principio de preferencia en el pago de éstos, cuando han sido hechos *en el interés común* de los acreedores, se encuentra consignado en el art. 3879: aún en el caso de hipoteca deben abonarse primeramente las *costas judiciales* que en él se causaren—art. 3937.

5—Es de estricta aplicación el art. 1627 del Cód. Civ.

6—Se trata por el momento de la regulación de honorarios: es indudable que la conformidad debe recabarse del patrocinado con quien ha celebrado el abogado el contrato de locación de servicios; debiendo aplicarse consiguientemente la jurisprudencia establecida por la Cámara, respecto á las relaciones jurídicas del cliente para con su apoderado ó abogado.

7—Esto sucede cuando no se ordena la manifestación de conformidad ó desconformidad bajo apercibimiento de que en caso de silencio se le tendrá por conforme, pues, en este caso el intimado está obligado á hacer la manifestación porque entonces el silencio sería considerado como una manifestación de voluntad—art. 919 del Cód. Civ.

9—Véase: Verb. Honorario, núm. 7 y nota.



HON

midad, si el interesado no cumple, debe procederse a la regulación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 449, Ser. 2ª.

10. Honorarios—Cada heredero debe pagar los suyos cuando su intervención ha sido defendiendo su interés esclusivo—Jur. Civ., tom. 1, pág. 513, Ser. 2ª.

11. Honorarios—De los peritos tasadores deben ser objeto dentro del término de tres días de presentada la operación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 240, Ser. 1ª.

12. Honorarios—De los peritos tasadores, es nula la resolución fijando su monto, si no se ajusta al procedimiento establecido en el art. 58 del apéndice al Cód. de Procedimientos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 240, Ser. 1ª.

13. Honorarios—Es nula toda declaración sobre obligación al pago, hecha en el auto de regulación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 454, Ser. 1ª.

10—La intervención en este caso, no se hace como gestores útiles de un negocio común, sino en su propio nombre, en su calidad de herederos. Cuando el objeto y resultado de los servicios del procurador y abogado de un heredero, hubiesen beneficiado á la sucesión, los honorarios de aquellos se consideran como carga de dicha sucesión, no así cuando solo ha tenido por objeto el interés personal ó individual del heredero: no es posible fijar reglas absolutas para la solución de estas cuestiones: los Jueces en cada caso ocurrente deben establecer la naturaleza, objeto y resultado del gasto para declarar si su pago es de cuenta de la sucesión ó del heredero. Véase: Herederos, núm. 1.

11—El art. 58 del apéndice al Cód. de Proc. establece que los peritos no sujetos á arancel deben presentar sus cuentas de honorarios: el Juez debe mandar hacerla saber á las partes, poniéndose de manifiesto por tres días—59 ibid—Si la cuenta es objetada, el Juez oye á las partes en juicio verbal y resuelve sin mas trámite—Art. 70 ibid.

12—De acuerdo con lo prescrito en el art. 240, aparte 3º del Cód. de Procedimientos.

13—Esta declaración importaría una condenación á pagar una suma de dinero sin juicio previo. Hecha la regulación de los honorarios, debe librarse mandamiento por su importe si la parte interesada lo pidiese, y solo después de citado de remate, puede el Juez proveer haciendo lugar á la ejecución y ordenar su pago.



HON

14. Honorarios—El procedimiento sumario solo es aplicable tratándose de su monto pero no tratándose de quien sea obligado a pagarlos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 49, Ser. 1ª.

15. Honorarios—Y gastos, que cause la esposa en ejercicio de un derecho propio contra el esposo, deben ser pagados por éste siempre que tenga la administración de los bienes de la sociedad conyugal—Jur. Civ., tom. 8, pág. 209, Ser. 1ª.

16. Honorarios—El abogado solo puede exigir su pago a las partes inmediatamente, los terceros aunque hayan sido beneficiados no quedan obligados hacia él—Jur. Civ., tom. 8, pág. 238, Ser. 1ª.

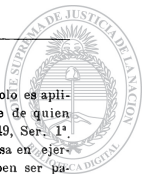
17. Honorarios—Del albacea, éste debe pagar los de los

14—Cuando un abogado patrocinando a su cliente, beneficia al mismo tiempo a otra parte que interviene en el asunto, como cuando se trata de un juicio sucesorio, puede establecerse tan solo el honorario del abogado, pero no puede este honorario ser distribuido sumariamente entre las otras partes beneficiadas con los escritos, porque el procedimiento sumario establecido por el art. 65 y siguientes del apéndice al Cód. de Proc. es solo aplicable a las relaciones entre abogado y cliente: y no habiendo el abogado patrocinado a los demás beneficiados con su dirección, no puede aplicárseles la disposición legal.

15—El art. 1275, inc. 3º del Cód. Civ., señala como carga de la sociedad conyugal, las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por la mujer, en los casos en que puede legalmente obligarse: y es fuera de duda que la esposa que sigue un juicio contra el marido no necesita de su autorización desde que ejercita un derecho propio. Debe además tenerse presente, que el esposo es el administrador legal de los bienes de la sociedad conyugal, y solo de estos bienes administrados por él deben salir las expensas judiciales causadas por la esposa, como lo dispone el art. 1281 *ibid.*

16—La intervención de los abogados debe ser remunerada cuando sus servicios profesionales son requeridos por alguna de las partes o cuando su intervención es de oficio. Véase nota 14. En contra de esta resolución está la del tom. 1º, pág. 209, Ser. 1ª Verb. Honorarios, núm. 1354 del tom. 1º de la Inst.; en favor véase Verb. Honorarios, núm. 1357 del tom. 1º Inst.

17—La constitución del albaceazgo en un mandato; el mandato debe



HON

mandatarios que haya instituido para el cumplimiento del mandato—Jur. Civ., tom. 8, pág. 136, Ser. 1ª.

18. Honorarios—De los inventariadores y tasadores no peritos, para fijarlos es necesario tenerse presente el tiempo que han podido emplear en la operación—Jur. Civ., tom. 8, pág. 71, Ser. 1ª.

19. Honorarios—No tienen derecho á cobrarlos los representantes por derecho propio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 70, Ser. 1ª.

20. Honorarios—Los herederos solo pueden cobrar de la masa los de sus respectivos abogados y procuradores que correspondan á diligencias de interés general —Jur. Civ., tom. 9, pág. 235, Ser. 1ª.

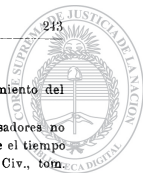
21. Honorarios—Y gastos, que se causen para conseguir la declaración del derecho á cobrar daños y perjuicios no se pueden incluir entre estos si la sentencia no condena en costas al demandado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 240, Ser. 1ª.

22. Honorarios—Por diligencias de realización forzosa y que han beneficiado á la testamentaria deben ser abonados por la masa aún cuando las haya pedido un acreedor gestionando un crédito—Jur. Civ., tom. 9, pág. 385, Ser. 1ª.

en general, ser desempeñado por el mismo mandatario á menos que la naturaleza del mismo mandato hiciera necesaria la presencia de su intermediario. Véase: Inst. tom. 1º, Verb. *Honorarios devengados*, núm. 1869.

19—Los representantes legales como el marido por la esposa, quien al representar á ésta lo hace en virtud de un derecho que puede decirse propio.

20—El art. 3474 del Cód. Civ. establece, que en la partición, sea judicial ó estrajudicial debe separarse bienes suficientes para el pago de las deudas y cargas de la sucesión: la nota puesta al pie dice lo siguiente: entendemos por cargas de la sucesión las obligaciones que han nacido después del fallecimiento del autor de la herencia, tales como los gastos funerarios y los relativos á la conservación, *liquidación y división* de los derechos respectivos, inventarios, tasación, etc. Esta resolución está de acuerdo con los núms. 10.





HON—HOR

23. Honorarios—La regulación hecha por el regulador soorepasando la suma pedida por el abogado no adolece de nulidad, por cuanto la presentación de cuenta no era obligatoria—Jur. Civ., tom. 9, pág. 394, Ser. 1ª.

24. Honorarios—Las cuestiones que se susciten sobre éstos en materia criminal se rigen por las disposiciones del Cód. de Proc. en lo civil—Jur. Crim., tom. 6, pág. 522, Ser. 1ª.

Honorarios—Véase: *Costas del concurso*, núm. 1—*Abogados y procuradores*, núm. 1—*Menores*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núms. 2 y 3—*Convenio*, núm. 1—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 4—*Albaceas*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núms. 2 y 4—*Abogado*, núm. 1—*Transacción*, núm. 3—*Perito tercero*, núm. 2—*Inhabilidad de título*, núms. 3, 5 y 6—*Nulidad*, núm. 34—*Mandatario*, núm. 6—*Representante*, núm. 1—*Prescripción de honorarios*, núm. 1—*Gastos*, núm. 2—*Regulaciones*, núm. 1.

Honorarios devengados—Véase: *Término*, número 1—*Mandatario*, núm. 3—*Regulación de honorarios*, núm. 1.

1. Honorarios médicos—Se prescriben a los dos años—Jur. Civ., tom. 2, pág. 237, Ser. 2ª.

2. Honorarios médicos—Que corresponden a las visitas confesadas por el deudor deben ser regulados por el Consejo de Higiene—Jur. Civ., tom. 7, pág. 514, Ser. 1ª.

Hora designada—Véase: *Posiciones*, núm. 8.

23—Ninguna disposición legal subordinaba antiguamente al regulador, en su apreciación, a la cuenta presentada, y menos podía admitirse esta subordinación en forma imperativa en aquella época en que no era forzosa la presentación de cuenta, como lo es hoy. Este caso se suscitó cuando aún no se había dictado el Cód. de Proc. vigente.

24—Aunque la regulación de honorarios se haga en un juicio criminal ella no pierde su carácter civil que siempre lo conserva aunque sean devengados en un juicio criminal, siéndole en consecuencia aplicable las disposiciones del Cód. Civ. sobre la materia.

1—Art. 4032, inc. 4º, Cód. Civ.

HOR—HUR

Horas hábiles—Véase: *Secretarios*, núm. 1.

1. Hurto—Por medio de falsificación de un documento privado, debe ser penado como falsificación, cualquiera que sea el valor de lo hurtado—Jur. Crim., tom. 5, pág. 49, Ser. 1ª.

2. Hurto—No puede calificarse así la sustracción de dinero por medio de engaño sin violencia y por la sola voluntad del damnificado; debe ser castigada como estafa—Jur. Crim., tom. 5, pág. 110, Ser. 1ª.

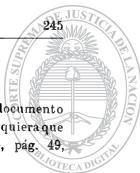
3. Hurto—No puede calificarse de tal, la sustracción de dinero por medio de engaño, sin violencia y por la sola voluntad del damnificado; debe ser penada como estafa—Jur. Crim., tom. 5, pág. 110, Ser. 1ª.

Hurto—Véase: *Damnificado*, núm. 1 — *Dependiente*, número 1.

1—Art. 429 inc. 3º, Cód. Pen. 1877: debe ser castigado con un año de prisión y multa de 50 á 500 pesos nacionales—art. 430, inc. último.

2—Debe ser penada como estafa, no habiendo violencia ni sustracción sino tan solo astucia y engaño, que son las circunstancias características de este delito.

3—En los delitos contra la propiedad, la violencia ejercida en las personas ó en las cosas es la que caracteriza el robo: el hurto es la sustracción clandestina de la cosa ajena, y la estafa se caracteriza por la astucia que se revela en el empleo de maniobras fraudulentas para sacar del poder de su dueño los valores con el objeto de apropiárselos. En el caso ocurente los valores se extraen por medio de engaño y sin violencia.





Ignorancia de la ley—Véase: *Indígenas*, núm. 1.

Ilícita—Véase: *Cláusula*, núm. 1.

Imbecilidad—Véase: *Error de derecho*, núm. 1.

Impedimento—Véase: *Conjuces*, núm. 1.

Impresos—Véase: *Copias*, núm. 1.

Imprescriptible—Véase: *Acción de partición*, núm. 1.

Improcedente—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 13 y 14.

Impuesto—Creado en 1879, de limpieza y alumbrado en los pueblos de campaña, solo es obligatorio para las propiedades comprendidas dentro de la traza urbana—Jur. Civ., tom. 8, pág. 93, Ser. 1ª.

Impuesto—Véase: *Contribución directa*, núm. 1—*Papel sellado*, núm. 1—*Herencias transversales*, núms. 1 y 2.

Impuesto de sello—Véase: *Inscripción*, núm. 2.

Inacción—Véase: *Insania*, núms. 1 y 2.

Inapelable—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1—*Liquidación*, núm. 3—*Juicios de disencio*, núm. 1—*Auto*, núm. 7—*Costas*, núm. 6—*Regulación de honorarios*, núm. 2—*Auto aprobatorio*, núm. 1—*Auto*, núm. 12—*Fianza*, núm. 4—*Jactancia*, núm. 2.

Inapelables—Véase: *Sentencias inapelables*, núm. 1—*Regulaciones*, núm. 1.

Inasistencia—Véase: *Apercibimiento*, núm. 2.

INC

Incapaces—Véase: *Intervención*, núm. 2—*Tutela*, núm. 1—*Cuentas*, núm. 21—*Tutor*, núm. 4.

1. Incapacidad—No puede declararse sin previo reconocimiento médico—Jur. Civ., tom. 3, pág. 70, Ser. 2ª

Incapacidad—Véase: *Actos*, núm. 1.

1a. Incapaz—Las medidas administrativas adoptadas por el curador con la venia del Juez é intervención del Ministerio Pupilar, no pueden ser contradichas por los parientes que en ningún caso son partes en el juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 273, Ser. 1ª.

Incapi—Véase: *Curador*, núms. 1, 4 y 5.

1b. Incidente—Aunque la sentencia recaída en él no condenase al acreedor que se presenta con posterioridad á la verificación de su crédito, la regla general que lo condena al pago de las costas es de estricta aplicación—Jur. Com., tom. 6, pág. 511, Ser. 1ª.

1. Incidentes—No deben formarse cuando las partes en el acto de la notificación pueden hacer las aclaraciones necesarias—Jur. Civ., tom. 2, pág. 530, Ser. 2ª.

2. Incidentes—De un juicio, son cuestiones accesorias

1a—No es de aplicación el art. 414 del Cód. Civ., pues este artículo prevee el caso en que los tutores *por sí y ante sí*, excediesen sus poderes, ó abusasen de ellos en daño del pupilo, autorizando á los parientes para denunciarlo al Juez de la tutela y reclamar las providencias necesarias; en el caso presente no concurren las condiciones exigidas por la ley para hacer procedente la acción de los parientes, pues se había procedido de acuerdo con el Juez.

1b—El art. 1612 del Cód. de Com., establece el pago de las costas de una manera indiscutible.

2—Los incidentes de un juicio no son sino accesorios de él, dentro del cual se desenvuelven y por el que únicamente tienen razón de ser. Su separación no obedece sino á razones de mero procedimiento, á efecto de facilitar la pronta terminación de los juicios. Si la excepción de prescripción no puede declararse procedente en el juicio principal, tampoco puede serlo en sus incidentes; esto sucede cuando hay honorarios devengados en el juicio principal y en sus incidentes, porque si solo lo hubieren en éstos para nada se tendría en cuenta el juicio principal.

INC

dependientes del principal, y la escepción de prescripción por las costas solo puede fundarse en éste—Jur. Civ., tom. 3, pág. 393, Ser. 2ª.

3. Incidentes—La Cámara no puede resolver, ni las partes pueden iniciar los que versen sobre competencia, mientras dure la formación del sumario—Jur. Crim., tom. 6, pág. 193, Ser. 1ª.

Incidentes—Véase: *Hipoteca*, núm. 2—*Auto*, núm. 10—*Poder*, núms. 1 y 3—*Término*, núm. 6—*Términos*, núm. 1—*Competencia*, núms. 2 y 6.

1a. Incompetencia—El Superior no puede declarar la del inferior para conocer en el pleito, aun cuando de autos resulte evidentemente demostrada, si las partes hubiesen consentido la declaratoria de competencia—Jur. Civ., tom. 6, pág. 164, Ser. 1ª.

2. Incompetencia—Esta escepción es improcedente cuando ha sido dada por contestada la demanda en rebeldía—Jur. Civ., tom. 2, pág. 476, Ser. 2ª.

3. Incompetencia—Esta escepción solo es procedente cuando existe otro Juez que tenga jurisdicción exclusiva para conocer en el juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 442, Ser. 2ª.

4. Incompetencia—Fundada en la alteración del turno es improcedente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 170, Ser. 2ª.

1a—Art. 87, Cód. de Proc. Véase Inst. tom. 1º, Verb. Incompetencia, núms. 1398, 1399, 1400 y 1401, y notas correspondientes.

2—Las escepciones dilatorias deben deducirse dentro del término de nueve días que la ley acuerda para la contestación á la demanda, dándose por decaído el derecho para contestarla, han debido necesariamente transcurrir los nueve días y consiguientemente sería improcedente la escepción—arts. 87 y 414, Cód. de Proc.

3—La disposición contenida en el art. 84, inc. 1º del Cód. de Proc., presupone la competencia de otro Juez de distinta jurisdicción á la del que conoce en el juicio en que se opone la escepción.

4—El turno es una mera medida de reglamentación para el reparto de las causas que no afecta la competencia de los jueces en el conocimiento



INC

5. Incompetencia.—La declaración solo es aplicable al expediente en que haya recaído, los agregados sin acumularse deben ser devueltos á la jurisdicción que correspondan—Jur. Civ., tom. 2, pág. 474, Ser. 2ª.

6. Incompetencia.—No inhibe de oponer esta escepción en la estación oportuna del juicio ejecutivo, el hecho de haber recusado al Juez sin declinar de jurisdicción—Jur. Civ., tom. 2, pág. 203, Ser. 2ª.

7. Incompetencia.—Siendo escepción previa, corresponde ser resuelta en primer término, y no es nula la sentencia que aceptándola no se pronuncia sobre las demás opuestas—Jur. Civ., tom. 2, pág. 203, Ser. 2ª.

8. Incompetencia.—Si fuese contestada no puede ser declarada de oficio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 486, Ser. 2ª.

9. Incompetencia.—Puede declararla el Juzgado hasta la recepción de la causa á prueba, mientras tanto no se conceptúa radicado el juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 478, Ser. 2ª.

10. Incompetencia.—Declarada procedente esta escepción de los asuntos correspondientes á la jurisdicción que les atribuye la ley. Debe tenerse presente además que el espíritu de la ley no es favorable á las cuestiones de competencia.

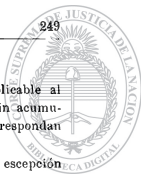
6—En el juicio ejecutivo esta escepción como todas las que hacen al derecho del ejecutado, debe oponerse al ser citado de remate—art. 485, Cód. de Proc.—Interpuesta fuera de esta oportunidad debe ser rechazada. Mal puede, pues, oponerse la escepción de incompetencia al recusar al Juez, cuando aún no ha sido citado de remate el ejecutado.

7—Esta escepción debe examinarse previamente para pronunciarse sobre las demás, en caso de considerarse competente, como lo prescribe el art. 93 del Cód. de Proc., aplicable por analogía. Declarándose incompetente un Juez no puede entrar á resolver sobre las otras escepciones por cuanto carece de jurisdicción para ello: mal puede por consiguiente ser nula una sentencia que se basa y consulta las prescripciones legales.

8—Siempre que no resulte claramente demostrada la incompetencia, porque en este caso es aplicable el art. 75 del Cód. de Proc.

9—Art. 87 inc. 1ª, Cód. de Proc.

10—No puede continuar el juicio ante otra jurisdicción porque la re-



INC.-IND

en el juicio ejecutivo, debe archivar el expediente, el actor no puede con el mismo continuar el juicio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 341, Ser. 2ª.

Incompetencia—Véase: *Tribunales de comercio*, núm. 1—*Jurisdicción potestativa*, núm. 1—*Tribunales de la Capital*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 4—*Competente*, núm. 2—*Costas*, núm. 7.

1a. Incompetente—El Juzgado puede declararse de oficio antes de consentido el auto de prueba Jur. Civ., tom. 1, pág. 612, Ser. 2ª.

Incompetente—Véase: *Crédito*, núm. 1.

Incompetentes—Véase: *Tribunales de la capital*, núm. 1.

Inconstitucionalidad—Véase: *Herencias trasversales*, núm. 1.

Inconversión—Véase: *Curso legal*, núm. 1.

1b. Indemnización—Por el agravio moral causado por la muerte del jefe de una familia que queda en la indigencia, debe ser indemnizado en atención á la suma de bienestar que éste le proporcionaba con su trabajo y corresponde á los Tribunales fijar equitativamente su monto—Jur. Civ., tom. 3, pág. 259, Ser. 2ª.

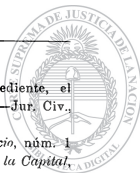
Indemnización—Véase: *Contrato*, núm. 11—*Obligación de hacer*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 23—*Poseedores*, núm. 1.

1c. Indígenas—Su condición no es bastante para salvar la misión de los autos no procede, pues radicándose el juicio ante un Juzgado, pertenecen á su archivo.

1a—Art. 87, inc. 1º, Cód. de Proc.

1b—Así se desprende de los arts. 1069 y 1109 del Cód. Civ. El art. 1084 del mismo establece que así el delito fuere de homicidio el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral, además lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda é hijos del muerto, quedando á la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla.

1c—En las cuestiones criminales y especialmente tratándose de un ho-



IND—INF

responsabilidad del reo por ignorancia de la ley—Jur. Crim., tom. 5, pág. 339, Ser. 1ª.

Indivisible—Véase: *Confesión*, núms. 1 y 3.

Indivisión—Véase: *Acción de partición*, núm. 1.

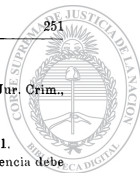
1. Información—Producida para probar la ausencia debe serlo con todos los requisitos que la ley exige, en el juicio ordinario—Jur. Civ., tom. 7, pág. 417, Ser. 1ª.

2. Información—Que la ley prescribe para el juicio de alimentos, es válida y llena los objetos de la ley, si los testigos presentados firman el escrito y se ratifican en su contenido ante el actuario — Jur. Civ., tom. 1, pág. 153, Ser. 2ª.

micidio como en el caso ocurrenente, la absoluta ignorancia de la ley no puede excusar una acción, ni ante la ley positiva ni ante la ley natural. No puede excusarse ante la ley positiva, porque la ignorancia de la ley penal no es base de defensa salvo los casos extremos de que se ocupa el art. 29 del Cód. Pen. anterior, entre los cuales de ningún modo puede incluirse la causal alegada. No puede excusarse ante la ley natural, porque esta ley basta para dar á comprender á todo ser humano lo punible que es un hecho de esta naturaleza, que en las mismas tóderas son castigados con severidad. Por otra parte, la condición de *indígena* no puede servir de causa absolutoria, sin traer una perturbación grave en el orden de la penalidad; sería acordar un salvo conducto para la carrera del crimen.

1—Esta prescripción solo es admisible tratándose de un juicio ordinario, en cuyo caso la prueba debe ser refrendada por la parte contraria: es sabido que en las informaciones sumarias generalmente no se le da audiencia á la contraparte.

2—Esta resolución fué resuelta por mayoría de votos en Tribunal de interlocutorias. La mayoría sostuvo que la información producida en esta forma reunía los requisitos exigidos por los arts. 602 y 603 del Cód. de Proc., y que por consiguiente, procedía la fijación de la cuota alimenticia—art. 604 *ibid*—La minoría sostuvo que la información producida en esta forma era insuficiente, á pesar de la ratificación de los testigos, porque esta ratificación, no es, ni tiene el valor de una información sumaria de testigos, pues este procedimiento desnaturalizaría el significado y alcance jurídico que los prácticos le dan á las palabras información de testigos. No puede haber averiguación jurídica ni legal de hecho alguno, por medio de testigos que no hayan declarado de acuerdo con los requisitos exigidos por las leyes de procedimientos; siendo obvio que si no



INF

3. Información—De pobreza, debe seguirse ante el Juez que conozca en el juicio para cuya secuela se pide—Jur. Civ., tom. 2, pág. 490, Ser. 2°.

4. Información—Sobre propiedad de un terreno, son parte legítima en ella todos los que se conceptúan con derechos sobre él—Jur. Civ., tom. 2, pág. 516, Ser. 2°.

5. Información—Aprobada, aun cuando es título bastante para justificar la posesión, no puede ser protocolizado en un Registro de Escribano como escritura pública—Jur. Civ., tom. 9, pág. 268, Ser. 1°.

se llenan estos requisitos la información no puede tener valor ninguno, ni jurídico ni legal. Ni vale alegar que el juicio de alimentos es tan sumario, según el art. 603 del Cód. de Proc. que la justificación de los extremos legales puede hacerse en él sin citación ni *otra formalidad*, porque estas palabras deben entenderse razonablemente y en el sentido que el legislador ha querido que se prescinda de la citación y audiencia del demandado y de cualquiera otra solemnidad de los juicios, pero no de las formalidades y requisitos esenciales para el examen de testigos, que habilitan al Juez para apreciar debidamente el mérito de la prueba y no ser víctima del engaño y del fraude, como sucedería con frecuencia si se sienta la peligrosa doctrina de que es legal prescindir de ellos.

3—La declaratoria de pobreza es un incidente del juicio radicado ante el Juez que va á entender de lo principal.

4—No puede decirse que les falte personería, desde que según ellos vienen á ejercitar acciones propias sobre la cosa materia de litigio.

5—Las actuaciones judiciales llevadas á cabo en las informaciones son parte del expediente en que se han producido y como tal son instrumentos públicos que no adquirirían mayor eficacia con hacerlas protocolar en un Registro de Escribano: basta con hacerlas inscribir en el Registro de propiedad de acuerdo con el art. 225, inc. 4° de la Ley Org. de los Trib. de la Cap. que dice: En esta oficina se inscribirán 1°... 4°. Las sentencias ejecutoriadas que por herencia, prescripción ú otra causa reconocieren adquirido el dominio ó cualquier otro derecho real sobre inmuebles. La protocolización de los testamentos ológrafos, de los contratos hechos en puéses extranjeros para transferir derechos reales sobre bienes situados en la República etc., está espresamente ordenada por el Cód. pero no ofrecen analogía alguna con la protocolización de actuaciones judiciales, cuya seguridad está garantida por la ley disponiendo que vayan al archivo á más de los testimonios que pueden pedir los interesados.



INF

Información—Véase: *Título*, núm. 6—*Denuncias*, núm. 1.
—*Títulos de propiedad*, núm. 3—*Fallecimiento*, núm. 1.

Informaciones—Véase: *Prescripción*, núm. 14.

Informe—Véase: *Peritos*, núm. 6.

1a. Informe médico—Constituye una presunción de complicidad grave cuando las heridas son de arma punzante y cortante y afirma que no han sido producidas por una sola arma—Jur. Crim., tom. 5, pág. 578, Ser. 1ª.

Informes científicos—Véase: *Insano*, núm. 1.

1. Informes facultativos—Sobre el estado patológico de una persona solo forman prueba en la parte que se refieran á la enfermedad—Jur. Civ., tom. 8, pág. 410, Ser. 1ª.

1b. Informes periciales—Terminantemente asertivos forman prueba plena—Jur. Civ., tom. 8, pág. 428, Ser. 1ª.

2. Informes periciales—Los terminantemente asertivos no pueden ser destruidos por medio de prueba testimonial—Jur. Civ., tom. 9, pág. 444, Ser. 1ª.

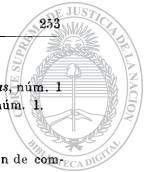
1c. Infracción—Cuando de los antecedentes del procesado se puede suponer fundadamente que en el momento de cometerla, su inteligencia se encontraba velada por el miedo, el Tribunal puede aplicar una pena inferior á la señalada por la ley—Jur. Crim., tom. 5, pág. 549, Ser. 1ª.

1a—Tratándose de heridas de carácter completamente diverso, como las de bala y puña., el indicio sería fuerte; pero no sucede lo propio tratándose de heridas causadas todas con puñal ó cuchillo, pues es muy fácil equivocarse en este caso.

1b—Art. 178, Cód. de Proc.

2—No puede tomarse esta resolución como regla general. El art. 178 del Cód. de Proc. establece que la prueba pericial cuando es asertiva forma prueba plena, y el art. 204 deja en plena libertad para apreciar la prueba testimonial. Es evidente que si este reuniera las condiciones exigidas por la ley para hacer plena prueba, se encontrarían las dos pruebas rendidas, plenas según prescripción legal, una frente á otra, y no habría razón porque dar supremacía á la primera contra la segunda.

1c—Así lo autoriza el art. 173 del Cód. Pen. anterior.



INF—INH

2a. Infracción—Cuando el reo ha cometido mas de una en un mismo acto se le debe aplicar solo la correspondiente á la mayor—Jur. Crim., tom. 5, pág. 371, Ser. 1ª.

Infracción—Véase: *Sellos*, núms. 1 y 2.

Inhabilidad—Véase: *Tutela*, núm. 2.

1. Inhabilidad de título—Opuesta esta escepción á la ejecución de una obligación condicional, debe ser rechazada por improcedente si el ejecutante justifica haber llenado las condiciones antes de iniciar el juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 190, Ser. 2ª.

2. Inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución de parte del precio, por temor á una reivindicación, es procedente aun quando el título ejecutivo sea una escritura pública—Jur. Civ., tom. 7, pág. 343, Ser. 1ª.

3. Inhabilidad de título—Opuesta á una ejecución por honorarios regulados y consentidos es improcedente—Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 2ª.

4. Inhabilidad de título—Esta escepción fundada en

2a—Art. 178, última parte Cód. Pen. anterior.

1—Cumplida la condición de una obligación, ésta se convierte en pura y simple.

2—A menos que el vendedor afluente la restitución del precio—art. 1425, Cód. Civ.

3—Véase: Escepción de inhabilidad de título, núm. 4.

4—La escepción de *Inhabilidad de título* no es procedente siempre que el pagaré reúna todas las formalidades legales requeridas para su validez. Si está sujeto á una condición y si no consta del título mismo, puede su discusión ser materia de otro juicio, discusión que no corresponde al carácter especial del juicio ejecutivo. Tal es la jurisprudencia que se quiere sentar por la Cámara en esta materia. Nosotros disintimos en esta cuestión pues consideramos que si la obligación no tiene su origen en una causa legal, la escepción de inhabilidad puede ser opuesta siempre que el documento de la obligación no haya pasado á tercero, que pueda ignorar ó no conocer la causa origen de ella. Mas, si la obligación tiene su causa en un acto ilícito ó de aquellos que invalidan los actos jurídicos, la inhabilidad de título puede ser opuesta aunque el documento en sí sea perfectamente hábil. Para estudiar convenientemente esta cuestión tenemos que remontarnos á las fuentes en que el legislador ha bebido



INH

que el pagaré que se ejecuta procede de una transacción cuyas condiciones no se han cumplido, debe ser rechazada —Jur. Civ., tom. 3, pág. 382, Ser. 2°.

su doctrina. Nuestro Cód. de Proc. ha seguido los principios sentados en la legislación española que es la que la ha servido de norma. La Ley española de 1855, enumera las escepciones admisibles en el juicio ejecutivo en su art. 963, esta ley fué adicionada en 6 de Diciembre de 1868, la que reformó el art. 963 citado ampliándose á otros casos las escepciones admisibles en el juicio ejecutivo. La ley de 1855 decía que era admisible la escepción de *falsedad del título ejecutivo*, mientras que nuestra ley dice *Falsedad ó inhabilidad del título* con que se pide la ejecución. Yo pregunto ¿Por qué esta diferencia? Simplemente porque nuestro Cód. que fué dictado en 1880 tomó en consideración las dudas que suscitó la ley española de 1855, la que fué adicionada como he dicho, en 1868, salvando algunas deficiencias de aquélla, entre las cuales se encontraban las escepciones que la ley había autorizado oponer en el juicio ejecutivo: al dictarse nuestro Código actualmente en vigencia, no pudo dejarse de tomar las medidas necesarias á fin de eliminar y descartar las dificultades que la ley española suscitara en la práctica. Es por esto que el inc. del Cód. de Proc. quedó reformado en nuestro Código. Para comprobar que la ley de 1855 había suscitado dudas en su aplicación, voy á citar las palabras de Reus el que en su tom. 3, pág. 415, al tratar de la escepción de nulidad dice: «El error y el dolo se ha dudado si podían alegarse como escepciones... también se dudaba si la simulación del contrato podría comprenderse en esta escepción, aún cuando la opinión general estaba por la afirmativa, después de la nueva ley ya no hay duda, etc.» Confirmando esta opinión dicen Manresa y Reus y García en su comentario á la ley de Enj. en el tom. 4º, pág. 296, *in fine*: «la simulación del contrato podría comprenderse en esta escepción». Estas opiniones se omitían cuando la ley de 1855 estaba en vigencia. ¿Con cuanta más razón no debe aceptarse teniendo en cuenta que nuestra ley haciéndose eco de estas opiniones, modificó en la parte que se discute, aquella disposición? Es evidente el espíritu y la letra de nuestra ley, ha querido resolver dudas ampliando el concepto de aquella. Escríbe se produce en este mismo sentido. Véase edición de 4 tomos de 1875 comentada por Vera y Caravantes, tom. 3, pág. 523. Miguel Reus en su comentario á la ley Esp. de Enj. Civ. tom. 3, pág. 414, nota al art. 1464 igual al 488 de nuestro Código, dice: «La antigua ley solo admitía la falsedad del título ejecutivo, sin extenderla á la del acto que le hubiere dado fuerza de tal, extensión que ha dado la nueva ley, con gran lógica, pues si el acto que da origen á una obligación adolece del vicio de nulidad, necesariamente lleva implícita esa nulidad la obligación, por más que en la forma esté arreglada á de-



INH

5. Inhabilidad de título—Esta escepción es improcedente cuando se ejecuta una regulación de honorarios—Jur. Civ., tom. 9, pág. 125, Ser. 1ª.

6. Inhabilidad de título—Opuesta á la ejecución fundada en una regulación de honorarios consentida, debe ser rechazada por improcedente—Jur. Civ., tom. 9, pág. 159, Ser. 1ª.

7. Inhabilidad de título—Esta escepción solo puede fundarse en que por su forma esterna no se encuentra comprendido entre los que según la ley tienen fuerza ejecutiva—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 1ª.

8. Inhabilidad de título—Por ser nulo el documento en que se funda la ejecución, debe ser rechazada siempre que el causante al firmarlo conociera el motivo de la nulidad—Jur. Civ., tom. 9, pág. 261, Ser. 1ª.

Inhabilidad de título—Véase: *Escepción de inhabilidad de título*, núms. 3, 4 y 5.

1. Inhibición—No puede decretarse si el documento con recho. Tal es la opinión de uno de los prácticos que de más fama goza en materia de Procedimientos. Si la causa es ilícita la obligación es nula, es inhábil. La Cámara ha interpretado evidentemente mal el espíritu y la letra de la ley en el caso presente. La doctrina consagrada por la Cámara debe reformarse. Si el estrecho límite de estas notas nos permitiera refutaríamos uno por uno los fundamentos de la Cámara. Del propio modo si se pretende ejecutar una obligación condicional cuyas condiciones no se han cumplido, puede oponérsele la escepción de inhabilidad y debe ella ser declarada procedente, siempre que su ejecución no se siga por un tercero, que ignore la condición á que está sujeta la obligación.

6—Véase Escepción de inhabilidad de título, núm. 4.

6—Véase nota precedente.

7—No es la doctrina que debe consagrar la jurisprudencia porque ella no interpreta correctamente el Cód. de Proc. Véase núm. 3 y nota.

8—El art. 1047 del Cód. Civ. dice: La nulidad absoluta puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, *excepto* el que ha ejecutado el acto *sabiendo ó debiendo saber* el vicio que lo invalidaba.

1—Las inhibiciones se hallan regidas por las mismas leyes que los em-



INH

que se solicita no llena los requisitos que la ley exige para los embargos preventivos—Jur. Civ., tom. 2, pág. 172, Ser. 2ª.

2. Inhibición—De bienes, es procedente el embargo de los depósitos á nombre de la esposa, consentido el auto que la decreta, aún cuando el esposo conserve la administración—Jur. Civ., tom. 7, pág. 292, Ser. 1ª.

3. Inhibición—General, contra el deudor, solo es procedente cuando lo es el embargo preventivo y éste no puede hacerse efectivo por no conocerse bienes—Jur. Civ., tom. 7, pág. 455, Ser. 1ª.

3a. Inhibición—General, no equivale al embargo de bienes determinados—Jur. Com., tom. 6, pág. 415, Ser. 1ª.

4. Inhibición—No causa perjuicio, pues el inhibido puede con arreglo á la ley dar bienes á embargo para hacerla cesar—Jur. Civ., tom. 3, pág. 498, Ser. 2ª.

5. Inhibición—Pueden venderse los bienes aunque ella exista depositando el importe del crédito ejecutado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 498, Ser. 2ª.

Inhibición—Véase : *Arrendamientos*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 26.

bargos preventivos, de aquí que cuando no proceda en un caso tampoco proceda en el otro.

2—Art. 1295, Cód. Civ.

3—Art. 461, Cód. de Proc.

3a—La inhibición solo importa una medida de garantía cuando no se conocen bienes al deudor, quien puede solicitar se deje sin efecto presentando bienes á embargo—art. 471, Cód. de Proc.—lo que quiere decir que la inhibición no reemplaza al embargo.

4—La Cámara no resolvió lo que expresa el sumario; rechazó la acción de daños y perjuicios porque no se comprobó que ellos hubiesen sido causados, como lo exigen los arts. 519, 520 y 521 del Cód. Civ.

5—Así como el comprador no puede negarse á pagar el precio del inmueble comprado por aparecer hipotecado, siempre que la hipoteca pueda ser inmediatamente redimida por él ó por el vendedor (art. 1433, Cód. Civ.) del propio modo la inhibición puede cesar, haciéndose la venta y la anotación de la cancelación conjuntamente, quedando trasferido el gravamen sobre el precio.



INH—INS

Inhibiciones—Véase: *Registro*, núm. 1.

1. Injuria—Siendo públicos los procedimientos judiciales, la publicación de un escrito presentado no puede dar lugar á esta acción—Jur. Crim., tom. 5, pág. 567, Ser. 1ª.

Injuria—Véase: *Calumnia*, núms. 2 y 3—*Acusación*, número 1.

1. Injurias—Esta acción deducida por un empleado es completamente independiente de la resolución que administrativamente haya recaído—Jur. Crim., tom. 6, pág. 195. Ser. 1ª.

2. Injurias—Opuesta la compensación en este juicio, el acusado puede presentar testigos sobre ese punto—Jur. Crim., tom. 6, pág. 606, Ser. 1ª.

Injurias—Véase: *Acusación*, núm. 1.

Injuriente—Véase: *Acción*, núm. 4.

Inmueble—Véase: *Tradición*, núm. 1.

Insaculación—Véase: *Miembros*, núm. 1.

1. Insania—El esposo como curador legítimo y necesario, no necesita pedir declaratoria judicial de que la esposa se encuentra en ese estado, para la administración y manejo de los bienes gananciales—Jur. Civ., tom. 3, pág. 219, Ser. 2ª.

2. Insania—La declaración de la mujer casada solo puede

2—Art. 315, inc. 2º, Cód. Pen.

1—El art. 58 dice: Este Código protege á los incapaces, pero solo para el efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad, dándoles la representación que en él se determina. De aquí se desprende, que si una de las personas á quienes el Código protege, por considerarlas incapaces, tiene ya el representante que en él se determina, sería impertinente invocar cualquiera de sus disposiciones para autorizar con ella la gestión que tuviese por objeto dar á dicho incapaz un representante que suprima los impedimentos de su incapacidad. No hay necesidad de proveer al incapaz de un representante legal que ya lo tiene con pleno ejercicio de facultades.

2—Es sabido que el interés es la medida de la acción, sin interés no puede ocurrirse á los Tribunales que están establecidos para dar á cada cual lo que es suyo. Ahora bien, ¿qué interés inmediato y legal tiene el



INS

ser pedida por el esposo, la inacción de éste no faculta á los parientes próximos ni al Ministerio de Menores para pedirla—Jur. Civ., tom. 3, pág. 219, Ser. 2ª.

1. **Insano**—Para su detención judicial se requiere la declaratoria, previos los informes científicos del caso—Jur. Civ., tom. 3, pág. 70, Ser. 2ª.

2a. **Insano**—El Ministerio de Menores como Defensor, no puede contradecir las declaraciones hechas por aquél antes de producirse la insania—Jur. Civ., tom. 8, pág. 410, Ser. 1ª.

Insano—Véase: *Curador*, núm. 4.

1. **Inscripción**—De las escrituras de sociedad, su falta priva á los otorgantes de toda acción para reclamar los derechos que en ellas hubieren sido reconocidos—Jur. Com., tom. 5, pág. 367, Ser. 1ª.

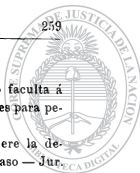
2b. **Inscripción**—La de las sociedades anónimas, que establecidas en el extranjero dedican una parte indeterminada

Ministerio de Menores en proveer á la mujer de una representación que ya la tiene el marido por ministerio de la ley? El hogar es inviolable y solo por poderosas razones puede el poder público franquear sus puertas. No hay ningún interés poderoso que justifique en este caso la intromisión de los poderes públicos en «esa pequeña patria por la que estamos unidos á la grande patria» como dice Rousseau citado por Ahrens. El verdadero interés está en ocultar ciertas enfermedades y miserias, interés que es solidario en la familia é íntimo entre los esposos.

2a—La intervención del Ministerio de Menores que es promiscua y común con la de los padres, tutores y curadores, tiene por objeto suplir la incapacidad de los menores é incapaces consultando sus intereses: la voluntad de aquéllos reemplaza entonces la voluntad é inteligencia de éstos y hacen lo que éstos harían si estuviesen en su sano juicio. No es presumible que el hombre contradiga lo que una vez ha afirmado, no puede en consecuencia el Ministerio de Menores contradecir lo que su representado ha afirmado antes, porque esta contradicción no se presume.

1—Arts. 47, 52 y 399, Cód. de Com. Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. *Sociedad*, núm. 248.

2b—Lo sociedad solo se proponía establecer en la República una sucursal, operando al mismo tiempo en varias partes del globo con asiento principal en Londres. No es justo ni equitativo que se obligue á pagar el impuesto correspondiente al capital que no va á ser empleado aquí.



INS

de su capital para operar en la República, solo deben pagar como impuesto de sello diez pesos moneda nacional por foja—Jur. Com., tom. 6, pág. 382, Ser. 1ª.

3. Inscripción—Su no verificación en la matrícula de comercio, no impide que el que lo ejerza sea declarado en quiebra—Jur. Com., tom. 6, pág. 387, Ser. 1ª.

Inscripción—Véase: *Dominio*, núm. 2 — *Contrato*, núm. 13—*Ampliaciones*, núm. 1—*Capital*, núm. 1—*Ausente*, núm. 4—*Sociedad anónima*, núm. 3.

Inscripciones en la matrícula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 178, Ser. 2ª, y tom. 1; pags. 458 y 628, Ser. 2ª: tom. 3, págs. 347, 471, 542, Ser. 2ª de la Jur. Civ.

Insolvencia—Véase: *Privilegios generales*, núm. 1.

Insolvente—Véase: *Testamentaria*, núm. 2.

Instancia—Véase: *Decretos*, núm. 1.

Instrumento constitutivo—Véase: *Prenda*, núm. 1.

Instrumento habilitante—Véase: *De oficio*, núm. 2.

Instrumento privado—Véase: *Contrato*, núm. 3—*Documento privado*, núm. 1—*Obligación*, núm. 2—*Reconocimiento de firma*, núm. 2.

1. Instrumentos privados—En cuanto se pretenda apli-

Es necesario interpretar la ley siempre en el sentido propio para atraer los capitales europeos.

3—La jurisprudencia está hecha en este punto del derecho. El artículo 1511 del Cód. de Com. establece, que todo comerciante que por cual quiera causa cesa en sus pagos se halla en estado de quiebra: la falta de una obligación impuesta por la ley, como lo es la de matricularse, no podría hacer de mejor condición al que no cumple con ella que á aquél que cumple. El comerciante no matriculado tiene todas las cargas del comerciante pero no goza de sus beneficios.

1—Hay esta diferencia entre los actos bajo forma privada y los actos auténticos: respecto de terceros los instrumentos privados no tienen fecha cierta, ni por consiguiente fuerza probatoria, porque esta no depende de la fecha del acto sino de su presentación en juicio, como lo establece entre otros casos el art. 1035 en su inc. 1º. Esta disposición tiene su fundamento en la facilidad con que los documentos privados pueden



INS—INT

car en contenido á terceros que no han intervenido en su formación, solo adquieren fecha cierta desde su presentación en juicio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 498, Ser. 2º.

1a. Instrumento público—Lo es el oficio en que un Cónsul extranjero nombra albacea dativo, y como tal no requiere ratificación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 273, Ser. 2º.

Instrumento público—Véase: *Obligación*, núm. 2—*Obligaciones mancomunadas*, núm. 1—*Boleto de remate*, núm. 1—*Testamento privado*, núm. 1—*Falsedad*, núm. 1—*Simulación*, núms. 3 y 11—*Prescripción*, núms. 11 y 12—*Falta de personería*, núm. 2—*Simulación*, núm. 7—*Tribunal arbitral*, núm. 1—*Estado Civil*, núm. 1—*Partidas parroquiales*, número 1.

Integración—Véase: *Sucesor*, núm. 1.

1b. Intención criminal—La falta de ella impide calificar de calumnia la imputación de un delito—Jur. Crim., tom. 5, pág. 16, Ser. 1ª.

2. Intención criminal—Es necesario demostrarla para

ser antidatados, mientras que los documentos auténticos no pueden serlo sino por la falsificación. Es por la propia razón que el instrumento privado mandado protocolizar adquiere fecha cierta desde el día en que el Juez ordena su protocolación—art. 984, Cód. Civ.—Las leyes 48 y 114, tft. 25, lib. 4, R. C., consagran igual principio. El Cód. Civ. ha establecido formas determinadas para la constitución de los contratos, no solo para que sirvan de prueba entre las partes sino para que tengan efecto contra terceros en los casos en que éstos queden afectados directa ó indirectamente por ellos—arts. 973, 1182 y 1183, *ibid.*—La fecha cierta de los contratos no puede establecerse sino por escritura pública.

1a—Art. 979, Cód. Civ.

1b—Art. 13, Cód. Pen. anterior.

2—Este sumario establece lo contrario de lo sentado por la Cámara. En el caso presente, la parte acusada comprobó plenamente la ausencia de toda intención criminal, con cuyo motivo la presunción establecida por el art. 13 del Cód. Pen. que sienta que toda acción criminal se presume cometida con voluntad criminal, desaparece. Véase: F. S. C. P. tom. 9, págs. 5 y 374, Ser. 2º.



INT

que la imputación de un hecho importe calumnia—Jur. Crim., tom. 5, pág. 490, Ser. 1^o.

Intención criminal—Véase: *Acción criminal*, núm. 1.

Intendente municipal—Véase: *Denunciante*, núm. 2.

1a. Interdicto—El vencido debe ser condenado á pagar las costas.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 101, Ser. 1^a.

1b. Interdicto de adquirir—Para que proceda, es requisito indispensable que nadie posea á título de dueño ó usufructuario, los bienes cuya posesión se pide—Jur. Civ., tom. 6, pág. 175, Ser. 1^a.

2a. Interdicto de adquirir—Es improcedente siempre que el demandado posea á título de dominio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 265, Ser. 1^a.

1c. Interdicto de despojo—No puede fundarse en un desalojo decretado en juicio, pues carece de los requisitos inherentes á esta acción, la clandestinidad ó la violencia—Jur. Civ., tom. 7, pág. 357, Ser. 1^a.

2b. Interdicto de despojo—Debe juzgarse especialmente

1a—El principio sentado por la ley en el juicio ejecutivo, en los interdictos y en todos los juicios sumarios, respecto de la condenación en costas, es absoluto, no admite excepción alguna; el Juez no tiene facultad para eximir de las costas al litigante vencido—art. 578, Cód. de Proc.

1b—Arts. 564 y 565 del Cód. de Proc.

2a—El art. 564 del Cód. de Proc., en su inc. 2^o, establece como requisito para que el interdicto de adquirir proceda «que nadie posea á título de dueño, ó de usufructuario, los bienes cuya posesión se pide».

1c—El art. 2494 del Cód. Civ., habla de despojo no de desalojo. El desalojo decretado en juicio no puede nunca dar lugar á la acción de despojo, porque ésta supone la prescindencia de los tribunales y tiene por objeto evitar que cualquiera persona se haga justicia por sí misma. La violencia ó clandestinidad de que habla el art. 581 del Cód. de Proc., es incompatible con la intervención de los tribunales, los que están establecidos para evitar la violencia y el fraude, haciendo prevalecer el derecho. Véase además el art. 2492 Cód. Civ.: Inst. tom. 1^o, verb. Interdicto de recobrar, núm. 1479.

2b—En el juicio posesorio debe atenderse especialmente al hecho de la posesión, el juicio sobre mejor título es materia de otras acciones.



INT

sobre la posesión, la nulidad ó validez de los títulos no puede ser materia de decisión—Jur. Civ., tom. 7, pág. 357, Ser. 1ª.

3. Interdicto de despojo—Es procedente siempre que se pierda clandestinamente la posesión aunque sea sin violencia—Jur. Civ., tom. 9, pág. 297, Ser. 1ª.

1. Interdicto de obra nueva—Deducido contra el mero ejecutor de órdenes, debe ser rechazado, la acción debe dirigirse contra el que ha ordenado la turbación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 346, Ser. 2ª.

2a. Interdicto de obra nueva—La acción para entablarlo se prescribe por un año contado desde la pacífica terminación de las obras—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 1ª.

1a. Interdicto de recobrar—Para que proceda es indispensable que el que lo inicia haya sido despojado de la posesión—Jur. Civ., tom. 8, pág. 483, Ser. 1ª.

2b. Interdicto de recobrar—Solo es procedente justificando la posesión y el despojo con violencia ó clandestinidad, el dominio no basta para hacerlo procedente—Jur. Civ., tom. 3, pág. 387, Ser. 2ª.

Interdicto de recobrar—Véase: *Despojo*, núm. 2.

1b. Interdicto de retener—La posesión, es procedente

3—Art. 581 del Cód. de Proc.

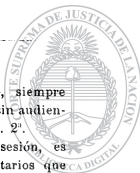
2a—Art. 4032 del Cód. Civ.

1a—Art. 581 del Cód. de Proc.

2b—Véase nota precedente y arts. 2474 y 2498, Cód. Civ. El título no da lugar á las acciones posesorias si no hay posesión, porque un título válido no da sino un derecho á la posesión de la cosa, y no la posesión misma—art. 2468, Cód. Civ.

1b—Si no se le da audiencia al poseedor actual, la tradición no puede legalmente operarse en los términos del art. 2283 del Cód. Civ. á causa de no hallarse el inmueble libre de toda otra posesión, por cuya causa los actos posesorios que llegue á ejercer el segundo poseedor serían violatorios de los derechos de posesión del primero, procediendo en consecuencia el interdicto de retener de conformidad con lo prescrito en el art. 574 del Cód. de Proc.





INT

aun contra el auto que la ordena judicialmente, siempre que éste se hubiese dictado en juicio sumario y sin audiencia del poseedor—Jur. Civ., tom. 2, pág. 212, Ser. 2^a.

2. Interdicto de retener—Justificada la posesión, es procedente aún contra cualquier de los copropietarios que pretenda derechos exclusivos sobre el inmueble—Jur. Civ., tom. 2, pág. 396, Ser. 2^a.

3. Interdicto de retener—La posesión, debe ser rechazado si está ejecutoriada la sentencia de desalojo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 205, Ser. 1^a.

4. Interdicto de retener — Es improcedente tratándose de muebles—Jur. Civ., tom. 8, pág. 401, Ser. 1^a.

5. Interdicto de retener—Es procedente aún contra el

2—Con arreglo al art. 574. Cód. de Proc. para que tenga lugar el interdicto de retenerse requiere que el que lo intente se halle en actual posesión y que se haya tratado de inquietarlo en ella por actos materiales. La circunstancia de ser mero copropietario no puede privarle del derecho de deducir este interdicto, por cuanto el derecho de propiedad, no confiere sino un derecho á la posesión, y no la posesión misma. Por otra parte, el art. 2680 del Cód. Civ. dice, que ningún condómino puede, sin el consentimiento de los demás, ejercer sobre la cosa común ni sobre la menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales ó jurídicos que importen el ejercicio actual é inmediato del derecho de propiedad. La oposición de uno basta para impedir lo que la mayoría quiera hacer á este respecto.

3—Este sumario está muy mal redactado, pues parece que una sentencia de desalojo pudiera dar lugar á un interdicto de retener, lo que no es exacto sino cuando el interdicto se deduce, no en el carácter de inquilino sino en el de poseedor. El caso práctico fué el siguiente: Demandada una persona por desalojo, y seguidos los trámites legales se dictó sentencia ordenando el desalojo, la que fué consentida: al llevar á cumplimiento a providencia, el inquilino dedujo el interdicto de retener fundado en su mejor derecho á la propiedad, el que fué rechazado porque no negó su carácter de inquilino al ser notificado de la demanda de desalojo.

4—Art. 2487. Cód. Civ.

5—El art. 474 del Cód. de Proc. exige dos requisitos para que proceda el interdicto de retener, el segundo de ellos dice, que se haya tratado de inquietarlo en ella por actos materiales. El hecho de ir á tomar posesión de un inmueble poseído por otro es un acto material que importa la tur-

INT

auto judicial que ordena la posesión sin audiencia del poseedor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 405, Ser. 1^a.

6. Interdicto de retener—Procede siempre que se trate de cambiar la posesión sin audiencia del poseedor—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 1^a.

7. Interdicto de retener—Justifica la posesión es procedente aún contra la resolución judicial, dictada sin audiencia del poseedor—Jur. Civ., tom. 3, pág. 355, Ser. 2^a.

Interés—Véase: *Mandatario*, núm. 8.

1. Intereses—A estilo de Banco, la convención de pagarlos sobre una suma determinada, se entiende que dispone que la liquidación debe hacerse tomando por tipo el interés que aquel fije á los depósitos, pero no la capitalización anual de los espresados intereses — Jur. Civ., tom. 7, pág. 283, Ser. 1^a.

2. Intereses— Del capital colocado por el mandatario, corresponde al mandante aún cuando sea mayor que el de la plaza—Jur. Civ., tom. 7, pág. 521, Ser. 1^a.

3. Intereses—Debidos por la hipoteca solo pueden car-

bación del derecho, que ese hecho sea por orden judicial no le quita el carácter de acto material contra la posesión, desde que ese acto no es la ejecución de una sentencia ejecutoriada, sino un simple mandamiento sin audiencia ni juicio alguno. La resolución mandando dar la posesión no puede invocarse en contra del poseedor actual que no ha sido oído pues no puede en manera alguna perjudicaria.

6—Véase nota precedente.

7—Véase nota 6.

1—Las palabras *pagar intereses á estilo de banco sobre una suma determinada*, tienen en la práctica de los Tribunales por única significación, que la liquidación de ellos ha de hacerse tomando por tipo la tasa fijada por el Banco; pero no implica una capitalización, sino media para ello una orden ó una convención espresa de acuerdo con el principio sancionado en el art. 623 del Cód. Civ.

2—Así se desprende de los principios sentados en los arts. 1909 y 1911 del Cód. Civ.

3—Art. 3936, Cód. Civ.



INT

garse por dos años anteriores á la fecha de la iniciación del juicio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 596, Ser. 1ª.

4. Intereses—Que no se han pedido al entablar la demanda no pueden serlo durante la secuela del juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 124, Ser. 1ª.

5. Intereses—A estilo de Banco, no importa la capitalización anual para el pago de intereses compuestos —Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 1ª.

6. Intereses—Que judicialmente deben pagarse, son los que el Banco cobra por descuentos de letras—Jur. Com., tom. 6, pág. 102, Ser. 1ª.

Intereses—Véase: *Obligación protestada*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 33—*Nulidad*, número 22.

1. Intereses compuestos—Solo pueden exigirse cuando

4—La demanda y contestación limitan y establecen las pretensiones de las partes, y los jueces no pueden ir mas allá sin incurrir en *ultra petitis*, las peticiones posteriores no deben tomarse en cuenta al dictar sentencia.

5—En el lenguaje comercial que es el más exigente para cobrar intereses, se entiende que los *corridos á estilo de Banco* son los simples y no los compuestos. La usura se ha interpretado siempre restrictivamente: así lo entienden también los arts. 225, 541, y 713 del Cód. de Com. El art. 718 establece como escepción que puede cobrarse intereses de los intereses, ó por demanda judicial ó por convención, con tal que en la demanda ó en la convención se trate de intereses debidos por lo menos de un año. Véase verb. Intereses núm. 1; Intereses compuestos, núm. 1; F. S. C. F., tom. 5, Ser. 1ª, pág. 420; tom. 8, Ser. 1ª, pág. 171; tom. 9, págs. 5 y 243, Ser. 1ª; tom. 14, pág. 183, Ser. 1ª.

6—Véase núms. 1 y 6 con sus notas.

1—Art. 718, Cód. de Com. Este art. es idéntico al 1154 del Cód. Napoleón, comentado por Marcadé y Pont, explicación del Cód. Napoleón, tom. 4º págs. 441 y 444; Duranton, Droit Civ. français, tom. 10, pág. 493; Toullier, tom. 6, pág. 272; Dalloz, Rep. de Legislación, tom. 36, pág. 829, núm. 134. Habiendo pacto ó demanda judicial para el pago de intereses éstos deben ser pagados. Por otra parte, la Cámara ha establecido en sus fallos que cuando no se han pactado intereses ó cuando no se cobran en la demanda no se deben pagar. Véase: Inst. tom. 1, verb. Intereses, núms. 1484, 1485 y 1486 y notas.



INT--INV

ha mediado convención expresa ó demanda judicial al vencimiento de cada anualidad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 373. Ser. 1ª.

Interpelación judicial—Véase: *Prescripción*, núms. 19 y 20.

Intérprete—Véase: *Declaraciones*, núm. 4.

1a. Intervención—La falta de la del Ministerio de Menores en diligencias útiles y necesarias y que debieran de llevarse á cabo aún cuando hubiese intervenido, no es causa de nulidad—Jur. Civ., tom. 6, pág. 312, Ser. 1ª.

2. Intervención—Del Ministerio de Menores, cuando se interesa bienes de incapaces, su falta anula el juicio—Jur. Com., tom. 5, pág. 457, Ser. 1ª.

1b. Interrupción—Empieza al presentarse la objeción á una diligencia de prueba y no al resolverla el Juzgado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 274, Ser. 1ª.

Interrupción—Véase: *Prescripción*, núms. 17, 18 y 20—*Aclaración*, núm. 1.

Inventariadores—Véase: *Honorarios*, núm. 18.

Inventario—Véase: *Testamentaria*, núm. 2.

1a—La nulidad en este caso tendrfa que alegarse como recurso: el de nulidad solo es procedente cuando lo es el de apelación: en el presente caso no hay agravio causado, porque no hay perjuicio, que es el fundamento del recurso de apelación—Arts. 226 y 238 del Cód. de Proc.—Véase: Inst. tom. 1, verb. Nulidad, núm. 1841 y nota.

2—El art. 494 del Cód. Civ. así lo establece. Esta nulidad es manifiesta, pues la ley espresamente lo ha declarado nulo—art. 1038 *ibid*—Véase: Inst. tom. 1, verb. Nulidad, núm. 1830 y nota.

1b—Toda petición en que se objeta una diligencia de prueba constituye un incidente que debe sustanciarse y resolverse en los mismos autos, y produce el efecto de suspender, con relación á dicha diligencia, el término probatorio, desde que esta no puede evacuarse mientras se halla pendiente de resolución el incidente.





1. **Jactancia**—Solo en este caso puede, el que no quiere, ser obligado á demandar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 339, Ser. 1^a.

2. **Jactancia**—Cuando el demandado no solo reconoce el hecho en que se funda la demanda, sino que exhibiendo títulos asevera encontrarse en posesión del bien materia del juicio, el Juzgado debe recibir la causa á prueba: la sentencia dictada sin ese trámite adolece de nulidad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 397, Ser. 1^a.

1—Bajo apercibimiento que de no hacerlo, caducará todo el derecho pretendido y será condenado en las costas.—Art. 428 Cód. de Proc.

2—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos. Los antecedentes del caso son los siguientes: el actor entabla acción de jactancia fundado en que posee á título de dominio el terreno á que se refieren las escrituras que acompaña, y agrega, que ha sabido por informes recibidos que el demandado pretende haber comprado el mismo terreno en remate público, mandado hacer por la Municipalidad. El demandado, bajo manifestación jurada dijo testualmente lo siguiente: «Que hace mucho tiempo ejerce el derecho de propiedad sobre el terreno, que lo adquirió en remate público, según consta de los respectivos títulos que existen en su poder». El Juzgado falló diciendo que en presencia de la negativa hecha bajo juramento de la jactancia atribuída al demandado y atento lo dispuesto en el art. 429 Cód. de Proc. se mandó entregar las actuaciones al actor. Esta resolución fué atacada de nulidad é injusticia. La minoría de la Cámara sostuvo que la sentencia no era nula, porque el juicio se había tramitado con sujeción al tít. XI, Cód. de Proc.: que el Juez ordenó la manifestación del art. 427: que de ella resultó la negación de la jactancia y que entonces ha decidido observando el art. 429: que esta es la forma sencilla y breve que corresponde al juicio de jactancia. La mayoría dijo: que para ser procedente la acción de jactancia es indispensable que el actor se halle en posesión á título de dominio, de lo

JAC

3. Jactancia—El auto que hace efectivo el apercibimiento por estar vencido el término es inapelable — Jur. Civ., tom. 8, pág. 508, Ser. 1ª.

4. Jactancia—Puede fundarse en una protesta notificada judicialmente, pues se considera manifestación fuera de juicio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 176, Ser. 1ª.

bienes respecto de los cuales el demandado se hubiese atribuido derechos propios fuera de juicio—art. 425—El actor tiene que justificar que se halla en posesión de los bienes á que se refiere la jactancia, por cuanto este hecho es fundamental en la demanda: por consiguiente, el trámite de la prueba es esencial, pues la cuestión es mista, hay hechos controvertidos. La tramitación establecida para el juicio de jactancia en el tít. XI, es deficiente, no prevee un caso comprendido en los términos de su definición, ni prevee el caso en el que el demandado contesta afirmativamente agregando que se halla en posesión de los bienes: los arts. 425 y 428, definen y prevén las contestaciones posibles del demandado; el 429, prevee el caso de una manifestación jurada en que se niega la jactancia atribuida y entonces el incidente queda terminado con la entrega de las actuaciones al actor: pero si el demandado confiesa haberse atribuido fuera de juicio, derechos sobre determinados bienes, pero niega que esos bienes constituyan el patrimonio del actor ¿cómo se resuelve el caso? esto es lo que no se ha previsto en el tít. mencionado y lo que no puede resolver sino el trámite de la prueba. Véase, verb. Prueba, núm. 22.

3—El art. 428 del Cód. de Proc. dice: vencidos los diez días sin haberse deducido la acción, la parte podrá pedir la efectividad del apercibimiento. Vencido este término expresamente acordado por la ley, pierde la parte todo derecho.

4—Parece que hubiese contradicción entre los mismos términos del sumario, mas no es así. El art. 425 del Cód. de Proc., acuerda la acción de jactancia contra toda persona capaz de ser demandada y que *fuera de juicio*, se hubiese atribuido derechos propios á bienes que constituyan el patrimonio de un tercero. Aquí la cuestión se reduce á dar á la locución *«fuera de juicio»* su genuina significación jurídica. La ley 1ª, tít. 23, Part. 3ª, define lo que es *juicio*, pero solo en relación á la sentencia: esta palabra tiene un significado más lato y puede decirse que *«juicio»* es un acto legítimo que se ejerce por dos ó más personas ante un Juez y sobre una cosa: ó bien, la discusión legítima entre actor y demandado ante un Juez competente, para determinar ó salvar un derecho ó castigar un delito. Febrero reformado por Caravantes, tom. 3, pág. 537; Ortiz de Zúñiga, tom. 1, pág. 381; Escribche, verb. *juicio*; Castro, Práctico Forense, núm. 8. Cuando una persona produce afirmaciones que siembran la duda



JAC—JUE

5. Jactancia—Cuando el demandado reconoce el hecho y asevera, exhibiendo título, tener la posesión, debe recibirse la causa á prueba—Jur. Civ., tom. 3, pág. 333, Ser. 2ª.

Jactancia—Véase: *Acción de jactancia*, núm. 1—*Tercero*, núm. 2.

1. Jueces—Pueden suspender de oficio la tramitación, á objeto de procurar el avenimiento de las partes—Jur. Com., tom. 5, pág. 202, Ser. 1ª.

2. Jueces—No pueden declarar improcedente la acción deducida, cuando el demandante y demandado están de acuerdo sobre qué puntos debe recaer la decisión judicial—Jur. Civ., tom. 7, pág. 394, Ser. 1ª.

3. Jueces—No están obligados á juzgar y resolver todas las cuestiones que propongan las partes, sino las que conceptúen pertinentes al litigio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 482, Ser. 1ª.

4. Jueces—Deben limitarse á fallar sobre la acción enta-

y la desconfianza sobre los derechos de un tercero dejándolos en situación de peligrosa incertidumbre, procede la acción de jactancia para que esos derechos se aclaren, y se restablezca la confianza. Las protestas formuladas ante los Tribunales producen el efecto de introducir la incertidumbre en los derechos impugnados, y no puede sostenerse que sean actos producidos en juicio según la acepción dada por la doctrina. La protesta es un acto aislado, exclusivo del que la hace atribuyéndose derechos que cree le corresponden, y que afectados ó desconocidos por un tercero, quiere conservarlos y salvaguardarlos. Esto lo puede hacer ya sea ocurriendo á un Escribano ó á los Tribunales; tanto en uno como en otro caso el acto no pasa en *juicio* en el sentido jurídico de la palabra.

5—Esta resolución está de acuerdo con el fallo de la Cámara publicado en el tom. 7º, pág. 397, Ser. 1ª. Véase el núm. 2 del verb. *Jactancia* y su nota.

1—Este sumario no es exacto: el fallo de la Cámara no dice que los Jueces estén autorizados á suspender el procedimiento: solo dice que están facultados para procurar poner término á los pleitos según lo prescribe el art. 64, Cód. de Proc.

3—Véase: Inst. tom. 1, verb. *Jueces*, núm. 1510; *Nulidad*, núm. 1842, y notas respectivas.

4—Art. 216, Cód. de Proc. Véase: Inst. tom. 1, verb. *Acción*, núm. 25 y nota.



JUE

blada, absolviendo al demandado si ella no se justifica—Jur. Civ., tom. 7, pág. 551, Ser. 1ª.

5. Jueces—Solo están obligados á estudiar y resolver los puntos de hecho ó de derecho que estimen pertinentes al caso *sub-judice*—Jur. Civ., tom. 8, pág. 461, Ser. 1ª.

6. Jueces—Están obligados á estudiar y resolver todas las cuestiones discutidas por las partes—Jur. Com., tom. 6, pág. 544, Ser. 1ª.

5—Véase notas 3 y 4 precedentes.

6—Se entiende que todas las cuestiones que hubieren sido discutidas y establecidas en el cuasi-contrato de litiscontestación, pues las que se susciten en la secuela del juicio no pueden ni deben ser materia de un pronunciamiento. La sentencia debe contener decisión expresa y terminante de cada una de las cuestiones aducidas en el juicio, dice la ley. Esta resolución está en oposición con el caso resuelto en el núm. 5. En el sumario que anotamos se declaró nula una sentencia porque habiéndose declarado improcedente una demanda por una de las causas alegadas, el Juez omitió estudiar y resolver las demás. La Cámara dijo: que refiriéndose el Cód. de Proc., en su art. 217, á las solemnidades de que deben ser revestidas las sentencias establece, que el Juez consignará separadamente los hechos alegados por las partes y «hará mérito de cada uno de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discusión» y agregando el art. 218 que «cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente á cada uno de ellos». Si las sentencias de primera instancia no fuesen susceptibles de ser revocadas, no habría necesidad de pronunciarse sobre cada uno de los puntos discutidos, pero como sucede lo contrario, y como puede suceder que la sentencia fuese revocada por haber sus fundamentos consultado mal la ley, sucedería que la Cámara no podría pronunciarse sobre los demás puntos discutidos, porque el Tribunal no puede resolver en grado de apelación ninguna cuestión que no hubiese sido materia de un fallo ante el inferior, pues la jurisdicción del superior nace de la apelación. Ley 1ª, tít. 23, part. 3ª; arts. 256 y 267 del Cód. de Proc. En el caso resuelto en el núm. 5, decía la Cámara que los Jueces solo están obligados á estudiar y resolver los puntos de hecho ó de derecho que estimen pertinentes al caso *sub-judice*, y cumplen con relacionar la causa consignando lo que resulte respecto á los hechos alegados por las partes, haciendo mérito de los puntos pertinentes de derecho que han discutido. En este caso se ha creído que no necesita el Juez pronunciarse sobre todos los puntos, sino que basta la enunciación de los





JUE

Jueces—Véase: *Testamentaria*, núm. 2—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Demandas*, núm. 25—*Nulidades*, núm. 2—*Acción de nulidad*, núm. 1—*Tutor especial*, núm. 3—*Fallido*, núm. 3—*Notificación*, núm. 1—*Hijos*, núm. 3.

Jueces árbitros—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 5.

1. Jueces de comercio—Sus atribuciones, jurisdicción y competencia—Jur. Civ., tom. 7, pág. 11, Ser. 1ª.

2. Jueces de comercio—Son los únicos competentes para conocer en los juicios que inicie el Síndico sobre nulidad de los actos del fallido, aún cuando ese acto importe una trasferencia de bienes raíces—Jur. Com., tom. 6, pag. 336, Ser. 1ª.

Jueces de comercio—Véase: *Jueces del crimen*, núm. 2.

1. Jueces de mercado—Su jurisdicción y competencia—Jur. Civ., tom. 7, pág. 9, Ser. 1ª.

1a. Jueces de paz—Pueden habilitar la feria en los casos de urgencia—Jur. Civ., tom. 6, pág. 265, Ser. 1ª.

2. Jueces de paz—Sus atribuciones, jurisdicción y competencia en la Capital federal—Jur. Civ., tom. 7, pág. 4, Ser. 1ª.

Jueces de la capital—Véase: *Comerciante*, núm. 5.

Jueces de lo civil—Véase: *Tribunales de comercio*, número 1.

1. Jueces de lo correccional—Su competencia y jurisdicción en la capital federal—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 1ª.

1. Jueces de lo criminal—Las atribuciones y competencia hechos, haciendo mérito de los que crea pertinentes. Parece que el fallo que estudiamos es el que está en lo justo, interpretando correctamente la letra y alcance de la ley. La sentencia debe resolver todos los puntos que han sido materia del litis-contrato y la omisión de cualquiera de ellos en causal suficiente de nulidad.

1a.—La ley no hace distinción entre las causas de Justicia de Paz y las de mayor cuantía, para los efectos de la feria que ella acuerda á los Tribunales: pueden por consiguiente habilitar la feria para los casos de urgencia.

JUE

en la capital de la República—Jur. Civ., tom. 7, pág. 12, Ser. 1ª.

Jueces delegados—Véase: *Recusación*, núm. 5.

Jueces de lo civil—Su jurisdicción y competencia en la capital de la República—Jur. Civ., tom. 7, pág. 11, Ser. 1ª.

Jueces federales—De la capital, su jurisdicción y competencia—Jur. Civ., tom. 7, pág. 19, Ser. 1ª.

1. **Juez**—A quien se cometen diligencias por medio de exhortos, no pueden ser recusados ante el Juez exhortante—Jur. Com., tom. 5, pág. 45, Ser. 1ª.

2. **Juez**—Ante quien se inicia la acción, es el competente para ordenar el arraigo del juicio si el actor confiesa estar domiciliado fuera de su jurisdicción—Jur. Com., tom. 5, pág. 50, Ser. 1ª.

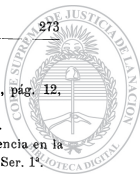
3. **Juez**—El que ha conocido y resuelto el juicio ejecutivo es el único competente para conocer en el ordinario que al vencido acuerda la ley—Jur. Com., tom. 5, pág. 317, Ser. 1ª.

4. **Juez**—Que ejerce jurisdicción en el juicio de moratorias es el competente para entender en el de la quiebra—Jur. Com., tom. 5, pág. 98, Ser. 1ª.

2—Es un derecho claramente conferido al demandado por el art. 85 del Cod. de Proc. el de exigir á su contraparte el arraigo del juicio en este caso, el que quedaría ilusorio si el Juez no tuviese la facultad de hacerlo efectivo, fijando la suma por la cual el arraigo debe verificarse.

3—La demanda que promueve el ejecutado después de vencido en el juicio ejecutivo es el ordinario que tiene derecho á promover con arreglo al art. 500, Cód. de Proc. Este juicio considerado como una emergencia del juicio ejecutivo, debe estimarse y producir los mismos efectos que la reconvenición, en cuyo caso, el Juez que ha conocido en este es el competente para conocer del ordinario, con arreglo á la ley 32, tít. 2, Part. 3ª.

4—Del espíritu del art. 1730, Cód. de Com., se desprende que durante las moratorias los que las solicitan están sujetos á la jurisdicción del Juez ante quien tramitan. Conforme con el art. 1738, concedida la suspensión provisoria, cuando se pide la quiebra queda esta en suspenso





JUE

5. Juez—Cuando en la obligación se estipulan intereses, éste no tiene facultad para modificar la convención de las partes, mandando que se paguen desde el día de la demanda—Jur. Com., tom. 6, pág. 584, Ser. 1^a.

Juez—Véase: *Demanda*, núm. 1—*Prejuzgamiento*, núm. 2—*Costas*, núm. 25—*Acciones*, núm. 4—*Cuestiones*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 22.

Juez comisario—Véase: *Decretos*, núm. 1.

1. Juez competente—En el juicio ordinario, no puede ser recusado al iniciarse el ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia—Jur. Civ., tom. 6, pág. 458, Ser. 1^a.

2. Juez competente—Para entender en el juicio sobre información de pobreza, lo es el que entiende en los autos para cuya secuela se pide la declaración—Jur. Civ., tom. 2, pág. 490, Ser. 2^a.

Juez competente—Véase: *Acción de jactancia*, núm. 1.

Juez de comercio—Véase: *Cámara comercial*, núm. 1.

Juez del concurso—Véase: *Fallido*, núm. 4.

hasta tanto se pronuncie el Juzgado sobre la concesión ó denegación de las moratorias, circunstancia que comprueba la conexión que existe entre uno y otro juicio. De aquí se sigue que es un derecho de los acreedores pedir la quiebra ante el Juez que conoce de las moratorias, y por lo tanto, no puede ser eludido por los que invocaron las moratorias, ocurriendo ante otro Juez á presentarse en quiebra.

5—En la obligación se estipuló que se pagarían intereses pero sin fijar la tasa, en cuyo caso, los intereses se deben desde la fecha de la obligación—art. 713, Cód. de Com.

1—Se trata, como es de consiguiente, de una recusación sin causa. Como los procedimientos que deben seguirse para el cumplimiento de una sentencia, no importan la iniciación de un juicio nuevo, y como esta clase de recusaciones, solo es permitida al actor al entablar la demanda, y al demandado antes ó al tiempo de contestarla y como el caso *sub judice* no se encuentra en ninguno de esos casos, se sigue la exactitud del principio sentado en el sumario.

2—Cuando la declaración es posterior á la iniciación del juicio principal, y en todos los casos en que la información sea una incidencia de él.

JUE-JUI



1a. Juez del crimen—La disposición que ordena se le remitan los documentos argüidos de falsos, si en las diligencias de comprobación resultaren indicios, no es aplicable si antes de practicar alguna diligencia, el que los presentó desiste de valerse de su contenido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 440, Ser. 1ª.

2. Juez del crimen—En las causas de quiebra, no pueden fundar su fallo en las constancias del expediente remitido por el Juez de Comercio, el cual solo debe servir como sumario del juicio criminal que debe seguirse por todos sus trámites—Jur. Com., tom. 5, pág. 145, Ser. 1ª.

Juez de lo civil—Véase: *Cámara comercial*, núm. 1.

Juez exhortado—Véase: *Requisitoria*, núm. 1.

Juez exhortante—Véase: *Jurisdicción del Juez exhortante*, núm. 1.

Juez recusado—Véase: *Recusación*, núm. 4 — *Nulidad*, núm. 16.

1b. Juicio—Seguido contra un ausente, no puede en nin-

1a—El art. 160 del Cód. de Proc. se refiere á los documentos que habiendo sido argüidos de falsos han sido objeto del juicio de comprobación, y cuando de las diligencias de prueba producidas resultan indicios de falsedad: en el caso ocurrente ni se había practicado diligencia alguna, ni se había seguido el juicio de comprobación, habiendo desistido el interesado de servirse de ellos: este desistimiento es el uso de un derecho que espresamente acuerda el art. 154 del Cód., siendo sus efectos legales, no la remisión al Juez del Crimen, sino que los documentos sean *desechados del proceso*.

2—Haciendo servir de sumario el expediente, el Juez debe completarlo con la declaración indagatoria y confesión del acusado, reproduciendo en ella los cargos que en el Trib. de Com. hubiesen motivado la condena-ción y haciendo además al reo los otros cargos que surjan de los antecedentes consignados en dichos autos: aún en el caso de no ser fraudulenta la quiebra, siempre sería punible el reo si la quiebra fuese gravemente culpable, correspondiendo su castigo á la justicia ordinaria. Véase: arts. 328, 332 y 333, Cód. Pen. anterior.

1b—El significado jurídico de las palabras *rebelde* y *ausente*, es distinto: el rebelde desobedece el mandato judicial; el ausente no es culpable



JUI

gún caso conferir los derechos que la ley acuerda contra el rebelde—Jur. Com., tom. 5, págs. 24 y 37.

2. Juicio—En que habiendo menores interesados, no haya tomado la intervención que le corresponde el Ministerio de Menores, es nulo—Jur. Civ., tom. 1, pág. 5, Ser. 2ª.

3. Juicio—Debe continuar entre las mismas personas que lo iniciaron. Los sucesores á título singular deben continuarlo á nombre del cedente—Jur. Com., tom. 6, pág. 411, Ser. 1ª.

Juicio—Véase: *Nulidad*, núm. 8—*Rebeldía*, núm. 1.

Juicio civil—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 3—*Acusado*, núm. 1.

Juicio criminal—Véase: *Juez del crimen*, núm. 2—*Acusado*, núms. 1 y 2.

Juicio de divorcio—Véase: *Declaratoria*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 3.

1. Juicio ejecutivo—Seguido contra menores y ausentes, mientras no se pruebe culpa ó negligencia de su parte. Véase: Inst. tom. 1, verb. Juicio, núm. 1551 y nota. Verb. Ausente, núm. 2 de este tomo.

2—Los arts. 59 y 494 del Cód. Civ. anulan todos los actos y contratos en que los bienes ó las personas de los menores ó incapaces esten interesados, si en ellos no ha tomado la intervención que le corresponde el Ministerio Pupilar—Véase: Inst. tom. 1, verb. Nulidad, núms. 1830 y 1841; Ministerio de Menores, núm. 1762 y nota.

3—Uno de los efectos del cuasi-contrato de litiscontestación es el de que deba continuar entre las personas que quedaron sujetas á ese vínculo y en este concepto la ley 23, tít. 5, Part. 3ª, establece que el procurador puede continuar el pleito aunque falleciese el poderdante. De acuerdo con este principio el art. 497 del Cód. de Com. prescribe que la liquidación de una sociedad se opere bajo la misma razón social.

1—En el caso ocurrenente la nulidad fué opuesta como escepción, la que se declaró improcedente por no estar comprendida entre las enumeradas en el art. 488 del Cód. de Procedimientos. La intervención del Ministerio Pupilar solo se exige desde la citación de remate, porque el juicio ejecutivo es esencialmente formal, hasta el punto de que algunos le han llamado simple procedimiento ejecutivo, negándole el carácter de verdadero juicio. Nosotros podríamos decir que es un juicio especial y esencialmente



JUI

la intervención del Ministerio Pupilar, ordenada por la ley, solo es indispensable al ser citado de remate, su falta de intervención en las diligencias anteriores no anula el procedimiento—Jur. Civ., tom. 7, pág. 71. Ser. 1ª.

Juicio ejecutivo—Véase: *Vencido*, núm. 1—*Juez*, núm. 3—*Prescripción*, núm. 6—*Auto*, núm. 7—*Auto aprobatorio*, núm. 1—*Recurso*, núm. 3—*Prejuzgamiento*, núm. 4—*Sentencia*, núm. 10—*Cosa juzgada*, núm. 2—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Incompetencia*, núm. 10—*Litispendencia*, núms. 4, 5 y 6—*Fianza*, núm. 4—*Falsedad de la ejecutoria*, núm. 1.

Juicio general—Véase: *Acreedores*, núm. 3.

1a. Juicio ordinario—Es aplicable á las ventas que en él se hagan, lo dispuesto en el art. 522 del Cód. de Proc. respecto al juicio ejecutivo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 519, Ser. 1ª.

Juicio ordinario—Véase: *Juez competente*, núm. 1—*Demencia*, núm. 1—*Reclamo de bienes*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 3—*Liquidación*, núm. 3—*Aceptante*, núm. 4—*Arbitros*, núm. 4—*Ausente*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núm. 7—*Prejuzgamiento*, núm. 4—*Sentencia*, núm. 10—*Cosa juzgada*, núm. 2—*Litispendencia*, núms. 4, 5 y 6—*Falsedad de la ejecutoria*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 6—*Denuncias*, núm. 1.

Juicio principal—Véase: *Competencia*, núm. 6.

1b. Juicio sucesorio—Si bien su conocimiento pertenece formal, como se infiere de los arts. 471 y 500 del Cód. de Proc. El Juez examinará cuidadosamente el *instrumento* dice el art. 471 citado, y el 489 establece, que el deudor podrá alegar de nulidad, por violación de las *formas* que para ello se han establecido. Esto confirma que el juicio ejecutivo es esencialmente formal, lo que se comprende sin dificultad desde que toma por punto de partida ciertos instrumentos y ampara al deudor en compensación, con determinadas formas que hacen innecesaria la intervención del Ministerio Pupilar.

1a—Aunque esta disposición se encuentra entre las disposiciones relativas al juicio ejecutivo, es sin embargo aplicable á todas las ventas judiciales según práctica constante de nuestros Tribunales.

1b—Nuestro Código establece en materia de sucesiones el principio de la



JUI

al Juez del último domicilio y comprende todos los bienes muebles y raíces, los existentes en la República son regidos exclusivamente por nuestras leyes y el conocimiento de las acciones que á título hereditario se deduzcan, corresponde á los Tribunales argentinos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 571, Ser. 1^a.

Juicio sucesorio—Véase: *Patria potestad*, núm. 3.

Juicio sumario—Véase: *Esposos*, núms. 1 y 2—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Alimentos*, núms. 7 y 11—*Información*, núm. 2—*Desalojo*, núm. 1.

Juicio testamentario—Véase: *Herederos*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 2.

1. Juicio universal—En este caso no tienen aplicación las disposiciones especiales que señalan determinados jueces para entender en determinadas acciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 336, Ser. 1^a.

Juicio universal—Véase: *Competencia*, núm. 2.

Juicio verbal—Véase: *Contador*, núm. 2.

sucesión única, pero no le da tal latitud que comprenda también los bienes raíces situados en la República, sometiéndolos á la jurisdicción de Tribunales extranjeros, lo cual no carecería de graves inconvenientes. Este principio no tiene en la jurisprudencia otro alcance según se deduce de la doctrina de los autores, con muy raras escepciones, como puede verse en Goyena «Concordancias», tom. 1^o, pág. 20, art. 8; Caravantes, «Procedimientos», lib. 2, núm. 793 y otros. El Dr. Veiez Sarsfield, esponiendo la disposición que establece la sucesión única, en la nota del art. 3283, Cód. Civ. la limita en los términos expresados y exceptúa los bienes inmuebles: «puede llamarse una escepción á este principio general, lo que está dispuesto respecto á la trasmisión de los bienes raíces que forman una parte del territorio del Estado y cuyo título debe siempre ser trasferido de conformidad á las leyes de la República, art. 10 de este Cód».

1—El art. 3284 del Cód. Civ. declara: que son de la competencia del Juez que conoce del juicio testamentario, las acciones personales de los acreedores del difunto, entre otros casos que enumera. Este principio es del más riguroso orden público, tanto que es universal en todas las legislaciones: La razón es obvia, los juicios universales atraen á sí todos los incidentes.

JUI—JUR

Juicios criminales—Véase: *Libros de comercio*, núm. 4—*Acusador*, núm. 2—*Fallidos*, núm. 1.

1a. Juicios de disenso—El Juez de primera Instancia, es Juez privativo y sus resoluciones son inapelables—Jur. Civ., tom. 6, pág. 281, Ser. 1ª.

Juicios informativos—Véase: *Prescripción*, núm. 13.

1b. Juicios sumarios—En ellos la escepción de incompetencia debe ser resuelta con lo principal y si antes se resolviera, el auto sería inapelable—Jur. Civ., tom 7, pág. 92, Ser. 1ª.

Juicios testamentarios—Véase: *Prescripción*, núm. 13.

Juicios universales—Véase: *Apoderado*, núm. 1—*Jurisdicción federal*, núm. 1.

1c. Jurado—Mientras no exista el de imprenta, ésta se

1a—Cuando los padres están obligados á manifestar los motivos de su disenso, la causa «será calificada por el Juez competente *sin forma de proceso en juicio privado y meramente informativos*». Los menores de edad que no tengan tutores, deben pedir su asentimiento al *Juez de primera Instancia del territorio*, quien podrá pedir las informaciones necesarias para prestarlo. Los términos usados en los arts. 163 y 165 del Cód. Civ., demuestran el propósito de la ley de hacer al Juez de primera Instancia, Juez privativo en los casos en que sea llamado á prestar su consentimiento para la celebración de un matrimonio. Era práctica antes, que esa facultad la ejerciera el Presidente del Trib. de Justicia.

1b—Nada es más contrario al objeto que la ley ha tenido en vista al establecer los juicios sumarios, que juzgar en detalle las escepciones que pudieran oponerse, concediendo la apelación en cada caso; en el juicio verbal deben oponerse todas las escepciones, pruebas y defensas y solo es permitido apelar de la sentencia que se dicte en definitiva.

1c—Ha sido esta una cuestión de las más debatidas en nuestros Tribunales hasta que la jurisprudencia ha venido á sentar de una manera definitiva el principio consagrado en el sumario, sin que pueda argumentarse en contra con los F. S. C. N. registrados en los toms. 1º, pág. 130; 3º pág. 372, Ser. 1ª; y tom. 1º, pág. 363, Ser. 2ª; pues estos solo establecen la incompetencia de la justicia federal para conocer en los delitos de imprenta con arreglo al art. 32 de la Const. Nac. que dispone, que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ó establezcan sobre ella la jurisdicción nacional. Pero ninguno de estos fallos contiene



JUR

encuentra sometida á la jurisdicción común—Jur. Crim., tom. 6, pág. 311, Ser. 1^a.

1. Juramento del árbitro — Sea juris ó arbitrador, ó amigable componedor, su falta vicia de nulidad el laudo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 491, Ser. 1^a.

la declaración de que por la prensa solo pueda cometerse delitos de imprenta. La prohibición del art. 32 citado, solo se refiere á la justicia federal, prohibición que no puede hacerse extensiva á los Tribunales de la Capital. Consecuente la ley con estos principios, estableció el Código Penal anterior, en su art. 4, el principio de que los delitos de imprenta no quedaban comprendidos en sus disposiciones. Sin embargo el Código Penal vigente castiga en su art. 184 la injuria cometida por medio de la prensa: pero este artículo se refiere á delitos comunes cometidos por medio de la prensa, nos e refiere á los delitos de imprenta propiamente llamados tales. El art. 64 de la Ley Org. de los Tribs. de la Cap., (igual al art. 53 de la ley anterior) al determinar las causas cuyo conocimiento corresponde á los jueces de lo criminal dice: «Mientras no se establezca el *juicio por jurados*, los jueces de lo criminal conocerán: 1º *En todos los delitos*, en que etc. Se ha querido interpretar que esta ley ha venido á solucionar la cuestión, pero no es así, pues el juicio por jurados á que se refiere la ley, no es el jurado de imprenta sino el jurado que deberá entender en los delitos comunes: y debe observarse que aún en el caso de que la Ley Org. hubiese querido referirse á ambos jurados, tampoco su precepto sería obligatorio, porque esta ley fué dictada por el Congreso y hemos visto que la Constitución le prohíbe dictar leyes sobre esta materia. De aquí se desprende que la jurisprudencia no ha sentado la sana doctrina y que los delitos de imprenta tienen su jurisdicción especial establecida por la ley del año 28, decreto de 28 de Octubre 1811 y ley de 1822, cuyo verdadero alcance fué fijado en la ley de 17 de Setiembre de 1857. El Fiscal Dr. Cortés sostiene que habiendo existido en la Provincia de Buenos Aires disposiciones que definían, clasificaban y penaban los delitos de imprenta, atribuyendo su juzgamiento indistintamente al jurado ó los jueces ordinarios, los cuales debían castigarlos con las penas ordinarias establecidas por las leyes españolas modificada por leyes patrias, nada innovó ni pudo innovar el Cód. Pen., por lo mismo que se abstuvo de legislar sobre esta materia.

1—Los árbitros solo quedan investidos legalmente del cargo, cuando lo aceptan en la forma y con las solemnidades prescritas por las leyes: antes de llenado este requisito, no pueden invocar el carácter de Jueces, ni ejercer funciones de tales: sus actos se consideran como no existentes. Ahora bien, el art. 799, Cód. de Proc. dispone: «Regirá respecto de los



JUR

2a. Juramento—De los peritos, su falta no es causa de nulidad del dictamen—Jur. Civ., tom. 7, pág. 521, Ser. 1ª.

Juramento Véase: *Acciones personales*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 3—*Arbitros arbitradores*, núm. 1.

Juramento estimatorio—Véase: *Daños y perjuicios*, número 6—*Gastos*, núm. 4.

1. Jurisdicción—Para determinarla en las demandas por cobro de alquileres, solo debe atenderse á la cantidad ejecutada y no al monto total del contrato de locación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 488, Ser. 2ª.

2b. Jurisdicción—Para el cumplimiento de un contrato, solo puede determinarse con arreglo á su monto—Jur. Civ., tom. 2, pág. 481, Ser. 2ª.

3. Jurisdicción—En los litigios sobre inmuebles para fijarla debe tomarse en consideración el valor que le asignan

amigables componedores lo prescrito para los árbitros: 3º *Sobre la aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores después de haber aceptado aquél*. El 776, del título «Del juicio de los árbitros» establece: *otorgado el compromiso se presentará á los árbitros para su aceptación bajo juramento*. De la aceptación, ó de la negativa, se estenderá á continuación diligencia que firmarán los árbitros y el Secretario ó Actuario. No se puede dudar un solo instante que esta disposición comprende á los arbitradores.

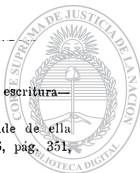
2a—En el caso presente, el perito que no prestó juramento fué el propuesto por la parte contraria: ambos peritos se espidieron de acuerdo: no tiene por consiguiente casi fuerza alguna la falta del juramento del otro perito cuando el propio cumplió con ese requisito.

1—El monto de la suma cobrada es el que debe determinar la competencia, que es la cosa demandada.

2b—En el contrato de locación, por ejemplo, cuando se pide su cumplimiento ó rescisión, la competencia se determina por la suma á que asciende el contrato computando el valor de los alquileres durante todo el tiempo de la locación: así el valor del contrato se determina por el monto total de las mensualidades mas no por el importe de cada mensualidad. Véase: Inst., tom 1, verb. Contrato de locación, núm. 556.

3—El valor asignado en la escritura era el que el inmueble tenía en esta ciudad diez años atrás, y es notorio el aumento considerable de su valor desde esa época.





JUR

los interesados y no el precio que conste de la escritura—Jur. Civ., tom. 1, pág. 268, Ser. 2ª.

4. Jurisdicción—El Juzgado solo se desprende de ella con la remisión de los autos—Jur. Com., tom. 6, pág. 351, Ser. 1ª.

Jurisdicción—Véase: *Cámara*, núms. 5, 6 y 7—*Litigio*, núm. 2—*Juez*, núm. 4—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Recurso de hecho*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 4—*Incompetencia*, núms. 3 y 5—*Competencia*, núms. 4 y 5—*Miembros*, núm. 1—*Terceria*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 14—*Fianza*, núm. 3—*Acción*, núm. 7—*Cámara comercial*, núm. 1—*Exposó*, núm. 3.

1a. Jurisdicción civil—Están sujetas á ella, las relaciones entre mandante y mandatario—Jur. Com., tom. 6, pág. 407, Ser. 1ª.

Jurisdicción civil—Véase: *Concurso comercial*, núm. 1—*Contratos*, núm. 2—*Acciones*, núm. 3.

Jurisdicción comercial—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 470—*Actos de comercio*, núm. 1.

Jurisdicción contencioso-administrativa—Véase: *Orden*, núm. 1.

Jurisdicción criminal—Véase: *Actos de comercio*, número 1.

1. Jurisdicción del Juez exhortante—Debe ser discu-

4—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 222 del Cód. de Proc.

1a—Cuando el mandato es civil, pues si fuere comercial queda sujeto á esta jurisdicción, como lo tiene resuelto esta misma Cámara—Véase Verb. Tribs. de Com., núm. 2 y nota. Si el mandato tiene por objeto la ejecución de actos civiles, las relaciones entre mandante y mandatario deben regirse por las leyes de la materia.

1—El caso práctico que dió margen á la presente cuestión es el siguiente: el Juez de lo Civil de la Asunción del Paraguay dirige exhorto al de igual clase de esta ciudad haciéndole saber que ante él se había interpuesto demanda de jactancia contra un vecino de ésta, por atribuirse derechos en unos bienes raíces situados en el Paraguay: el emplazado se

JUR

tida al cumplimiento de su petición, cualquiera que sea la diligencia solicitada, aunque fuese de mero trámite—Jur. Civ., tom. 2, pág. 453, Ser. 2º.

1. Jurisdicción federal—Las disposiciones de la ley sobre diversa nacionalidad de las partes, no son aplicables tratándose de juicios universales—Jur. Com., tom. 5, pág. 454, Ser. 1º.

Jurisdicción mercantil!—Véase: *Actos de comercio*, número 1.

opuso alegando incompetencia de aquel Juez para entender en el juicio. Comunicada vista al Agente Fiscal, éste dijo: que el exhortado no podría declararse en competencia con el exhortante, porque siendo éste extranjero, no existía entre ellos un Tribunal Superior común que la dirimiera: que estando dicho Juez obligado á la reciprocidad, debía darse cumplimiento al exhorto y dejar la cuestión de competencia para cuando una vez dictada sentencia por aquel Tribunal se solicitara su cumplimiento ante éste: el Fiscal de las Cámaras rebatió este razonamiento diciendo, que la circunstancia de no haber un Trib. Superior que dirima la cuestión de competencia, no demuestra en manera alguna que el exhortado deba prestarse y cooperar á la usurpación de la jurisdicción que le corresponde, sirviendo él mismo de instrumento de la usurpación de un extraño. No podía esperarse tampoco la sentencia definitiva, para entonces examinar la competencia, por cuanto esto, sería ilusorio é improcedente: ilusorio, como en el caso de demanda por jactancia, pues una vez practicada la citación iría el emplazado ante el exhortante, se le ordenaría deducir en un término dado la acción correspondiente, y no verificándolo se declararfa no competirle derecho alguno condenándosele á guardar perpetuo silencio: esta resolución solo debería producir efectos en aquel país, que es donde los bienes se encuentran situados y el exhortado no tendría medio alguno para impedir ó neutralizar la sentencia: también sería improcedente, pues por el hecho de haber permitido el emplazamiento, habría reconocido jurisdicción competente en aquél, sería tarde para desconocerla cuando el asunto se hubiese resuelto. Sin embargo y á pesar de todo, el Fiscal opinó que debía darse cumplimiento al exhorto, por cuanto se trataba de una demanda de jactancia, que es equiparada á las acciones posesorias y que como tal corresponde conocer al Juez del lugar en que la cosa está situada.

1—Se trata de un juicio de concurso, que es universal: y conforme á la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribs. Federales, no corresponde á éstos el conocimiento de los juicios de concurso, y sólo únicamente á los Tribs. ordinarios.



JUR—JUZ



1a. Jurisdicción potestativa—Cuando la del ejecutado no es obligatoria, el ejecutante no debe ser condenado en las costas, aun cuando la excepción de incompetencia se declarase procedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 432, Ser. 1^a.

1b. Jurisdicción testamentaria—Para fijarla, no basta conocer el lugar del fallecimiento, debe justificarse si el último domicilio tenía carácter permanente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 511, Ser. 2^a.

Justa causa—Véase: *Posiciones*, núm. 12.

1c. Juzgado—Solo puede fallar válidamente las cuestiones sometidas á su decisión—Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 2^a.

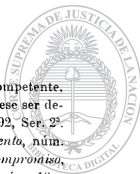
Juzgado—Véase: *Antecedents*, núm. 1—*Jurisdicción*, número 4.

Juzgado de paz—Véase: *Límites de los Juzgados de Paz*, núm. 1.

1a—Ley de 14 de Setiembre de 1863, art. 12, inc. 4^o, sobre jurisdicción y competencia de los Tribs. Nacionales.

1b—No teniendo carácter permanente el último domicilio, el anterior es el que debe prevalecer porque éste no desaparece por ausentarse una persona temporalmente de él: no hay *animus manendi*—Art. 92, Cód. Civil.

1c—Las leyes 2, tft. 13, Lib. 2, F. R.; 16, tft. 22, Part. 3^a, consignaron el principio de que la sentencia debía pronunciarse «sobre aquello que fué la demanda y no sobre otra cosa», cuyo principio se vé reproducido en la legislación posterior hasta llegar al actual Código que en su art. 216 prescribe: la sentencia debe contener decisión expresa con arreglo á las acciones deducidas en el juicio, condenando ó absolviendo de la demanda en el todo ó en parte



1a. Lanzamiento—Decretado por un Juez incompetente, no es acto ilícito, siempre que lícitamente pudiese ser decretado por otro juzgado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 292, Ser. 2°.

Laudo—Véase: *Arbitros*, núms. 1 y 2—*Juramento*, núm. 1—*Pena*, núm. 1—*Acción de nulidad*, núm. 2—*Compromiso*, núm. 1—*Arbitro-arbitrador*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 10—*Tribunal arbitral*, núm. 1—*Transacción*, núm. 5.

Legado—Véase: *Comisión*, núm. 1.

Legados—Véase: *Herencia*, núm. 1.

Legalización—Véase: *Escrituras*, núm. 1.

1b. Legatario—Tiene personería para intervenir en el reconocimiento y pago de todos aquellos créditos que puedan

1a—El ejercicio de un derecho propio ó el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto (art. 1071 Cód. Civ.) cuando se ejercita un derecho propio que no puede ser disputado, ni desconocido, cualquiera que sea la autoridad judicial que entienda en el asunto.

1b—El art. 3400, Cód. Civ., establece que los legatarios no pueden pretender ser pagados, sino después que los acreedores hubiesen sido enteramente satisfechos. El abono de estos créditos sin la justificación debida ó cuyo valor no fuese el justo, podría lesionar el derecho de los legatarios, distrayéndose los fondos con que los legados deben ser pagados, los que no se podrían cubrir íntegramente. Si el abono sin la justificación debida ó de una suma mayor de la que corresponde, puede lesionar los derechos de los legatarios, y si es doctrina uniforme que en un juicio son parte legítima, todos aquellos de cuyo perjuicio se trata principalmente, es evidente el derecho del legatario á intervenir en los autos sucesorios en que él haya sido instituido como tal.



LEG—LET

lesionar su derecho, distrayendo los fondos testamentarios—Jur. Civ., tom. 6, pág. 369, Ser. 1ª.

Legatario—Véase: *Tasación*, núm. 1.

1a. Legatarios—No pueden exigir la entrega del legado, sino después de pagados aquellos créditos á los cuales el testador haya designado prelación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 369, Ser. 1ª.

Legatarios—Véase: *Nulidad*, núms. 4 y 5—*Herencia*, número 1.

1b. Legítima defensa—Para invocar ese estado, es necesario que el empleo de la fuerza personal haya sido para rechazar ó contener violencias ilícitas—Jur. Crim., tom. 5, pág. 164, Ser. 1ª.

Legítima defensa—Véase: *Excepción de legítima defensa*, núm. 1—*Prueba*, núm. 6—*Amenazas*, núm. 1.

Legitimidad—Véase: *Madre*, núm. 1.

Legítimo tenedor—Véase: *Documento á la orden*, núm. 1.

1c. Lesión corporal—Que ha producido la muerte por efecto de una causa posterior, debe ser penada con tres años de prisión—Jur. Crim., tom. 5, pág. 164, Ser. 1ª.

Lesiones corporales—Véase: *Tentativa próxima*, núm. 2—*Alevosía*, núm. 1.

1d. Letra—El hecho de tenerla en su poder el girante ó aceptante, la que es recaudo de la demanda, justifica el pago hecho por el tenedor—Jur. Com., tom. 5, pág. 59, Ser. 1ª.

Letra—Véase: *Aceptante*, núms. 1 y 2—*Aval*, núm. 1—*Escribano*, núm. 4—*Renovaciones*, núm. 1.

Letra de cambio—Véase: *Aceptante*, núms. 3, 4 y 5—*Fecha cierta*, núm. 1.

1a—Art. 3400, Cód. Civ.

1b—Art. 152, Cód. Pen. anterior.

1c—Art. 206, Cód. Pen. anterior.

1d—Art. 819, Cód. de Com.

LET—LIB

Letras endosables—Véase: *Obligaciones*, núm. 1.

Ley de sellos—Véase: *Documento*, núm. 3—*Escribano*, núm. 4—*Sello*, núm. 2—*Sellos*, núm. 2.

1. Ley orgánica de los Tribunales—De la Capital, adiciones con motivo de la anexión de los Partidos de San José de Flores y Belgrano, y creación de un Juzgado Correccional—Jur. Civ., tom. 2, pág. 600, Ser. 2ª.

2. Ley orgánica de los Tribunales—De la Capital—Jur. Civ., tom. 7, pág. 3, Ser. 1ª.

1a. Ley orgánica Municipal—El art. 52 concede recurso de las resoluciones que se dicten en cualquiera de las secciones en que se subdivide, entendiéndose que el recurso no suspende los efectos de la resolución cuando ella ha sido dictada por las secciones de Seguridad, Higiene y Moralidad pública—Jur. Civ., tom. 8, pág. 599, Ser. 1ª.

Leyes—Véase: *Orden público*, núm. 1.

Leyes canónicas—Véase: *Procedimientos*, núm. 1.

Leyes de escepción—Véase: *Obligación solidaria*, núm. 1.

Leyes generales—Véase: *Prescripción*, núm. 1.

Leyes vigentes—Véase: *Reincidencia*, núm. 1.

1b. Libros de comercio—Aun debidamente llevados con arreglo á las prescripciones de la ley, no bastan para justi-

1a—Se ha creído que este artículo define cuáles son los asuntos de carácter contencioso-administrativo, pero no es así: el único alcance que este artículo tiene, es que no se admite acción alguna para impedir el cumplimiento de las resoluciones municipales sobre estas tres materias. Solo después de ejecutadas, ó sin perjuicio de su ejecución, pueden los particulares damnificados ejercitar sus derechos en juicio contencioso-administrativo. Esta disposición que era la jurisprudencia en el orden provincial, se apoya en la suprema necesidad del orden público que se opone á las dilaciones inevitables de un juicio.

1b—Según el art. 76 del Cód. de Com., los libros llevados en la forma y con los requisitos prescritos, serán admitidos en juicio, como medio de prueba entre comerciantes, en hecho de su comercio, del modo y en los casos expresados en el Código.



LIB

ficar un crédito contra una testamentaria por actos no comerciales—Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 2ª.

2. Libros de comercio—Sin rubricar, no forman prueba á favor de su dueño, ni aun como principio de prueba para hacer procedente la testimonial—Jur. Civ., tom. 2, pág. 179, Ser. 2ª.

3. Libros de comercio—Su compulsas puede ser solicitada por el contrario, pero solo en la parte que se refiere á los bienes—Jur. Civ., tom. 2, pág. 489, Ser. 1ª.

4. Libros de comercio—Forman prueba en los juicios criminales, aún cuando una de las partes no revista el carácter de comerciante—Jur. Crim., tom. 5, pág. 458, Ser. 1ª.

5. Libros de comercio—Sin rubricar no forman prueba—Jur. Com., tom. 5, pág. 250, Ser. 1ª.

6. Libros de comercio—No rubricados, no tienen valor alguno en juicio en favor del comerciante á quien pertenezcan—Jur. Civ., tom. 9, pág. 169, Ser. 1ª.

2. Así lo establecen respectivamente los arts. 65 y 67, Cód. de Com.: ni pueden tampoco reputarse principio de prueba literal para admitir la testimonial, tratándose de un contrato cuyo valor excede de 200 pesos, porque ellos no constituyen un documento público ó privado que emane del adversario, de su autor ó de parte interesada en la contestación, ó que tendrían interés si viviera—art. 193, Cód. de Com.

3—Art. 72, Cód. de Com., que solo admite escepción en los casos de sucesión, comunión, ó sociedad, administración ó gestión mercantil por cuenta ajena y en caso de quiebra.—Art. 71 *ibid*

4—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos por la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias. La minoría sostuvo; que tratándose de una controversia que no era entre comerciantes, ni *en hecho de su comercio*, como lo expresa el art. 76, Cód. de Com., no es legal la producción de esta clase de prueba.

5—No forman prueba contra terceros, ó en favor del comerciante á quien pertenecen, pero sí hacen prueba en contra.—Art. 67, Cód. de Com.—Véase: Inst. tom. 1º, verb. *Libros*, núm. 1650.

6—Arts. 75 y 77 del Cód. de Com., concordantes con el 42 del Cód. Esp., 13 del Francés, 22 del Italiano, 15 del Brasileño, 34 del Chileno, y 64 del Wurtemberg.



LIB-LIQ

Libros de comercio—Véase: *Prueba*, núm. 9 — *Comerciante*, núm. 4—*Comerciantes*, núms. 1, 2 y 3— *Cuenta corriente*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 4—*Embargo preventivo*, núms. 32 y 34.

Libros parroquiales—Véase: *Matrimonio*, núm. 1.

Lícita—Véase: *Cláusula*, núm. 3.

Licitadores—Véase: *Rematador*, núm. 1.

1. Límites—De los Juzgados de Paz de la Capital—Jur. Civ., tom. 7, pág. 63, Ser. 1ª.

Linderos—Véase: *Comprador*, núm. 8—*Costas*, núm. 22.

Línea colateral—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1.

Limpieza y alumbrado—Véase: *Impuesto*, núm.

1a. Liquidación—De una sociedad cuyo capital pase de 200 pesos, solo puede justificarse por testigos si existe un principio de prueba por escrito—Jur. Com., tom. 5, pág. 502, Ser. 1ª.

2. Liquidación—Consentido el auto aprobatorio, la sentencia que ordena su ejecución es inapelable—Jur. Civ., tom. 7, pág. 228, Ser. 1ª.

3. Liquidación—Sus errores son subsanables en juicio ordinario, para el cual no hace cosa juzgada el auto que la

1a—Los contratos cuyo valor excede de 200 pesos no pueden ser probados por testigos sino mediando principio de prueba por escrito — arts. 180 Cód. de Proc., 193 Cód. de Com. y 1193 Cód. Civ.—La extinción de las obligaciones está sometida á las mismas reglas prescritas para su formación. Véase: Inst., tom. 1, Verb. Contrato, núm. 535 y Contrato escrito, núm. 572 y notas respectivas.

2—En el juicio ejecutivo, una vez concedido el mandamiento de ejecución y embargo, no hay apelación en virtud de ser inhábil el título, pues esta razón solo puede ser alegada por el demandado al ser citado de remate: todo recurso interpuesto por el ejecutado antes de la citación es improcedente.

3—Siempre que la liquidación no sea hecha con sujeción á alguna resolución ejecutoriada, pues en caso contrario la liquidación consentida, causaría cosa juzgada: pero como en el caso presente, la liquidación no quedó consentida porque fué apelada y el recurso denegado: no siendo



LIQ.-LIT

declaró inapelable en el juicio ejecutivo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 312, Ser. 1ª.

4. Liquidación—El mandante no puede oponerse á su aprobación si ha sido formada sobre las bases convenidas con el mandatario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 348, Ser. 2ª.

5. Liquidación—La conformidad de las partes obliga al Juez á su aprobación; la alternativa prevista en el art. 524 del Cód. de Procedimientos solo procede cuando existe disconformidad—Jur. Civ., tom. 3, pág. 348, Ser. 2ª.

Liquidación—Véase: *Sociedad anónima*, núm. 1—*Auto aprobatorio*, núm. 1—*Arbitros-arbitradores*, núm. 2—*Arbitros*, núm. 4—*Socios*, núm. 20.

Liquidación social—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 5

1a. Liquidadores—Al fijar las utilidades de un socio no pueden sobrepasar la cantidad que este haya exigido al iniciar la demanda—Jur. Com., tom. 6, pág. 349, Ser. 1ª.

1b. Litigante—A quien se le opone la escepción de prescripción, no puede ser condenado en las costas del juicio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 561, Ser. 2ª.

Litigante—Véase: *Costas*, núms. 3 y 4—*Recusación*, núm. 2—*Costas*, núm. 1.

1c. Litigio—En que no se sigan los trámites que la ley apelable en el juicio ejecutivo el auto que aprueba una liquidación es evidente que ese auto no puede considerarse como pasado su autoridad de cosa juzgada. En el juicio ejecutivo quedan siempre á salvo los derechos del interesado para promover el juicio ordinario.

1a—Un juicio no puede jamás dar por resultado que el actor perciba una suma mayor que la pedida en la demanda, bajo pena de incurrir en *ultra petitio*.

1b—El art. 221 del Cód. de Proc., faculta á los jueces á exonerar de las costas al litigante vencido cuando no encuentren mérito para imponerlas, considerándose causal bastante para así hacerlo cuando la única defensa del vencedor ha sido la prescripción. Véase, Inst. tom. 1, verb. Costas, núm. 649 y nota.

1c—Art. 237, Cód. de Proc.



LIT

fija para el procedimiento debe ser declarado nulo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 343, Ser. 1ª.

2. Litigio—La iniciación y su rechazo por defecto de forma, no radica la jurisdicción y el actor puede iniciar nuevamente su demanda ante otro juzgado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 456, Ser. 1ª.

Litiscontestación—Véase: *Cámara civil*, núm. 1.

1a. Litis-contrato—La demanda y contestación forman sus bases y á ellas debe circunscribirse la sentencia del Juzgado, haciendo omisión de las defensas que ambas partes aduzcan con posterioridad—Jur. Com., tom. 3, pág. 98, Ser. 2ª.

Litis-contrato—Véase: *Sentencia*, núm. 20.

1b. Litisexpensas—Su fijación es ineludible justificados los extremos que la ley establece—Jur. Civ., tom. 3, pág. 401, Ser. 2ª.

Litisexpensas—Véase: *Divorcio*, núm. 2—*Alimentos*, números 5 y 10—*Esposo*, núm. 2.

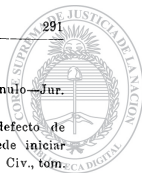
1c. Litispendencia—Esta escepción solo es procedente cuando ambos litigios se siguen entre las mismas personas, por las mismas causas y con idéntico objeto—Jur. Civ., tom. 2, pág. 391, Ser. 2ª.

2—La sentencia del Juez que declara procedente un artículo de incontestación, termina el pleito: pues es facultativo de la parte proseguirla ó retirarla, pudiendo en el primer caso seguir el juicio ante el mismo Juez ó ante otro.

1a—En estos límites debe encuadrarse la discusión y consiguientemente la sentencia, sin que sea permitido después sacar la causa de estos extremos. Si se suscitaran en el curso del juicio otras cuestiones el Juez no debe tomarlas en consideración al dictar sentencia.

1b—Los que deben ser equitativamente fijados de acuerdo con el art 602 del Cód. de Proc.

1c—Caravantes, Proc. Judiciales, t m 2, pág. 87.—Ley 6, tít. 10, Part. 3ª. Véase: Inst. tom. 1, Verb. Litispendencia, núm. 1064 y nota.



LIT — LOC

2. **Litispendencia.**—No puede fundarse en la iniciación por una misma parte, de dos juicios de alimentos—Jur. Civ., tom. 2, pág. 400, Ser. 2ª.

3. **Litispendencia.**—Esta escepción basada en un juicio ordinario, debe ser desechada como improcedente, si se opone en el juicio ejecutivo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 257, Ser. 1ª.

4. **Litispendencia.**—Esta escepción basada en un juicio ordinario, debe ser rechazada como improcedente si se opone en el ejecutivo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 367, Ser. 2ª.

5. **Litispendencia.**—Esta escepción fundada en un juicio ordinario, debe ser rechazada si se opone en el ejecutivo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 382, Ser. 2ª.

6. **Litispendencia.**—Esta escepción basada en un juicio ordinario debe ser desechada como improcedente si se opone en el ejecutivo—Jur. Civ., tom. 9, pág. 257, Ser. 1ª.

Litispendencia.— Véase: *Escepción de litispendencia*, número 1.

Locación — Véase: *Arrendamientos*, núm. 1 — *Mejoras*, núms. 1, 2 y 3 — *Mora*, núm. 1 — *Contrato de locación*, núms. 6 y 7 — *Locatario*, núm. 3.

1. **Locación de servicios**—Cuando la disconformidad de

2—En el presente caso se trataba de un juicio ordinario de alimentos y otro sumario; pero aun suponiendo que efectivamente hubiese *litispendencia*, el único efecto lógico que ella surtiría sería la acumulación de ambos procesos pero jamás la privación del derecho de la actora á proseguir su acción.

3—Esta escepción tiene por principal objeto evitar la concurrencia de dos sentencias sobre la misma acción, pero es necesario que estas sentencias sean de igual naturaleza para que la escepción tenga lugar—Véase: Inst. tom. 1, verb. *Litispendencia*, núm. 1677 y nota que consagra la misma doctrina.

4—Esta resolución está de acuerdo con lo resuelto por esta misma Cámara. Véase Inst. tom. 1º Verb. *Litispendencia*, núm. 1677 y nota.

5—Véase nota precedente.

6—Véase nota precedente.

1—En virtud del principio de que al actor incumbe la prueba y de



LOC

las partes versa sobre el precio, corresponde al demandante justificar que el que cobra es el estipulado ó el corriente de plaza—Jur. Civ., tom. 2, pág. 286, Ser. 2ª.

2. Locación de servicios—Es innecesario justificar que era á título oneroso, siempre que exista un documento de deuda por parte del deudor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 272, Ser. 1ª.

3. Locación de servicios—Las modificaciones al contrato en la parte relativa al trabajo importan también la modificación en el precio y en consecuencia las obras deben ser justipreciadas por peritos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 250, Ser. 2ª.

4. Locación de servicios—La compensación de trabajos que constituyen el medio habitual de vida del que los ha prestado debe ser fijada por peritos si no existe conformidad de partes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 228, Ser. 1ª.

Locación de servicios—Véase: *Árbitros*, núm. 3.

Locador—Véase: *Sublocatario*, núm. 1 — *Arrendamientos*, núm. 3—*Mejoras*, núms. 1, 2 y 3—*Depósito*, núm. 3.

1. Locador de servicios—Producida la desinteligencia entre éste y el locatario, el consentimiento prestado al inventario levantado por el perito nombrado, hace improcedente toda acción que no reconozca aquella operación como base ineludible—Jur. Com., tom. 6, pág. 590, Ser. 1ª.

1a. Locatario—El trascurso de dos períodos consecutivos

que todo el que alega un hecho nuevo en juicio debe comprobarlo. Cuando no consta. Cuando el precio de la locación de servicios no hubiese sido fijado se entiende que se someten las partes al precio corriente de plaza, para ser determinado por árbitros—art. 1627, Cód. Civ.—Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Servicios*, núm. 2453 y nota.

2—En este caso hay reconocimiento de deuda que hace innecesario comprobar el extremo exigido por el art. 1628 del Cód. Civ.

4—Art. 1627 del Cód. Civ.

1a—En el contrato se había convenido que la mensualidad sería depositada á su vencimiento en el Banco Nacional. Los arts. 1556 y 1579 del Cód. Civ., establecen la obligación del locatario de pagar el precio de



LOC-LLA

sin que abone el precio de la locación hace procedente la resolución del contrato á solicitud del locador—Jur. Civ., tom. 6, pág. 201, Ser. 1^a.

2. Locatario—Que conociendo el predio arrendado, no previó en el contrato las causas que pudieran inutilizarlo para el objeto á que lo destinaba, no puede pedir su rescisión fundado en esa sola causa—Jur. Civ., tom. 2, pág. 379, Ser. 2^a.

3. Locatario—Es responsable del precio de la locación hasta el día en que el locador pueda disponer libremente de la cosa—Jur. Civ., tom. 8, pág. 317, Ser. 1^a.

Locatario—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 1.—*Contrato de locación*, núm. 2 — *Mejoras*, núms. 1, 2 y 3 — *Deterioros*, núm. 1—*Locador de servicios*, núm. 1.

Llave falsa—Véase: *Ganzúa*, núm. 1.

Llaves—Véase: *Depósito*, núm. 3.

la locación y el derecho del locador de demandar la rescisión del contrato siempre que el locatario deje de pagar dos períodos consecutivos.

2—En este caso se supone que el locatario tuvo en cuenta el defecto de la cosa locada para pagar el precio de la locación. Puede verse asimismo el art. 1554 del Cód. Civ.

3—Debe darse la noticia debida á los locadores para eximirse en lo sucesivo del pago de los alquileres, de conformidad con el art. 1611 del Cód. Civ.





1a. Madre—En ejercicio de la patria potestad, debe intervenir á nombre del hijo en la demanda que se le inicie sobre su legitimidad sin que sea necesario nombrarle un tutor especial—Jur. Civ., tom. 1, pág. 271, Ser. 2ª.

Madre — Véase: *Administración*, núm. 1.

Madre incapaz—Véase: *Hijo mayor*, núm. 1.

1b. Madre natural—Si bien no tiene la administración de los bienes de sus hijos, tiene su representación para gestionar lo que les puedan corresponder—Jur. Civ., tom. 3, pág. 606, Ser. 2ª.

2. Madre natural — La prohibición de la indagación cuando el hijo se atribuye á una mujer casada, no tiene

1a—Se trata de un juicio sucesorio en el que tanto la madre como la hija son herederas: no hay necesidad de nombrársele tutor porque no hay intereses encontrados; hay sí un interés moral de la madre, mucho mas importante que el interés material, que la obliga á defender la legitimidad de su hija

1b—El art. 328 del Cód. Civ. acuerda á los padres naturales los mismos derechos que confieren las leyes á los padres legítimos sobre sus hijos. La amplitud de los derechos del padre y de la madre sobre sus hijos naturales tiene la sola limitación impuesta por el art. 336 del mismo que les niega el usufructo y la administración de los bienes. La administración y el usufructo nada tienen que ver con la defensa que los padres pueden hacer de sus hijos respecto de su filiación á otros derechos. La madre los representa siempre, menos como administradora. La defensa de los derechos de los hijos no es un acto de administración.

2—Véase, verb. *Filiación natural*, núm. 4 y nota.

MAE-MAN

aplicación cuando ésta reconociéndose madre gestiona los derechos del menor—Jur. Civ., tom. 9, pág. 144, Ser. 1^a.

1. Maestros mayores—Inscritos—Jur. Civ., tom. 1, págs. 458 y 632; y tom. 2, págs. 178 y 546, Ser. 2^a.

Maestros mayores—Véase: *Inscripciones*, núm. 2.

Mala ejecución—Véase: *Contrato bilateral*, núm. 2.

Mala fe—Véase: *Nulidad*, núm. 1.

Mandamiento—Véase: *Ejecutante*, núm. 3—*Embargo*, núm. 7—*Embargo preventivo*, núm. 25.

1a. Mandamiento prendario—Faculta al que debe cumplirlo al registro de las ropas del deudor—Jur. Com., tom. 5, pág. 522, Ser. 1^a.

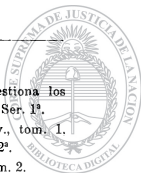
1b. Mandante—Está obligado á abonar al mandatario todos aquellos gastos inherentes al cumplimiento del mandato, pero no los que solo sirvieron para llenar sus necesidades personales—Jur. Com., tom. 6, pág. 372, Ser. 1^a.

2. Mandante—Siendo potestativo de él la revocación del mandato, el mandatario no puede fundar en ella una acción de daños y perjuicios—Jur. Com., tom. 6, pág. 477, Ser. 1^a.

1a—Es una de las maneras de hacer efectivas las obligaciones y de llevar á debido cumplimiento los mandatos judiciales. Cuando un individuo no paga ó no da bienes á embargo, puede ocultarlos llevándoselos consigo ú ocultándolos y en este caso los altos fines de la justicia no pueden distraerse, aun cuando sea necesario para su cumplimiento, el examen sobre la persona del obligado. No hay en este caso vejación, el exámen se hace necesario á causa de un proceder más ó menos incorrecto al no pagar la deuda. Cuando el agente se ha limitado al cumplimiento de una orden superior, éste no es responsable, según el art. 149, Cód. Pen. anterior.

1b—En cuanto á la primera parte, el art. 322 del Cód. de Com., lo establece: en cuanto á la segunda, debe tenerse presente que el mandante paga un salario por los servicios de que aprovecha, y en ese salario van siempre incluidos, el vestido, alimento y alojamiento en cuyo caso no puede esto cobrarse por separado. Otro sería el caso, si el mandatario tuviese que hacer gastos extraordinarios que sean mayores de los que la vida ordinaria exige.

2—Art. 1970 Cód. Civ.—Véase nota precedente.



MAN

Mandante—Véase: *Mandatario*, núms. 4 y 13—*Jurisdicción civil*, núm. 1—*Liquidación*, núms. 4 y 5—*Obligaciones á plazo*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 2—*Convenciones*, número 2.

1a. Mandatario—Contratando en conformidad al mandato, no queda obligado para con los terceros con quienes contrató, a menos que el mandato hubiera sido estrictamente limitado, y el mandante no hubiera ratificado el acto—Jur. Civ., tom. 6, pág. 253, Ser. 1ª.

2. Mandatario—Que se obliga en nombre propio, asume la responsabilidad inmediata y directa del cumplimiento de la obligación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 284, Ser. 1ª.

3. Mandatario—Puede legalmente ejecutar á nombre de su mandante los honorarios que haya sido condenado á pagar la contraparte, sin que se requiera nuevo mandato—Jur. Civ., tom. 6, pág. 448, Ser. 1ª.

4. Mandatario—No tiene derecho á retener en su poder fondos del mandante sin orden de Juez competente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 498, Ser. 2ª.

5. Mandatario—Debe rendir cuentas del mandato sin intervención de peritos y si estas lo exigieren debe ser á su costa—Jur. Civ., tom. 2, pág. 504, Ser. 2ª.

1a—Art. 1930, Cód. Civ. Véase: Inst., tom. 1º, verb. Mandatario, núm. 1712 y nota.

2—Así se establece en los arts. 1929, 1930, 1931 y 1932, Cód. Civ.

3—El art. 17, Cód. de Proc. dice: «Se entenderá también que el poder conferido para un pleito comprende la facultad de intervenir en los incidentes de lo principal, y ejecutar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos actos para los cuales la ley requiere facultad especial, ó los reservados espresamente en el poder». El cobro de honorarios es un incidente del juicio en el cual se devengaron.

4—A no ser que el mandante fuese su deudor en cuyo caso podría pensar un crédito con otro: en caso de disconformidad el mandatario cumple consignando la suma cuestionada. Véase: art. 1956, Cód. Civ.

5—El fallo no dice que deban ser á costa del mandatario el honorario del perito cuando su intervención es necesaria; solo establece que es



MAN

6. Mandatario—De algunos herederos, solo tiene acción para el cobro de sus honorarios contra sus mandantes pero no contra la masa—Jur. Civ., tom. 8, pág. 486, Ser. 1ª.

7. Mandatario—Que no presenta, al tercero con quien contrató, la pieza original en que conste el mandato, se hace responsable de los daños y perjuicios que la inejecución pueda ocasionar—Jur. Civ., tom. 9, pág. 151, Ser. 1ª.

8. Mandatario—Que hace uso del crédito á nombre propio y carga al mandante un interés sobre los fondos adelantados, no puede exigir de éste los gastos que le haya producido la operación de conseguir el capital—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2ª.

9. Mandatario—Al cual se haya fijado como retribución una parte de utilidades no puede exigir otra como sueldo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2ª.

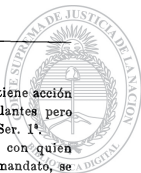
10. Mandatario—Solo puede exigir del mandante el abono de los fondos adelantados en moneda de la misma especie en que justifique haber hecho los pagos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2ª.

obligación del mandatario rendir cuentas á su mandante—art. 1909, Cód. Civ.—sin intervención de perito, pues debe suponerse que quien es apto para desempeñar un mandato, lo es también para rendir las cuentas que de ese mandato resulten.

6—El mandato no crea más relaciones de derecho que entre mandante y mandatario, para la masa el contrato en una *res inter alios acta*. Si los trabajos procuratorios benefician á la masa, es el poderdante quien puede pedir que la masa abone el todo, ó que cada coheredero beneficiado con esos trabajos concorra con su cuota parte.

7—El sumario no es exacto, pues resulta de su letra que solo se admite la *pieza original* en que conste el mandato. El art. 1939 del Cód. Civ. establece que el mandatario puede exhibir la *pieza original* de donde conste el mandato ó una *copia* de ella en forma *auténtica*. Puede igualmente exhibir en la misma forma anterior, la ratificación del mandato, puesto que según disposición del art. 1936 la ratificación equivale al mandato, en cuyo caso debe tenerse presente lo dispuesto en el art. 1061, *ibid*.

8—El interés que paga el mandante reembolsa suficientemente los gastos hechos para conseguir el capital.



MAN

11. Mandatario—Está obligado á la rendición de cuentas, aun cuando invista el carácter de socio del mandante—Jur. Com., tom. 6, pág. 150, Ser. 1ª.

12. Mandatario—A quien se revoca el mandato solo puede exigir del mandante el pago de los servicios prestados—Jur. Com., tom. 6, pág. 477, Ser. 1ª.

Mandatario—Véase: *Contrato*, núm. 12—*Remate*, núm. 2—*Cuenta*, núm. 1—*Contrato*, núm. 3—*Intereses*, núm. 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 2—*Jurisdicción civil*, núm. 1—*Liquidación*, núms. 4 y 5—*Mandante*, núms. 1 y 2—*Gastos*, núm. 4—*Obligaciones á plazo*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 15—*Convenciones*, núm. 2.

Mandatarios—Véase: *Martilleros*, núm. 1—*Ausente*, número 3—*Honorarios*, núm. 17—*Mandato*, núm. 6.

1. Mandato—Cuando se revoca sin culpa del comisionista, debe serle abonada una comisión que no sea inferior á la mitad de la que le hubiese correspondido una vez realizada la operación—Jur. Com., tom. 5, pág. 103, Ser. 1ª.

2. Mandato—El Escribano no está obligado á conocer el estado civil de las personas á cuyo favor se otorga—Jur. Civ., tom. 7, pág. 103, Ser. 1ª.

3. Mandato—Es irrevocable cuando es la condición de

11—El art. 1909 del Cód. Civ., igual al 322 del Cód. de Com., impone al mandatario la obligación de rendir cuentas de su mandato, sin hacer distinción de ninguna clase por cuya causa tampoco nosotros podemos distinguir.

12—Arts. 310, 379 y 380, Cód. de Com., y 1952, 1953, 1954, 1958 y 1970 del Cód. Civ.

1—Art. 380, Cód. de Com. Véase: Inst., tom. 1, verb. Martilleros, núms. 1726 y 1729 y sus notas.

2—La persona á quien se da poder no es otorgante de la escritura, ni la firma, ni está presente: el escribano está solo obligado á dar fe de que conoce á los otorgantes.—Art. 1001, Cód. Civ.

3—Art. 1977, Cód. Civ. Véase: Inst. tom. 1, Verb. Mandato, núm. 1715 y nota.



MAN

un contrato bilateral ó el medio de cumplir una obligación—Jur. Civ., tom. 7, pág. 268, Ser. 1ª.

4. Mandato—Sus disposiciones son aplicables á las procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan á las del Cód. de Procedimientos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 268, Ser. 1ª.

5. Mandato—Su revocación es válida, aun cuando sea el resultado de un contrato bilateral, si existe en él un pacto de quota-litis—Jur. Civ., tom. 7, pág. 295, Ser. 1ª.

6. Mandato—Se presume oneroso, cuando consisten los trabajos en los propios de la profesión ó modo de vivir del mandatario—Jur. Civ., tom. 8, pág. 440, Ser. 1ª.

Mandato—Véase: *Rematadores*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 1—*Comisión*, núm. 1—*Tribunales de comercio*, núm. 2—*Factor*, núm. 1—*Agente de Policía*, núm. 1—*Ratificación*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 7 y 12—*Mandante*, núms. 1 y 2.

1a. Mandato apócrifo—El damnificado por ese medio, tiene derecho para repetir contra el estafador, que no puede escepcionarse de falta de personería, por corresponder la acción al depositario de cuyo poder se estrajeron indebidamente los fondos—Jur. Civ., tom. 9, pág. 331, Ser. 1ª.

1b. Mandato especial—Para el arreglo de una testamen-

4—Art. 1870, inc. 6º, Cód. Civ.

5—Siempre que el pacto de quota-litis sea nulo. Este pacto es prohibido á los procuradores y abogados en ciertos casos. Cuando el pacto es válido, la revocación del poder conferido no puede tener lugar licitamente. Declarado nulo el contrato que sirve de fundamento á la irrevocabilidad del mandato, el mandato desaparece en este carácter, se constituye en simple y como tal revocable. En cuanto á la validez ó nulidad al pacto véase: *Verb. quota-litis*.

6—Art. 1871, Cód. Civ.

1a—De acuerdo con los arts. 1091, 1092 y 1094, Cód. Civ.

1b—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 634, inc. 1º del Cód. de Proc. El mandato especial para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe limitarse á los actos para los cuales ha sido dado, y no puede extenderse á otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse



MAN—MAR

taría, no es bastante para intervenir en la demanda entablada por un tercero, contra uno de los herederos, aunque verse sobre bienes que fueron de la sucesión—Jur. Civ., tom. 1, pág. 264, Ser. 2ª.

Manifestaciones—Véase: *Contrato*, núm. 15.

1a. Manzana—Esta denominación importa individualizar una extensión comprendida entre cuatro calles y el comprador no puede exigir la cantidad equivalente á una cuadra de 150 varas por costado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 163, Ser. 1ª.

1b. Marido—En ejercicio de la administración de los bienes de la sociedad conyugal, puede cambiar los empleados sin autorización del Juez que entiende en el juicio de separación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 167, Ser. 2ª.

Marido—Véase: *Separación de bienes*, núm. 1—*Gastos*, núm. 4—*Poder especial*, núm. 2—*Violación*, núm. 1.

Martillero—Véase: *Remate*, núm. 1.

1c. Martilleros—Son mandatarios y no comisionistas de los vendedores, sea que su nombramiento nazca de una de las partes ó sea de oficio, y tienen derecho á cobrar media comisión cuando el remate no se realiza por voluntad de las partes Jur. Civ., tom. 7, pág. 276, Ser. 1ª.

como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer—Art. 1884, Cód. Civ.

1a—La palabra manzana no tiene en las ventas otra significación que la de una extensión de terreno aislado por calles, que la significación y alcance que tiene en el uso común entre nosotros y que coincide en cierta parte con el significado que le da el diccionario de la lengua castellana cuando la define diciendo que es un conjunto de casas que forman un grupo aislado. Este grupo no tiene dimensión determinada.

1b—Es una consecuencia del poder de administrar consagrado en favor del marido—Art. 186, Cód. de Proc.

1c—El art. 1958 establece «que resolviéndose el mandato sin culpa del mandatario ó por revocación del mandante, deberá éste satisfacer al mandatario la parte de comisión que corresponda al servicio hecho, etc.» Este artículo supone que el mandato no ha sido ejecutado: entonces



MAR—MAS

2. Martilleros—No pueden ser responsabilizados por la falta de objetos cuya venta se les haya cometido judicialmente si no eran también depositarios—Jur. Civ., tom. 3, pág. 406, Ser. 2^a.

3. Martilleros—Pueden hacer presente al Juzgado la enormidad del precio que exige el diario señalado para la publicación de los avisos, pero no deben ser responsabilizados por esa omisión—Jur. Civ., tom. 3, pág. 406, Ser. 2^a.

4. Martilleros—Deben ser remunerados con la mitad de la comisión cuando se suspende el remate por una causa que no les es imputable—Jur. Com., tom. 6, pág. 508, Ser. 1^a.

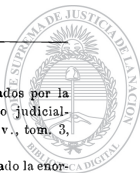
Martilleros—Véase: *Contrato*, núm. 9—*Gastos extraordinarios*, núm. 1.

Masa—Véase: *Herederos*, núm. 1.

es necesario que el mandato sea retribuido en relación al tiempo empleando en preparar el remate, publicar avisos, ver comitentes y en fin todos aquellos actos que concurren á dar cumplimiento al mandato recibido. Esta retribución no puede ser otra que media comisión sobre las dos terceras partes del precio de tasación. Tal es la doctrina corriente aceptada por los tribunales. Véase: F. S. C. P., tom. 3, pág. 52, Ser. 2^a. Sin embargo, cuando el remate se suspende en virtud de orden superior que no dependa de la voluntad del propietario y cuando los martilleros no han hecho más que redactar y publicar los avisos, no tienen derecho á comisión alguna y solo pueden cobrar los gastos hechos. Véase: F. S. C. P., tom. 2, pág. 270, Ser. 2^a; tom. 2, pág. 84, y tom. 7, pág. 430, S. 1^a; Inst. tom. 1, Verb. Martilleros, núm. 1728 y nota. Además, los rematadores no tienen derecho á cobrar comisión, ni media comisión, cuando el remate no se realiza por falta de licitadores. Véase: F. S. C. P., tom. 3, pág. 52, Ser. 2^a.

3—Cuando un periódico pretende cobrar una suma exagerada por la publicación de edictos, avisos de remate, etc., el martillero puede hacer presente al Juzgado esta circunstancia, pero si no lo hace no puede ser responsabilizado por esa omisión, pues nadie está obligado á hacer lo que la ley no manda, y no existe ley que obligue á los rematadores á poner esto en conocimiento del Juzgado: sin embargo la medida sería siempre provechosa para el peculio de los interesados y para el crédito del martillero.

4—Art. 380, Cód. de Com. Véase: Inst. tom. 1, verb. *Martilleros*, núms. 1726 y 1729 con sus notas.



MAT—MAY

Materia civil—Véase: *Escepción de falsedad*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 2.

Materia criminal—Véase: *Tacha de testigos*, núm. 1—*Días feriados*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 24—*Acusado*, número 2.

Materiales—Véase: *Propietario*, núm. 1—*Trabajo ó Materiales*, núm. 1.

1. **Matrícula**—De maestros mayores y contadores—Jur. Civ., tom. 1, págs. 458 y 632, Ser. 2ª.

2. **Matrícula**—Inscripciones de 1887 y 1888—Jur. Civ., tom. 7, págs. 347, 471 y 542, Ser. 1ª.

Matrícula—Véase: *Abogado*, núm. 2.

Matrícula de comercio—Véase: *Comerciante*, núm. 1—*Ausente*, núm. 4—*Inscripción*, núm. 3.

1a. **Matrimonio**—A falta de asiento en los libros parroquiales, puede justificarse por testigos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 266, Ser. 1ª.

Matrimonio—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1—*Gananciales*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 7.

1b. **Matrimonios**—Anteriores al decreto del Gobierno de Buenos Aires de Octubre de 1857, la falta de la firma de los testigos no es causa de nulidad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 366, Ser. 1ª.

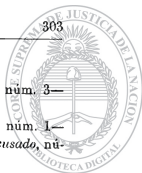
Mayor cuantía—Véase: *Declaraciones incidentales*, número 1.

Matriz—Véase: *Nulidad*, núm. 23.

Mayordomos—Véase: *Prescripción de sueldos*, núm. 1.

1a—El art. 179 del Cód. Civ. dispone, que el matrimonio puede probarse también por los hechos que demuestren que marido y mujer se han tratado como tales y que así eran reconocidos en sociedad, o por cualquier otro género de prueba que constituya la posesión de estado de casados.

1b—Para la validez del matrimonio antes de dictarse esta ley, reglan las disposiciones del Concilio de Trento: lo que este prohibió fueron solo los matrimonios clandestinos, disponiendo que en adelante el matrimonio



MAY—MEJ

Mayor edad—Véase: *Alimentos*, núm. 15.

Mayores—Véase: *Obligación solidaria*, núm. 1.

1a. **Medianería**—Al que afirma haberla adquirido corresponde justificar el pago—Jur. Civ., tom. 8, pág. 159, Ser. 1ª.

Medianería—Véase: *Adquirente condicional*, núm. 1.

1b. **Medianeros**—El comprador de un establecimiento rural tiene respecto de ellos las mismas obligaciones que tuvo el vendedor—Jur. Civ., tom. 9, pág. 274, Ser. 1ª.

1. **Médico**—De los Tribunales—Jur. Civ., tom. 7, pág. 28, Ser. 1ª.

Médico—Véase: *Honorarios médicos*, núm. 2.

1c. **Medida preparatoria**—No puede considerarse como tal, la vista del original de un testamento—Jur. Civ., tom. 1, pág. 615, Ser. 2ª.

Medidas preparatorias—Véase: *Demanda ordinaria*, núm. 1.

Medidas administrativas—Véase: *Incapaz*, núm. 1.

Medidas coercitivas—Véase: *Patria potestad*, núm. 2.

Medidas provisionales—Véase: *Cámara*, núm. 5.

Mejor proveer—Véase: *Titulos de propiedad*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 1—*Documentos*, núm. 1.

se celebrara ante el cura y dos testigos: y respecto de la forma de los asientos dispone que los párrocos lleven un libro en que asienten los nombres de los contrayentes y de los testigos y la fecha, pero no exige que los testigos ni aun los contrayentes firmen el acto.

1a—Cuando la propiedad exclusiva del colindante está comprobada por escritura, signos materiales, ó en cualquiera otra forma, pues la medianería de las paredes divisoria es de presunción legal—arts. 2718 y 2719, Cód. Civ.

1b—El comprador reemplaza al vendedor en todas sus acciones y derechos.

1c—Siempre que el que lo solicita, no se crea heredero, coheredero ó legatario, porque entonces no se encuentra comprendido en ninguno de los casos previstos en los arts. 67 y 68 del Cód. de Proc., siendo de estricta aplicación lo dispuesto en el art. 70 del mismo.



MEJ—MEN

1a. Mejoras—Necesarias y útiles, deben abonarse cuando se rescinde el contrato sin culpa del locatario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 412, Ser. 2ª.

2a. Mejoras—El alquiler de las que el locatario no pueda retirar por oposición del locador, debe serle abonado, previa fijación por peritos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 412, Ser. 2ª.

3. Mejoras—Del locatario, que no importen una innovación en el edificio ni le estén prohibidas por cláusula especial, no pueden fundar la rescisión del contrato—Jur. Civ., tom. 3, pág. 569, Ser. 2ª.

Mejoras—Véase: *Propietario*, núm. 2—*Contrato de locación*, núm. 1—*Consentimiento tácito*, núm. 1.

Menor—Véase: *Colocación*, núm. 1—*Depositario*, núm. 2—*Alimentos*, núm. 15.

1b. Menores—Cuando existen, el Juez debe proceder á la regulación de honorarios, sin la previa conformidad ó disconformidad de los interesados—Jur. Civ., tom. 1, pág. 165, Ser. 2ª.

2b. Menores—La autorización que los jueces pueden concederles para demandar á sus padres, se refiere únicamente

1a—Art. 1539, inc. 4º, Cód. Civ.

2a—El inquilino que hace mejoras en una casa alquilada cuyo contrato se rescinde sin culpa del locatario puede llevarse las mejoras que hubiese, y si no las hubiere podido llevar por haber habido oposición de parte del locador, es evidente que éste debe abonar el alquiler de esas mejoras siempre que hubiese sacado provecho de ellas, pues nadie puede enriquecerse á costa y en perjuicio de otro, y debe el Juez proveer de acuerdo con lo preceptuado en el art. 219 del Cód. de Proc.

3—Porque es un derecho acordado por el art. 1533 del Cód. Civ.

1b—El art. 69 del Apén. al Cód. de Proc., ordena que cuando haya interesados menores, hecha la estimación por el abogado se resuelva, sin sustanciación alguna, sobre su mérito. Es un procedimiento especial, en que el Juez procede sin forma de juicio, brevemente.

2b—El art. 285 del Cód. Civ., se refiere tan solo á los *intereses propios* de los menores.



MEN

á las cuestiones de intereses — Jur. Civ., tom. 1, pág. 392, Ser. 2ª.

3a. Menores—Emancipados, pueden celebrar transacciones con intervención del Ministerio y autorización del Juez — Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 1ª.

Menores—Véase: *Tutela* núms. 1 y 2—*Juicio*, núm. 2—*Bienes raíces*, núm. 1—*Padres*, núm. 1—*Reconocimiento*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 3—*Juicio ejecutivo*, núm. 1—*Tasación*, núm. 3—*Nulidad*, núm. 13—*Padres naturales*, núm. 1—*Cesión*, núm. 4—*Reivindicación*, núm. 4—*Administración*, núm. 1—*Gastos extraordinarios*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 4—*Prueba testimonial*, núm. 3—*Obligación solidaria*, núm. 1—*Tutor especial*, núm. 3.

1. Mensura—En la cual se determine con carácter definitivo la extensión de terreno que corresponde á cada heredero, no debe ser aprobada si con anterioridad no se ha hecho judicialmente la liquidación y partición—Jur. Civ., tom. 2, pág. 145, Ser. 2ª.

2. Mensura—Terminado el juicio, las partes que pretendan tener título sobre el terreno, deben iniciar nuevo juicio: el Juzgado no puede hacer declaraciones sobre ubicación que afecten el dominio—Jur. Civ., tom. 2, pág. 491, Ser. 2ª.

3. Mensura—El auto que la ordena á costa de una de las

3a—Art. 135, Cód. Civ.

1—La designación de la parte, materialmente determinada, que corresponde á cada heredero, hecha en la mensura, importaría una adjudicación y pago de las hijuelas respectivas. Esta adjudicación no puede ser hecha sino por un contador nombrado de común acuerdo de partes y previa la determinación de las respectivas partes hereditarias. La mensura no tiene mas objeto que determinar la ubicación del terreno y su dimensión exacta.

2—La mensura tiene por objeto el deslinde de los terrenos: las cuestiones de dominio deben ventilarse en un nuevo juicio por separado.

3—Trae gravamen por los gastos que el auto impone á la parte, los

MEN—MIE

partes, trae gravamen y es por consiguiente apelable—Jur. Civ., tom. 8, pág. 353, Ser. 1ª.

4. Mensura—Y deslinde, el comprador solo puede pedir las en el acto de tomar posesión, y no antes de oblar el precio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 356, Ser. 1ª.

Mensura—Véase: *Comprador*, núm. 8—*Costas*, núm. 22.

1. Mercaderías—Su entrega hecha por cuenta y orden de un tercero, obliga á justificar el contrato en virtud del cual se han hecho prestaciones intermedias que se pretenden haberlo sido por cuenta propia—Jur. Com., tom. 6, pág. 124, Ser. 1ª.

2. Mercaderías—Tratándose de ellas, la posesión debidamente justificada hace procedente la reivindicación—Jur. Com., tom. 6, pág. 588, Ser. 1ª.

Mercaderías—Véase: *Conocimientos*, núm. 1—*Cuenta corriente*, núm. 2—*Alquileres*, núm. 1—*Arbitros-arbitradores*, núm. 4—*Demanda*, núm. 2.

Mercantil—Véase: *Fianza*, núm. 1.

Metálico—Véase: *Curso forzoso*, núm. 1—*Moneda especial*, núms. 1 y 2.

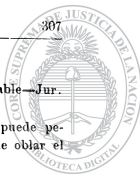
Miedo—Véase: *Infracción*, núm. 1.

1. Miembros—Del poder judicial, que por recusación de los titulares entran á formar parte del Tribunal, cesan en su cometido después de dictado el fallo para que fueron llamados, y carecen de jurisdicción para entender en el expediente mientras por insaculación no sean nuevamente llamados—Jur. Civ., tom. 1, pág. 87, Ser. 2ª.

que en juicios de deslinde generalmente son á costa de ambos colindantes.

4—La diligencia de mensura y deslinde está comprendida entre las operaciones de la toma de posesión; no puede pedirse la posesión sin antes oblar el precio.

2—Art. 2412 del Cód. Civ.



MIN—MON

Ministerio de Menores—Véase: *Intervención*, núms. 1 y 2—*Insania*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 33—*Insano*, núm. 2.

1. Ministerio público—Sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 21, Ser. 1ª.

Ministerio público—Véase: *Pena*, núm. 4.

Ministerio pupilar—Véase: *Juicio*, núm. 2—*Alimentos*, núm. 13.

Modificaciones—Véase: *Ampliaciones*, núm. 1.

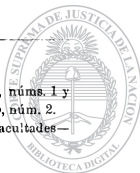
1a. Moneda—Determinada ó su equivalente, la estipulación de pagar se rige por la fecha en que se verifique el pago y no por la del vencimiento de la obligación—Jur. Com., tom. 5, pág. 496, Ser. 1ª.

Moneda—Véase: *Mandatario*, núm. 7—*Censo*, núm. 1.

1b. Moneda especial—Para el cumplimiento de los contratos que se estipulan en esta forma no pueden serlo con papel moneda por su valor escrito—Jur. Com., tom. 6, pág. 289, Ser. 1ª.

1a—El art. 702, Cód. de Com., y el 619, Cód. Civ., resuelven la cuestión en el sentido de que la fecha del pago efectivo es la que debe establecer al precio de la moneda estipulada. Una y otra disposición se refieren al día en que debe verificarse el pago por ser el día fijado para el cumplimiento, pero si el deudor no paga el día del vencimiento, y cumple con la obligación otro día, dando la moneda determinada en el contrato ó su equivalente, es evidente que cumple, solventando su obligación al precio que tuviese la moneda el día de la entrega.

1b—Las leyes de orden público son de interés público, pero no todas las de interés público son de orden público. Las leyes sobre moneda son de interés público pero no de orden público. Las únicas leyes que pueden considerarse como de orden público son las que se dictan para garantizar el estado privado ó político de las personas, porque son las únicas consideradas como necesarias ó indispensables para asegurar el orden público. Las leyes que rigen las relaciones privadas entre los particulares no son leyes de orden público porque se limitan á fijar la esfera dentro de la cual será obligatoria la manifestación de la voluntad individual. Las leyes sobre curso forzoso no son de orden público, porque ellas solo obedecen á razones de conveniencia pública ó privada, de interés general, pero esto no quiere decir que sean de orden público, pues de otro modo todas las leyes tendrían este carácter porque todas interesan



MON—MOR

Moneda especial—Véase: *Oro sellado*, núms. 1, 2 y 3.

Moneda nacional—Véase: *Oro sellado*, núms. 1, 2 y 3—

Moneda especial, núm. 1.

1. Mora—No se supone por el hecho de no pagar en la fecha debida, debe justificarse que se exigió el pago en el domicilio del deudor y que éste se negó á verificarlo—Jur. Civ., tom. 3, pág. 426, Ser. 2^o.

al Estado que las dicta. La moneda no es indispensable para la vida de un pueblo, como lo es el estado de la familia base de la sociedad. Partiendo de este principio debe hacerse presente que en materia mercantil los contratos deben cumplirse con arreglo á la ley, á la equidad y á la buena fe, y en tal concepto las obligaciones estipuladas en moneda especial deben cumplirse con arreglo á lo que resulte de su letra y de su espíritu; y bajo este punto de vista conviene averiguar si la ley de curso legal dictada por el Gobierno Nacional modifica ó no la obligación en beneficio del deudor. La ley no establece el curso forzoso, solo se limita á asegurar la conversión del papel y á declararlo de curso legal; ella es solo limitativa de los derechos de los particulares, pero sin embargo los respeta, pues no los suprime. Como ley limitativa, justa y razonable, debe circunscribirse á sus propios términos limitándola. La ley de Octubre que aprueba los decretos anteriores del P. E. no habla de curso forzoso y recorriendo sus disposiciones no se encuentra una sola vez la locución curso forzoso. No puede por consiguiente atribuírsele una interpretación tan lata, cuando por el contrario debe limitarse como ley de excepción, en virtud del principio de que lo odioso debe restringirse. No puede argumentarse en el caso presente con lo dispuesto en el inc. 1^o del art. 3^o, porque en el caso *sub-judice* no se trataba de una obligación contrada á moneda nacional oro, sino de una obligación contrada á reales fuertes oro sellado, en cuyo caso la moneda estipulada para el pago es especial, debe aplicarse el 2^o inc. del artículo citado que dice: «Quedan exceptuadas aquellas contradas con designación de moneda especial.» No hay necesidad de constatar si existe ó no la especie de moneda especial determinada, pues la ley no lo exige y solo consagra que quedan exceptuados. Cuando surge alguna cuestión sobre el valor de la moneda, solo entonces es llegado el caso de resolver la suma que debe constituir su equivalente, en cuyo caso deben consultarse los arts. 617 y 619 del Cód. Civ. y 298, 861 y 926 del Cód. de Com.

1—Se trata de un contrato de locación cuya rescisión se solicita fundándose en la falta de pago de dos mensualidades. El caso está tratado en el tom. 1^o de la Inst. verb. Alquiler, núm. 158 y nota.



MOR—MUL

Mora—Véase: *Obligado*, núm. 1—*Obligación*, núm. 3—*Demanda*, núm. 2—*Contrato de locación*, núm. 7.

Moratorias—Véase: *Juez*, núm. 4.

Motivo legal—Véase: *Audiencia*, núm. 1.

Muebles—Véase: *Ejecutante*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núm. 4—*Anticipo*, núm. 1.

1a. Muerte—Dada por medio de veneno debe calificarse de asesinato, pero no puede ser castigada con pena capital si el reo es una mujer—Jur. Crim., tom. 5, pág. 275, Ser. 1ª.

Mujer—Véase: *Muerte*, núm. 1.

1b. Mujer casada—Los Tribunales de Comercio no pueden autorizarla para ejercer actos de comercio sin la venia del esposo—Jur. Com., tom. 6, pág. 280, Ser. 1ª.

Mujer casada—Véase: *Violación*, núm. 1—*Insania*, números 1 y 2—*Filiación natural*, núm. 4.

Mujer robada—Véase: *Rapto*, núm. 1.

1c. Multa—La estipulación de ella en el compromiso sometiendo una cuestión al fallo de amigables componedores no es necesaria—Jur. Civ., tom. 5, pág. 105, Ser. 1ª.

Multa—Véase: *Sellos*, núm. 2.

1a—Arts. 95 y 210, Cód. Pen. anterior.

1b—El art. 20 del Cód. de Com. prohíbe á los jueces autorizar á la esposa para ejecutar actos de comercio contra la voluntad del marido. El art. 194 del Cód. Civ. faculta á los Tribunales para suplir la falta de autorización del marido en ciertos casos que allí determina. Pero como la ley mercantil es una ley de escepción, la autorización conferida á los Jueces por la ley civil no puede ejercitarse tratándose de autorizaciones á conferirse para ejecutar actos de comercio.

1c—Esta providencia fué dictada con motivo del alzamiento de uno de los compromitentes contra el laudo dictado por un árbitro-arbitrador, fundado en la nulidad del compromiso por no contener éste la estipulación de una multa—art. 771 Cód. de Proc. aplicable á los compromisos para arbitradores según el art. 801. En este caso ya las partes no pueden decir de nulidad del laudo fundándose en la nulidad del compromiso, porque las partes ya lo ponen en ejecución ante los arbitradores—art. 801, inc. 2ª.



MUL. —MUN

1a. Multas.—La Cámara Civil puede suspender las decretadas por la Municipalidad, siempre que por razones de equidad conceptúe que por lo angustioso de los términos no haya podido cumplirse lo dispuesto por ella—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 1ª.

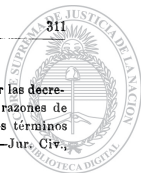
1b. Municipalidad.—Carece de personería para ejecutar á los propietarios por el importe de los empedrados —Jur. Civ., tom. 1, pág. 600, Ser. 2ª.

2. Municipalidad.—Las leyes, tanto nacionales como provinciales, que declaren de su propiedad, los terrenos públicos situados en la Capital, no importan reconocer á esta Corporación derecho alguno sobre los poseídos por particulares con título aun cuando sea vicioso—Jur. Civ., tom. 7, pág. 475, Ser. 1ª.

1a.—La fijación de un plazo en una ordenanza no importa que esta no pueda prorrogarse, el término no es perentorio. La autoridad administrativa no puede desatender, previos los informes respectivos, una ampliación pedida cuando resultare justa y equitativa, y si desatendiendo la voz de la equidad y de la justicia, la Municipalidad no accediera á la prórroga, puede el Poder Judicial concederla.

1b.—La Ley Org. de la Municipalidad, en su art. 65 designa los impuestos y recursos á que atribuye fuerza ejecutiva el art. 64 de la misma. Las cuentas por empedrados no se encuentran comprendidas entre ellas: tampoco puede aplicarse el art. 465 del Cód. de Proc., porque si bien se comprende en la denominación de documentos públicos, las cuentas sacadas de los libros fiscales, autorizados en forma, según disposición del art. 979, inc. 5º del Cód. Civ., en el presente caso rige para aquella una disposición especial que es la ley de 29 de Octubre de 1882, la que solo atribuye fuerza ejecutiva á las cuentas por empedrados, cuando éstos son presentados por los empresarios y visados por la Municipalidad.

2.—El art. 68 de la ley de Setiembre de 1852 dice: «Pertenecen á la misma corporación todos los terrenos públicos que se hallen comprendidos en el distrito municipal, ya sea que estén baldíos, etc.» El art. 14 de la ley de 11 de Octubre de 1854, establece que: «Pertenecen á la misma corporación todos los terrenos públicos que se hallen comprendidos en el distrito municipal, ya sea que estén baldíos ó arrendados». Y el art. 19 de la ley de 2 de Noviembre de 1865 prescribe que: «Pertenecen á la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires las fincas y establecimientos públicos que existen actualmente bajo su administración



MUN

3. Municipalidad—Debe justificar el título que invoca sobre cualquier terreno poseído por particulares—Jur. Civ., tom. 7, pág. 475, Ser. 1ª.

4. Municipalidad—En uso de sus atribuciones como encargada de la construcción y conservación del empedrado puede obligar á las empresas de trainways á cumplir las ordenanzas que á ese objeto se dictaren, suspendiendo el tránsito de los coches si no las cumplen—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 1ª.

Municipalidad—Véase: *Propietarios*, núm. 1—*Resolución*, núm. 3—*Recurso directo*, núm. 1—*Contratos*, núm. 1—*De-*

y los que adquiera en adelante. Los terrenos públicos comprendidos en el municipio sin perjuicio de que el P. E. ocupe los que sean necesarios para el servicio general». Estas leyes se limitan á declarar de propiedad de la Municipalidad, todos los terrenos, establecimientos y fincas de propiedad pública existentes en el municipio. No hay ley alguna que atribuya á la Municipalidad la propiedad de los terrenos y fincas cuyo dominio no se justifique por los particulares: esto importaría acordarle un derecho monstruoso de investigar el origen y estado de la propiedad privada autorizando la reivindicación de aquellas propiedades cuyos títulos no estuviesen en forma. La municipalidad debe comprobar que adquirió el bien por un título legal, cuando el poseedor justifique que el inmueble salió del dominio público. Véase: Inst., tom. 1, verb. Municipalidad, núm. 1793.

3—De acuerdo con los derechos que la ley acuerda al poseedor: el que posee se presume legalmente que posee de buena fe, mientras no se pruebe lo contrario—art. 2362, Cód. Civ.—El poseedor actual no tiene obligación de producir su título á la posesión: él posee porque posee—art. 2363 ibid.—La Municipalidad, como la Provincia, como la Nación, cuando pretende reivindicar inmuebles que están en poder de un tercero, tiene que comprobar el título que invoca para reivindicar, como si se tratara de un simple particular, porque todos son iguales ante la ley: la Municipalidad como persona jurídica que es, está sometida á las mismas leyes y tiene los mismos derechos que un particular.

4—El contrato celebrado entre la Municipalidad y las Empresas faculta á la primera para tomar esta medida en caso necesario. Cuando una de las partes contratantes no cumple con las obligaciones que el contrato le impone, puede la otra exigir su cumplimiento—art. 1201, Cód. Civ.



MUT

nunciantes, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Prescripción treintenaria*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 16—*Orden*, núm. 1—*Cámara civil*, núm. 2—*Multas*, núm. 1.

Mutuo—Véase: *Contrato de mutuo*, núm. 1.

Mutuo consentimiento—Véase: *Bigamia*, núm. 1—*Transacción*, núm. 4.





Negligencia—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1, 16 y 25—*Absolución*, núm. 1.

1. Nietos adulterinos—No pueden entrar por representación á la herencia del abuelo, solo puede ser declarada heredera la madre, y los menores gestionar sus derechos contra la testamentaria de ésta—Jur. Civ., tom. 8, pág. 565, Ser. 1ª.

Nombre—Véase: *Paternidad*, núm. 1—*Término extraordinario*, núm. 1—*Falta de personería*, núm. 3.

1a. Nómina de testigos—Para probar las tachas, no se encuentra comprendida en la disposición de la ley sobre esposición por tres días antes de vencerse el término—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407, Ser. 2ª.

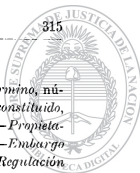
Nómina—Véase: *Diligencias testimoniales*, núm. 1.

Nota—Véase: *Nulidad*, núm. 23.

1b. Notificación—Solo procede de las resoluciones de los jueces, el aumento de alquiler no se encuentra en ese caso—Jur. Civ., tom. 8, pág. 468, Ser. 1ª.

1a—En el procedimiento marcado en el Cap. V «de las Tachas» no se exige esta formalidad. La prueba para las tachas es de diez días, y si fuese necesario la esposición de los testigos de las tachas, se insumiría la mayor parte de un término tan exíguo: el juicio de tachas se haría poco menos que imposible.

1b—Se trata de la notificación judicial solicitada por un locador á su locatario del aumento del alquiler de la cosa locada. Esta no procede, porque las notificaciones que se hacen por mandato judicial son de las providencias, autos, ó sentencias que se dictan en juicio, mas no de las



NOT-NUL

Notificación—Véase: *Providencia*, núm. 1—*Término*, números 4 y 5—*Incidentes*, núm. 1—*Domicilio constituido*, núm. 1—*Regulación*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 11—*Propietario*, núm. 2—*Esposo*, núm. 1—*Competente*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 14—*Apercibimiento*, núm. 1—*Regulación de honorarios*, núm. 4—*Posiciones*, núm. 15.

Notificado—Véase: *Auto*, núm. 6.

1a. Novación—No se presume, es necesario que la voluntad de verificarla resulte plenamente justificada—Jur. Com., tom. 5, pág. 124, Ser. 1ª.

2. Novación—De una deuda sin espresar la existencia de prenda, hace desaparecer el contrato, en caso de que hubiese existido al contraerla—Jur. Com., tom. 6, pág. 286, Ser. 1ª.

3. Novación—No se presume, debe justificarse ampliamente—Jur. Com., tom. 6, pág. 394, Ser. 1ª.

Novación—Véase: *Ampliaciones*, núm. 1.

1b. Nula—Lo es la sentencia recaída sobre aquello que no ha sido materia de sustanciación y discusión durante el juicio, aun cuando al deducir la acción se haya designado en forma—Jur. Civ., tom. 6, pág. 151, Ser. 1ª.

Nula—Véase: *Sentencia*, núms. 1, 4 y 5—*Rendición de cuentas*, núm. 1—*Curador*, núm. 2—*Cesión*, núms. 1 y 4—

resoluciones estrajudiciales de los particulares á cuya clase pertenece el caso presente, pues no existe demanda alguna ni puede ser considerada la diligencia como medida preparatoria del juicio ordinario, autorizada por la ley.

1a—Art. 983, Cód. de Com. y 812, Cód. Civ. A no ser que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva: esta incompatibilidad hace innecesaria la manifestación de la voluntad. Véase: Inst. tom. 1, Verb. Novación, núm. 1812; Renovación, núm. 2370; Banco de la Provincia, núm. 260; Locación, núm. 1679. F. S. C. N., tom. 2, pág. 330, Ser. 1ª; toms. 2, pág. 378; 11, pág. 119; 12, pág. 25, Ser. 2ª.

2—Véase: Verb. Contrato, núm. 19.

3—Véase nota 1.

1b—Art. 237, Cód. de Proc.

NUL

Juicio ejecutivo, núm. 1—*Honorarios*, núm. 12—*Aceptante*, núm. 3.

1. Nulidad—Solo puede deducirla aquel á quien no se da intervención en un juicio debiendo tenerla — Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 1ª.

2. Nulidad—El derecho de alegarla en una donación hecha por una señora que se decía viuda, siendo casada, no puede ser ejercido por el donatario que aceptó el acto—Jur. Civ., tom. 6, pág. 61, Ser. 1ª.

3. Nulidad—Por defecto de procedimiento, quedará subsanada, si la parte al tomar intervención después de producidas las actuaciones que se dicen nulas no reclama se haga la declaración—Jur. Civ., tom. 6, pág. 125, Ser. 1ª.

4. Nulidad—Reclamada la del testamento, los legatarios son parte directa siempre que lo solicite el que deduce la acción—Jur. Civ., tom. 6, pág. 307, Ser. 1ª.

5. Nulidad—De un testamento, son parte legítima en las demandas no solo los herederos instituidos, sino también los legatarios y no importa un prejuzgamiento la intervención ordenada de oficio por el Juzgado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 315, Ser. 1ª.

6. Nulidad—Cuando es manifiesta y consistente en haber

1—Véase: Inst. tom. 1, verb. Nulidad, núms. 1824 y 1834.

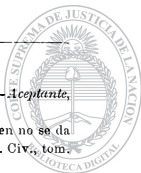
2—El art. 192, Cód. Civ. dice: «La mujer, el marido y los herederos de ambos son los únicos que pueden reclamar la nulidad de los actos y obligaciones de la mujer por falta de licencia del marido.

3—Art. 240, Cód. de Proc.

4—Art. 3862 *in fine*, Cód. Civ.

5—El título en virtud del cual tienen derechos á la herencia, es el testamento: es de consiguiente, imprescindible la citación de todos los interesados en el testamento con el objeto de defender su subsistencia que es la base de su derecho. La intervención la autoriza el art. 3862 del Cód. Civ.

6—Las leyes 2, tít. 13, Lib. 2º F. R.; 16, tít. 22, Part. 3ª, establecieron el principio de que la sentencia debe pronunciarse «sobre aquello que fué la demanda y no sobre otra cosa»; esta prescripción ha pasado á formar parte



NUL

fallado sobre puntos que no estaban en tela de juicio, puede y debe ser declarada por el Tribunal—Jur. Civ., tom. 2, pág. 21, Ser. 2ª.

7. Nulidad—De la sentencia declarada por el Superior trae aparejada el levantamiento de los embargos que en ella se fundan—Jur. Civ., tom. 2, pág. 166, Ser. 2ª.

8. Nulidad—De la sentencia, por la supresión de trámites esenciales del juicio, puede y debe ser declarada de oficio Jur. Civ., tom. 1, pág. 180, Ser. 2ª.

9. Nulidad—Aun cuando no haya sido deducido el recurso, la Cámara puede declararla de oficio—Jur. Civ., tom. 1, pág. 214, Ser. 2ª.

10. Nulidad—De una sentencia, la Cámara puede de ofi-

de nuestro actual Cód. de Proc. que en su art. 216 prescribe que *la sentencia debe contener decisión expresa con arreglo á las acciones deducidas en el juicio, condenando ó absolviendo de la demanda en todo ó en parte*: cuando la sentencia es pronunciada con violación de las formas y solemnidades que establecen las leyes, ó en virtud de un procedimiento en que se hayan omitido las formas sustanciales del juicio, la ley acuerda al litigante el recurso de nulidad—art. 237, Cód. de Proc.—Este recurso debe interponerse conjuntamente con el de apelación, y en caso de no hacerlo el Superior generalmente no puede pronunciarse sobre la nulidad; mas cuando la nulidad es manifiesta y sustancial, ella puede ser declarada de oficio por el Superior generalmente, no puede pronunciarse la nulidad; mas cuando la nulidad es manifiesta y sustancial, ella puede ser declarada de oficio por el Superior; así lo ha consagrado una sana jurisprudencia sentada por los Tribunales. Véase: F. S. C. P., tom. 1, págs. 213, 221, 339 y 346; tom. 9, págs. 208 y 214; Ser. 2ª: tom. 1, pág. 408, tom. 6, pág. 173, Ser. 1ª; art. 1047 Cód. Civ.

7—La nulidad declarada vuelve las cosas al mismo é igual estado en que se hallaban antes del acto anulado.—Art. 1050, Cód. Civ. Véase: Inst. tom. 1, verb. Acto jurídico, núm. 87; Nulidad, núm. 1849.

8—Véase: Verb. Nulidad, núm. 6 y nota—art. 1047, Cód. Civ.

9—Siempre que la nulidad sea sustancial ó absoluta, pues si fuese mera nulidad de procedimiento quedaría subsanada en caso de no reclamarse de ella en 1ª Instancia. En el caso presente se trata de una nulidad absoluta.

10—Véase nota anterior.



NUL

cio declararla aun cuando las partes no hayan interpuesto el recurso—Jur. Civ., tom. 1, pág. 306, Ser. 2ª.

11. Nulidad—De una notificación, al término para la parte se cuenta desde la fecha en que manifiesta que ha tenido conocimiento de lo resuelto — Jur. Civ., tom. 1, pág. 403, Ser. 2ª.

12. Nulidad—Del matrimonio por falta de formalidades canónicas solo puede ser declarada por los jueces eclesiásticos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 366, Ser. 1ª.

13. Nulidad—Del juicio, debe declararse de oficio, si existiendo menores interesados se sigue sin intervención del ministerio pupilar—Jur. Civ., tom. 7, pág. 447, Ser. 1ª.

14. Nulidad—De una sentencia, solo puede interponerse como recurso y conjuntamente con el de apelación, deducida como acción ante el Juez inferior debe ser rechazada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 566, Ser. 1ª.

15. Nulidad—Debe ser declarada la de la sentencia que no resuelva espresa y positivamente la cuestión sometida á la decisión del Juzgado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 299, Ser. 1ª.

11—Art. 40, *in fine*, del Cód. de Proc.

12—Tratándose de matrimonios celebrados ante la Iglesia católica ó con autorización de ella—Art. 225, Cód. Civ.

13— Art. 494, Cód. Civ., Véase: Inst. tom. 1, Verb. Nulidad, núms. 1830 y 1841 y notas respectivas. Esta nulidad aunque absoluta, debe entenderse de un modo racional, de modo que no contrarie el espíritu de esas mismas leyes consagradas con el fin de garantizar los bienes é intereses de los menores. Si bien el procedimiento en este caso es nulo, ella no debe declararse de una manera imprescindible, sino que debe consultarse los intereses de los menores: si éstos son beneficiados por las actuaciones nulas, no hay razón alguna para que no queden subsistentes, máxime si se tiene en cuenta que la parte que á sabiendas produce la nulidad no puede alegarla fundada en la incapacidad de la otra parte.

14—La nulidad de la sentencia, deducida como acción ante el mismo Juez, que las leyes antiguas autorizaban, es improcedente bajo el imperio del Cód. de Proc.—Arts. 238 y 239.

15—Arts. 216 y 237, Cód. de Proc.



NUL

16. Nulidad—Adolece de ese vicio toda sentencia dictada por un Juez recusado, siempre que la recusación esté admitida y consentido el auto que la admitió—Jur. Civ., tom. 8, pág. 391, Ser. 1ª.

17. Nulidad—La Cámara puede declarar la de la sentencia que no se ajusta á lo pedido en la demanda y discutido entre las partes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 9, Ser. 1ª.

18. Nulidad—No la produce la falta de estudio detallado

16—El art. 366 del Cód. de Proc., dice: «la recusación producirá el efecto de atribuir el conocimiento del asunto al Juez que corresponda en el orden del turno.

17—La litiscontestación es la raíz y la base de todo juicio. Ley 10, tít. 4, y 3, tít. 10, Part. 3ª;—arts. 103 y 212 del Cód. de Proc.—Es un cuasi-contrato celebrado implícitamente entre las partes, que no permite al Juez sin el consentimiento de ambas resolver sobre otros hechos que los alegados en la demanda y contestación. «El alcalde dé la sentencia sobre aquello que fué la demanda é non sobre otra cosa», dice la Ley 2, tít. 13, lib. 2, F. R. Igual cosa disponen las Leyes 15 y 16, tít. 22, Part. 3ª; 10, tít. 17, lib. 4, Rec. Part.; 2, tít. 16, lib. 11, Nov. Rec., según los cuales la sentencia debe ser dictada según lo alegado y probado conforme á la demanda y contestación sobre el pleito. Según nuestro Cód. de Proc. los requisitos que debe contener toda sentencia están enumerados en los arts. 216, 217 y 218, sus disposiciones son de orden público y deben ser observadas, al dictarse sentencia, bajo pena de nulidad. En el caso presente se declaró de oficio la nulidad de la sentencia, teniendo en consideración que si bien el Cód. de Proc. no ha previsto el caso de que los Jueces superiores puedan declarar de oficio nulos las sentencias pronunciadas por los Inferiores aunque la nulidad sea absoluta ó manifiesta, sinembargo en estos casos debe por analogía aplicarse el derecho común. El art. 1038 del Cód. Civ. y su nota ilustrativa, como igualmente el 1047, autorizan á los Jueces para declarar de oficio la nulidad manifiesta ó absoluta de que pueden adolecer los actos jurídicos, que no son por su naturaleza susceptibles de subsanación. Hay resoluciones contrarias á ésta, dictadas por la Cámara, en las que se ha sentado la doctrina de que la Cámara no puede pronunciar mas nulidades que las trasadas ante ella por recursos deducidos en tiempo y forma.

18—Conviene sinembargo prestar la consideración que merece toda prueba, pero basta la referencia que á ella haga el Juez, desde que ello importa de parte del magistrado la emisión de su juicio sobre el mérito de la prueba producida, lo que es indudable que puede hacerse sin entrar en detalles, cuando no hay cuestiones que exijan un examen especial.

NUL

de la prueba en la sentencia, basta que el Juez declare que ella no es suficiente al objeto propuesto—Jur. Civ., tom. 8, pág. 425, Ser. 1ª.

19. Nulidad — De una sentencia, no puede declararse por no haber resuelto el Juez todas las cuestiones materia del debate, pues si una sola basta para destruir la acción entablada no es necesario pronunciarse sobre las demás—Jur. Civ., tom. 8, pág. 321, Ser. 1ª.

20. Nulidad—De la sentencia, la Cámara puede declararla de oficio siempre que no se hubiesen guardado las formas sustanciales del juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 376, Ser. 1ª.

21. Nulidad—No puede adolecer de este vicio la sentencia, aun cuando se haya fallado equivocadamente — Jur. Civ., tom. 8, pág. 554, Ser. 1ª.

22. Nulidad—No adolece de este vicio la sentencia que resuelve la cuestión como de puro derecho, haciendo caso omiso de la prueba producida—Jur. Civ., tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

19—Es esta una de las cuestiones más debatidas en nuestros Tribunales, y las Cámaras han resuelto contradictoriamente los diversos casos que se han presentado. De acuerdo con esta resolución puede verse el verb. *Jueces*, núms. 3, 4 y 5. En contra el núm. 6 y su nota, en la que consignamos nuestro modo de pensar en este punto del procedimiento.

20—Hay en este caso nulidad manifiesta y absoluta, la que debe ser declarada de oficio según disposición de los arts. 1038 y 1047 del Cód. Civ. Véase el núm. 17.

21—En este caso la sentencia puede ser injusta pero no nula, pues no se encuentra en ninguno de los casos previstos en el art. 237 del Cód. de Proc. Para reparar la injusticia de las sentencias de primera instancia ha sido establecido el recurso de apelación y los agravios causados en aquella instancia son reparados en ésta.

22—Es un principio inconcuso de procedimiento que el Juez no está obligado, para resolver los pleitos, á hacer uso de las mismas razones y argumentos aducidos por las partes en el juicio, si según su entender esos argumentos no son pertinentes para resolver el caso discutido. Es obvia la razón de este principio, y tiene su fundamento en que debiendo



NUL

23. Nulidad—No la produce la falta de nota en la matriz, pues la escritura de venta no puede en ningún caso conceputarse contra-escritura de la anterior—Jur. Civ., tom. 8, pág. 294, Ser. 1ª.

24. Nulidad—Debe declararse de oficio la de la sentencia que no se ajusta á lo pedido y discutido por las partes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 63, Ser. 1ª.

25. Nulidad—Del acto celebrado, los Jueces, aun cuando sea manifiesta, no pueden de oficio declararla mientras las

el Juez resolver las cuestiones según su ciencia y conciencia, es evidente que no solo puede sino que debe prescindir de los argumentos aducidos por los litigantes, para valerse de los que crea, en conciencia, responden mejor á la solución de las cuestiones. En este caso puede el Juez dictar una sentencia injusta pero no nula, no viola ninguno de los arts. 216, 217 y 327 del Cód. de Proc. Y es por igual razón que no debe considerarse nula una sentencia dictada después de haber el Juez recibido una causa á prueba, porque en ella no se tome en cuenta la producida por las partes. El auto en que se recibe la causa á prueba no obliga al Juez á considerarla como pertinente al fallar en definitiva, pues aun en caso de duda debe abrirse la causa á prueba con el objeto de ampliar y facilitar la defensa de las partes en el juicio. Es evidente que el simple hecho de resolverse una cuestión como de puro derecho haciendo caso omiso de la prueba producida, no autoriza á sostener que se han violado los arts. 216 y 217 del Cód. de Proc., y que la sentencia no se ha dictado *justa alegata et probata*. Cuando la sentencia contiene relación de la causa, plantea las cuestiones pertinentes, la estudia con relación á los antecedentes que son pertinentes, teniendo en cuenta la faz en que coloca la cuestión y encierra una decisión expresa y precisa sobre la acción deducida, ella es perfectamente valedera porque se ajusta á las prescripciones legales.

23—Se trata de la compra de una propiedad hecha en común por dos personas; una de éstas vende después su parte á su condómino: en este caso la segunda venta no debe anotarse en la matriz del traspaso anterior porque la segunda escritura no trata de un contradocumento sino de una venta real y verdadera, en cuyo caso no es aplicable el art. 996 del Cód. Civ.

24—Véase el núm. 17 y su nota.

25—La justicia en el ejercicio de su augusto ministerio, no procede en la jurisdicción contenciosa de oficio para *desfazer* agravios de que nadie se queja, sino que se mueve á instancia de parte para dirimir las con-





NUL

partes no sometan á su decisión cuestiones que tengan en él su origen—Jur. Civ., tom. 9, pág. 63, Ser. 1^a.

26. Nulidad—De la sentencia, solo puede ser deducida por la parte que se considere agraviada, es improcedente cuando la deduce el favorecido—Jur. Civ., tom. 9, pág. 165, Ser. 1^a.

27. Nulidad—No puede deducirse contra sentencias que la ley ha declarado inapelables—Jur. Civ., tom. 9, pág. 190, Ser. 1^a.

28. Nulidad—Adolece de ese vicio la sentencia que concede más de lo pedido por el actor, resolviendo puntos que no han sido materia de discusión—Jur. Civ., tom. 9, pág. 355, Ser. 1^a.

29. Nulidad—De una dación en pago, no pueden pedirla los herederos del deudor, fundándola en haberse hecho en fraude de los acreedores, solo éstos tienen personería para deducir esta acción—Jur. Civ., tom. 3, pág. 111, Ser. 2^a.

tiendas que se promueven ante ella: y es tan opuesto proceder inquisitorialmente á su declaración como lo es el dejar de pronunciarse sobre cuestiones que hayan sido promovidas ante ella por demanda de parte interesada.

26—El recurso de nulidad supone que ha inferido agravios la sentencia y que perjudica á la parte que lo interpone. No sería racional decir de nulidad de una sentencia el mismo favorecido por ella.

27—Art. 238, Cód. de Proc.

28—Se trata de una acción que fué instaurada como desalojo y el Juez falló ordenándolo y declarando rescindido el contrato: la causa se sustanció, como juicio sumario, debiendo ser en forma sumaria el desalojo y ordinaria el de rescisión; de manera que aunque se hubiese demandado la rescisión del contrato el juicio hubría sido nulo. Mas es el caso que solo se pidió el desalojo y el Juez al acordarlo declaró rescindido el contrato en cuyo caso viola lo prescrito en el art. 216 del Cód. de Proc. que establece que la resolución solo debe recaer sobre la acción deducida, no cumpliendo con esta disposición la sentencia es nula—art. 237 *ibid*.

29—Si el causante no puede pedirla tampoco pueden sus herederos á título universal, porque éstos representan la persona de aquél. *Haeres censetur cum defuncto una eademque persona*, decía la ley romana. La ley

NUL

30. Nulidad—De las enagenaciones hechas por el padre, de bienes de la sociedad conyugal, no pueden pedirla los herederos de la madre sin renunciar previamente la herencia paterna—Jur. Civ., tom. 3, pág. 111, Ser. 2ª.

31. Nulidad—Adolece de este vicio la sentencia que no resuelve espresamente los puntos sometidos á la decisión judicial—Jur. Civ., tom. 3, pág. 184, Ser. 2ª.

32. Nulidad—Esta escepción fundada en el cambio de acreedor sin conocimiento del ejecutado debe ser desechada si se hubiese opuesto fuera del término—Jur. Civ., tom. 3, pág. 359, Ser. 2ª.

33. Nulidad—Por falta de intervención del ministerio de menores, debe ser rechazada, siempre que el culpable único haya sido el denunciante—Jur. Civ., tom. 3, pág. 387, Ser. 2ª.

34. Nulidad—Esta escepción fundada en el hecho de haberse regulado los honorarios sin previa manifestación de disconformidad, debe ser rechazada si la regulación fué consentida—Jur. Civ., tom. 3, pág. 397, Ser. 2ª.

35. Nulidad—Por defecto de procedimiento, no puede 13, tít. 9, Part. 7ª, dice: «Segund derecho, como una persona es contada la del heredero, e la de aquel a quien heredó.»

30—El caso presente cae bajo la sanción de la antigua legislación. La ley 24, tít. 13, Part. 5ª, dice: «Esto se entiende, quando non quieren heredar, nin auer parte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar en ellos, entonces non podrian demandar los sus bienes propios á aquellos a quien los oviesse el padre enagenado, segund que es dicho: porque todos los pleytos derechos que el padre oviesse fecho, serian tenudos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuessen herederos.»

31—Arts. 216, 217 y 237. Véase: núms. 15 y 17.

32—Arts. 486 y 489 del Cód. de Proc.

33—La nulidad absoluta no puede ser alegada por el que ha ejecutado el acto sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba—Art. 1047, Cód. Civ.

34—La omisión en este caso no invalida lo proveído que se halla revestido de todas las formalidades de derecho.

35—De acuerdo con el art. 240 del Cód. de Proc





NUL

ser declarada por el Tribunal si no se hubiese interpuesto el recurso ante el inferior—Jur. Com., tom. 6, pág. 150, Ser. 1ª.

36. Nulidad—Debe ser declarada, y quedar sin efecto la sentencia que al resolver la primera cuestión rechaza la demanda omitiendo el estudio y resolución de las demás cuestiones—Jur. Com., tom. 6, pág. 544, Ser. 1ª.

Nulidad—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 1—*Intervención*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 2—*Juramento*, núms. 1 y 2—*Embargo*, núm. 1—*Fallo*, núm. 1—*Perito tercero*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 2—*Término*, núm. 9—*Juicio*, núm. 2—*Posiciones*, núm. 5—*Trámite*, núm. 1—*Asesores de menores*, núm. 1—*Resoluciones*, núm. 1—*Contador*, núm. 2—*Venta*, núm. 4—*Poseedor*, núm. 3—*Pacto de quota-litis*, núm. 2—*Interdicto de despojo*, núm. 1—*Matrimonios*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 7, 9 y 10—*Jactancia*, núm. 2—*Apelación*, núms. 2 y 4—*Honorarios*, núms. 13 y 23—*Acto jurídico*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 1—*Jueces de comercio*, núm. 2—*Recurso de nulidad*, núm. 1—*Arbitro-arbitrador*, núm. 1—*Comprador*, núm. 9—*Validez*, núm. 1—*Condómino*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 8—*Embargo preventivo*, núm. 27—*Prescripción*, núm. 12.

1. Nulidad de una convención—Debe declararse cuando existe error sobre la calidad de la cosa que los contratantes han tenido principalmente en vista y hace á la sustancia misma de la cosa—Jur. Civ., tom. 3, pág. 282, Ser. 2ª.

36—Este punto de procedimiento ha sido materia de resoluciones contradictorias, pero la jurisprudencia se inclina á resolver el punto en el sentido de este sumario. Puede verse en contra verb. Nulidades, núm. 19 y en favor verb. Jueces núm. 10.

1—El art. 926 del Cód. Civ. se refiere á las calidades sustanciales de las cosas y está tomado del art. 1110 del Cód. Francés. Lo sustancial se relaciona con los atributos esenciales y característicos. El Cód. de Prusia define con mucha precisión lo que debe entenderse por sustancia de una cosa ó por calidad sustancial. «Todas las partes y todas las propiedades de una cosa sin las cuales esta cosa cesaría de ser lo que ella re-

NUL

1a. Nulidad de una venta.—La sentencia que la declara, no hace cosa juzgada para los propietarios de las demás que tengan el mismo origen.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 207, Ser. 1ª.

2. Nulidad de una venta.—Efectuada en virtud de un certificado de la oficina de hipotecas sobre libertad de un inmueble, solo puede ser declarada, si resulta incierto, justificándose la mala fe del comprador.—Jur. Civ., tom. 3, pág. 91, Ser. 2ª.

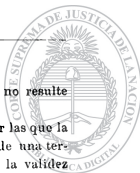
1. Nulidad por estelionato.—Trae consigo la devolución del precio y sus intereses á estilo de Banco, desde la fecha de su entrega, aun cuando en contrato las partes hubiesen previsto otra causa de nulidad y pactado otra pena como consecuencia de la falta de cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

1. Nulidades.— Para evitarlas, corresponde á los Jueces presenta, ó de concurrir al fin para el cual es destinada, forman la sustancia de la cosa». Nota al art. 926 citado; Marcadé, tom. 4; Sala, Febrero Novísimo, tom. 2; García Goyena, art. 989; Eseriche, verb. Error. Habiendo error se vicia la manifestación de la voluntad y trae la nulidad del acto—arts. 926 y 954.

1a.—Las sentencias no perjudican sino á las partes que han intervenido en el juicio. «El juicio que es dado entre algunos no puede empezar á otro fueros ende en cosas señaladas», decía la ley 20, tít. 22, Part. 3ª. Cuando se trata de aplicar la sentencia á un caso nuevo y distinto, que no ha sido todavía materia de sustanciación, no puede menos que establecerse su improcedencia. Los casos resueltos por los jueces tienen su origen en el caso propuesto y con él fenecen.

2.—El embargo de una propiedad traba su enagenación en el sentido de que no puede efectuarse con prescindencia del crédito que lo ocasiona, pero solo en tanto que el comprador conozca su existencia y haya hecho por conocerla, es que por derecho se exige, que se recabe informe de la oficina de hipotecas, embargos é inhibiciones; si el informe es falso, equivocando ó erróneo, nada puede imputarse al comprador que obra en virtud de él, mientras no se le pruebe que tenía conocimiento de ese error ó falsedad. Cualquier otro alcance que se pretenda dar á los simples embargos, vendría á dificultar las transacciones, creando derechos reales que han sido enumerados por el legislador de una manera taxativa, lo que sucedería si se diera á los embargos los efectos propios, esenciales, exclusivos de los derechos reales.





NUL—NUM

vigilar el orden del procedimiento á fin de que no resulte frustráneo—Jur. Civ., tom. 2, pág. 175, Ser. 2ª.

2. Nulidades—Los Jueces solo pueden declarar las que la ley ha establecido esplicitamente, y en ausencia de una terminante prescripción deben estar mas bien por la validez de los actos que por su nulidad—Jur. Civ., tom. 1, pág. 141, Ser. 2ª.

3. Nulidades—Si bien el Juez debe declararlas de oficio cuando juzga sobre la acción deducida en el juicio, debe abstenerse de hacerlo cuando el punto no ha sido sometido á su fallo ni directa ni indirectamente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 1ª.

Nulidades—Véase: *Competente*, núm. 3.

Nulo—Véase: *Litigio*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 8—*Aceptante*, núm. 3.

Nulos—Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 1.

Número—Véase: *Error*, núm. 1.

2—Art. 1037, Cód. Civ. Véase: F. S. C. P. tom. 7, pág. 220, Ser. 1ª.

3—Aunque es obligación de los Jueces declarar de oficio las nulidades absolutas, esto solo se entiende cuando la validez ó nulidad corresponda declarar con arreglo á las acciones deducidas en el juicio, mas no cuando la discusión no ha versado absolutamente sobre ello. En el caso ocu-
rrente se trata de la insubsistencia de un contrato de renta vitalicia, del cual no se dijo de nulidad en 1ª instancia, solo fué alegada al espresar agravios: la Cámara no podía pronunciarse sobre ella de oficio á causa de su posición pasiva cual corresponde á los Tribunales de Justicia, por su carácter de Juez de 2ª Instancia, ante quien va por segunda vez el juicio, no habiendo sido propuesta en oportunidad y forma legal la cuestión, como corresponde para la sentencia, de acuerdo con la demanda y contestación, que como cuasi-contrato, deben los jueces resolver estrictamente con arreglo á las acciones deducidas en ambas. Así se desprende del argumento del art. 1047 del Cód. Civ.



Objetos—Véase: *Robo*, núm. 1.

Oblación—Véase: *Pago*, núm. 4.

1. Obligación—La existencia del documento que la forma, en poder del deudor, prueba por si sola su extinción, sin que sea justificable por testigos la falsedad de la cancela-

1—Se trata de una letra de cambio, que en confianza, según lo aseveró el actor, fué entregada al obligado para su renovación sin que el acreedor hubiese podido obtener después, ni el pago, ni la renovación. El demandado le opone la escepción de pago fundado en la entrega del documento: la Cámara la declara procedente por mayoría de un voto. El art. 192 del Cód. de Com. establece, que las obligaciones se prueban por alguno de los medios que allí se enumeran, entre los cuales no está comprendida la prueba testimonial, que fué la única producida por el actor. De aquí resulta, que entregado un documento comprobatorio de una obligación, ésta se extingue legalmente, desde que la ley no admite la destrucción de esta prueba por medio de la testimonial, y tratándose de una letra de cambio, la exactitud de este argumento es más clara, pues el art. 819, Cód. de Com., establece que la transmisión de la letra, hecha al aceptante ó girando, extingue todas las obligaciones que de ella resulten. Se pretende que la entrega no extingue la deuda, porque la propiedad de las letras se transmite por el endoso, pero esta observación no tiene importancia ninguna pues en el caso ocurrente ya estaba vencida cuando se verificó su entrega, en cuyo caso no es procedente, como lo prescribe el art. 812: además, el art. 193 prohíbe probar por testigos los contratos cuyo valor exceda de 200 pesos. Por otra parte, debe tenerse presente que no hay disposición expresa que establezca que la entrega de una letra importe ó no su pago, en cuyo caso debe aplicarse por analogía el art. 973 del Cód. de Com. que establece, que la entrega del documento al deudor importa remisión de la deuda. Debe observarse además, que es práctica general en el comercio entregar al obligado la letra, una vez que ha sido cancelada la obligación.



OBL

ción si no existe un principio de prueba por escrito—Jur. Com., tom. 5, pág. 70, Ser. 1^a.

2. Obligación—De elevar á instrumento público un instrumento privado no debe cumplirse si este aparece evidentemente adulterado—Jur. Com., tom. 5, pág. 195, Ser. 1^a.

3. Obligación—Para que el deudor se constituya en mora debe intervenir el requerimiento judicial ó extrajudicial por parte del acreedor—Jur. Civ., tom. 1, pág. 68, Ser. 2^a.

4. Obligación—Cuyo cumplimiento depende de dos condiciones conjuntas, la falta de una de ellas exime al obligado hasta el total cumplimiento de ambas—Jur. Civ., tom. 7, pág. 283, Ser. 1^a.

5. Obligación—Siempre que para su cumplimiento se hayan designado bienes especiales, el acreedor solo puede exigir el pago haciendo escusión en los bienes afectados—Jur. Civ., tom. 8, pág. 79, Ser. 1^a.

6. Obligación—Sujeta para su cumplimiento á un hecho incierto no tiene plazo y el acreedor no puede exigir el cumplimiento sin justificar previamente que el hecho no ha tenido lugar por la voluntad del deudor—Jur. Civ., tom. 8, pag. 264, Ser. 1^a.

7. Obligación—La cláusula que defiende el cumplimiento á la época en que tenga lugar un hecho futuro necesario

3—Art. 509, Cód. Civ.

4—Art. 536, Cód. Civ.

5—Aunque esta designación no constituya ni una hipoteca, ni una prenda sin embargo importa una limitación á los derechos del acreedor que está obligado á dirigir su acción contra esos bienes antes que otros del deudor.

6—Según el art. 569 del Cód. Civ., se entiende que hay plazo y no condición, siempre que el hecho futuro fuere necesario aunque sea incierto, y se entiende haber condición y no plazo cuando el hecho futuro fuese incierto. En cuanto al segundo punto del sumario puede verse el art. 511, *ibid*.

7—Art. 529, Cód. Civ.

OBL

aunque incierto, se conceptúa plazo y no condición—Jur. Civ., tom. 9, pág. 50, Ser. 1ª.

8. Obligación—Es ejecutiva cumplido el hecho principal, aunque algunos accesorios no hayan terminado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 50, Ser. 1ª.

Obligación—Véase: *Cartas misivas*, núm. 1—*Obligado*, núm. 1—*Pena*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 2—*Término*, número, 2—*Fiador*, núm. 3—*Daños y perjuicios*, núm. 13—*Moneda*, núm. 1—*Mandato*, núm. 3—*Documento privado*, núm. 2—*Acciones*, núm. 3—*Demandado*, núm. 3—*Excepción de pago*, núm. 4—*Documento*, núm. 2—*Firma*, núm. 4—*Fiador*, núm. 6—*Juez*, núm. 5—*Prescripción*, núm. 23—*Transacción*, núm. 6.

Obligación condicional—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 1—*Espera*, núm. 1.

1. Obligación de hacer—Aun cuando su cumplimiento dependa de un hecho determinado, es una obligación pura y simple á la cual los jueces pueden señalar término para su cumplimiento, mientras el obligado no justifique que el hecho previsto al celebrar el contrato no ha tenido lugar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 556, Ser. 1ª.

2. Obligación de hacer—Aunque justificada por instru-

1—Si el hecho determinado fuese un acontecimiento que sucederá ciertamente, no importa una condición sino que simplemente defiere la exigibilidad de la obligación—Art. 529, Cód. Civ.

2—Se trata de un embargo preventivo solicitado en una demanda sobre escrituración, fundándose el postulante en dos consideraciones: 1º, En que la demanda había sido dada por evacuado en rebeldía del demandado: 2º, En que se trataba de un contrato bilateral que el actor había cumplido por su parte ó que ofrecía cumplirlo—art. 443, inc. 3º, Cód. de Proc.—El Juzgado no hizo lugar al embargo: 1º Porque el hecho de dar por evacuada la demanda en rebeldía del demandado, no tiene mas alcance que el de dar por decaído el derecho de usar del traslado: mientras que para que la rebeldía surta todos sus efectos legales y pueda considerarse tal, es necesario que ella sea notificada en la forma prevenida en el art. 433, Cód. de Proc. 2º Porque la obligación de escriturar que entraña



OBL

mento público no puede fundar un embargo mientras no se

el contrato de compraventa de un bien raíz, es una obligación de hacer, la cual no es materia de embargo preventivo, sino cuando se resuelve en indemnización de daños y perjuicios cuyo importe se haga constar en debida forma, pues de lo contrario sería impracticable dicho embargo desde que debe necesariamente practicarse como lo prescribe el art. 455, Cód. de Proc. Consideramos que el embargo fué denegado correctamente en cuanto se fundaba en la rebeldía alegada, mas no así bajo el punto de vista de un contrato bilateral. El que solicita el cumplimiento de un contrato de esta naturaleza que á su vez él ha cumplido ú ofrece cumplirlo, puede como medida previa, solicitar un embargo preventivo y los jueces procediendo en justicia deben decretarlo. 1º, Porque el art. 443, inc. 3 del Cód. de Proc., no distingue, qué clase de obligaciones bilaterales son las que dan lugar á embargo preventivo, no distingue entre las obligaciones de dar y las de hacer; es sabido que donde la ley no distingue tampoco nosotros podemos distinguir. Por otra parte, estudiando este artículo de la ley de Proc., se ve que se trata de toda clase de obligaciones bilaterales, sea de dar ó de hacer, pues él tiene por fundamento el art. 1201 del Cód. Civ. que trata del efecto de los contratos en general; este artículo tiene por fundamento la Ley 13, tít. 11, Part 5ª, cuyo título trata «De las promisiones, e pleytos, que fazen los omes unos con otros, en razon de faze-, ó de guardar, o de complir algunas cosas», y la ley 13 citada, empieza diciendo «obligandose vn ome á otro, de dar ó de faze alguna cosa» etc. De modo que la interpretación restrictiva que se pretende dar á este inciso del art. 443 del Cód. de Proc., es arbitraria y obedece tan solo á las sutilezas y cabilidades de los jueces; no tiene su razón de ser ni el espíritu ni en la letra de la ley. En cuanto al argumento que se hace de que el embargo preventivo debe efectuarse como lo prescribe el art. 455 del Cód. de Proc. debemos decir que este argumento prueba demasiado, y por consiguiente no prueba nada. Este artículo dice que el embargo se limitará á los bienes necesarios para cubrir el *crédito que se reclama* y las costas: se pretende que cuando no puede establecerse el monto del *crédito* no hay lugar á embargo, y como en las demandas sobre cumplimiento de obligaciones de hacer no puede establecerse el monto del *crédito* mientras ella no se resuelva en daños y perjuicios, no hay lugar al embargo: pero es el caso que la palabra *crédito* debe ser tomada aquí como sinónima de *cosa debida*, de obligación: pues de lo contrario ¿cómo se trabaría embargo en la cosa materia de una acción reivindicatoria sin justipreciarla previamente? ¿qué mejor precio que la cosa misma? En el mismo caso de una acción de escritura, una vez seguidos todos los trámites del juicio en primera instancia, obtenida una sentencia favorable en que se le condena al demandado á escriturar bajo apercibimiento ¿es procedente el embargo preventivo?

OBL

haya resuelto en indemnización de daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 7, pág. 218, Ser. 1^a.

Ciertamente que sí, pues el art. 448 del Cód. de Proc. lo autoriza; y sin embargo la situación de los obligados por el contrato es exactamente la misma en cuanto á que siempre es considerada como una obligación de hacer. La sentencia de 1^a Instancia no existe sino cuando ha sido resuelta en definitiva por el Superior. Por otra parte, la historia del embargo preventivo nos demuestra que por nuestro Cód. es perfectamente procedente, cuando se trata de obligaciones de hacer. Dejando á un lado disposiciones mas antiguas, tenemos la ley 41, tít. 2, Part. 3^a, que autorizó al demandante para exigir del demandado que no tuviera arraigo, la fianza de estar á derecho, la que fué confirmada por la ley 66 de Toro, si bien con la limitación de que esta garantía no podía exigirse por demanda de dinero, á no ser que el crédito se constatará por escritura auténtica ó por información sumaria de testigos. Más tarde la ley 1, tít. 9, Part. 3^a, vino á concretar más todavía los casos de embargo, detallándolos y estableciendo condiciones para su procedencia. La ley 41, tít. 2, Part. 3^a, citada, no hacía distinción si la obligación era de dar ó de hacer, tampoco lo distinguió la ley 66 de Toro, tan solo esta ley estableció que en caso de demandarse suma de dinero debía acreditarse la obligación por documento auténtico ó información sumaria, dejando en plena vigencia las disposiciones relativas á los demás juicios pudiendo exigirse el arraigo de derecho. Vino más tarde la Ley española de Enj. anterior á la vigente en la que se reglamentó el embargo preventivo restringiéndolo á los créditos por sumas de dinero, como puede verse en los arts. 930 y siguientes. Nuestro Cód. de Proc. que ha tenido por fuente principal esta ley, se ha apartado por completo de ella en lo referente á embargo preventivo: ha querido garantizar á los litigantes el cumplimiento de las decisiones judiciales: ha restablecido las garantías acordadas á los litigantes por las sabias leyes de Part., despojándolas de su primitiva rudeza y de su excesiva severidad, pues en un principio, cuando el demandado no podía arraigar el juicio, era constituido en prisión. Nuestro Cód. de Proc., ha consultado el Cód. Civ., para hacer efectivo los derechos por él consagrados y es por esto que el art. 443, inc. 3^o, se refiere al art. 1201 del Cód. Civ., que trata tanto de las obligaciones de *dar* como de las de *hacer*. Nos hemos detenido en el estudio de este punto del derecho, porque la jurisprudencia de la Cámara ha sido siempre uniforme en el sentido que establece el sumario que comentamos, jurisprudencia que debe reformarse consultando la letra y el espíritu de la ley, como asimismo el vuelo que han tomado las transacciones y la facilidad con que un hombre puede enagenar todo su patrimonio, en un tiempo relativamente corto. Debe observarse, por último





OBL

3. Obligación de hacer—La falta de cumplimiento se resuelve en daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

4. Obligación de hacer—Constar en la escritura de un terreno comprado á nombre de la esposa la procedencia del dinero, no es aplicable á las compras anteriores á la vigencia del Cód. Civ.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 27, Ser. 1ª.

5. Obligación de hacer—La sentencia que la contenga solo es ejecutiva después de vencido el plazo fijado, previa declaración del Juez—Jur. Civ., tom. 3, pág. 516, Ser. 2ª.

Obligación de hacer—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 10, 19 y 25—*Boleto*, núm. 1—*Promesa*, núm. 1.

1. Obligación estinguida—El que por medio de ella consigue una declaración de quiebra es responsable de los daños y perjuicios que se justifiquen—Jur. Com., tom. 6, pág. 17, Ser. 1ª.

Obligación principal—Véase: *Garantía hipotecaria*, número 1—*Prescripción*, núm. 15—*Fianza*, núm. 5.

1a. Obligación protestada—Por falta de pago, los inte-

que la Cámara ha resuelto un caso en que no se hace lugar á un embargo preventivo solicitado, por no haberse justificado por el que lo solicitaba el cumplimiento de las obligaciones que el contrato bilateral le imponía, lo que hace presumir que el embargo sería procedente según ella, si ese cumplimiento se hubiese comprobado. Véase: Inst. verb. Embargo preventivo, núm. 992 y nota.

3—Se trata de un contrato de compraventa de una cosa ajena, que no habiendo sido entregada se resolvió en daños y perjuicios de acuerdo con los arts. 1177 y 1329, Cód. Civ.

4—La ley 49, tít. 5, Part. 5ª, establece la misma doctrina que el artículo 1246 del Cód. Civ., con la sola diferencia de que éste exige que en la escritura de compra se haga constar que el dinero pertenece á la mujer y cómo le pertenece.

1a—Art. 913, Cód. de Com. Por el derecho civil se deben intereses desde el día que el deudor incurre en mora, para lo que es necesario que el deudor sea interpelado; el protesto surte los efectos de la interpelación. Véase: Reus y García, Cód. Civ. español, tom. 2º pág. 94, comentario al art. 526, que es igual al nuestro.

OBL

reses deben ser á cargo del deudor desde el día del protesto—Jur. Com., tom. 5, pág. 519, Ser. 1ª.

Obligación pura—Véase: *Obligación de hacer*, núm. 1.

1a. Obligación sin plazo—El mayor ó menor término que fije el Juzgado para su cumplimiento no causa agravio al obligado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 284, Ser. 1ª.

1. Obligación solidaria—Entre mayores y menores, las leyes de excepción que favorecen á éstos no amparan á los primeros—Jur. Civ., tom. 8, pág. 477, Ser. 1ª.

1b. Obligaciones — Las procedentes de letras endosables se prescriben por cuatro años—Jur. Com., tom. 5, pág. 179, Ser. 1ª.

2. Obligaciones — O responsabilidades provenientes de actos en que la Municipalidad ha procedido como particular deben ventilarse ante los Tribunales ordinarios—Jur. Civ., tom. 7, pág. 250, Ser. 1ª.

3. Obligaciones —El comprador de un inmueble solo responde por las del vendedor inherentes al dominio, pero

1a—El documento contenía la cláusula «tan pronto como mis circunstancias me permitan», en cuyo caso cae bajo la disposición del art. 620 del Cód. Civ. El Juez fijó en 30 días el término para el pago de la obligación, término que fué considerado equitativo por la Cámara. Debe tenerse presente que ésta no sentó el principio que establece el sumario, por el contrario del estudio del fallo resulta que del mayor ó menor término fijado puede resultar agravio para el obligado.

1b—Art. 1003, inc. 1º, Cód. de Com. Véase: Inst. tom. 1, verb. Letras de cambio, núms. 1636, 1637, 1638 y notas; Prescripción, núm. 2109; Aceptante, núm. 62 y nota.

2—No tratándose de actos en que la Municipalidad ejercita funciones que solo puede ejecutar en su carácter público de Poder administrador. Cuando en ejercicio de este poder se vulneran derechos particulares, se abre la jurisdicción contencioso-administrativa: pero cuando la Municipalidad obra en su carácter de persona civil, las relaciones jurídicas que crea quedan sujetas á la jurisdicción ordinaria ó común.

3—Se trata aquí de la acción de daños y perjuicios causados al vecino por el derrame de sumideros, siendo condenado el demandado al pago de esos daños y perjuicios y á practicar varias obras para colocarse en



OBL

no por las personales á que en su carácter de propietario hubiese sido condenado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 103, Ser. 1^a.

4. Obligaciones—Un tercero carece de personería para exigir judicialmente el cumplimiento de aquellas en cuya formación no intervino, las relaciones de derecho son las únicas que pueden formar el litigio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 435, Ser. 1^a.

Obligaciones—Véase: *Prescripción*, núm. 5—*Sub-locatario*, núm. 1—*Cuentas pendientes*, núm. 1.

1. Obligaciones á plazo—Solidarias entre mandante y mandatario, no pueden formar parte de una rendición de cuentas hasta después de su vencimiento—Jur. Civ., tom. 3, pág. 472, Ser. 2^a.

1a. Obligaciones al portador—Solo se prescriben á los 20 años—Jur. Com., tom. 5, pág. 273, Ser. 1^a.

1b. Obligaciones condicionales—El cumplimiento de la condición á cargo de un tercero, se considera llenado si se declara así, aunque particularmente éste se niegue á cumplirla—Jur. Civ., tom. 7, pág. 322, Ser. 1^a.

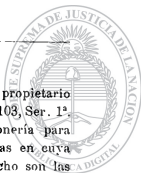
2. Obligaciones condicionales—Solo pueden ser ejecutivas las condiciones exigidas por las ordenanzas municipales y por el Cód. Civ., en cuanto restringen el dominio por causas de orden público. Vendida la propiedad el vendedor pidió que se le obligara al nuevo propietario al cumplimiento de la sentencia. En cuanto á la primera parte, la petición no procede, se trata de una acción personal por daños y perjuicios en cuyo caso solo afecta á las partes contra quienes fué dictada, y solo podría afectar al sucesor en caso de tratarse de una acción real por razón de dominio, posesión ó hipoteca: en cuanto á la segunda parte, debe considerarse como procedente porque todo vecino tiene derecho á pedir que las leyes relativas á las restricciones y límites del dominio sean cumplidas por el dueño del inmueble sin distinción de personas.

4—Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor—Art. 503, Cód. Civ.

1a—Art. 1002, Cód. de Com.: el 1003 no es aplicable porque éste se refiere solo á las letras de cambio y demás papeles endosables.

1b—Art. 537, Cód. Civ.

2—Daría lugar á la escepción de inhabilidad de título acordada por el



OBL

tivas, justificando previamente que la condición ha sido llenada—Jur. Civ., tom. 8, pág. 231, Ser. 1ª.

1a. Obligaciones mancomunadas—El deudor que paga el total de la deuda subroga al acreedor en sus derechos contra los demás co-obligados—Jur. Com., tom. 5, pág. 364, Ser. 1ª.

Obligaciones mutuas—Véase: *Embargo preventivo*, número 26.

Obligaciones particulares—Véase: *Herederos*, núm. 3.

Obligaciones sin plazo—Véase: *Prescripción*, núm. 1—*Prueba*, núm. 16.

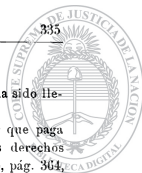
Obligaciones solidarias—Véase: *Obligaciones á plazo*, núm. 1.

1b. Obligado—El que incurra en mora, debe ser condenado en las costas y gastos que el acreedor haya hecho al exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 185, Ser. 1ª.

art. 488, inc. 4º del Cód. de Proc., ó á la de espera del inc. 9 del mismo artículo.

1a—Art. 939, inc. 2º, Cód. de Com.

1b—El art. 509 del Cód. Civ., requiere para que el deudor incurra en mora, el requerimiento judicial ó extrajudicial y el art. 508 establece la responsabilidad del deudor por los daños é intereses que su morosidad causare al acreedor. También es de estricta aplicación la disposición del art. 221 del Cód. de Proc. Pero ¿sucedería otro tanto, tratándose de una demanda instaurada exigiendo el cumplimiento de una obligación sin plazo? Creemos que si el deudor se aliana á cumplirla, sin oponer dificultad, al ser notificado, la condenación en costas no sería procedente. En este caso no sería aplicable el art. 509, Cód. Civ., porque este art. se refiere á la interpelación en las obligaciones de plazo vencido: tampoco sería aplicable el art. 221 del Cód. de Proc. que impone las costas al vencido, y es evidente que en un juicio en que hay plena conformidad de ambas partes, no puede haber pleito ni contienda alguna, no hay vencido ni vencedor. Por último sería contrario al argumento de la Ley 7, tít. 3, Part. 3, que establece: «Catadas todas los casos que de suso decimos deve después el demandado responder á la demanda de esta manera, otorgando de llano lo que le demandan si es cierto que verdaderamente lo deve. Ca si lo negasse y le fuesse después provado, caería



OBL—OFE

Obligado—Véase: *Mandatario*, núm. 1.

1a. Obligado solidariamente—En un contrato, puede cambiar su carácter al prorrogario, convirtiéndose en fiador sin que en este caso pueda serle aplicable las cláusulas del contrato primitivo—Jur. Civ., tom. 5, pág. 5, Ser. 1ª.

Obra de mano—Véase: *Propietarios*, núm. 1.

Obra nueva—Véase: *Interdicto de obra nueva*, núms. 1 y 2.

Obra pública—Véase: *Peritos*, núm. 5.

Obras—Véase: *Locación de servicios*, núm. 3—*Consentimiento tácito*, núm. 1—*Peritos*, núm. 6.

1b. Ocultador—De objetos robados al cual no se justifique haber tenido conocimiento de su procedencia no puede ser penado—Jur. Crim., tom. 5, pág. 463, Ser. 1ª.

1c. Ofensas graves—A la espesa del reo, se conceptúan por ende en daño é en vergüenza, pechando lo que le demandaban, é demas las costas é las misiones, á aquel que venciese en la demanda. Mas quando otorgase luego lo que devia, el Juzgador le deve mandar que pague lo que conosco, fasta diez dias, ó á otro plazo mayor, segun entendiase que es guisado en que lo pueda cumplir». De aquí se desprende que cuando el demandado confiesa lisa y llanamente que debe lo que se le demanda y que está pronto á cumplirla el deudor no puede ser condenado en las costas.

1a.—Se trata de una obligación solidaria contraída por codeudores; esta obligación se renueva asumiendo uno de ellos el carácter de simple fiador. Se pretende que el fiador continúa en su carácter de codeudor solidario, porque para que cesara en este carácter habría sido necesario una novación de la obligación primitiva, la que según lo dispone el art. 983 del Cód. de Com., no se presume: más debe tenerse presente, que la ley establece que para que la solidaridad exista, es necesario que ella esté expresa en términos inequívocos, ya obligándose *in solidum*, ó cada uno por el todo ó que expresamente la ley lo haya declarado—art. 701, Cód. Civ.—Entre la prescripción legal que dice que la novación no se presume y la que prescribe la constancia expresa de la solidaridad, debe prevalecer ésta, 1º porque entre una presunción legal y un mandato de la ley, debe estarse á éste último, y 2º porque las obligaciones, en caso de duda, deben interpretarse en el sentido más favorable al deudor.

1b.—De acuerdo con el art. 64 del Cód. Pen. anterior.

1c.—Art. 197, Cód. Pen. anterior



OFI—ORG

circunstancias atenuantes—Jur. Crim., tom. 5, pag. 476, Ser. 1ª.

Oficial de justicia—Véase: *Embargo*, núm. 7.

Oficio—Véase: *Instrumento público*, núm. 1.

Omisión—Véase: *Trámite*, núm. 1—*Martilleros*, núm. 3.

Omisiones—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 3.

Opiniones jurídicas—Véase: *Excusación*, núm. 1.

1a. **Oposición**—Del poseedor á quien se pretende embargar á nombre de otro, no debe ser sustanciada como tercería—Jur. Civ., tom. 1, pag. 21, Ser. 2ª.

Oposición—Véase: *Venta privada*, núm. 2—*Prueba*, número 17.

1b. **Orden**—Emanada de la Municipalidad sobre servicios ú obras públicas, se conceptúa contrato administrativo sujeto en su ejecución y efectos á la jurisdicción contencioso-administrativa—Jur. Civ., tom. 8, pag. 599, Ser. 1ª.

Orden judicial—Véase: *Rematador*, núm. 1.

1c. **Orden público**—No tienen este carácter las leyes que rigen las transacciones entre particulares—Jur. Com., tom. 6, pag. 289, Ser. 1ª.

Ordenanzas municipales—Véase: *Contencioso-administrativo*, núm. 2—*Cámara civil*, núm. 2—*Municipalidad*, número 4.

1. **Organización**—De los Tribunales de la Capital de la República, Ley de—Jur. Civ., tom. 7, pag. 3, Ser. 1ª.

1a—Debe sustanciarse en la misma forma en que puede hacerlo el deudor contra quien se ha decretado el embargo. Así cuando se ha embargado un bien raíz, si el propietario produce sus títulos, no puede obligársele á deducir una tercería. Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Tercería*, núm. 2552 y nota.

1b—Véase: *Verb. Contratos*, núm. 1 y nota.

1c—No lo son porque se limitan á fijar la esfera dentro de la cual será obligatoria la manifestación de la voluntad individual. Véase: *Verb. Moneda especial*.



ORO

1. **Oro sellado**—En pesos fuertes, su denominación importa la designación de una moneda especial para el cumplimiento de un contrato y no puede serlo con billetes de curso legal sino por su valor corriente en plaza — Jur. Com., tom. 6, pág. 301, Ser. 1ª.

2. **Oro sellado**—En pesos fuertes, su denominación importa la designación de moneda especial para el cumplimiento de un contrato y no puede serlo con billetes de curso legal sino por su valor corriente en plaza—Jur. Com., tom. 6, pág. 303, Ser. 1ª.

3. **Oro sellado** —Moneda nacional, la denominación de tal importa designación de una moneda especial para el pago y solo puede ser cancelada con billetes de curso legal por su valor corriente el día del pago—Jur. Com., tom. 6, pág. 306, Ser. 1ª.

1—El art. 3º de la ley de 1885 dispone, que cuando las obligaciones han sido contraídas con designación de moneda especial, no pueden ser canceladas en moneda de curso legal sino por su valor escrito. Los pesos fuertes oro sellado, son moneda especial en el sentido de este artículo. Esta resolución tiene igualmente su fundamento en el art. 619 del Cód. Civ., que dispone que si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie y calidad de moneda corriente nacional, cumple la obligación dando la especie designada, ú otra especie de moneda nacional al cambio que corra en el lugar el día del vencimiento de la obligación. Véase: Inst., tom. 1, verb. *Moneda*, núm. 1763—Este punto de la ley ha sido ya resuelto en este sentido de una manera constantemente uniforme, de modo á formar jurisprudencia en nuestros tribunales. En este sentido pueden verse los siguientes fallos: Tom. 13, pág. 327; tom. 14, pág. 483; tom. 10, págs. 360, 369 y 357; tom. 11, págs. 35 y 38; tom. 20, págs. 298 y 304; tom. 21, págs. 236, 469 y 483, Ser. 2ª, F. S. C. N.; F. S. C. P., tom. 3, pág. 279, Ser. 2ª.

2—Véase nota precedente.

3—El art. 3º de la ley de 15 de Octubre de 1885, transcrito en la nota precedente establece que cuando las obligaciones han sido contraídas con designación de moneda especial no pueden ser canceladas en moneda de curso legal, sino por su valor corriente en plaza. La *moneda nacional oro sellado*, es moneda especial en el sentido de este artículo. La ley de 1885 fué meramente interpretativa respecto de las obligaciones contraídas



ORO—OTO

Oro sellado—Véase: *Curso forzoso*, núm. 1—*Moneda especial*, núm. 1.

Otorgantes—Véase: *Simulación*, núm. 1.

con anterioridad á ella, sin que haya sido su mente alterarlas, por cuanto las convenciones celebradas por las partes constituyen ley para ellas, como terminantemente lo establece el art 1197 del Cód. Civ. Cuando en la obligación se estipula que su pago se hará en *moneda nacional oro sellado* se estipula una moneda distinta de la *moneda nacional oro*, respecto de lo que el art 3º de la ley citada ha establecido que pueden ser canceladas en billetes de curso legal por su valor escrito. La expresión oro sellado, no queda comprendida en esta parte de la ley. Debe tenerse presente además, que las convenciones deben ejecutarse de buena fe—art. 209, inc 3º, Cód. de Com.—y entonces es forzoso convenir que la designación de *moneda nacional oro sellado* queda incluida en la segunda parte del art. 3º citado, el que no acuerda al deudor otro derecho que el de cancelar su obligación con billetes de curso legal por su valor corriente en plaza.





1. Pacto de quota-litis--Según las antiguas leyes, solo estaba prohibido á los abogados ó procuradores de número, el tercero que se encarga de la prosecución del litigio no

1—En la antigua legislación estaba prohibido el pacto de *quota-litis* para los abogados y procuradores de número. La ley 14, tít. 6, Part. 3^a, lo prohibió á los abogados, y las leyes 8, tít. 16, lib. 2, R. C. y 9 tít. 28, lib. 2 R. de Indias, á los procuradores de número á quienes las partes estaban obligadas á confiar su representación en el juicio. No hay precepto alguno de esa legislación que prohíba este pacto á los que no son abogados ni procuradores de número. Los prácticos interpretando estas leyes, se inclinan á sostener la validez del pacto, cuando se hace con un tercero que no interviene directamente en el pleito. Así Escriche en su Diccionario dice: «pero parece que debe ser válido, hablando en general, cuando se hace con un tercero que adelanta la suma de dinero que se necesita para hacer valer el derecho litigioso, esponiéndose á perderla». Castro en su *Práctica Forense* dice simplemente que los procuradores de número no deben hacer partido con las partes de seguir los pleitos á su costa. Gregorio Lopez en su glosa á ley de Part. citada dice que esta cohibición tuvo su origen en la prohibición que se les había impuesto á los médicos de comprar los bienes de sus enfermos, pues éstos por tal de recuperar la salud los venderían todos para gastos de curación y medicina. Otra razón más que ha tenido la ley de Part., para prohibir este pacto es «el peligro de que el abogado procurase triunfar, sin reparar en los medios ilícitos ó ilícitos». Véase: glosa 76 á la Part. 3^a citada, Gregorio Lopez. Además, para que sea prohibido este pacto es necesario que haya pleito, litigio de jurisdicción contenciosa, pues si no lo hay, el pacto no es prohibido, como cuando se trata de un juicio voluntario de testamentaria. En este estado de la legislación, se dictó el Cód Civ que estableció en su art 1952 la libertad de las partes de remunerar á los mandatarios con una cuota en dinero, ó de los bienes que el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato hubiese obtenido, pero mas adelante agrega, «salvo lo que se halle dispuesto en el Cód. de Proc. respecto

PAC

se encuentra comprendido en sus disposiciones—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2º.

2. Pacto de cuota-litis—Anula el contrato en todas sus partes, de tal manera que la obligación de no revocar el poder deja de existir una vez declarada judicialmente la nulidad del contrato—Jur. Civ., tom. 1, pág. 295, Ser. 2º.

Pacto comisorio—Véase: *Renta vitalicia*, núm. 1.

á abogados y procuradores judiciales». Esta disposición guarda relación con el art. 1870, inc. 6º que declara aplicables sus preceptos «A los procuradores judiciales en todo lo que no se oponga á las disposiciones del Código de Proc.» La ley de 5 de Octubre de 1870 prohibió espresamente el pacto de *cuota-litis*; esta ley despues de declarar libre la procuración dice en su art. 4º «Los apoderados y procuradores podrán hacer ajustes con las partes respecto á la retribución de sus servicios sujetándose á las leyes que reglan los contratos. *Les es sinembargo absolutamente prohibido hacer el pacto de cuota-litis*: hay que notar que este artículo habla de *apoderados y procuradores*, en relación con el art. 1º que declara que toda persona hábil, fuese ó no procurador recibido puede representar á otro en juicio de aquí resulta que esta prohibición rige no solo respecto de los procuradores recibidos, sino para todos los apoderados. Obedeciendo los principios sentados por esta ley se dictó el Cód. de Proc. que en su art. 66, despues de establecer la libertad de las partes para fijar el monto del honorario del abogado, dice: «Será sinembargo nulo y sin efecto todo pacto por el cual el abogado venga á hacerse partícipe ó á tener interés directo en el resultado del pleito». Y el art. 70, prescribe, que respecto de los honorarios de los *procuradores, mandatarios y contadores regirán las mismas reglas establecidas para los abogados*. De lo espuesto resulta que este pacto es nulo siempre que reúna las condiciones siguientes: 1º Que haya pleito, es decir juicio de jurisdicción contenciosa; 2º Que la cuota-litis sea establecida en favor del que directamente interviene en el juicio ya sea como abogado, procurador ó simple mandatario. Para mayor ilustración pueden consultarse los siguientes fallos: F. S. C. P. tom. 3, pág. 264, Ser. 1º; F. S. C. N. tom. 9, pág. 85, Ser. 2º. Debe tenerse presente que las razones que existieron para dictar las leyes antiguas ya no tienen razon de ser, y por consiguiente, en caso de duda debe considerarse válido el contrato. Los contratos en caso de duda deben interpretarse de manera que produzcan los efectos que las partes tuvieron en vista al tiempo de su celebración. *In dubio standum est instrumentum*, decía la ley Romana.

2—De acuerdo con el principio sentado en el art. 1950, Cód. Civ.



PAD-PAG

Padre—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

1a. Padres—Para estar en juicio por sus hijos menores, no necesitan acompañar los documentos en que conste su carácter—Jur. Civ., tom. 1, pág. 378, Ser. 2ª.

Padres—Véase: *Hijo natural*, núm. 1 — *Reivindicación*, núm. 4—*Administradores*, núm. 1.

1b. Padres naturales—No pueden obligar los bienes de sus hijos menores sin autorización judicial aun cuando fuera en exclusivo provecho de éstos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 493, Ser. 2ª.

Pagaré—Véase: *Excepción de falsedad*, núms. 1 y 6 — *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 3.

Pagaré—Véase: *Inhabilidad de título*, núms. 4 y 6—*Firma*, núms. 3 y 4—*Excepción de novación*, núm. 1.

1a—Es una facultad emanada de la patria potestad, que es el conjunto de los derechos que las leyes acuerdan á los padres sobre la persona y bienes de sus hijos.—Art. 265, Cód. Civ.—Entre estos derechos se encuentra la facultad que tiene el padre de estar en juicio, por sus hijos menores.—art. 274.—Estos derechos en general, emanan de la naturaleza y son consagrados por la ley, dependiendo únicamente de la calidad de padre y no de ningún documento ó comprobante especial: lo que el Cód. de Proc. dispone respecto á las excepciones dilatorias no podría aplicarse tratándose de los derechos de un padre, porque los derechos del hijo lo son en cierto modo del padre mismo. La prescripción del art. 13 del Cód. de Proc., es solo aplicable á los que se presentan por un derecho que no es propio, aunque competa ejercerlo en virtud de representación legal, mas esta exigencia de la ley no puede referirse á otros documentos sino á los que se supone que concurren siempre y que pueden exhibirse sin dificultad en cualquier momento, como testimonios de escrituras, certificados, nombramientos judiciales, etc. Otra cosa sería si se opusiera como excepción dilatoria, negándole el carácter de padre, en cuyo caso la prueba competiría al excepcionante: y ni aun en este caso surtiría efecto la excepción, porque siempre quedaría el Ministerio de Menores con personería bastante.—Art. 59, Cód. Civ.

1b—Los padres naturales no tienen ni la administración ni el usufructo de los bienes de sus hijos, de donde nace el principio sentado en el sumario.—Art. 366, Cód. Civ.



PAG

Pagaré hipotecario— Véase: *Garantía hipotecaria*, número 1.

1a. Pago — La prueba corresponde al que, reconocida la exactitud de los hechos en que el actor funda su demanda, afirma haberlo verificado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 589, Ser. 2ª

2. Pago—Por consignación, los gastos del depósito y las costas judiciales deben ser á cargo del acreedor que habiéndolo impugnado fuese vencido en su oposición—Jur. Civ., tom. 1, pág. 158, Ser. 2ª.

3. Pago—Hecho por un tercero, no causa agravio ni puede ser rechazado por el que se reconoce deudor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 37, Ser. 1ª.

4. Pago—Del capital antes del requerimiento, exonera de las costas al ejecutado pero no de las ocasionadas por el embargo preventivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 609, Ser. 1ª.

1a—Ley 8, tít. 3, Part 3ª. Esta ley dice lo siguiente: «Conocen á las vegadas los demandados lo que les demandan en juyzio. Pero ponen luego defensiones ante sí, que han pagado, ó fecho aquello que les demandan. E por ende dezimos que deue el Judgador dar plazo al demandado, á que prueue la defension, que ouire puesta ante si. E si al plazo que fuere puesto non pudiere probar la defension, deuel dar por vencido de la demanda». Debe tenerse además presente, que es un principio inconcuso de procedimiento. que la confesión calificada arroja sobre el confesante la obligación de probar la calificación. Véase: Inst. tom. 1, verb. Excepción de pago, núm. 1069 F. S. C. N., tom 9, pág. 413, tom. 13, pág. 26, Ser. 2ª.

2—De acuerdo con el principio general sentado por el art. 221 del Cód. de Proc., y especialmente porque el art. 760 del Cód. Civ. impone el pago de los gastos del depósito y costas judiciales al acreedor, que habiendo impugnado el pago por consignación, fuese vencido en su oposición.

3—El pago puede hacerse por un tercero con asentimiento del deudor y aun ignorándolo éste, quedando la obligación estinguida (art. 727, Cód. Civ.) Puede también ser hecho por un tercero contra la voluntad del deudor (art. 728). Y el acreedor está obligado á aceptar el pago hecho por un tercero, ya á nombre propio, ya á nombre del deudor (art 729). De aquí se desprende el principio establecido en el sumario.

4—Véase: verb. Embargo preventivo, núm. 35 y nota.



PAG—PAP

5. Pago—Por consignación, la oblación no puede surtir los efectos de tal, siempre que el deudor se oponga á la estracción—Jur. Civ., tom. 8, pág. 106, Ser. 1ª.

6. Pago—Por consignación, surte sus efectos legales siempre que se justifique haberlo hecho por negarse el acreedor á recibir el importe del crédito—Jur. Civ., tom. 3, pág. 426, Ser. 2ª.

Pago—Véase: *Contrato de locación*, núm. 2—*Comprador*, núm. 3—*Letra*, núm. 1—*Medianería*, núm. 1—*Mora*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 10—*Acreedor*, núm. 3—*Embargo preventivo*, núm. 35—*Oro sellado*, núm. 3—*Transacción*, número 6.

Pago de alquileres—Véase: *Bienes*, núm. 2.

1. Pagos—Hechos por la madre al esposo de la hija no pueden imputarse al haber paterno que á ésta le correspondiera, si de los recaudos dados por aquél no resultara evidentemente que tal fué la intención de las partes—Jur. Civ., tom. 1, pág. 372, Ser. 2ª.

Papel—Véase: *Curso legal*, núm. 1—*Moneda especial*, número 1—*Quiebra*, núm. 10.

Papel moneda—Véase: *Moneda especial*, núm. 1.

5—Sostener lo contrario equivaldría á sostener que el deudor paga, por el solo hecho de demostrar que el día del vencimiento de la obligación tenía los fondos necesarios para solventarla, pero que no quiso cumplir. El art. 758 del Cód. Civ. establece que la consignación no tendrá fuerza de pago, sino concurriendo en cuanto á las personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos sin los cuales no puede ser válida.

6—Art. 757, inc. 1º, Cód. Civ.

1—La madre en este caso queda como acreedora del esposo de su hija, pero de ninguna manera puede subrogarse en los derechos que la adjudicación hubiese conferido á su hija; mucho menos en el caso *sub judice* en que la adjudicación se había hecho en una parte de un bien raíz hereditario, en cuyo caso la entrega que se hace en dinero como precio de esa parte, no es la entrega de la cosa misma adjudicada; ni el marido puede engañar los bienes raíces de la esposa sin consentimiento de ésta.



PAP-PAR

1a. Papel sellado—La ley no tiene por objeto gravar con el impuesto del sello el acto de la trasmisión de bienes por herencia, sino el acto de la división judicial ó estrajudicial —Jur. Civ., tom. 1, pág. 113, Ser. 2ª.

2. Papel sellado—Los Tribunales pueden resolver sobre interpretación de esta ley, en los asuntos que tramitan ante ellos—Jur. Com., tom. 6, pág. 380, Ser. 1ª.

Papel sellado—Véase: *Contrato*, núm. 4 — *Documento*, núm. 2—*Banco Nacional*, núm. 1—*Sello*, núm. 3.

Papel simple—Véase: *Albaceas dativos*, núm. 1.

Papeles de comercio—Véase: *Corredor de Bolsa*, núm. 1.

Para mejor proveer—Véase: *Documento*, núm. 1.

Paralización—Véase: *Domicilio*, núm. 3.

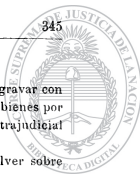
Pared divisoria—Véase: *Adquirente condicional*, núm. 1.

1b. Parentesco—Este, y la intervención en arreglos anteriores al acto jurídico, es prueba suficiente del conocimiento que el comprador tenía del mal estado de los negocios del deudor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 130, Ser. 1ª.

Parientes—Véase: *Tutela*, núm. 1—*Acusador particular*, núm. 1—*Incapaz*, núm. 1—*Tutor*, núm. 1—*Insania*, núms. 1 y 2—*Curador*, núm. 4.

1a—Es por esto que el pago del impuesto no puede exigirse al pedir la posesión judicial de la herencia; porque la posesión no es la división, ni la adjudicación, ni la posesión material de bien alguno determinado, á que pueda aplicarse el impuesto, sino la posesión de la universalidad de bienes, derechos y acciones que constituyen la herencia. Interpretación dada á la ley de papel sellado de 1885—art. 23.

1b—El art. 968, Cód. Civ., requiere, para que los actos, á título oneroso celebrados por el deudor en perjuicio de sus acreedores, sean revocables, que el deudor haya querido defraudar por ese medio á sus acreedores y que el comprador haya sido cómplice en el fraude: el art. 969, dice que el ánimo del deudor de defraudar á sus acreedores se presume por su estado de insolvencia y la complicidad del comprador se presume cuando conocía ese estado. Debe tenerse presente además de esta presunción establecida en este artículo, que la ley presume el fraude en los actos celebrados entre parientes: *Inter proximos presumitur fraudes*, decía la ley romana. Véase. Inst. tom. 1, verb. Falsedad, núm. 1187. Amistad, núm. 166.



PAR

1a. Parientes colaterales—En las sucesiones intestadas los sobrinos nietos del causante, carecen de derecho para heredar en concurrencia con los sobrinos hijos de hermanos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 64, Ser. 2ª.

Parientes colaterales—Véase: *Sucesiones intestadas*, número 1—*Herencias trasversales*, núm. 1.

1b. Partición—Aun cuando importe una transacción, el Asesor de Menores está obligado á espedirse sobre su admisión ó rechazo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 1ª.

2. Partición—Hecha entre herederos por medio de una transacción, no importa una venta aun cuando se trasmitan derechos reales—Jur. Civ., tom. 7, pág. 225, Ser. 1ª.

3. Partición—De aquellos bienes de fácil realización, puede pedirla cualquiera de los herederos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 568, Ser. 1ª.

Partición—Véase: *Convenio*, núm. 2—*Mensura*, núm. 1—*Gastos*, núm. 2—*Sociedad*, núm. 3.

Partición de Herencia—Véase: *Acción de partición*, número 1.

Participación—Véase: *Complot*, núm. 1.

1a—La representación no pasa, en la línea colateral, del tercer grado de los hijos de los hermanos—Art. 3560 Cód. Civ.—Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Línea colateral*, núm. 1664.

1b—Según el art. 135 del Cód. Civ. los menores pueden celebrar transacciones con autorización del Juez; cuando se proyecta una partición aunque sea bajo la forma de una transacción, el Ministerio de Menores que tiene la representación de éstos, debe pronunciarse sobre la conveniencia de un acto permitido por la ley.

2—No importa una venta, porque no se hace otra cosa sino determinar y adjudicar lo que á cada heredero corresponde: cada uno ha tenido antes de la adquisición su porción indeterminada, cada uno era dueño de esa porción, y es sabido que nadie puede comprar su propia cosa.

3—El art. 3453 del Cód. Civ. establece que cualquiera de los herederos puede demandar la partición de aquellos bienes que son actualmente partibles: de modo que la demanda de partición que se encuentra dentro de este límite debe ser admitida.



PAR-PAT

Partida de bautismo—Véase: *Hermano legítimo*, núm. 1.

Partida de defunción—Véase: *Cónsules extranjeros*, número 2.

1a. Partidas englobadas—En los libros de comercio, aun debidamente rubricados, no hacen fe en juicio—Jur. Com., tom. 5, págs. 24 y 37, Ser. 1ª.

1b. Partidas parroquiales—Como instrumentos públicos forman prueba, salvo el derecho de los interesados de impugnar sus aseveraciones, correspondiendo la prueba al que alega la falsedad—Jur. Civ., tom. 9, pág. 331, Ser. 1ª.

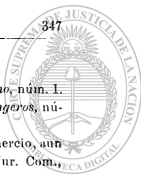
Partidas parroquiales—Véase: *Fallecimiento*, núm. 1.

1c. Paternidad—La negación espresa consignada en testamento, anula las presunciones que pudieran resultar de las declaraciones de testigos que tengan por fundamento la fama y aun el nombre—Jur. Civ., tom. 1, pág. 227, Ser. 2ª.

1a.—Art. 56, Cód. de Com. Véase: Inst. tom. 1, verb. Libros, núm. 1656 y nota. Este art. del Cód. de Com., en su última parte dice, que solo es permitido asentar en globo las partidas de gastos domésticos: de aquí se deduce que otras partidas no pueden asentarse en globo: esto mismo se establece en el art. 66, inc. 1º: y el 67 dice, que los libros no llevados en la forma prescrita en el art. 67, no hacen fe en juicio á favor de sus dueños.

1b.—El art. 104 del Cód. Civ. establece, que la muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, se prueba como el nacimiento: el 80 establece como medio justificativo, en primer término las constancias de los libros parroquiales. Esas constancias cuando están asentadas en debida forma tienen la presunción de verdad, salvo el derecho que se les acuerda á los interesados para impugnar las declaraciones contenidas en dichos documentos, ó la identidad de la persona de quien tratasen—art. 86 ibid.

1c.—Este principio es un corolario deducido del que se ha querido sentar por la Cámara, de que después de muerto el padre, la filiación natural solo se prueba por la posesión de estado para la cual se exige la concurrencia de los tres elementos: *nomen, tractatus, fama*. El principio sentado, no solo no consulta nuestra legislación en materia de filiación natural, sino que por el contrario está en abierta oposición con ella, consagrando un principio altamente inmoral; según esta resolución la posesión de estado cuando solo se constata por medio de dos de los elementos, *nomen* y *fama* no tiene ningún valor en presencia de una manifes-



PAT

2. Paternidad—Es bastante para justificarla el reconocimiento de hijo legítimo hecho por el padre en un instrumento público, aun cuando sea incidentalmente—Jur. Civ., tom. 7, pág. 188, Ser. 1ª.

Paternidad—Véase: *Filiación natural*, núm. 6.

Patria potestad—Mientras el padre no sea privado de

tación contraria hecha en una disposición de última voluntad, cuando no concurre el *tractatus*, que consiste en que el padre cumpla pública y constantemente para con el hijo los deberes de un padre. De modo que el padre que falta á su deber de tal y que desconoce para con el hijo los deberes mas sagrados impuestos por la ley natural, queda á salvo declarando que no reconoce hijos. La falta del cumplimiento en los deberes de un padre, acuerda exenciones, según esta doctrina, lo que no puede ser, porque la ley no puede ser un absurdo: cuando el padre no cumple con los deberes de tal, la ley no puede ver en este acto sino un desconocimiento de sus preceptos: debe enseñarse á los padres á ser padres. Véase: verb. *Filiación natural*, núm. 2.

2—Según los arts. 80 á 85 del Cód. Civ., el nacimiento se prueba por los asientos parroquiales; cuando no existen, ó existiendo no se encuentran las partidas, ó no estén llevados en debida forma, se admite la prueba supletoria. Pero cuando se trata de probar la filiación legítima, no se trata de probar el día del nacimiento, que generalmente se asienta mucho después de aquel en que ha tenido lugar. El día del nacimiento puede en muchos casos tener importancia para justificar la filiación legítima; mas debe tenerse presente que el hecho del nacimiento y de la legitimidad no se confunden, pudiendo probarse ésta y no aquél. El art. 263 del Cód. Civ. prevee el caso, y establece dos medios de comprobar la legitimidad: 1º Por los asientos en los registros parroquiales, tanto del nacimiento como del matrimonio de los padres, ó por la posesión constante del estado de hijo legítimo, fundada en actos que la demuestren. También es admitida la prueba testifical, cuando no haya posesión de estado, ó los asientos se hubiesen hecho, en las parroquias bajo falsos nombres, ó como de padres no conocidos. Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Filiación legítima*, núm. 1216. F. S. C. P., tom. 8, pág. 184, Ser. 2ª; tom. 5, pág. 129, Ser. 2ª.

1—La ley consagra los derechos de la patria potestad de una manera amplia—art. 264, Cód. Civ.—En virtud de esa patria potestad el padre es el administrador y usufructuario de los bienes de sus hijos, como lo establecen los arts. 287 y 293 del Cód. Civ., sin más limitaciones que el art. 297, entre las que no se encuentra la prohibición de disponer de los bienes de sus hijos.



PAT

ella, es el único que tiene derecho para administrar los dineros de los menores—Jur. Civ., tom. 6, pág. 363, Ser. 1ª.

2. Patria potestad—Mientras no haya pérdida ó suspensión declarada por sentencia ejecutoriada, el padre no puede ser privado de ejercerla y los jueces deben ampararlo dictando las medidas coercitivas que se soliciten contra el que pretenda coartar ese derecho—Jur. Civ., tom. 1, pág. 497, Ser. 2ª.

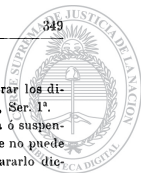
3. Patria potestad—El juicio sobre privación de ella, puede ser iniciado y resuelto ante un Juez extraño al juicio sucesorio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 246, Ser. 1ª.

4. Patria potestad—El padre la conserva, y representa á sus hijos menores, mientras no sea privado de ella por sentencia ejecutoriada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 246, Ser. 1ª.

2—Así resulta de la disposición del art. 264 de Cód. Civ., y argumento de los arts. 57, inc. 4; 9º, inc. 9; 167, 187 y siguientes, 305 y 308, del mismo.

3—Este juicio no lo menciona el art. 3284 del Cód. Civ., reglamentado por el 634 del Cód. de Proc. La universalidad del juicio sucesorio no atrae, por consiguiente, el juicio sobre privación de la patria potestad.

4—La patria potestad es el conjunto de los derechos que los padres tienen sobre la persona y bienes de sus hijos—art. 264, Cód. Civ.—Entre los derechos emanados de este conjunto se encuentra la facultad de estar en juicio por ellos, sea como actores ó demandados, de administrar sus bienes.—Arts. 265, 274 y 293.—Este derecho solo se limita por la privación de la patria potestad, la que supone un juicio previo, y una sentencia como resultante de este juicio—Arts. 304 y 397, inc. 2º.—Mientras esta sentencia no se dicte, no puede nombrarse al menor tutor especial, porque ello importaría anticiparse al fallo definitivo que puede declarar al padre inocente ó culpable. No puede alegarse en contra de esto, diciendo que desde el momento en que se inicia el juicio haya incompatibilidad entre padre é hijo, en sus intereses, porque los únicos casos en que así lo declara la ley, están previstos en los arts. 239, 272, 282, 285, 303 y 392 entre los cuales no se encuentra comprendido el caso presente; por el contrario los arts. 303 y 397, inc. 2º, confirman esta tesis, que requieren la remoción previa; y que el nombramiento de tutor sea el resultado del juicio. Debe tenerse presente además que el nombramiento de un tutor especial, estando el padre en el pleno ejercicio de los derechos que le acuerda la ley



PAT—PEN

5. Patria potestad—Toda resolución que menoscabe los derechos que los padres, sean legítimos ó naturales, tienen sobre sus hijos en virtud de la patria potestad, es apelable—Jur. Civ., tom. 3, pág. 266, Ser. 2ª.

Patria potestad—Véase: *Madre*, núm. 1—*Tutor dativo*, núm. 1.—*Hijos*, núm. 1.

Patronato—Véase: *Sentencia*, núm. 2.

Patrono—Véase: *Capellanía*, núm. 1.

1. Pena—Incorre en la estipulada, el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 284, Ser. 1ª.

2. Pena—Establecida en un compromiso arbitral, no puede exigirse su aplicación por un hecho posterior al laudo, mientras no se justifiqùe plenamente la participación que en él haya tenido la parte contra quien se pide—Jur. Com., tom. 5, pág. 218, Ser. 1ª.

3. Pena—Cuando la aplicación de ella depende de la edad ó de cualquiera otra circunstancia, la prueba de su existencia corresponde á la defensa—Jur. Crim., tom. 5, pág. 275, Ser. 1ª.

sobre sus hijos es deprimente de la dignidad humana que hiere en lo que existe de más sagrado; que la limitación de la patria potestad es algo odioso y como tal debe restringirse; que es al mismo tiempo una pena impuesta en ciertos casos, y como tal deben asimismo limitarla los jueces á los casos espresamente determinados por el Código; que la tendencia de nuestro Código, es inmiscuirse lo menos posible en el hogar del ciudadano y que la muralla que resguarda la vida privada del sujeto de la ley, no debe trasponerse sino en los casos por ella autorizados. Véase: Inst. tom. 1, verb. Tutor especial, núm. 2676; Potestad, núm. 2088 F. S. C. P. tom. 3, pág. 188, Ser. 1ª.

5—El auto, en este caso, trae gravamen irreparable.

1—Art. 654, Cód. Civ.

3—La edad de una persona es en muchos casos una circunstancia atenuante, la que debe ser comprobada para que los jueces puedan tomarla en consideración. Véase: Inst. tom. 1, verb. Circunstancias atenuantes, núm. 271.



PEN—PER

4. Pena—Impuesta en primera instancia, no puede ser reformada en sentido desfavorable al reo, si el ministerio público hubiese consentido la sentencia—Jur. Crim., tom. 5, pág. 561, Ser. 1^a.

Pena—Véase: *Infracción*, núm. 2—*Sellos*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 19.—*Nulidad*, núm. 22—*Arrepentimiento*, núm. 1—*Demanda*, núm. 6—*Documento*, núm. 3.

Pena corporal—Véase: *Auxiliador*, núm. 2.

Pena de muerte—Véase: *Muerte*, núm. 1.

Pena inferior—Véase: *Infracción*, núm. 1.

Penitenciaria—Véase: *Uxoricidio*, núm. 1.

Pensión alimenticia—Véase: *Alimentario*, núms. 1 y 4.

Pérdidas é intereses—Véase: *Promesa*, núm. 1.

Periodista—Véase: *Acto ilícito*, núm. 2.

Perito—Véase: *Mandatario*, núm. 5—*Locador de servicios*, núm. 1.

1. Perito tercero—Correspondiendo á las partes pedir al Juzgado la designación, su omisión no es causa de nulidad—Jur. Com., tom. 5, pág. 188, Ser. 1^a.

2. Perito tercero—Debe hacer por su parte la tasación que se discute, pero al regular su honorario el Juzgado debe tener presente que las medidas habían sido tomadas por los anteriores—Jur. Civ., tom. 1, pág. 99, Ser. 1^a.

4—Consentida la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada

1—La prueba pericial, como toda otra prueba debe ser pedida por parte interesada, el Juez no puede decretarla de oficio: si se omite la designación de un perito tercero, esta omisión es solo imputable á la parte remisa, que ha descuidado su prueba, pues á éste incumbe urgir la producción de la que le corresponde—art. 118, Cód. de Proc.

2—Se trata de una tasación hecha por dos peritos, habiéndose mensurado el inmueble á tasarse; las medidas estaban bien, pero hubo discordancia en la fijación del valor; se nombró un tercero que sirviéndose de las mediciones hechas hizo la tasación; en este caso debe regularse el honorario del tercero, teniendo solo en cuenta la tasación, descontando las mediciones que fueron trabajos de los otros peritos.



PER

1. Peritos—Cuando el dictamen es uniforme sobre el punto en cuestión, y las partes no alegan la falsedad de sus fundamentos, el Juez puede adoptar su dictámen como sentencia—Jur. Civ., tom. 2, pág. 153, Ser. 2°.

2. Peritos—Para que los nombrados por las partes asuman el carácter de árbitros, es necesario que su nombramiento sea hecho con las formalidades que la ley exige para éstos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 426, Ser. 1°.

3. Peritos—Su dictámen puede ser objetado por las partes y las objeciones justificadas en el término de prueba—Jur. Civ., tom. 7, pág. 426, Ser. 1°.

4. Peritos—Titulados, cuando su opinión se produce sobre hechos cuya apreciación requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte ó industria merece crédito legal—Jur. Civ., tom. 8, pág. 443, Ser. 1°.

5. Peritos—En caso de compra forzosa solo deben tener

1—Este caso cae bajo el imperio de la legislación vigente antes de la promulgación del Cód. de Proc. En el antiguo procedimiento los peritos eran simplemente asesores de los jueces, estando éstos facultados para aceptar ó no las conclusiones á que llegaban, como puede verse en las leyes 23, tít. 16; 118, tít. 18, Part. 3°; 50, tít. 5, lib. 2, 1, tít. 21, lib. 10 Nov. R; 24, tít. 21, lib. 4, R. C. 5, tít. 17, lib. 11, Nov. R. Igual doctrina se desprende del art. 7 del Reg. de Adm. de Justicia. El principio que hoy rige es otro: cuando las conclusiones á que llegan los peritos son terminantemente asertivas y uniformes, el dictamen tiene fuerza de prueba legal, y el Juez no puede apartarse de él.—Art. 178, Cód. de Proc.

2—Los peritos nombrados pueden ser investidos con facultades arbitrales, si las partes lo quieren, pero para ello es necesario que se estienda la escritura de compromiso que prescribe la ley bajo pena de nulidad.—Arts. 771 y 772, Cód. de Proc.

3—Los cálculos ó el dictamen de los peritos se basan en su criterio que bien puede ser aceptado ó erróneo, en cuyo último caso bien puede comprobarse el error por medio de la prueba. Esto se refiere, como es de consiguiente á los peritos que no tienen título de suficiencia, ó que teniendo sus conclusiones no fuesen terminantemente asertivas.

4—Art. 178, Cód. Civ.

5—Sería empeorar la condición de una empresa de obras de utilidad



PER

en cuenta lo que valgan los terrenos con relación al progreso general del país, haciendo abstracción del mayor valor que les haya dado la obra pública que hace necesaria la espropiación—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2ª.

6. Peritos—Sus informes prevalecen sobre las declaraciones de testigos cuando se trata de defectos en la construcción de obras—Jur. Civ., tom. 9, pág. 165, Ser. 1ª.

7. Peritos—Su nombramiento no puede hacerse después de vencido el término, cuando la causa lo requiera como tal—Jur. Com., tom. 6, pág. 413, Ser. 1ª.

Peritos—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 8—*Arrendamiento*, núm. 1—*Prueba*, núm. 10—*Juramento*, núm. 2—*Reconvención*, núm. 1—*Locación de servicios*, núms. 3 y 4—*Mejoras*, núm. 2—*Posesión*, núm. 11—*Informe*, núm. 2—*Transacción*, núm. 5.—*Cotajo* núm. 2.

Peritos tasadores—Véase: *Honorarios*, núms. 11 y 12.

Perjuicio—Véase: *Absolución*, núm. 1.

Perjurio—Véase: *Declaración*, núm. 2.

1. Persona jurídica—Los jueces no pueden de oficio exigir que el litigante justifique ese carácter—Jur. Civ., tom. 7, pág. 248, Ser. 1ª.

pública hacer que se compute en la avaluación de lo que necesita, el mismo aumento que ella le da, obligándola á pagar dos veces, una al tomar por su valor el terreno que requiero para su desenvolvimiento, y otra al computársele como aumento de valor lo que es el resultado de sus capitales invertidos.

6—Cuando su dictamen fuese terminantemente acertivo y cuando los peritos tienen título en la materia sobre que dictaminan. La competencia de los peritos excluye toda importancia que se pretenda atribuir á la prueba de testigos.

7—Las leyes que rigen la producción de la prueba son aplicables á la pericial, porque ella no hace distinción de esta clase de probanzas, en cuyo caso es de estricta aplicación la regla general.

1—La legitimidad de la personería en este caso, no hace á los requisitos que debe contener una demanda, se refiere al fondo de la cuestión, sobre la cual el Juez no puede pronunciarse de oficio. La *exceptio sine actione agis* que antiguamente era admitida como previa, hoy no lo es.

PER

Persona jurídica—Véase: *Creación*, núm. 1.

Personas—Véase: *Juicio*, núm. 3.

1a. Personalidad—Reconocida la del demandante, es im-procedente su ulterior desconocimiento, aun cuando sea fundado en causas sobrevinientes—Jur. Civ., tom. 6, pág. 544, Ser. 1ª.

Personalmente—Véase: *Auto*, núm. 6.

1b. Personería—El auto en que se admite ó deniega es apelable—Jur. Civ., tom. 8, pág. 273, Ser. 1ª.

2. Personería—No puede negársele á la que afirma ser viuda, corresponde al que niega ese carácter justificar la falsedad—Jur. Civ., tom. 3, pág. 344, Ser. 1ª.

Personería—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Fallido*, núms. 1 y 2—*Legatario*, núm. 1—*Denunciantes*, núm. 2—*Ejecutante*, núm. 2—*Comprador*, núm. 1—*Síndico*, núm. 1—*Agente ó comisionista*, núm. 1—*Curador*, núm. 1—*Recusación*, núm. 4—*Municipalidad*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 1—*Excepciones*, núm. 2—*Acreedores*, núm. 3—*Obligaciones*, núm. 4—*Representante*, núm. 1—*Apelables*, núm. 1—*Depositario*, núm. 2—*Falta de personería*, núm. 4—*Poder*,

1a—Las cuestiones relativas á la personería de los litigantes deben sustanciarse como excepciones dilatorias.—Art. 84, inc. 2, Cód. de Proc.—las que deben ser opuestas antes de contestar la demanda,—art. 83—y no oponiéndose en esta estación del juicio no puede ser materia de sustanciación ulterior—Art. 86, *ibid*.

1b—Trae gravamen irreparable, siendo en consecuencia apelable según disposición del art 226 del Cód. de Proc.

2—Este sumario está equivocado, consigna un principio que está en abierta contradicción con lo resuelto por la Cámara. En el caso ocurrido se tuvo por bastante la afirmación del estado de viuda hecha por ésta, porque no fué negada por la parte contraria. Si el estado de viuda hubiese sido negado, habría sido necesario probarlo, porque es un principio inconcuso de procedimiento, de que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio. El estado de viuda no es de presunción legal. Las personas se presumen que son de estado soltero: cuando contraen matrimonio se presume que continúan siendo de ese estado hasta que no se pruebe lo contrario.



PER-POD

núm. 3—*Simulación*, núm. 10—*Agentes fiscales*, núm. 2.—*Apelables*, núm. 1.

Personería jurídica—Véase: *Contratos*, núm. 1.

Pesos fuertes—Véase: *Oro sellado*, núms. 1 y 2.

1a. **Petición de herencia**—Puede equipararse á la reivindicación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 394, Ser. 2ª.

2. **Petición de herencia**—Durante la secuela del juicio no pueden ingresar todos los que se consideren con derecho á ella, deben entablar por separado las acciones que crean competir á su derecho—Jur. Civ., tom. 3, pág. 521, Ser. 2ª.

Petición de herencia—Véase: *Embargo preventivo*, número 3—*Acción de petición de herencia*, núm. 1.

Plazo—Véase: *Obligación*, núms. 6 y 7 —*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Obligaciones á plazo*, núm. 1—*Obligación de hacer*, núm. 5.

Plazos periódicos—Véase: *Prescripción*, núm. 27.

Plenario—Véase: *Declaraciones*, núm. 5.

1b. **Plus petitio**—Para incurrir en la penalidad que la ley impone, es necesario que el demandante se produzca con fraude ó que no produzca prueba ó que el demandado confiese la deuda—Jur. Civ., tom. 8, pág. 477, Ser. 1ª.

Plus-petitio—Véase: *Costas*, núm. 21.

Pobres—Véase: *Tribunales de Paz*, núm. 1—*Defensores de pobres y menores*, núm. 1.

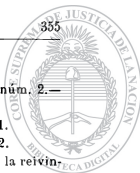
1c. **Poder**—Conferido para un pleito, comprende la facul-

1a—Y hace procedente el embargo preventivo con arreglo al art 447 del Cód. de Proc. Véase: Inst. tom. 1, verb. *Petición de herencia*, núm. o 2018.

2—Art. 699, Cód. de Proc.

1b—Leyes 42, 43 y 44, tít. 2º, Part. 3ª. Véase: F. S. C. P., tom. 10, págs. 329 y 161, Ser. 1ª; y tom. 6, pág. 249, Ser. 2ª; Inst. tom. 1, verb. *Plus petitio*, núm. 2026.

1c—El art. 17 del Cód. de Proc., en su segunda parte dice: «Se entenderá también que comprende la facultad de intervenir en los incidentes



POD

tad de intervenir en los incidentes de lo principal y ejecutar todos los actos que ocurran durante la secuela del juicio—Jur. Civ., tom. 6, pág. 448, Ser. 1ª.

2. Poder—Dado para reivindicar de una persona determinada en el cuerpo del instrumento, no es bastante para dirigir la acción contra otra, aun cuando tenga la posesión de la cosa—Jur. Civ., tom. 6, pág. 546, Ser. 1ª.

3. Poder—Aunque sea especial, es bastante para intervenir en todos los incidentes que se susciten—Jur. Com., tom. 5, pág. 569, Ser. 1ª.

4. Poder—En forma, justifica la personería del apoderado—Jur. Civ., tom. 3, pág. 344, Ser. 2ª.

Poder—Véase: *Firma*, núm. 4.

Poder bastante—Véase: *Denunciante*, núm. 2.

Poder en forma—Véase: *Denunciantes*, núm. 1—*Sociedad anónima*, núm. 6.

1. Poder especial—El error en el sexo de la persona contra quien debe seguirse la ejecución, no anula el procedimiento, siempre que del cuerpo del mismo instrumento resulten datos suficientes para individualizar el juicio para el cual se ha conferido el mandato—Jur. Civ., tom. 7, pág. 71, Ser. 1ª.

2b. Poder especial—Para el cobro de deudas, no es bas-

de lo principal y ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, ó los reservados espresamente en el poder.

2a—No hay personería legítima en el demandado.

3—Puede el apoderado intervenir en todas las cuestiones que tengan una relación directa con el mandato conferido y su cumplimiento—art. 1884, Cód. Civ.—Véase: *Poder*, núm. 1 y nota; *Inst.* tom. 1, verb. *Poder*, núm. 2029.

1—Un error en estas condiciones no es sustancial.

2b—El poder en este caso está limitado á actos que sean una consecuencia inmediata del mandato conferido, y no puede extenderse á otros actos



POD—POS

tante para intervenir en los juicios que se inicien contra el poderdante—Jur. Civ., tom. 3, pág. 515, Ser. 2ª.

3a. Poder especial—Para representar á una sociedad, no basta para entablar á su nombre demandas contra terceros aunque con ella haya contratado—Jur. Com., tom. 6, pág. 426, Ser. 1ª.

Poder especial—Véase: *Regulación*, núm. 3—*Representante*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 6.—*Acusación criminal*, número. 1.

Poder general—Véase: *Acusador*, núm. 2.

Poder insuficiente—Véase: *Honorarios*, núm. 1.

1a. Póliza—Del seguro, forma prueba plena, con respecto á la compañía, del capital existente en el acto del siniestro y á ella corresponde justificar la existencia de dolo ó fraude—Jur. Com., tom. 6, pág. 469, Ser. 1ª.

1b. Poseedor—A nombre de otro, no está obligado á probar ese hecho, sino simplemente á declarar el nombre y la residencia de la persona por quien posee—Jur. Civ., tom. 6, pág. 546, Ser. 1ª.

2. Poseedor—De una casa de comercio, tiene á su favor la presunción de la propiedad de todos los valores al portador existentes en ella—Jur. Civ., tom. 1, pág. 21, Ser. 2ª.

3b. Poseedor—Contra el cual se dirige una acción reivin-

análogos aunque pudiesen considerarse como consecuencia natural de los que el mandato confiere.—Art. 1891, Cód. Civ.

3a—Art. 17, Cód. de Proc.

1a—Arts. 661, 662 y 684 del Cód. de Com. El Cód. de Com. Español, establece la misma presunción en favor de la póliza en su art. 856.

1b—Art. 2782, Cód. Civ.

2—La posesión es título suficiente mientras no se presente otro título que destruya la presunción de propiedad que ella crea. Véase: Inst. tom. 1, verb. Patente, núm. 1968; Posesión, núm. 2058 y nota. Jur. Civ. tom. 7, pág. 144, Ser. 1ª.

3b—Porque cada heredero, en el estado de indivisión, tiene derecho de reivindicar contra terceros detentadores, los inmuebles de la herencia —

POS

dicatoria, no puede oponer al reivindicante la nulidad de la cesión hecha por un heredero, en virtud de no ser el cedente, el único y universal del causante—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

Poseedor—Véase: *Aviso*, núm. 1—*Frutos*, núm. 2—*Oposición*, núm. 1—*Tercería*, núms. 2, 3 y 4—*Prescripción*, núm. 13—*Bienes muebles*, núm. 1—*Demanda*, núm. 5.

1. Poseedores—En el momento de la espropiación son los únicos que tienen derecho al cobro de la indemnización—Jur. Civ., tom. 8, pág. 529, Ser. 1ª.

Poseedores—Véase: *Municipalidad*, núm. 2—*Prescripción*, núms. 16 y 17.

1a. Posesión—Justificada la tenencia de la cosa y su pérdida con violencia ó clandestinidad, la acción de despojo es procedente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 570, Ser. 1ª.

2. Posesión—Tomada en ausencia del poseedor, adolece de clandestinidad—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 2ª.

3. Posesión—Dada judicialmente, basta para justificar que la cosa se tenía como propia, aun cuando no se haya protestado inmediatamente por el despojo—Jur. Civ., tom. 2, pág. 332, Ser. 2ª.

4. Posesión—Del que por ministerio de la ley se conceptúa heredero *ab-intestato*, no puede declararse precaria sin prueba plena que corresponde al que afirma tal hecho—Jur. Civ., tom. 2, pág. 561, Ser. 2ª.

5. Posesión—De bienes ubicados en la República, cuando el causante ha fallecido en el extranjero, al pedirla debe acompañarse la declaratoria judicial de herederos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 397, Ser. 2ª.

Art. 3450, Cód. Civ.—Si el heredero, aunque no sea único y universal, tiene este derecho, lo transmite en iguales condiciones al cesionario.

1a—Concurren los requisitos exigidos por el art. 581 del Cód. de Proc.

2—Art. 2369, Cód. Civ.

5—Arts. 3411 y 3412, Cód. Civ.



POS

6. Posesión—Por veinte años á nombre de otro, como precaria, no puede conceptuarse de buena fe, ni conceder los derechos que la ley solo reconoce al poseedor á nombre propio—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

7. Posesión—Tranquila, durante veinte años de bienes adquiridos de buena fe y á título oneroso, hace procedente la excepción de prescripción—Jur. Civ., tom. 7, pág. 547, Ser. 1ª.

8. Posesión—Continuada por cuarenta ó mas años de terrenos situados en el municipio de esta ciudad, es título suficiente para prescribir contra el Consejo de Educación, representante del Fisco en las herencias declaradas vacantes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 249, Ser. 1ª.

9. Posesión—Durante veinticuatro años con justo título y buena fe hace procedente la adquisición por prescripción—Jur. Civ., tom. 8, pág. 42, Ser. 1ª.

10. Posesión—Ordenada la de una parte del bien litigado, mientras por operación judicial no pueda fijarse la que corresponda, debe darse *pro-indiviso*—Jur. Civ., tom. 3, pág. 605, Ser. 2ª.

6—Según disposición de la nota al art. 3999 del Cód. Civ., la prescripción para adquirir requiere una posesión para sí, no á nombre de otro: los arts. 2353 y 2354 establecen que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el trascurso del tiempo, la causa de su posesión; el que comenzó á poseer por otro continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. Es evidente que el que posee en estas condiciones no puede adquirir por prescripción, falta el elemento principal que es el *animus rem sibi habendi*.

7—El art. 3999, Cód. Civ. establece que el poseedor, de un bien raiz, con buena fe y justo título, durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, prescribe la propiedad.

8—La ley de 29 de Julio de 1867 de la Provincia de Buenos Aires preceptúa que la posesión de tierras en el municipio de esta ciudad, ó en los égidios de los pueblos de campaña, continuada por 40 años ó mas, forma suficiente título de propiedad contra toda gestión de dominio por parte del Fisco ó de las Municipalidades. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posesión, núm. 2056; Posesión continuada, núm. 2061 y nota.

9—Art. 3999, Cód. Civ.

POS

11. Posesión—De terrenos no espropiados á su debido tiempo, solo concede al espropiante el derecho á la compra por el precio que tengan en la época en que se lleve á cabo y que debe ser fijado por peritos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2ª.

Posesión—Véase: *Venta*, núm. 1—*Interdicto de adquirir*, núm. 1—*Reivindicación*, núms. 1 y 5—*Poder*, núm. 1—*Comprador*, núm. 4—*Damnificado*, núm. 1—*Interdicto de retener*, núms. 1, 2, 3, 5 y 7—*Curador*, núm. 2—*Bienes*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Titulos de propiedad*, números 5 y 6—*Propietario*, núm. 2—*Embargo*, núms. 1, 3 y 6—*Despojo*, núm. 1—*Interdicto de despojo*, núms. 2 y 3—*Jactancia*, núms. 2 y 5—*Mensura y deslinde*, núm. 4—*Turbación*, número 1—*Interdicto de recobrar*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 16—*Bienes muebles*, núm. 1—*Buques*, núm. 1—*Demanda*, núm. 5—*Mercaderías*, núm. 2—*Información*, núm. 5.

1a. Posesión á la esposa—El auto que manda darla antes de decretada la separación de bienes, es apelable—Jur. Civ., tom. 8, pág. 135, Ser. 1ª.

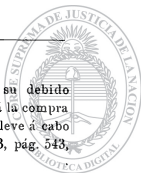
1b. Posesión absoluta—No puede tomarse como tal, la entrada y permanencia de la esposa en el domicilio conyugal—Jur. Civ., tom. 8, pág. 135, Ser. 1ª.

1c. Posesión de estado—Solo puede ser justificada por el reconocimiento expreso, no basta que el pretendido padre

1a—Un auto de trascendencia como éste, afecta las facultades del esposo como jefe de la familia y administrador de los bienes de la esposa y de la sociedad conyugal, siendo en consecuencia apelable con arreglo al art. 226 del Cód. de Proc.

1b—El auto que motivó este recurso, se limitó á ordenar al marido que se abstuviese de impedir á su mujer la entrada y permanencia en el domicilio conyugal, bajo apercibimiento de lo que había lugar por derecho.

1c—Véase: Inst. tom. 1, verb. Filiación natural, núm. 2 y Paternidad, núm. 1.



POS

no negara la paternidad cuando á ella se aludía en su presencia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 227, Ser. 2º.

Poseción de estado—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.—*Filiación legítima*, núm. 2.

1a. Poseción de una casa de comercio—Crea á favor del factor ó regente la presunción de tener la propiedad de ella para los terceros con quienes contrate, y el propietario para destruir esa presunción debe cumplir con lo preceptuado en el Cód. de Comercio sobre inscripción en el Registro—Jur. Civ., tom. 7, pág. 144, Ser. 1º.

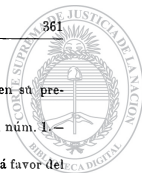
1b. Poseción reconocida—Se presume que es á título de dominio mientras el que intente cambiarla no justifique que era á otro título—Jur. Civ., tom. 9, pág. 245, Ser. 1º.

1c. Posiciones—La citación para absolverlas en que no se haya llenado los requisitos que la ley exige, no causa efectos legales—Jur. Civ., tom. 2, pág. 517, Ser. 2º.

1a—El art. 134 del Cód. de Com. establece que todo factor ó encaugado debe ser constituido por una autorización especial del proponente, que solo surtirá efecto desde la fecha en que se asiente en el Registro de Comercio. Véase: verb. Poseedor, núm. 2 y nota.

1b—No tiene obligación de producir su título á la posesión. El posee porque posee.—Art. 2363 del Cód. Civ.—La posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa con intención de tenerla como suya. En el caso presente la posesión consta de una manera evidente, lo único que habría que demostrar sería la intención, pero la comprobación de esta intención, que es un acto interno de la persona se establece por la manifestación hecha de que posee á nombre propio, en cuyo caso el tercero que pretende que la posesión es á su nombre debe probarlo. Así el inquilino que entra á poseer á título precario si después dice que no es así, tiene el verdadero propietario que comprobar que el actual poseedor de la cosa entró en su posición como inquilino. Es por esto que es siempre conveniente celebrar por escrito cualquier contrato de locación.

1c—La forma de la citación está claramente demarcada en el art. 127, Cód. de Proc., ella debe ser hecha personalmente á la parte que debe absolver las posiciones con un día de intervalo y bajo apercibimiento de que en caso que dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso. Es evidente que la citación que se hiciere en contravención de



POS

2. Posiciones—La citación para absolverlas que no fue hecha con arreglo á la ley, no produce efecto legal alguno—Jur. Civ., tom. 2, pág. 487, Ser. 2ª.

3. Posiciones—La ausencia del país, de la persona que debe absolverlas, no negada por el que las presenta, impide la declaración de rebeldía — Jur. Com., tom. 5, pág. 568, Ser. 2ª.

4. Posiciones—En segunda instancia, pueden ponerse sin limitación alguna—Jur. Civ., tom. 1, pág. 23, Ser. 2ª.

5. Posiciones—Cuando la citación no hubiese sido hecha con arreglo á la ley, el Juez á petición del absolvente debe señalar nuevo día, aun cuando no haya alegado la nulidad de la primera citación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 104, Ser. 2ª.

6. Posiciones—Absueltas en rebeldía no producen efecto alguno ante los Tribunales, cuando el que debía absolverlas hubiera sido citado sin el apercibimiento que ordena el Código de Procedimientos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

7. Posiciones—No pueden darse por absueltas, en rebel alguno de estos requisitos, sería nula, y consiguientemente no puede obligar á la parte.

2—Véase número y nota anteriores.

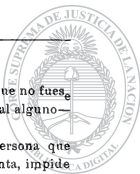
3—Siempre que deje un representante facultado espresamente para la absolución de posiciones, porque en este caso ajusta su proceder á los preceptos legales, sin que jamás se le pueda considerar contumaz. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núm. 2071 y nota.

4—Arts. 125, 215 y 246, Cód. de Proc. Véase: F. S. C. P., tom. 4, pág. 75, Ser. 2ª.

5—La notificación no había sido hecha con un día de anticipación, como lo exige el art. 127 del Cód. de Proc. El hecho de pedir nuevo día para la absolución, no importa renunciar al derecho de reclamar de la irregularidad de la citación.

6—En este caso la citación se habría hecho con violación de la forma prescrita en el art. 127, produciendo la nulidad de ella. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núm. 2076.

7—Esta suma no responde al caso resuelto, que es el siguiente: citada una parte para absolver posiciones, se encomendó la diligencia á un Juez de Paz, el absolvente compareció pero recusó á éste; no se le hizo lugar



POS

día, si el absolvente no hubiese sido citado bajo apercibimiento—Jur. Civ., tom. 1, pág. 616, Ser. 2ª.

8. Posiciones—No pueden darse por absueltas en rebeldía, porque el absolvente no haya comparecido á la hora designada, siempre que concurra á la audiencia del día señalado.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 617, Ser. 2ª.

9. Posiciones—Absueltas en rebeldía sin justa causa para no comparecer, forman prueba plena—Jur. Civ., tom. 8, pág. 86, Ser. 1ª.

10. Posiciones—El apercibimiento de darse por absueltas

á la recusación, mas no contestó á las preguntas: la Cámara dijo que no podían tenerse por absueltas porque el Juez de Paz no había cumplido con lo prescrito en el art. 133 del Cód. de Proc. que dice: «si habiendo comparecido rehusare responder ó respondiere de una manera evasiva, á pesar del apercibimiento que se le haga etc.» De donde resulta que si el absolvente comparece y no absuelve las posiciones negándose á ello, no basta para que se den por absueltas en rebeldía, es además necesario que se le aperciba por el Juez, en ese acto, que si no contesta será tenido por confeso. Este apercibimiento no se refiere al ordenado por el art. 127, Cód. de Proc., como lo sienta equivocadamente el sumario.

8—Cuando la ley acuerda al litigante la facultad de pedir que se den por absueltas las posiciones en rebeldía, dice: «Si el citado no compareciese á declarar»—art. 133, Cód. de Proc.—Este artículo no habla de hora; por el contrario el 128 solo se refiere á audiencia: se considera tal, las horas de despacho que durante el día tiene el Juez: En la ausencia de una prescripción legal, no puede imponerse una pena tan grave al litigante, pues la interpretación en estos casos debe ser restrictiva: 1º porque sería odioso, y 2º porque la ley debe interpretarse siempre que haya duda en el sentido más favorable á la libertad de la defensa. Cuando el Juez fija una hora determinada para que la audiencia tenga lugar, lo hace en beneficio tanto de los litigantes como del Juzgado: de los litigantes para que no estén todo el día sino desde la hora fijada adelante: del Juzgado para ordenar las audiencias diarias de modo que no se acumulen. Esta doctrina está de acuerdo con el común pensar de los prácticos, y con la jurisprudencia: Véase Caravantes, tom. 2, pág. 185, núm. 851. Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núm. 2083 y nota. F. S. C. N., tom. 5, Pág. 5, Ser. 1ª; tom. 14, pág. 375, Ser. 2ª.

9—Art. 127, Cód. de Proc. Véase Inst. tom. 1, verb. Prueba plena, núm. 2243 y nota: Posiciones, núm. 2086.

10—La oportunidad para hacer efectivo el apercibimiento está señalada

POS

en rebeldía solo puede hacerse efectivo al dictar sentencia—Jur. Civ., tom. 8, pág. 229, Ser. 1ª.

11. Posiciones—Solo están obligadas á absolverlas las partes que intervienen en representación de un derecho personal—Jur. Civ., tom. 8, pág. 278, Ser. 1ª.

12. Posiciones—Solo puede darse por confeso el que citado para absolverlas no comparece sin justa causa, si la alega debe recibirse á prueba—Jur. Civ., tom. 8, pág. 473, Ser. 1ª.

13. Posiciones—La declaración de estar decaído el derecho no impide hacer uso por segunda vez—Jur. Civ., tom. 3, pág. 523, Ser. 2ª.

en el art. 133 del Cód. de Proc. Las posiciones son un medio de prueba que como tal solo pueden ser apreciadas en esta estación del juicio: su apreciación anterior importaría un prejuzgamiento.

11—El caso es el siguiente: Iniciado un juicio contra un ausente, hecha la citación en forma y no habiendo comparecido se le nombró defensor: en este estado se presenta un tercero diciendo que el acto jurídico causa del pleito fué celebrado por el ausente pero en interés exclusivo del tercero, que en este carácter venía á tomar la intervención que le correspondía; el juicio se siguió con el tercero: habiéndose presentado mas tarde el primer demandado, manifestó ser exacto lo espuesto por el tercero, en el curso del juicio seguido con éste, el actor se presentó pidiendo que el primer demandado absolviera posiciones, á lo que no se hizo lugar, porque la personalidad de este último había desaparecido cuando el tercero tomó la intervención que le correspondía en el juicio sin que á ello se hubiese opuesto el actor: el primer demandado dejó de ser parte. La prueba de posiciones solo tiene lugar entre las partes litigantes.—Arts. 125 y siguientes del Cód. de Proc. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núm. 2069.

12—Art. 127 del Cód. de Proc. Véase el núm. 9 precedente: Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núms. 2072 y 2074.

13—El art. 137 del Cód. de Proc. autoriza á pedir la absolución de posiciones dos veces en primera instancia; el art. 128 dice que si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa á la audiencia señalada se dará por decaído el derecho á presentarlas. Este artículo no puede referirse sino á una de las dos veces que acuerda para la absolución: como que es una pena impuesta debe interpretarse restrictivamente: la interpretación contraria sería así mismo contraria á la libertad de la defensa á la que debe darse la mayor amplitud posible.



POS-PRE

14. Posiciones—Que deba absolver un ausente, deben ser pedidas dentro del término de prueba y si necesario fuera en el extraordinario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 527, Ser. 2ª.

15. Posiciones—La citación debe hacerse directamente al que deba absolverlas, no basta notificar á su mandatario, aunque esté facultado para ello—Jur. Civ., tom. 3, pág. 534, Ser. 2ª.

Posiciones—Véase: *Aclaraciones*, núm. 1—*Auto*, núm. 4—*Alimentos*, núm. 1—*Término*, núms. 10 y 15—*Alegar*, núm. 1.

1a. Práctica comercial—Su violación no basta para fundar una acción criminal que requiere la existencia de dolo ó fraude para ser procedente—Jur. Com., tom. 5, pág. 440, Ser. 1ª.

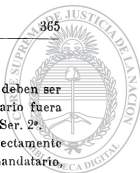
1b. Precio—La fijación del de la cosa que se da en pago por una transacción sobre derechos en litigio, no es un requisito indispensable para la validez del acto—Jur. Com., tom. 5, pág. 48, Ser. 1ª.

14. Si bien el art. 125 del Cód. de Proc. autoriza á cada parte á pedir que la contraria absuelva posiciones, hasta la citación para sentencia, tal disposición no puede autorizar la paralización indefinida del juicio, cuando las posiciones deban ser absueltas por un ausente. Cuando el litigante tenga intención de hacer valer este medio probatorio debe pedir en su oportunidad la fijación del término extraordinario de prueba que acuerda el art. 114.

15—El art. 127 del Cód. de Proc. ordena que el que deba absolver posiciones sea citado *personalmente*. El texto es espreso y además no basta la notificación que se haga á su apoderado, porque no se trata de actos que debe practicar éste, sino personalmente el dueño del pleito. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posiciones, núms. 2077 y 2085.

1a—Su violación puede considerarse una irregularidad, pero no daría lugar á la acción criminal, pues esta requiere el dolo ó fraude, como lo prevee el art. 374, Cód. de Com., al tratar de los comisionistas. Este artículo guarda armonía con el art. 334 del Cód. Pen., por cuanto cualquiera de los actos aquí enumerados constituyen el dolo ó fraude de que nos habla el art. 374 antes citado.

1b—El art. 833 del Cód. Civ., establece que la ley que rige los con-



PRE

Precio—Véase: *Títulos de propiedad*, núm. 4—*Locatario*, núm. 1—*Comprador*, núms. 2, 3 y 6—*Cosa vendida*, núm. 1—*Tradición*, núm. 1—*Servicio*, núm. 1—*Mensura*, núm. 4—*Locación de servicios*, núm. 3—*Posesión*, núm. 11—*Remate judicial*, núm. 1—*Boleto*, núm. 2—*Embargo*, núm. 8—*Vendedor*, núm. 2.

Precio determinado—Véase: *Trabajo ó materiales*, núm. 1—*Transacción*, núm. 1.

Predios urbanos—Véase: *Deslinde*, núm. 1.

1. **Prejuzgamiento**—Del originario, los expedientes que por este motivo pasan al que le sigue en turno para dictar sentencia, deben ser devueltos al primitivo para la ejecución y tramitación ulterior—Jur. Civ., tom. 2, pág. 176, Ser. 2ª.

2. **Prejuzgamiento**—No lo es la relación que el Juzgado puede hacer transcribiendo las palabras usadas por las partes—Jur. Civ., tom. 1, pág. 109, Ser. 2ª.

3. **Prejuzgamiento**—Importa, toda providencia de trámite que resuelva uno de los puntos sometidos á la decisión del Juzgado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 599, Ser. 2ª.

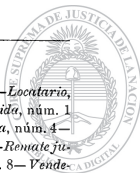
4. **Prejuzgamiento**—Lo importa la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, siempre que en el ordinario se discutan las mismas cuestiones que como escepciones se opusieron en el primero—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 1ª.

tratos es aplicable á las transacciones con algunas escepciones que en otros artículos se enumeran más adelante: y el art. 779, no requiere la fijación del precio de la cosa que se da en pago.

2—No importa un prejuzgamiento en el sentido y alcance del art. 368 del Cód. de Proc., debiendo en consecuencia desecharse como lo prescribe el art. 374 del mismo.

3—Los puntos sometidos á la decisión del Juzgado solo pueden ser materia de resolución al dictar sentencia, si se resuelve antes, el Juez emite su opinión respecto al fondo y haciendo aplicable el art. 368, inc. 8, Cód. de Proc.

4—El art. 386, inc. 8º del Cód. de Proc. enumera entre las causales de recusación, el haber emitido el Juez opinión ó dictamen acerca del



PRE

5. Prejuzgamiento — No puede considerarse tal, para fundar la recusación con causa, la negativa ó admisión de la procedencia del embargo preventivo—Jur. Com., tom. 6, pág. 402, Ser. 1ª.

Prejuzgamiento—Véase: *Nulidad*, núm. 5 — *Alimentos*, núm. 7—*Separación de bienes*, núm. 10—*Recusación*, núm. 10.

1. Prelación — Que el Código reconoce á los gastos de justicia en caso de concurso á una finca gravada con hipoteca, solo es aplicable á los indispensables para la ejecución del crédito hipotecario—Jur. Civ., tom. 7, pág. 231, Ser. 1ª.

pleito antes ó después de comenzado: y siendo la cuestión á resolverse en el juicio ordinario exactamente la misma que fué materia del sumario, es evidente que los que entiendan en el primero no pueden entender en el segundo por haber emitido opinión.

5—El embargo preventivo es una medida que por su naturaleza no admite dilación, la premura con que se juzgan los antecedentes con que se solicita el embargo hace presumir que el juicio que se forme no lo es de una manera inalterable y definitiva. El art. 448 del Cód. de Proc. así lo hace considerar, cuando dice que basta que resulten probados hechos que hagan presumir verosimilmente el derecho alegado; y sin embargo es sabido que por meras presunciones no se pueden resolver los pleitos en definitiva. No puede por consiguiente aplicarse el art. 368, inc. 8 del Cód. de Proc. La teoría contraria nos llevaría al absurdo de que basta que un Juez tenga que pronunciarse sobre una petición de embargo preventivo para que quede inhabilitado por completo para continuar conociendo en el juicio, pues siempre aprecia la prueba como suficiente ó insuficiente para decretar ó no hacer lugar á un embargo.

1—El art. 3937, Cód. Civ., autoriza la apertura de un concurso particular á toda finca gravada con hipoteca: «En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales que en él se causaren» dice este artículo; lo que excluye las costas por ejecuciones de créditos quirografarios y aun los de los hipotecarios anteriores; el art. 3916 corrobora este principio, el cual al graduar los privilegios coloca en primer lugar al acreedor hipotecario y en seguida los funerarios y luego los gastos de justicia que han sido hechos para la venta de ese inmueble, lo que está de acuerdo con el art. 3879, inc. 1º. La misma interpretación debe darse al art. 527, Cód. de Proc. Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Acreedor hipotecario*, núm. 75. *F. S. C. P.* tom. 4, pág. 85; tom. 3, pág. 343, Ser. 1ª; tom. 4, pág. 161, Serie 2ª.



PRE

Prelación—Véase: *Tutor*, núm. 1—*Legatarios*, núm. 1—*Hipoteca tácita*, núm. 1.

Premeditación—Véase: *Alevosia*, núm. 1.

Premio—Véase: *Cláusula*, núm. 1.

1a. Prenda—Para que el instrumento constitutivo pueda surtir efectos contra tercero debe contener designación detallada de los objetos entregados con todas las indicaciones necesarias para determinar la individualidad de la cosa—Jur. Civ., tom. 8, pág. 448, Ser. 1ª.

2a. Prenda—Para los terceros, ésta solo puede justificarse por contrato escrito—Jur. Com., tom. 6, pág. 286, Ser. 1ª.

Prenda—Véase: *Acreedor prendario*, núm. 1—*Anticipos*, núm. 1—*Conocimientos*, núm. 1—*Contrato*, núm. 19.

Prensa—Véase: *Agentes fiscales*, núm. 2—*Tribunales de la Capital*, núm. 3.

1b. Prescripción—Mientras esta escepción no se declare procedente, el embargo preventivo no debe ser levantado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 508, Ser. 2ª.

2b. Prescripción—No se interrumpe por el reconocimiento del deudor al contestar la demanda ni le inhibe de opo-

1a—Art. 3217, Cód. Civ.: Véase también los arts. 3205, 3222 y 3224 del mismo.

2a—Arts. 742 y 744 del Cód. de Com.

1b—Pendiente de resolución la escepción, no podría levantarse la inhibición sin incurrir en prejuzgamiento.

2b—En este sumario hay una confusión completa de los principios discutidos en el fallo que le dió origen. Se trata de un deudor que reconoce la obligación al contestar la demanda, pero que opone la prescripción en el mismo escrito; se pretende que el hecho del reconocimiento interrumpe la prescripción. La interrupción no pudo tener lugar en el caso ocurrente porque ella ya estaba consumada; no puede interrumpirse sino la prescripción no cumplida: la prescripción consumada puede renunciarse. Si un deudor confiesa una deuda y en el mismo acto alega la prescripción, esa confesión no puede hacer revivir el derecho prescrito pues la prescripción está consumada y solo puede renunciarse, lo que no se presume: todo lo contrario el hecho de alegarla comprueba la voluntad del deudor de acogerse á ella.



PRE

nerla como escepción en el mismo escrito—Jur. Civ., tom. 2, pág. 237, Ser. 2ª.

3. Prescripción—No corre contra los menores de edad estén ó no emancipados—Jur. Civ., tom. 2, pág. 125, Ser. 2ª.

4. Prescripción—De créditos comerciales, se interrumpe por el reconocimiento del deudor hecho en cartas misivas, siempre que hubieran sido debidamente reconocidas—Jur. Com., tom. 5, pág. 270, Ser. 1ª.

5. Prescripción—En las obligaciones firmadas en el extranjero, se rige por las leyes argentinas—Jur. Com., tom. 5, pág. 273, Ser. 1ª.

6. Prescripción—No procede para fundar la demanda ordinaria, si en el juicio ejecutivo no se opuso como escepción—Jur. Com., tom. 5, pág. 574, Ser. 1ª.

3—Art. 3966, Cód. Civ.: Leyes 8, tít. 29, Part. 3ª; 7, tít. 14, Part. 6ª. En la legislación civil que precedió al Código, la prescripción de treinta años corría aún contra los menores de edad, salvo á éstos el derecho de restitución. Véase: F. S. C. P., tom. 5, pág. 170, Ser. 1ª; F. S. C. N., tom. 2, pág. 61, Ser. 2ª.

4—El art. 1703, Cód. de Com. en su inc. 1ª establece que, si ha mediado reconocimiento de la deuda por *documento separado*, la prescripción se interrumpe; las cartas misivas son en este caso *documentos separados* que operan la interrupción de la prescripción.

5—Así resulta de la interpretación del art. 8 del Cód. Civ., y de la doctrina corriente sobre la materia.

6—Así resulta del contexto de los arts. 515, inc. 2ª, y 516. Este último sobre todo legisla especialmente el caso, como puede verse en la nota del codificador cuando dice: «La razón de la disposición del artículo 516, es que el pago voluntario de una obligación natural, es la renuncia de hecho en las escepciones, sin las cuales la acción del acreedor hubiese sido admitida. El pago pues, en tal caso, no es una mera liberalidad, ni el deudor de la obligación natural puede á su turno decir que ha pagado lo que no debía. «El deudor de una obligación prescrita, puede defenderse tanto en juicio ordinario como en el ejecutivo; puede defenderse en éste, oponiendo, al ser citado de remate, la escepción de prescripción autorizada por el art. 48ª, inc. 5ª, Cód. de Proc. Mas en los casos en que no quisiese oponerse esta escepción en el juicio ejecutivo, se deposita el precio, alegando que va á entablarse el juicio ordinario para com-



PRE

7. Prescripción—Se interrumpe por la demanda, y esa interrupción dura mientras sigue el juicio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 199, Ser. 2º.

8. Prescripción—De las obligaciones anteriores al Código Civil, sin plazo estipulado en el vencimiento, se suponen exigibles á los diez días de la fecha—Jur. Civ., tom. 7, pág. 417, Ser. 1º.

9. Prescripción—De créditos procedentes de suministros, que el Código fija en uno y dos años, no es aplicable al tercero, que con el consentimiento del obligado ha satisfecho á los acreedores, el importe de sus cuentas—Jur. Civ., tom. 7, pág. 300, Ser. 1º.

10. Prescripción—Al que alega la ausencia para interrumpir la prescripción operada. No hay ley que establezca que un litigante pierda la facultad de alegar el derecho acordado por el art. 48º, Cód. de Proc., por el mero hecho de no alegarlo como excepción en el juicio ejecutivo: basta hacer presente en este juicio que se tiene tal ó cual defensa que se va á oponer en el juicio ordinario.

7—A no ser que después de interpuesta la demanda, quedara el juicio paralizado por el tiempo necesario para la prescripción. Véase: Inst. tom. 1, verb. Prescripción, núm. 2120.

8—Estas obligaciones son exigibles desde su fecha, ó cuando más, diez días después de acordadas. La ley 2, tít. 1º, Part. 5ª, *in fine* disponía: «E deuegela dar al plazo que pusieren entre si, quando la cosa fué prestada. E si el plazo non fué puesto, deuegela dar á voluntad del que lo prestó, diez dias despues que fué prestado.» Este mismo principio es aceptado generalmente y consagrado por nuestra legislación como puede verse por los arts. 576, 618 y 620 del Cód. Civ., concordantes con los arts. 210, 252, 704, 705 y 706, Cód. de Com. Véase: Jur. Com., tom. 2, pág. 88, Ser. 1º.

9—La disposición de los arts. 4032, inc. 3º, y 435, inc. 4º, no puede aplicarse en este caso, porque no se trata de los acreedores á que dichos artículos se refieren, ni de obligaciones para con los mismos, pues en el caso ocurrente, ya los acreedores á que se refieren esos artículos habrían sido pagados con consentimiento del deudor: solo se trata de reembolsar á aquel que habiendo hecho el pago, exige del beneficiado con ellos la cantidad empleada en su provecho: esto equivale á un anticipo, á un préstamo, cuya prescripción no puede en manera alguna comprenderse entre los enumerados en los artículos citados.

10—Hay inexactitud en este sumario; la ausencia no interrumpe la pres-

PRE

rrumpirla, corresponde la prueba—Jur. Civ., tom. 7, pág. 417, Ser. 1ª.

11. Prescripción—De la acción de nulidad de los actos jurídicos corre desde que el dolo, el error ó falsa causa fuese conocida y corresponde al que sostiene la validez, la prueba de la fecha en que el defraudado tuvo conocimiento del acto—Jur. Civ., tom. 8, pág. 523, Ser. 1ª.

12. Prescripción—No puede oponerse ante los Tribunales superiores si no resulta probada por instrumentos públicos ó por testigos recibidos en primera instancia—Jur. Civ., tom. 2, pág. 523, Ser. 1ª.

13. Prescripción—Al que alega que fué interrumpida, corresponde justificar cuándo y en qué condiciones —Jur. Civ., tom. 8, pág. 249, Ser. 1ª.

14. Prescripción—Para que se conceptúe interrumpida no basta la iniciación del juicio informatorios ó testamentarios, la ley requiere demanda contra el poseedor directamente—Jur. Civ., tom. 8, pág. 249, Ser. 1ª.

15. Prescripción—De diez años, solo por ese término se cripción, solo, hace que la ley exija un término mas largo para que ella se opere. Por lo demás, es evidente que el que pretende ampararse al hecho de la ausencia para la que la prescripción requiere mayor tiempo, lo corresponde la prueba, porque afirma un hecho nuevo en juicio.

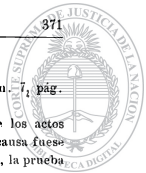
11—Art. 4030 del Cód. Civ.

12—Art. 3962 del Cód. Civ., tomado del 3428 del de Luisiana. Véase: Inst. tom. 1, verb. Prescripción, núm. 2136.

13—Cuando se afirma que la prescripción fué interrumpida, se alega un hecho nuevo en el juicio, y es sabido que su prueba incumbe al que lo alega. Véase: Inst. tom. 1º, verb. Prescripción núm. 2124.

14—La ley 29, tít. 29, Part. 3ª, requería para la interrupción de la prescripción, un acto judicial, como cuando el verdadero señor entabla su acción en juicio, contra el poseedor de su cosa *y este es citado y emplazado por el Juez*. La ley 30 permitía también la interrupción por la interpelación hecha ante los vecinos de la casa, y protesta de que solo por impedimento no le demanda en juicio. Véase arts. 3986 y 3987 del Cód. Civ.

15—Porque la obligación contraída por el deudor es meramente personal, siéndole aplicable lo dispuesto en el art. 4023 del Cod. Civ. La



PRE

prescribe la obligación de pagar las confecciones que se encargan á un artesano—Jur. Civ., tom. 8, pág. 217, Ser. 1^a.

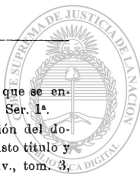
16. Prescripción—Es procedente la adquisición del dominio, aún contra el Fisco, por la posesión con justo título y buena fe durante más de cuarenta años—Jur. Civ., tom. 3, pág. 312, Ser. 2^a.

17. Prescripción—No se interrumpe en virtud de leyes generales dictadas por las legislaturas de provincia, cuando los bienes en su origen pertenecieron á la Nación—Jur. Civ., tom. 3, pág. 312, Ser. 2^a.

obligación de pagar á un sastre no se halla sujeta á la disposición del art. 4035, inc. 4^o, porque el sastre no es un comerciante sino un artesano que hace locación de sus servicios, aunque ponga los materiales para la obra que se le encarga. Una sastrería no es la tienda ó almacén de un comerciante ó mercader sino el taller de un artesano. Las disposiciones que establecen los términos de la prescripción no son de interpretación extensiva, porque se trata de una cuestión odiosa que debe restringirse, no debe aplicarse su disposición á personas que no están espresamente determinadas.

16—La ley 7, tít. 29, Part. 3^a, exige 40 años para adquirir los bienes del Fisco por prescripción, más cunro para ejercer el derecho de beneficio de restitución. Por nuestra nueva ley solo se exige treinta, ya sea que la prescripción se opere contra el Fisco ó los particulares; también el beneficio de restitución fué suprimido. Las leyes provinciales exigían asimismo una posesión de 40 años para adquirir por prescripción los bienes, ya pertenecieran ellos al fisco ó á la Municipalidad. La ley de 29 de Julio de 1867 con el objeto de dar seguridad á la propiedad raíz particular, estableció que la posesión continuada por cuarenta años ó mas, forma suficiente título de propiedad contra toda gestión de dominio por parte del Fisco ó de la Municipalidad. Véase: Inst. tom. 1, verb. Posesión, núm. 2055; Posesión continuada, núm. 2061. Véase asimismo verb. Posesión núm. 8 de este libro.

17—Esta interrupción tiene que ser considerada bajo el punto de vista de la antigua legislación en cuya época fué dictada la ley que se pretende haber interrumpido la prescripción. Según esa legislación la interrupción civil tratándose de bienes raíces solo puede verificarse por demanda ó interpelación judicial, no por actos legislativos que no se comprenden en la formas de los procedimientos judiciales. Leyes 7, tít. 11, Lib. 2, F. R.; 8, tít. 10, y 29, tít. 29, Part. 3^a.



PRE

18. Prescripción—No se interrumpe por actos legislativos—Jur. Civ., tom. 3, pág. 312, Ser. 2ª.

19. Prescripción—Solo se interrumpe por demanda ó interpelación judicial—Jur. Civ., tom. 3, pág. 312, Ser. 2ª.

20. Prescripción—No se interrumpe en virtud de una demanda entablada por la Municipalidad cuando los bienes pertenecen á la Nación, la interrupción que la ley exige debe ser iniciada por el verdadero propietario—Jur. Civ., tom. 3, pág. 312, Ser. 2ª.

21. Prescripción—De costas, solo puede fundarse en el principal, pero no en los incidentes—Jur. Civ., tom. 3, pág. 393, Ser. 2ª.

22. Prescripción—Para que la de diez años baste para adquirir la propiedad, se requiere justo título—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2ª.

23. Prescripción—La posesión tranquila durante diez años con justo título y buena fe entre presentes es bastante para adquirir el dominio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 207, Ser. 1ª.

18—No es un medio legal de interrupción de la prescripción.

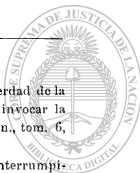
19—Leyes 7, tít. 11, Lib. 2, F. R.; 8 tít. 10, y .9, tít. 29, Part. 3ª.

20—Es un principio indiscutible que los hechos por medio de los cuales se interrumpe la prescripción, salvo el caso de desposesión, deben ser producidos por aquel contra quien se prescribe, y no por terceros sin vínculo alguno de derecho que lo ligue al prescribiente.

21—Los incidentes de un juicio no son sino accesorios de él dentro del cual se desenvuelven y por el cual únicamente tienen razón de ser. Su separación solo obedece á razones de mero procedimiento á efecto de facilitar la pronta terminación de los juicios; siendo esto así es evidente que las costas de los incidentes no pueden considerarse prescritas sino en tanto lo sean las del juicio principal.

22. Art. 3999, Cód. Civ.: Ley 18, tít. 29, Part. 3ª. Véase Inst. tom. 1, verb. Posesión, núm. 2052.

23—El caso presente, debe ser regido por las antiguas leyes las que requieran justo título, buena fé, posesión tranquila y continuada por el tiempo de diez años entre presentes y veinte entre ausentes. Ley 18, tít. 29, Part. 3ª. Nuestra legislación ha reproducido esta doctrina en el art. 3999 del Cód. Civ. Véase nota 22.



PRE

24. Prescripción—El reconocimiento de la verdad de la deuda por parte del deudor, no lo inhibe para invocar la prescripción como medio de solventarla—Jur. Com., tom. 6, pág. 120, Ser. 1ª.

25. Prescripción—La prueba de haber sido interrumpida por actos del deudor, corresponde al acreedor, si esos actos no se encuentran asentados en sus libros en la fecha respectiva—Jur. Com., tom. 6, pág. 122, Ser. 1ª.

26. Prescripción—De una obligación cuyo cumplimiento depende de un hecho ageno á la voluntad del acreedor, solo empieza á correr desde que ha tenido lugar el hecho que impedía su cumplimiento — Jur. Com., tom. 6, pág. 404, Ser. 1ª

27. Prescripción—De una obligación á plazos periódicos debe contarse desde el último pago hecho por el deudor y no desde la fecha de la obligación principal—Jur. Com., tom. 6, pág. 584, Ser. 1ª.

Prescripción—Véase: *Término*, núms. 1, 3, 7, 8 y 9—*Honorarios*, núm. 1 — *Auto*, núm. 8 — *Obligaciones*, núm. 1—*Obligaciones al portador*, núm. 1—*Providencias*, núm. 2—*Litigante*, núm. 1—*Honorarios médicos*, núm. 1—*Contribución directa*, núms. 1 y 2 — *Gastos del albacea*, núm. 1 — *Posesión*, núms. 7, 8 y 9—*Interdicto de obra nueva*, núm. 2—*Créditos*, núm. 1—*Fianza*, núm. 5.

24—El art. 1010 del Cód. Civ. exige como medio de interrumpir la prescripción, la renovación del título ó la novación. Sin embargo si un deudor reconoce una deuda y la prescripción ya se había operado, nada le impide ampararse á ella siempre que no hubiese sido interrumpida en la forma establecida en el artículo citado.

24—En el caso presente se dijo que el mismo deudor había interrumpido la prescripción haciendo entregas parciales á cuenta de un vale que había otorgado, entregas que no se encontraban asentadas en los libros.

26—Art. 3980, Cód. Civ.

27. Art. 1003, inc. 4º del Cód. de Proc.

PRE

1a. Prescripción de sueldos—De los mayordomos ó personas que dirijen y cuidan un establecimiento á nombre del propietario no se rije por lo dispuesto en el inc. 5º del art. 4035 del Cód. Civil—Jur. Civ., tom 8, pág. 119, Ser. 1ª.

1b. Prescripción de honorarios—De abogado en pleito no terminado y proseguido por el mismo, solo empieza á correr después de transcurridos cinco años—Jur. Civ., tom 8, pág. 555, Ser. 1ª.

1c. Prescripción treintenaria—Es bastante contra la Municipalidad cuando los derechos que ésta reclama no son fiscales, sino como sucesora de un particular—Jur. Civ., tom. 2, pág. 561, Ser. 2ª.

Presidio—Véase: *Uxoricidio*, núm. 1.

Prestaciones—Véase: *Contrato*, núm. 11.

Préstamo—Véase: *Hipoteca tácita*, núm. 1.

1a—Este artículo establece la prescripción de un año para pagar á los criados de servicio, que se ajustan por año ó menos tiempo, á los jornaleros y oficiales mecánicos el precio de sus salarios, trabajos ó hechuras. Los criados de servicio, según su significación jurídica y gramatical son los que prestan servicios domésticos en los diversos detalles de una casa sin ejercer ninguna administración. Los jornaleros son los que trabajan por un tanto al día bajo la inspección de un superior. A los oficiales mecánicos se les abona el trabajo por hechura. El mayordomo desempeña otro rol, es el que administra, gobierna y cuida los bienes de otro, el personal de un establecimiento está bajo sus órdenes y depende de él. Estas distinciones demuestran que el mayordomo no se halla comprendido en el inc. 5º del artículo citado y que no está sujeto á la prescripción establecida para los criados, jornaleros y oficiales mecánicos: el rol de un mayordomo es muy superior al de éstos. Véase: García Goyena, Concordanias de los motivos y comentarios del Cód. Civ. Español, tom. 4, pág. 329. Zachariae Droit Civ. Français, tom. 6, pág. 334 y notas 35 y 39. El artículo aplicable es el 4023 del Cód. Civ. La prescripción liberatoria no admite aplicación por analogía, ella es de estricta interpretación.

1b—Art. 4032, inc. 1º, aparte 2º.

1c—En este caso la Municipalidad no obra como persona jurídica, obra como sucesora de una persona de existencia visible, sucediendo en este carácter en todos sus derechos y obligaciones.



PRE—PRI

Presunción—Véase: *Poseedor*, núm. 2—*Prueba*, núm. 10.
—*Poseción de una casa de comercio*, núm. 1.

Presunción grave—Véase: *Informe médico*, núm. 1—*Hurto*, núm. 1—*Certificado médico*, núm. 1.

1. Presunciones—Cuando no excluyen la posibilidad de un error debe absolverse al demandado—Jur. Com., tom. 5, pág. 356, Ser. 1ª.

Presunciones—Véase: *Simulación*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 2—*Falsedad*, núm. 1—*Hernano legítimo*, núm. 1—*Simulación*, núms. 5 y 11.

Primer delito—Véase: *Reincidencia*, núm. 2.

Primer hipotecante—Véase: *Gastos de la ejecución*, número 1.

Principio de prueba—Véase: *Confesión estrajudicial*, núm. 1—*Declaraciones incidentales*, núm. 1.

1a. Principio de prueba por escrito—El recibo del tercero en que no se hagan mención especial del nuevo contrato no es bastante como tal para justificar la existencia de éste por medio de testigos—Jur. Com., tom. 6, pág. 124, Ser. 1ª.

Principio de prueba por escrito—Véase: *Buques*, núm. 2—*Prueba testimonial*, núm. 9.

Prisión—Véase: *Fallido*, núm. 5.

Privilegio—Véase: *Honorarios*, núm. 2—*Acreedor*, núm. 1—*Acreedores*, núm. 1—*Gastos de la ejecución*, núm. 1—*Costas del concurso*, núm. 1—*Hipoteca tácita*, núms. 1 y 2—*Reivindicante*, núm. 1.

Privilegio preferente—Véase: *Gastos causídicos*, núm. 1.

Privilegios—Véase: *Sociedad*, núm. 4—*Alquileres*, número 1.

Privilegios especiales—Véase: *Constructores*, núm. 1.

1a—Falta el requisito exigido por la ley de que el documento debe emanar del adversario y debe hacer verosímil el hecho litigioso.

PRI-PRO

1a. Privilegios generales—Aún cuando importen una hipoteca tácita sobre los bienes del deudor, no pueden ser tomados en consideración sin que preceda la declaración de su quiebra ó insolvencia—Jur. Civ., tom. 9, pág. 248, Ser. 1^a.

Privilegios generales—Véase: *Renovaciones*, núm. 1.

Procedencia—Véase: *Damnificado*, núm. 1.

Procedimiento—Véase: *Nulidad*, núm. 3—*Litigio*, núm. 1.

Procedimiento sumario—Véase: *Honorarios*, núm. 14.

1b. Procedimientos—De la curia eclesiástica, se rigen por

1a—Este caso fué resuelto tomando por fundamento un caso análogo sentenciado por la S. C. de la Provincia y que corre publicada en el tom. 1^o, págs. 21 y 113, Ser. 2^a, el que dice así: 1^o Que tanto por el Cód. Civ. como por el de Comercio, los privilegios de los créditos están divididos en generales y particulares—Arts. 3878, Cód. Civ., y 1963 Cód. de Com.—2^o Que el privilegio general, que es el que se extiende á los bienes del deudor, presupone y requiere necesariamente para su ejercicio la insolvencia ó quiebra de aquél, porque él se funda en la imposibilidad de pagar íntegramente á todos los acreedores; 3^o que no sucede lo mismo con el privilegio especial que afecta á un bien dado, y que por eso mismo solo exigirla, para hacer efectiva la preferencia que de él nace, una insolvencia parcial....6^o que esta doctrina legal está justificada además por la disposición de los arts. 3937 y 3938, Cód. Civ. y 1710 del Cód. de Com. Uno de los miembros de la Cámara decía: «Contra la verdad y justicia de esta doctrina no vale alegar, lo dispuesto en los arts. 629 y 531 del Cód. de Proc., que autorizan las tercerías de mejor derecho en el juicio ejecutivo, prescribiendo que se sustancie en juicio ordinario, hasta resolver quién tenga un derecho preferente, porque dichos artículos solo se refieren al mejor derecho que se alegue, fundándose el tercer opositor en un privilegio especial que tenga sobre el bien ejecutado, pero no por razón de privilegios generales, siendo por lo mismo incorrecta y equivocada la aplicación que de esos artículos se pretenda hacer»

1b—La ley de 1863 solo rige para los Juzgados Federales entre los cuales no están comprendidos los Tribunales Eclesiásticos: éstos se rigen en la sustanciación de los juicios por las constituciones del Derecho Canónico. El primer Arzobispo, Dr. Escalada, reorganizó los Tribunales Eclesiásticos de la Rep. por resolución de 17 de Diciembre de 1866, prescribiendo en su art. 3^o que: «El procedimiento en los juicios sería el canónico legal que hasta la fecha se ha usado, esta resolución fué aprobada por el Gobierno Nacional en 22 de Abril de 1867.

PRO

las leyes canónicas, la Ley de Procedimientos Nacionales solo es aplicable en cuanto sea concordante con aquellas—Jur. Civ., tom. 2, págs. 271 y 308, Ser. 2ª.

2. Procedimientos—Que á juicio de la parte sean ilegales pueden ser materia de recurso ante el Superior, pero en ningún caso, causal de recusación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 624 Ser. 2ª.

Procedimientos—Véase: *Nulidades*, núm. 1 -- *Trámite* núm. 1—*Recurso de fuerza*, núm. 5.

Procedimientos judiciales—Véase: *Injuria*, núm. 1.

Procesado—Véase: *Absolución*, núm. 1.

Proceso—Véase: *Confesión*, núm. 3.

Procuraciones judiciales—Véase: *Mandato*, núm. 4.

Procurador—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 2.

Procuradores—Véase: *Abogados y procuradores*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 20.

Procuradores de número—Véase: *Pacto de quota-litis*, núm. 1.

Procuradores municipales—Véase: *Denunciantes*, número 2.

Profesión—Véase: *Mandato*, núm. 6.

Prófugo—Véase: *Providencias*, núm. 1.

1. Promesa—De vender un bien determinado, la falta de cumplimiento se resuelve en daños y perjuicios—Jur. Civ., tom. 2, pág. 5, Ser. 2ª.

2—No se encuentra comprendida esta causal entre las enumeradas en el art. 368 del Cód. Proc., causales que han sido enumeradas taxativamente por la ley.

1—La promesa de venta en este caso en un verdadero contrato de compra-venta, que teniendo por objeto un bien inmueble, debe ser hecho en escritura pública bajo pena de nulidad, como lo dispone el artículo 1181 del Cód. Civ. Sin embargo la ley admite como escepción la celebración de estos contratos bajo la forma de un instrumento privado, en el cual pueden



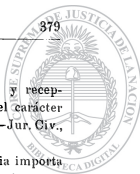
PRO

2. Promesa.—De venta del predio arrendado y recepción de parte del precio, son incompatibles con el carácter de arrendatario y hacen improcedente el desalojo—Jur. Civ., tom. 8, pág. 443, Ser. 1ª.

3. Promesa.—De venta de un terreno de estancia importa que él sea apto para la cría de ganado, si no lo fuere, el comprador no está obligado á cumplir el contrato y el vendedor debe devolver lo que hubiere recibido á cuenta del precio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 282, Ser. 1ª.

las partes obligarse á reducirlo á escritura pública, en cuyo caso quedan los contratos concluidos como obligaciones en que las partes se han comprometido á hacer escritura pública.—Art. 1185 *ibid.*—La obligación de que habla este artículo es considerada como obligación de hacer, y la parte que resistiere hacerlo podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses.—Art. 1187 *ibid.*—Véase Inst., tom. 1, verb. Obligación de hacer, núm. 1189.

3.—Se trata de la escrituración de un *terreno de estancia* que resultó después ser un terreno completamente arenoso, desprovistos de pastos é inútil para poblarlo de ganados. Se sostuvo la nulidad del contrato, fundado en que es doctrina universal que mediando error acerca de las calidades sustanciales de la cosa se vicia el consentimiento, siendo anulable el acto ó contrato. En el lenguaje común, *terreno de estancia*, es aquel que tiene condiciones para la cría y cuidado de ganados. En el legal *estancia* es el establecimiento, cuyo único y principal objeto es la cría del ganado sea vacuno ó yeguarizo, ó bien lazar (art. 4 del Cód. Rural de la Prov. de Buenos Aires). El *terreno* para *estancia* debe pues tener las calidades indispensables para llenar su objeto, como pasto, yerbas, etc., pues de otro modo el terreno no sería de estancia. Si se compra un terreno como de estancia y resulta que no lo es, habrá error; y sabemos que el error invalida las convenciones porque vicia el consentimiento, *Non videtent, qui errant, consentire.*—Ley 116 § 2º, de reg. Jur.—Igual principio sienta el art. 926 del Cód. Civ. Cuando la cosa prometida es un terreno de estancia, el consentimiento recae sobre esa cosa de determinada especie que se tuvo principalmente en mira para destinaria á la industria ganadera, y si resulta que carece de tales calidades sustanciales ó indispensables, es indudable que hay error, que ese error vicia la manifestación de la voluntad y trae la nulidad del acto.—Arts. 926 y 954 Cód. Civ.—El error de hecho no perjudica cuando ha habido razón para errar—art. 929.—Esta opinión vertida por cuatro de los cam-



PRO

Promesa de venta—Véase: *Venta*, núm. 3.

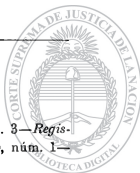
Promulgación—Vease: *Reincidencia*, núm. 1.

Propiedad—Véase: *Titulos de propiedad*, núm. 3—*Registro*, núm. 1—*Poseción de una casa de comercio*, núm. 1—*Buques*, núms. 1 y 2.

1. Propiedad pública—Corresponde al favorecido por la ley la prueba de que lo era el bien espropiado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 529, Ser. 1ª.

ristas fué rebatida por otro de ellos. El error decía éste, «según lo entiende nuestro Código en la nota explicativa del art. 926, es «toda calidad que no siendo susceptible de más ó menos, coloca al objeto en tal especie ó en tal otra, según que esta calidad existe ó no. Así, si he querido adquirir un cuadro de Rafael, se me da una copia, hay error en la causa principal del acto y en la calidad principal de la cosa». La calidad del campo por su abundancia ó escasez de pasto, no es sustancial según esa definición, porque es una calidad susceptible de más ó menos y su falta no cambia el campo vendido en otra especie diferente. Si hay error, es sobre una calidad accidental de la cosa ó sobre un accesorio de ella, porque lo que se vende es un terreno de estancia y el pasto es un accesorio del terreno y entonces el caso se halla regido por el art. 928, según el cual tal error no invalida el acto sinó cuando esa calidad ha sido garantida, ó ha sido una condición expresa del contrato, ó el error proviene de dolo de la parte ó de un tercero. Por otra parte, *terreno de estancia* no es precisamente un campo con buenos pastos para la cria de ganados, esa denominación tiene su significación legal, como la tiene *terreno de chacra*, *terreno de quinta*, y se aplica á la situación y extensión de los terrenos ó fracciones en que la tierra ha sido dividida y distribuida según las necesidades de la población. Así por terreno de estancia se entiende grandes fracciones del territorio de campaña destinado á la cria de ganados por su extensión y su situación fuera de los centros de población. Que haya ó no buenos pastos, que sean terrenos fértiles ó áridos arenales, esto solo tiene relación con la calidad del terreno, no con la categoría que le corresponde en la escala adoptada por nosotros para la división de la tierra y siempre será designado con el nombre de terreno de estancia. Esta argumentación sería aceptable para aplicarla á las ventas de terrenos de estancia, cuando no se dice que el terreno es de buena calidad y de pastos abundantes como se dijo en el caso que motivó la resolución trascrita en el sumario.

1—Se trata de un juicio iniciado por los poseedores de unos terrenos por donde debía pasar la vía de un ferro-carril concedido por el Gobier-



PRO

2a. Propiedad pública.—No puede conceptuarse que lo sean terrenos que al tiempo de dictarse la ley estuviesen concedidos á un particular aún cuando por las condiciones en que le hubiesen sido concedidos, careciese de escritura pública—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2º.

Propiedad pública.—Véase: *Terrenos fiscales*, núm. 1.

1. Propietario.—Solo están obligados á pagar la obra de mano de los empedrados que la Municipalidad ordene ó conceda—Jur. Civ., tom. 6, pág. 65, Ser. 1º.

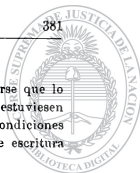
2b. Propietario.—Que por descuido ó negligencia pierde la oportunidad de hacer declarar judicialmente nula una escri-

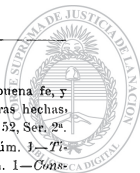
no: en la concesión se concedió á la empresa la facultad de ocupar gratis los terrenos de propiedad pública que atravesara la vía. Los poseedores reclaman el pago del terreno ocupado por la vía en la parte por ellos poseído. La empresa se escepteona diciendo que esos terrenos son de propiedad pública: los Tribunales rechazan la escepteion porque dado el punto de partida de que la empresa habia ocupado los terrenos cuyo valor se demandaba y que los demandantes habían invocado posesión y títulos remotos ¿á quién correspondía la prueba? Ambos litigantes tenían que producir la que correspondía á sus derechos, pero en el caso presente correspondía especialmente á la parte demandada porque se había escepteionado diciendo que: no estaba obligada á lo que se le exigía porque el terreno materia del juicio era del dominio público. La posición de cada parte estaba definida, siendo la más favorable la del poseedor antiguo y con antiguo título. Estaban pues los poseedores en su perfecto derecho al pedir que la empresa les abonara el precio de sus terrenos que no eran de propiedad pública: para que otra cosa sucediera habría sido necesario que hubiese habido un juicio con los poseedores en que se hubiese obtenido la declaración de que esos terrenos eran del dominio público.

2a—La escritura pública no es esencial para que la enagenación de los bienes raíces surta efecto como contrato.—Art. 1185, Cód. Civ.—puede ser hecho bajo forma privada en cuyo caso el contrato puede ser condicional: una vez cumplida la condición se procede á otorgar la escritura pública y los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo—art. 543 *ibid.*

1—La ley de Setiembre de 1857, en que el actor fundaba el cobro de su cuenta, solo autoriza á cobrar á los propietarios el pago de la obra de mano—arts. 1º y 2º.—Véase: *Inst. tom. 1, verb. Propietario*, núm. 2202.

2b—Art. 2588 Cód. Civ.





PRO

tura simulada, la posesión que tenía justifica su buena fe, y por consiguiente deben serle pagadas las mejoras hechas, previa tasación de peritos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 2ª.

Propietario—Véase: *Trabajo ó materiales*, núm. 3—*Títulos de propiedad*, núm. 5—*Municipalidad*, núm. 1—*Construcción*, núm. 1—*Contrato de locación*, núm. 9.

Prórroga—Véase: *Término*, núm. 4—*Términos judiciales*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 2—*Fidior*, núm. 6.

1. Pro-Secretario—De la Cámara de lo Civil, se nombra al Dr. D. Norberto R. Fresco—Jur. Civ., tom. 1, pág. 27, Ser. 2ª.

Prostitutas—Véase: *Declaraciones*, núm. 2.

1a Protesta—Notificada judicialmente, sobre una venta de bienes que se conceptúan propios, se considera fuera de juicio y basta para que el tercero funde un juicio de jactancia—Jur. Com., tom. 9, pág. 176, Ser. 1ª.

Protesta—Véase: *Sentencia*, núm. 14.

Protesto—Véase: *Obligación protestada*, núm. 1—*Escribano*, núm. 4.

Protocolización—Véase: *Reconocimiento de firma*, núm. 2—*Información*, núm. 5.

Protocolos—Véase: *Escribanos*, núm. 3.

1b Providencia—Que recae en un expediente, cuando el Juez recupera sobre él la jurisdicción que perdió en virtud de su elevación al Superior, debe notificarse por cédula, siempre que exista pendiente algún término fatal para las partes—Jur. Civ., tom. 2, pág. 253, Ser. 2ª.

Providencia—Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 3.

1. Providencias—Las notificadas á los estrados del Juz-

1a—Véase: verb. Jactancia núm. 4 y nota.

1b—Porque al volver el expediente al inferior, se pone el decreto de hágase saber, el que importa la reapertura del término fatal que se hallaba suspendido por la elevación del expediente.

PRO-PRU

gado en representación de un prófugo declarado rebelde, no requieren para su validez el transcurso de los términos que la ley fija cuando el procesado tiene intervención—Jur. Crim., tom. 5, pág. 110, Ser. 1ª.

2a. Providencias—Dictadas en el expediente, aun cuando sea sin intervención de las partes, interrumpe la prescripción—Jur. Com., tom. 5, pág. 493, Ser. 1ª.

Providencia—Véase: *Registro de la Capital*, núm. 1.

Providencias—Véase: *Apelación*, núm. 4.

Provocación—Véase: *Embargo*, núm. 1.

1. Prueba—No puede invocarse para la filiación natural las afirmaciones de un testamento ológrafo no escrito por el testador—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 1ª.

2b. Prueba—Las disposiciones que rigen para su recepción en el juicio ordinario son aplicables á la prueba de las excepciones dilatorias—Jur. Civ., tom. 6, pág. 464, Ser. 1ª.

3. Prueba—Debe recibirse en caso de duda—Jur. Civ., tom. 2, pág. 171, Ser. 2ª.

2a—Las diligencias judiciales interrumpen la prescripción, señalando un nuevo período para la existencia de la excepción, según lo determina el art. 1010 del Cód. de Com., cuando fija la fecha en que la prescripción interrumpida empieza á correr de nuevo.

1—El testamento ológrafo para ser válido debe ser escrito todo entero, fechado y firmado por la mano misma del testador, la falta de alguna de estas formalidades lo anula en todo su contenido—art. 3639, Cód. Civ.—Los testamentos que no llenen estos requisitos son nulos en todo su contenido dice la ley: los Jueces no pueden dar valor legal á los actos y declaraciones que la ley ha dispuesto sean nulos y sin valor jurídico: lo contrario importaría defraudar los propósitos de la ley y rebelarse contra sus disposiciones.

2b—No hay razón para dejar de aplicar por analogía á la prueba de las excepciones dilatorias, las disposiciones del Cód. de Proc. relativas á los hechos en el juicio ordinario.

3—El recibimiento del pleito á prueba es la regla general y el Juez debe abrir la causa á prueba, aunque las partes no lo pidan—art. 104, Cód. de Proc.—Si alguna de las partes se opusiere, previa una audiencia, el Juez resuelve lo que cree justo—art. 105—Como la prueba no perte-



PRU

4. Prueba.—Debe recibirse siempre que existan hechos sobre los cuales no exista conformidad de partes—Jur. Civ., tom. 2, págs. 173, 443, 494 y 510, Ser. 2ª.

5. Prueba.—La pertinencia de la que se produzca solo puede ser apreciada al pronunciarse sentencia—Jur. Civ., tom. 2, págs. 510 y 534, Ser. 2ª.

6. Prueba.—La de escepción de legítima defensa, corresponde al reo—Jur. Crim., tom. 5, pág. 133, Ser. 1ª.

7. Prueba.—De la existencia de las condiciones que el Código exige, para la calificación del delito, corresponde al acusador si la causa no es de oficio—Jur. Crim., tom. 5, pág. 155, Ser. 1ª.

8. Prueba.—De la escepción de falsedad fundada en la agregación de palabras al documento que sirve de base á la acción, corresponde al ejecutado—Jur. Com., tom. 5, pág. 352, Ser. 1ª.

9. Prueba.—Para que la formen los libros de los comercios al orden de los juicios sino á la justicia, el Juez consultando la equidad y la justicia, debe tratar siempre de favorecer más á los litigantes en sus defensas; de donde surge el principio sentado en este sumario. Véase: Emilio Reus, Ley de Enj. Civ. tom. 1, pág. 445.

4—Art. 104, Cód. de Proc.

5—La prueba que se pretende rendir en un juicio debe librarse á la apreciación de los litigantes para que la presenten en la forma más conveniente á sus derechos, y su apreciación solo puede hacerla el Juez al dictar sentencia, pues lo contrario importaría hasta cierto punto un prejuzgamiento.

6—El estado de legítima defensa no es de presunción legal, debe por consiguiente, establecerse su existencia por medio de pruebas suficientes, la certidumbre ó probabilidad de las circunstancias que lo justifiquen—art. 169, Cód. Pen. ant. Véase: Legítima defensa, núm. 1; Inst. tom. 1, verb. Legítima defensa, núm. 1618, Estrangulación, núm. 1164.

8—En virtud del principio de que al que afirma un hecho nuevo en juicio incumbe la prueba; como igualmente en virtud de que el demandado que se escepciona se convierte en actor á los efectos de la prueba.

9—Los libros de comercio llevados en la forma y con los requisitos establecidos, serán admitidos en juicio como medio de prueba *entre comerciantes* en el hecho de su comercio, del modo y en los casos espre-



PRU

cientes, aun debidamente llevados, se debe justificar el carácter de comerciante de la persona contra quien se pretende hacerlos valer—Jur. Civ., tom. 1, pág. 48, Ser. 2ª.

10. Prueba—Del cotejo hecho por peritos en los casos en que el Cód. Civil la preceptúa, si bien no liga el juicio del Juez. es algo más que mera presunción—Jur. Civ., tom. 1, pág. 52, Ser. 2ª.

11. Prueba—La demora en la producción de la delegada en otras autoridades, no obsta para presentarla después de vencido el término, si no se justifica que es imputable á la parte—Jur. Civ., tom. 1, pág. 168, Ser. 2ª.

12. Prueba—Su procedencia ó improcedencia solo puede ser declarada al dictar sentencia definitiva—Jur. Civ., tom. 1, pág. 380, Ser. 2ª.

13. Prueba—Que no ha sido agregada antes de los alegados en el Código.—Art. 76 Cód. de Com.—Véase: Inst. tom. 1, verb. Libros, núm. 1651 y nota

10—Es algo más; pues cuando el dictamen de los peritos es terminantemente asertivo, el Juez no puede apartarse de él, la ley le da fuerza de prueba legal—Art. 178, Cód. de Proc.—siempre que los peritos tengan título. El art. 1033, solo ordena el cotejo y comparación de la firma, cuando es negada; no puede fijar el alcance ó valor de la prueba porque esto es materia propia de la ley de procedimientos.

11—El art. 118, Cód. de Proc. autoriza á pedir la producción de la prueba antes de los alegatos, siempre que no hubiese habido desidia de parte del interesado y que hubiese éste, urgido su diligenciamiento. Véase: Inst. tom. 1, verb. Prueba, núms. 2221, 2226, 2235 y notas respectivas. F. S. C. P., toms. 7, pág. 300; 10, pág. 164, Ser. 1ª; y 3, pág. 90, Ser. 2ª.

12—Lo contrario importaría un prejuizgamiento. El art. 108 del Cód. de Proc. dice, que las pruebas que se refieran á hechos no articulados serán irremisiblemente desechadas al pronunciar la sentencia definitiva; de donde se deduce á *contrario sensu*, que el Juez no puede pronunciarse sobre su procedencia sino cuando la causa se encuentra en este estado. Véase: Inst. tom. 1, verb. Prueba, núm. 2220.

13—Las diligencias de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término: es deber de los interesados cumplir con esta disposición urgiendo la prueba, y solo cuando no les es imputable la



PRU

tos por negligencia de las partes, no puede serlo con posterioridad—Jur. Civ., tom. 1, pág. 611, Ser. 2ª.

14. Prueba—En caso de duda debe recibirse, cuando existen hechos controvertidos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 437, Ser. 2ª.

15. Prueba—El auto que ordena su recepción, no es apelable, solo debe concederse apelación del recaído en la oposición que la parte hubiere deducido contra él—Jur. Civ., tom. 7, pág. 234, Ser. 1ª.

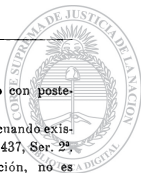
16. Prueba—Por escrito solo es necesaria para probar la existencia de un contrato, cuyo valor excede de 200 pesos nacionales, pero no para probar hechos que imponen obligaciones al que los ejercita del mismo modo que los contratos celebrados en debida forma—Jur. Civ., tom. 7, pág. 503, Ser. 1ª.

omisión pueden exigir que se practiquen antes de los alegatos, cuando ella es imputable á las autoridades encargadas de diligenciarlas. El art. 118, Cód. de Proc. establece esta sola escepción. Véase: Inst., tom. 1, verb. Diligencias de prueba, núm. 891. F. S. C. P. toms. 9, pág. 182; 7 pág. 112, Ser. 1ª.

14. Véase: Prueba, núm. 3 y nota.

15—Cuando hay oposición de parte de los litigantes respecto á la recepción de la causa á prueba, el Juez llama á juicio verbal.—Art. 105, Cód. de Proc.—En este comparendo se discute si el auto de prueba es ó no procedente, estendiéndose acta de lo que se espone, el Juez resuelve dentro de tercero día, lo que cree justo: esta resolución es apelable dentro de 24 horas.—Art. 106, *ibid.*—Este juicio no puede ser omitido.

16—Aquí no se trata de una obligación que emana de un contrato celebrado entre partes, cuyo cumplimiento se exige: se trata de una obligación que nace de un hecho. El principio de prueba por escrito es necesario cuando se trata del cumplimiento de un contrato cuyo valor excede de 200 pesos, pero no para comprobar hechos. El art. 499, Cód. Civ., dice que las obligaciones tienen su fuente tanto en los contratos como en los hechos, y cualquiera que haya sido la causa de éstos, no deja su autor de estar sometido á las responsabilidades que de ellos nacen. La nota al art. citado ilustra la materia: cuando hay hechos realizados, ya sea en cumplimiento de un contrato ó no, sus consecuencias son exigibles, como ejecutadas en cumplimiento del contrato si éste reúne las formalidades de la ley, ó como obligación engendrada por el hecho. Cuando hay he-



PRU

17. Prueba.—Es improcedente la apelación del auto que la ordena, debe apelarse de aquel que no hace lugar á la oposición—Jur. Civ., tom. 8, pág. 228, Ser. 1ª.

18. Prueba.—Toda petición en que se objeta una diligencia suspende el término para todas las demás—Jur. Civ., tom. 8, pág. 274, Ser. 1ª.

19. Prueba.—No pueden presentarse en ese carácter después de vencido el término documentos que la parte conocía

hechos realizados por una de las partes en cumplimiento de un contrato no es el art. 180 el que debe aplicarse, en este caso, el acto debe regirse por el art. 1191, según el cual son admisibles todos los medios de prueba cuando una de las partes ha recibido una prestación y se negase á cumplir el contrato. Si esto es así, que la ley admite la comprobación de una prestación que se ha hecho en cumplimiento de un contrato, que debió hacerse necesariamente bajo la forma escrita y el que recibió la prestación se negase á cumplirlo, con mayor razón debe admitirse la prueba testimonial para comprobar aquellos hechos en que se hicieron prestaciones con un fin determinado y que ese fin no se cumplió con detrimento de los intereses de una de las partes, en beneficio de la otra: este hecho obliga al que recibió la prestación á la devolución, en virtud del principio de que nadie puede quedarse con lo ajeno ni enriquecerse á costa de otro y en perjuicio de tercero. Este mismo principio ha sido ya sentado en la Cámara de lo Comercial, como puede verse en la Inst. tom. 1, verb. Prueba, núm. 2216, cuya nota trata este punto.

17—Se trata del auto en que el Juez abre la causa á prueba. De este auto no puede apelarse inmediatamente porque el art. 105 del Cód. de Proc. requiere que la parte se oponga previamente dentro de tercero día y que después de la audiencia que la ley ordena, el Juez se pronuncie sobre su admisión ó rechazo; es de esta resolución que debe apelarse como lo ordena el art. 106 del mismo.

18—Suspende el término, porque la prueba no puede producirse, mientras se halle pendiente de resolución el incidente. Se suspende para todas las partes, porque siendo uno mismo é igual el término de prueba para todo lo que haya de producirse en el juicio, suspendido para una diligencia determinada, dicho término tiene forzosamente que suspenderse para todos, porque á no ser así se violaría la unidad e igualdad del término que rige para toda ella, desde que mientras estuviese suspendido para una diligencia determinada, hubiese de correr para las otras.

19—Ni el actor puede presentar los que le corresponde, después de interpuesta su demanda—arts. 72 y 73, Cód. de Proc.—ni el demandado presentar los que les correspondan si no los acompaña con el escrito de





PRU

al iniciar la demanda y de los cuales no hizo mención especial—Jur. Civ., tom. 8, pág. 274, Ser. 1ª.

20. Prueba.—No puede ser agregado como tal un expediente arbitral que por voluntad de las partes se mantiene reservado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 470, Ser. 1ª.

21. Prueba.—Después de vencido el término no puede pedirse ampliación de informes aun cuando hayan sido expedidas dentro de él—Jur. Civ., tom. 8, pág. 360, Ser. 1ª.

22. Prueba.—Debe recibirse en el juicio de jactancia, cuando ambas partes aseveran tener propiedad y posesión—Jur. Civ., tom. 3, pág. 333, Ser. 2ª.

23. Prueba.—De ser falso el estado civil del demandante corresponde al escepcionante que opone la falta de personería—Jur. Civ., tom. 3, pág. 344, Ser. 2ª.

24. Prueba.—De la mora del locatario, corresponde al locador que pide la rescisión del contrato—Jur. Civ., tom. 3, pág. 426, Ser. 2ª.

25. Prueba.—De la simulación debe recibirse sin resolver previamente si la esposa que la ha deducido tiene acción para ejercerla—Jur. Civ., tom. 3, pág. 518, Ser. 2ª.

contestación, salvo las excepciones previstas en los artículos citados—Art. 100, inc. 4º, Cód. de Proc.

20—Siempre que no haya conformidad de partes para que la agregación se haga.

21—La ampliación de un informe es una verdadera prueba y como tal no puede pedirse después de vencido el término probatorio, porque las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y *practicadas* dentro de él—art. 118 del Cód. de Proc.—El Juez, sin embargo puede pedir la ampliación para mejor proveer si lo cree necesario.

22—Y la sentencia dictada sin este trámite adolece de nulidad. Véase: verb. Jactancia, núm. 2 y su nota respectiva.

23—El escepcionante en el caso ocurrente no negó el estado civil del actor. Véase: verb. Personería, núm. 2.

24—Arts. 509, 1294, 1556 y 1579 que en este caso guardan relación con los arts. 618, 747, 756 y 1212.

25—La personería en este caso se justifica por su solo objeto. La disposición terminante del art. 1253 del Cód. Civ., que trata de casos aná-

PRU

26. Prueba.—Las diligencias practicadas fuera del término por negligencia de la parte que las pidió, aunque agregadas no pueden tomarse en consideración al dictar sentencia—Jur. Civ., tom. 3, pág. 375, Ser. 2ª.

27. Prueba.—Las diligencias pedidas dentro del término pueden ser reiteradas y cumplidas aun después de vencido—Jur. Civ., tom. 9, pág. 185, Ser. 1ª.

28. Prueba.—De la simulación de una escritura pública corresponde al que la afirma—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

29. Prueba.—La disposición de la antigua ley de enjuicios al del sumario puede ser aplicada por analogía; pues si la mujer puede demandar la reivindicación de los inmuebles propios que sin su consentimiento vende el marido, puede también demandar la nulidad de los actos fraudulentos ejecutados por el marido que tienen el mismo resultado, antes de que ese daño causado se haga irreparable por causas especiales.

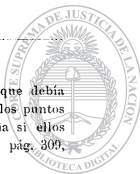
26—Las diligencias de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del término. Es obligación de los interesados urgir para que sean practicadas oportunamente. Esta regla de procedimiento solo sufre un caso de excepción que es cuando por culpa de las autoridades encargadas de recibirlas no se hubiesen practicado en la oportunidad debida, pueden verificarse antes de los alegatos—art. 118, Cód. de Proc.

27—Cuando su no producción dentro del término no sea imputable á la desidia ó negligencia de la parte interesada. Véase: verb. *Diligencias de prueba*, núm. 2; Inst. tom. 1, verb. *Diligencias de prueba*, núms. 882, 883, 884, 886, 888 y 889

28—En virtud del principio de procedimiento de que la prueba incumbe al que afirma un hecho nuevo en juicio. Por otra parte los documentos públicos hacen plena fe en juicio mientras no sean argüidos de falsos, y tienen á su favor la presunción de ser verdad su contenido, presunción que debe ser destruida por quien la ataca—art. 993, Cód. Civ.—Véase: Inst. tom. 1; verb. *Falsedad*, núm. 1186 y nota.

29—El actual Cód. de Procedimientos ha derogado la disposición de esa ley, con razón, pues la fijación de los puntos sobre que debe recaer la prueba es limitativa de la libertad de la defensa. H y existe la más amplia latitud para su producción y el juez no puede oponerse prestando la improcedencia de la prueba ofrecida porque si así lo hace prejuzga y queda inhabilitado para entender en el juicio. La Ley de Enj. Nacional conserva todavía el principio sentado en el sumario.





PRU

ciamiento que ordenaba al Juez fijar los puntos que debía abarcar, obligaba á las partes á producirla sobre los puntos indicados y al Juzgado á declarar en la sentencia si ellos habian quedado justificados -- Jur. Civ., tom. 9, pág. 309, Ser. 1^a.

30. Prueba—Del estado civil de una persona, no basta su manifestación en un instrumento público, si el escribano no da fe de que le consta la verdad de dicha aserción—Jur. Civ., tom. 9, pág. 225, Ser. 1^a.

31. Prueba—De la falsedad de una partida parroquial, corresponde al que la afirma—Jur. Civ., tom. 9, pág. 331, Ser. 1^a.

32. Prueba—De la falsedad de una escritura pública, no basta para declararla la atestación de los testigos de no haber firmado en el momento de su otorgamiento—Jur. Civ., tom. 8, pág. 116, Ser. 1^a.

Prueba—Véase: *Certificado*, núm. 1—*Reconocimiento condicional*, núm. 1—*Cartas misivas*, núm. 1—*Demandante*, número 2—*Diligencias*, núm. 2—*Filiación legítima*, núm. 1—*Obligación*, núm. 1—*Declaraciones*, núms. 3, 5 y 6—*Declaraciones del fallido*, núm. 1—*Excepción de pago*, núm. 3—*Libros de comercio*, núms. 1, 2, 4, 5 y 6—*Sociedad*, núm. 2—*Declaración*, núm. 2—*Liquidación*, núm. 1—*Factor*, núm. 1—*Días feriados*, núm. 1—*Recurso de fuerza*, núms. 3 y 4—*Confesión judicial*, núm. 1—*Contrato de mutuo*, núm. 1—*Auto*, núms. 7 y 11—*Contrato*, núm. 10—*Arraigo*, núm. 3—

80—El art. 1001 del Cód. Civ. establece que las escrituras deben contener, entre otros requisitos allí enumerados, si son mayores de edad, su estado de familia, y que el Escribano debe dar fe de que conoce á los otorgantes.

81—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 80, 86 y 104 del Cód. Civ.

82—El art. 992 del Cód. Civ. establece que los testigos de un instrumento y el oficial público que lo estendió no pueden contradecir, variar ni alterar el contenido de él, si no alegasen que testificaron el acto por dolo ó violencia que se les hizo.

PRU

Incompetencia, núm. 9—*Documento privado*, núm. 2—*Equidad*, núm. 1—*Cuenta rendida*, núm. 2—*Hechos*, núm. 3—*Término extraordinario*, núms. 1 y 2—*Apelable*, núm. 1—*Diligencias de prueba*, núm. 1—*Papo*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 2—*Jactancia*, núm. 2—*Documento*, núms. 1, 3 y 5—*Simulación*, núms. 3, 4 y 5—*Contratos con terceros*, núm. 1—*Separación de bienes*, núm. 10—*Informes facultativos*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 18 y 22—*Peritos titulados*, núm. 4—*Posiciones*, núms. 12 y 14—*Plus petitio*, núm. 1—*Cuenta corriente*, núm. 1—*Prescripción*, núms. 12 y 25—*Comprador*, núm. 10—*Propiedad pública*, núm. 1—*Certificado*, núm. 2—*Demanda*, núm. 6—*Escrito*, núm. 2—*Peritos*, núm. 7—*Falsedad*, núm. 5—*Daños y perjuicios*, núm. 22—*Filiación natural*, núm. 6—*Espera*, núm. 1—*Tercerista*, núm. 1.

1a. Prueba escrita—Es necesaria para justificar las modificaciones ó interpretaciones á un contrato hecho en escritura pública—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

Prueba escrita—Véase: *Simulación*, núms. 1, 7 y 11—*Contrato*, núm. 10—*Autenticidad*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 3.

Prueba especial—Véase: *Prueba testimonial*, núm. 7.

1b. Prueba plena—Se requiere para probar la complicidad, si las heridas son todas de arma cortante—Jur. Crim., tom. 5, pág. 578, Ser. 1ª.

Prueba plena—Véase: *Posesión*, núm. 4—*Falsedad*, número 1—*Contrato*, núm. 4—*Posiciones*, núm. 9—*Informes periciales*, núm. 1—*Filiación natural*, núm. 5—*Comerciantes*, núms. 2 y 3.

1a—Véase: Inst. tom. 1º, verb. *Contrato escrito*, núm. 572 y nota.

1b—En este caso es muy fácil equivocarse una herida con otra. Lo mismo sucedería en cualquiera clase siempre que las heridas sean todas causadas con una sola clase de arma, sea de fuego ó blanca.



PRU

1. Prueba testimonial—No es bastante para justificar el fallecimiento de un testigo de un documento privado—
—Jur. Com., tom. 5, pág. 253, Ser. 1ª.

2. Prueba testimonial—Sobre la existencia de una sociedad sin contrato público ni privado, debe recaer sobre la existencia de hechos que regularmente no hay costumbre de practicar sin que una sociedad exista, pero no sobre actos propios del que pretende probar su existencia—Jur. Com., tom. 5, pág. 485, Ser. 1ª.

3. Prueba testimonial—Es procedente para justificar el contrato en la parte que pueda afectar á los menores, siempre que exista la confesión y reconocimiento de los herederos mayores manifestada en juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 371, Ser. 1ª.

1—La prueba de testigos no es suficiente para comprobar el fallecimiento porque los arts. 80 y 104 del Cód. Civ. designan los medios como deben probarse. Esta prueba solo es procedente como supletoria.

2—Art. 401, Cód. de Com.

3—Lo contrario importaría llevar demasiado lejos el rigorismo de las formas. La resolución que anotamos no se halla en manera alguna en pugna con los principios legales que rigen la prueba de los contratos. Se trata de la venta de un inmueble hecha por el causante verbalmente: los herederos mayores confiesan que el contrato se celebró: esta confesión obliga asimismo á los herederos menores por las siguientes razones: Si bien es cierto que los contratos que versan sobre trasmisión de bienes raíces deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad y que los contratos que tengan por objeto una suma mayor de 200 pesos deben hacerse por escrito, también es cierto que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos en escritura privada, firmada por las partes, quedan concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública—art. 1185, Cód. Civ.—Así también los contratos que debiendo ser hechos en instrumento público ó privado fuesen hechos verbalmente caen bajo la sanción del artículo citado—1188 *ibid*—los que se pueden probar por todos los medios de prueba de. signados por el art. 1190, siempre que haya principio de prueba por escrito, art. 1191. Tal es la cuestión: el contrato debió hacerse por instrumento privado para quedar concluido á los efectos del art. 1185 y se hizo verbalmente: en este caso solo hay que averiguar si hay principio



PRU

4. Prueba testimonial—Es procedente siempre que existe un principio de prueba por escrito aunque sea solo en el litigio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 371, Ser. 1ª.

5. Prueba testimonial—Es improcedente para justificar contratos por mayor valor de doscientos pesos, si no existe un principio de prueba por escrito.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 461, Ser. 1ª.

6. Prueba testimonial—Debe solicitarse por lo menos cuatro días antes de vencerse el término—Jur. Civ., tom. 3, pág. 511, Ser. 2ª.

de prueba por escrito, para saber si es admisible la prueba testimonial. La confesión de los herederos mayores es un principio de prueba escrito «Se considerará principio de prueba por escrito, «dice el art. 1192 del Cód. Civ.,» cualquier documento público ó privado que emane del adversario, de su enusante ó *de parte interesada en el asunto*, ó que tendría interés si viviera y que haga verosmil el hecho litigioso.» El art. 180 del Cód. de Proc. repite la misma disposición declarándola en lo relativo á «cualquier documento» con el agregado «ó manifestación constatada en juicio». El reconocimiento hecho en juicio por los herederos mayores es un principio de prueba que puede ser complementada por la prueba testimonial.

4—Así lo establece el art. 180 del Cód. de Proc. cuando dice: «ó manifestación constatada en juicio». Véase: Inst. tom. 1, verb. Prueba, número. 2216.

5—En el caso *sub judice* se estableció por mayoría de votos el principio sentado en el sumario. La prueba testimonial fué examinada sin embargo y de su análisis resultó que aun en el caso de que la prueba testimonial fuera admisible, el contrato no se había probado. La minoría opinó que la prueba testimonial procede aun en los contratos cuyo valor excede de 200 pesos siempre que «una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase á cumplir el contrato». —Art. 1191, Cód. Civ., última parte.—Tanto la mayoría como la minoría opinaron que la acción debía rechazarse por ser deficiente la prueba testimonial producida. Véase: Inst. tom. 1, verb. Prueba, núm. 2216 y nota correspondiente.

6—El art. 184 del Cód. de Proc. establece que la lista de testigos debe ponerse de manifiesto en la Secretaría tres días antes del señalado para su examen: para que esta disposición tenga exacto cumplimiento es necesario que on el término de prueba haya todavía tres días para la deposición de la lista y uno para el examen de los testigos presentados. De

PRU - PUP

7. Prueba testimonial—Es improcedente siempre que el Código exija pruebas especiales—Jur. Com., tom. 6, pág. 257, Ser. 1ª.

8. Prueba testimonial—De la negativa á recibir mercancías que por no ser iguales á las convenidas, solo procede cuando acompañada la muestra, los peritos declaran la exactitud del hecho—Jur. Com., tom. 6, pág. 257, Ser. 1ª.

9. Prueba testimonial—Permitida para justificar la existencia de una sociedad comercial, solo es procedente cuando existe un principio de prueba escrita—Jur. Com., tom. 6, pág. 568, Ser. 1ª.

Prueba testimonial—Véase: *Contrato*, núms. 10, 14 y 16—*Compra*, núm. 1—*Boleto de remate*, núm. 1—*Simulación*, núms. 1 y 7—*Autenticidad*, núm. 1—*Comerciantes*, número 1—*Informe*, núm. 2—*Fallecimiento*, núm. 1.

Pruebas—Véase: *Filiación natural*, núm. 1.

Pruebas legales—Véase: *Declaraciones*, núm. 2.

Publicación—Véase: *Autor*, núm. 1.

Publicación anónima—Véase: *Daños y perjuicios*, número 12.

Publicidad—Véase: *Acusables*, núm. 1.

Pudor—Véase: *Violación*, núm. 1.

1. Puntos litigiosos—Solo pueden ser resueltos los que se fijan en la demanda—Jur. Civ., tom. 1, pág. 124, Ser. 2ª.

Pupilos—Véase: *Tutor*, núm. 3.

lo contrario la prueba vendría á producirse fuera del término probatorio, invalidando consiguientemente la que se trata de producir.—Art. 118, Cód. de Proc.

7—Art. 975, Cód. Civ

8—Art. 521, Cód. de Com.

9—Tampoco se requiere principio de prueba escrita cuando se trata de una sociedad cuyo capital es de menor cuantía, basta la prueba testimonial. Véase. Inst., tom. 1, verb. *Sociedad*, núm. 2488; y *Prueba testimonial*, núms. 2249 y 2254.

1—La sentencia debe contener, dice el art. 216 del Cód. de Proc., deci



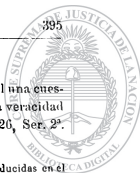
PUR

1. Puro derecho—No puede resolverse como tal una cuestión en que las partes no están conformes sobre la veracidad de los hechos alegados—Jur. Civ., tom. 1, pág. 126, Ser. 2ª.

Puro derecho—Véase: *Apelación*, núm. 1.

sión expresa, positiva y precisa, con arreglo á las acciones deducidas en el juicio.

1—Una cuestión en estas condiciones tiene que clasificarse como mixta, de hecho y de derecho abriéndose á prueba—Art. 104, Cód. de Proc.





Querella—Véase: *Violación*, núm. 1

1. Quiebra—Declarada ésta, atrae al Juez del concurso todos los expedientes en que intervenga el fallido ya sea como demandante ó demandado — Jur. Com., tom. 6, pág. 492, Ser. 1^a.

2. Quiebra—Esta es solo punible criminalmente, cuando los antecedentes que hayan determinado su calificación de fraudulenta ó culpable ante los Tribunales de Comercio, se encuentren incluidos entre las acciones que el Cód. Penal califica y castiga como delito—Jur. Crim., tom. 6, pág. 156, Ser. 1^a.

1—Véase: verb. *Fallido*, núm. 4.

2—El art. 1593 del Cód. de Com. establece que hecha la calificación de la quiebra se remitan al Juez del Crimen los antecedentes en la calificación juntamente con la persona del fallido, y el art. 1595 declara que los efectos civiles de la calificación son inflexibles, sea cual fuere el resultado del juicio criminal. Debe tenerse igualmente presente que es doctrina admitida por nuestros Tribunales que el auto calificativo de la quiebra es inapelable, y si no hay recurso contra tal auto, sería violar abiertamente los principios más elementales del derecho si se estableciera que la calificación civil de la quiebra como fraudulenta trajera aparejada la penalidad fijada por el Código respectivo. El Cód. Civil establece que la sentencia civil no pasa en autoridad de cosa juzgada en lo criminal, pues son distintos los objetos que se proponen en una y otra jurisdicción. El mismo Cód. Penal anterior trae su contingente en el sentido de solucionar la cuestión en la forma del sumario, pues dice en su artículo 332, que el expediente de calificación es bastante sumario en las causas contra quebrados.

QUI-QUO

3. Quiebra—A pesar de que en este estado el Síndico representa á los fallidos en sus acciones individuales, cesando ese estado, la sociedad no puede ejercer esas acciones sin poder especial del socio interesado—Jur. Com., tom. 6, pág. 101, Ser. 1ª.

4. Quiebra—El auto que la levanta, como definitivo, no puede ser revocado por contrario imperio—Jur. Com., tom. 6, pág. 103, Ser. 1ª.

5. Quiebra—Las actuaciones formadas para su declaración dejada sin efecto, no pueden servir para hacer una nueva—Jur. Com., tom. 6, pág. 103, Ser. 1ª.

6. Quiebra—La cesación de pagos de uno de los socios no basta para constituir en estado de quiebra á la sociedad—Jur. Com., tom. 6, pág. 414, Ser. 1ª.

7. Quiebra—No basta para decretarla el hecho de haberse ejercido el comercio accidentalmente—Jur. Com., tom. 6, pág. 424, Ser. 1ª.

Quiebra—Véase: *Calificación*, núm. 2 — *Juez*, núm. 4 — *Juez del Crimen*, núm. 2 — *Síndico*, núm. 1 — *Sociedad*, núm. 1 — *Privilegios generales*, núm. 1 — *Comerciante*, núm. 5 — *Costas del concurso*, núm. 1 — *Acreedor*, núm. 5 — *Fallido*, núm. 4 — *Inscripción*, núm. 3 — *Obligación extinguida*, núm. 1 — *Fallido*, núm. 2.

Quota-litis—Véase: *Mandato*, núm. 5 — *Pacto de quota-litis*, núm. 2.

3—La sociedad es una personalidad distinta de la de cada uno de sus miembros y ella no tiene su representación legal.

4—Dictada sentencia concluye la jurisdicción del Juez de acuerdo con el art. 222 del Cód. de Proc.

5—Deben considerarse como si jamás se hubiesen producido, iniciando nuevas gestiones.

6—Art. 1530, Cód. de Com.

7—Son operaciones aisladas que según el art. 6 del Cód. de Com. no son bastantes para caracterizar como comerciante á su autor, condición en la cual no puede una persona ser declarada en quiebra—art. 1512, *ibid.*



1a. Rapto—Existe aun cuando se verifique con consentimiento de la mujer robada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 155, Ser. 1ª.

1b. Ratificación—Para que surta los efectos legales equivalentes al mandato, debe contener las mismas especificaciones requeridas para éste.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 151, Ser. 1ª.

Ratificación—Véase: *Instrumento público*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 5.

Rebelde—Véase: *Juicio*, núm. 1 — *Providencias*, núm. 1.

1c. Rebeldía—El abandono del juicio no basta para seguir el procedimiento en rebeldía, siempre que se conozca el domicilio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 389, Ser. 1ª.

1a—Art. 261, Cód. Penal.

1b—La ratificación se equipara al mandato, y para que surta sus efectos legales es necesario que se llenen con ella todos los requisitos exigidos para éste.—Art. 1936, Cód. Civil.

1c—El art. 433 dice, que si el demandado abandona el juicio después de haber comparecido será declarado en rebeldía pidiéndolo la otra parte. En el caso presente la parte había constituido domicilio en condiciones legales, el que se considera subsistente hasta que se constituya otro—Art. 12 del Cód. de Proc.—El que ha constituido su domicilio en autos está siempre presente y su no comparencia no puede autorizar un procedimiento en rebeldía. El sumario debió decir con más propiedad, *siempre que tuviese en autos domicilio constituido*, pues un litigante puede tener un domicilio conocido, haber abandonado el juicio, y sin embargo puede seguirse el juicio en rebeldía si hubiese comparecido sin constituir domicilio legal a los efectos del juicio.

REB—REC

Rebeldía—Véase: *Contestación*, núm. 1—*Posiciones*, números 3, 6, 7, 8, 9 y 10—*Alimentos*, núm. 1—*Término*, núm. 4—*Incompetencia*, núm. 2—*Sentencia*, núm. 1—*Ausente*, número 2—*Demandado*, núm. 4.

Recibo—Véase: *Estampilla*, núm. 1—*Principio de prueba por escrito*, núm. 3.

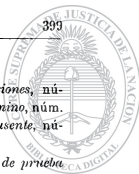
1. **Recibos**—Enmendados, presentados como documentos de descargo, no hacen fe en juicio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 285, Ser. 1ª.

1a. **Reclamos de bienes**—En juicio ordinario, durante su secuela no pueden ingresar todos los que se consideren con derecho á ellos, deben entablar por separado las acciones que crean competir á sus derechos—Jur. Civ., tom. 1, pág. 114, Ser. 2ª.

1b. **Reconocimiento**—De un crédito hecho por la viuda, no basta para su comprobación, cuando existen menores interesados—Jur. Civ., tom. 1, pág. 459, Ser. 2ª.

1a—Se trata de una acción entablada por algunos herederos contra los pretendientes de bienes que se dice pertenecen á una sucesión liquidada hacía mucho tiempo: entablada la acción y trabado el cuasi-contrato de litiscontestación por respuesta, se presentaron otros herederos pretendiendo tomar parte en el juicio, á lo que no se les hizo lugar porque el pleito ya se habría trabado entre las personas que lo promovieron y el demandado; en esta situación el ingreso al juicio de nuevas personas en el rol de actores, traería la grave dificultad de privar á los demandados de cualquiera excepción personal á dichas personas, sin hacer retroceder el pleito.

1b—Según de qué clase sean los créditos que se reclamen. Si ellos son créditos anteriores al fallecimiento del causante, el sumario no es exacto, pues el reconocimiento de los herederos mayores sirven de principio de prueba contra los menores y deben en este caso ser declarados de legítimo abono, aun para los menores, como lo ha resuelto ya la Exma. Cámara de lo Civil, en el tom. 8, pág. 461, Ser. 1ª.—Véase: verb. *Prueba testimonial*, núm. 5 y nota respectiva—Mas tratándose de créditos posteriores al fallecimiento puede considerarse exacto en parte el sumario: puede tomarse el pago hecho como una gestión oficiosa de negocios ajenos, que tendría la importancia que la prueba producida le



REC

Reconocimiento—Véase: *Término*, núm. 7—*Firma*, número 2.

1a. Reconocimiento condicional—Al contestar la demanda, de los hechos alegados por el actor, no inhibe al demandado justificar en el término de prueba la falsedad de alguno de ellos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 27, Ser. 1ª.

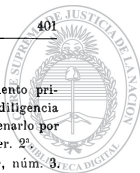
1b. Reconocimiento de firma—La citación al deudor cuyo domicilio se ignore, debe hacerse por edictos, no siéndole aplicable lo dispuesto respecto á la citación cuando se conoce el domicilio—Jur. Com., tom. 5, pág. 488, Ser. 1ª.

diese—arts. 2288 y 2296—porque al seguir la nota del último artículo ya no se trataría de probar una convención ó una obligación, sino el hecho de donde la obligación resulta. Bajo este punto de vista hay créditos que deben considerarse como de legítimo abono, como puede ser el pago de contribución directa, empedrado, alumbrado y en fin todos aquellos pagos que son útiles é inevitables—arts. 2290, 2297, 2302 y 2309, Cód. Civ.—Por otra parte, el art. 2306 dice: Cuando alguno sin ser gestor de negocios, ni mandatario hiciere gastos en utilidad de otra persona, puede demandarlos á aquellos en cuya utilidad se convirtieron: y el artículo siguiente dice, que entran en ese rango los gastos funerarios—Véase art. 3880, inc. 1º y su nota—De aquí se desprende que el principio sentado en términos absolutos en el sumario no es exacto sino en determinados casos.

1a—En este caso no hay un reconocimiento claro y el demandado puede probar la inexactitud de las afirmaciones de la demanda: los jueces no pueden prescindir de declarar la inexactitud ú omisión cuando ellos resultasen como una *verdad probada en autos*; pues lo que el Juez debe en primer lugar consagrar en sus fallos es ésta. Las respuestas evasivas ó el silencio pueden reputarse y estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos á que se refieren, dice el art. 100, inc. 1º, Cód. de Proc. Es decir que es facultativo de los Jueces, mas cuando la verdad de los hechos resultara demostrada por confesión ú otra prueba tan respetable, favoreciendo al demandado, el Juez no puede cerrar los ojos aun cuando aquél hubiese guardado silencio ó usado de evasivas en su respuesta. Debe tenerse sin embargo presente la disposición del art. 108 del Cód. de Proc.

1b—El art. 142 del Cód. de Proc. legisla para el caso en que el domicilio sea conocido: cuando no es conocido rige la disposición del art. 80, aplicable al juicio ejecutivo según lo prescribe el art. 468





REC

2. Reconocimiento de firma—De un instrumento privado, al pedir su protocolización, no importa una diligencia de prueba y en consecuencia el Juzgado debe ordenarlo por medio de traslado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 270, Ser. 2ª.

Reconocimiento de deuda—Véase: *Regulación*, núm. 3.

Reconocimiento expreso—Véase: *Poseción de estado*, número 1.

1a. Reconvención—Debe contener la designación exacta de los objetos que la fundan, dimensiones, etc., aun cuando su precio deba ser designado por peritos—Jur. Civ., tom. 8, pág. 146, Ser. 1ª.

1b. Recurso—Interpuesto fuera de término, el superior no puede conocer de él, aun cuando el inferior hubiese concedido la apelación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 17, Ser. 1ª.

2. Recurso—Cuando su interposición fuese irregular, el Juzgado puede ordenar la devolución del escrito, pero debe

2—Cuando se pide la protocolización de un instrumento privado se entabla una verdadera demanda para proceder á la protocolización de conformidad de partes si estuviesen conformes, ó para sustanciar el juicio y decidirlo por sentencia definitiva, si hubiese oposición: demanda que debe sustanciarse por medio de un traslado. No es como se pretende, una diligencia preparatoria del juicio ordinario á que puedan aplicarse las disposiciones de los arts. 67 y 466 del Cód. de Proc.

1a—Art. 71, 3º del Cód. de Proc., que ordena se espresé en el escrito de demanda, la cosa demandada designándola con toda exactitud. Esta designación es necesaria para que la prueba verse sobre los hechos determinados y detallados por el actor y para habilitar de este modo á los peritos cuando haya que hacer por su intermedio la estimación correspondiente. Debe tenerse presente que la reconvención es una verdadera demanda, y como tal está sujeta á los requisitos establecidos por la ley para ésta.

1b—Véase: Inst. tom. 1, verb. Sentencias, núm. 2443; Superior, núms. 2526 y 2527. No puede entender en él porque ya el auto está ejecutoriado.

2—Por ejemplo, cuando se interpone el recurso de apelación sin limitarse á su mera interposición, se manda devolver el escrito previa anotación que el Secretario pondrá en autos—art. 227, Cód. de Proc.—La irregularidad no puede perjudicar el derecho de la parte.

REC

proveer sobre el recurso interpuesto — Jur. Civ., tom. 7, pág. 233, Ser. 1ª.

3. Recurso — El Juzgado debe conocer del interpuesto en el juicio ejecutivo, aun cuando no se hayan opuesto excepciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 233, Ser. 1ª.

Reconvención—Véase: *Hechos*, núm. 4—*Término*, núm. 12.

Recurso—Véase: *Nulidad*, núms. 9, 10 y 35—*Término*, núm. 5—*Embargo preventivo*, núm. 8—*Fallo*, núm. 1—*Apelación*, núm. 4.

1. Recurso de fuerza — Solo es procedente después de agotados los recursos ordinarios pidiendo ante el eclesiástico la revocación de sus procedimientos por contrario imperio, apelando en caso contrario y protestando el auxilio de la fuerza—Jur. Civ., tom. 6, pág. 314, Ser. 1ª.

2. Recurso de fuerza—En conocer y proceder, fundado en hechos de la privativa competencia eclesiástica debe ser rechazado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 350, Ser. 1ª.

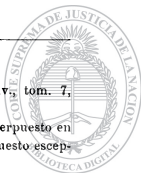
3. Recurso de fuerza—En el modo de conocer, no puede

3—En el caso presente se dijo de nulidad y apelación. El art. 501 no obsta á que se conceda el recurso pues él supone un juicio válido. Validez que se ataca y que debe sustanciarse según la resolución anotada. Parece que no es correcta la doctrina aquí sentada, pues solo procede el recurso de nulidad en los casos en que sean susceptibles el de apelación.

1—Este recurso es necesario prepararlo en esta forma, de lo contrario debe rechazarse *in limine*, pues siendo un recurso extremo, solo puede prosperar después de agotados todos los recursos ordinarios—Véase, Castro, *Práctica Forense*, núms. 343 y 345.

2—Este sumario no está de acuerdo con el fallo de que ha sido extractado. El caso presente es exactamente igual al núm. 1. Para que sea procedente el recurso de fuerza y pueda prosperar es necesario que se le prepare en forma, es decir que se hayan agotado los recursos ordinarios y que la sentencia sea definitiva ó interlocutoria con fuerza de tal—ley 37, tít. 5º, Lib. 2, R. C.—Las providencias que no reúnan estas condiciones no son susceptible de los recursos de fuerza. Es esto lo que debe decir el sumario.

3—La ley de 14 de Setiembre de 1863 solo ha sido dada para regir los procedimientos de la Sup. Corte de Justicia Nacional y de los Tri-



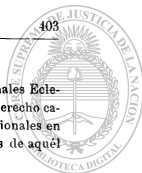
REC

fundarlo la reserva de la prueba ante los Tribunales Eclesiásticos, pues sus procedimientos se rigen por el derecho canónico, y solo por la Ley de Procedimientos Nacionales en cuanto sea aplicable sin contrariar las disposiciones de aquél —Jur. Civ., tom. 2, pág. 308, Ser. 2ª.

4. Recurso de fuerza—En conocer y proceder, no puede fundarlo el depósito de la mujer en la casa de ejercicios, ordenado por el Eclesiástico, durante el juicio de divorcio,

bunales Federales, entre los cuales no puede contarse en manera alguna la Curia Eclesiástica. Si algunas veces se aplica el procedimiento Federal es tan solo como medio supletorio, cuando el Derecho Canónico no contiene disposición al respecto. En cuanto á la recepción de la prueba testimonial, el hecho de recibirse secretamente las declaraciones, no puede fundar el recurso de fuerza en el modo de conocer, porque esta es la forma prescrita por los Cánones para su recepción. La prueba en el juicio de divorcio, está perfectamente garantida, porque si bien es secreta, sin embargo los testigos pueden ser tachados en sus personas antes de tomárseles declaración, y una vez prestada pueden ser tachadas en sus dichos.

4—La autoridad Eclesiástica es el Juez exclusivo para conocer de las causas de divorcio entre los casados ante la iglesia católica, ó con autorización de ella, en los matrimonios mistos—Art. 201, Cód. Civ.—El depósito de la mujer ya sea á su instancia ó á la del marido, es un incidente del que debe entender el Juez de lo principal, según principio recibido de procedimiento. Febrero Reformado en su tom. 1, pág. 69, Edición de 1852, dice: «La autoridad que conoce en los negocios de divorcio, es la Eclesiástica, la cual implora el auxilio de la secular para aquellas diligencias en que es preciso. Tal es el depósito que practica en este caso el Juez Eclesiástico.» Véase también Escriche, verb. Divorcio; Tapia, edición de Madrid de 1846, tom. 9, pág. 140, núm. 7. La S. C. P. declara, que respecto al recurso en conocer, si bien es procedente siempre por cuanto se parte del principio que el Eclesiástico usurpa jurisdicción—Esteves Saguf, Tratado de Proc., núm. 1347, regla 10—en el presente caso no puede sostenerse que medie tal usurpación, pues el auto tiene por objeto proveer á la seguridad de la esposa durante el juicio de divorcio—F. S. C. P., tom. 10, pág. 429, Ser. 1ª.—El art. 205 del Cód. Civ. dice que el Juez de este fuero puede decretar el depósito de la mujer en casa honesta durante el juicio de divorcio seguido entre personas casadas sin autorización de la iglesia. Si el Juez de lo Civil tiene esa facultad en este caso, no puede negársele al Eclesiástico la misma facultad para los juicios de su jurisdicción, tan necesaria é



REC

por cuanto no usurpa jurisdicción—Jur. Civ., tom. 2, pág. 308, Ser. 2ª.

5. Recurso de fuerza—La alteración de los procedimientos ante el eclesiástico, puede dar lugar al de conocer y proceder, pero no simplemente al de conocer—Jur. Civ., tom. 7, pág. 105, Ser. 1ª.

6. Recurso de fuerza—No pueden fundarlo las correcciones disciplinarias aplicadas por el discreto provisor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 105, Ser. 1ª.

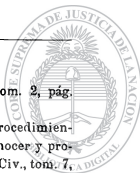
7. Recurso de fuerza—En el modo de conocer y proceder, para ser admisible se requiere que previamente se hayan agotado todos los recursos ante el Eclesiástico y protestado para en caso necesario el auxilio de la fuerza—Jur. Civ., tom. 7, pág. 450, Ser. 1ª.

8. Recurso de fuerza—No puede fundarlo la admisión del recurso de rescisión de una sentencia por el Discreto Provisor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 51, Ser. 1ª.

indispensable de la que solo él puede juzgar como Juez de la causa. Esta facultad jamás le ha sido desconocida al Eclesiástico, ni los Tribunales Civiles se lo han disputado.

7—Este género de recurso debe ser preparado pidiendo revocatoria por contrario imperio, de los procedimientos del Eclesiástico, apelando en subsidio para ante el Superior gerárquico y protestando del auxilio de la fuerza, pues solo tiene lugar cuando se han agotado los recursos ordinarios, como lo establece el sumario y lo sostienen los prácticos Castro núm. 343 y Esteves Sagui, núm. 1347. No preparándose en forma el recurso debe de echarse *in limine*—Castro núm. 348—Además la ley 37, tít. 5, Lib. 2º, R. C., establece expresamente que los autos interlocutorios solo son susceptible del recurso de fuerza cuando tienen carácter de definitivos.

8—El recurso de fuerza en el modo de proceder, que es en cierto modo un recurso extraordinario, no puede convertirse de tal manera en común que haga de la Cámara una simple instancia de los juicios eclesiásticos: es preciso siempre que pueda presumirse fuerza, abuso, injusticia notoria, subversión del procedimiento. La admisión del recurso de rescisión de una sentencia es perfectamente legal y procedente, pues está autorizado por los arts. 191 y siguientes de la Ley sobre Proc. de los Trib. Nacionales, aplicables por analogía en este caso.



REC

1a. Recurso de hecho—El Juzgado se desprende de su jurisdicción desde la fecha en que ordena la remisión de los autos al Superior—Jur. Civ., tom. 2, pág. 253, Ser. 2º.

Recurso de hecho—Véase: *Resoluciones municipales*, número 1.

1b. Recurso directo—Ante la Cámara, de resoluciones municipales, solo procede cuando se haya denegado la apelación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 103, Ser. 2ª.

Recurso directo—Véase: *Resoluciones municipales*, número 1.

1c. Recurso de nulidad—Solo cuando se ha interpuesto, puede la Cámara conocer de la forma en que se han pronunciado los Jueces—Jur. Civ., tom. 8, pág. 138, Ser. 1ª.

Recursos—Véase: *Sentencias*, núm. 2—*Ley Orgánica Municipal*, núm. 1—*Resoluciones municipales*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 20.

Recursos ordinarios—Véase: *Recurso de fuerza*, núm. 1.

1. Recusación—Del Juez, en el incidente de tercería, no lo inhibe de continuar entendiendo en el principal—Jur. Civ., tom. 2, pág. 509, Ser. 2ª.

1a.—Las apelaciones de hecho no interrumpen el procedimiento.—Reales Cédulas de 11 de Enero de 1770 y de 17 del mismo de 1904, concordante la primera con la Ley 5, tít. 2, lib. 4, N. R.—Véase: Inst. tom. 1, verb. Jurisdicción, núm. 1589.

1b.—La Cámara ha declarado que el procedimiento aplicable es el ordinario á falta de un procedimiento especial. La jurisdicción conferida á la Cámara en asuntos *contencioso-administrativos*, se ejerce conociendo por vía de apelación de las resoluciones de la Municipalidad á que se refiere el art. 52 de su Ley Org. de 1882. Como en el juicio ordinario se considera procedente el recurso solo cuando el de apelación hubiese sido denegado, así también debe resolverse en el presente caso.

1c.—El art. 239 del Cód. de Proc. establece la forma en que debe interponerse este recurso: es necesario llenar lo que manda la ley para que el recurso pueda ser tomado en consideración, de lo contrario sería sin objeto esa disposición, pues aun sin cumplirla el recurrente, el Tribunal entraría á conocer de él. Véase: Inst., tom. 1º, verb. Nulidad, núms. 1829 y 1851.

REC



2. Recusación—Este derecho es inherente al litigante, su representante no puede hacer uso de él, si aquél la hubiese de hecho renunciado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 468, Ser. 2ª.

3. Recusación—Este derecho no existe en los asuntos de superintendencia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 279, Ser. 2ª.

4. Recusación—Sin causa, el Juez recusado es el único á quien compete resolver sobre la personería, oportunidad y forma de la recusación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 446, Ser. 2ª.

5. Recusación—De Jueces delegados, no puede hacerse ante ellos, debe deducirse ante el originario que ordena las diligencias—Jur. Civ., tom. 1º, pág. 616, Ser. 2ª.

6. Recusación—Del Juez, tiene este derecho toda persona que toma representación propia en el juicio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 101, Ser. 1ª.

7. Recusación—La intervención personal por revocación del poder no concede de nuevo ese derecho—Jur. Civ., tom. 8, pág. 47, Ser. 1ª.

2—El art. 366 del Cód. de Proc. faculta solamente á las partes interesadas para recusar sin causa. El representante no es parte en el juicio sino como apoderado de su principal; si este renunció de hecho el derecho de recusar, no puede el apoderado hacer renacer ese derecho basado en la circunstancia de su reciente intervención.

3—Porque no se trata en este caso de asunto contencioso entre partes, sino de asuntos en que debe entender el Tribunal usando de facultades administrativas y de superintendencia.

4—Esta es evidentemente la mente de la ley. Si bien por efecto de la recusación el conocimiento del asunto pasa al Juez á quien corresponde en el orden del turno, el decreto en que se admite la recusación, como cualquiera otra providencia judicial, no puede producir efecto alguno legal mientras no quede ejecutoriada, pues la parte contraria puede deducir los recursos que la ley le acuerda contra el auto en que se admite la recusación.

5—Los jueces delegados en estos casos son meros ejecutores de las órdenes emanadas del delegante, y como tales su rol se reduce á cumplir simplemente la misión que se les encomienda.

6—Art. 366, Cód. de Proc.

7—No es procedente porque el apoderado que representa las acciones y derechos de su principal al no hacer uso de ese derecho acordado por

REC

8. Recusación—Sin causa, el tutor puede ejercer ese derecho al iniciarse el juicio sobre remoción de la tutela—Jur. Civ., tom. 8, pág. 142, Ser. 1ª.

9. Recusación—Las partes pueden hacer uso de ese derecho siempre que se entable nueva demanda en forma, aun cuando sea en expediente ya tramitado—Jur. Civ., tom. 8, pág. 513, Ser. 1ª.

10. Recusación—Por prejuizamiento, no es causal bastante para fundarla el hecho de fallar un pleito idéntico contra el mismo recusante—Jur. Civ., tom. 9, pág. 59, Ser. 1ª.

la ley renuncia implícitamente a él: admitir la recusación sería desvirtuar el espíritu del art. 366 del Cód. de Proc. que solo la autoriza sin causa al principio del juicio, ó mejor dicho cuando las partes saben quien es el Juez que va á conocer. Véase: núm. 2 y nota respectiva.

8—Es una consecuencia del art. 366 del Cód. de Proc.

9—La ley de Proc. autoriza á las partes á recusar con ó sin causa al Juez que debe entender en el juicio: tratándose de la recusación sin causa el actor puede hacerlo al entablar la demanda y el demandado al contestarla ó antes. Esta es la letra del artículo citado: sin embargo el espíritu de la ley va mas allá, pues esta disposición no va hasta prohibir el uso de esa facultad cuando después de trabada la litiscontestación, se les hace saber á las partes que un nuevo juez va á conocer de la causa.—Siendo el objeto de la recusación sin causa, separar del conocimiento del pleito al Juez á quien la parte considera sospechoso, es indudable que milita la misma causa cuando se inicia una acción y cuando iniciada una demanda un nuevo Juez viene á conocer. De aquí se sigue que debe aplicarse la misma disposición en ambos casos, en virtud al principio de que *ubi eodem est ratio ibi eadem esse debet juris dispositio*. Por otra parte, debe tenerse presente que el objeto que se propone la ley al autorizar la recusación con ó sin causa es el mismo: y como el art. 369 establece para la recusación con causa, que ella debe deducirse al presentar el primer escrito, es lógico deducir, aplicando por analogía esa disposición, que es procedente recusar sin causa en el primer escrito que se presente, aunque no sea una demanda en forma ó una contestación.

10—El art. 374 del Cód. de Proc. dice, que si no se expresasen claramente algunas de las causales contenidas en el art. 368, será desechada la recusación sin darle curso: el art. 368 da como una de las causales de recusación, haber el Juez emitido opinión ó dictamen acerca del pleito, es decir del caso que está para resolverse por el Juez: un caso anterior no es el caso *sub-judice*. No puede considerarse una sentencia dictada



REC—REG

11. Recusación—Sin causa, las partes no pueden hacer uso de ese derecho al sustanciarse la oposición á la cuenta particionaria, aun cuando deba serlo como demanda nueva—Jur. Civ., tom. 3, pág. 524, Ser. 2ª.

Recusación—Véase: *Incompetencia*, núm. 6—*Miembros*, núm. 1—*Actos jurisdiccionales*, núm. 1—*Escrito*, núm. 1—*Procedimientos*, núm. 2—*Nulidad*, núm. 16—*Excusación*, número 1—*Conjueces*, núm. 2—*Cámara Civil*, núm. 3—*Prejuzgamiento*, núm. 5.

Recusado—Véase: *Juez competente*, núm. 1—*Juez*, núm. 1

Recusar—Véase: *Abogados y procuradores*, núm. 1.

Redención—Véase: *Capellanía*, núm. 1—*Censo*, núm. 1.

Reformado—Véase: *Resolución*, núm. 2.

Regente—Véase: *Poseción*, núm. 1.

1. Registro—De propiedad, de hipotecas, embargos é inhibiciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 41, Ser. 1ª.

Registro—Véase: *Escribano*, núm. 3.

por un Juez en el ejercicio de sus funciones como una opinión ó dictamen sin confundir dos actos esencialmente diferentes. Jamás se ha considerado racional ni legal que quede un Juez impedido por haber entendido en otro juicio, aun en el caso que hubiese sido parte el mismo litigante. Véase: Inst., tom. 1, verb. Recusación, núm. 2308. La S. C. P. ha dicho: «Los principios sentados por la S. C. en las causas falladas por ella y las opiniones de sus miembros, consignadas en dichas causas no son causal legal de recusación contra los mismos. Tom. 5, pág. 15, Ser. 2ª. Igual doctrina ha sentado la S. C. N. tom. 5, pág. 86, Ser. 1ª.

11—La oposición á la cuenta particionaria es un incidente del juicio sucesorio, pues en ambos casos son las mismas partes, los herederos; y tienen el mismo objeto, la partición y división de la herencia. El art. 676 del Cód. de Proc. al ordenar que la oposición á la cuenta particionaria se sustancie *considerándola como una demanda*, es tan solo á los efectos de determinar el procedimiento, mas no para ejercer el derecho, hasta cierto punto odioso, de recusación sin causa. Es bien diferente, *considerar como una demanda* la oposición y el ser en realidad un juicio nuevo. Véase nota al núm. 9, donde se explica la interpretación que debe darse al Cód. de Proc. en esta materia



REG

1a. Registro de la capital—El hecho de estar domiciliado en otra Provincia no inhibe de inscribirse en él como comerciante—Jur. Com., tom. 6, pág. 469, Ser. 1ª.

Registro de hipotecas—Véase: *Certificado*, núm. 1.

Registro de propiedad—Véase: *Dominio*, núm. 2.

Registro público—Véase: *Información*, núm. 5.

1. Registro y escrituras—De los Escribanos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 35, Ser. 1ª.

Registro público de comercio—Véase: *Factor*, núm. 1—*Ampliaciones*, núm. 1—*Escritura pública*, núm. 2.

Registros parroquiales—Véase: *Filiación legítima*, número 2.

1b. Reglamento—Su aprobación no es bastante para crear una persona jurídica capaz de adquirir derechos civiles—Jur. Civ., tom. 6, pág. 216, Ser. 1ª.

Regulación—Véase: *Menores*, núm. 1—*Honorarios*, núms. 6, 7 y 13—*Nulidad*, núm. 34.

1c. Regulación de honorarios—Del abogado y procurador de uno de los herederos, solo es ejecutiva contra el de-

1a—Según prescripción del art. 41 del Cód. de Com., un comerciante puede constituir un domicilio especial respecto á los negocios que por sí ó por otro allí hiciere. Este domicilio constituye el elemento suficiente requerido por el art. 32 para que se otorgue la matrícula.

1b—Se requiere además la aprobación de sus estatutos: la aprobación de su reglamento no equivale á la aprobación de aquéllos; porque el estatuto es la constitución, la ley fundamental de esa nueva entidad moral que surge de la nada y adquiere derechos civiles mediante la sanción del poder público. El art. 33, inc. 5, Cod. Civil, ha establecido las condiciones que debe llenar un establecimiento de utilidad pública para que pueda contarse entre las personas jurídicas y son: 1º que posea patrimonio propio, 2º que sea capaz por sus estatutos de adquirir bienes y 3º que no subsista de asignaciones del Estado.

1c—Esta doctrina ha sido consagrada en el art. 907 del Proyecto de Cód. Civil Español, y comentario de García Goyena al mismo, tom. 2, pág. 266. El apoderado de un heredero solo representa á ese heredero, no puede ejecutar á un tercero, que en este caso sería la sucesión, por el importe de sus honorarios, porque el título para ejecutar debe existir





REG—RI

fendido y representado, pero no contra la testamentaria sin previa declaración consentida de que dichos honorarios han sido devengados en interés común de la herencia—Jur. Civ., tom. 6, pág. 514, Ser. 1ª.

2. Regulación—De honorarios, recaída en una sentencia inapelable, es inapelable también—Jur. Civ., tom. 2, pág. 437, Ser. 2ª.

3. Regulación de honorarios—La notificación hecha al representante legal, no se conceptúa un reconocimiento de deuda para el cual se requiere poder especial — Jur. Civ., tom. 1, pág. 267, Ser. 2ª.

4. Regulación de honorarios—La notificación no causa efecto si el notificado no está obligado á pagarlos sin previa declaración consentida—Jur. Civ., tom. 8, pág. 469, Ser. 1ª.

1a. Regulaciones—Incluidas en una sentencia inapelable, son inapelables también—Jur. Civ., tom. 9, pág. 190, Ser. 1ª.

Rehabilitación—Véase: *Fallido*, núm. 2.

1b. Reincidencia—Las disposiciones del Cód. Penal no son aplicables cuando el primer delito fué castigado con arreglo á las leyes vigentes anteriores á la promulgación del Código —Jur. Crim., tom. 5, pág. 133, Ser. 1ª.

desde el principio del juicio, y en materia de honorarios solo puede mediar entre abogado y procurador y el cliente á quien defiendan el primero ó represente el segundo—arts. 65 y 70 del Cód. de Proc.—Véase: Inst. tom. 1, verb. Honorarios núms. 1354 y 1357; Testamentaria, núm. 2596.

2—La regulación es parte integrante de la sentencia. Así cuando en una sentencia de remate se hace regulación de honorarios, no siendo esta apelable, tampoco puede serlo la regulación.

3—La regulación de honorarios hecha en un juicio es una consecuencia inmediata de éste, y como tal está facultado el apoderado para consentir las regulaciones que forman parte integrante del juicio.

1a—Siendo las regulaciones en estos casos parte integrante de la sentencia se hallan en el mismo caso que ésta en virtud de la regla de que lo dispuesto para el todo comprende las partes.

1b—Así se desprende de la disposición del art. 184 del Cód. Penal

REI

1. Reivindicación—En la demanda de bienes raíces, el embargo preventivo es procedente sobre la cosa, pero no sobre los frutos—Jur. Civ., tom. 6, pág. 315, Ser. 1ª.

2. Reivindicación—La acción es improcedente si el actor no ha tenido la posesión de la cosa que se pretende reivindicar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 529, Ser. 1ª.

3. Reivindicación—La demanda hace procedente el embargo preventivo sobre los bienes que son materia de la acción—Jur. Com., tom. 5, pág. 144, Ser. 1ª.

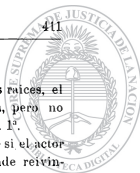
4. Reivindicación—El heredero que acepta la herencia carece de acción para reivindicar de los terceros á título de condómino, los bienes que su causante hubiese enagenado, sin llenar los requisitos exigidos en caso de existir condominio entre el padre y sus hijos menores—Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 2ª.

1—El embargo preventivo se halla autorizado por el art. 447 del Cód. de Proc. para este caso, el que debe limitarse á la anotación en el Registro de Hipotecas como lo dispone el art. 473; el embargo preventivo no puede tener mayor extensión que el embargo ejecutivo.

2—La acción reivindicatoria nace del dominio, por ella el propietario que ha perdido la posesión la reclama y reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella—art. 2758, Cód. Civ.—Para reivindicar es necesario haber perdido la posesión: para perder la posesión es necesario haberla tenido, luego la consecuencia.

3—Art. 447 del Cód. de Proc.

4—Este caso fué resuelto con arreglo á la antigua legislación bajo cuyo imperio tuvo su origen. Con arreglo á la Ley 55, tít. 5, Part. 5ª, cada condómino puede vender su parte en la cosa indivisa: pero cuando un padre enajena la cosa poseída en común con sus hijos debe pedir la división de la cosa ante el Juez—Ley 10, tít. 15, Part. 6ª—los padres no pueden enajenar los bienes adventicios de sus hijos menores de edad—Leyes 5, tít. 17, Part. 4ª; y 24, tít. 13, Part. 5ª.—Estas suponen el caso que los padres, á pesar de la prohibición, enajenan los bienes de los hijos, y prescriben entonces que los bienes de los padres queden obligados y empeñados á favor de sus hijos hasta hacerse pago de sus bienes adventicios, y que solo cuando aquellos no tuviesen bienes ó cuando no alcanzaron á cubrir el haber de los hijos, pueden éstos reivindicar los suyos propios de la persona en cuyo poder se encuentren. Así para que



REI

5. Reivindicación—Puede ejercerla cualquiera de los herederos justificando ese carácter, aun cuando no se le haya concedido la posesión de la herencia—Jur. Civ., tom. 3, pág. 514, Ser. 2ª.

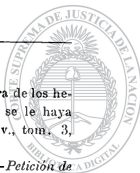
Reivindicación—Véase: *Denuncias*, núm. 1—*Petición de herencia*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 2—*Poseedor*, núm. 3—*Frutos*, núm. 2—*Albaceas dativos*, núm. 2—*Titulos de propiedad*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Concurso comercial*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 2—*Embargo preventivo*, núm. 31—*Prescripción*, núm. 20—*Costas*, núm. 22—*Dominio*, núm. 5—*Mercaderías*, núm. 2—*Socios*, núm. 1.

1. Reivindicados—El comprador de esos objetos no puede

la demanda de reivindicación sea procedente debe preceder la escusión de los bienes de los padres y luego intentar la acción reivindicatoria. Pero, la última ley citada agrega: «E esto se entiende quando non quisieren heredar nin auer parte en los bienes del padre. Ca si quisiesen heredar en ellos, entonces non podrían demandar los sus bienes propios á aquellos á quien los ouiesse el padre enagenado, segund que es dicho, porque *todos los pleytos derechos que el padre ouiesse fechos*, serían tenidos de guardar, e de non venir contra ellos, despues que fuessen herederos». Los pleytos derechos, son los contratos celebrados con arreglo á la ley.

5—Siempre que el heredero entre en posesión de la herencia por ministerio de la ley, como sucede cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes y descendientes legítimos—art. 3410, Cód. Civ.—Porque la acción reivindicatoria nace del dominio, por ella el propietario que *ha perdido la posesión* la reclama y la reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella—art. 2758 *ibid.*—Es decir que para reivindicar es necesario *haber perdido la posesión*. El heredero declarado tal, á quien no se le ha dado por Juez competente la posesión de la herencia—arts. 3411, 3412 y 3413—no puede ejercer la acción reivindicatoria porque jamás ha tenido la posesión. El art. 3414 dice: «Mientras no esté dada la posesión judicial de la herencia los herederos que deban pedirla no pueden ejercer ninguna de las acciones que nacen de la sucesión, *ni demandar á los detentadores de los bienes hereditarios*». El principio absoluto sentado en el sumario, no es sino relativamente exacto.

1—El art. 1673 del Cód. de Com. niega al vendedor el derecho á exigirlos en caso de reivindicación: negando el artículo citado este derecho al vendedor, debe entenderse negado también al comprador cuyo título



REI-REM

reclamar del vendedor indemnización de los daños y perjuicios que hubiese sufrido por la reivindicación de la cosa comprada y si solo los gastos que su conservación le haya ocasionado—Jur. Com., tom. 5, pág. 19, Ser. 1ª.

1a. Reivindicante—Acredor por frutos, carece de privilegio—Jur. Com., tom. 6, pág. 450, Ser. 1ª.

Relvindicar—Véase: *Poder*, núm. 2—*Comprador*, núm. 6—*Tradición*, núm. 1.

Reivindicatoria—Véase: *Denunciantes*, núm. 2.

Remanente—Véase: *Herencia*, núm. 1.

1b. Rematador—Por orden judicial, que no vende por falta de licitadores, no puede exigir retribución alguna—Jur. Civ., tom. 6, pág. 242, Ser. 1ª.

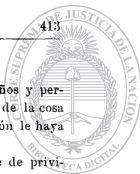
1c. Rematadores—No están sujetos en las ventas judiciales a las reglas del Cód. de Comercio, en sus relaciones con el

para exigir indemnización de daños y perjuicios es exactamente el mismo que el del vendedor. Aquí se trata de artículos reivindicados en caso de concurso

1a—Siempre que sea poseedor de buena fe, pues en este caso hace suyos los frutos percibidos (arts. 2423 y 2433 Cód. Civ.) y consiguientemente, el concurso adquiere la propiedad de ellos. Es otro el caso cuando la posesión es de mala fe—art. 2438, ibid.

1b—La jurisprudencia establecida por la Cámara es que los rematadores nombrados judicialmente para una operación no están sujetos a las prescripciones del Cód. de Com., sino a las del mandato del Cód. Civ. y que resolviéndose el mandato sin culpa del mandatario, ó por la revocación del mandante, tiene derecho aquél a una remuneración proporcional del servicio prestado, como lo dispone el art. 1958. En el caso *sub judice*, el mandato no fué revocado, ni resuelto por culpa del mandante ni del mandatario: no pudo ejecutarse por causas ajenas a la voluntad de ambas partes, no siendo consiguientemente aplicable el art. citado. El mandato que un Juez da al rematador, no es para ofrecer en venta sino para vender, y si no puede vender por falta de compradores, no se haita en el caso de un mandato no cumplido, no tiene derecho a comisión alguna.

1c—Doctrina constante y uniforme sentada por la Cámara, fundada en que los rematadores en las ventas judiciales no hacen actos de comercio, sino que desempeñan una comisión ó mandato del Juez.



REM

comitente, sino á las del mandato del Cód. Civil—Jur. Civ., tom. 6, págs. 242 y 249, Ser. 1ª.

Rematadores—Véase: *Martilleros*, núms. 1, 2 y 3—*Contrato de compraventa*, núm. 1.

1. **Remate**—Suspendido sin culpa del martillero, éste tiene derecho al cobro de una comisión equitativa que el Juez deberá fijar—Jur. Civ., tom. 6, pág. 249, Ser. 1ª.

2. **Remate**—No verificado por culpa del mandatario, el mandante no está obligado al pago de comisión—Jur. Civ., tom. 2, pág. 409, Ser. 2ª.

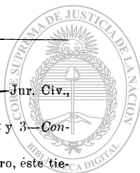
3. **Remate**—La asistencia de un solo interesado en el acto no anula la venta, si se han llenado las prescripciones de la ley y se ha obtenido un precio mayor que el fijado—Jur. Com., tom. 5, pág. 318, Ser. 1ª.

Remate—Véase: *Error*, núm. 1—*Boleto*, núm. 1—*Boleto*

1—En este caso el mandato se revoca sin culpa del rematador, debe abonársele una retribución que esté en relación á los trabajos practicados. Que la revocación sea voluntaria ó forzada de parte del mandante, esto en nada perjudica los derechos del mandatario, no siendo por culpa suya, porque es completamente ageno á los motivos de la revocación que son de cuenta exclusiva del mandante. Véase: Inst. tom. 1, verb. *Martilleros*, núms. 1726, 1728 y 1729.

2—El sumario no corresponde al caso que fué resuelto en el fallo á que se refiere: en el caso ocurrenente el remate no tuvo lugar, pero sin culpa de mandante ó mandatario y el Juez resolvió que no había lugar á remuneración alguna, 1º porque en el acto constitutivo del mandato se incluyó la condición de que no *habiendo venta* no se pagaría comisión y 2º por que aun en el caso que esta condición no se hubiese impuesto tampoco habría lugar al pago, pues el mandato se confiere para vender, no para ofrecerla en venta, y si no se vende por una causa estraña á la voluntad de las partes, se halla en el caso de un mandato no cumplido. Véase: verb. *Rematador*, núm. 1. Esta resolución no está en oposición con el núm. 1, porque allí se suspendió la venta, mientras que aquí el remate no se verificó por falta de licitadores.

3 La validez de la operación de remate está sujeta á la observancia de las leyes de Proc. y cuando éstas son guardadas por el martillero encargado de la venta, no hay causa de nulidad: todo lo demás es accesorio y secundario en la operación y no puede invalidar el acto.



REM-REN

de remate, núm. 1—*Tasación*, núm. 3—*Martilleros*, núm. 4.

1. Remate Judicial—El comprador de un bien en que existen menores interesados debe oblar íntegro el precio, prescindiendo en absoluto de los convenios hechos con los mayores—*Jur. Civ.*, tom. 3, pág. 603, Ser. 2ª.

Remate judicial—Véase: *Comprador*, núms. 1 y 3—*Desistimiento*, núm. 2—*Títulos de propiedad*, núm. 8—*Depósito*, núm. 4—*Subasta pública*, núm. 1.

Remate privado—Véase: *Subasta pública*, núm. 1.

Remate público—Véase: *Boleto*, núm. 2.

Remuneración—Véase *Tribunales*, núm. 1 — *Comisión* núm. 1.

1a. Rendición de cuentas—Este juicio como ordinario debe revestir los trámites que la ley establece y la sentencia dictada sin llenarlos es nula—*Jur. Civ.*, tom. 2, pág. 328, Ser. 2ª.

2. Rendición de cuentas—En juicio sumario, solo es aplicable á los administradores nombrados judicialmente—*Jur. Civ.*, tom. 2, pág. 328, Ser. 2ª.

3. Rendición de cuentas—Este juicio debe sustanciarse como ordinario—*Jur. Civ.*, tom. 1, pág. 180, Ser. 2ª.

4. Rendición de cuentas—Aprobada por los herederos mayores debe serlo por el Juzgado sin más justificación, menos en la parte que afecte intereses de menores—*Jur. Civ.*, tom. 8, pág. 337, Ser. 1ª.

1a—La disposición del art. 682 del Cód. de Proc., no es aplicable al caso, porque aquí no se trata de un administrador nombrado por el Juez, sino de una administración ejercida de hecho, ó mejor dicho, en virtud de un derecho controvertido por las partes.

2—Art. 682, Cód. de Proc.

3—El juicio de rendición de cuentas no tiene una tramitación especial en el Cód. de Proc., debiendo en consecuencia sustanciarse en juicio ordinario como lo dispone el art. 66 del mismo—Véase: núm. 1 y nota respectiva

REN-REP

X 5. **Rendición de cuentas**—Entre socios, las observaciones deben ser sustanciadas y resueltas por Jueces árbitros como liquidación social—Jur. Civ., tom. 9, pág. 194, Ser. 1ª.

— **Rendición de cuentas**— Véase: *Embargo preventivo*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 5—*Tutor*, núms. 2, 3 y 5—*Administrador*, núms. 2 y 3—*Tribunales de comercio*, núm. 2—*Mandato*, núm. 20—*Término fatal*, núm. 6—*Obligaciones á plazo*, núm. 1—*Fiador*, núm. 5—*Mandatario*, núm. 11.

1a. **Renovaciones**—De una letra de Banco con privilegios generales, no importan novación de la deuda, que conserva su fecha primitiva—Jur. Civ., tom. 3, pág. 98, Ser. 2ª.

1b. **Renta vitalicia**—En este contrato la falta de pago de las prestaciones no autoriza al acreedor á demandar la resolución del contrato si no fué hecho con pacto comisorio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 1ª.

Renuncia—Véase: *Documentos*, núm. 6.

Reo—Véase: *Arrepentimiento*, núm. 1.

Repetición—Véase: *Terceria*, núm. 4.

Reposición—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 8—*Auto*, núm. 9—*Curador*, núm. 5—*De oficio*, núm. 3—*Auto de quiebra*, núm. 2.

Representación—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1.

1c. **Representante**—Que consigue á favor de su mandante una con lenación en costas, tiene personería para ejecutar

5—Art. 504, segundo aparte, Cód. de Com.

1a—La novación no es de presunción legal; es necesario que ella resulte claramente establecida por voluntad de partes, ó que sean incompatibles ambas obligaciones: la convención que solo modifica las circunstancias accesorias del contrato no extingue la obligación primitiva—Artículos 812, Cód. Civ. y 983, Cód. de Com.—Este es un punto claramente legislado y sobre el cual hay jurisprudencia sentada. Véase: *Inst.*, tom. 1, verb. Banco de la Provincia, núm. 261; y *Renovación*, núm. 2370.

1b—El art. 2068 del Cód. Civ. así lo establece espresamente.

1c—La ejecución en este caso es una incidencia del juicio principal.

REP—RES

la sentencia sin necesidad de poder especial de las personas á quienes correspondan los honorarios, etc.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 555, Ser. 1ª.

Representante—Véase: *Apoderado*, núm. 1.

Representante legal—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 3.

Representantes por ministerio de la Ley—Véase: *Honorarios*, núm. 19.

República—Véase: *Inscripción*, núm. 2.

1a. Requisitoria—La parte contra quién se dirige puede pedir su retención, y el Juez exhortado debe sustanciar y decidir el incidente—Jur. Civ., tom. 6, pág. 263, Ser. 1ª.

Rescisión—Véase: *Contrato*, núms. 2, 6 y 7—*Comprador*, núm. 5—*Acción de daños y perjuicios*, núm. 1.

Reserva—Véase: *Sentencia*, núm. 14.

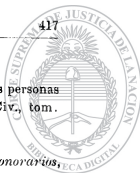
Residencia—Véase: *Término extraordinario*, núm. 1—*Ausente*, núm. 3.

1. Resolución—De la Municipalidad, que deniega la entrega de una suma embargada sin orden del Juez que dictó el embargo, no puede fundar un juicio contencioso-administrativo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 482, Ser. 1ª.

2. Resolución—Del tribunal, reformando una sentencia de primera instancia, en la parte que condena al demandado al pago de intereses, hace cosa juzgada al respecto—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 1ª.

1a—Es doctrina recibida que siempre que aquel contra quien va dirigida tenga fundamento legal para ello, como por incompetencia de jurisdicción á otro motivo—Véase: *Escribo verb. Requisitoria*.

2—El caso es el siguiente: Un facultativo demandó el pago de sus honorarios sin pedir el pago de los intereses, el Juez dicta sentencia condenando al demandado al pago de los intereses; la Cámara revoca el fallo en lo relativo á intereses diciendo que ellos no deben ser abonados «por que el interés no estaba estipulado y porque no se había pedido en la demanda.» En presencia de esta sentencia de la Cámara, se inicia nueva demanda por el pago de los intereses, el demandado opone la escepción



RES

3. Resolución—Municipal, el damnificado debe apelar de ella ante la misma corporación, y solo por recurso denegado ocurrir directamente á la Cámara de lo Civil—Jur. Civ., tom. 1, pág. 110, Ser. 2ª.

Resolución—Véase: *Trámite*, núm. 1 — *Cámara Civil*, núm. 3.

Resolución municipal—Véase: *Cámara*, núm. 7—*Recurso directo*, núm. 1.

1a. Resoluciones—Que han sido apeladas por nulidad y á la que no se ha hecho lugar por el Superior, no puede ser materia de nuevo recurso ó acción—Jur. Civ., tom. 1, pág. 393, Ser. 2ª.

1b. Resoluciones condicionales—No pueden dictarlas los Jueces—Jur. Civ., tom. 3, pág. 539, Ser. 2ª.

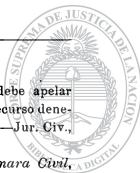
1. Resoluciones municipales—Solo procede el recurso de apelación interpuesto ante dicha Corporación y en caso

de cosa juzgada, la que es declarada procedente porque la sentencia anterior hacfa cosa juzgada. Según la definición dada por Escribhe es cosa juzgada lo que se ha decidido en juicio contradictorio por una sentencia válida de que no hay ó no puede haber apelación», disposición que concuerda con la ley 19, tít. 22, Part. 3ª, cuando dice: «Afinado juyzio que dá el Judgetor entre las partes derechamente, de que non se alce ninguna delas, fasta el tiempo que dize el título de las alzadas, ha maravillosamente gran fuerza que dende adelante son tenudos los contendores, é sus herederos de estar por éi». Si la sentencia se hubiese limitado á decir que se reformaba el auto porque no se había pedido en la demanda el cobro de los intereses, no habría sido posible oponer la escepción, porque el fallo no habría resuelto sobre el fondo de la cuestión, es decir que solo no se hacfa lugar al pago de los intereses porque no fueron cobrados pero no porque nó haya derecho para cobrarlos. El fallo daba dos razones: 1ª que no estaban estipulados y 2ª que no se habían pedido en la demanda. En el primer caso la Cámara entró á resolver sobre el fondo de la cuestión en cuyo caso hay cosa juzgada.

3—Véase: *Recurso directo*, núm. 1.

1a—Lo contrario harfa que los pleitos fuesen interminables.

1b—Las sentencias deben reener sobre casos determinados y realizados: esta es la regla consagrada en la práctica—Véase: *Inst.* tom. 1, verb. *Tribunales*, núm. 2656.



RES—REV

denegado el recurso directo, la demanda establecida por el anterior régimen provincial es improcedente—Jur. Civ., tom. 8, pág. 599, Ser. 1ª.

Responsables subsidiarios—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 1.

Retractación—Véase: *Acción*, núm. 4.

Retribución—Véase: *Mandatario*, núm. 9.

Reválida—Véase: *Escribanos*, núm. 2.

1a. Revalidación—De títulos de abogado, solo puede hacerse ante la facultad de derecho; la inscripción y reconocimiento por la Suprema Corte Nacional no es bastante para considerar el título revalidado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 455, Ser. 2ª.

2. Revalidación—De títulos de Escribano espedidos por los Tribunales de Provincia, es acordada por la Cámara—Jur. Civ., tom. 6, pág. 267, Ser. 1ª.

1b. Revocación—Del mandato, siendo potestativa del mandante, el mandatario no puede fundar en ella una acción de daños y perjuicios—Jur. Com., tom. 6, pág. 477, Ser. 1ª.

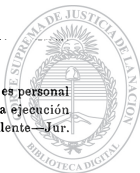
2a. Revocación—En parte, de una sentencia de primera instancia, importa reconocer que el apelante tuvo razón para litigar y en consecuencia se entiende revocada también en la condenación en costas que hubiese recaído—Jur. Civ., tom. 6, pág. 407, Ser. 1ª.

1a—Es necesario la exhibición de título que acredite grado mayor de Jurisprudencia espedido por Universidad, indispensable para poder ejercer la profesión de abogado.

1b—Véase: verb. mandante, núms. 1, 2 y nota.

2a—Aunque la sentencia en grado de apelación nada hubiese dicho respecto á la revocación ó confirmación de la de primera en cuanto á costas, se entiende esta última revocada implícitamente y no puede dar lugar á una ejecución para el cobro de esas costas, porque estas no pueden considerarse procedentes respecto á una resolución revocada: las costas solo debe satisfacerlas el litigante temerario ó que no tuvo razón derecha para litigar.





REV—ROB

3. Revocación—De la donación, por ingratitud es personal contra el donatario; deducida como tercería en la ejecución seguida por un acreedor hipotecario, es improcedente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 82, Ser. 2ª.

Revocación—Véase: *Complicidad*, núm. 1.

Revocación de poder—Véase: *Recusacion*, núm. 7.

1a. Revocatoria—Deducido este recurso sin interponer conjuntamente el de apelación, el auto que recaiga es inapelable—Jur. Civ., tom. 2, pág. 471, Ser. 2ª.

Revocatoria—Véase: *Auto*, núms. 1 y 2—*Embargo preventivo*, núm. 8.

Riña—Véase: *Defensa propia*, núm. 1.

1b. Robo—Para que este delito exista basta el apoderamiento y traslación de los objetos—Jur. Crim., tom. 6, pág. 117, Ser. 1ª.

Robo—Véase: *Heridas*, num. 1.

3—La tercería de dominio *debe fundarse en el dominio de los bienes embargados*, dice el art. 529 del Cód. de Proc. El que dona un inmueble, pierde el dominio que sobre él tenía. El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida á la voluntad y á la acción de una persona, dice el art. 2506 del Cód. Civ. La gestión misma sobre retroversión de la propiedad al donante y tercerista comprueba que éste carece de dominio.

1a—Art. 225, Cód. de Proc.

1b—Preciamente la Cámara resolvió lo contrario de lo que el sumario establece. Nuestro Cód. Pen. (anterior), no exige que los objetos sean trasladados para que exista robo. El sumario está equivocado. El mencionado Cód. Pen. en su art. 321, no exige la remoción de los objetos en el sentido de ser llevados, sino que basta que la intención de apoderarse de lo ajeno se manifieste por el agente. Tal intención se manifiesta por el acto de apoderarse de lo ajeno, porque el simple apoderamiento importa que se ejecuta el acto contra la voluntad de su dueño. La ley 28, tit. 6, part. 7ª dice: «Furto hace todo ome que tome la cosa ajena non lo sabiendo su dueño, ó contra su voluntad». En igual sentido se pronunció la Cámara en un caso idéntico—Véase: tom. 2, pág. 204, Ser. 1ª, Jur. Crim.



Secretario—Véase: *Costas*, núm. 2.

1a. Secretarios—Están obligados á recibir y poner cargo á los escritos que en su domicilio particular presenten las partes después de las horas hábiles del despacho—Jur. Civ., tom. 1, pág. 106, Ser. 2ª.

2. Secretarios—Y demás empleados de las Cámaras: sus atribuciones y facultades—Jur. Civ., tom. 7, pág. 28, Ser. 1ª.

3. Secretarios—De primera instancia: sus facultades y obligaciones—Jur. Civ., tom. 7, pág. 31, Ser. 1ª.

Segunda instancia—Véase: *Posiciones*, núm. 4—*Terce-rista*, núm. 1.

1b. Sello—Que la ley obliga á usar á los Escribanos, solo puede permitirse el cambio por motivos atendibles, el uso no es razón suficiente—Jur. Civ., tom. 1, pág. 456, Ser. 2ª.

2. Sello—Mientras no se reponga por cualquiera de las

1a—Los plazos de días no deben contarse de momento en momento, sino desde la media noche en que termina el día de la fecha,—arts. 24 y 27, Cód. Civil;—Si los Secretarios no estuviesen obligados á recibir y poner cargo á los escritos presentados después de las horas de oficina, los plazos no terminarían á media noche sino á la hora en que las oficinas se cierran, lo que importaría restringir los términos acordados por las leyes, contrariando el precepto legal. Véase: Inst. tom. 1, verb. Es-critos, núm. 1119 y nota.

1b—El art. 108 de la Ley Org. de los Trib. permite el cambio de sellos de los Escribanos con conocimiento de la Exma. Cámara y por motivos que ella considere atendibles.

2—No puede darse curso al litigio, porque lo prohíbe el art. 37 de la ley de Sellos. La ejecución no puede seguirse por una de las partes que

SEL—SEN

partes, no puede darse curso al litigio, la ejecución contra uno de los infractores es improcedente mientras el otro no haya repuesto el total—Jur. Civ., tom. 8, pág. 141, Ser. 1ª.

3. Sello—Que corresponde á un documento, la Dirección General de Rentas es la única competente para resolver la clase que corresponde—Jur. Civ., tom. 2, pág. 60, Ser. 2ª.

Sello—Véase: *Transacción*, núm. 6.

1a. Sellos—Cuando la ley no impone la pena espresamente, el Fiscal no puede pedir su aplicación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 381, Ser. 2ª.

2. Sellos—El penado con multa por infracción á la ley solo puede repetir contra los demás obligados después de haberla satisfecho—Jur. Civ., tom. 8, pág. 359, Ser. 1ª.

Sellos—Véase: *Banco Nacional*, núm. 1—*Contratos*, número 4.

1. Sellos provinciales—Las actuaciones hechas en estos deben ser repuestas al ser presentadas ante los Tribunales de la Capital—Jur. Com., tom. 6, pág. 198, Ser. 1ª.

Semana Santa—Véase: *Términos judiciales*, núm. 1.

1b. Sentencia—Que condena al demandado ultrapasando lo pedido en la demanda, es nula pero solo en esa parte—Jur. Civ., tom. 6, pág. 151, Ser. 1ª.

ha pagado solo la multa que á él le corresponde, porque ésta es impuesta por la ley á favor de una institución pública de la que no tiene representación legal: solo pagando una de las partes la totalidad de la multa puede gestionar el cobro de lo que ha pagado por la otra en virtud de la subrogación legal que se opera—arts. 768, inc. 2º, y 771, Cód. Civ. Véase: Inst. tom. 1, verb. Jurisdicción comercial, núm. 1596 y nota.

3—Art. 43 de la Ley de Papel Sellado.

1a—La Cámara ha declarado repetidas veces que las leyes de impuesto no son susceptibles de una interpretación extensiva.

2—Art. 689, Cód. Civ. Véase: verb. *Sello*, núm. 2.

1b—La sentencia en este caso no debe subsistir en esta parte, porque excede de lo pedido por las partes y porque ella debe ser resuelta con arreglo á las acciones aducidas en el juicio: hay *ultra-petitio*.—Art. 216, Cód. de Proc.; Ley 16, tít. 22, Part. 3ª.



SEN

2. Sentencia.—Ejecutoriada, y declarado el mejor derecho al patronato, el patrono es el único que debe intervenir en las actuaciones ulteriores—Jur. Civ., tom. 6, pág. 309, Ser. 1ª.

3. Sentencia.—Que resuelva la demanda haciendo lugar al divorcio, por causas imputables á ambos cónyuges, cualquier de ellos puede demandar la separación de bienes—Jur. Civ., tom. 6, pág. 390, Ser. 1ª.

2—No hay razón para ello puesto que ya nadie puede tener interés en las ulteriores por haber la sentencia consagrado el derecho del patrono.

3—La sentencia de divorcio autoriza á los cónyuges para pedir la separación de bienes en los términos que se prescribirá en el título de la sociedad conyugal, dice el art. 211 del Cód. Civ. El art. 1306 dice: «En el caso de divorcio el cónyuge inocente tendrá derecho á pedir la separación judicial de bienes». El principio consagrado por el art. 211 es un resultado forzoso de la situación sobrevenida á los cónyuges por el divorcio, y que viene á satisfacer las exigencias nacidas de ella. El art. 1306 sienta la regla de que el cónyuge inocente tendrá derecho á pedir la separación de bienes: *á contrario sensu*, se deduce que el culpable, el que hubiese dado causa al divorcio, no puede ejercitar ese derecho. Es una pena impuesta por la ley al cónyuge que ha sido causa de una situación violenta y anormal de la familia, que rompe toda armonía é introduce la infelicidad en el hogar. Aunque este artículo no tiene concordancia alguna en el Código, sin embargo García Goyena trata el caso y en sus Concordancias y comentarios al Proyecto de Cód. Civ. Español, en su art. 87, dice: «Si el marido diese causa al divorcio, podrá ejercitar la mujer los derechos que se le acuerdan en el art. 1355»:—solicitar separación de bienes—En el art. 88 dice: «Cuando sea la mujer la culpable del divorcio, por cualquiera causa, conservará el marido la administración de los bienes de la masa social». Comentando este autor los artículos citados, dice respecto del primero: «El marido culpable pierde sus derechos:» y respecto del segundo dice: «Como en este caso no hay lugar á la separación de bienes, continúa rigiendo respecto del marido inocente no solo en cuanto á la administración y usufructo sino en cuanto á las cargas». Pero la culpabilidad debe ser explícitamente declarada en la sentencia porque trae sanciones penales. En nuestra legislación se halla sentado el principio de que el divorcio lleva consigo la separación de bienes entre los cónyuges. El sumario que comentamos sienta un principio que la Cámara no ha consagrado: en el caso práctico no hubo declaración de culpabilidad de ninguno de los consortes, no habiéndose declarado explícitamente esta culpabilidad se les presume á ambos inocentes y con derecho cada uno á pedir la

SEN

4. Sentencia.—Solo en el caso de declararla nula el superior, puede el actor gestionar nuevamente sobre los puntos que ella hubiese comprendido—Jur. Civ., tom. 6, pág. 417, Ser. 1ª.

5. Sentencia.—Que aceptando la incompetencia no resuelve las demás escepciones, no es nula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 203, Ser. 2ª.

6. Sentencia.—De segunda instancia, solo puede recaer sobre los mismos puntos que han sido sometidos al inferior y sobre los cuales se ha pronunciado—Jur. Civ., tom. 7, pág. 164, Ser. 1ª.

7. Sentencia.—Recaída, sin sustanciación no adolece de nulidad, siempre que el demandado no haya negado los hechos en que se funda el actor, ni se haya opuesto á sus peticiones—Jur. Civ., to n. 7, pág. 370, Ser. 1ª.

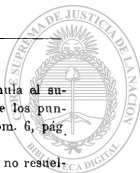
8. Sentencia.—Que deja á salvo derechos que una de las separación. La S. C. N. ha establecido en uno de sus fallos que la separación personal no quita al marido el derecho á la administración legítima de los bienes del matrimonio, aunque sean adquiridos por la mujer durante la separación—Ser. 2ª, tom. 2, pág. 420.—En la legislación francesa la separación de cuerpo lleva consigo la de bienes: es práctica en la nuestra solicitar la separación de bienes, de lo contrario continúa.

5—Así lo establece el art. 93 del Cód. de Proc. La escepción de incompetencia es siempre previa. Véase: Inst. tom. 1, verb. Escepción de incompetencia, núm. 1053 y nota relativa.

6—Es elemental en materia de procedimiento que la sentencia debe recaer sobre la acción deducida en la demanda, siendo nula toda decisión sobre punto no sometido al fallo del Juez. El art. 216 del Cód. de Proc. así lo establece para la primera instancia, y el 267 prohíbe á la Cámara sentenciar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no hubiese sido propuesto á la resolución del inferior, salvo las escepciones allí establecidas.

7—No hay materia para un juicio: el Juez se encuentra habilitado para dictar sentencia definitiva.

8—Que no han podido ser materia de decisión judicial á causa de no haber sido aducida al entablarse la demanda ó al contestarla; además de esta causal, no puede haber agravio cuando los derechos quedan á salvo para ser discutidos en otro juicio.



SEN

partes pretende y que no han podido ser materia de decisión judicial, para que los haga valer como viese convenirle no causa agravio—Jur. Civ., tom. 7, pág. 532, Ser. 1ª.

9. Sentencia—Dictada en rebeldía por no haberse citado en forma al demandado, es nula y el demandante debe ser condenado en las costas del juicio—Jur. Civ., tom. 8, pág. 234, Ser. 1ª.

10. Sentencia—Sobre nulidad de un laudo, recaída en el juicio ejecutivo, no hace cosa juzgada en el ordinario—Jur. Civ., tom. 8, pág. 380, Ser. 1ª.

11. Sentencia—Que no haciendo lugar á lo pedido, por no existir acción deducida en forma deja á salvo los derechos del demandante no causa agravio al demandado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 70, Ser. 1ª.

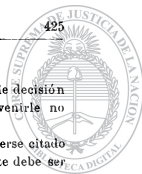
12. Sentencia—Declarando nula la venta de una finca no hace cosa juzgada para los propietarios de las demás que tengan el mismo origen—Jur. Civ., tom. 9, pág. 207, Ser. 1ª.

9—La citación debe hacerse en la forma ordenada en el art. 77 y siguientes del Cód. de Proc. No haciéndose en esa forma la citación será nula dice el art. 82. La ley no prescribe que en este caso el demandante sea condenado en las costas, sino cuando la citación fuese nula por su causa, como cuando hubiese dado un domicilio que no es el del demandado: mas puede suceder que la citación sea nula por culpa del Secretario en cuyo caso éste responde de las costas—art. 40, ibid.

10—Arts. 500 y 540 del Cód. de Proc.

11—No habiendo demanda en forma, es evidente que el demandado no puede exigir que se le despoje al actor de un derecho cuyo reconocimiento se le deniega precisamente por no haber demanda. El punto puesto en tela de juicio no se puede sustanciar por no estar en forma y no se puede denegar el ejercicio de derechos sino previa demanda en forma sustanciada por los trámites que la ley prescribe. La resolución no causa agravio al demandado porque no se resuelve ninguna acción ni derecho. Véase el núm. 8.

12—Para que haya cosa juzgada se requiere que haya identidad de cosa de causa, de personas y de calidad: Véase: Escriche, verb. cosa juzgada. Conde de la Cañada, Part. 1ª, Caps. 12 y 14. Goyena, tom. 4, pág. 121. Ley 26, tít. 2, Part. 3ª. Es evidente que en el caso *sub judice* no hay concurrencia de estas circunstancias.



SEN

13. Sentencia—Que concede más de lo pedido, resolviendo puntos que no han sido materia de discusión, es nula—Jur. Civ., tom. 9, pág. 355, Ser. 1ª.

14. Sentencia—Que guarda silencio sobre una protesta ó reserva de la parte, no causa agravio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 374, Ser. 1ª.

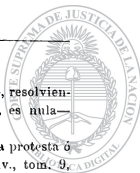
15 Sentencia—Solo puede recaer sobre aquella que según la demanda y contestación forman las bases del litis-contrato—Jur. Com., tom. 6, pág. 330, Ser. 1ª.

Sentencia—Véase: *Nulidad*, núms. 2, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 36 y 51—*Incompetente*, núm. 1—*Esposo*, núm. 1—*Peritos*, núm. 1—*Prejuzgamiento*, núms. 1 y 4—*Rendición*

13—La sentencia debe contener decisión expresa *con arreglo á las acciones deducidas*—art. 216. Cód. de Proc.—Las sentencias dictadas con violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes son nulas—art. 237, *ibid.*—El sumario consagra un principio que está en oposición con el núm. 1, pues en este último se resolvió que la sentencia que condena al demandado ultrapasando lo pedido en la demanda es nula, pero solo en esa parte. La Ley 12, tít. 22, Part. 3ª legisla para el caso y según ella, es nula la sentencia en que «los Judgadores en sus juyzios lo fazen á las vegadas dando juyzios menguados, ó torticeros, ó *judgando de otra manera que non pertenesce al pleyto*... Ca por cualquier destas razones que fuesse dado juyzio, non seria valedero». La ley 16 de este mismo tít. y Part. al tratar de «Como non deue valer juyzio que da el Judgador sobre cosa que non fue demandada ante el, dice: «Ca si fuere fecha la demanda antel sobre vn campo, ó sobre una viña, e el quissiere dar juyzio sobre casás, ó bestias, ó sobre otra cosa que non perteneciesse á la demanda, non deue valer tal juyzio». La S. C. P. ha dicho en su tom. 1, pág. 180, Ser. 1ª: Las sentencias no deben exceder de lo pedido por las partes.

14—No causa gravamen irreparable, porque generalmente al dejar á salvo derechos y acciones que deben ventilarse en otro juicio siempre queda á salvo el derecho de la parte para discutir en el nuevo juicio su procedencia ó improcedencia, y de la resolución que en esta reaniga pueda apelar en la oportunidad del juicio en que sería el caso de reparar el agravio si es que alguno hubiese habido. La cuestión de si procede ó no que una gestión se entable en otro juicio, no toca al primer Juez el declararlo.

15—De acuerdo con el art. 216 del Cód. de Proc., la sentencia debe pronunciarse de conformidad con las acciones deducidas en juicio.



SEN

de cuentas, núm. 1—*Embargo preventivo*, núms. 2, 9 y 26—*Alimentos*, núm. 7—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 1—*Nula*, núm. 1—*Alimentario*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núm. 2—*Revocación*, núm. 1—*Resolución*, núm. 2—*Colocación*, núm. 1—*Acuerdo*, núm. 1—*Liquidación*, núm. 2—*Jactancia*, núm. 2—*Apelación*, núm. 2—*Pena*, núm. 4—*Conjuces*, núms. 1 y 2—*Absolución de posiciones*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núm. 7—*Incidente*, núm. 1—*Regulaciones*, núm. 1—*Prueba*, núms. 26 y 29—*Hijo natural*, núm. 1—*Costas*, núm. 9—*Representante*, núm. 1—*Litis-contrato*, núm. 1—*Transacción*, núm. 5—*Obligación de hacer*, núm. 5—*Falsedad de la ejecutoria*, núm. 1.

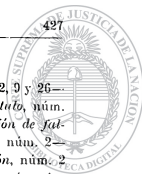
Sentencia definitiva—Véase: *Auto*, núm. 1.

1a. Sentencia de remate—Debe limitarse a disponer que se lleve la ejecución adelante, ó no hacer lugar a ella, pero no puede resolver sobre los daños causados por un embargo indebido—Jur. Civ., tom. 1, pág. 13, Ser. 2ª.

1b. Sentencia de divorcio—Obtenida con posterioridad a la demanda de separación de bienes, no puede ser tomada en consideración sin alterar fundamentalmente los términos de la litiscontestación—Jur. Civ., tom. 1, pág. 206, Ser. 2ª.

1a—Así lo dispone el art. 498 del Cód. de Proc. La limitación establecida en este artículo es de estricta aplicación: lo contrario importaría involucrar en una sentencia decisiones de una naturaleza distinta y sometidas a un procedimiento completamente extraño.

1b—La simple instauración de la acción de divorcio, no da origen a la separación de bienes: es indispensable que la sentencia esté ya pronunciada por el Tribunal competente para que los cónyuges puedan pedir la separación de los bienes del matrimonio. Art. 211, última parte. Por consiguiente, si la ley exige que la sentencia de divorcio *preceda* a la demanda de separación, su existencia *posterior* nada puede influir sobre la demanda ya entablada, no se ha cumplido el precepto legal: esto además de la razón aducida en el sumario, de que la sentencia debe contener decisión clara y precisa con arreglo a las acciones deducidas en el juicio—art. 216, Cód. de Proc.





SEN-SEP

1a. Sentencia ejecutoriada—No basta que por ella se declare que el autor de un acto ilícito es responsable de los daños y perjuicios causados, debe justificarse el importe total de los reclamados, y además que son una consecuencia forzosa de aquél—Jur. Crim., tom. 6, pág. 170, Ser. 1ª.

Sentencia ejecutoriada—Véase: *Autor*, núm. 1.

Sentencia extranjera—Véase: *Arraigo*, núm. 5.

Sentencia inapelable—Véase: *Regulación de honorarios*, núm. 2.

1b. Sentencias—Dictadas en país extranjero en rebeldía son ejecutivas siempre que el ejecutado al iniciarse el juicio, no se encontrara domiciliado en la República, aun cuando antes ó después de dictada la sentencia se hubiese trasladado á ella—Jur. Com., tom. 5, pág. 510, Ser. 1ª.

2a. Sentencias—De árbitros arbitradores, la Cámara no puede conocer de los recursos deducidos contra ellas—Jur. Civ., tom. 6, pág. 133, Ser. 1ª.

1c. Sentencias inapelables—No puede deducirse contra ellas el recurso de nulidad—Jur. Civ., tom. 9, pág. 190, Ser. 1ª.

Señal ó arras—Véase: *Venta*, núm. 3—*Arras*, núm. 1.

1d. Separación de bienes—Entablada la demanda, la esposa tiene derecho para pedir el embargo preventivo de los bienes comunes, pero solo en la parte que basten á responder de los propios—Jur. Civ., tom. 6, pág. 592, Ser. 1ª.

2b. Separación de bienes—La simple interposición de la

1a—Véase: Verb. *Daños y perjuicios*, núms. 6 y 7 con sus notas.

1b—Art. 559, inc. 2º, Cód. de Proc.

2a—Art. 808 del Cód. de Proc. Véase: Inst. tom. 1, verb. Recurso, núm. 2289 y nota.

1c—Porque solo son susceptibles del recurso de nulidad las que pueden ser apeladas—Art. 236, Cód. de Proc.

1d—Arts. 211, 1292, 1293 y 1294, Cód. Civ.

2b—Por los arts. 186 y 1276 del Cód. Civ. la administración de todos los bienes del matrimonio sean dotales ó adquiridos después de formada la

SEP

demanda no basta para privar al marido de su administración—Jur. Civ., tom. 6, pág. 592, Ser. 1ª.

3. Separación de bienes—La sentencia de divorcio dictada durante la secuela del juicio, no puede ser tomada en consideración al fallar—Jur. Civ., tom. 2, pág. 581, Ser. 2ª.

4. Separación de bienes—No puede fundarla los actos del esposo, que como la venta ó hipoteca son derechos de la libre administración que la ley le acuerda—Jur. Civ., tom. 2, pág. 58, Ser. 2ª.

5. Separación de bienes—Para que la demanda sea procedente, es necesario justificar, no que el marido falta á sus deberes conyugales, sino que administra mal los bienes de la mujer, de tal manera que ésta corra el peligro de perderlos, ó que hubiese hecho concurso de acreedores—Jur. Civ., tom. 1, pág. 206, Ser. 2ª.

6. Separación de bienes—Si bien las medidas que la ley acuerda en favor de la mujer que inicia esta acción restringen ó limitan la administración del marido, éste no

sociedad, corresponde al marido, sin que se halle subordinada á la voluntad de la mujer, pues la ley no ha dado á ésta la menor intervención en ella. De aquí se sigue que la mujer no puede embargar esa administración por regla general: sin embargo hay excepciones establecidas por la ley en salvaguardia de los intereses de la esposa, como cuando la mala conducta del esposo haga temer enagenaciones fraudulentas, ó disipación de bienes del matrimonio, ó cuando se haya pronunciado sentencia de divorcio, pudiendo en todos estos casos pedir separación judicial de bienes—arts. 211, 1294 y 1295, Cód. Civ.—Mas para ser eficiente este derecho como que es una excepción á la ley, no basta alegar cualquiera de esas causales: es necesario que ellas sean comprobadas.

3—Véase: Sentencia de divorcio, núm. 1 y nota respectiva.

4—No se estralimitan las facultades administrativas del marido, de cuya oportunidad y conveniencia es él el único juez, siempre que no se justifique el propósito de defraudar á la esposa.

5—Art. 1294, Cód. Civ.

6—Estas medidas preventivas y de seguridad no afectan en absoluto las facultades administrativas que al marido competen sino que solo las restringen ó limitan—Art. 1276, Cód. Civ.—Si la mujer no se cree sufi



SEP

puede ser privado totalmente de ellas—Jur. Civ., tom. 1, pág. 625, Ser. 2ª.

7. Separación de bienes—Corresponden á la esposa los aportados al matrimonio, aun cuando no exista escritura, siempre que judicialmente el esposo haya reconocido como cierto el hecho—Jur. Civ., tom. 7, pág. 529, Ser. 1ª.

8. Separación de bienes—El cónyuge declarado inocente en el juicio de divorcio puede pedirla, con prescindencia de la buena ó mala administración del marido—Jur. Civ., tom. 8, pág. 196, Ser. 1ª.

9. Separación de bienes—No es suficiente para fundarla, la enagenación de los de la sociedad conyugal, debe justificarse que ella se hace con ánimo de defraudar los intereses de la esposa—Jur. Civ., tom. 8, pág. 347, Ser. 1ª.

10. Separación de bienes—Para resolver durante el juicio si la venta es necesaria ó conveniente el Juez puede

cientemente garantida con estas medidas, nuestro Código prevé el caso en el art. 211, autorizándola, siempre que la conducta del marido hiciese temer enagenaciones fraudulentas, para pedir al Juez que se ponga á cargo de otro administrador, salvo que el marido dé fianza por el importe de los bienes.

7—El art 1228 del Cód. Civ. dice: «Con relación al matrimonio y á sus herederos, la confesión del recibo de la dote, en cualquiera forma que sea hecha, probará la obligación de restituirla á la mujer y á sus herederos.» En relación á los acreedores del marido exige algo más el art. 1229.

8—Art. 1306, Cód. Civ.

9—La enagenación de los bienes gananciales no puede de ninguna manera alarmar á la esposa, ni su venta debe alarmarla; esta operación puede responder á una combinación comercial que puede traer ó prometer buenas utilidades á la sociedad conyugal. La ley autoriza al marido para enagenar estos bienes porque le confiere su administración—Art. 1276, Cód. Civ.—Puede enagenar y obligar á título oneroso los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo los derechos de la mujer cuando in enagenación fuese en fraude de ella—art. 1277.

10—Para que el Juez resuelva sobre la conveniencia ó inconveniencia de la venta es necesario que la prueba lo habilite para la apreciación de las cuestiones de hecho que deben dar solución y servir de base á las de derecho: es necesario que el incidente se abra á prueba, y es evidente



SEP—SIM

abrir el punto á prueba sin que ello importe un prejuzgamiento—Jur. Civ., tom. 8, pág. 362, Ser. 1ª.

11. Separación de bienes—Petida por el cónyuge inocente, procede después de consentida la sentencia de divorcio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 359, Ser. 1ª.

Separación de bienes—Véase: *Sentencia de divorcio*, núm. 1—*Sentencia*, núm. 3—*Embargo*, núms. 4 y 5—*Arrendamientos*, núm. 2—*Poseción*, núm. 1—*Hipoteca*, núm. 3—*Esposa*, núm. 2.

Separación judicial—Véase: *Terceros*, núm. 1.

1a. Servicio—Si bien el que lo prestaré puede demandar el precio aunque ninguno se hubiese ajustado, debe ante todo justificar que el beneficiado solicitó la prestación del servicio—Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 2ª.

Servicios prestados—Véase: *Mandatario*, núm. 12.

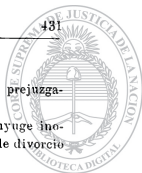
1b. Simulación—De un instrumento público deducida por uno de los otorgantes, los Tribunales solo pueden conocer de ella cuando exista prueba por escrito; la testimonial es impropcedente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 58, Ser. 2ª.

que este trámite legal, que es esencial, no puede importar un prejuzgamiento.

11—Arts. 211 y 1308, Cód. Civ.

1a—Porque según el art. 1627 del Cód. Civ. se presume la intención de beneficiar al que recibe un servicio cuando éste no lo solicitó; tal se entiende tratándose de servicios que no constituyen la profesión ó modo de vivir del que los presta, pues en el caso contrario la presunción legal es que el servicio es oneroso, y entonces no tiene obligación de comprobar que el servicio fué solicitado.

1b—El art. 960 del Cód. Civ. establece que los jueces conocen sobre la prueba literal y sobre la simulación, siempre que el contra-documento no contuviese alguna disposición contraria á las leyes ó á los derechos de un tercero. Los arts. 994, 995 y 996 demuestran que cuando las partes han comparecido espontáneamente ante el oficial público y han otorgado un acto revestido de todas las formalidades legales, debe éste merecer entera fe; si se quiere modificar este acto, la misma ley les enséña la forma. Si se admitiera la prueba testifical ó la de presunciones para estos casos, sería contrariar el espíritu del Cód. que ha querido rodear de las mayo-



SIM

2. Simulación—Para declararla bastan las presunciones que la hagan verosímil—Jur. Com., tom. 5, pág. 130, Ser. 1ª.

3. Simulación—De un instrumento público, su prueba corresponde al que la alega—Jur. Civ., tom. 8, pág. 222, Ser. 1ª.

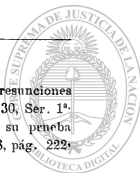
4. Simulación—Si después de opuesta, se renuncia á la prueba, el Juzgado no debe resolverla, pues se conceptúa eliminada—Jur. Civ., tom. 8, pág. 294, Ser. 1ª.

res garantías posibles los instrumentos públicos, evitando los peligros graves que la teoría contraria entrañaría. El art. 960 citado, aunque no señala el Codificador la fuente de donde fué tomado, sin embargo como tiene su concordancia con Freytag, 524 y 525. Aubry y Rau, 765, notas 25 y 27; Chardon, tom. 2, pág. 110, podemos recurrir á los autores para estudiar el espíritu de la ley. Otros tratan asimismo esta materia; Marcadé en su tom. 5º, Explicación del Cód. Napoleón dice: «Mientras que la prueba testimonial de la simulación de un acto puede ser hecha por el tercero á quien perjudica, porque él ha tenido imposibilidad de procurarse una prueba escrita, aquélla no podría ser producida por el que ha sido parte en el acto y que es uno de los autores de la simulación, porque le ha sido fácil procurarse prueba escrita de ella». Zachariæ se expresa en el mismo orden de ideas; párrafo 599, tom. 3. Bonnier se pregunta: «Pero, ¿qué debe decidirse en caso de simulación simple, que no tenga por objeto perjudicar á terceros ni defraudar la ley? Cuando no ha habido dolo ni violencia, se está en el caso de decir con Pothier, que la parte que arguye la simulación falta en no haberse hecho entregar una contra-escritura»—tom. 1º, Tratado de las pruebas.

2—No es posible en estos casos una prueba plena y concluyente, así lo enseña la ley recopilada—Ley 13, tít. 16, lib. 3º—Concordante con los arts. 1191, Cód. Civ., y 192, Cód. de Com.—Las presunciones, en estos casos, deben reunir la circunstancia de ser ellas graves, precisos y concordantes—Véase: Inst. tom. 1, verb. Simulación, núms. 2466, 2469 y 2470.

3—Los instrumentos públicos hacen fe en juicio hasta que sean argüidos de falsos: cuando se dice de falsedad de un instrumento se hace necesario destruir la presunción legal de su validez, prueba que corresponde al que afirma el hecho nuevo de su falsedad, con arreglo á los principios de procedimiento que rigen esta materia—Véase: Ints., tom. 1, verb. Simulación, núms. 2461 y 2467.

4—No probándose la simulación queda el instrumento perfectamente válido, con mayor razón cuando ni siquiera se intenta probar, eliminando la prueba que sería la oportunidad para comprobarla.



SIM

5. Simulación—Son circunstancias que la hacen presumir la falta de tradición real y efectiva del inmueble, el anticipo del precio y la amistad íntima entre vendedor y comprador—Jur. Civ., tom 8, pág. 523, Ser. 1ª.

6. Simulación—De los actos jurídicos, puede ser probada por el tercero defraudado, por simples presunciones—Jur. Civ., tom. 8, pág. 523, Ser. 1ª.

7. Simulación—De un instrumento público, deducida por uno de los otorgantes, los Tribunales solo pueden conocer cuando exista prueba por escrito, la testimonial es improcedente—Jur. Civ., tom. 9, pág. 23, Ser. 1ª.

8. Simulación—De una escritura pública, debe justificarla el que afirma—Jur. Civ., tom. 9, pág. 116, Ser. 1ª.

9. Simulación—Declarada judicialmente, los gastos sosteniendo la validez deben ser pagados por aquel en cuyo

5—Son todas éstas presunciones graves precisas y concordantes requeridas por el art. 1191 del Cód. Civ. para declarar la simulación de los actos jurídicos. La falta de tradición impide que el dominio se trasmita al adquirente: la propiedad de inmuebles se transmite por la escritura pública de enagenación seguida de la tradición—arts 2378 y 2609, Cód. Civ.—La amistad íntima es también un indicio de simulación, porque los contratos sinceros tienen lugar generalmente entre extraños con quienes conviene y agrada lucrar: entre amigos íntimos toda idea de lucro se excluye.

6—La prueba de la simulación está regida por la Ley 13, tít. 16, lib. 5, R. C.; es privilegiada y está librada al juicio del magistrado, que debe apreciar, según las reglas del sano criterio, la concurrencia de datos, antecedentes y presunciones peculiares al caso.

7—El art. 960 del Cód. Civ. requiere la existencia de un contra documento para que los jueces puedan conocer sobre la simulación alegada por las mismas partes que la ejecutaron. En armonía con esta disposición está el art. 996, que después de fijar las formas, requisitos y efectos de los instrumentos públicos, admite que el contenido de éstos puede ser modificado ó quedar sin efecto alguno por un contra documento público ó privado que los interesados otorguen.

8—Véase núm. 3 y nota.

9—Porque es la parte beneficiada con la tramitación del juicio durante el cual las costas han sido causadas.

SIM—SIN

favor se había hecho ó por sus herederos—Jur. Civ., tom. 9, pág. 264, Ser. 1^a.

10. Simulación—Deducida esta acción por la esposa debe recibirse á prueba sin resolver previamente si tiene ó nó personería para ejercerla—Jur. Civ., tom. 3, pág. 518, Ser. 2^a.

11. Simulación—De un instrumento público, alegada por los que han intervenido, solo puede declararse si existe prueba escrita; la de presunciones favorece á los terceros que no hubiesen tenido intervención en el acto—Jur. Civ., tom. 3, pág. 585, Ser. 2^a.

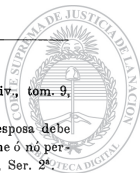
Simulación—Véase: *Falsedad*, núm. 1—*Tercero*, núm. 1—*Herederos*, núm. 4.

1. Síndico—Y acreedores que no hayan solicitado el auto de quiebra, carecen de personería para oponerse á su levan-

10—Véase: verb. *Prueba*, núm. 25.

11—La jurisprudencia universal ha establecido que la simulación como el fraude puede ser probada con prueba privilegiada que la forman los indicios y las presunciones siempre que fueren graves, precisas y concordantes. Esta prueba tiene su fundamento en el hecho de que los acreedores extraños al acto simulado, no pueden siempre tener una prueba escrita del engaño ejecutado con toda precaución para que no sea descubierto. La prueba privilegiada fué incorporada á los procedimientos—Leyes 8, tít. 14; 41, tít. 16, part. 3^a; 40, tít. 11, part. 5^a; glosa 6^a, tít. 9; 3 y 4, tít. 7, lib. 10; 3, tít. 8, lib. 10, Nov. R.—Los arts. 1190 y 1191 del Cód. Civ. dejan librado al procedimiento la prueba de la simulación. Sin embargo no hay ley que autorice al que ha tomado parte en la simulación á invocar su dicho propio como presunción. Si cada parte tuviese la facultad de comprobar la falsedad de un acto tomando por base su propia confesión, la inestabilidad de las transacciones importaría la supresión de la constitución de toda clase de derechos y especialmente de los reales, pues bastaría la sola voluntad del enagenante para dejar sin efecto derechos irrevocablemente transmitidos á otros.

1—Esta resolución fué dictada por la Cámara constituida en Trib. de Interlocutorias y por mayoría de votos: ésta se fundaba en que la reposición del auto de quiebra puede ser pedida dentro de ocho días de notificado—art. 1551, Cód. de Com.—Tratándose de la reposición no son parte sino los acreedores á cuya solicitud fué declarada la quiebra—art. 1552.



SIN—SOB

tamiento siempre que hubiese sido solicitado dentro del término que la ley acuerda al deudor—Jur. Com., tom. 5, pág. 106, Ser. 1^a.

2. Síndico—De un concurso, y su representante no pueden ser personalmente responsabilizados por las condenaciones en costas que hayan sufrido al gestionar derechos de la masa—Jur. Com., tom. 7, pág. 207, Ser. 1^a.

Síndico—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1—*Auto de quiebra*, núms. 1 y 3—*Jueces de comercio*, núm. 2.

Siniestro—Véase: *Póliza*, núm. 1.

Sobreseimiento—Véase: *Delito*, núm. 1.

1. Sobrinos—Nietos del causante, carecen de derecho para heredar en concurrencia con los sobrinos hijos de hermanos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 413, Ser. 1^a.

Sobrinos—Véase: *Parientes colaterales*, núm. 1.

2—Las disposiciones comerciales relativas á concursos son aplicables, en este caso, en materia civil, por analogía. Los síndicos son los únicos que tienen personería para controventir las acciones en pro y en contra del concurso, porque representan á la masa de acreedores—cap. 17 ordenanzas de Bilbao; arts. 1533, 1534, 1585 y 1645, Cód. de Com.—La condenación en costas no puede recaer sobre el apoderado del síndico, porque no es litigante personal ni representante de personas que demandan derechos propios, sino del síndico que representa al concurso y sobre quien recae la condenación en costas. Es principio legal que esta condenación es á cargo de la parte vencida; siendo la parte vencida el concurso, sobre él recae la obligación de abonar el honorario—art. 737, Cód. de Proc.—Este caso fué resuelto con arreglo á las leyes vigentes antes del Cód. de Proc. actual.

1—Se ha consagrado en nuestro Código que en las sucesiones intestadas heredan al difunto sus parientes colaterales mas próximos en grado—art. 3585, concordante con el 3546.—La única escepción que estas disposiciones admiten es la referente al «derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos». En cuanto á la inteligencia y alcance que debe darse á este derecho puede verse la Inst. tom. 1, verb. *Línea colateral* y nota respectiva. Y en el art. 3580 (hijos y descendientes de los hermanos) no está demás, puesto que sirve para ligar la calidad de hijos á la de descendientes, cuyas dos condiciones deben tener los sobrinos para representar al padre en la sucesión del hermano de éste.

SOC

1. **Sociedad**—Que ha otorgado poder á uno de sus miembros para ciertos y determinados actos, puede exigirle la rendición de cuentas en la vía ordinaria, aun cuando por el contrato deban entender árbitros arbitradores en las diferencias que se susciten entre los socios—Jur. Com., tom. 5, pág. 152, Ser. 1ª.

2. **Sociedad**—En materia comercial se prueba por todos los medios admitidos para probar los hechos—Jur. Com., tom. 5, pág. 302, Ser. 1ª.

3. **Sociedad**—Declarada judicialmente su existencia las cuestiones sobre partición deben ser resueltas por árbitros arbitradores—Jur. Civ., tom. 9, pág. 274, Ser. 1ª.

4. **Sociedad**—La declaración de falencia, constituye en estado de quiebra á los socios y los acreedores de éstos que pretenden privilegios sobre sus bienes particulares, deben

La frase *hijos y descendientes*, tiene su importancia especial, porque quita dudas que en esta materia han ocurrido con motivo del lenguaje de los comentadores que han hablado de *hijos de primer grado*, *primeros hijos*, etc.

1—En este caso la acción ejercida es la *pro mandato* y no la *pro socio*: si bien el art. 511 del Cód. de Com., establece que todas las cuestiones sociales deben ser resueltas por árbitros-arbitradores, y aunque el contrato así lo estableciera, no puede sin embargo aplicarse este procedimiento en este caso porque no se trata de actos ejecutados como socio, sino como tercero, en cuyo caso las obligaciones que de su ejecución nacen son bien distintas como lo establecen los arts. 463 y 505 del Cód. de Com.

2—No se puede argumentar con el art. 393, Cód. de Com., desde que el art. 399 consagra la sanción penal para la falta de cumplimiento, que declara nula la sociedad para lo futuro, pero sin borrar los hechos producidos, cuyos derechos pueden establecerse ocurriendo los socios á los medios admitidos en materia comercial. Véase: Inst. tom. 1º, verb. Contrato de sociedad, núm. 568

3—Siempre que las liquidaciones ó cuentas á que haya de procederse sean muy complicadas y de lenta y difícil justificación—art. 557, Cód. de Proc.

4—Art. 1530, Cód. de Com. El juicio de concurso es un juicio universal, que atue á sí á todos los demás.



SOC

deducir su acción ante el Juez del concurso—Jur. Civ., tom. 3, pág. 335, Ser. 2ª.

Sociedad—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 18—*Cesión*, núm. 3—*Contrato*, núm. 6—*Confesión judicial*, núm. 1—*Inscripción*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 2—*Liquidación*, núm. 1—*Arbitros arbitradores*, núm. 3—*Poder especial*, número 3—*Quiebra*, núms. 3 y 6—*Socios*, núm. 1.

1. **Sociedad anónima**—Aun cuando tenga un objeto piadoso, corresponden á la jurisdicción comercial las contien- das sobre su liquidación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 470, Ser. 2ª.

2. **Sociedad anónima**—El presidente de ella no necesita poder en forma para solicitar la inscripción de sus estatutos, hasta su comprobación por el libro de actas en que se le haya autorizado—Jur. Com., tom. 6, pág. 243, Ser. 1ª.

Sociedad civil—Véase: *Actos de comercio*, núm. 1.

Sociedad comercial—Véase: *Tribunales de comercio*, número 2—*Prueba testimonial*, núm. 9.

Sociedad conyugal—Véase: *Marido*, núm. 1—*Esposa*, número 1—*Embargo*, núms. 4 y 5—*Administrador*, núm. 4—*Honorarios*, núm. 15—*Separación de bienes*, núm. 9—*Nul- dad*, núm. 30—*Revindicación*, núm. 4.

Sociedades—Véase: *Inscripción*, núm. 2.

Sociedades anónimas—Véase: *Fundadores y adminis- tradores*, núm. 1—*Ampliaciones*, núm. 1.

Sociedades mercantiles—Véase: *Arbitros-arbitradores*, núm. 2.

1—Las sociedades anónimas, cualquier que fuere su objeto, son comer- ciales—art. 403 del Cód. de Com.—y bajo tal aspecto toda contienda re- lativa á su liquidación ó disolución debe formularse ante Juez que ejerza esa jurisdicción.

2—En este caso la gestión se limita al mero cumplimiento de las pres- cripciones del Cód. de Com. para la inscripción de los estatutos; no le es aplicable el art. 13 del Cód. de Proc. porque no se trata de un juicio propiamente dicho.

SOC—SUB

1a. Socio—El que causa la disolución de la sociedad sin causa justificada, debe resarcir al otro los daños y perjuicios ocasionados, pero solo aquellos que se pudieron prever al formarse el contrato ó los que resulten como consecuencia inmediata de su falta de cumplimiento—Jur. Com., tom. 6, pág. 269, Ser. 1ª.

Socio—Véase: *Compra*, núm. 1—*Término*, núm. 14—*Calificación*, núm. 1—*Costas*, núm. 25—*Mandatario*, núm. 11—*Quiebra*, núm. 6.

1b. Socios—Producidas las diferencias entre ellos, la única acción que corresponde es la de liquidación de la sociedad; la reivindicatoria de la parte que corresponda á cada socio es improcedente—Jur. Com., tom 6, pág. 250, Ser. 1ª.

Socios—Véase: *Sociedad*, núm. 1—*Declaratoria*, núm. 2—*Liquidadores*, núm. 1—*Rendición de cuentas*, núm. 5.

1c. Subasta pública—Esta escepción solo comprende las ventas hechas por mandato y con intervención judicial—Jur. Civ., tom. 9, pág. 141, Ser. 1ª.

1a—Arts. 218 y 219, Cód. de Com.

1b—Estudiando la ley mercantil se nota que ella no favorece la iniciación de una acción reivindicatoria. Tampoco pueden aplicarse por analogía las disposiciones de la ley civil, porque una cosa es la sociedad y otra es la comunidad de bienes ó condominio que se gobiernan por leyes muy diversas como que son esenciales sus diferencias. No hay un solo antecedente de la ley comercial que favorezca la producción de un juicio de reivindicación. Producida una de las causales de disolución de la sociedad, no queda otro camino que la liquidación, porque el contrato de sociedad impone vinculaciones con terceros, cuyos derechos hay que respetar, y esto no se conseguiría intentando una acción reivindicatoria, porque ella dejaría siempre sin resolverse las cuestiones suscitadas entre los mismos socios.

1c—El sumario se refiere á la escepción establecida en el inc. 1º del art. 1184 del Cód. Civ. que dice: Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad, con escepción de los que fueren celebrados en subasta pública. Escribo dice: *Subasta*. La venta de bienes ó alhajas que se hace al mejor postor por mandato y con intervención de la justicia. Acevedo en el art. 2269 de su Proy. de Cód. Civ. para la Rep. Oriental del Uruguay define la subasta así: *Subasta* ó *almoneda* es la venta que con auto-



SUB-SUS

Subasta pública—Véase: *Boleto*, núm. 1.

1a. Sublocatario—Responde por las obligaciones del locatario en favor del locador—Jur. Com., tom. 5, pág. 298, Ser. 1ª.

Subrogación judicial—Véase: *Embargo preventivo*, número 1.

Sucesión—Véase: *Herederos*, núm. 3.

1b. Sucesiones intestadas—En ellas heredan al difunto sus parientes colaterales más próximos en grado, escluyendo á los mas lejanos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 413, Ser. 1ª.

Sucesiones intestadas—Véase: *Parientes colaterales*, número 1.

1. Sucesor—A título singular, de terrenos no deslindados debe circunscribir su acción á la integración del área determinada en su título y no á los errores que sobre ella pudiera existir, según se dé á los títulos primitivos una ú otra inteligencia—Jur. Civ., tom. 3, pág. 421, Ser. 2ª.

Sucesores—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1—*Juicio*, núm. 3.

Sueldos—Véase: *Prescripción de sueldos*, núm. 1—*Mandatario*, núms. 9 y 10.

Sumario—Véase: *Información*, núm. 2—*Esposos*, núm. 1—*Declaraciones*, núm. 5—*Jueces del crimen*, núm. 2—*Fallidos*, núm. 1—*Incidentes*, núm. 3—*Testigos*, núm. 3.

Sumarios—Véase: *Juicios sumarios*, núm. 1.

Superintendencia—Véase: *Recusación*, núm. 3.

Suprema Corte Nacional—Véase: *Cámara civil*, núm. 3.

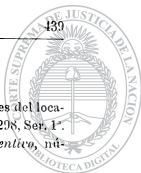
Sustancial—Véase: *Error*, núm. 2.

Sustracción de dinero—Véase: *Hurto*, núm. 3.

riedad judicial se hace al que más ofrece por la cosa. Según el Diccionario de la lengua castellana: *Subasta*, es la venta pública de bienes ó alhajas que se hace al mejor postor por mandato y con intervención de la justicia—Véase: *Salvó* 3ª edición.

1a—Art. 1601 Cód. Civ.

1b—Art. 3585 del Cód. Civ. concordante con el 3546.





Tacha—Véase: *Nómina de testigos*, núm. 1.

1. Tacha de testigos—En materia criminal, solo es admisible cuando se trata de enemistad capital por haber atentado á la vida, el honor, ó á la fortuna del individuo—Jur. Crim., tom. 5, pág. 525, Ser. 1ª.

1a. Tachas—Las partes pueden usar de este derecho cuando los testigos prestan declaración fuera del término, siempre que solo se funde en la falsedad de lo dicho en aquel acto—Jur. Civ., tom. 1, pág. 407, Ser. 2ª.

1b. Tasación—De bienes que por voluntad del testador corresponden en especie al legatario, no debe ser abonada con fondos de la testamentaria—Jur. Civ., tom. 6, pág. 502, Ser. 1ª.

1a—Las leyes 1ª, tít. 4, lib. 3 del Ordenamiento, y 1ª tít. 8, lib. 4, R. C. permitían espresamente tachar á los testigos en sus dichos, y era asimismo doctrina recibida por los autores—Febrero Reformado, tom. 4º; Cañada, parte 1ª cap. 10; Eseriche, verb. Tachas, y Castro, núm. 208. El art. 205 del Cód. de Proc. establece que cada parte puede tachar por justas causas los testigos presentados por la parte contraria: los arts. 206 y 207 se ocupan de las tachas personales; en los 208 y 209 se trata del procedimiento: la ley calla respecto de las tachas en el dicho. En este caso las leyes anteriores deben regir porque nada hay de contrario entre unos y otros—art. 814, Cód. de Proc.—Véase: Caravantes: Proc. Judiciales, tom. 2, pág. 125 que trata el punto y está de acuerdo con el principio sentado en el fallo.

1b—Porque según el art. 3766 del Cód. Civ., el legatario de cosas determinadas es propietario de ellas desde la muerte del testador; siendo en este caso inútil la tasación, desde que fuese cual fuese su valor, el dominio le corresponde privativamente.

TAS—TEN

2. Tasación—Solo puede recaer sobre la parte indivisa del ejecutado, la general es nula—Jur. Civ., tom. 2, pág. 412, Ser. 2ª.

3. Tasación—No es necesario practicarla nuevamente aun cuando haya menores interesados para practicar un nuevo remate, basta que la mayoría de los herederos acuerde una rebaja de 25 %—Jur. Civ., tom. 7, pág. 235, Ser. 1ª.

Tasación—Véase: *Perito tercero*, núm. 2—*Testamentaria*, núm. 2—*Venta privada*, núm. 1.

Tasaciones—Véase: *Término*, núm. 13.

Tasadores—Véase: *Honorarios*, núm. 18.

Temeridad—Véase: *Litigante*, núm. 1—*Costas*, núms. 4, 8, 10, 11, 13 y 24—*Acreeedor*, núm. 5.

Tenencia—Véase: *Poseción*, núm. 1.

1. Tentativa criminal—No la constituye el hecho de disparar un tiro sin objeto, solo puede considerarse como una contravención policial—Jur. Crim., tom. 6, pág. 601, Ser. 1ª.

Tentativa de adulterio—Véase: *Acción*, núm. 1.

Tentativa de asesinato—Véase: *Alevosia*, núm. 1.

1. Tentativa de estafa—Cuya realización es imposible, no puede ser castigada—Jur. Crim., tom. 5, pág. 110, Ser. 1ª.

1a. Tentativa próxima—De circulación de billetes falsos,

2—El art. 2682 del Cód. Civ., prohíbe la enagenación de la totalidad de la cosa indivisa, y el art. 2677 autoriza el embargo y la venta de la parte indivisa: si la venta no puede hacerse sino de esa parte la estimación que se hace del total tiene que ser nula, porque solo debe ser materia de tasación la cosa embargada cuya venta se va a verificar.

3—Cuando un inmueble no ha podido venderse en remate público por las dos terceras partes de su tasación la rebaja del 25 % sobre ésta, no solamente está autorizada por el art. 516 del Cód. de Proc. (del juicio ejecutivo) sino también por el art. 786 del mismo Cód. (del juicio de concurso de acreedores). Estos artículos pueden aplicarse por analogía en los casos como el del sumario, en que hay acuerdo unánime de voluntades.

1a—Arts. 431 y 442, Cód. Pen.

TEN-TER

adquiridos con mala fe, debe ser castigada con igual pena que la tentativa próxima de falsificación—Jur. Crim., tom. 5, pág. 81, Ser. 1ª.

2. Tentativa próxima—De lesiones corporales, para el castigo debe tenerse presente la clase de arma que usó el reo—Jur. Crim., tom. 5, pág. 204, Ser. 1ª.

1. Tentativa remota—De asesinato, tal se conceptúa el hecho de prometer una suma determinada como precio del crimen, aun cuando los agentes no lo lleven á cabo ni lo intenten—Jur. Crim., tom. 6, pág. 197, Ser. 1ª.

Tercer grado—Véase: *Derecho para heredar*, núm. 1.

Tercer poseedor—Véase: *Acción de petición de herencia*, núm. 1.

1a. Tercería—La regla de que debe conocer en ella, el mismo juez de la ejecución, solo es aplicable cuando no excede por su cantidad de los límites de su jurisdicción—Jur. Civ., tom. 7, pág. 102, Ser. 1ª.

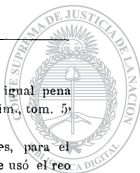
2. Tercería—No está obligado á deducirla el poseedor de bienes cuyo embargo se pide á nombre de un tercero, le basta la simple oposición á que se lleve á efecto—Jur. Civ., tom. 7, págs. 106 y 453, Ser. 1ª.

3. Tercería—Deducida y sustanciada la demanda, el ter-

1a—Como sucede en la reconvencción—Art. 11, inc. 3ª, Ley org. de los Trib. de la Cap.

2—Cuando la cosa cuyo embargo se solicita no se halla en poder del deudor, el embargo no procede, pues solo está autorizado el acreedor á hecer embargar los bienes de su deudor que él designe «si estuviese en posesión de ellos el deudor,» como lo dispone el art. 478 del Cód. de Proc., disposición aplicable á los embargos preventivos—art. 455—lo que dispone el art. 473 no es una limitación de esta doctrina sino su confirmación, cuando este artículo se refiere á bienes del deudor que están en poder de un tercero, pues no debe confundirse la posesión con la mera tenencia—Véase: Inst. tom. 1, verb. Tercería, núm. 2552 y nota.

3—Es doctrina inconcusa que entablada la demanda, ésta no puede ser mudada quedando inalterable, siempre que ella hubiese sido contestada.



TER

cerista no puede cambiar su acción oponiéndose al embargo como poseedor—Jur. Civ., tom. 7, pág. 293, Ser. 1ª.

4. Tercería—No puede entablarla el poseedor que para eludir el embargo que se pretenda por deudas de un tercero abona el importe del crédito, debe repetir simplemente contra el deudor—Jur. Civ., tom. 8, pág. 114, Ser. 1ª.

5. Tercería—Debe ser rechazada aunque conste por escritura pública la cesión de derechos y acciones, siempre que el cesionario no justifique la tradición del título por el cual se acrediten y en que consten los derechos del cedente—Jur. Civ., tom. 9, pág. 390, Ser. 1ª.

Tercería—Véase: *Ejecutante*, núms. 1 y 2—*Revocación*, núm. 2—*Dominio*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núms. 11 y 18—*Oposición*, núm. 1—*Costas*, núm. 14—*Jactancia*, núm. 4—*Convenciones*, núm. 2.

1. Tercerista—No tiene facultad, para probar en segunda

4—Siempre que el dinero entregado no lo hubiese sido en calidad de embargo: porque la tercera presupone bienes embargados, lo que es necesario para la determinación de la cosa sobre que ha de recaer la acción—Art. 529, Cód. de Proc.—El pago puede ser hecho por un tercero aun ignorándolo el deudor, dice el art. 727 del Cód. Civ., y en este caso el que hubiese hecho el pago puede pedir al deudor, el valor de lo que hubiese dado en pago.

5—En el caso ocurrente se había trabado embargo en los derechos que tenía el ejecutado en un contrato de arrendamiento: trabado el embargo se dedujo tercera fundándose el tercerista en una escritura en la cual constaba que el ejecutado le había cedido los derechos que tenía en el contrato de arrendamiento: la tercera es rechazada porque la escritura solo prueba el contrato de cesión mas no prueba la transmisión efectiva de esos derechos, mientras no se pruebe que la tradición se efectuó, pues el art. 1457 del Cód. Civ. establece que la propiedad de un crédito pasa al cesionario por el efecto de la cesión con la entrega del título si existiere: el título en este caso, es la escritura de arrendamiento.

1—El tercerista en un juicio de tercera demanda á ejecutante y ejecutado. No puede un actor ser autorizado á comprobar hechos que el demandado debió comprobar en la oportunidad debida. Esta prueba es personal del deudor y no puede invocarse por el tercerista en beneficio de sus derechos, pues nada existe de común entre actor y demandado.

TER

instancia hechos cuya prueba era á cargo del deudor en la primera—Jur. Com., tom. 6, pág. 439, Ser. 1ª.

Tercerista—Véase: *Demanda*, núm. 4.

1a. **Tercero**—Perjudicado por una simulación, tiene derecho á exigir á cualquiera de los autores del acto simulado que son solidariamente responsables, la indemnización de daños y perjuicios que ese acto ilícito le hubiese irrogado—Jur. Civ., tom. 2, pág. 39, Ser. 2ª.

2. **Tercero**—Solo puede ser citado á juicio, á petición de parte legítima, á los efectos de la evicción ó en caso de jactancia—Jur. Civ., tom. 1, pág. 382, Ser. 2ª.

Tercero—Véase: *Pago*, núm. 3—*Prenda*, núm. 1—*Obligaciones*, núm. 4—*Contrato*, núm. 12—*Acción reivindicatoria*, núm. 2—*Pacto de quota-litis*, núm. 1—*Acreeedor*, núm. 3.

1b. **Terceros**—La disposición del art. 1246, es aplicable no solo á los que contratan con los esposos, sino también á éstos en los casos de separación judicial de bienes, sin que puedan justificar por otros medios que aquellas condiciones existían aunque no se hiciese constar en la escritura.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 390, Ser. 1ª.

Terceros—Véase: *Auto de quiebra*, núm. 1—*Posesión*, núm. 1—*Simulación*, núm. 5—*Hijos*, núm. 3—*Prenda*, núm. 2—*Instrumentos privados*, núm. 1.

1c. **Término**—El que la ley señala para la prescripción de

1a—Arts. 1077 y 1081, Cód. Civ.

2—Es un principio recibido de procedimiento que nadie puede ser obligado á demandar contra su voluntad, escepción hecha de los dos casos mencionados en el sumario.

1b—El art. 1306 del Cód. Civ., coloca á los cónyuges separados legalmente en las mismas condiciones de los terceros.

1c—El art. 4032 del Cód. Civ., establece la prescripción de dos y cinco años para que se extinga la obligación de pagar á los abogados y procuradores sus honorarios y derechos: este art. se refiere al derecho entre cliente y abogado que tiene su fundamento en la existencia de un contrato de locación de servicios; mas no se refiere á la obligación impuesta á un tercero en



TER

honorarios, solo es aplicable en las relaciones de derecho entre el cliente y el abogado que lo ha patrocinado—Jur. Civ., tom. 6, pág. 75, Ser. 1ª.

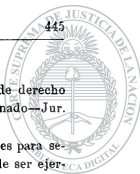
2. Término—La facultad concedida á los Jueces para señalar el cumplimiento de una obligación, no puede ser ejercida sin previa audiencia del deudor—Jur. Civ., tom. 6, pág. 473, Ser. 1ª.

3. Término—Para la prescripción de una obligación, cuyo cumplimiento depende única y exclusivamente del obligado, solo empieza á correr desde la fecha en que éste haga saber al acreedor la imposibilidad de cumplir la obligación—Jur. Civ., tom. 6, pág. 556, Ser. 1ª.

virtud de una sentencia que condena al pago de las costas, pues esta obligación tiene una causa distinta, cual es la de reparar el perjuicio sufrido en el pleito. Se trata, por consiguiente de una deuda ordinaria que se prescribe por diez años, no de una deuda especial por honorarios.

2—El art. 618 del Cód. Civ. autoriza al Juez para señalar el término dentro del cual debe cumplirse una obligación, si no estuviere fijado en el acto por el cual fué constituida. Esta facultad conferida al Juez está reglamentada en su ejercicio por el Cód. de Proc., y la sentencia señalando el término debe ser dictada con arreglo á esta reglamentación. Es un principio inconcuso universalmente aceptado que siempre que se trata de hacer valer un derecho declarado por la ley, ese derecho debe ser declarado con audiencia de la parte contraria y llenando las condiciones exigidas por el Cod. de Proc.: éste ha establecido por regla general, que todas las contiendas judiciales entre partes, que no tengan un procedimiento especial serán ventiladas en juicio ordinario—art. 66—La obligación cuyo cumplimiento se trata de obtener puede estar sujeta á mil contingencias, puede ser falsa, puede estar prescrita, el Juez puede ser incompetente; es necesario en una palabra oír al deudor para que oponga las defensas que viere convenirle: debe seguirse la contienda por todos los trámites del juicio, y la sentencia dictada con violación de las formas sustanciales, sin audiencia, ni citación, es nula como lo dispone el art. 237 del Cód. de Proc.

3—Así se desprende del principio sentado en los arts. 3980 y 4013 del Cód. Civ. y la nota explicativa del primero. Maynz enseña la misma teoría en su obra de Derecho Romano, tom. 1, párrafo 146, pág. 444.



TER

4. Término—Después de vencido, no puede concederse prórroga—Jur. Civ., tom. 2, pág. 464, Ser. 2ª.

5. Término—Para deducir recursos, corre respectivamente para cada una de las partes desde la fecha de su notificación—Jur. Civ., tom. 2, pág. 484, Ser. 2ª.

6. Término—Para alegar, no empieza á correr hasta la terminación de los incidentes que se hayan suscitado sobre la prueba—Jur. Civ., tom. 2, pág. 497, Ser. 2ª.

7. Término—Para prescribir, se interrumpe por el reconocimiento expreso ó tácito que el deudor hace del derecho del acreedor—Jur. Com., tom. 5, pág. 77, Ser. 1ª.

8. Término—Para la prescripción de cuentas corrientes, empieza á correr desde la fecha de la última partida—Jur. Com., tom. 5, pág. 169, Ser. 1ª.

9. Término—El que la ley señala para la prescripción de la acción pauliana no es aplicable á la de nulidad de un simple acto de comercio—Jur. Com., tom. 5, pág. 222, Ser. 1ª.

10. Término—Para pedir posiciones, se entiende antes de ser notificada la parte de la providencia de autos y no antes de dictarse por el Juzgado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 263, Ser. 2ª.

4—Art. 43, inc. 1º, Cód. de Proc. F. S. C. P., tom. 1, pág. 210, S. 2ª.

5—Cuando la ley no establece la excepción de que el término que acuerda es común, debe correr desde la fecha en que cada parte es notificada.

6—Lo contrario importaría contar la libre defensa, imposibilitando al litigante á hacer mérito de toda su prueba, que la ley le acuerda como medio de defensa.

7—Arts. 3989, Cód. Civ., y 1010, Cód. de Com.

8—Art. 1003, inc. 3, Cód. de Com.

9—Tanto una como otra son completamente distintas entre sí, como lo son los fundamentos que les dan origen.

10—El art. 125 del Cód. de Proc. establece que después de contestada la demanda hasta la citación para sentencia, puede cada parte exigir que la contraria absuelva posiciones; la citación solo debe considerarse hecha, cuando las partes han sido notificadas en la forma ordenada por el art. 77 y siguientes.



TER

11. Término—Para espresar agravios, solo empieza á correr después que notificadas las partes, el Ugier devuelve á Secretaría con la nota respectiva—Jur. Civ., tom. 1, pág. 440, Ser. 2ª.

12. Término—Para contestar el traslado de la demanda no empieza á correr hasta que se han entregado las copias de todos los documentos en que se funda—Jur. Civ., tom. 7, pág. 93, Ser. 2ª.

13. Término—Que la ley señala para la aprobación de las tasaciones, toda oposición después de vencido debe ser desechada—Jur. Civ., tom. 7, pág. 97, Ser. 1ª.

14. Término—Para oponerse un socio á los actos del otro, se cuenta para los terceros desde que esos actos llegaron á su conocimiento y no desde que el socio pretenda judicialmente desconocer su validez—Jur. Civ., tom. 7, pág. 201, Ser. 1ª.

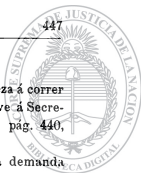
15. Término—Para alegar de bien probado, no se inte-

11—Cuando se ha evacuado la última notificación por el Ugier, éste devuelve á Secretaría el expediente con la nota correspondiente, esta nota indica que los autos están á disposición de las partes, y es sabido que el término para espresar agravios solo empieza á correr desde que los autos están en Secretaría á disposición de las partes—Art. 241, Cód. de Proc.

12—El art. 21, aparte 1º del Cód. de Proc. prescribe la presentación de la copia de todo escrito de que haya que darse traslado y si esa copia no se acompañase producirá el efecto de no presentado. Este sumario no da idea del caso práctico que motivó la resolución. El caso es el siguiente: Instaurada una demanda se dió traslado de ella al demandado, que le fué notificado por cédula, dejándosele copia del escrito de demanda mas no de los documentos en que se fundaba: transcurrido el término para evacuar el traslado sin hacerlo se le acusó rebeldía; la Cámara resolvió que no había lugar á ella porque no se había agregado copia de los documentos que se habían acompañado como base de la acción. El fundamento de la resolución fué, que la citación debió hacerse entregando juntamente con la cédula las copias de que habla el art. 21 del Cód. de Proc., como lo ordena el art. 77, siendo nula la que se haga en contravención á las formas legales establecidas—Art. 82 ibid.

13—Art. 659, Cód. de Proc.

15—El art. 118 del Cód. de Proc., autoriza á las partes á pedir que



TER

rumpe por haber pedido que la parte absuelva posiciones—Jur. Civ., tom. 8, pág. 352, Ser. 1ª.

16. Término—Para contestar el segundo traslado en las cuestiones de puro derecho, no es común—Jur. Civ., tom. 8, pág. 351, Ser. 1ª.

17. Término—Para el otorgamiento de una escritura no pueden prorrogarlo los Jueces sin la conformidad de las partes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 475, Ser. 1ª.

Término—Véase: *Diligencias de prueba*, núms. 1 y 2—*Obligación de hacer*, núm. 1—*Providencia*, núm. 1—*Emplazamiento*, núm. 1—*Alegato*, núm. 1—*Arbitros*, núm. 1—*Hijo*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 11—*Nómina de testigos*, núm. 1—*Fiscal eclesiástico*, núm. 1—*Documento*, núms. 1 y 2—*Prueba*, núms. 18, 19, 21, 26 y 27—*Obligación*, núm. 1—*Arbitro-arbitrador*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 3—*Alegar*, núm. 1—*Escrito*, núm. 2—*Peritos*, núm. 7—*Testigos*, núm. 1—*Apelación*, núm. 4—*Prueba testimonial*, núm. 6—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Documentos*, núm. 5—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Documentos*, núm. 5—*Embargo preventivo*, núm. 29.

1. Término extraordinario —De prueba, al pedirlo debe

antes de los alegatos se practiquen las diligencias de prueba que no lo hubiesen sido dentro del término *por omisión de las autoridades* encargadas de recibirlas; no se halla en este caso la absolución de posiciones; y si bien es cierto que el art. 125 acuerda á cada parte el derecho de pedir la absolución de posiciones desde que la demanda queda contestada hasta la citación para sentencia, este derecho no implica la suspensión de los términos que la ley ha establecido para la sustanciación de las causas, desde que puede ejercitarse con independencia completa de dichos términos. Véase: Inst., tom. 1, verb. Término, núm. 2581.

16—Así lo determina el art. 103 del Cód. de Proc., cuando dice: Si la cuestión fuere de puro derecho se dará un nuevo traslado *por su orden*.

17—Al otorgarse una escritura se da cumplimiento á un contrato; los Jueces no pueden prorrogar los términos de éstos, solo tienen facultad para prorrogar los términos judiciales.

1—Siempre que los hechos á probarse hubiesen tenido lugar en la Ca-



TER

espresarse, no solo la residencia de los testigos, sino también los nombres—Jur. Civ., tom. 1, pág. 385, Ser. 2^a.

2. Término extraordinario—Pedido en tiempo, debe concederse aun cuando la prueba que se solicita no sea testimonial ni instrumental—Jur. Com., tom. 6, pág. 386, Ser. 1^a.

Término extraordinario—Véase: *Posiciones*, núm. 14.

1a. Término fatal—El fijado para observar las cuentas rendidas por el administrador de la testamentaria es impropio—Jur. Civ., tom. 9, pág. 186, Ser. 1^a.

Término probatorio—Véase: *Auto*, núm. 6—*Diligencia*, núm. 1—*Días feriados*, núm. 1—*Testigos*, núm. 1—*Absolución de posiciones*, núm. 1.

1b. Términos—Si bien se interrumpen por los incidentes, vuelven á correr al terminar éstos sin necesidad de nuevo decreto—Jur. Civ., tom. 2, pág. 495, Ser. 2^a.

1. Términos judiciales—En lo civil, no corren durante

pital, porque si hubiesen tenido lugar fuera de ella, basta con dar el domicilio sin indicar los nombres—Art. 114, inc. 2^o, Cód. de Proc.

1a—El art. 682 del Cód. de Proc. dice en su última parte: «Vencido este término no será admisible reclamación alguna. Si se hiciere en oportunidad, el Juez la oír y determinará en juicio verbal, mandando depositar el saldo que resultare.» Es evidente que el señalamiento de un plazo preciso, la expresión clara de que después de su vencimiento no se recibe reclamación alguna, y por último la agregación final de que en caso de ser hecha en oportunidad se le dará curso, demuestra que el plazo es fatal. La redacción del artículo así lo demuestra, pues no se comprende la ampliación de un término, cuando la ley espresamente ordena que pasado no se admita ya reclamo alguno. Los términos, según los prácticos como Caravantes, se consideran improrrogables cuando haya prevención expresa y terminante de que pasados, no se admitan en juicio la acción, excepción, recurso ó derecho para que fueron concedidos.

1b—Art. 41, Cód. de Proc., mas debe tenerse presente que si el término suspendido por el incidente es de los declarados fatales para las partes, cuando el Juez recupera su jurisdicción, en caso de haber sido elevado al Superior, la notificación debe ser hecha personalmente ó por cédula para que el término empiece nuevamente á correr.

TER-TES

los días de Semana Santa, en virtud de lo dispuesto por el Reglamento de la Exma. Cámara, de 7 de Diciembre de 1882—Jur. Civ., tom. 2, pág. 141, Ser. 2º.

2a. Términos judiciales—La prórroga se cuenta desde la fecha en que se notifica á quién se concede, aun cuando en el intervalo haya vencido el término prorrogado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 106, Ser. 2º.

Terrenos—Véase: *Destinde*, núm. 1.

1a. Terrenos fiscales—Que sean necesarios á una empresa particular, la concesión gratuita, por razones de utilidad pública, no basta para trasferirle el dominio sobre ellos, es obligación del concesionario señalarlos y pedir se le trasfiera la propiedad por instrumento especial—Jur. Civ., tom. 3, pág. 543, Ser. 2º.

Terrenos limítrofes—Véase: *Condóminos*, núm. 2.

Terrenos públicos—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

1b. Testamentaria—Iniciada ante dos Jueces igualmente competentes debe ser resuelta con arreglo á la prelación en tiempo—Jur. Civ., tom. 6, pág. 231, Ser. 1º.

2b. Testamentaria—Solo puede ser declarada insolvente después de aprobado el inventario y tasación de bienes—Jur. Civ., tom. 7, pág. 289, Ser. 1º.

2a—Mientras no se haga saber la concesión ó denegación de la prórroga, el interesado no puede hacer nada que se relacione con la diligencia que debe evacuarse, porque ignorando si la prórroga se le concederá ó no, sería un trabajo hecho inútilmente en caso de serle denegada.

1a—El dominio de bienes raíces se adquiere por la escritura pública de enagenación seguida de la tradición. El art. 1184, inc. 1º del Cód. Civ., establece que los contratos que tuviesen por objeto la transmisión de bienes inmuebles deben ser hechos en escritura pública bajo pena de nulidad.

1b—Para que un Juez pueda ser considerado como que ha prevenido en un juicio sucesorio, no basta que se haya iniciado ante él el juicio, es necesario que se haya comprobado en forma legal la defunción del causante.

2b—Solo así puede constatarse si el monto de las deudas excede al del acervo testamentario.



TES

Testamentaria—Véase: *Venta*, núm. 1—*Tutor*, núm. 1—*Jurisdicción testamentaria*, núm. 1—*Albaceas*, núm. 2—*Honorarios*, núms. 20 y 22.

Testamentarias—Véase: *Cónsules extranjeros*, núm. 1.

Testamento—Véase: *Herencia*, núm. 1—*Nulidad*, núms. 4 y 5—*Competencia*, núm. 3—*Paternidad*, núm. 1—*Medida preparatoria*, núm. 1—*Filiación natural*, núm. 5.

Testamento ológrafo—Véase: *Certificado*, núm. 1.

1. Testamento privado—Aun cuando sus declaraciones no basten para justificar la propiedad que por ellas se prometa adjudicar, la transacción judicial por la cual se reconozca la validez de esas declaraciones, es instrumento público bastante para justificarla—Jur. Civ., tom. 1, pág. 523, Ser. 2ª.

1a. Testamento público—Al que se oponga á su cumplimiento corresponde justificar que fué revocado por el otorgante—Jur. Civ., tom. 2, pág. 415, Ser. 2ª.

1b. Testar palabras—De un escrito, el auto que lo ordena no es apelable—Jur. Civ., tom. 1, pág. 272, Ser. 2ª.

1c. Testigo—El que se contradice en su dicho no hace fe—Jur. Civ., tom. 6, pág. 58, Ser. 1ª.

2. Testigo—Puede prestar nueva declaración siempre que la primera se hubiese estraviado sin culpa del interesado—Jur. Civ., tom. 1, pág. 405, Ser. 2ª.

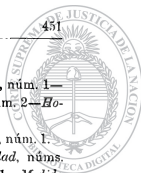
Testigo—Véase: *Término extraordinario*, núm. 1.

1a—El documento constituye una prueba completa respecto de los hechos que enuncia—Art. 993, Cód. Civ.—El testamento no puede ser revocado sino por otro testamento posterior, hecho en alguna de las formas autorizadas por el Cód.—art. 3826, Cód. Civ.—El que alega la revocación debe producir ese nuevo instrumento.

1b—Este auto no resuelve ningún artículo, ni trae gravamen irreparable, condiciones requeridas para que un auto sea apelable según lo dispuesto en el art. 226 del Cód. de Proc. Tampoco puede considerarse como corrección disciplinaria para que sea apelable con arreglo al art. 55.

1c—Ley 14, tít. 16, Part. 3ª.

2—No hay inconveniente alguno en que así se proceda, pues el acto



TES

1. Testigos—Deben ser presentados en tiempo hábil para que la lista pueda ser exhibida y declaren dentro del término—Jur. Civ., tom. 3, pág. 337, Ser. 2º.

2. Testigos—Presentados dentro del término para cuyas declaraciones el Juzgado fijase un día fuera de él, deben ser nuevamente citados, si no comparecieren, aun cuando el término estuviese vencido con exceso—Jur. Civ., tom. 7, pág. 223, Ser. 1º.

3. Testigos—Las ampliaciones que éstos hacen al ratificar en el plenario las declaraciones prestadas en el sumario no pueden importar contradicción ni anular sus testimonios—Jur. Crim., tom. 6, pág. 107, Ser. 1º.

Testigos—Véase: *Obligación*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 12—*Declaración*, núms. 1 y 2—*Declaraciones*, nú-

debe celebrarse con todas las solemnidades y prescripciones que el Código establece: tampoco puede oponerse á ello la ley 30, tít. 16, Part. 8º, pues ésta se refiere al testigo que después de haber declarado, habla con alguna de las partes «e de si tornasse é dicesse, que avia en su dicho alguna cosa de mejorar ó de menguar». Debe tenerse presente que nuestra ley está basada en el sistema de la prueba pública y que las antiguas prescripciones tenfan por base la mas absoluta reserva, no siendo por consiguiente hoy aplicables éstas últimas.

1.—La prueba debe ser pedida, ordenada y practicada dentro del término—art. 118, Cód. de Proc.—El art. 184, exige que la lista esté de manifiesto en la oficina durante tres días antes del examen: si la prueba se pide cuando ya no hay tiempo suficiente para que la lista esté en exhibición durante los tres días ya las declaraciones no pueden producirse dentro del término probatorio y serfan por consiguiente ineficaces.

2.—En el caso presente, la parte presentó la lista de testigos ocho días antes, de modo que si el Juzgado hubiese señalado la audiencia dentro de los tres días siguientes á su presentación, la parte siempre hubiese estado dentro del término para solicitar una nueva citación: mas si por causas ajenas al litigante, el Juzgado fijó la audiencia fuera del término, esta circunstancia no puede redundar en perjuicio de su prueba, pues que la causa es imputable á las autoridades encargadas de diligenciarlas—Art. 118, Cód. de Proc.

3.—Siempre que estas ampliaciones no estén en contradicción con la primera declaración prestada.



TES—TIT

meros 1 y 6—*Liquidación*, núm. 2—*Tacha de testigos*, número 1—*Confesión extrajudicial*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1—*Matrimonio*, núm. 1—*Paternidad*, núm. 1—*Información*, núm. 2—*Examen de testigos*, núm. 1—*Nómina de testigos*, núm. 1—*Acreebtor*, núm. 5—*Injurias*, núm. 2—*Principio de prueba por escrito*, núm. 1—*Prueba testimonial*, núm. 6—*Escritura pública*, núm. 1—*Peritos*, núm. 6.

Testigos legos—Véase: *Firma*, núm. 1.

1a. Testigos presenciales—Que en sus declaraciones se limitan simplemente á esponer los hechos que vieron ú oyeron, no pueden ser invalidados por aquellos que solo manifiestan ignorarlos—*Jur. Com.*, tom. 5, pág. 525, Ser. 1ª.

1b. Testimonio—Consentido el auto que ordena su agregación, la parte no puede oponerse, aun cuando haya vencido, el término de prueba—*Jur. Civ.*, tom. 2, pág. 436, Ser. 2ª.

2. Testimonio—El Juzgado para mejor proveer puede ordenar que lo presente el demandado por acción reivindicatoria—*Jur. Civ.*, tom. 2, pág. 438, Ser. 2ª.

Testimonio—Véase: *Testigos*, núm. 3—*Mensura*, núm. 1—*Copias*, núm. 1.

Tiro—Véase: *Tentativa criminal*, núm. 1.

Titulares—Véase: *Cámara civil*, núm. 3.

Título—Véase: *Vendedor*, núm. 1—*Comprador*, núm. 3—*Sucesor*, núm. 1—*Bienes*, núm. 1—*Abogados*, núm. 1—*Domínio*, núm. 1—*Escribanos*, núm. 2—*Contrato*, núm. 1—*Rivalidad*, núm. 1—*Abogado*, núm. 2—*Escribanos*, núm. 4—*Información*, núm. 5.

1a—En el primer caso los testimonios son positivos, en el segundo negativos. Es posible que muchos testigos ignoren un hecho, aun cuando sea cierto y en realidad hubiere acaecido: tal sucedería si dos testigos afirmaran su existencia ella se probaría legalmente, y por el contrario, mil no probarían su falsedad porque lo ignorasen.

1b—Debe reclamarse del auto que ordena la agregación.

2—Art. 57, inc. 1º Cód. de Proc.



TIT

Título de dueño—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 1.

Título ejecutivo—Véase: *Falsedad*, núm. 5—*Inhabilidad de título*, núm. 2—*Excepción de simulación*, núm. 1.

Título oneroso—Véase: *Posesión*, núm. 7—*Locación de servicios*, núm. 2.

Título vicioso—Véase: *Municipalidad*, núm. 2.

Títulos—Véase: *Revalidación*, núm. 2—*Costas*, núm. 22—*Prescripción*, núms. 16 y 22—*Jactancia*, núm. 5—*Compra-venta*, núm. 3.

1. Títulos de propiedad—No son título ejecutivo para cobrar alquileres si el demandado no confiesa previamente su carácter de locatario y el importe del alquiler—Jur. Civ., tom. 6, pág. 113, Ser. 1ª.

2. Títulos de propiedad—Agregados á un espediente archivado, no pueden ser desglosados—Jur. Civ., tom. 2, pág. 437, Ser. 2ª.

3. Títulos de propiedad—Es suficiente la información judicial debidamente aprobada, por la que se justifica la adquisición del dominio por la posesión continuada de más de 40 años—Jur. Civ., tom. 2, pág. 249, Ser. 2ª.

1—Aunque un título de propiedad prueba el dominio de la cosa ocupada por un tercero, sin embargo no es título ejecutivo, éste lo constituye el contrato de locación por el privilegio y derecho de prenda que la ley acuerda al locador sobre los bienes introducidos en la casa locada, y este contrato no se comprueba con el título de propiedad. Cuando no hay contrato escrito, el locador tiene un medio muy fácil acordado por la ley para iniciar el juicio ejecutivo. El art. 466 del Cód. de Proc. establece: «En la ejecución por alquileres se pedirá que el demandado manifieste previamente si es locatario, y en caso afirmativo, que exhiba el último recibo». Así el Juez queda suficientemente habilitado para proceder con conocimiento de las condiciones de la locación y del precio de la cosa locada constatado por el último recibo que el locatario está obligado á exhibir.

3—Arts. 2524 y 4015, Cód. Civ. Ley 7, tft. 29, Part 3ª. Véase: Inst. tom. 1, verb. *Posesión*, núm. 2053; *Posesión continuada*, núms. 2060 y 2061: F. S. C. P. toms 5, pág. 170; 7, pág. 426, Ser. 1ª.



TIT

4. Títulos de propiedad—En una demanda de reivindicación, el Juzgado puede ordenar para mejor proveer, que el demandado los presente—Jur. Civ., tom. 2, pág. 438, Ser. 2ª.

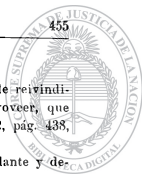
5. Títulos de propiedad—Cuando el demandante y demandado presentan cada uno de ellos los que hubiesen adquirido de diferentes personas sin que pueda establecerse cuál era el verdadero propietario, se presume serlo el que tiene la posesión—Jur. Civ., tom. 1, pág. 131, Ser. 2ª.

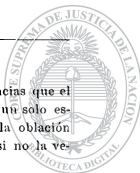
6. Títulos de propiedad—Es suficiente como tal la posesión de terrenos situados en el municipio de esta ciudad, continuada sin interrupción por cuarenta ó mas años—Jur. Civ., tom. 7, pág. 110, Ser. 1ª.

4—Es un derecho que le acuerda el art. 215 del Cód. de Proc. como asimismo el art. 57, inc. 1º. Véase: Inst. tom. 1 verb. Diligencia para mejor proveer, núm. 879.

5—Art. 2792, Cód. Civil; véase también el 2791.

6—La ley 21, tít. 29, Part. 3ª, hacía prescriptible la cosa poseída durante 30 años *aunque el poseedor no tuviera título ni buena fe*. La ley 7 siguiente, autoriza la prescripción de siervos ó ganados, pejugar ó navio, ú otra cosa cualquiera, semejantes de estas, las cuales, magüer sean comunalmerte, del consejo de alguna ciudad, ó villa, bien se podría ganar por tiempo de 40 años, e esto es, porque magüer sean de todos comunalmemente, non usan della todos, así como de las otras cosas sobredichas». Este principio pasó después á formar parte de la R. C. Ley 1ª, tít. 15, lib. 4º. Se encuentra también en la Legislación de Indias, Ley 14, tít. 12, lib. 4º. En la Real Instrucción de 15 de Octubre de 1754, su art. 2º, manda que se tenga presente lo dispuesto, entre otras leyes, por la 14 de Indias, y en el 4º dispone, que en defecto de títulos deberá bastar la justificación que hicieren de aquella antigua posesión *como título de justa prescripción*. En la Ordenanza de Intendentes para el Virreinato de Buenos Aires del año 1782, les encarga á los Virreyes proceder de acuerdo con la Real Instrucción. La ley de 29 de Julio de 1867 prescribe que: «la posesión de terrenos situados en el municipio de esta ciudad, continuada sin interrupción por 40 ó mas años *forma suficiente título de propiedad* contra toda gestión de dominio por parte del Fisco ó de las Municipalidades.» El art. 4016 del Cód. Civil dice: «Al que ha poseído durante 30 años, sin interrupción alguna, no puede oponérsele, *ni la falta, ni la nulidad del título, ni la mala fe en la posesión*»; y el 3951 establece «que el





TIT—TRA

7. Títulos de propiedad—Todas las deficiencias que el comprador encuentre deben ser manifestadas en un solo escrito, y salvadas éstas, el Juzgado puede ordenar la oblación del precio, dándolo por desistido de la compra si no la verifica—Jur. Civ., tom. 7, pág. 241, Ser. 1ª.

8. Títulos de propiedad—Cuando los vicios que señala el comprador en remate judicial se declaran subsanados por el Juez de la causa, no debe haberse lugar al desistimiento—Jur. Civ., tom. 7, pág. 328, Ser. 1ª.

9. Títulos de propiedad—Que deben inscribirse—Jur. Civ., tom. 7, pág. 41, Ser. 1ª.

10. Títulos de propiedad—Que adolezcan de algún vicio que no pueda subsanarse en breve tiempo, el comprador deberá optar entre el desistimiento de la compra sin responsabilidad alguna ó la realización de ella con los defectos de que adolezca—Jur. Civ., tom. 8, pág. 519, Ser. 1ª.

Toma de razon—Véase: *Embargo*, núm. 2.

Trabajo personal—Véase: *Alimentos*, núm. 3.

1. Trabajos ó materiales—Los que los ponen en una obra

Estado General ó Provincial y todas las personas jurídicas están *sometidas á las mismas prescripciones que los particulares en cuanto á sus bienes ó derechos susceptibles de ser de propiedad privada*. El sumario que se comenta dice que es suficiente título de posesión de 30 ó más años, mas este es un error como puede verse por lo que se ha espuesto. La posesión debe ser de 40 ó más años, por cuanto la posesión de 30 años requerida por nuestro Código no ha podido operarse desde su vigencia, que solo data del año 1871.

7—Art. 522, Cód. de Proc. Véase: Inst. tom. 1, verb. Remate judicial, núm. 2353.

8—El art. 522 del Cód. de Proc. solo autoriza el desistimiento cuando hay vicios que no sean subsanables en breve tiempo: mas si los vicios son subsanables en breve tiempo ó si han sido ya subsanados el desistimiento no puede admitirse.

10—El art. 522 del Cód. de Proc. así lo prescribe. Véase: Inst. tom. 1, verb. Remate Judicial, núms. 2363 y 2365 y notas respectivas.

1—Art. 1645, Cód. Civ.

TRA

ajustada por un precio determinado, no tienen acción contra el propietario de ella, sino hasta la cantidad que este adeude al empresario—Jur. Civ., tom. 6, pág. 118, Ser. 1ª.

1a. Tradición—Aunque exista la del inmueble, el vendedor tiene derecho para reivindicarlo, si no se hubiese firmado instrumento público de enagenación ni pagado el precio—Jur. Com., tom. 5, pág. 264, Ser. 1ª.

Tradición—Véase: *Comprador*, núm. 6—*Dominio*, núm. 5—*Tercería*, núm. 5—*Vendedor*, núm. 2.

Tramitación—Véase: *Jueces*, núm. 1.

1b. Trámite—Esencial del procedimiento, su omisión produce la nulidad de la resolución recaída—Jur. Civ., tom. 1, pág. 126, Ser. 2ª.

Trámite—Véase: *Nulidad*, núm. 8.

Trámites—Véase: *Litigio*, núm. 1—*Jueces del crimen*, núm. 2.

1c. Tramway—La vía que recorre la calle de Balcarce entre Alsina y Rivadavia puede ser usada por la Compañía «Ciudad de Buenos Aires» y «Anglo Argentina», sin que ninguna pueda alegar la exclusiva propiedad y sin que el uso

1a—El art. 1184 del Cód. Civ., establece que la transmisión de bienes inmuebles exige, bajo pena de nulidad, para la validez del contrato, que se reduzca á escritura pública: mientras esta formalidad no se cumpla, solo existe una obligación de hacer, y los artículos siguientes solo autorizan al comprador á compeler al vendedor al cumplimiento del contrato. Este razonamiento se robustece si se tiene en cuenta que el art. 2609 establece como uno de los medios de extinguirse el dominio, la enagenación de la cosa, pero con la observación de que en los inmuebles el comprador solo adquiere el dominio después de firmado el instrumento público de enagenación según lo de la tradición. No firmándose escritura pública, el dominio de la cosa la conserva el vendedor y se encuentra en las condiciones exigidas por la ley para intentar la acción reivindicatoria—Art. 2758, *Ibid*.

1b—Art. 237, Cód. de Proc.

1c—Así resulta de las concesiones del Gobierno y de la forma en que éstas fueron puestas en práctica al construirse la vía.

TRA

común importe una servidumbre para ninguna de ellas—Jur. Civ., tom. 7, pág. 349, Ser. 1^a.

1a. Tramways—La Municipalidad puede suspender el tránsito de sus coches si no cumplen las ordenanzas sobre empedrados—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 1^a.

Tramways—Véase: *Contratos*, núm. 2.

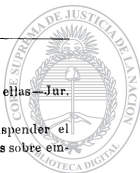
1b. Transacción—Sobre derechos hereditarios, hecha por un precio determinado, no importa una venta de los bienes que formaban el cuerpo de la herencia, y el acreedor hipotecario, es preferido sobre los simples acreedores quirografarios, cuyos derechos solo se justifican por la transacción—Jur. Civ., tom. 6, pág. 551, Ser. 1^a.

2. Transacción—Hecha por uno de los condóminos, sobre el bien en condominio, ni perjudica ni aprovecha á los demás, quienes pueden continuar independientemente sus acciones—Jur. Civ., tom. 1, pág. 273, Ser. 2^a.

1a—La obligación de las Empresas tiene su fundamento ú origen en la ley de Octubre de 1863, que autorizó al Ejecutivo Provincial para permitir el establecimiento de Tramways. El Concejo Deliberante, aun prescindiendo de esa obligación, tiene facultad para imponer á las Empresas como á todos los habitantes del municipio el cumplimiento de sus ordenanzas sobre viabilidad, desde que su Ley Org. le atribuye espresamente la facultad de «Proveer á la construcción, conservación y mejora de empedrados».—Inc. 6 del art. 46—La suspensión del movimiento solo figura como extremo conminatorio, para el caso de resistencia al abono de las multas. Esa ordenanza va hasta prescribir que en caso de resistir los tramways un inconveniente para el tráfico público, los Empresarios están obligados á levantar los rieles.

1b Porque la transacción hecha por uno de los interesados, ni perjudica, ni aprovecha á tercero, ni á los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles—Art. 851, Cód. Civ.

2—Los condóminos no están inhibidos para celebrar transacciones sobre la cosa poseída en común, pues no están entre los enumerados en el art. 841, Cód. Civ. Por el contrario, gozan respecto de su parte de todos los derechos inherentes á la propiedad, compatibles con la naturaleza de ella y pueden ejercerlos sin el consentimiento de los demás copropietarios, puede enagenarla, hipotecarla, etc.—arts. 2676, 2677, 2678 y 2682 ibid —



TRA

3. Transacción—Que entre otras cosas estatuye el pago de honorarios por una de las partes, abarca también las diligencias ulteriores que para llevarla á debido efecto se suscitan—Jur. Civ., tom. 7, pág. 228, Ser. 1ª.

4. Transacción—Solo puede rescindirse por mutuo consentimiento ó por declaración judicial, previa audiencia de las partes—Jur. Civ., tom. 8, pág. 287, Ser. 1ª.

5. Transacción—Por la cual se defiende al Juzgado la resolución de quien debe pagar las costas, hace justa la sentencia por la cual se resuelve el pago en el orden en que han sido causadas—Jur. Civ., tom. 3, pág. 363, Ser. 2ª.

6. Transacción—Por la cual convienen las partes en el nombramiento de peritos y el pago de las costas á cargo de la que no se conforme con el dictamen, solo se entiende de las que se causen en ese juicio, pero no en los incidentes que puedan surgir, que deberán regirse por las leyes comunes—Jur. Civ., tom. 9, pág. 309, Ser. 1ª.

7. Transacción—No puede considerarse tal ni obligar á la reposición del sello correspondiente, el pago de la obliga-

Las transacciones no transmiten, sino que reconocen derechos y los declaran—arts. 832, 836 y 850 ibid.

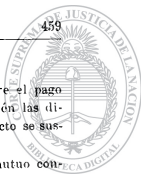
3—Esas diligencias son una emergencia de la transacción y como tal van comprendidas en lo principal.

4—La transacción es un acto jurídico bilateral que declara ó reconoce derechos, y como tal necesita el concurso de la voluntad de las partes para su rescisión.

5—En este caso no hay una sentencia, propiamente habiendo, sino un auto que aprueba la transacción por la que las partes arreglan los puntos discordantes, definiendo al Juez la determinación de quién pagará las costas.

6—Siempre que los incidentes se hubiesen promovido sin culpa del obligado por la transacción. Véase el núm. 3.

7—La ley de impuestos es una ley que debe interpretarse restrictivamente, y como entre sus disposiciones no está comprendido el caso ocuriente, sus preceptos no pueden en justicia serle aplicados.



TRA—TRI

ción renunciando á los trámites del juicio—Jur. Com., tom. 6, pág. 595, Ser. 1ª.

Transacción—Véase: *Auto*, núm. 2—*Precio*, núm. 1—*Partición*, núms. 1 y 2—*Inhabilidad de título*, núm. 4.

Transacción judicial—Véase: *Testamento privado*, número 1.

1a. Transacciones—Las posteriores derogan las de fecha anterior en cuanto las modifiquen ó desvirtúen—Jur. Civ., tom. 7, pág. 252, Ser. 1ª.

Transacciones—Véase: *De oficio*, núm. 2—*Orden público*, núm. 1.

Trasferencias—Véase: *Escribanos*, núm. 1.

Traslado—Véase: *Término*, núm. 12—*Hechos*, núm. 4.

Traslados—Véase: *Cónsules*, núm. 1.

Tribunal—Véase: *Miembros*, núm. 1—*Cámara*, núm. 8—*Conjueces*, núm. 2.

1b. Tribunal arbitral—No obstante haber sido pactado en escritura pública, su constitución debe hacerse en otro instrumento público que llene los requisitos que la ley exige para la validez del laudo—Jur. Civ., tom. 9, pág. 128, Ser. 1ª

Tribunal de amigables componedores—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 2.

1c. Tribunales—No pueden reconocer como lícitas y dignas de remuneración aquellas diligencias ó trabajos ante los

1a—La transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, dice el art. 850 del Cód. Civ. Poco importa que los derechos extinguidos por la nueva transacción hubiesen sido materia de otra que la precedió.

1b—El art. 771 del Cód. de Proc. enumera los requisitos necesarios para el compromiso arbitral, y el 772 fulmina con el vicio de nulidad el compromiso en que falte cualquier de los requisitos enumerados en el 771. Por consiguiente si en una escritura se pacta el arbitraje una vez llegado el caso deben llenarse todos los requisitos por la constitución del compromiso.

1c—Para hacer exigible una obligación de esta naturaleza sería necesario desconocer los principios sentados en los arts. 602, 530, 953, 1044 y 1626



TRI

Poleros Públicos, que necesitan para desenvolverse de los favores de la amistad, de la influencia ó de las recomendaciones que se ponen en juego para con los funcionarios encargados del despacho del expediente — Jur. Civ., tom. 1, pág. 323, Ser. 2ª.

Tribunales—Véase: *Papel sellado*, núm. 2.

1. Tribunales de comercio—Declarada su incompetencia para conocer en el litigio, los Jueces de lo Civil no pueden declararse también incompetentes—Jur. Civ., tom. 6, pág. 361, Ser. 1ª.

2. Tribunales de comercio—Son competentes para entender en una demanda de rendición de cuentas proveniente de un mandato otorgado por una sociedad comercial—Jur. Com., tom. 5, pág. 152, Ser. 1ª.

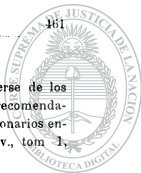
3. Tribunales de comercio—No pueden autorizar á la mujer casada para ejercer actos de comercio, sin la venia del esposo—Jur. Com., tom. 6, pág. 280, Ser. 1ª.

del Cód. Civil. Son actos ilícitos, contrarios á la moral y condenados por las buenas costumbres.

1. Tratándose de un punto resuelto por un Tribunal superior no podría ponerse nuevamente en tela de juicio en un Juzgado de 1ª Instancia, porque ello importaría una revisión de la sentencia. No se trata aquí de una cuestión de competencia promovida en la forma prescrita en el Tít. 10 del Cód. de Proc., sino se trata de la resolución de un artículo. El art. 87 del Cód. de Proc. viene á dar mayor fundamento al sumario cuando dice: «consentida la providencia en que el Juez se declare sobre su competencia, no podrá en adelante deducirse incompetencia por las partes, ni de oficio por los Jueces inferiores ó Superiores». Si el pronunciamiento de oficio tiene este alcance ¿qué no será de un artículo que ha sido resuelto también por el Superior mediante el recurso respectivo? La tendencia ha sido eliminar y evitar en lo posible estas cuestiones como puede inferirse del art. 87 citado. La sentencia de la Cámara de lo Comercial, hace cosa juzgada al respecto, haciendo imposible á las partes el volver sobre el mismo punto materia de discusión.

2—Aquí se trata de un mandato para administración de operaciones mercantiles, quedando consiguientemente sometido á la jurisdicción mercantil, por ser éste un contrato de comercio—art. 290, Cód. de Com.

3—Véase: verb. *Mujer casada*, núm. 1 y nota.



TRI

1. Tribunales de la capital—Son incompetentes para conocer en las demandas contra el Banco Nacional—Jur. Civ., tom. 6, pág. 466, Ser. 1ª.

2. Tribunales de la capital—Aunque nacionales, son incompetentes para entender en juicios cuyo conocimiento corresponde á los federales —Jur. Civ., tom. 2, pág. 203, Ser. 2ª.

3. Tribunales de la capital—Deben conocer de todas las ejecuciones que se sigan contra un concursado ante ellos —Jur. Com., tom. 6, pág. 207, Ser. 1ª.

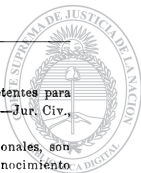
4. Tribunales de la capital—Son competentes para conocer en los juicios que por injuria ó calumnia se entablen contra la prensa—Jur. Crim., tom. 6, pág. 311, Ser. 1ª.

1—La S. C. N. ha declarado que el Banco Nacional solo puede ser demandado ante la Justicia Federal, porque es una institución pública creada para fines de administración Nacional, y porque el caso tiene su punto de partida en una ley del Congreso, que creó el Banco, y le dió su capacidad, sus derechos y prerrogativas: siendo esto así, el caso se encuentra comprendido en el inc. 4º del art. 104 de la Ley Org. de los Tribunales de la Capital. Debe tenerse presente que la jurisdicción de los Tribunales de la Capital no es concurrente con la de los Tribunales Federales. La jurisdicción federal tiene su origen en la Constitución y en las leyes del Congreso que han reglamentado la materia. Esta jurisdicción no puede ser limitada por la creación de nuevos Tribunales que aunque son nacionales no ejercen jurisdicción federal. F. S. C. N., tom. 9, págs. 182 y 329, Ser. 2ª.

2—Nuestra Ley Org. de los Trib. de la Capital ha separado las funciones del Juez Federal de las de los demás Jueces nacionales; atribuyendo al primero el conocimiento de las causas que se enumeran en la Ley de 14 de Setiembre de 1863 y en el art. 1º del título del Juez Federal, de la Ley Orgánica de los Trib. de la Capital. A los efectos de su competencia, los Juzgados nacionales son considerados como provinciales. Véase nota anterior.

3—Art. 1536, Cód. de Com.

4—Véase: verb. Jurado y su nota. Puede igualmente consultarse la notable obra publicada por el Dr. Rivarola, titulada Exposición y crítica del Cód. Penal de la Rep. Arg., tom. 2, pág. 265, núms. 732 y siguientes donde puede encontrarse tratado este importante punto del derecho Penal, con abundantes citas y sólida erudición.



TRI—TUT

Tribunales de la capital—Véase: *Ley Org. de los Trib. de la Capital*, núm. 2—*Sellos provinciales*, núm. 1.

1. Tribunales de paz—Fijando los Defensores de ausentes que corresponde á cada uno de ellos—*Jur. Com.*, tom. 5, pág. 571, Ser. 1ª.

Tribunales de paz—Véase: *Asesores de menores*, núm. 1.

Tribunales eclesiásticos—Véase: *Recurso de fuerza*, números 3 y 4.

Tribunales ordinarios—Véase: *Arbitros*, núm. 6—*Obligaciones*, núm. 2.

1a. Turbación—Debe tenerse como tal la resolución que ordena la posesión en vista de los títulos sin oír al poseedor—*Jur. Civ.*, tom. 8, pág. 405, Ser. 1ª.

Turbación—Véase: *Interdicto de obra nueva*, núm. 1.

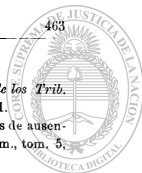
1. Turno—Estableciéndolo para el conocimiento de las interlocutorias y juicios sumarios—*Jur. Civ.*, tom. 1, pág. 27, Ser. 2ª.

Turno—Véase: *Demanda*, núm. 1—*Incompetencia*, núm. 4.

1b. Tutela—Las disposiciones que facultan á los Jueces

1—Los requisitos exigidos por la ley para que proceda el interdicto de retener, son: 1º Que el que lo intente se halle en actual posesión. 2º Que se haya tratado de inquietarlo por actos materiales—art. 574, Cód. de Proc.—La turbación no deja de ser un acto material por el simple hecho de haberse llevado á cabo en virtud de mandato judicial, desde que esa orden no es el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, sino un simple mandamiento sin audiencia ni juicio alguno. Se argumenta en contra, diciendo: que la posesión dada con orden judicial, constituye al tenedor en simple detentador, porque sobre esa posesión pesa la intervencion del Juez, que sus mandatos no pueden ser equiparados á las violencias de los particulares, como se desprende de lo dispuesto en el art. 2470 del Cód. Civ. A esto se contesta diciendo: que el art. 2383 ampara al poseedor del inmueble aun contra un mandato judicial, porque para juzgarse hecha la tradición de los inmuebles, no estando el adquirente en la simple tenencia de ellos, es necesario que el inmueble esté libre de toda otra posesión y sin contradictor que se oponga á que el adquirente la tome.

1b—Aunque el art. 475 del Cód. Civ. establece que las leyes que rigen la tutela son aplicables á la curaduría de los incapaces, esto sin embargo debo



TUT

para proveerla á los menores por inacción de los parientes, no son aplicables á los incapaces, cuya curatela, debe ser desempeñada por los parientes que la ley designa—Jur. Civ., tom. 6, pág. 479, Ser. 1ª.

2. Tutela.—Las diferencias existentes en vida del padre, no inhabilitan á la abuela materna para su ejercicio—Jur. Civ., tom. 3, pág. 171, Ser. 2ª.

1a. Tutela dativa.—No procede en favor del menor que tiene padre vivo y en ejercicio de la patria potestad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 221, Ser. 1ª.

1. Tutor.—El nombrado en vida del padre para ejercer acciones contra éste, carece de personería para intervenir en la testamentaria—Jur. Civ., tom. 6, pág. 231, Ser. 1ª.

2. Tutor.—Aun cuando no haya pedido en tiempo oportuno que el Juez fije la suma que debe invertir en la educa-

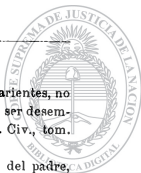
entenderse tan solo cuando los casos sean perfectamente análogos. La menor edad y la orfandad son hechos que todo el mundo fácilmente conoce, no sucede lo propio con la incapacidad de los mayores de edad, pues ésta requiere conocimientos especiales, como puede verse en los arts. 140 y 142, Cód. Civ. Por consiguiente la disposición del art. 378, no es aplicable por analogía á la curatela. Por otra parte, mientras que el art. 378 dice que los parientes de los menores huérfanos, están obligados á poner en conocimiento de los magistrados el caso de orfandad ó vacancia de la tutela, el 470 se limita á establecer que la declaración de incapacidad y nombramiento de curador, pueden pedirlo al Juez el Ministerio de Menores y todos los parientes del incapaz.

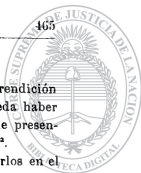
2.—La conformidad con las disposiciones de la ley es de presumir cuando no se manifiesta voluntad en contrario, y por lo tanto si el causante no manifiesta por medio de testamento su voluntad de que no se ejerza la tutela por medio de la abuela, es porque está conforme con la prescripción cuya ignorancia no es de presunción legal.

1.—Uno de los requisitos que el art. 377 del Cód. Civ. exige para que se provea de tutor al menor, es que *no esté sujeto á la patria potestad*

1a.—En este caso el nombramiento no puede estenderse al ejercicio de actos de administración en los bienes de la sucesión del padre, como sucedería si tuviere personería para intervenir en el juicio sucesorio: el nombramiento no confiere el carácter de tutor *ab-bona* del menor.

2.—Arts. 461 y 464, Cód. Civ.





TUT

ción de sus pupilos, los Tribunales al obligarlo á la rendición de cuentas deben fijar la que equitativamente pueda haber gastado y reconocerla como descargo sin necesidad de presentar justificativos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 489, Ser. 1^a.

3. Tutor—De los menores, no puede representarlos en el juicio que sobre rendición de cuentas inicie el que haya llegado á la mayor edad, debe nombrárseles tutor especial á ese solo objeto—Jur. Civ., tom. 1, pág. 269, Ser. 2^a.

4. Tutor—La facultad de los Jueces para nombrarlo, se circunscribe, siempre que haya parientes, á hacerlo entre ellos, un extraño solo puede serlo cuando todos los llamados fuesen incapaces —Jur. Civ., tom. 3, pág. 171, Ser. 2^a.

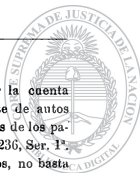
5. Tutor—Debe rendir cuenta de la tutela en el lugar donde la ha desempeñado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 55, Ser. 1^a.

Tutor—Véase: *Curador*, núm. 4.

3—El sumario sienta un principio que no es el que la resolución que le es relativa, ha sentado. El caso es el siguiente: un tutor lo es de varios menores hermanos, durante la tutela muere uno de ellos, sus hermanos son declarados herederos y el tutor, como es de consiguiente, debe rendir cuenta de la tutela del causante; en este caso la resolución dice, que debe nombrársele tutor á los herederos, porque el art. 460 del Cód. Civ. dispone, que acabada la tutela, el tutor debe dar cuenta justificada de su administración al menor ó á quien lo represente: estando los menores herederos bajo la acción tutiva del mismo tutor que debe rendir las cuentas relativas á la tutela del causante, es evidente que este mismo tutor no puede presentarlos, porque vendría á resultar que él mismo aprobaría sus cuentas.

4—Véase: Inst. tom. 1^o, verb. Tutor dativo, núm. 2675 y nota.

5—Así lo ordena el art. 463 del Cód. Civ. Esta rendición se refiere no solo á la rendición de cuentas durante la menor edad, sino también á la que debe rendirse por haber llegado á la mayor edad, pues este art. se refiere á las cuentas de que hablan los arts. 459 y 460. No puede alegarse que esta disposición se halle en oposición con el art. 4 del Cód. de Proc., porque la tutela ya sea que se considere como cargo público ó como contrato, tiene designado por la ley el lugar donde debe cumplirse y en tal caso el Juez competente es el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación.



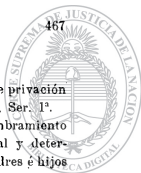
TUT

1. Tutor especial—Al solo efecto de revisar la cuenta particionaria, no puede nombrarse sin que conste de autos debidamente justificada la oposición de los intereses de los padres con los de los hijos—Jur. Civ., tom. 7, pág. 236, Ser. 1ª.

2. Tutor especial—En los autos testamentarios, no basta

1—Esta resolución vino á poner término á una práctica viciosa que era constantemente observada por los jueces con detrimento del peculio de los menores: ella se funda en que, el art. 264 del Cód. Civ. que define la patria potestad, es en su aplicación de amplia interpretación. El ejercicio de esta facultad puede ser restringido tan solo en los casos limitados señalados por el Cód. en sus arts. 239, 272, 282, 285, 303, 392 y 397, siendo Presunción de derecho la buena conducta de los padres y su abnegación para con sus hijos, como se desprende de los arts. 412, 413 y 415, cuando encargan á los tutores que guarden para sus pupilos el mismo cuidado que un padre de familia. El nombramiento de un tutor especial importa siempre una suspensión total, parcial ó condicional de la patria potestad que no debe hacerse extensiva á otros casos no enumerados por la ley. Los arts. 3454 y 3455 corroboran esta doctrina, pues el primero al establecer que los tutores y curadores, *los padres por los hijos... pueden pedir y admitir la partición pedida por otros*, demuestra que en todo el juicio no debe intervenir por el hijo más que el padre; y el segundo, al establecer que si el tutor ó curador lo es de varios incapaces que tienen intereses encontrados en la partición, se les debe dar á cada uno un tutor que lo represente en ella: lo que prueba que si la mente del legislador hubiese sido escluir al padre, cuando se trata de la partición, lo hubiese hecho espresamente como lo hace respecto á los tutores y curadores. Para que el nombramiento de un tutor especial fuese procedente fundado en el art. 397, inc. 1º, sería necesario que el Juez precisara un hecho real que constara de autos. Debe tenerse presente además, que las testamentarias, cuando hay menores interesados, se sustancian con intervención del Asesor de menores y del Fiscal; que las tasaciones de los bienes se hacen por peritos juramentados; que la cuenta particionaria se practica siempre por otro perito cuyas condiciones de idoneidad y competencia están fundadas en su título de suficiencia. Son todas éstas, circunstancias que garantizan los intereses de los menores. Sería además humillante para un padre el establecer la presunción de que desde el momento en que se procede á la partición hay intereses encontrados entre los suyos y los de sus hijos, y repugna á lo que hay de más noble en la naturaleza humana, el presumir que un extraño defendería mejor los intereses de los menores de lo que un padre respetaría el de sus hijos.

2—Mientras el padre no sea privado de la patria potestad, no pierde la



TUT

para nombrarlo la simple iniciación del juicio sobre privación de la patria potestad—Jur. Civ., tom. 7, pág. 246, Ser. 1ª.

3. Tutor especial—Para proceder á su nombramiento los Jueces solo pueden fundarse en un hecho real y determinado, la incompatibilidad de intereses entre padres é hijos no se presume—Jur. Civ., tom. 8, pág. 512, Ser. 1ª.

4. Tutor especial—Al hijo natural, solo debe nombrársele cuando existan bienes que administrar—Jur. Civ., tom. 3, pág. 606, Ser. 2ª.

Tutor especial—Véase: *Recusación*, núm. 8 — *Madre*, núm. 1.

representación legal de sus hijos—Arts. 304 y 397, inc. 2º, Cód. Civ.—Esta privación debe ser en virtud de sentencia ejecutoriada: si se admitiera como suficiente causal para el nombramiento de un tutor, la simple iniciación del juicio, sería anticiparse al fallo definitivo que puede declararlo inocente ó culpable. Tampoco puede afirmarse que desde el momento en que se inicia el juicio hay incompatibilidad entre los intereses del padre y los del hijo, por cuanto ninguna disposición del Cód. lo establece á no ser en los casos previstos en los arts. 230, 272, 282, 285, 303 y 392.

3—Véase: núms. 1 y 2 con sus notas respectivas.

4—El art. 328 del Cód. Civ., confiere al padre y á la madre, sobre sus hijos naturales, los mismos derechos que los padres legítimos tienen sobre sus hijos; la única limitación es la consignada en el art. 336 que les niega la administración y usufructo de los bienes. Así en un juicio sucesorio, no puede nombrársele tutor especial al hijo natural sino después de hecha la declaratoria de herederos y de ser puestos en posesión de los bienes de la herencia, pues solo puede ejercerse la administración de bienes cuando hay posesión. El hijo natural en este caso está sujeto á la patria potestad del padre ó madre natural, mientras sus bienes son administrados por el tutor: es decir que la madre gobierna la persona del menor, y el tutor gobierna sus bienes.

U



Ubicación—Véase: *Mensura*, núm. 2.

Uso—Véase: *Contrato*, núm. 14.

Usufructuario—Véase: *Interdicto de adquirir*, núm. 1.

Utilidad pública—Véase: *Poseedores*, núm. 1—*Terrenos fiscales*, núm. 1.

Utilidades—Véase: *Liquidadores*, núm. 1—*Mandatario*, núm. 9.

1. **Uxoricidio**—Debe ser castigado con presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado—Jur. Crim., tom. 5, pág. 471, Ser. 1ª.

1—Art. 212 del Cód. Penal.



Vale comercial — Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, num. 2 y 5.

1a. Validez — De actos anteriores a la vigencia del Código Civil, solo puede ser juzgada y resuelta con arreglo a las leyes que regían en la época del contrato — Jur. Civ., tom. 3, pág. 200, Ser. 2ª.

Validez — Véase: *Providencias*, núm. 1 — *Información*, número 2 — *Contrato bilateral*, núm. 1 — *Simulación*, núm. 9 — *Interdicto de despojo*, núm. 2.

Valor — Véase: *Hurto*, núm. 1.

Valor indeterminado — Véase: *Contrato*, núm. 4.

Valores a! portador — Véase: *Poseedor*, núm. 2.

1b. Vencido — El que lo sea en el juicio ejecutivo debe ser condenado a pagar todas las costas — Jur. Com., tom. 5, pág. 56, Ser. 1ª.

Vencido — Véase: *Costas*, num. 8, 15, 20 y 22.

Vencimiento — Véase: *Moneda*, núm. 1 — *Obligaciones a plazo*, núm. 1.

1c. Vendedor — Está obligado a indicar al comprador el paradero de todos aquellos antecedentes que relacionados con su título formen parte de su origen — Jur. Civ., tom. 6, pág. 190, Ser. 1ª.

1a — Art. 4044, Cód. Civ.

1b — Art. 507, Cód. de Proc.

1c — Art. 1329, Cód. Civ., concordante con el 1177.

VEN

Vendedor—Véase: *Compraventa*, núm. 3—*Comprador*, núm. 5—*Evicción*, núm. 1—*Dominio*, núm. 5.

1. Vendedor de cosas ajenas—Aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas é intereses que le resultasen de la anulación del contrato si éste hubiese ignorado que la cosa era ajena—Jur. Civ., tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

2a. Vendedor de cosas ajenas—Para que no se le considere incurso en el delito de estelionato ni se le condene en las pérdidas é intereses debe acreditar que ha hecho la tradición—Jur. Civ., tom. 8, pág. 571, Ser. 1ª.

Veneno—Véase: *Muerte*, núm. 1.

Venia—Véase: *Muger casada*, núm. 1.

1a. Venta—De muebles pertenecientes á una testamentaria ilíquida, es nula aun cuando el heredero estuviese en posesión de lo vendido y siempre que el comprador conozca el origen de los bienes—Jur. Civ., tom. 6, pág. 151, Ser. 1ª.

2. Venta—De parte de una concesión, no puede conceder al adquirente otros derechos que los inherentes á la parte vendida, aun cuando por el mismo contrato el vendedor tuviera derechos especiales aplicables al todo—Jur. Civ., tom. 7, pág. 349, Ser. 1ª.

3. Venta—La recepción de señal ó arras importa la reser-

2a—Así lo dice espresamente el art. 1178 del Cód. Civ. «si no hiciere tradición de ella, incurre en el delito de estelionato», dice la disposición citada.

1a—Art. 1329, Cód. Civ.

3—En el caso ocurrente no se dijo que el dinero se daba en calidad de señal ó arras, sino como *garantía de la compra*, que es la misma cosa porque señal ó arras, es lo que se da para asegurar el contrato ó su cumplimiento. Ni el art. 1202, ni ningún otro hace depender del Cód. Civ. la validez de la convención sobre arras, de fórmulas sacramentales que al efecto deban observarse: tampoco es aplicable el art. 1373, pues esto habla de la venta celebrada con la cláusula de poderse arrepentir el comprador y vendedor.



VEN

va para una de las partes de rescindir el contrato sin el consentimiento de la otra—Jur. Civ., tom. 1, pág. 187, Ser. 2ª.

4. Venta.—De bienes raíces, debe ser hecha por escritura pública bajo pena de nulidad—Jur. Civ., tom. 1, pág. 424, Ser. 2ª.

5. Venta.—Siempre que exista conformidad de partes aunque haya sido judicial, el Juzgado debe dejarla sin efecto—Jur. Civ., tom. 9, pág. 57, Ser. 1ª.

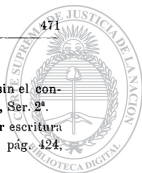
6. Venta.—Efectuada en virtud de un certificado de la oficina de hipotecas sobre libertad de un inmueble, solo puede ser declarada nula si resulta incierto, justificándose la mala fé del comprador—Jur. Civ., tom. 3, pág. 191, Ser. 2ª.

Venta.—Véase: *Contrato*, núms. 8 y 9—*Separación de bienes*, núm. 4—*Bienes raíces*, núm. 1—*Partición*, núm. 2—*Error*, núm. 1—*Transacción*, núm. 1—*Comisionista*, núm. 1—*Condómino*, núm. 1—*Nulidad*, núm. 23—*Separación de bienes*, núm. 10—*Depósito*, núm. 4—*Promesa*, núm. 2—*Juicio ordinario*, núm. 1—*Nulidad de una venta*, núms. 1 y 2—*Compraventa*, núm. 3—*Subasta pública*, núm. 1—*Jactancia*, núm. 4—*Promesa*, núm. 3.

4—Art. 1184, inc. 2º, Cód. Civ., con escepción de las ventas hechas en subasta pública.

5—Es un derecho de las partes extinguir por mutuo consentimiento las obligaciones creadas por los contratos—art. 1200, Cód. Civ.

6—El embargo de una propiedad traba su enagenación en el sentido de que no puede efectuarse con prescindencia del crédito que lo ocasiona, pero solo en tanto que el comprador conozca su existencia y haya hecho por conocerla lo que por derecho se exige; que es recabar un informe de la oficina de hipotecas embargos é inhibiciones: si el informe es falso, equivocado ó erróneo, nada puede imputarse al comprador que obra en virtud de él, mientras no se le pruebe que tenia conocimiento de ese error ó falsedad. Cualquier otro alance que se pretenda dar á los simples embargos, vendría á dificultar las transacciones creando derechos reales que han sido enumerados por el legislador de una manera taxativa, lo que sucedería si se diera á los embargos los efectos propios, esenciales y exclusivos de los derechos reales.





VEN—VIO

Venta ad-corpus—Véase: *Cláusula*, núm. 2.

Venta forzosa—Véase: *Peritos*, núm. 5.

Ventas judiciales—Véase: *Rematadores*, núm. 1—*Comprador*, núm. 1.

1a. Venta privada—El Juzgado no puede autorizarlas cuando por el aumento de valor de la propiedad, la tasación se puede conceptuar baja—Jur. Civ., tom. 1, pág. 400, Ser. 2ª.

2. Venta privada—La oposición condicional debe ser rechazada, probadas que sean las condiciones que el oponente había exigido—Jur. Civ., tom. 7, pág. 243, Ser. 1ª.

3. Venta privada—Cuando todos los herederos son mayores, la oposición debe ser juzgada y resuelta por el Juzgado con arreglo á los intereses de la masa—Jur. Civ., tom. 8, pág. 354, Ser. 1ª.

Verificación de créditos—Véase: *Acreedores*, núm. 2—*Acreedor*, núm. 4.

Vicio—Véase: *Títulos*, núm. 11.

Vicios—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Títulos*, núms. 8 y 11.

Vicios de procedimiento—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 13.

1. Violación—El atentado al pudor de una mujer casada, no puede ser perseguido sino por querrela del marido—Jur. Crim., tom. 5, pág. 564, Ser. 1ª.

1a—La Cámara ha consignado el principio de acuerdo con las prescripciones de la ley civil, que la venta de bienes de menores puede hacerse privadamente con cargo de dar cuenta al Juzgado de la oferta y solo sería autorizada en caso de ser esta favorable á los menores.

2—En este caso la razón de la oposición desaparece y el Juez puede autorizar la venta privada siempre que exista alguna de las causas establecidas en el art. 442 del Cód. Civ.

3—El auto de que esta suma ha sido tomada no dice tal cosa: todo lo contrario, los considerandos del acuerdo respetan el derecho que cada parte tiene á oponerse á la venta privada. Los arts. 1321, inc. 3º, 2699 y 2700 del Cód. Civ. resuelven el caso.

1—Esta resolución se dictó por mayoría de tres votos contra uno: La mayoría fundó su opinión en que según el art. 266 del Cód. Penal pro-

VIO—VOL

Violencia—Véase: *Interdicto de despojo*, núms. 1 y 3—*Posesión*, núm. 1—*Hurto*, núm. 2—*Interdicto de recobrar*, número 2.

Violencias ilícitas—Véase: *Legítima defensa*, núm. 1.

1. Vista de la ejecución—No puede concederse al ejecutado mientras no exista constancia en autos de haberse tratado el embargo preventivo—Jur. Civ., tom. 2, pág. 435, Ser. 2ª.

Viuda—Véase: *Reconocimiento*, núm. 1—*Cesión*, núm. 4—*Estado de viuda*, núm. 1—*Administradores*, núm. 1.

Voluntad criminal—Véase: *Calumnia*, núm. 1.

híbe proceder á formar causa por los delitos de violación, estupro, ó raptó, sino por acusación ó instancia de la interesada ó de la persona bajo cuyo poder se hubiese hallado cuando se cometió el delito. La minoría cuya opinión está de acuerdo con los principios sentados por la Cámara, fundó su voto, en que la prohibición de este artículo tiene por objeto evitar la publicidad en esta clase de atentados, pero que una vez hecho público y notorio la disposición no tiene valor. Véase: Inst., tom. 1, verb. Violación, núm. 2710 y nota.

1—Así se desprende de lo dispuesto en el art. 452 del Cód. de Proc.





FE DE ERRATAS

TOMO II



| Pág. | Núm. | Línea | Dice | Debe |
|------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| 4 | nota 4 | 2 | 315 | 180 |
| 10 | 16 | 3 | 55 | 65 |
| 14 | 1a | 3 | 283 | 282 |
| 27 | 16 | 2 | Civ. | Com. |
| 29 | 6 | 3 | 303 | 503 |
| 31 | 14 | 5 | 8 | 7 |
| 36 | 2 | 4 | 139 | 439 |
| 37 | 4 | 2 | Civ. | Com. |
| 37 | 1a | 4 | 274 | 264 |
| 63 | 4 | 3 | 517 | 516 |
| 66 | 1a | 4 | 331 | 337 |
| 80 | 1 | 3 | Com. | Civ. |
| 87 | 6 | 4 | Civ. | Com. |
| 88 | 8 | 5 | Com. | Civ. |
| 110 | 7 | 3 | Civ. | Com. |
| 113 | 1a | 4 | 234 | 274 |
| 123 | 20 | 3 | 5 | 3 |
| 124 | 22 | 5 | 290 | 289 |
| 140 | 17 | 4 | 7 | 8 |
| 141 | 21 | 4 | 7 | 9 |
| 155 | 1 | 4 | — | Ser. 2ª |
| 155 | 26 | 4 | — | Ser. 1ª |
| 155 | 26 | 4 | 380 | 381 |
| 156 | 2 | 3 | — | Civ., t. 2, p. 173, S. 2ª |
| 158 | 1c | 3 | 122 | 162 |
| 161 | 2 | 4 | tom. 3, Ser. 2ª | tom. 6, Ser. 1ª |
| 162 | 16 | 3 | 173 | 176 |
| 162 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 170 | 16 | 4 | tom. 1, Ser. 2ª | tom. 5, Ser. 1ª |
| 184 | 26 | 3 | tom. 2, Ser. 2ª | tom. 8, Ser. 1ª |
| 196 | 2 | 4 | — | Civ., t. 8, p. 37, S. 1ª |
| 198 | 1 | 3 | tom. 6 | tom. 2 |
| 211 | 4 | 4 | 492 | 490 |
| 214 | 6 | 2 | art. 619, Cód. de Com. | Com., t. 6, p. 564, S. 1ª |
| 220 | 16 | 3 | Ser. 2ª | Ser. 1ª |

| Pág. | Núm. | Línea | Dice | Léase |
|------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 253 | 2 | 3 | tom. 9, p. 444 | tom. 8, p. 428 |
| 258 | 3 | 3 | 1ª | 2ª |
| 291 | 1ª | 4 | Com. | Civ. |
| 303 | 2 | 2 | tom. 7, Ser. 1ª | tom. 3, Ser. 2ª |
| 310 | 1c | 3 | Civ. | Com. |
| 320 | 21 | 3 | 554 | 555 |
| 324 | 1 | 4 | tom. 3, Ser. 2ª | tom. 9, Ser. 1ª |
| 325 | 2 | 5 | 91 | 191 |
| 329 | nota 2 | última | Inst. | Inst., tom. 1 |
| 336 | 1ª | 4 | Civ. | Com. |
| 341 | 2 | 4 | tom. 1, Ser. 2ª | tom. 7, Ser. 1ª |
| 351 | 2 | 4 | tom. 1 | tom. 7 |
| 369 | 3 | 2 | 125 | 123 |
| 374 | nota 25 | 1 | 24 | 25 |
| 390 | 32 | 4 | tom. 8 | tom. 9 |
| 394 | 1 | 2 | tom. 1, Ser. 2ª | tom. 8, Ser. 1ª |
| 396 | 1 | 4 | 492 | 490 |
| 409 | 1ª | 3 | 469 | 391 |
| 422 | 3 | 3 | tom. 2, Ser. 2ª | tom. 9, Ser. 1ª |
| 422 | 1 | 3 | 198 | 196 |
| 436 | 2 | 4 | Com. | Civ. |
| 438 | 1c | 1 | excepción | acepción |
| 439 | 1 | 5 | tom. 3, Ser. 2ª | tom. 6, Ser. 1ª |
| 444 | 1b | 6 | tom. 9 | tom. 6 |
| 451 | 1ª | 3 | 415 | 465 |

